

Clase media y dictadura en Chile: consenso, negociación y crisis (1970-1983)

by

Marcelo Casals

A dissertation submitted in partial fulfillment of

the requirements for the degree of

Doctor of Philosophy

(History)

at the

UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON

2017

Date of final oral examination: 05/04/2017

The dissertation is approved by the following members of the Final Oral Committee:

Steve J. Stern: Alberto Flores Galindo and Hildale Professor, History

Florencia E. Mallon: Julieta Kirkwood Professor, History

Francisco A. Scarano: Professor Emeritus, History

Alexandra Huneeus, Associate Professor, Law

Ksenija Bilbija, Associate Professor, Spanish and Portuguese

© Copyright by Marcelo Casals 2017
All Rights Reserved

Índice

Agradecimientos	iii
Introducción	1
<i>1.- Autoritarismos y consensos</i>	6
<i>2.- Clase media</i>	16
<i>3.- El "Chile mesocrático"</i>	25
<i>4.- Organizaciones de clase media</i>	33
Capítulo 1: La clase media, la Unidad Popular y la contrarrevolución	44
<i>1.- Allende en el poder. La "luna de miel"</i>	45
<i>2.- El quiebre</i>	55
<i>3.- El paro de octubre. La insurrección de la clase media</i>	69
<i>4.- La clase media contrarrevolucionaria</i>	81
<i>5.- Hacia el golpe</i>	89
<i>6.- Conclusiones</i>	100
Capítulo 2: "Aplaudiendo a los vencedores"	103
<i>1.- La "sincronización" de la clase media</i>	104
<i>2.- El "trauma épico" de la Unidad Popular</i>	120
<i>3.- Los ritos públicos</i>	132
<i>4.- La justificación de la represión</i>	140
<i>5.- Conclusiones</i>	156
Capítulo 3: El nuevo "Chile mesocrático": Dictadura, participación y sociedad civil	159
<i>1.- Participación social y corporativismo</i>	160

<i>2.- Negociaciones. La clase media y la reapertura del Estado</i>	175
<i>3.- Diplomacia civil: la clase media y la "campana antichilena"</i>	195
<i>4.- Conclusiones</i>	209
Capítulo 4: El viraje neoliberal. Del Estado al Mercado	212
<i>1.- Las reformas y la clase media</i>	213
<i>2.- Primeras reacciones. Economía y política</i>	222
<i>3.- El consumo neoliberal</i>	231
<i>4.- "Modernizaciones" e "institucionalización": la clausura del "Chile mesocrático"</i>	247
<i>5.- Conclusiones</i>	265
Capítulo 5: Moralidad y política. La clase media a la oposición	269
<i>1.- La clase media en disputa</i>	270
<i>2.- La indignación moral. Derechos Humanos y politización</i>	283
<i>3.- Dos casos de estudio: Colegio de Abogados y Masonería</i>	296
<i>4.- La crisis y las protestas</i>	317
<i>5.- Conclusiones</i>	327
Conclusiones	330
Fuentes	342

Agradecimientos

Fueron muchas las circunstancias, recursos y personas necesarias para llevar a cabo este proyecto. Bien sabemos que, en último término, no hay trabajo intelectual netamente individual. Nuestras inquietudes y desvelos, de una forma u otra, surgen de la interacción con otros. Para el caso de la reflexión histórica, ese es su fundamento. Por ello, bien valen unas cuantas líneas de agradecimientos.

En primer lugar, agradezco a mi familia, quienes despertaran en mi la inquietud inicial para dedicarme a la historia, y me acompañaran en estos largos años de estudio. Mi hermana María Josefina y mi padre Marcelo, además, colaboraron directamente al interceder en mi favor para ingresar a algunos archivos de organizaciones de clase media. León, Clarita y Jerónimo, mis sobrinos, llegaron a este mundo mientras desarrollaba este proyecto, y han sido motivo de inmensa alegría desde entonces.

En mis años de estudio en Madison tuve la suerte de aprender de todos mis compañeros. Con ellos, además, discutí más de una vez las primeras ideas que darían forma a esta tesis. Agradezco en particular la oportunidad de haber compartido con Ingrid Bolívar, Adela Cedillo, Viviana Quintero, Jake Blanc, Bridgette Werner, Genevieve Dorais, Jessica Kirstein y Valeria Navarro. Todo ello fue posible gracias a los tres profesores del Programa de Historia de América Latina y el Caribe de la University of Wisconsin-Madison: Francisco Scarano, Florencia Mallon y Steve Stern, con quienes reconozco una deuda difícil de saldar. Mi reconocimiento especial para Steve, quien dirigió esta tesis y supo canalizar mis inquietudes iniciales hacia un tema de investigación concreto. Su profundo conocimiento de la historia del Chile reciente, además, me ayudó a afinar ideas y reflexiones de la propia realidad en la que nací y crecí.

En Madison y en Santiago recibí la ayuda de un variopinto grupo historiadores y estudiosos de Chile y América Latina. Algunos colaboraron con datos concretos y pistas que debía seguir; otros, con la paciencia para escucharme divagar sobre estos temas. Agradezco en ese sentido a Jackson Foote, Alec Schumacher, Jorge Zeballos, Macarena Ríos, Roberto Velásquez, Mauricio Salgado, Javier Castillo, Andrés Estefane, Juan Luis Ossa, Joaquín Fernández, Luis Thielemann, Andrés Baeza, Alfredo Riquelme, Verónica Valdivia, Isabel Castillo, Paula Lekanda, Pablo Whipple, Marianne González, Patrick Barr-Melej y Azun Candina. Muchos, también, colaboraron con compañía fructífera en tiempos revueltos, como Jaime Vargas-Luna, Matías Correa, José Miguel Corrales, Pato Mena, Rafael Grau, Alex Soto, Silvana D'Ottone y José Ignacio Medina. Mis agradecimientos también a la Revista Red Seca, mi familia intelectual y lugar de constantes y animados debates que ayudaron a darle forma a este trabajo; a Alejandra Araya González, por su ayuda en la recopilación de fuentes; y al Club Deportivo Universidad Católica, por las alegrías del 2016.

El proceso de investigación implicó trabajo de fuentes en instituciones y organizaciones que no tenían organizados archivos formales, por lo que fue crucial la amabilidad y comprensión de muchos de sus funcionarios y dirigentes, como Karina Puentes, de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile; Orlando Sharp, de la Confederación de Comercio Detallista; Mariela Miranda, del Colegio de Abogados; Viviana Olave y Moisés Pastro, de la Asociación de Dueños de Camiones de Santiago; Roberto Gesche, del Colegio de Ingenieros de Temuco y Ana María Sabatim, del Rotary Club de Santiago, entre otros. Agradezco también la buena disposición de funcionarios de archivos ya organizados, como Manuel Bravo y José Manuel Pérez, del Archivo General de la Gran Logia de Chile; Maddalena Maggi y su equipo, de la Sección Procesamiento de Prensa de la Biblioteca del Congreso; Rómulo Salas Paillalef, del

Archivo Regional de la Araucanía; y los funcionarios del Salón de Investigadores, Hemeroteca, Prensa y Sección chilena de la Biblioteca Nacional.

Esta investigación fue posible gracias a varias fuentes de financiamiento. El Programa Becas Chile para estudios de doctorado en el extranjero de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) financió mis años en Madison. Fui beneficiario también del Tinker-Nave Short-Term Field Research Grant del Departamento de Latin American, Caribbean and Iberian Studies (LACIS), y del Dissertation Research Award, del Departamento de Historia de UW-Madison. El Conference Presentation Fund del Graduate School de UW-Madison me permitió discutir resultados parciales de esta investigación con colegas latinoamericanistas de diversas latitudes. Agradezco en particular a la Shimon Weisz Fellowship y a quienes la hacen posible, por librarme de preocupaciones económicas en la última etapa de esta investigación.

Este trabajo está dedicado a la memoria de la historiadora Olga Ulianova (1963-2016). De ella no sólo aprendí a pensar Chile en un contexto global en tiempos de Guerra Fría -su especialidad-, sino sobre todo a imprimirle a la historia pasión, generosidad y sentido crítico. Espero poder estar a la altura.

Y los jueces tampoco le creyeron, porque eran demasiado honestos, o quizás estaban demasiados convencidos de los conceptos que forman la base de su ministerio, para admitir que una persona "normal", que no era un débil mental, ni un cínico, ni un doctrinario, fuese totalmente incapaz de distinguir el bien del mal. Los jueces prefirieron concluir, basándose en ocasionales falsedades del acusado, que se encontraban ante un embustero, y con ello no abordaron la mayor dificultad moral, e incluso jurídica, del caso. Presumieron que el acusado, como toda "persona normal", tuvo que tener conciencia de la naturaleza criminal de sus actos, y Eichmann era normal, tanto más cuanto que "no constituía una excepción en el régimen nazi". Sin embargo, en las circunstancias imperantes en el Tercer Reich, tan solo los seres "excepcionales" podían reaccionar "normalmente". Esta simplísima verdad planteó a los jueces un dilema que no podían resolver, ni tampoco soslayar.

Hannah Arendt¹

¹ Hannah Arendt, *Eichmann en Jerusalén* (Barcelona: Debolsillo, 2006), 47.

Introducción

Mientras el Palacio de La Moneda ardía en llamas tras el bombardeo de la Fuerza Aérea, Salvador Allende se acercó a un teléfono para, a través de una estación de radio, dar su último discurso como Presidente de Chile. Era el 11 de septiembre de 1973, y las Fuerzas Armadas estaban llevando a cabo un plan coordinado para derrocarlo tras varios meses de intensa lucha política y social. En su alocución, Allende le recordó a las bases sociales de la "vía chilena al socialismo" que el "proceso social" era inexorable, y que la victoria de los militares insubordinados no podía ser sino un breve paréntesis en la marcha de los pueblo hacia su propia liberación. Hasta allí, era la reproducción de la visión de la historia del marxismo tal como se entendía en ese entonces. Sin embargo, Allende señaló algo que en ese momento no era evidente para todos. Refiriéndose al levantamiento militar, tuvo palabras para los sectores sociales organizados que se habían movilizado contra su gobierno. La única mención concreta fue para los colegios profesionales, unas de las expresiones más visibles de oposición, a los que tildó de "colegios de clase para defender también las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos"¹.

Allende reconocía en sus últimos momentos un hecho importante: la oposición política a su gobierno había logrado aglutinar a una diversidad de actores sociales tras de sí, lo que generó las condiciones necesarias para el golpe de Estado. Ese bloque contrarrevolucionario excedía a los partidos políticos de derecha y dueños del capital, que por décadas de habían opuesto a los distintos proyectos progresistas. También habían logrado captar lo que desde la izquierda llamaban "pequeña burguesía", que muchos traducían como clase media; y también algunos sectores obreros, como había demostrado la dramática huelga de los mineros del cobre en El

¹ Cit. en Gonzalo Martner, ed., *Salvador Allende. Obras escogidas: período 1939-1973* (Santiago: Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar; Fundación Presidente Allende, 1992), 670.

Teniente unos meses antes. Con todo, fueron grupos y organizaciones que decían representar y encarnar a la clase media -como los colegios profesionales, entre muchos otros- los que alcanzaron los mayores niveles de movilización y visibilidad pública, sobre todo a partir de la coyuntura del paro de octubre de 1972. Para muchos de ellos, el gobierno de la Unidad Popular representaba la antítesis de los ideales y expectativas asociados a su condición de clase media. En un hecho inédito para muchos de ellos, dejaron de lado el ánimo transaccional y negociador con el gobierno de los años anteriores y se lanzaron a una feroz oposición social. Mientras Allende pronunciaba su último discurso y los militares tomaban rápidamente el control del país, los representantes de esos grupos mesocráticos radicalizados hacia la derecha celebraron efusivamente el cambio de régimen. Para ellos, la nación se había salvado de caer en un abismo autoritario de izquierda que amenazaba con dislocar de una vez por todas los principios esenciales del orden político y las jerarquías sociales que habían regido hasta ese momento.

Los rencores acumulados durante la lucha social contra la Unidad Popular y los llamamientos explícitos de muchos de los líderes sociales de clase media a los militares para derribar al gobierno hicieron que estas organizaciones apoyaran activamente y con entusiasmo la dictadura militar que se iniciaba ese 11 de septiembre. Durante los primeros años de ese régimen defendieron en Chile y en el extranjero al régimen, además de participar en todas aquellas instancias que requerían de movilización popular en su favor. Al mismo tiempo, dado el cambio de escenario, estos grupos pudieron acceder con ciertos privilegios a las nuevas autoridades gubernamentales y plantear directamente las demandas que habían sido desoídas en el gobierno anterior. Esta "sincronización" entre organizaciones de clase media y dictadura militar fue simultánea a un inmenso despliegue de la fuerza represiva del Estado contra la izquierda marxista y sus bases sociales. Los militares en el poder no se vieron constreñidos por los

balances institucionales de los gobiernos democráticos anteriores, y apelaron a un uso de la violencia aguda que los chilenos de entonces no habían experimentado. Exoneraciones, detenciones, torturas, fusilamientos, desapariciones y exilio fueron, desde ese momento, una realidad sentida directamente por centenares de miles de ciudadanos. En la otra vereda, quienes celebraban la caída de la Unidad Popular toleraron este despliegue de fuerzas sobre el entendido que era necesario para "normalizar" el país. Las organizaciones de clase media, al mismo tiempo que acallaban y excluían a la oposición interna, no pusieron reparos al nuevo orden de cosas.

Esta tesis busca dilucidar la conformación, consolidación, comportamiento y transformación de aquella base social mesocrática que se forjó al calor de la lucha contra la Unidad Popular y que sería parte integrante del bloque social que apoyaría a la dictadura militar en su primera década. En otras palabras, pretendo analizar la primera parte del régimen de Pinochet desde la perspectiva de quienes, en diferentes grados y con diferentes motivaciones, adhirieron a él, tomando en cuenta también los esfuerzos que el propio Estado dictatorial desarrolló para construir una legitimidad política de la que formalmente carecía. Además, busco identificar los factores que, con el pasar de los años, fracturaron aquella base de apoyo, y terminaron por destruirla, condicionando en gran medida el conflicto político en los años ochenta, que culminaría con la derrota electoral del régimen en 1988 y la vuelta de la democracia en 1990.

En concreto, en este estudio argumento que la clase media apoyó y colaboró con la dictadura de Pinochet en virtud de la experiencia reciente de la Unidad Popular. Esos años fueron experimentados como una amenaza a la centralidad de la noción de clase media en el tejido social chileno y a la inclusión de sus organizaciones representativas en las instancias de decisión del Estado. En ese sentido, fue un quiebre temporal del entramado político y social desarrollado a lo largo del siglo XX, que denomino aquí -y explico en detalle más adelante- como "Chile

mesocrático". De allí que el golpe de Estado de 1973 provocara una "sincronización" política e ideológica entre las organizaciones de clase media y la dictadura, basada en una sensibilidad contrarrevolucionaria compartida y marcada por un nacionalismo conservador de fuerte impronta anticomunista. Aquella "sincronización" se vio reforzada además por la reapertura de canales de participación y negociación con el Estado, rescatando elementos centrales del "Chile mesocrático" interrumpido por la Unidad Popular. Sin embargo, el viraje neoliberal del régimen a partir de 1975, junto con interrumpir los vínculos de la base social mesocrática con el régimen, afectaron directamente al fundamento material de la clase media, al promover la contracción del Estado y la transformación del aparato productivo hacia una economía de libre mercado. Si bien el "boom" del consumo de esos años ayudó a legitimar el régimen a ojos de quienes podían participar de sus beneficios, los ajustes institucionales al neoliberalismo implicaron el desarme del andamiaje legal en el que se basaban muchas de las organizaciones de clase media para incidir en la esfera pública. Al mismo tiempo, las prácticas represivas del Estado empezaron a ser cada vez menos toleradas por algunas organizaciones de clase media, sobre todo aquellas más permeables a la defensa de los Derechos Humanos. Neoliberalismo e indignación moral ante la represión erosionaron lentamente esta base social, que reventaría una vez que se evidenciara el fracaso de la aplicación ortodoxa del neoliberalismo. La crisis económica de 1982-1983, y el inicio del ciclo de protestas nacionales en 1983 provocaron la masificación de la oposición política y social a la dictadura, y la mayoría de los grupos mesocráticos alienados con el régimen se plegaron a ella. Para parte importante de la clase media, la transición hacia una oposición abierta se completó en esa coyuntura.

Estudiar el proceso de construcción y destrucción del consenso mesocrático sobre el autoritarismo implica también escrudinar los diferentes significados de la clase media en la

sociedad chilena. Por una parte, la oposición a la Unidad Popular redefinió los límites de la acción mesocrática, llevándolas directamente al plano político en tanto reserva de la moral cívica y la estabilidad democrática. Una vez perpetrado el golpe de Estado, la dictadura ofreció espacio para la reproducción de esa identidad de clase media, añadiéndole la perspectiva de un bienestar material suficiente para asegurar su status social. Las reformas neoliberales implicaron una profundización de ese cambio, al intentar basar la adscripción a la clase media en el consumo de bienes importados y la participación individual y despolitizada en el mercado. Al mismo tiempo, el régimen buscó alejar al Estado del universo de referencias simbólicas de la clase media, ámbito sobre el cual había construido sus organizaciones, prácticas y expectativas a lo largo del siglo XX. Por último, el surgimiento de una oposición moral y política al régimen involucró también un esfuerzo por volver a redefinir a la clase media, ahora como un sector precarizado por las políticas económicas de gobierno e injustamente castigado por la reorganización de las relaciones entre Estado y sociedad civil. Cuando esa oposición se hizo explícita, la clase media fue representada como el baluarte moral de la nación, opuesta por definición al autoritarismo y el despliegue arbitrario de las fuerzas represivas del Estado, entendidos ahora en clave de Derechos Humanos. Ya en los años ochenta, las perspectivas de una democratización de la sociedad fueron entendidas por parte importante de las fuerzas opositoras como un esfuerzo por reivindicar el modelo social e institucional del "Chile mesocrático", en el que la clase media era motor y garantía de un régimen institucional estable, participativo y protector de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En ese sentido, poner atención a los desplazamientos muchas veces sutiles de la noción de clase media opera como clave de interpretación de la dictadura militar, desde la construcción de un bloque social contrarrevolucionario contra la Unidad Popular hasta la explosión de las protestas nacionales en 1983.

Con todo, este estudio no es ni una historia de la clase media chilena ni una historia de la dictadura militar. Demasiados elementos han sido puestos al margen, o analizados sin la debida profundidad, como para aspirar a constituirse en un relato integral. La inquietud principal recae precisamente en el punto en que ambas historias se entrecruzan. Es, en ese sentido, una entrada a una comprensión más compleja del autoritarismo militar desde las prácticas de consenso y colaboración en la sociedad civil, como también una manera particular de entender el desarrollo y significado de la clase media en un contexto dictatorial. Por lo mismo, esta tesis se inscribe en los debates y definiciones de ambos campos de estudio, y asume opciones teóricas y metodológicas concretas que es preciso detallar.

1.- Autoritarismos y consensos

Movilización social contrarrevolucionaria, quiebre institucional y dictadura militar, como bien es sabido, no fueron realidades exclusivamente chilenas en esos años. El fenómeno adquirió dimensiones continentales luego de los golpes en Brasil (1964), Argentina (1966), Uruguay (1973) y Argentina nuevamente (1976). Todo esos regímenes estaban motivados por un afán desarrollista, conservador, nacionalista y anticomunista, muchas veces interpretando la realidad local e internacional en clave de Guerra Fría. Al mismo tiempo coincidieron en el uso de la violencia estatal para anular toda expresión de abierta oposición sobre el entendido que atentaban contra la existencia de la nación. Para los observadores más agudos de ese entonces, era claro que se iniciaba un ciclo político marcado por la presencia de un nuevo tipo de autoritarismo latinoamericano.

Antes de la instauración de todas las dictaduras del cono sur, Guillermo O'Donnell ya había acuñado el concepto de regímenes "burocrático-autoritarios" (BA) para dar cuenta de su

especificidad histórica. La noción de BA alude a dos dimensiones que el pensamiento desarrollista había visto como contradictorias: la modernización de la economía y la expansión de la burocracia estatal, por una parte, y quiebres democráticos e intervención militar, por la otra. O'Donnell planteó al respecto que dadas esas mismas exigencias modernizadoras del Estado capitalista es que era posible pensar el autoritarismo no como una excepción o interrupción de la "normalidad" de las sociedades latinoamericanas, sino más bien como una expresión propia del "desarrollo" en sociedades periféricas. Los regímenes BA, en ese sentido, serían reacciones ante amenazas integrales a la continuidad del capitalismo (una "crisis de dominación celular" al decir de O'Donnell) que requerirían de la acción directa de las Fuerzas Armadas y la burguesía local para estabilizar el rol del Estado en cuanto Estado capitalista. La naturaleza de esa reacción explicaría sus principales rasgos: exclusión de lo popular (separándolo de lo nacional); preeminencia de la coacción estatal; supresión de la ciudadanía y la democracia política; fomento a la acumulación del gran capital y a la transnacionalización de la economía; reemplazo de lógicas políticas de administración estatal por una supuestamente neutral "técnica"; y clausura de criterios políticos representativos, limitados sólo a las Fuerzas Armadas y las grandes empresas²

En esa misma línea, investigadores como Alan Rouquié, Alfred Stepan o María Helena Moreira entendieron que el rol que asumían los militares en los nuevos estados autoritarios no se condecía con su comportamiento histórico de agentes intermediadores del conflicto político. Las dictaduras que dirigían buscaban la regeneración completa de la sociedad, y por lo mismo

² Guillermo A O'Donnell, *El estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis* (Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1996), capítulo 1; Para una versión preliminar del mismo argumento, véase Guillermo A O'Donnell, *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism; Studies in South American Politics* (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1973); y para una visión relativamente crítica de O'Donnell, véase Fernando Henrique Cardoso, *On the Characterisation of Authoritarian Regimes in Latin America* (Cambridge, Eng.: Centre of Latin American Studies, University of Cambridge, 1978).

requerían de nuevos mecanismos de legitimación para mantenerse en el poder³. El foco de atención, entonces, estaba puesto en el Estado y los militares, y los cambios, proyectos y perspectivas futuras que tenían en cuanto nuevos gobernantes.

Por supuesto, la novedad y urgencia de los autoritarismos latinoamericanos exigían centrar la mirada en el nuevo tipo de Estado que estaban construyendo, así como también en las prácticas represivas que aplicaban al interior de sus respectivas sociedades. Sin embargo, aquel enfoque dejaba de lado un problema central para entender la naturaleza de estos regímenes: las prácticas de persuasión, cooptación, negociación y participación de diferentes sectores sociales, muchos de los cuales excedían a aquellos vinculados al gran capital, el aliado natural de los regímenes BA. En otras palabras, se excluía del análisis social aquellos actores sociales que habían apoyado activamente tanto la movilización social previa como a las nuevas dictaduras, y que de una u otra forma se habían visto beneficiados por ello.

El asunto no era menor, considerando experiencias en otras partes del mundo. La pregunta sobre la vinculación de autoritarismo estatal con adhesión social, en ese sentido, no es nueva. El caso de los fascismos europeos grafica en buena medida hasta qué punto aquella mezcla fue posible, y las dificultades para lidiar socialmente con esa realidad en el período posterior. Al mismo tiempo que O'Donnell y otros analizaban la realidad latinoamericana, George L. Mosse advertía para el caso alemán que el nazismo se había basado en una tradición anterior de política de masas y nacionalismo popular. Ello se habría expresado en una serie de ritos y monumentos que adquirieron un valor sagrado en la reproducción de identidades comunitarias y nacionales durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin esa capacidad de los nazis

³ Alain Rouquié, *The Military and the State in Latin America* (Berkeley: University of California Press, 1987); Alfred C. Stepan, *The Military in Politics; Changing Patterns in Brazil* (Princeton: Princeton University Press, 1971); Alfred C. Stepan, "The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion", en *Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future*, ed. Alfred C. Stepan (New Haven: Yale University Press, 1973); Maria Helena Moreira Alves, *State and Opposition in Military Brazil* (Austin: University of Texas Press, 1985).

para conectar su propio estilo político con prácticas alemanas anteriores, su arraigo popular habría sido probablemente menor. Por otro lado, Henry Rousso daba cuenta de las dificultades sociales y culturales para procesar la colaboración con el fascismo y el nazismo en la Francia del régimen de Vichy. La recurrencia de polémicas públicas al respecto en la postguerra era evidencia también de la magnitud del fenómeno, de las estrategias de muchos para acomodar sus experiencias y memorias a las nuevas exigencias del momento⁴.

Coincidentes con aquella preocupación por las bases sociales del autoritarismo, y reflejando a la vez los cambios teóricos y metodológicos en la historiografía, investigaciones recientes han abordado temas como las prácticas culturales cotidianas bajo el autoritarismo y las ambivalencias entre consenso y resistencia en contextos altamente normados y vigilados. Laura Passerini para el caso de la clase obrera de Turín bajo el fascismo italiano, Robert Gellately en la Alemania nazi y el volumen editado por Konrad Jarausch para la experiencia dictatorial de la República Democrática Alemana, entre otros, han enfatizado los espacios de encuentro entre diferentes sectores de la sociedad civil y el discurso ideológico de cada régimen, y los mecanismos a veces cotidianos e informales en los que se socializan los principios y prácticas autoritarias, eclipsando muchas veces la capacidad moral para criticarlos⁵. Recientemente, Jye-Hyun Lim ha sintetizado ese tipo de inquietudes en el concepto "dictadura de masas" para referirse a la conjunción entre política de masas y Estado autoritario en sociedades modernas, y

⁴ George L. Mosse, *The Nationalization of the Masses; Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars Through the Third Reich* (New York: H. Fertig, 1975); Henry Rousso, *The Vichy Syndrome: History and Memory in France Since 1944* (Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press; Heinemann, 1994).

⁵ Luisa Passerini, *Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class* (Cambridge [Cambridgeshire]; New York; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1987); Robert Gellately, *No solo Hitler: la Alemania nazi entre la coacción y el consenso* (Barcelona: Crítica, 2002); Konrad Hugo Jarausch, ed., *Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR* (New York: Berghahn Books, 1999).

los mecanismos por los cuales la coerción y la concentración del poder del Estado son socialmente aceptadas⁶.

En el campo de producción intelectual latinoamericano, fue el propio O'Donnell quien volvió sobre sus pasos para cubrir vacíos en el análisis, particularmente tras el golpe de 1976 en Argentina. Dada la experiencia social de la dictadura, O'Donnell planteó que los regímenes BA lograron con relativo éxito penetrar la sociedad con un *pathos* autoritario que se tradujo en la reproducción de esas lógicas impositivas y disciplinadoras al interior de familias, escuelas y barrios por parte de civiles no directamente vinculados al régimen⁷. Ello habría tenido consecuencias específicas al interior de cada sociedad, redundando en distintos tipos de regímenes BA: mientras que Brasil, sociedad en la cual las jerarquías sociales estaban más claramente definidas y reconocidas, experimentó niveles relativamente bajos de represión directa, Argentina, donde se entremezcla igualitarismo social con autoritarismo en las interacciones cotidianas, el esfuerzo “ordenador” de la última dictadura requirió grados extremos de violencia⁸.

O'Donnell apela a una dimensión no siempre consciente de aceptación social del autoritarismo, donde el miedo, la pasividad y la aceptación rutinaria de sus principios ordenadores no siempre son distinguibles. En los últimos años, varias investigaciones históricas han apuntado a este fenómeno, demostrando en conjunto la necesidad de analizar las dinámicas sociales de construcción de consenso para una comprensión más acabada de los diferentes regímenes autoritarios en la región. Desde diferentes ópticas, Lauren Derby y Richard L. Turits

⁶ Jie-Hyun Lim, “Historiographical Perspectives on ‘Mass Dictatorship’”, *Totalitarian Movements & Political Religions* 6, n° 3 (diciembre de 2005): 325–31; Jie-Hyun Lim, “Mapping Mass Dictatorship: Towards a Transnational History of Twentieth-Century Dictatorship”, en *Gender Politics and Mass Dictatorship: Global Perspectives*, ed. Jie-Hyun Lim y Karen Petrone, Mass dictatorship in the 20th Century (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011); Jie-Hyun Lim, Barbara Walker, y Peter Lambert, eds., *Mass Dictatorship and Memory as Ever Present Past*, Mass dictatorship in the 20th century (Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014).

⁷ Guillermo A. O'Donnell, *Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*, Titles from the Helen Kellogg Institute for International Studies (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1999).

⁸ Guillermo A O'Donnell, *Y a mi, qué me importa?: notas sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil*, Working Paper #9 (Notre Dame, Indiana: The Hellen Kellogg Institute for International Studies, 1984).

analizaron la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana poniendo atención tanto a las prácticas y símbolos esgrimidos por el poder estatal que respondían a la cultura popular, como también a las bases sociales campesinas y sus negociaciones con el Estado⁹. En esa misma línea se han estudiado los autoritarismos en Uruguay y Argentina, dando cuenta de las políticas culturales autoritarias y la "parafernalia patriótica" de fuerte impacto en la sociedad civil, y de la socialización y normalización de la violencia como realidad tolerable e incluso deseable por quienes anhelaban la restauración de un orden social a través de la acción de los militares en el poder¹⁰.

Esa línea de investigación, asumida también en este trabajo, busca entender a los regímenes autoritarios desde su capacidad de generar consensos sociales y mantenerlos en el tiempo. Ello, por cierto, no se produce por mera imposición del Estado, sino que por una conexión política y cultural previa, que en muchos casos está marcada por experiencias subjetivas y aspiraciones sociales. El caso de la dictadura chilena se ha estudiado en parte desde esta perspectiva. Steve Stern, en su trilogía sobre las memorias sociales en dictadura, ha explorado la circulación y socialización de narrativas de "salvación", que enlazan experiencia personal con relatos colectivos. Durante los años setenta, cuando la dictadura aún mantenía un

⁹ Lauren H. Derby, *The Dictator's Seduction: Politics and the Popular Imagination in the Era of Trujillo* (Durham: Duke University Press, 2009); Richard Lee Turits, *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime, and Modernity in Dominican History* (Stanford, Calif: Stanford University Press, 2003).

¹⁰ Me refiero en particular a las investigaciones de Isabella Cosse y Vania Markarian, *1975: año de la orientalidad: identidad, memoria e historia en una dictadura* (Montevideo: Ediciones Trilce, 1996); Aldo Marchesi, *El Uruguay inventado: la política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su imaginario* (Montevideo: Ediciones Trilce, 2001); David Sheinin, *Consent of the Damned: Ordinary Argentines in the Dirty War* (Gainesville: University Press of Florida, 2013); y Sebastián Carassai, *Los años setenta de la gente común: La naturalización de la violencia* (Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2013); Un volumen de reciente publicación ha reunido a especialistas del cono sur en torno a esta perspectiva, dando cuenta del carácter "productivo" (no necesariamente en un sentido positivo) de las dictaduras de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Si bien la mayoría de los estudios se centra en la acción del Estado para la construcción de sus respectivos consensos sociales, el libro en general demuestra que fueron precisamente aquellas iniciativas las que más condicionaron las posibilidades de oposición a dichos regímenes, en la medida en que modificaron de manera dramática las bases materiales, culturales e institucionales de dichos países. Rodrigo Patto Sá Motta, ed., *Dictaduras Militares. Brasil, Argentina, Chile e Uruguay* (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015).

virtual monopolio sobre la esfera pública, esas "memorias emblemáticas" fueron las que pudieron proyectarse con más fuerza, dejando a versiones alternativas recluidas al ámbito de la esfera privada¹¹. Del mismo modo, Verónica Valdivia ha estudiado las políticas estatales de cooptación social, sobre todo aquellas dirigidas a los sectores populares, dando cuenta también del nivel de aceptación de muchos de sus beneficiarios¹².

Sin embargo, parte importante de las investigaciones sobre este período han obviado este tipo de preguntas y se han centrado, comprensiblemente, en los aspectos más dramáticos del autoritarismo militar, como la violencia dictatorial en diferentes perspectivas¹³ o la oposición social al régimen y el comportamiento de diferentes actores políticos bajo ese contexto¹⁴. Del mismo modo, desde diferentes disciplinas se ha estudiado a la dictadura chilena desde el Estado, principalmente en relación a las reformas económicas neoliberales y los cambios institucionales

¹¹ Sobre la memoria como salvación en dictadura, véase los dos primeros volúmenes: Steve J. Stern, *Remembering Pinochet's Chile: On the Eve of London, 1998* (Durham: Duke University Press, 2004); Steve J. Stern, *Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988* (Durham: Duke University Press, 2006).

¹² Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, "¡Estamos en guerra señores!: El régimen militar de Pinochet y el 'pueblo', 1973-1980", *Historia* 43, n° 1 (2010): 163-201; Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, "Were Women and Young People the Heart of the Pinochet Regime? Rise and Decline of the Secretariats", *Hispanic American Historical Review* 93, n° 4 (2013): 547-83; Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, "Al rescate del Municipio. La síntesis ideológica de la dictadura pinochetista", *Observatorio Latinoamericano* 8. Dossier Chile (2011); Muchos de sus hallazgos se encuentran en Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Rolando Álvarez, y Karen Donoso, *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista* (Santiago: LOM Ediciones, 2012).

¹³ Sólo por citar algunos: Peter Kornbluh, *The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability* (New York: New Press, 2003); Mark Ensalaco, *Chile Under Pinochet: Recovering the Truth* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000); Pablo Policzer, *The Rise and Fall of Repression in Chile* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009); Mary Helen Spooner, *Soldiers in a Narrow Land: The Pinochet Regime in Chile* (Berkeley: University of California Press, 1999); Patricia Verdugo, *Los zarpazos del puma: caso Arellano* (Santiago: CESOC, 1989).

¹⁴ Rolando Álvarez, *Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)* (Santiago: LOM, 2003); Cristina Moyano, *El MAPU durante la dictadura: saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile, 1973-1989* (Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010); Jeffrey Puryear, *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994); Alfredo Riquelme, *Rojo atardecer: el comunismo chileno entre dictadura y democracia* (Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009); Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Julio Pinto, y Rolando Álvarez, *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)* (Santiago: LOM Ediciones, 2006); Pablo Rubio Apolaza, *Los civiles de Pinochet: la derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990* (Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013); Víctor Muñoz Tamayo, *Historia de la UDI: generaciones y cultura políticas (1973-2013)* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2016).

necesarios para sustentar ese nuevo modelo¹⁵. Todo ese acervo de conocimiento social sobre el pasado, por cierto, ha permitido iluminar aspectos antes oscuros del autoritarismo chileno, y esta misma investigación es tributaria de muchos de esos esfuerzos anteriores. Con todo, el enfoque en la acción centrada en el Estado, o en fuerzas sociales en cuanto opositoras, deja en penumbras el problema de la creación de consensos sobre el autoritarismo. Quizás el ejemplo más claro de esto sea la reciente investigación de Manuel Bastías Saavedra sobre la "sociedad civil" y sus vínculos transnacionales durante el período. El problema conceptual fundamental allí es asumir a la "sociedad civil" sólo en cuanto es capaz de articular una oposición explícita y sostenida al régimen. El resto del tejido social, aquel que se acomoda al nuevo orden de cosas, sencillamente no es tomado en cuenta¹⁶. Aquella concepción, insisto, deja de lado aquella "sociedad civil" que siguió existiendo en dictadura, y que sobre todo en los primeros años después del golpe dio cuenta de diferentes niveles de aceptación y "sincronización" con el Estado autoritario.

Los relatos integrales más difundidos sobre la dictadura militar han asumido también esta perspectiva. Con diferencias entre ellos, el eje central ha estado puesto en el carácter inmoral de la violación a los Derechos Humanos -y por ende del régimen que los perpetra- ante una sociedad civil incapaz de hacer frente al despliegue de la violencia militar¹⁷. Del mismo modo,

¹⁵ Manuel Gárate, *La revolución capitalista de Chile: 1973-2003* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012); Tomás Moulian, *Chile actual: anatomía de un mito* (Santiago: ARCIS Universidad : LOM Ediciones, 1997); Eugenio Tironi Barrios, *El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet* (Santiago: Dolmen Ediciones, 1998); Juan Gabriel Valdés, *Pinochet's Economists: The Chicago School in Chile* (Cambridge, England; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1995); Robert Barros, *La Junta militar: Pinochet y la Constitución de 1980* (Santiago: Sudamericana : Random House Mondadori, 2005), entre otros.

¹⁶ Manuel Bastías Saavedra, *Sociedad Civil en Dictadura: Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (1973-1993)* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013); En un ejemplo inverso, cuando el tema de la colaboración civil a la dictadura ha sido abordado, ésta ha sido entendida desde la perspectiva de los políticos de derecha y los representantes del gran capital. Javier Rebolledo, *A la sombra de los cuervos: los cómplices civiles de la dictadura* (Santiago: Ceibo Ediciones, 2015).

¹⁷ Genaro Arriagada, *Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet* (Santiago: Editorial Sudamericana, 1998); Pamela Constable y Arturo Valenzuela, *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet* (New York; London: Norton, 1991); Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet* (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000); Ascanio Cavallo, Oscar Sepúlveda Pacheco, y Manuel Salazar Salvo, *La historia oculta del régimen militar: Chile 1973-1988* (Santiago: Uqbar Editores, 2008).

ante la intolerable reiteración de estas prácticas, la sociedad civil se habría organizado en oposición, muchas veces en articulación con partidos políticos de centro e izquierda, iniciando desde ese momento un movimiento social de protesta y desobediencia que culminaría en la victoria electoral en el plebiscito de 1988. En ese sentido, se ha hecho común cierta teleología histórica de oposición que fundamenta un relato épico de lucha contra el autoritarismo. Para sostener ese relato se requiere de una división tajante entre quienes colaboraron y quienes se opusieron, soslayando o minusvalorando los desplazamientos sociales entre uno u otro bando. De ahí también que ese relato común implícito esté basado en una distinción entre Estado autoritario y sociedad civil en tanto esferas antagónicas, cuyo único vínculo posible es el conflicto.

Ahora bien, entender la dictadura militar de Pinochet desde un esquema bipolar de Estado agresor/sociedad civil agredida -poniendo de relieve las atrocidades cometidas por los aparatos de seguridad contra ciudadanos chilenos tanto en Chile como en el extranjero- tiene su propia racionalidad e historicidad. La dictadura utilizó el silencio, la amenaza y la negación para protegerse de acusaciones políticas y judiciales por sus actos, por lo que el fondo empírico desde el cual se documentaron las violaciones a los Derechos Humanos fueron producidos y organizados desde la propia sociedad civil, con apoyo del Estado una vez restablecido el régimen democrático. Existía por entonces una necesidad imperiosa por establecer hechos comprobables sobre los cuales plantear temas relativos a justicia, verdad y democracia, esenciales para el orden transicional de principios de los años noventa. Al mismo tiempo, las preguntas urgentes del momento decían relación con las transformaciones sufridas por la sociedad chilena a raíz de la reestructuración de la economía y la política durante la dictadura, centrándose allí también parte importante de las inquietudes intelectuales.

Sin embargo, por históricamente entendible que sea la inserción de la dictadura en esas lógicas bipolares de confrontación, y por real que haya sido el terror de Estado, resulta hoy necesario problematizar dicho marco interpretativo, reconociendo y profundizando en los vacíos y silencios que ese tipo de narrativas encierran. El énfasis exclusivo en la represión estatal y en la organización progresiva de una red subterránea opositora en los años setenta -temáticas centrales para la comprensión del período, sin duda alguna- oscurecen nuestra comprensión del comportamiento y transformación de los grupos sociales no directamente afectados por la violencia estatal y que no participaron de los grupos opositores en la primera parte del régimen.

La razón central para explorar estas dimensiones del problema histórico que significa la dictadura de Pinochet radica, como dijera la intelectual argentina Beatriz Sarlo, en la necesidad de transitar desde el recordar al entender, es decir, agregarle complejidad histórica al testimonio subjetivo. Como la propia Sarlo se encarga de aclarar, no se trata de negar la potencialidad epistemológica del testimonio, dado que desde allí se construyeron las narrativas necesarias para darle sentido a las transiciones democráticas y, además, involucran las subjetividades golpeadas de las propias víctimas de la represión. El punto está en plantear nuevas preguntas una vez superado el momento inicial de urgencia por verdad testimonial y reconstrucción del pasado reciente violentamente negado y silenciado¹⁸. Ello importa en la medida en que la propia dinámica de la dictadura, sus decisiones y prácticas estatales, así como también las condiciones en las que Chile transitó hacia la democracia, están atravesadas por la construcción, consolidación y posterior fractura de un bloque social que demostró niveles variables de adhesión al régimen, a pesar de la progresiva constatación de las consecuencias de la violencia estatal. Ello importa también a la hora de entender aquellos aspectos más dramáticos de la

¹⁸ Beatriz Sarlo, *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión* (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2005).

historia reciente chilena. Como ha planteado Greg Grandin, es necesario entender el terrorismo de Estado y la violencia política no sólo desde su experiencia subjetiva testimonial, sino que también desde su marco histórico específico, explorando las condiciones que hicieron posible su extensión y relativa aceptación por parte importante de las sociedades latinoamericanas contemporáneas¹⁹.

2.- Clase media

La mayoría de los estudios centrados en la clase media empiezan por notar su problemática heterogeneidad. En efecto, un pequeño comerciante y un connotado abogado podían y pueden ser identificados como clase media, a pesar de la enorme diferencia que existen entre sus realidades materiales, aspiraciones, prácticas y comportamientos. La clase media, de ese modo, ha tenido una existencia conceptual problemática, en mucho mayor grado que otras clases más firmemente ligadas a posiciones sociales concretas (como la clase "obrera", "propietaria", "industrial", "terrateniente", entre otras denominaciones). Lo "medio" es una categoría relacional, y muchas veces residual con respecto a otros sectores. Su existencia está dada por el hecho de compartir un lugar imaginario antes que por rasgos comunes materiales u ocupacionales. De allí, entonces, que la clase media deba ser rastreada más al nivel de una identidad social antes que en la consistencia real de una clase homogénea. Para efectos de este estudio, asumo a la clase media como un ideal virtuoso y una herramienta de presión política reclamados por quienes tienen la capacidad material, social y cultural para hacerlo.

La preocupación intelectual por la clase media en América Latina antecede a la oleada dictatorial de los años sesenta y setenta. De hecho, el estudio sistemático de este sector social

¹⁹ Greg Grandin, "Living in Revolutionary Times: Coming to Terms with the Violence of Latin America's Long Cold War", en *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin America's Long Cold War*, ed. Greg Grandin y Gilbert M. Joseph (Durham: Duke University Press, 2010).

comenzó en el período inmediatamente anterior, cuando el debate político e intelectual giraba en torno a las opciones, objetivos y consecuencias de las fórmulas de cambio social. Así, por ejemplo, haciendo eco del desarrollismo de los años cincuenta que veía un sólo camino de progreso marcado por las naciones "avanzadas", John Johnson, en 1958, asoció la emergencia de la clases media en América Latina a la creación de un nuevo estilo político que promovería la industrialización, la expansión de la educación pública, la intervención estatal en la economía y la promulgación de leyes laborales²⁰. En respuesta, en los años siguientes, líneas interpretativas asociadas al pensamiento izquierdista en general y a la "teoría de la dependencia" en particular, invirtieron los términos del análisis sobre la clase media, representándola ahora como un mero apéndice de la oligarquía y, por lo tanto, como un factor retardatario del avance social²¹.

A pesar de sus diferencias, este tipo de estudios tenía en común el hecho de suponer que algo así como una clase media existía como unidad en la realidad, y que el objetivo del análisis era identificarla e interpretar su comportamiento. Gino Germani, en Argentina, por ejemplo, inició entonces una serie de investigaciones sobre la clase media en la que definía sus límites y rastreaba sus orígenes, dando por sentado que dicha clase tenía la suficiente consistencia interna como para conformar una unidad real y verificable²². Al mismo tiempo, esa suposición de existencia previa se justificaba con el hecho de que tenían un rol histórico que cumplir, ya sea el

²⁰ John J Johnson, *Political Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors*. (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958). Unos años antes, un estudio colectivo auspiciado por la Unión Panamericana había intentado consensuar una definición común de clase media. A pesar de la disparidad de sus estudios en cuanto a supuestos teóricos, métodos y conclusiones, los unía aquella misma creencia de la clase media como depositaria del progreso y el desarrollo. Theo R. Crevenna, ed., *Materiales para el estudio de la clase media en la América Latina*. (Washington: Unión Panamericana, Departamento de Asuntos Culturales, 1950).

²¹ Probablemente los trabajos mejor logrados en esta línea sean el de Fredrick B. Pike, "Aspects of Class Relations in Chile, 1850-1960", *The Hispanic American Historical Review* 43, n° 1 (febrero de 1963): 14-33; y José Nun, "The Middle-Class Military Coup", en *The Politics of Conformity in Latin America*, ed. Claudio Véliz (London: Royal Institute of International Affairs - Oxford University Press, 1967).

²² Gino Germani, *Estructura social de la Argentina* (Buenos Aires: Ed. Raigal, 1955); Para una discusión más acabada sobre los aportes de Germani al estudio de la clase media en Argentina, véase Sergio Visacovsky y Sergio Garguin, "Introducción", en *Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos*, ed. Sergio Eduardo Visacovsky y Enrique Garguin (Buenos Aires: EA, 2009).

progreso social para el desarrollismo o una etapa del desarrollo capitalista para distintas corrientes inspiradas en el marxismo. El fracaso en asumir esa misión histórica sería fuente de conflictos sociales y retrasos en la marcha de la historia²³. En otras palabras, este tipo de aproximaciones vinculaban de manera directa y necesaria clase media y modernidad, en la medida de que en este grupo habría recaído la responsabilidad de superar las formas sociales tradicionales y abrir el Estado hacia un régimen democrático.

Como señalara Michael Jiménez, entender a la clase media desde este tipo de perspectivas mecanicistas era, de cierto modo, relegarla a un segundo plano, dejando de lado un estudio más acabado sobre sus perfiles y dinámicas reales²⁴. Esto empezó a cambiar en los años noventa. En consonancia con los cambios de paradigma en la historiografía, la clase media comenzó a ser estudiada ahora desde sus representaciones culturales y sus discursos de identidad. Sin presuponer su existencia previa, ahora se trataba de rastrear su proceso de constitución histórica como grupo reconocible, y los esfuerzos desplegados en la esfera pública para dar cuenta de esa posición social. David Parker inauguró esta línea de estudios para América Latina al estudiar a los empleados peruanos de principios de siglo XX. Ese grupo, organizado en torno a demandas concretas, construyó y movilizó una identidad de clase media funcional a sus intereses, exigiendo al Estado los recursos necesarios para llevar una vida acorde a su status social²⁵. A esta perspectiva de análisis pronto se le sumaron más estudios. Brian Owensby y Patrick Barr-Melej,

²³ Hubo trabajos en esta línea que extrapolaban el rol progresista de las clase medias al de la “burguesía” en el siglo XIX, haciendo el hincapié en su incapacidad histórica para liderar el desarrollo del capitalismo en América Latina. Maurice Zeitlin, *The Civil Wars in Chile, Or, The Bourgeois Revolutions That Never Were* (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984).

²⁴ Hasta cierto punto ello se reproduce también con aquellos enfoques post-estructuralistas que tienen a ver la realidad social en términos binarios entre dominadores y subalternos, sin espacio para grupos intermedios con perfiles propios. Michael F. Jiménez, “The Elision of the Middle Classes and Beyond: History, Politics, and Development Studies in Latin America’s ‘Short Twentieth Century’”, en *Colonial Legacies: The Problem of Persistence in Latin American History*, ed. Jeremy Adelman (New York: Routledge, 1999).

²⁵ David S. Parker, *The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society* (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1998); Para un estudio sobre Inglaterra en esa misma línea, véase Dror Wahrman, *Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, C. 1780-1840* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

entre otros, han analizado la constitución identidades y proyectos de clase media en Brasil y Chile respectivamente, cuyos principales rasgos dijeron relación con una incorporación de la modernidad como horizonte de expectativas y un ánimo reformista y antioligárquico que buscaba incidir en los debates públicos de la época²⁶. En este tipo de trabajos la noción de clase media se entiende como un proceso de auto-construcción en diálogo con contextos políticos y sociales cambiantes, que invitan a la movilización de una identidad mesocrática como forma de asegurar cierto nivel de respetabilidad e incidencia social.

La clase media, en esta línea, ya no es entendida como dato preexistente, sino como un proceso histórico contingente. En gran medida, ese ejercicio implicó la recuperación de aquella noción constructivista de clase formulada por E.P. Thompson en relación a la clase obrera inglesa. Allí, la consistencia histórica de una clase no se limita a la posición compartida en una estructura productiva, si bien esa es la condición inicial de encuentro de diferentes sujetos, sino la experiencia de clase en común, que define una identidad social colectiva²⁷. Ello hace que la clase esté históricamente situada, en el tiempo y el espacio, y que sus rasgos y peculiaridades sean específicas. Como señala Ezequiel Adamovsky, en la Francia de 1830 un humilde tendero no era parte de la clase media, pero sí lo era un poderoso banquero, en la medida en que la noción de "clase alta" hacía referencia a la nobleza. Setenta años después, el banquero era parte de la clase alta, y el tendero había sido "aceptado" en la clase media, dados los cambios en la estructura e identidades sociales²⁸.

²⁶ Brian Philip Owensby, *Intimate Ironies: Modernity and the Making of Middle-Class Lives in Brazil* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999); Patrick Barr-Melej, *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001).

²⁷ E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class* (New York: Pantheon Books, 1964); Sobre el impacto de la noción de clase de Thompson en los estudios de clase media, David S. Parker, "Introduction: The Making and Endless Remaking of the Middle Class", en *Latin America's Middle Class: Unsettled Debates and New Histories*, ed. David S. Parker y Louise E. Walker (Lanham: Lexington Books, 2013), 10 y ss.

²⁸ Ezequiel Adamovsky, *Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003* (Buenos Aires: Planeta, 2009), 13-14.

Los límites de la clase media, y los grupos que se imaginaban por debajo y sobre ella tampoco estuvieron definidos de antemano, sino que también fueron resultado de luchas sociales y culturales concretas. La estabilidad de las jerarquías sociales aceptadas, la nitidez de sus privilegios y la proyección en el tiempo de sus identidades constituyentes dependían en gran medida en la eficiencia de sus barreras de entrada. En Chile, por ejemplo, se acuñó el concepto "siútico" para aquel advenedizo mesocrático o popular que buscaba camuflarse entre la clase alta imitando sus modos y gustos, sin llegar a ser convincentes. La función social de ese concepto decía relación con las ansiedades de los grupos dominantes ante los avances de la idea de clase media en las primeras décadas de Chile, y la inestabilidad de las demarcaciones sociales de los años anteriores²⁹. Lo mismo ocurrió para el caso de la clase media, para lo cual se recurrió a diferentes mecanismos de exclusión. En Argentina, como también en otros lugares de América Latina, la pertenencia a la clase media estaba dada no sólo por una condición material específica, sino que también por exigencias raciales de blancura, sobre el entendido de que sólo los descendientes de inmigrantes europeos estaban capacitados para asumir los rasgos virtuosos de una identidad mesocrática³⁰.

La historicidad de la clase media vuelve problemática su relación inherente con la modernidad como misión y proyecto según había proclamado el desarrollismo de mediados de siglo. En ese sentido, la clase media, como cualquier otra clase, no tiene una "misión histórica"

²⁹ Sobre el concepto "siútico": David S. Parker, "Siúticos, Huachafos, Cursis, Arribistas, and Gente de Medio Pelo: Social Climbers and the Representation of Class in Chile and Peru, 1860-1930", en *The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History*, ed. A. Ricardo López y Barbara Weinstein (Durham: Duke University Press, 2012); y Diego Araya Cisternas, "Lo siútico. La estructura social según la élite. Adjetivación, distinción y ridiculez. 1862-1961" (Tesis de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003); Para un argumento similar y posterior, aunque con varias limitaciones, véase Óscar Contardo, *Siútico: arribismo, abajismo y vida social en Chile* (Santiago: Editorial Planeta, 2013).

³⁰ Enrique Garguin, "'Los argentinos descendemos de los barcos'. Articulación racial de la identidad de clase media en Argentina (1920-1960)", en *Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos*, ed. Sergio Eduardo Visacovsky y Enrique Garguin (Buenos Aires: EA, 2009); Un estudio a estas alturas clásico sobre la construcción y reproducción de este tipo de "fronteras simbólicas" en grupos de clase media es el de Michèle Lamont, *Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class* (University of Chicago Press, 1992).

que cumplir de acuerdo a un relato unívoco de la marcha de la historia. Su relación con la modernidad y los procesos de modernización está dado por las aspiraciones de quienes reclamaban una identidad de clase media por obtener y asegurar un lugar en los círculos rectores del Estado, la política y la cultura a lo largo del siglo XX. El volumen compilado por Barbara Weinstein y Ricardo López sobre la clase media desde una perspectiva transnacional ha puesto el acento en este punto. La constitución de diferentes clases medias estuvo vinculada a un proyecto moderno que no necesariamente seguía los pasos del "centro" occidental, sino que más bien se articulaba con condiciones locales, acomodándose a las necesidades y posibilidades de cada momento, influyéndose recíprocamente. La clase media puede ser entendida en su complejidad histórica cuando se le sustrae de relatos históricos totalizantes, que buscan definirla de antemano antes que explorar su propias particularidades³¹.

La presencia de diferentes versiones de modernidad en el horizonte de expectativas de la clase media dan cuenta de uno de sus rasgos más notorios. Más que una categoría descriptiva, la clase media es un "ideal social", es decir, un conjunto implícito de normas de conducta necesarias para reclamar un lugar de relativa distinción³². La noción de clase media, en ese sentido, implica una moralidad específica que de fundamento a su carácter particular en la estructura social. Así, por ejemplo, en Chile la idea de clase media se asoció a la sobriedad, la dignidad y la solidaridad con los pares, todo ello encuadrado en códigos de conducta específicos y no siempre explícitos que funcionaban como mecanismos de reconocimiento entre miembros de la misma clase. Larissa Lomnitz, por ejemplo, estudió en el caso chileno las redes de "compadrazgo" al interior de la clase media, es decir, el conjunto de prácticas de ayuda mutua

³¹ Véase en particular A. Ricardo López y Bárbara Weinstein, "Introduction: We Shall Be All: Toward a Transnational History of the Middle Class", en *The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History*, ed. A. Ricardo López y Barbara Weinstein (Durham: Duke University Press, 2012).

³² Azun Candina, "La clase media como ideal social. El caso de Chile contemporáneo", en *Dossier Chile contemporáneo*, ed. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Programa Interuniversitario de Historia Política, www.historiapolitica.com, 2012.

entendidas como legítimas, y en los que la reciprocidad era un factor fundamental para mantener el sistema estable. La identidad de clase media, por ende, se basaba en el cumplimiento de las normas consensuadas y no siempre institucionalizadas entre pares³³.

La razón de por qué un grupo creciente de sujetos quiso acercarse a este ideal está dado por la distinción social, moral y política que la categoría "clase media" alcanzó en Chile y América Latina a lo largo del siglo XX, sobre todo cuando ella permitía diferenciarse de sectores populares a los que se le adjudicaban una serie de rasgos negativos. La propia noción de lo "medio", además, estuvo históricamente asociada a la moderación, la moral y la virtud, en la medida en que funcionaba como el fundamento del equilibrio social que, alejado de todo extremismo, permitía su reproducción en el tiempo³⁴. Pertenecer a ese grupo, por ende, aseguraba un nivel compartido de respetabilidad, que era explicitado cada vez que esa posición era desafiada³⁵.

Aquel "ideal social", al mismo tiempo, operó también como base de proyectos y demandas políticas. La idea de clase media adquirió parte importante de su peso histórico en la medida en que era utilizada como un argumento sobre el poder y la forma del Estado. Klaus-Peter Sick ha señalado con razón que la noción de clase media ha ido acomodándose a los distintos requerimientos de cada momento. Si en la Francia del siglo XIX "clase media" hacía alusión a la estabilidad social en clave antirrevolucionaria, en los años del Frente Popular ya en

³³ Larissa Adler de Lomnitz, "El 'compadrazgo'. Reciprocidad de favores en la clase media urbana de Chile", en *Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana* (Ciudad de México: FLACSO-México, 1994), 19–46.

³⁴ Como señala Adamovsky, aquella vinculación entre lo "medio" y la virtud proviene de la clásica formulación de Aristóteles, que sería recogida luego por los liberales franceses del siglo XIX para articular un proyecto político en torno a la idea de clase media. Ezequiel Adamovsky, "Aristotle, Diderot, Liberalism and the Idea of 'Middle Class': A Comparison of Two Contexts of Emergence of a Metaphorical Formation", *History of Political Thought* 26, n° 2 (2005): 303–33.

³⁵ La potencia del ideal de clase media en Chile sigue hasta nuestros días, como lo demuestra el hecho de que una mayoría social sigue identificándose como tal. Juan Carlos Castillo, Daniel Miranda, y Ignacio Madero Cabib, "Todos somos de clase media: Sobre el estatus social subjetivo en Chile", *Latin American Research Review* 48, n° 1 (2013): 155–173.

el siglo XX fue un mecanismo de construcción de mayorías al proclamar la alianza entre la clase media y la clase obrera. Al mismo tiempo, la utilización de la clase media en la esfera pública decía relación con ventajas y prerrogativas que ciertos grupos identificados como tales exigían al Estado. La clase media, en ese sentido, fue un mecanismo de legitimación de intereses de un grupo indefinido de ciudadanos, que sólo alcanzan coherencia y visibilidad pública cuando representantes mesocráticos hablaban en su nombre³⁶.

Con todo, la clase media no se reduce a su condición de "idea", "ideal" o "identidad". Es decir, sus consecuencias superan el ámbito del discurso. Las posibilidades de que la condición mesocrática sea legítima y plausible, dependen de una materialidad que las sustente³⁷. Lo que se "crea" es la clase media en cuanto concepto, pero quienes apelan a ella existen en una estructura social concreta, y como tales tienen expectativas y necesidades en torno a su realidad material. De ahí la insistencia en presionar al Estado para lograr determinadas prerrogativas, ya que el conjunto de prescripciones morales implícitas requieren de un correlato material concreto, que los distinga de otros actores sociales, sobre todo aquellos considerados sus inferiores³⁸. Un ejemplo de ello, abordado en este estudio, es el consumo. La adquisición de determinados bienes y servicios, de acuerdo a los parámetros específicos de cada sociedad, apoyan o desestabilizan

³⁶ Klaus-Peter Sick, "El concepto de clases medias. ¿Noción sociológica o eslógan político?", en *Clases medias: Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología*, ed. Ezequiel Adamovsky, Sergio Visacovsky, y Patricia Vargas (Buenos Aires: Ariel, 2014).

³⁷ Isabella Cosse, "Las clases medias en la historia reciente latinoamericana", *Contemporánea* 5. Dossier "Clases medias, sociedad y política en la América Latina contemporánea" (2014): 13–16.

³⁸ Como dijera hace algún tiempo Pierre Bourdieu, en la distribución de posiciones de clase al interior de una sociedad influyen tanto las relaciones de producción como las valoraciones diferenciadas de capital cultural y social, que moviliza y hace efectivo aquella distribución desigual de recursos. De allí que no sea teóricamente útil pensar la constitución de clase como un proceso meramente discursivo, ni tampoco como un reflejo de estructuras económicas subyacentes, sino más bien como una dinámica recíproca, en la que ambas dimensiones se refuerzan mutuamente en la reproducción de distinciones de clase. Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984), 488 y ss.

identidades de clase³⁹. A su vez, cuando las realidades materiales de consumo cambian, las valoraciones de los objetivos y las exigencias específicas para exhibir una identidad mesocrática se ven también modificadas. Fue el caso, como veremos, del Chile bajo las reformas neoliberales.

Para efectos de este estudio entenderé a la clase media en sus dimensiones de identidad, ideal social y herramienta de presión y movilización política, vinculado a su vez con las condiciones materiales cambiantes a las que se ven sometidos en el período en cuestión. Por lo mismo, me interesa analizar los usos y desplazamientos de la noción de clase media en cuanto éstos son proyectados a la esfera pública por representantes legitimados por sus respectivos grupos o instituciones. Esa opción, por cierto, tiene limitaciones. Por ejemplo, no analizo el uso de identidades de clase media en la esfera privada, en las que solían articularse con nociones socialmente aceptadas de género. Además, al centrar el foco en quienes asumían una representatividad de clase media, excluyo a quienes no tenían la opción de hacer sentir su voz en la esfera pública. Si bien incorporo a ciudadanos de clase media en la medida en que proyectan esa identidad en la prensa o ante autoridades gubernamentales, la voz cantante la tienen dirigentes de organizaciones gremiales, profesionales o sociales que de algún u otro modo se identificaba como clase media.

Las organizaciones mesocráticas chilenas, los protagonistas de este estudio, tejieron una tupida red institucional en torno al Estado para reafirmar su condición de clase media. Ese sistema político y social comenzó a ser construido en las primeras tres décadas del siglo XX, pero adquirió mayor consistencia en los años de los gobiernos radicales (1938-1952), y se proyectaría con fuerza hasta la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura. A ese entramado social lo he llamado "Chile mesocrático", y fue la forma concreta de cómo la idea de

³⁹ Sobre la relación entre consumo y las exigencias materiales para mantener el status de clase media, véase Maureen O'Dougherty, *Consumption Intensified: The Politics of Middle-Class Daily Life in Brazil* (Durham: Duke University Press, 2002).

clase media fue movilizadora, qué actores la reclamaron para sí y qué consecuencias tuvo en la organización del Estado y la sociedad civil.

3.- *El "Chile mesocrático"*

Se ha vuelto un lugar común entender la victoria electoral de Arturo Alessandri en 1920 como el ascenso al poder de la clase media, aunque no se especifique cuál es esa clase, quiénes la componen y por qué es capaz de desplazar a los antiguos detentores del control del Estado⁴⁰. Como sea, lo cierto es que esa coyuntura electoral marcó el fin de un ciclo político y el comienzo de un lento proceso de reestructuración del Estado y su relación con la sociedad civil que tendría hondos consecuencias en las décadas siguientes. Parte importante de la dirección que tomarían los acontecimientos estaría dado por la construcción, difusión y aplicación de una identidad de clase media movilizadora hacia el Estado y reproducida a través de una serie de instituciones sociales.

Ya hacia fines del siglo XIX comenzaron a delinearse segmentos sociales intermedios de pequeños agricultores, mineros, artesanos y comerciantes en vías de diferenciación de sectores populares. La inserción de la economía chilena en un sistema capitalista internacional estaba modernizando algunas áreas productivas primarias, empujando un desarrollo urbano sostenido que exigía nuevas funciones sociales y económicas. El Estado, al mismo tiempo, comenzaba a adquirir mayor envergadura a través de la expansión de la burocracia y la inclusión de sujetos sin el lustre oligárquico de sus antecesores en el aparato estatal. Si en 1845 el Estado chileno contaba con 1.165 funcionarios, en 1930 ya eran 47.193⁴¹.

⁴⁰ Por sólo citar un ejemplo canónico al respecto: Gonzalo Vial Correa, *Historia de Chile, 1891-1973*, vol. III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925) (Santiago: Editorial Santillana del Pacífico, 1987).

⁴¹ Gabriel Salazar Vergara y Julio Pinto Vallejos, *Historia contemporánea de Chile*, vol. I. Estado, legitimidad, ciudadanía (Santiago: LOM Ediciones, 1999), 140 y ss; Diego Barría Traverso, "Empleados públicos y clase media,

La modernización de ciertas áreas de la economía impactó de lleno en la organización de las ciudades de entonces, particularmente en la capital Santiago. Su población se triplicó entre las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, mientras la diversificación de empleos complejizaba el panorama social. Quienes podían acceder a salarios por encima del mundo obrero y artesanal podían a su vez aspirar a patrones de consumo diferenciado, emulando aquellos de la oligarquía en las grandes tiendas del centro de la ciudad que por entonces empezaban a multiplicarse. El consumo, en ese sentido, se transformó en un factor de diferenciación social, especialmente importante para quienes querían desmarcarse de los sectores populares⁴².

Muchos de quienes iniciaron entonces actividades comerciales al detalle comenzaron a identificarse como clase media, sobre todo cuando su situación social era aún indefinida. Ese fue el caso de los inmigrantes europeos que comenzaron a llegar en las últimas décadas del siglo XIX, aunque en cantidades muy inferiores a otros países latinoamericanos. Si bien la mayoría de ellos venía del proletariado europeo empobrecido, en Chile alcanzaron cierto status gracias a sus labores productivas y al prestigio que les otorgaba su color de piel en un país que valoraba la blancura como rasgo de superioridad social. Muchos otros inmigrantes, por cierto, se integraron a los sectores medios desde la burocracia, las Fuerzas Armadas y las profesiones liberales⁴³.

El Estado, al mismo tiempo, impulsaba la educación pública a través de sus instituciones más prestigiosas creadas en el siglo XIX, como la Universidad de Chile y el Instituto Nacional,

Chile 1880-1920: un análisis exploratorio a partir de cifras oficiales”, *Revista de Historia y Geografía*, n° 32 (2005): 96.

⁴² El consumo de las primeras décadas del siglo XX se vio acompañado también de una serie de discursos y expectativas centradas en las mujeres de familias de ingresos medios, en tanto “administradoras del hogar”. El consumo en los grandes almacenes inaugurados esos años, entonces, se transformó en una práctica social y cultural que sirvió para señalar y desafiar límites sociales aún inestables, donde grupos de empleados, funcionarios y profesionales intentaban construirse simbólicamente una situación lo más alejada posible de los pobres de la ciudad. Al respecto véase Jacqueline Dussailant, *Las reinas de estado: consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago (1880-1930)* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011).

⁴³ Leonardo Mazzei de Grazia, “Inmigración y clase media en Chile”, *Proposiciones* 24 (1994).

en base a la convicción de que el perfeccionamiento de las virtudes cívicas y republicanas se lograrían mediante la ilustración de los ciudadanos. A principios del siglo XX, de hecho, la Universidad de Chile abrió nuevas carreras como ingeniería, medicina veterinaria, odontología, servicio social, y arquitectura, que se sumaban a las ya tradicionales medicina, derecho y pedagogía, ampliando con ello las posibilidades de estudio a nuevos profesionales. Como plantea Marianne González, la educación estatal fue el principal mecanismo con el cual sectores de ingresos medios reinvirtieron capital económico en capital cultural para sus hijos⁴⁴, creando de esa manera un segmento social de sujetos ilustrados y críticos del orden oligárquico de los años del parlamentarismo. Ese potencial crítico se articularía de modo explícito en torno a las celebraciones del Centenario de la Independencia en 1910, y tendría por voceros a intelectuales que de un modo u otro asumían una identidad mesocrática en conjunto con un nacionalismo reformista, antirrevolucionario y antioligárquico. La clase media empezaba a delinearse desde una demanda política y cultural por participación y reforma social⁴⁵.

Alessandri, entonces, más que llevar a la clase media al poder, fue capaz de transformar la crítica de clase media al parlamentarismo en proyecto político, fundamentado en sus mismos principios: conciliación de clases, expansión del rol económico y social del Estado, democratización del sistema político y secularización de la esfera pública⁴⁶. A pesar del relativo fracaso de ese intento reformista, lo cierto es que a partir de ese momento la agenda política

⁴⁴ Marianne González Le Saux, *De empresarios a empleados: clase media y estado docente en Chile, 1810-1920* (Santiago: LOM Ediciones, 2011).

⁴⁵ Barr-Melej, *Reforming Chile*. Sobre la crisis del centenario y la “cuestión social”, véase Cristián Gazmuri, *El Chile del centenario, los ensayistas de la crisis* (Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001); Sergio Grez Toso, *La “cuestión social” en Chile: ideas y debates precursores, 1804-1902* (Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivo y Museos - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1995); Bárbara Silva Avaria, *Identidad y nación entre dos siglos: patria vieja, centenario y bicentenario* (Santiago: LOM Ediciones, 2008).

⁴⁶ Sobre los principios doctrinarios del “alessandrismo” y su impacto en la constitución de sujetos políticos populares, véase Julio Pinto Vallejos y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *¿Revolución proletaria o querida chusma?: socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932)* (Santiago: LOM Ediciones, 2001).

estaría dominada por las demandas de clase media. La oficialidad del Ejército, también imbuida en el *ethos* mesocrático, apoyó sin fisuras la dictadura desarrollista de Ibáñez iniciada en 1927. A su vez, la administración pública abrió las puertas a jóvenes profesionales de avanzada, incluyendo a muchas mujeres en labores sanitarias, educativas y de asistencia social, todos ellos participantes de un cierto "positivismo de izquierda"⁴⁷. La tecnocracia estatal entonces en formación, como ha planteado Patricio Silva, era especialmente afín a la emergente clase media, no sólo por la extracción social de sus miembros, sino que sobre todo por el conjunto de valores y principios implícitos que rodeaban a la nueva gestión del Estado: sensibilidad antioligárquica, valoración del mérito individual, fe en las posibilidades modernizadoras del Estado, ansias de justicia social en clave reformista, temor al caos y deseo de progreso ordenado⁴⁸.

Por esos años, además, la noción de "clase media" sirvió para legitimar movimientos políticos incipientes en años de crisis e incertidumbre. En 1919, por ejemplo, se organizó una efímera "Federación de Clase Media", que decía responder a un ideal de "paz social", toda vez que defendía "la Patria, la Familia y la Propiedad". y rechazaba la noción de lucha de clases, reemplazándola por una de conciliación y solución pacífica de conflictos⁴⁹. En los años treinta, ese impulso fue llevado al ámbito gremial gracias a la creación de una red de organizaciones gremiales y sindicales de empleados y profesionales que abrieron canales de negociación con el

⁴⁷ El aumento del empleo femenino estatal fue explosivo. Si en 1920 existían 813 funcionarias, en 1952 eran 44.521. María Soledad Zárate y Elizabeth Q. Hutchinson, "Clases medias en Chile: Estado, género y prácticas políticas, 1920-1970", *Inédito*, 2016; Al respecto, véase también Karin Alejandra Rosemblatt, *Gendered Compromises: Political Cultures & the State in Chile, 1920-1950* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000), capítulo 1; César Cerda Albarracín, *Historia y desarrollo de la clase media en Chile* (Santiago: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 1998), 113 y ss.; Un estudio histórico que se centra en el impacto de la oficialidad de clase media en el Ejército es el de Alain Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*. (Santiago: Editorial Universitaria, 1970).

⁴⁸ Patricio Silva, *En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile* (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010), 33 y ss.; Sobre el rol de los ingenieros reformistas en la dictadura de Ibáñez, Adolfo Ibáñez Santa María, "Los ingenieros, el Estado y la política en Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento. 1927-1939", *Historia* 18 (1983): 45-102.

⁴⁹ Luis Ávalos, *Memorandum de organización profesional para la Federación de la Clase Media* (Santiago: Imprenta Chile, 1919); Federación de la Clase Media, *Convención Nacional. Programa de sesiones, bases y reglamentos* (Santiago: Imprenta y Litografía Selecta, 1919).

Estado para defender intereses sectoriales. Algunas de estas instituciones, como la Sociedad de Empleados de Comercio de Santiago, la Sociedad Médica o el Instituto de Ingenieros, existían desde finales del siglo XIX. Otras nacieron en paralelo a la reorganización a nivel nacional del movimiento obrero en las primeras décadas del siglo XX. Muchas de ellas, a su vez, asumieron explícitamente una identidad de clase media, y la utilizaban para legitimar su presencia en la esfera pública⁵⁰. El periódico de la entonces poderosa Unión de Empleados de Chile llevaba por nombre "La Opinión de los Empleados. Órgano Oficial de los intereses de la clase media"⁵¹.

El ascenso político y cultural de individuos, grupos y demandas asociadas a la clase media se consolidó en los lustros siguientes en virtud de una poderosa sinergia entre organizaciones sociales mesocráticas, por una parte, y el Estado, por la otra. En el primer gobierno de Alessandri se dictaron una serie de leyes sociales que, en parte, favorecieron a los empleados al regular las relaciones laborales. La ley No. 4.059 de 1924, de hecho, reconoció legalmente la categoría de empleado particular, diferenciándolos de los obreros⁵², algo que quedó refrendado para todo tipo de empleado en el Código del Trabajo promulgado en 1930⁵³. En el segundo gobierno de Alessandri (1932-1938) se aprobó la ley No. 6.020 que, entre otras cosas, creaba la noción de "sueldo vital" para garantizar la estabilidad de los salarios a los empleados al reajustarlo automáticamente a la inflación⁵⁴. A todo ello se le sumaba la existencia de un

⁵⁰ Jorge Rojas Flores, *Los trabajadores chilenos, desde la colonia hasta 1973* (Santiago: Centro de Estudios Miguel Enríquez, CEME, 2005), 10 y ss.; Azun Candina, *Clase media, Estado y sacrificio: la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Chile contemporáneo (1943-1983)* (Santiago: LOM Ediciones, 2013), 74.

⁵¹ Aldo Cofré Arredondo, "Trabajadores de cuello y corbata: Identidad, asociatividad y acción colectiva en el movimiento de empleados particulares. Chile, 1918-1925." (Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2011), 67.

⁵² *Ibid.*, 17-18.

⁵³ Azun Candina, *Clase media, Estado y sacrificio: la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Chile contemporáneo (1943-1983)*, (Santiago: LOM Ediciones), 2013, 55.

⁵⁴ Según J. Pablo Silva, esta ley fue iniciativa exclusiva de Alessandri, quien veía en la promoción de la clase media un freno a las tendencias revolucionarias del movimiento obrero. Para ello Alessandri no descartaba del todo fórmulas corporativas de organización política con el fin de que organizaciones de clase media tuviesen representación en instancias de decisión al interior del Estado. Aún cuando estas medidas no llegasen a implementarse, la dictación de esta ley fortaleció y politizó a las organizaciones de los empleados, quienes ganaron

complejo entramado de "cajas de previsión" diseñadas exclusivamente para funcionarios, empleados y profesionales de clase media⁵⁵. Entre otras cosas, estas "cajas" buscaban asegurar un nivel de vida acorde con las expectativas de distinción de estos grupos, a través de la construcción de viviendas, disponibilidad de créditos y jubilaciones.

Gracias a la legislación aprobada por esos años, las organizaciones surgidas entonces y las interpelaciones hacia la clase media en la esfera pública, se fue forjando una identidad social diferenciada tanto del mundo oligárquico como del movimiento obrero organizado. En torno a ella se asociaron una serie de principios y valores distintivos de este sector que comenzaron a ser incorporados por quienes se identifican como miembros de la clase media. El triunfo del Frente Popular en 1938, con el Partido Radical a la cabeza, legitimó políticamente el "Chile mesocrático", que consolidaba por entonces su hegemonía cultural. Se instauró así una ética transaccional y negociadora, cuyo eje estuvo siempre en el Estado y no en el Mercado⁵⁶. De allí que al orden sociopolítico iniciado entonces se le conociera también como "Estado de Compromiso", graficando con ello el sinnúmero de arreglos políticos logrados en su seno para operar una democracia multclasista con un sistema de partidos amplio y de alianzas cambiantes.

A raíz de esa identificación entre clase media, Estado y reforma social, el Partido Radical se posicionó en la esfera pública como el partido de clase media por excelencia, tanto por el origen social de sus miembros como por la retórica política de sus dirigentes. Más allá de que las

aún más relevancia y peso social en los gobiernos del Frente Popular. J. Pablo Silva, "The Origins of White-Collar Privilege in Chile: Arturo Alessandri, Law 6020, and the Pursuit of a Corporatist Consensus, 1933-1938", *Labor* 3, n° 1 (20 de marzo de 2006): 87-112.

⁵⁵ El sistema de cajas de previsión, en efecto, tenía un talante eminentemente clasista. Hacia 1936 existían 41 cajas, siendo las más importantes la Caja de Seguro Obrero, con más de un millón de asegurados, y las Cajas de Empleados Particulares y de Empleados Públicos y Periodistas, con casi 200.000 afiliados entre las dos. Rodrigo Henríquez Vásquez, *En "Estado Sólido": políticas y politización en la construcción estatal Chile 1920-1950* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014), 157-158.

⁵⁶ He tomado prestado el concepto y sus implicancias de "Chile mesocrático" de José Joaquín Brunner, *Cultura e identidad nacional: Chile 1973-1983*, Documento de trabajo No. 177 (Santiago: FLACSO, 1983); y particularmente de Barr-Melej, *Reforming Chile*.

preferencias electorales de estos sectores fueran bastante más diversas⁵⁷, fue el PR el que logró impactar de modo más notorio en nuevas formas de sociabilidad que comenzaron a ser comunes en el paisaje social chileno de las décadas centrales del siglo XX. La adscripción política a este partido, por ejemplo, fue la base de la multiplicación de las "clubes radicales", lugares donde en compañía de comida y bebida se discutía de política, religión y sociedad, sirviendo a la vez de espacio de reconocimiento y reproducción de una identidad social y política de clase media⁵⁸.

La identidad de clase media en las décadas centrales del siglo XX derivaba en gran medida de la adscripción a organizaciones sociales que levantaran demandas en su nombre. Al mismo tiempo, la legitimidad de esos grupos estaba dada por su eficacia en lograr influir en políticas públicas del Estado, y por lo tanto en la importancia política y social de sus dirigentes. Desde los gobiernos del Frente Popular dominados por el radicalismo, pasando por el segundo gobierno de Ibáñez, el de Jorge Alessandri y el de Eduardo Frei, aquella relación gozó de buena salud, y redundó en beneficios materiales concretos. Gracias a la expansión sostenida del Estado y a la serie de leyes, subsidios y exenciones favorables a la clase media, entre 1940 y 1953 grupos como los "sectores medios burocráticos" vieron sus ingresos incrementados en un 46%,

⁵⁷ Nacionalistas, socialistas y socialcristianos, entre otros, invocaron también a la clase media en el siglo XX. Parte importancia del núcleo fundador y de la militancia del Partido Socialista estuvo compuesta por intelectuales, empleados, pequeños comerciantes y profesionales que asumieron una identidad de clase media, como el propio Salvador Allende. Paul W. Drake, *Socialism and Populism in Chile, 1932-52* (Urbana: University of Illinois Press, 1978). Además, el peso del catolicismo en el cultura política chilena hizo que muchos quienes se identificaban con la clase media respondieran a los partidos confesionales, tanto el Partido Conservador como la Falange Nacional y, luego, la Democracia Cristiana. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), las apelaciones a la clase media fueron constantes. Larissa Adler de Lomnitz y Ana. Melnick, *La cultura política chilena y los partidos de centro: una explicación antropológica* (Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica, 1998); *El gobierno y la clase media* (Santiago: Editorial del Pacífico, 1967).

⁵⁸ Larissa Adler de Lomnitz y Ana. Melnick, *La cultura política chilena y los partidos de centro: una explicación antropológica* (Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica, 1998), 144-97; Dada la escasez de estudios recientes sobre el radicalismo chileno, queda por aclarar en qué momento el PR asumió la defensa de los intereses de la clase media, hasta qué punto fue exitoso en ello, y cuál fue el contexto de su utilización como herramienta de legitimación política. Esas preguntas ya ha sido respondidas para el caso argentino por Ezequiel Adamovsky, "Acerca de la relación entre el radicalismo argentino y la 'clase media' (una vez más)", *Hispanic American Historical Review* 89, n° 2 (mayo de 2009): 209-51; Aunque con serias limitaciones metodológicas e interpretativas, la relación entre radicalismo y clase media también ha sido tratada por García Covarrubias, *El Partido Radical y la clase media en Chile*.

mientras que los "sectores medios independientes" en un 60%. Quienes eran identificados como obreros sólo aumentaron sus salarios en un 7%⁵⁹.

Para los años cincuenta, la "clase media" ya era parte del vocabulario común. Por una parte, comenzaron a publicarse estudios que intentaban definirla, dejando ver el fundamento moral que se le exigía a quienes quisieran identificarse como tales. Así, por ejemplo, el abogado Raúl Alarcón le adjudicaba a la clase media la misión de "mantener en equilibrio la balanza" de la sociedad, y así "lograr la prosperidad creciente que señalan su destino". Por su parte, el sociólogo Julio Vega, escribiendo sobre el caso chileno para la colección patrocinada por la Unión Panamericana, veía en la existencia de la clase media la condición necesaria para la existencia de un régimen democrático robusto, mientras que la reconocida intelectual feminista y radical Amanda Labarca le reconocía a la clase media su gran "riqueza cultural"⁶⁰. Al mismo tiempo, los integrantes y límites de la clase media empezaron a ser reconocidos también desde el espacio urbano. La comuna de Ñuñoa recibió entre 1930 y 1960 a parte importante de los profesionales y la intelectualidad santiaguina, siendo reconocida desde entonces como el espacio mesocrático por excelencia, donde se entremezclaban bienestar, cultura y sobriedad⁶¹. Cuando ese fundamento moral era desafiado, las críticas arreciaron. Por ejemplo, la revista de humor político *Topaze* se mofó constantemente de las aspiraciones de la clase media y de sus prácticas

⁵⁹ Aníbal Pinto Santa Cruz, *Chile, un caso de desarrollo frustrado*, 4ta edición (Santiago: Universitaria, 1996), 46; Emmanuelle Barozet, "El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación social en Chile", *Revista de Sociología* 20 (2006): 8–10.

⁶⁰ Raúl Alarcón Pino, "La clase media en Chile. Orígenes, características e influencias" (Tesis de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1947), 112; Julio Vega, "La clase media en Chile", en *Materiales para el estudio de la clase media en la América Latina*, ed. Theo R. Crevenna, vol. III. La clase media en Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay (Washington: Unión Panamericana, Departamento de Asuntos Culturales, 1950); Amanda Labarca, "Apuntes para estudiar la clase media en Chile", *Atenea* XCIX, n° 305–306 (noviembre de 1950): 255–56.

⁶¹ Jacqueline González Meyer, "Comuna de Ñuñoa: clase media por naturaleza", *En Concreto* 25 (2004); Ilustre Municipalidad de Ñuñoa, *Ñuñoa, su historia, su gente* (Santiago: La Municipalidad, 2012); René León Echáiz, *Ñuñohue: historia de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina* (Santiago: Editorial Francisco de Aguirre, 2012).

derrochadoras y emuladoras de la clase alta, entendidas como impropias de su condición social⁶².

El valor social y cultural del "Chile mesocrático" también se jugaba en esos planos.

4.- Organizaciones de clase media

La mayoría de las organizaciones de clase media incluidas en este estudio florecieron en las décadas centrales del siglo XX al alero del Estado. Los empleados particulares, por ejemplo, lograron consolidar la Confederación fundada en Valparaíso en marzo de 1948, dado que aceptaron a todos los miembros que fueran imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con quienes desarrollaron una estrecha relación. En los años cincuenta, la Confederación de Empleados Particulares (CEPCh) se afilió a la Central Única de Trabajadores (CUT), dando cuenta de un acercamiento temporal al mundo obrero. Aún así, uno de los objetivos declarados de la organización era la "defensa del mejor sistema remunerativo de los empleados con un estándar de vida adecuado a sus necesidades socio-económicas"⁶³.

Los empleados fiscales hicieron otro tanto. A partir de los años treinta y cuarenta desarrollaron un complejo "archipiélago sindical", donde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), fundada en 1943, despuntó como la organización más relevante. Como lo ha estudiado Azun Candina, el discurso público de la ANEF osciló entre una identificación con el mundo obrero e izquierdista y una diferenciación de esos sectores en virtud de la adscripción a la clase media de sus miembros. De ese modo, mientras la ANEF defendía y demandaba mejores condiciones laborales para sus miembros, alegando muchas veces la necesidad de financiar una "vida digna" de clase media, emergían desde su interior liderazgos nacionales como el de

⁶² Tomás Cornejo Cancino, "Una clase a medias: las representaciones satíricas de los grupos medios chilenos en Topaze (1931-1970)", *Historia* 40, n° 2 (2007): 249-284.

⁶³ Confederación de Empleados Particulares de Chile, *Estatutos de la Organización y de la Corporación de Derecho Privado "CEPCH"* (Santiago: Talleres Gráficos Periodística Chile, 1973), 23.

Clotario Blest, quien a su vez fue uno de los principales impulsores de la reunificación del movimiento obrero en la CUT en 1953⁶⁴.

Por su parte, a partir de los años veinte, pero sobre todo en la década de los cincuenta, los profesionales robustecieron sus organizaciones gremiales, transformándolas en colegios profesionales. Los colegios, a diferencia de las organizaciones anteriores⁶⁵, fueron definidos jurídicamente como instituciones de derecho público, lo que en la práctica las convertía en organismos de control y fiscalización para-estatal. El modelo legal y organizacional fue el Colegio de Abogados, el primero de ellos, fundado por el DL 406 el 12 de marzo de 1925. En las décadas siguientes, esta organización asumió funciones de primer orden en la administración de justicia. El Código Orgánico de Tribunales estableció que el Colegio debía integrar la visita de las cárceles, emitir opinión en la distribución de juzgados y notarías en el país, formar las listas de abogados desde la cual la Corte Suprema elegía a sus miembros, participar con voz y voto en la calificación de jueces, e integrar las sesiones de la Corte Suprema para el juramento de los nuevos abogados, entre muchas otras funciones⁶⁶. Por sobre todo, la ley que dio vida al Colegio de Abogados estableció la obligatoriedad de la colegiatura para ejercer la profesión y, más aún, la atribución de fiscalizar el cumplimiento de la ética profesional. El Colegio, además, estableció y administró el Servicio de Asistencia Judicial, para darle ayuda legal a quienes no podían

⁶⁴ Candina, *Clase media, estado y sacrificio* capítulo 2; Alan Angell, *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. (México: Ediciones Era, 1974), capítulo 7.

⁶⁵ Los profesionales tenían una larga historia de organización gremial que se arrastraba desde finales del siglo XIX. La mayoría de estas organizaciones desaparecieron con la fundación de los colegios, aunque otras sobrevivieron a su alero, como el Instituto de Ingenieros y el Club de Abogados. Flora Collantes Espinoza, “Los colegios profesionales” (Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 1962), 35–36.

⁶⁶ Alejandro Silva Bascuñán, *El abogado, un servidor de la justicia* (Santiago: Mandrágora, 2010), 16.

pagarla, financiado con fondos públicos en virtud de una serie de normativas dictadas para el caso⁶⁷.

En los años siguientes, y tras largas negociaciones y discusiones en el Congreso, se organizaron otros colegios profesionales. En 1937 se iniciaron las tratativas para fundar el Colegio de Farmacéuticos, con el fin de alejar esa profesión del "mercantilismo puro" y sujetarla "a los principios de una sólida moral", como el propio Alessandri declaró entonces⁶⁸. En 1942, con apoyo de parlamentarios radicales, se aprobó la ley que organizaba el Colegio de Arquitectos, y en 1944 fue el turno del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Tras varios años de tratativas patrocinadas por el diputado radical Isauro Torres, en 1948 se fundaron el Colegio Médico y el Colegio de Dentistas, mientras que entre 1953 y 1958 se crearon los colegios de enfermeras, de médicos-veterinarios, de asistentes sociales, de constructores civiles, de periodistas, de ingenieros, de practicantes del área de la salud, de técnicos y de contadores⁶⁹. El último colegio profesional en organizarse, el de profesores, fue creado ya bajo la dictadura militar, en 1974. Todos estos colegios tuvieron las atribuciones para sancionar actos incompatibles con el código de ética de la respectiva profesión. Las sanciones iban desde la amonestación a la cancelación del título profesional, medida que sólo podía ser apelada ante la Corte Suprema. Por cierto, todos los funcionarios públicos de las respectivas profesiones, independiente del rango que ostentaran,

⁶⁷ El Servicio de Asistencia Judicial, según Marianne González, operó como un mecanismo de conciliación entre las demandas más radicales del mundo popular y el Poder Judicial, construyendo con ello una lógica de exclusión de la justicia por imperativos de clase. Al respecto véase Marianne González Le Saux, "La institucionalización de la justicia social: La creación de los Servicios de Asistencia Judicial en Chile, 1920-1960s" (XX Jornadas de Historia de Chile. Simposio No. 11: Profesionales de la justicia chilena desde el siglo XIX: aproximaciones multidisciplinarias, Iquique, 14 de agosto de 2013); Marianne González Le Saux, "Legal Aid, Social Workers, and the Redefinition of the Legal Profession in Chile, 1925-1960 (próxima aparición)", *Law and Social Inquiry* 42, n° 2 (2017); A pesar de varios rípos interpretativos, véase también Adolfo Ibáñez Santa María, *Herido en el ala: estado, oligarquias y subdesarrollo : Chile, 1924-1960* (Santiago: Editorial Biblioteca Americana, 2003), 309 y ss.

⁶⁸ Collantes Espinoza, "Los colegios profesionales", 20. La ley respectiva sólo será promulgada en 1942.

⁶⁹ Ibid., 20-28; Ver también Colegio de Ingenieros de Chile A.G, *50 años del Colegios de Ingenieros de Chile: (1958-2008)*, (Santiago: Colegio de Ingenieros de Chile A.G, 2008).

podían ser también sujetos de medidas punitivas por parte de los tribunales de los colegios profesionales.

No todos quienes se identificaban con la clase media lo hicieron desde el empleo público o el ejercicio de las profesiones liberales. Una amplia capa de pequeños comerciantes, industriales, empresarios y transportistas se organizaron a escala nacional para incidir en la opinión pública y negociar con el Estado. En estos casos, la adscripción a una identidad de clase media estaba dada y legitimada en virtud de ser dueños de su propia fuente de trabajo, escapando así a la categoría de "asalariado", a la que muchas veces se referían con cierto desprecio. Las organizaciones más representativas de estos sectores se encargaron de proyectar a la esfera pública sus demandas y expectativas, y de negociar su posición social, económica y legal con el Estado. Desde 1938 existía la Confederación de Comercio y de la Pequeña Industria Minorista de Chile -rebautizada años después como Confederación de Comercio Detallista de Chile-, organizada en Valparaíso por quienes no se sentían representados en los órganos gremiales de los grandes comerciantes⁷⁰. Desde 1966, se les sumó una nueva organización, la Confederación Única de Pequeños Industriales y Artesanos (CONUPIA), de menor tamaño e incidencia.

Por otro lado, en Santiago, en 1936, se fundó la Asociación Sindical de Dueños de Camiones, desde donde se organizó la Confederación Nacional del rubro en 1953. En 1970, ese organismo se unificó con otras organizaciones gremiales de camioneros, dándole forma definitiva a la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile⁷¹. Comerciantes, camioneros y pequeños industriales habían alcanzado un alto nivel de organización y

⁷⁰ Rafael Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida. De Don Arturo Alessandri Palma a Don Ricardo Lagos Escobar* (Santiago: El Detallista, 2005), 15; "Para qué sirve nuestra Confederación", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 1, abril de 1969, 4.

⁷¹ "El Camionero: un soldado siempre alerta en defensa de los intereses de nuestro Gremio", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año I, No. 8, diciembre de 1971, 20; Entrevista a Moisés Pastrián, Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Santiago, 22 de septiembre de 2016.

representación hacia 1970. En muchos casos, la pertenencia a estos grupos era condición para conseguir licencias y permisos, además de ser una oportunidad para acceder a créditos e insumos de trabajo administrados por las directivas de trabajo⁷². Sus organizaciones locales se extendían por todo el país y participaban activamente de los debates sobre políticas sectoriales y en la creación y aprobación de leyes en el Congreso Nacional, proceso que no estuvo exento de conflictos con las autoridades⁷³.

Las organizaciones de clase media, por cierto, no se circunscribían al ámbito gremial y laboral. Junto a ellas se desarrollaron un sinnúmero de instancias comunitarias, deportivas, filantrópicas, culturales y asistenciales, algunas de las cuales ejercieron una influencia notoria en la conducción de los asuntos públicos. Dos de las más grandes y socialmente aceptadas de estas instituciones durante las décadas centrales del siglo XX fueron la Masonería y los Rotary Club.

La orígenes de la Masonería se remontan a grupos de albañiles en la Europa medieval, que devinieron en grupos secretos burgueses fuertemente influidos por el racionalismo ilustrado del siglo XVIII. En América Latina, muchos de los líderes militares independentistas se organizaron en grupos de inspiración masónica, y desde allí surgirán logias que en la primera parte del siglo XIX cultivarán el pensamiento liberal acorralado por la república portaliana. En la segunda parte de la centuria, y en la estela de los movimientos liberales europeos, aparecerán nuevas logias masónicas, muchas de ellas compuestas por inmigrantes en Valparaíso y Santiago, como también por prohombres locales opositores al gobierno. En 1861 se fundó la Gran Logia de

⁷² En 1969 se aprobó la ley que creaba el Registro Nacional del Comerciante, ente semi-estatal de supervisión del sector. Entre otras cosas, el Registro impuso la agremiación obligatoria a alguna organización con personalidad jurídica para acceder a las patentes necesarias para instalar locales comerciales. "La Ley del Registro del Comerciante", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 1, abril de 1969, 5

⁷³ Por cierto, la lista de organizaciones gremiales de pequeños comerciantes, industriales y transportistas era mucho más extensa de lo aquí reseñado. Funcionaban también la Confederación de Productores Agrícolas, la Federación de Sindicatos de Taxistas de Chile (FENATACH) y la Federación Nacional del Transporte Rural, Interurbano e Internacional (FENABUS), por sólo mencionar a las organizaciones más grandes. Guillermo Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas* (Santiago: ILET, 1984), 316 y ss.

Chile, con lo que se normaba el funcionamiento de esas logias de acuerdo al "rito escocés antiguo y aceptado" y se sometían a una autoridad central reconocida internacionalmente. De allí en adelante, la afinidad doctrinaria de la masonería con los clubes radicales y los cuarteles de bomberos comenzó a hacerse cada vez más evidente, generando un circuito de espacios de sociabilidad liberal, laica, racionalista e ilustrada⁷⁴.

Hacia principios del siglo XX, las logias masónicas ya estaban pobladas de profesionales, comerciantes, militares e intelectuales que no participaban de los círculos oligárquicos⁷⁵. En las décadas siguientes, la hegemonía política y cultural del radicalismo y la clase media se tradujo en el ascenso a una posición de influencia y poder político de la masonería chilena, gracias a la gran cantidad de masones en altas posiciones del aparato estatal. De hecho, entre 1920 y 1973, siete Presidentes de la República fueron a la vez activos masones⁷⁶. Las redes de contacto informales construidas en la masonería se proyectaron a lo que ellos mismos llamaban el "mundo profano". En aquellos años, la pertenencia a una logia abría camino en la administración pública, el Ejército o el mundo de los profesionales.

Los Rotary Club también reunieron a hombres de clase media, sirviendo tanto como espacio de sociabilidad local y como organizaciones de servicio hacia las comunidades en las

⁷⁴ Sobre este período, véase Fernando Pinto Lagarrigue, *La masonería, su influencia en Chile; ensayo histórico, político y social*. (Santiago: Editorial Orbe, 1966); Cristián Gazmuri, *El "48" chileno: igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos* (Santiago: Editorial Universitaria, 1992); Felipe Santiago Del Solar, *Las logias de ultramar: en torno a los orígenes de la Francmasonería en Chile 1850-1862* (Santiago: Occidente, 2012); y Joaquín Fernández Abara, *Regionalismo, liberalismo y rebelión: Copiapó en la guerra civil de 1859* (Santiago: RIL Editores - Escuela de Historia Universidad Finis Terrae, 2016).

⁷⁵ La relación entre la masonería y la clase media en el siglo XX era un aspecto continuamente destacado en el propio discurso institucional de la Orden. Uno de los "historiadores oficiales", Fernando Pinto Lagarrigue, señalaba por ejemplo que la masonería en Chile había "contribuido poderosamente a la formación de una clase media cultísima de donde han surgido talentos cuya actuación compromete la gratitud nacional". Pinto Lagarrigue, *La masonería, su influencia en Chile; ensayo histórico, político y social*, 275. Según García Covarrubias, el carácter mesocrático de las logias masónicas de principio de siglo XX podía evidenciarse por los apellidos de sus más destacados miembros -Arlegui, Vergara, Páez, Allende, Palma, Cádiz, Ewing, Navarrete, García, Quezada, Villanueva, Boccardo, etc.-, que el autor identifica como típicos "apellidos de clase media". García Covarrubias, *El Partido Radical y la clase media en Chile*, 70.

⁷⁶ Ellos fueron: Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez, Juan Esteban Montero, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y Salvador Allende. "Los masones en Chile", *Qué Pasa*, 11 de agosto de 1983, 21.

que se insertaban. El movimiento rotario tuvo su origen en Estados Unidos, cuando el abogado Paul Harris -nacido en el estado de Wisconsin en 1868- ideó un nuevo tipo de club masculino basado en los principios de solidaridad y colaboración entre pares. El primer club, fundado en Chicago en 1905, reunió a profesionales, comerciales y artesanos de la ciudad, quienes acordaron orientar sus esfuerzos comunes hacia el servicio comunitario, especialmente de los más necesitados. Las reuniones siguientes se realizaron alternadamente en casas y oficinas -de ahí el nombre, alusión al acto de "rotar"-, donde se comentaban las actividades de sus miembros y sus problemas con un fin educativo. En los años siguientes se fundaron clubes en otras ciudades de Estados Unidos, experimentando un crecimiento explosivo en poco tiempo. Para 1919, los rotarios ya tenían presencia en Canadá, Europa, Australia, India, China, Japón Filipinas y América Latina, lo que hizo necesaria la fundación de Rotary International, con sede en Evanston, Illinois, en 1922. El primer club chileno se fundó en Valparaíso en 1923 gracias a la labor de rotarios uruguayos y argentinos residentes en el puerto. Los primeros miembros fueron un notario público, un dentista, un agente marítimo, un importador, un profesor secundario, un periodista, un corredor de bolsa y un agente de seguros, delineando así lo que será el perfil social de sus integrantes en el futuro⁷⁷.

Pocos años después se fundaría el Rotary Club de Santiago, el más numeroso del país, con la presencia de políticos como Carlos Dávila, profesionales, empleados y varios ciudadanos norteamericanos en Chile, tanto ejecutivos como funcionarios de la embajada. Bajo la presidencia del médico Eduardo Moore, los clubes rotarios se expandieron a distintas provincias

⁷⁷ Darío Enríquez Bello, *Rotary en Chile, 1923-1973. Homenaje al Cincuentenario* (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974), 3-49. El perfil de clase media fue una constante en todos los clubes rotarios. En el club de San Bernardo, por ejemplo, se contabilizaron 201 miembros entre 1935 y 1983, con el siguiente desglose por ocupación: Militares, carabineros y policía civil: 31; médicos, 10; jueces locales y abogados: 8; pequeños industriales y comerciantes: 37; ingenieros: 7; pequeños agricultores: 9; empleados: 37; otras profesiones: 19; otros y sin información: 43. Manuel J.R. Benavente S., *Cincuenta años Rotary Club San Bernardo, 1933-1983* (San Bernardo: Imprenta Offsetgraff, 1992), 58.

del país, contando en 1927 con 32 organizaciones. La importancia social y política de sus miembros pudo ser constatada con la visita de Paul Harris a Chile en 1936 y la serie de banquetes y actos en su honor que contaron con la presencia de ministros de Estado. Para los años cincuenta, Chile ya contaba con la mayor concentración de rotarios de Sudamérica, recibiendo en varias ocasiones a los sucesivos presidentes de Rotary International. En 1973, el movimiento rotario tenía presencia en 150 países, contabilizando 15.700 clubes con 736.000 miembros. En Chile existían entonces 155 clubes con unos 17.000 miembros, la mayoría de ellos en ciudades provinciales⁷⁸.

Los clubes rotarios construyeron un discurso interno fuertemente moralizante en base al servicio a los miembros desventajados de cada localidad. En las publicaciones del movimiento se hablaba del "evangelio de una Moral superior", reflejando muchas veces una desconfianza conservadora hacia la modernidad. Así, por ejemplo, se apelaba a la existencia de "eternos valores espirituales y morales que deben presidir, por encima y más allá de todas las adquisiciones materiales, la vida del hombre"⁷⁹. La misión de una superación moral integral de la sociedad a través de la colaboración y el servicio, de ese modo, recaía en sus miembros, en virtud de la superioridad que les entregaba sus labores económicas y profesionales en cada comunidad.

Empleados, comerciantes, dueños de camiones, profesionales, masones y rotarios estaban profundamente inscritos en la fábrica social del "Chile mesocrático". Desde allí movilizaron la identidad de clase media para reproducir su estatuto jurídico y social alcanzado, participando a la vez en las disputas políticas de cada momento. Fue ese esquema de relaciones entre Estado y sociedad civil el que entró en crisis durante la Unidad Popular, y el que sería temporalmente

⁷⁸ Enríquez Bello, *Rotary en Chile, 1923-1973. Homenaje al Cincuentenario*, 49-102. Junto a los rotarios, existió un movimiento paralelo de similares características, aunque de menores dimensiones: los Clubes de Leones. Según un reportaje de 1973, la cercanía de los rotarios con los masones motivó la fundación de los Leones, de un perfil más cristiano. Entre otros, Eduardo Frei Montalva participó de un Club de Leones mientras vivía en Iquique. "Rotarios y Leones: Más allá de una insignia", *Qué Pasa*, No. 119, semana del 26 de julio de 1973, 54-55.

⁷⁹ *Ibid.*, 114-15.

restaurado en los primeros años de la dictadura militar. Las reformas neoliberales volverían a modificar el escenario de manera radical, al atacar de manera directa contra las organizaciones mesocráticas y su principal referencia social e identitaria: el Estado. Las reacciones, desplazamientos y críticas emanadas desde estos grupos tendrán como telón de fondo la destrucción del "Chile mesocrático" del siglo XX. La naturaleza del autoritarismo militar, además, puso en cuestión el carácter moral del régimen político, algo que las dimensiones alcanzadas por la represión estatal dejó en claro para parte importante de la clase media. La interpretación de la represión a partir del esquema de los Derechos Humanos podría el acento precisamente allí, en la moralidad de la política, y sería a la larga efectiva en erosionar la base social mesocrática del régimen.

Este estudio se basa en archivos institucionales de muchos de los grupos de clase media nombrados, así como también en sus publicaciones periódicas. Además, dada la importancia de su proyección a la esfera pública, se utilizaron periódicos y revistas de circulación nacional referidas a sus actuaciones, como también a los esfuerzos de diferente signo por disputar el sentido de la clase media. Por último, se usaron fuentes estatales en contextos regionales para dar cuenta de las particularidades del proceso político y de las relaciones entre Estado y sociedad civil fuera de la capital, Santiago.

La línea argumental de este estudio se divide en cinco partes. En el capítulo 1 describo el proceso de radicalización hacia la derecha de las organizaciones mesocráticas y la movilización social contra la Unidad Popular. Allí planteo que fueron la desestabilización del "Chile mesocrático" y el desplazamiento de idea de la clase media por la clase obrera como centro de las preocupaciones gubernamentales los factores que explican la politización de estos grupos. El paro de octubre de 1972 fue el momento en que se planteó de manera explícita una versión

contrarrevolucionaria de la clase media, utilizándose desde ese momento como bandera de lucha política hasta el derrocamiento de Allende el 11 de septiembre de 1973.

En el capítulo 2 exploro el proceso de "sincronización" entre los grupos mesocráticos y la dictadura, en virtud del consenso alcanzado sobre la necesidad de un restablecimiento radical del orden social y la utilización de los aparatos represivos del Estado para lograr ese objetivo. Esa "sincronización" estuvo dada por la experiencia codificada como épica a la vez que traumática de la Unidad Popular, y la sensación de protagonismo mesocrático en el desenlace de los acontecimientos. Los ritos públicos organizados por el régimen sirvieron como escenarios públicos en los cuales desplegar ese consenso social sobre el autoritarismo. El capítulo 3, por su parte, continúa describiendo el momento de mayor concordancia entre clase media y dictadura, centrando la atención ahora en la recuperación de los espacios de participación y negociación propios del "Chile mesocrático". La indefinición proyectual del régimen y la existencia de sectores corporativistas en su interior que buscaban la integración de fuerzas sociales al poder político facilitaron este proceso. En respuesta, muchos de estos grupos de clase media colaboraron activamente con las necesidades de legitimación internacional del régimen a través de lo que he llamado "diplomacia civil", aunque sin alcanzar el éxito esperado.

Los dos últimos capítulos describen el proceso de fractura de la base social mesocrática del régimen. En el capítulo 4 exploro las consecuencias del viraje neoliberal de la dictadura y su impacto en las condiciones materiales de la clase media. La contracción del Estado y la expansión de las relaciones de mercado atentaron directamente contra la estabilidad de las organizaciones de clase media, sobre todo cuando se emprendió la profundización de esas reformas a través de las "modernizaciones" y la "institucionalización" del régimen. Grupos como los colegios profesionales, entre otros, perdieron su estatuto jurídico y parte importante de sus

atribuciones, reflejo de la situación general de clausura de los canales de participación y negociación con el Estado. La dictadura, sin embargo, no olvidó del todo a la clase media. De hecho, en línea con el credo neoliberal, buscó redefinir la noción de clase media a través del "boom" de las importaciones y el consumo, logrando con éxito por un momento modificar los mecanismos mesocráticos de distinción a través de la adquisición de determinados bienes ahora disponibles.

El capítulo 5 plantea que a finales de los años setenta y principios de los ochenta, la propia idea de clase media fue disputada desde una sensibilidad opositora al autoritarismo. Desde la cultura, la investigación social y la incipiente prensa disidente se intentó volver a centrar la definición de clase media en los parámetros del "Chile mesocrático". En ese proceso tuvo un rol destacada la lucha por los Derechos Humanos llevada adelante por organismos ligados a la Iglesia Católica, que logró cuestionar moralmente a la dictadura. La "oposición moral", como los casos concretos del Colegio de Abogados y la masonería lo grafican, pronto se tradujo en expresiones de "oposición política", a pesar de que aún no podían convocar a una mayoría social. La crisis económica de 1982-1983 y las protestas nacionales surgidas de esa coyuntura terminarían por reventar el consenso mesocrático en torno a la dictadura al evidenciar la fragilidad del sueño neoliberal de la abundancia material y abrir el espacio suficiente para la masificación de la oposición al régimen. Desde ahí en adelante, la lucha política se centraría en la lucha por la recuperación de la democracia, y contaría entre sus filas a muchos de las organizaciones de clase media estudiadas en estas páginas.

Capítulo 1

La clase media, la Unidad Popular y la contrarrevolución

En las elecciones presidenciales de 1970, Salvador Allende, el candidato de la Unidad Popular, venció por estrecho margen. La izquierda marxista, tras décadas de organización y movilización, llegaba al poder con un programa propio que se orientaba a la construcción del socialismo por medios democráticos. Las organizaciones mesocráticas, a pesar de las tensiones sociales de esa coyuntura, recibieron con actitud abierta al nuevo gobierno. Las prácticas transaccionales de estos grupos con el Estado pudieron reproducirse sin mayores problemas por algunos meses. De hecho, el propio Allende -médico y masón- era un destacado representante de aquel entramado organizacional y cultural de clase media.

Sin embargo, el deterioro de la situación económica, el desabastecimiento, la retórica "obrerista" del gobierno y la polarización política comenzaron a alimentar ansiedades en estas organizaciones, sobre todo respecto a la amenaza a su status y "dignidad" en relación a grupos subalternos ahora empoderados por el proyecto socialista. Las lógicas negociadoras del "Chile mesocrático" pronto se vieron fuertemente erosionadas, lo que a su vez estuvo acompañado de una activación política en clave contrarrevolucionaria de la amplia mayoría de estas organizaciones sociales. Mientras los comerciantes se organizaban para defender el "área privada" amenazada por el ímpetu estatizador del gobierno, los camioneros se pusieron a la vanguardia de un incipiente bloque social de clase media antigubernamental al protagonizar el paro de octubre de 1972. Profesionales y empleados, entre otros, se plegaron entusiastas a estos movimientos, consolidando una alianza que también incluyó a los grandes grupos empresariales y los partidos políticos de oposición. En ese proceso de radicalización política y social, la propia

noción de clase media fue redefinida para legitimar la lucha contra la Unidad Popular. La izquierda, en virtud de sus esquemas ideológicos y de la centralidad del movimiento obrero en sus formulaciones políticas, no pudo hacer frente a esta situación. De ese modo, luego del paro de octubre la transformación de la identidad de clase media llegó a su punto culminante, pasando de ser un ideal social de relaciones entre sociedad civil y Estado a un arma política contrarrevolucionaria que ayudó a desestabilizar al gobierno y abrirle las puertas a los militares para que derrocaran violentamente a Allende.

1.- Allende en el poder. La "luna de miel"

La izquierda tenía una relación problemática con la idea de la clase media o, en la jerga marxista de entonces, "pequeña burguesía". Por una parte, muchos de sus principales líderes venían de ese sector social, y se habían formado políticamente en el Chile del Frente Popular. El caso arquetípico de esto fue el propio Salvador Allende. No sólo su condición de médico lo acercaba a la clase media, sino que también sus propias afiliaciones institucionales. Además de ser miembro fundador del Partido Socialista, Allende había participado también de la organización del Colegio Médico, y lo había dirigido entre 1951 y 1952. Al mismo tiempo, y desde 1935, era un activo miembro de la Masonería, integrando durante varias décadas la Logia "Hiram" No. 65, de una larga tradición socialista y contestataria. En ello seguía los pasos de su abuelo, el radical y en su momento Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Ramón Allende Padín, lo que acrecentaba su prestigio al interior de la Orden⁸⁰.

Por otro lado, en el esquema de interpretación marxista, la "pequeña burguesía" era por definición vacilante y poco confiable. Para muchos socialistas, las alianzas con el radicalismo en

⁸⁰ Al respecto, véase Juan Gonzalo Rocha, *Allende, masón: la visión de un profano* (Santiago: Editorial Sudamericana, 2000).

los años del Frente Popular había sido una amarga experiencia de entreguismo y sumisión. De allí que algunos de sus intelectuales no escatimaran epítetos despectivos para referirse a este sector social. Julio César Jobet, en su célebre *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile* de 1955 calificaba a la clase media de "clase parasitaria por excelencia", que intentaba cubrir su pobreza con bienes materiales superfluos. "En ella se forma el pequeño burgués charlatán, difuso y leguleyo, desvinculado de la producción y de todo trabajo creador, viviendo del excesivo comercio intermediario, del profesionalismo agobiador y de la burocracia inútil", agregaba⁸¹.

Durante los años sesenta, comunistas y socialistas discutieron a ratos agriamente sobre el rol de la "pequeña burguesía" o la "burguesía nacional" en un eventual proyecto revolucionario. Mientras el Partido Comunista (PC) abogaba por una inclusión de todos aquellos sectores sociales con intereses contradictorios con el gran capital, el cada vez más radicalizado Partido Socialista (PS) abogaba por un proyecto obrerista, sin participación de sectores medios⁸². Una vez formada la Unidad Popular en 1969, y dada la relación directa que se hacía entre clase social y partido en el análisis marxista de entonces, se acordó incluir al Partido Radical (PR) en la coalición, lo que a su vez generó la salida de sus facciones más abiertamente anticomunistas con

⁸¹ Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile* (Santiago: Editorial Universitaria, 1955), 235; Sobre los desplazamientos y redefiniciones de la noción de clase media por parte de intelectuales izquierdistas desde los años cincuenta, véase J. Pablo Silva, "Rethinking Aspects of Class Relations in Twentieth-Century Chile", en *Latin America's Middle Class: Unsettled Debates and New Histories*, ed. David S. Parker y Louise E. Walker (Lanham: Lexington Books, 2013), 176–91.

⁸² En los años sesenta, muchos intelectuales de izquierda en Chile y América Latina se radicalizaron hacia la izquierda al experimentar los límites del modelo desarrollista y el impacto de la Revolución Cubana. En ese proceso asumieron una identidad "pequeño-burguesa" en clave negativa, a la vez que se asumían un rol directivo en un eventual proceso revolucionario en virtud de su capacidad técnica. Ese es el argumento central, para el caso colombiano, de A. Ricardo López, "From Middle Class to Petit Bourgeoisie: Cold War Politics and Classed Radicalization in Bogotá, 1958–1972", *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 25, n° 2. Dossier "Middle Class: Practices, Transformations, and Constructions in Latin America and Spain" (21 de diciembre de 2014).

el ex-candidato presidencial Julio Durán a la cabeza⁸³. Con todo, el programa de gobierno de la Unidad Popular no incluyó menciones explícitas a la clase media o la pequeña burguesía. Profesionales, comerciantes y pequeños propietarios fueron incluidos en la categoría "pueblo", opuesta a la oligarquía y el imperialismo, sin dar cuenta de algún rol específico en el futuro Estado socialista⁸⁴.

En las elecciones presidenciales de 1970, el conglomerado de izquierda venció por estrecho margen. Tras negociaciones con la Democracia Cristiana y la promulgación de un "Estatuto de Garantías Constitucionales", el Congreso ratificó a Allende como Presidente de la República. En los círculos de derecha las alarmas se prendieron. Por décadas había existido en Chile una particular resistencia a la izquierda marxista que, entre otras cosas, había llevado a la ilegalización del Partido Comunista por diez años (1948-1958) y el despliegue de un inmenso esfuerzo propagandístico en las presidenciales de 1964 para impedir el triunfo de la izquierda y favorecer la del demócratacristiano Eduardo Frei. Mientras las fracciones más radicalizadas del mundo derechista intentaron impedir la llegada de Allende al poder mediante la fuerza a través de un secuestro frustrado y asesinato del Comandante en Jefe del Ejército René Schneider, el Partido Nacional y la prensa afín se preparaban para un largo combate contra el "marxismo".

La victoria de Allende y el inicio del gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, no fueron recibidos con especial alarma por las organizaciones de clase media. De hecho, ninguno de estos gremios se pronunció abiertamente por alguna de las candidaturas en disputa. Los comerciantes detallistas, por ejemplo, señalaron pocos días después de la victoria de la izquierda en las urnas que la "clase media empresarial" que representaban "ratifica su posición de no

⁸³ He analizado largamente los debates al interior de la izquierda en estos años en otro lugar. Marcelo Casals Araya, *El alba de una revolución: la izquierda y el proceso de construcción estratégica de la "vía chilena al socialismo" 1956-1970* (Santiago: LOM Ediciones, 2010).

⁸⁴ *Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular* (Santiago: Impresora Horizonte, 1970).

mezclarse en controversias políticas"⁸⁵. Incluso hubo colegios profesionales, como los arquitectos y los periodistas, que reconocieron el triunfo de Allende y llamaron a crear un clima de confianza y tranquilidad⁸⁶.

Con algunos matices, el primer año de la Unidad Popular fue de "luna de miel" con respecto a las organizaciones sociales de clase media. Parte importante de ello se explica por la continuidad de las prácticas de negociación y reconocimiento con autoridades de gobierno sobre políticas sectoriales y otras materias, algo que aseguraba la razón de ser de estos grupos. El mismo Allende parecía ser garantía de esto, dado que era visto como un par por los líderes mesocráticos. La revista institucional del Colegio Médico, por ejemplo, saludó la llegada de uno de los suyos a la presidencia de la república, llegando incluso a afirmar que "se puede confiar en Allende"⁸⁷.

También la masonería recibió con agrado la noticia, sobre todo en aquellos sectores que habían explicitado su apoyo previamente. Cuando Allende aún era candidato, la Logia "Franklin" No. 27 lo recibió en su "templo" para exponer su programa de gobierno, en un tono que él mismo reconocía era inusual para lo permitido en ese tipo de situaciones. Al mismo tiempo se organizaban grupos como "Masones Amigos por Allende" y el "Comando Femenino 'República'". Pocos días después de ser confirmado por el Congreso Pleno como Presidente, fue el turno de la logia en la que participaba -"Hiram" No. 65-, junto a su "logia madre" en la que se había iniciado, "Progreso" No. 4 de Valparaíso. Allí los oradores dieron cuenta del ánimo colaborativo de parte importante de la masonería. El líder -"Venerable Maestro"- de Hiram No. 65, Juan Venegas Quevedo, señaló entonces que en el gobierno de Allende "todos los Hermanos masones debemos

⁸⁵ Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983*, 42.

⁸⁶ Ibid., 43.

⁸⁷ Cit. en Azun Candina, "Studying other Memories: The Colegio Médico de Chile under Socialism, Dictatorship, and Democracy, 1970-1990", *Latin American Perspectives* 43, n° 6 (2016). Allende también apareció reproducido en varias fotografías en la revista gremial, acompañado de no pocos términos elogiosos. *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 1, enero de 1971, 19 y ss.

prestar nuestra leal y desinteresada cooperación, en una forma y otra, para que su programa tenga un éxito cabal por la felicidad de Chile y por el engrandecimiento de la Orden"⁸⁸

Varias otras organizaciones identificadas con la clase media se expresaron de igual forma, ajustándose sin mayores problemas a la nueva situación política. La Confederación de Comercio Detallista renovó su plana directiva en noviembre de 1970, resultando electo como presidente Rafael Cumsille Zapapa, un joven comerciante de San Fernando, hijo de inmigrantes palestinos, y con considerable experiencia en organizaciones sociales locales y regionales⁸⁹. Entre otras actividades públicas, Cumsille dirigió las celebraciones del "día del comerciante" el 5 de junio de 1971 en un acto masivo celebrado en el Estado Nacional, con la animación del animador de televisión "Don Francisco" y la presencia de José Tohá, el Ministro del Interior. Al día siguiente, en un acto frente a la estatua de Diego Portales -una suerte de "patrono" de la organización-. Cumsille definió la actitud frente al gobierno: "Colaboración activa, crítica constructiva, sentido gremial y social y un diálogo franco, cuyo primer inspirador, reconozco, ha sido el Presidente de la República". Incluso envió un mensaje a quienes presionaban por radicalizar posiciones: "Sí señores, y esto vaya principalmente para tantos que se impacientan en quizás qué latitudes y aislamientos, la Confederación mantiene diálogos diarios con el Gobierno y el Parlamento para

⁸⁸ Cit. en Rocha, *Allende, masón*, 65. Al mismo tiempo, sin embargo, las publicaciones de la Gran Logia daban cuenta de críticas indirectas a la politización de la sociedad desde un talante inequívocamente conservador. Mientras en *Occidente* se criticaba a la "politiquería" y la demagogia con un fuerte tono moralista, la *Revista Masónica de Chile*, de circulación interna, denunciaba de modo indirecto el "desorden" social y rechazaba la "pasión revolucionaria" de algunos de sus miembros, contrapuesta al temple y al silencio reflexivo que deberían caracterizar a la institución. "Democracia, elecciones y grupos políticos", *Occidente*, año XXVII, No. 224, marzo de 1971, 1; "Formas democráticas en crisis", *Occidente*, año XXVIII, No. 225, abril de 1971, 1; "El trabajo, única vía de progreso efectivo", *Occidente*, año XXVII, No. 226, mayo de 1971, 1; "Crisis de los grupos políticos", *Occidente*, año XXVII, no. 229, agosto de 1971, 1; y "Miserias de la política", *Occidente*, año XXVIII, No. 23, junio de 1972, 1; "Una decisión dramática" y "El Masón, creador de sí mismo", *Revista Masónica de Chile*, año XLVII, mayo-junio de 1970, 2 y 15-16.

⁸⁹ Cumsille participó de clubes deportivos, el Club de Leones y el cuerpo de bomberos, entre otras organizaciones sociales, antes de integrar las filas del comercio detallista organizado en 1966. Sus hermano también abrazaron la "causa gremial". Uno de ellos fue dirigente de CONUPIA en San Fernando, otro gremialista agrícola en San Vicente de Tagua Tagua y su hermana parte del departamento femenino del comercio detallista. Otra muestra más de la tupida red organizacional y familiar de las clases medias provinciales del Chile de entonces. Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 12 y ss.; "Rafael Cumsille Zapapa", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 6, noviembre-diciembre de 1970, 1-2.

racionalizar nuestra rama"⁹⁰. Las buenas relaciones con el gobierno motivaron a Allende a apoyar una ley que creaba una caja de previsión para comerciantes, una sentida aspiración del gremio.

Camioneros y empleados públicos también aceptaron al nuevo gobierno sin mayores aprehensiones públicas. El tono de las publicaciones e intervenciones de los dirigentes camioneros ante el gobierno era entonces de comprensión y apertura a la negociación. Al igual que en el caso de los comerciantes, durante 1971 se discutió la creación de una caja de previsión para el gremio, para gran satisfacción de sus dirigentes. Ello suavizó las relaciones con líderes de izquierda. *El Camionero*, la revista del gremio, no tenía problemas en reconocer la labor del diputado comunista Luis Guastavino o el Ministro de Economía Pedro Vuskovic en favor del sector, o de publicar fotografías de León Vilarín, el presidente de la Confederación, con Allende, en actitud relajada y amistosa⁹¹. Vilarín, de hecho, sirvió por un breve tiempo como correa de transmisión entre el gobierno y las bases camioneras, aprovechando los canales de comunicación fluidos existentes entonces⁹².

Por otra parte, la retórica revolucionaria y obrerista del gobierno logró ciertos efectos positivos en la ANEF. En diciembre de 1970 su principal órgano de expresión se congratulaba de que "las masas hayan llegado a La Moneda", lo que implicaba que "el empleado debe participar en la dirección de los servicios y tomar parte en forma responsable en la política del desarrollo

⁹⁰ "Discurso pronunciado por el Presidente de la Confederación del Comercio Detallista y la Pequeña Industria de Chile, don Rafael Cumsille Z.", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 8, junio-julio de 1971, 1-2.

⁹¹ *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año I, No. 1, mayo de 1971, 44; "Se nos hizo justicia", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año I, No. 3, julio de 1971, 1. La publicación también saludó con emoción el Premio Nobel de Literatura otorgado en 1971 al poeta comunista Pablo Neruda. "Pablo Neruda. Premio Nobel de Literatura 1971", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año I, No. 7, noviembre de 1971, 23

⁹² Vilarín pidió directamente a los socios del Sindicato de Dueños de Camiones de Santiago "cooperar con el gobierno" y colaborar con los damnificados por los temporales de julio de 1971. "Asamblea General Ordinaria", 10 de julio de 1971, Actas del Directorio del Sindicato General Profesional de Dueños de Camiones de Santiago, Vol. 1969-1980, Archivo Sindicato Profesional de Dueños de Camiones de Santiago (de ahora en adelante ASIPRODUCAM) 77-78.

del país". Con todo, las posiciones al interior de la dirección presidida por el radical Tucapel Jiménez no eran unívocas al respecto, sin que ello fuera aún fuente de conflictos⁹³.

Al interior de los colegios profesionales se dio un fenómeno similar, aunque con ciertos matices. El Consejo General del Colegio de Abogados escuchó con satisfacción a Allende al destacar la importancia del Estado de Derecho y de los colegios profesionales en el ordenamiento social durante la reunión que sostuvieron en La Moneda en enero de 1971⁹⁴. Por su parte, los ingenieros apoyaron sin reservas la nacionalización del cobre decretada por el gobierno. De hecho, el propio Allende solicitó la ayuda del Colegio ante la eventual salida de profesionales extranjeros de las empresas estatizadas. En el Congreso Nacional de Ingenieros celebrado en marzo de 1971 se debatió ampliamente el tema, describiendo la situación anterior del cobre de "imperialismo tecnológico", concepto particularmente afín a la retórica del gobierno⁹⁵. Al mismo tiempo se decidió por amplia mayoría publicar en diarios de circulación nacional una extensa comunicación donde destacaban la intención del gremio de colaborar con el nuevo orden de cosas⁹⁶.

A raíz de las elecciones gremiales de julio de 1971, el Colegio de Ingenieros empezó a ser presidido por el democratacristiano Eduardo Arriagada. En una de sus primeras intervenciones públicas, Arriagada agradeció la actitud del Ejecutivo para asegurar la participación de los ingenieros en diferentes instancias técnicas del Estado. La afinidad con el gobierno se expresó también en la definición social del ingeniero, algo especialmente sensible en

⁹³ Cit. en Candina, *Clase media, estado y sacrificio*, 156.

⁹⁴ "Sesión en 22 de enero de 1971", Actas del Consejo General, 1971. Archivo del Colegio de Abogados (de ahora en adelante ACAb)

⁹⁵ "Habrá que recurrir a ingenieros extranjeros", *La Tercera de la Hora*, 20 de marzo de 1971, 4.

⁹⁶ "El Colegio de Ingenieros de Chile a todos los integrantes de la Orden", *El Mercurio*, 21 de marzo de 1971, 45. Luego del Congreso, representantes del Colegio se reunieron con Max Nollf, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre para concretar la colaboración. Tanto Nollf como los ingenieros expresaron a la prensa conformidad con lo discutido entonces. "Ingenieros buscan su participación en nacionalización del cobre", *La Prensa*, 22 de abril de 1971, 2

un contexto político donde la clase constituía el concepto ordenador de la realidad social por excelencia. En ese sentido, y dando cuenta de cierto ánimo adaptativo a la nueva realidad política, Arriagada definió al ingeniero como un "trabajador intelectual" y un "trabajador de la técnica", alejándolo explícitamente de la imagen del empresario disociado de las necesidades colectivas del país⁹⁷.

Con todo, durante 1971 empezaron a surgir algunos conflictos focalizados, principalmente al interior del Colegio Médico. La dirección de la Orden empezó a resentir los planes del gobierno de crear un Sistema Único de Salud, algo inaceptable para muchos médicos dado que, según temían, los terminaría de convertir en funcionarios, restringiendo el campo de la práctica profesional liberal. Sin embargo, otros médicos venían apoyando desde hace varios años la creación de un sistema de salud estatal más robusto, por lo que apoyaban al gobierno en esta materia⁹⁸. Varios de ellos se organizaron como oposición de izquierda al interior del Colegio. A principios de mayo de 1971 se celebró la Convención de Médicos de la Unidad Popular, con la participación del propio Allende, donde se formularon fuertes críticas al rol del Colegio, calificado de "organismo reaccionario que ha jugado en el terreno y con las reglas del juego de la clase dominante"⁹⁹. En una reunión ampliada organizada por el Colegio en septiembre de ese año, unos 70 médicos izquierdistas se retiraron molestos por la forma en que estaban dirigiendo los debates. De allí se sucedieron acusaciones cruzadas. En una declaración posterior, el grupo

⁹⁷ "Nueva directiva del Colegio de Ingenieros", *La Nación*, 10 de agosto de 1971, 4; "No podemos ser chovinistas en la explotación del cobre", *La Tercera de la Hora*, 16 de agosto de 1971, 5; "Directiva de Ingenieros con Presidente Allende", *El Mercurio*, 13 de agosto de 1971, 22.

⁹⁸ Parte importante de este conflicto se remontaba a la creación del Servicio Nacional de Salud en 1953 y la Ley de Medicina Curativa de 1964, ambas fuertemente resistido por aquellos médicos que preferían el ejercicio independiente de la profesión, sin un interés explícito por lo que entonces se conocía como "medicina social". Carlos Antonio Molina Bustos, *Institucionalidad sanitaria chilena, 1889-1989* (Santiago: LOM Ediciones, 2010) capítulos 7 y 8.

⁹⁹ "Se realizó Primera Convención Nacional de Médicos de Izquierda", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 5, mayo de 1971, 24. En la editorial de ese mismo número, la dirección del Colegio hizo saber su molestia por esas declaraciones y, sobre todo, por no haber sido invitados a esa reunión.

disidente acusó a la dirección de "sumarse a la acción sediciosa y antipatriótica de la ultraderecha", mientras Emilio Villarroel, presidente del Colegio y militante radical, calificó el incidente como de una inaceptable "maniobra de médicos politizados"¹⁰⁰.

Por otro lado, la dirección del Colegio empezó a resentir lo que consideraban una "campaña de desprestigio" contra la profesión médica, que se expresaba tanto en ataques desde la prensa como en medidas administrativas¹⁰¹. El discurso institucional de la Orden insistió en que los médicos no eran unos privilegiados, dadas las estrecheces económicas que deben vivir para ejercer sus funciones en el ámbito público. Ante declaraciones del Ministro de Salud sobre la necesidad de un compromiso social mayor de los médicos en virtud de la "cuna de oro" en la que habrían nacido, la revista gremial señalaba que por entonces los estudiantes de medicina "ya no son de clase media, como eran antes, sino de clase baja"¹⁰².

A pesar de que Allende se esforzaba por mantener una relación cordial con los colegios¹⁰³, la prensa de izquierda y de oposición comenzó a darle cabida a críticas y comentarios que alimentaron ciertas ansiedades entre los profesionales. En marzo de 1971, una lista unificada de militantes de izquierda se presentó a las elecciones del Consejo General del Colegio de

¹⁰⁰ "No aceptaron actitud antipatriótica", *La Nación*, 4 de septiembre de 1971, 4; "Grupos antipatriotas se escudan en Colegio Médico", *La Nación*, 6 de septiembre de 1971, 10; "Maniobras de médicos politizados", *La Prensa*, 8 de septiembre de 1971, 5. A raíz de este incidente, Villarroel se quejó amargamente de la injusticia de las acusaciones de los médicos de izquierda, considerando su militancia radical y el hecho de que había colaborado a la elección de Allende. "Trabajé por gobierno UP y ahora me acusan de momio", *La Tercera de la Hora*, 10 de septiembre de 1971, 4.

¹⁰¹ Ya a principios de 1971 el Colegio Médico empezó a denunciar remociones de profesionales de la salud por motivos políticos en hospitales y consultorios. "Colegio Médico contra remociones arbitrarias", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 2, febrero de 1971, 5.

¹⁰² El Ministro se vio obligado a aclarar sus dichos, dando cuenta que él también asumía una identidad social "burguesa", a pesar de las dificultades materiales que habría vivido en su juventud. "Mis padres no tenían medios económicos, y de alguna manera lográbamos salir adelante, porque había cultura y ayuda intra familiar. A la gente del pueblo se le mueren los niños por falta de cultura. La calidad cultural y social, más que el nivel económico, nos exige a las clases burguesas tener más responsabilidad moral para afrontar estos problemas". "'Estamos construyendo una futura sociedad socialista'. Carta del Ministro de Salud al Presidente del Colegio Médico", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 4, abril de 1971, 8.

¹⁰³ Particularmente con el Colegio Médico, el más díscolo hasta el momento, y con el que tenía mayor afinidad. Allende, de hecho, rechazó los "agravios" recibidos por los médicos, y ofreció mediar con la FENATS para limar asperezas. "Médicos hablaron con el presidente", *La Tercera de la Hora*, 7 de octubre de 1971, 6; "Editorial", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 10, octubre de 1971, 5.

Abogados¹⁰⁴. Para el diario comunista *El Siglo*, ese colegio era "uno de los bastiones de la reacción chilena"¹⁰⁵, por lo que era fundamental obtener representación en su seno. Sin embargo, para felicidad de la prensa de oposición, ninguno de los miembros de esa lista fue electo, a pesar de recibir en conjunto el 31% de los votos¹⁰⁶. La prensa de izquierda reclamó airada ante lo que consideraban un "vetusto sistema electoral" que premiaba en exceso a las mayorías, mientras que el demócratacristiano *La Prensa* interpretaba el hecho como comprobación de la desconfianza de los abogados ante el compromiso con la legalidad y la democracia por parte del gobierno¹⁰⁷. De allí en más, empezaron a ser recurrentes denuncias desde la izquierda contra la dirección del Colegio, encabezada por el también demócratacristiano Alejandro Silva Bascuñán, acusando entre otras cosas la intromisión de partidos políticos de oposición para "crear problemas al Gobierno popular" y "poner su granito de arena en la maquinación de la minoría interesada en detener la historia en Chile"¹⁰⁸

Al mismo tiempo, desde la prensa de oposición se empezó a acusar un "desprecio por la ingeniería" a raíz de nombramientos de autoridades en el área sin títulos profesionales. El desplazamiento de los profesionales de sus lugares tradicionales de trabajo en el Estado, en esa lógica, era contradictorio con las aspiraciones populares, quienes deseaban que sus hijos fueran a la Universidad. Ello no se podía explicar, agregaban, por una lucha política contra la derecha, ya

¹⁰⁴ Los candidatos de la izquierda eran abogados de prestigio, como los radicales Jacobo Schaulson, Humberto Trucco y Olaf Liendo, además de independientes y militantes de otros partidos como Eduardo Novoa Monreal, Luis Fernando Luengo, Héctor Massardo y Fernando Ostornol. "Abogados están de elecciones", *La Tercera de la Hora*, 31 de marzo de 1971, 10.

¹⁰⁵ "Contubernio DC-PN en elecciones Colegio Abogados", *El Siglo*, 2 de abril de 1971, 3.

¹⁰⁶ "Por capotera perdieron abogados UP", *Tribuna*, 16 de abril de 1971, 3;.

¹⁰⁷ "Debate público sobre el Colegio de Abogados", *El Siglo*, 22 de abril de 1971, 2; "El ejemplo del Colegio de Abogados", *La Prensa*, 17 de abril de 1971, 3.

¹⁰⁸ "Tinterillada política en el Colegio de Abogados", *El Siglo*, 12 de septiembre de 1971, 2.

que "la mayoría de los ingenieros chilenos sale de todas las capas de la población, especialmente de la clase media chilena y cada día más de los sectores populares"¹⁰⁹.

A pesar de estas expresiones de preocupación y desavenencias, lo cierto es que la situación general no sufrió mayores sobresaltos. Las comunicaciones entre el gobierno y los gremios de clase media eran fluidas, y las negociaciones sobre medidas sectoriales llegaban en algunas ocasiones a resultados concretos. Allende, de hecho, aún tenía un considerable margen de acción con estos grupos, como lo demostraron las reuniones sostenidas con el Colegio Médico en noviembre de 1971, destinada explícitamente a restablecer confianzas¹¹⁰. Esta situación, al mismo tiempo, evidenciaba un grado considerable de autonomía de los grupos identificados con la clase media tanto de los partidos políticos de oposición como también de los gremios empresariales, quienes ya esgrimían un discurso más duro contra el gobierno¹¹¹. Era evidente entonces que el patrón de relación entre sociedad civil organizada y Estado del "Chile mesocrático", aún no se veía fundamentalmente alterado. Ello empezaría a cambiar hacia finales de 1971.

2.- El quiebre

La estrategia económica del gobierno de la Unidad Popular contemplaba una rápida nacionalización de las riquezas básicas del país, de la banca, de las industrias monopólicas y del

¹⁰⁹ "El caso de los ingenieros", *La Prensa*, 14 de marzo de 1971, 3.

¹¹⁰ La dirección del Colegio también reconocía los intentos desde la prensa de izquierda por apaciguar los ánimos. El Dr. Alfonso González Dagnino señaló en columna publicada en el diario comunista *El Siglo* que "los profesionales y los técnicos no son enemigos de los trabajadores, no son 'lacayos de la burguesía' como a menudo se dice. Son trabajadores de la cultura y sus intereses profundos no son contradictorios con los intereses de los trabajadores ni de la revolución, Es necesario tratarlos con afecto, respeto y facilitarles su trabajo, haciéndolo más grato y fácil". "Editorial", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIII, No. 1, noviembre de 1971, 5.

¹¹¹ Ya en enero de 1971, la Confederación de Producción y Comercio -que agrupaba a los gremios empresariales más poderosos del país- había asumido una postura crítica ante lo que consideraban era el deterioro del comercio y la amenaza constante a la propiedad privada. Campero, *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983*, 48.

comercio exterior, sumado a un fuerte incremento del ingreso de los salarios de los trabajadores para estimular el consumo y la utilización de la capacidad ociosa de la industria. Durante el primer año pareció dar buenos resultados. El producto interno creció en un 7,7%, la desocupación bajó a un 3,8% y la redistribución del ingreso se modificó de modo sustancial en favor de los asalariados. En parte como consecuencia de ello, en las elecciones municipales de abril de 1971 la Unidad Popular incrementó su caudal electoral a cerca del 50%, de lo que puede deducirse que parte importante de los sectores medios le dieron su apoyo¹¹². Sin embargo, ya para mediados de ese año comenzaron a notarse los primeros problemas. El incremento del consumo popular no estuvo aparejado por una expansión productiva, causando las primeras expresiones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Ello a su vez ejerció presiones inflacionarias importantes, a la vez que las reservas del gobierno caían vertiginosamente¹¹³.

El deterioro de la situación económica estuvo acompañada de una creciente polarización política, tanto en el sistema de partidos y el Estado como en la propia cotidianeidad de los chilenos. Todo ello afectó de distintas maneras a los grupos sociales identificados con la clase media, terminando hacia mediados de 1972 en un quiebre generalizado con el gobierno. Esquemáticamente, podría decirse que el quiebre entre la clase media organizada y el gobierno de Allende estuvo dado, por una parte, por el desabastecimiento y las disputas que se dieron en torno él y, por otra parte, por la defensa de lo que entonces se denominó "dignidad profesional".

Los inicios del desabastecimiento enfriaron las relaciones entre los comerciantes detallistas y el Gobierno. En agosto de 1971 enviaron una carta al entonces Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, denunciando la situación y rechazando cualquier insinuación de

¹¹² Peter Winn, *La revolución chilena* (Santiago: LOM Ediciones, 2013), 100.

¹¹³ Sergio Bitar, *Transición, socialismo y democracia: la experiencia chilena* (México: Siglo Veintiuno Editores, 1979), 67–127.

acaparamiento por parte de comerciantes¹¹⁴. Semanas más tarde, denunciaban en la prensa el empeoramiento de la situación. Conservas, fósforos, productos de línea blanca y textiles escaseaban. Parte de ello se debía, según los comerciantes, a que las empresas estatizadas exigían el pago al contado de la mercadería, cuando antes se hacía a 90 o 120 días¹¹⁵. El propio Vuskovic tuvo que acudir a la sede del Comercio Detallista a calmar los ánimos, reconociendo que la escasez de productos se debía al mayor poder adquisitivo de la población y no a los comerciantes¹¹⁶.

El gobierno, por una parte, intentó convencer a comerciantes, pequeños industriales y artesanos de la importancia del "área de propiedad privada" para el proceso revolucionario, dando garantías no sólo de su continuidad en el futuro, sino de la implementación de políticas de capacitación, crediticias e impositivas favorables para ese sector¹¹⁷. Por otra parte, sin embargo, el Ejecutivo y sus bases sociales se organizaron para endurecer el control sobre los precios, la distribución y la venta de productos. Dado que el desabastecimiento de productos de primera necesidad golpeaba especialmente fuerte a los sectores populares, fue desde allí que, junto a autoridades del gobierno, se comenzó a diseñar una posible solución al problema. A partir de agosto comenzaron a aparecer las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), unidades locales con patrocinio estatal para vigilar la venta al detalle y denunciar todo intento de acaparamiento. En un primer momento, Rafael Cumsille aprobó la idea, pensando en organismos fiscalizadores provinciales dirigidos por el Estado, pero cuando el tejido organizacional llegó a barrios y

¹¹⁴ "Carta abierta al señor Ministro de Economía", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 9, agosto-septiembre de 1971, s/p

¹¹⁵ "Desabastecimiento de telas populares denuncia comercio", *La Tercera de la Hora*, 28 de octubre de 1971, 6.

¹¹⁶ "Comerciantes plantearon inquietudes a Vuskovic", *La Tercera de la Hora*, 28 de octubre de 1971, 6. La visita de Vuskovic, de hecho, fue la primera de un Ministro de Estado a la sede de la Confederación en calle Phillips, en el centro de la capital. Ello era expresión de la relevancia social y política que había adquirido la organización por entonces. "Ministro de Economía en la Confederación", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 10, noviembre 1971-enero de 1972, s/p

¹¹⁷ Ello se hizo a través de inserciones en periódicos donde se explicaban los alcances del proyecto económico de la Unidad Popular. "La pequeña industria y el gobierno popular", *La Tercera de la Hora*, 31 de octubre de 1971, 21.

comunas, y a denunciar públicamente a comerciantes acaparadores, la Confederación se opuso¹¹⁸. Con todo, las JAP se multiplicaron rápidamente. En la provincia de Cautín, por ejemplo, ya para febrero de 1972 se contaba con una amplia red con participación de organizaciones sociales de base e incluso algunos comerciantes. La intendencia provincial jugó un rol central en esta tarea al coordinar recursos y movilización pública para agilizar la labor fiscalizadora¹¹⁹.

La Confederación de Comercio Detallista comenzó a denunciar sistemáticamente a las JAP por "abusos" y acusaciones falsas contra comerciantes. Cuando la Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO)¹²⁰, el organismo público encargado del control de precios, empezó a reclutar "inspectores ad-honorem" para aumentar su capacidad fiscalizadora, los comerciantes incrementaron sus reclamos ante el gobierno y en la prensa. En lo fundamental, sus quejas hicieron alusión a la falta de preparación técnica de los nuevos inspectores, muchos de ellos reclutados desde las mismas JAP y las bases de los partidos de izquierda en sectores populares¹²¹, antes que al control de precios en sí. Era, de hecho, la suplantación de funciones estatales por parte de obreros y pobladores lo que le resultaba especialmente odiosa a la Confederación. De allí, en esa óptica, sólo podía salir arbitrariedad, extorsión y perjuicio económico¹²².

Para mediados de 1972 las relaciones entre la Confederación y el Gobierno ya estaban rotas. El 6 de junio, el día del comercio, en vez de los tradicionales saludos de las autoridades,

¹¹⁸ "Comercio rechaza control de juntas de abastecimientos", *La Tercera de la Hora*, 31 de octubre de 1971, 11; "Las JAP en la balanza", *Ercilla*, No. 1921, 10 al 16 de mayo de 1972, 19-21.

¹¹⁹ Carta de Héctor Riquelme Salvo, Director Regional de ODEPLAN, a Gastón Lobos Barrientos, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 25 de febrero de 1972. Intendencia de Cautín, vol. 357, Archivo Regional de la Araucanía (de ahora en adelante ARA)

¹²⁰ La DIRINCO tenía ya una larga historia, que se remonta a la fundación del Comisariato de Subsistencias y Precios en 1932. El Estado del "Chile mesocrático" basaba parte de su legitimidad en el control de precios de consumo popular. Henríquez Vásquez, *En "Estado Sólido"* capítulo 6. Volveré sobre el tema del Estado y el consumo en el capítulo 4.

¹²¹ En Cautín, por ejemplo, el Comité Político Provincial -integrado por representantes de los partidos de la Unidad Popular- acordó nombrar dos personas por partidos para ejercer como inspectores ad-honorem en las JAP de la provincia. "Comité Político Provincial Unidad Popular, Cautín. Reunión Extraordinaria en la Intendencia, 2 de marzo de 1972", Intendencia de Cautín, vol. 335, ARA.

¹²² "Comerciantes rechazan a inspectores ad-honorem", *La Tercera de la Hora*, 26 de febrero de 1972, 5; "No somos los culpables del desabastecimiento", *La Tercera de la Hora*, 13 de marzo de 1972, 5.

los comerciantes recibieron varias multas por cerrar los locales comerciales a las 13 horas, algo que llegó a afectar al propio Cumsille en su local en San Fernando. Todo ello crispó aún más los ánimos, ayudando a radicalizar el discurso institucional de la Confederación. Mientras Cumsille llamaba ese día a pelear, bajo la inspiración de Portales, por la patria, la libertad y la democracia, los comerciantes describían en la prensa a las JAP como fuentes de corrupción y matonaje avalados por el gobierno que, por añadidura, no estaban sino agravando el problema del desabastecimiento¹²³.

La escasez de bienes en el mercado no se limitó a los de primera necesidad. La prensa de oposición empezó a denunciar los problemas en otras áreas de la economía que afectaban directamente a la clase media. Entre otras cosas, señalaban que las políticas habitacionales centradas en el mundo popular habían dejado sin casas a las "capas medias", algo que se habría agravado con la "anarquía laboral" y la fijación de precios que desincentivaría la inversión privada en el sector. Al mismo tiempo empezaron a escasear los televisores, otro símbolo de status mesocrático. Incluso algunas tiendas del centro de la capital tuvieron que enfrentar la furia de las "masas medias", como las bautizó la revista *Qué Pasa*¹²⁴. Pero quizás lo que causó mayor malestar fueron las restricciones a la importación y compra de automóviles, algo especialmente sensible para los profesionales. Las tasaciones oficiales crecieron más de 10 veces, encareciendo con ello las patentes de circulación, y dejando sin posibilidades a quienes se habían inscrito para adquirir uno. A finales de 1972, de hecho, se organizó un "Comité contra las alzas" de automóviles, surgido espontáneamente y sin carácter político, según señaló su líder, Enrique Salgado, en un concurrido acto en el teatro Roma de la capital¹²⁵. El Colegio Médico se apresuró en apoyar la iniciativa, argumentando que para ellos el automóvil era un instrumento de trabajo,

¹²³ Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 95; "El comercio acusa", *Qué Pasa*, No. 61, 15 de junio de 1972, 14-15.

¹²⁴ "Los símbolos del status burgués en peligro", *Qué Pasa*, No. 45, semana del 24 de febrero de 1972, 7-9.

¹²⁵ "La clase media 'a dedo', *Qué Pasa*, No. 86, semana del 7 de diciembre de 1972, 15.

y no un lujo. Incluso la Confederación de Colegios Profesionales, a la que ya me referiré, dio a conocer una declaración pública sobre el asunto, expresando su malestar "por esta nueva y significativa persecución que se hace de los profesionales y de la clase media"¹²⁶.

Si hubo un momento en que el quiebre entre organizaciones de clase media y el Gobierno empezó a hacerse evidente fue el mes de diciembre de 1971. Por entonces, Fidel Castro recorría Chile en una larga visita de Estado que polarizaría aún más el ambiente político. Esa visita, más el desabastecimiento real e imaginario, por otro lado, activaron a grupos de mujeres conservadoras y de clase alta que, con apoyo de partidos políticos de oposición, organizaron un gran movimiento inter-clasista que desembocó en la "marcha de las cacerolas vacías" el 1ero de diciembre¹²⁷. La apelación al género y al conjunto de prácticas y valores asociados a la mujer desde la óptica conservadora era una apuesta por rechazar explícitamente las consideraciones de clase y legitimar el movimiento en tanto expresión de las dimensiones más íntimas de la nación. De allí surgió la organización "Poder Femenino", que se convertiría al poco andar en un puntal del bloque social contrarrevolucionario¹²⁸.

Al día siguiente de la marcha de las cacerolas, se llevó a cabo un evento que reflejaba los cambios experimentados por algunos grupos de clase media: el "Encuentro del Área Privada" en el Teatro Caupolicán. Sus principales convocantes eran los gremios del empresariado nucleados en la Confederación de Producción y Comercio (CPC)¹²⁹ -representado en gran medida por el

¹²⁶ "Pago de patentes rechazan los profesionales", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV No. 3, marzo de 1973, 14.

¹²⁷ Para un relato detallado de esta coyuntura, véase Joaquín Fernandois, *La revolución inconclusa: la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular* (Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013), 519–36.

¹²⁸ Margaret Power, *Right-Wing Women in Chile: Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973* (University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2002), capítulos 5-8.

¹²⁹ La CPC, fundada en 1935, reunía a los principales gremios del gran empresariado, muchos de los cuales existían desde el siglo XIX: Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Fabril, Sociedad Nacional de Minería, Cámara Central de Comercio y Cámara Chilena de la Construcción. Manuel Montt Balmaceda, *Organizaciones de empleadores de Chile: reseñas históricas* (Santiago: DERTO, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, 1977); Para un análisis sobre los vínculos entre los gremios empresariales y la derecha

presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), Orlando Sáenz- junto a los gremios de transportes, comerciantes detallistas y CONUPIA¹³⁰. Las comisiones de trabajo anunciadas reflejaban las principales ansiedades compartidas por grandes y pequeños empresarios: "desabastecimiento", "disciplina en el trabajo", "anarquía sindical", "violencia", "política de precios". Al mismo tiempo, se planteaba la dictación de un "estatuto del área privada" que clarificara los alcances del área económica estatizada o de "propiedad social". De allí que la convocatoria fuera amplia, haciendo alusiones genéricas al "hombre de trabajo", "independiente" y "apolítico"¹³¹.

El encuentro repletó los 7.000 asientos del Teatro, y según sus organizadores dejó a unas 5.000 personas en la calle. El comercio había acordado cerrar sus puertas a las 17 horas ese día, asegurando con ello una gran presencia de sus bases en el Teatro. Cumsille, uno de los oradores de la jornada, enfatizó el carácter apolítico y "gremial" de esa reunión, representándola así como una expresión de genuina preocupación ante la situación económica antes que un esfuerzo concertado por oponerse al gobierno. Al mismo tiempo, aprovechó el micrófono para defender el prestigio de los comerciantes, algo especialmente importante en un momento en que muchos de ellos estaban siendo cuestionados por prácticas de acaparamiento y venta de productos en el mercado negro¹³². La responsabilidad de esos ataques a la honra profesional, agregó, era de "activistas y agitadores" que "envenenan la mente de la dueña de casa para distraer la verdad de

política, véase Sofía Correa, *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX* (Santiago: Editorial Sudamericana, 2005), 32–38.

¹³⁰ También asistieron algunas organizaciones profesionales. El Consejo General del Colegio de Abogados, luego de un largo debate, acordó asistir al "Encuentro" en calidad de "observadores", representados en su presidente, Alejandro Silva Bascuñán. Sesión en 22 de noviembre de 1971, Actas del Consejo General, 1971, 7. ACAB.

¹³¹ "El área privada se reúne", *La Tercera de la Hora*, 22 de octubre de 1971, 1; "Únase a nosotros", *La Tercera de la Hora*, 25 de noviembre de 1971, 11; "Reunión del área privada es compromiso de honor", *La Tercera de la Hora*, 28 de noviembre de 1971, 4; "¿Qué es el área privada?", *La Tercera de la Hora*, 28 de noviembre de 1971, 11; "¡Atención al comercio e industrias del país!", *La Tercera de la Hora*, 28 de noviembre de 1971, 13.

¹³² "El Área Privada dijo presente", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IV, No. 10, noviembre 1971-enero de 1972, s/p.

los problemas". "¡No! dueñas de casa -agregaba-, no escuchen más a los demagogos... los comerciantes somos hombres de trabajo que estamos aportando con el progreso de nuestra Patria"¹³³. Por otro lado, en la revista gremial del comercio se dejaba explícitamente establecido cuáles eran las fuerzas sociales que se habían movilizado, haciendo alusión explícita a la clase media como bandera de lucha política y gremial. El "Encuentro del Área Privada" habría significado "la irrupción violenta en la vía pública oficial, del poderoso gremio de los comerciantes, de una clase media inmensamente mayoritaria en Chile, de una masa independiente enorme, que se ha formado en el trabajo, que vive de su esfuerzo personal"¹³⁴.

Un par de semanas más tarde las organizaciones convocantes anunciaron la formación del Frente Nacional del Área Privada (FRENAP), extendiéndose rápidamente hacia las provincias. En Concepción, el presidente de la nueva agrupación, Jorge Cristi, señaló que "por naturaleza defendemos y defenderemos a la empresa privada ante una economía de corte socialista que aún no tenemos clara"¹³⁵. En Temuco, mientras tanto, la intendencia estaba atenta a los movimientos del FRENAP local. El subprefecto Carlos Aranda informaba que unas 55 personas se habían reunido en un auditorio de la ciudad, dirigidos por Alejandro Muñoz, el presidente de la Cámara de Comercio Minorista de la zona. También asistieron representantes locales de la CPC, taxistas y transportistas. Muñoz señaló en la oportunidad que todo el comercio, la industria y el

¹³³ Discurso del Presidente Nacional Don Rafael Cumsille en el Teatro Caupolicán", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IV, No. 10, noviembre 1971-enero de 1972, s/p. Luego de la alocución, Cumsille fue fuertemente ovacionado, siendo levantado en andas por los asistentes, reflejando tanto la radicalización de sus bases como la popularidad creciente del propio Cumsille. Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 79.

¹³⁴ Enrique Neiman, "Los parias se rebelan", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IV, No. 10, noviembre 1971-enero de 1972, s/p.

¹³⁵ "Dirigentes FRENAP en Concepción. Defenderemos por todos los medios a la empresa privada", *La Tercera de la Hora*, 23 de enero de 1972, 14.

transporte caerían en el Área de Propiedad Social si es que los gremios no se organizaban para resistir¹³⁶.

El FRENAP organizó una campaña propagandística a través de la prensa para advertir a la población de los peligros de la estatización. A pesar de la presencia de los grandes gremios empresariales -quienes ya esgrimían un discurso radicalizado e ideologizado contra el gobierno de la Unidad Popular- el grueso de los argumentos estuvo puesto de uno u otro modo en la clase media. El almacenero, la dueña de casa, el pequeño industrial y los empleados, entre otros, estarían sufriendo las consecuencias de la ineficiencia estatista y la arbitrariedad de las autoridades, amenazando con ello el futuro de la propia nación¹³⁷. Las referencias explícitas e implícitas a la clase media buscaban dar cuenta de una inconformidad a nivel nacional con el estado de cosas, evitando así relacionar al gran empresariado con aquellos alegatos. Ello también pudo verificarse en las primeras protestas convocadas por el FRENAP en marzo y abril de 1972, ocasiones en las cuales sus principales voceros apelaron al "hombre medio" en tanto representante de una nación amenazada. Comenzaba entonces una transición discursiva desde la noción del "hombre de trabajo" que negocia con el Estado al "patriota" que se opone a un intento de inspiración foránea por negar las bases de la sociedad¹³⁸.

Un fenómeno similar y simultáneo empezó a verificarse en el mundo de los profesionales, inspirados por eventos que se sucedían unos a otros con rapidez. Todos ellos, de algún modo,

¹³⁶ Dirección General de Investigaciones, "Constitución FRENAP Cautín", Informe No. 11, Temuco, 20 de abril de 1972. Intendencia de Cautín, vol. 397, ARA.

¹³⁷ "El almacenero no tiene la culpa", *La Tercera de la Hora*, 18 de mayo de 1972, 7; "La dueña de casa no tiene la culpa", *La Tercera de la Hora*, 11 de abril de 1972, 7; "¿Es área social... o monopolio estatal?", *La Tercera de la Hora*, 26 de febrero de 1972, 14; "Esto le cuesta al pueblo 540.000 citronetas al año", *La Tercera de la Hora*, 13 de marzo de 1972, 7. La estrategia de centrar las demandas en la clase media por parte de los grandes gremios empresariales, por cierto, ya había sido ensayada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) al denunciar la situación de los "pequeños y medianos agricultores". "La SNA denuncia grave situación en los fundos", *La Tercera de la Hora*, 8 de octubre de 1971, 7.

¹³⁸ Por cierto, los gremios empresariales estaban mucho más avanzados en la articulación de un discurso radicalmente opositor a la UP. Ya en mayo de 1972, Orlando Sáez de la SOFOFA calificaba de "obsoleto" al gobierno, planteando sustituir la democracia por un sistema nacionalista y autoritario liderado por un "caudillo enigmático". Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 63-64.

tuvieron que ver con amenazas al status social de los profesional y al respeto a sus funciones en el ámbito laboral. Los abogados, por ejemplo, se unieron tempranamente a los médicos en la denuncia de "atropellos" a colegas, como fue el caso de 35 colegiados que denunciaron acosos y amenazas en el Banco del Estado y denunciada por el Consejo General al propio Allende¹³⁹. Sin embargo, fue un evento en Melipilla, cerca de la capital, que catalizó la indignación de la dirección y las bases del Colegio. En mayo de 1972, un nutrido grupo de manifestantes irrumpió en los tribunales de esa ciudad para exigir la liberación de campesinos acusados de usurpación del vecino fundo "Millahuín". El juez del tribunal tuvo que atrincherarse en su oficina, sin protección policial. Según denunciaba el Colegio, la llegada del Intendente de Santiago, Alfredo Joignant, acompañado del subsecretario de Justicia José Antonio Viera-Gallo, no ayudó a resolver la situación dada la desidia que habrían mostrado ambos funcionarios por defender las prerrogativas del Poder Judicial¹⁴⁰. En la reunión general ordinaria del Colegio, a la que asistieron más de 150 abogados, se aprobó un voto repudiando los sucesos de Melipilla, a la vez que se exigían sanciones contra el también abogado Viera-Gallo. Algunos grupos de abogados fueron más lejos que el Consejo General, llamando a una movilización general en defensa del prestigio de la profesión, evidenciando que hasta cierto punto el proceso de radicalización era más acelerado en las bases que en las dirigencias. En los meses siguientes, de hecho, empezaron a llegar a Santiago quejas y denuncias de diferentes consejos provinciales, exigiendo medidas drásticas¹⁴¹.

¹³⁹ "Sesión en 6 de septiembre de 1971", Actas del Consejo General, 1971, ACAB, 6.

¹⁴⁰ "Sesión extraordinaria de 9 de mayo de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAB 1-3

¹⁴¹ "Sesión en 15 de mayo de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAB, 6. Ello también se reflejaba en declaraciones dirigentes provinciales. Por ejemplo, Hugo Tapia Arqueros, miembros del Consejo Regional de Concepción, señaló: "No seremos nosotros, los abogados, los que nos arrodillaremos ante ningún totalitarismo; y porque somos chilenos y latinos, nunca aceptaremos de buen grado tiranías de ninguna especie porque no tenemos vocación de esclavos". "Los abogados no nos arrodillaremos ante ningún totalitarismo", *El Mercurio*, 23 de septiembre de 1972, 7.

El Colegio de Abogados empezó desde ese momento a orientar su discurso no sólo a la defensa de la dignidad profesional, sino también a la del Estado de Derecho como un todo, dado que -según denunciaban- se encontraba en amenaza constante por parte del Gobierno. Silva Bascuñán, su presidente, fue reiterativo en el tema, tanto en reuniones con abogados¹⁴² como en entrevistas en la prensa¹⁴³. La defensa del "Estado de Derecho" implicaba un repudio al uso mañoso de la ley -los llamados "resquicios legales" usados por el gobierno para avanzar en su programa- como también la situación en la que se encontraban los tribunales de justicia. Uno de los aspectos que resultaba más odioso para la dirección de la orden eran las acusaciones desde la prensa de izquierda y algunos funcionarios de gobierno de estar favoreciendo una "justicia de clase" en desmedro del proletariado. Silva Bascuñán replicaba que esa noción era contradictoria con una visión imparcial y operativa del derecho y que, más aún, era el propio gobierno el que estaba fomentando este tipo de justicia al atacar y desprestigiar al Poder Judicial.

Los ingenieros, por su parte, resintieron fuertemente la labor de interventores nombrados por el gobierno en las empresas recientemente estatizadas. Ello, por cierto, afectaba a una capa bastante más amplia de profesionales y técnicos del área industrial. Para 1972, las tensiones al interior de las empresas integradas al área social como producto de la movilización social de los obreros iban en rápido aumento. En las grandes fábricas como Ex-Yarur y Sindelen los empleados resentían su equiparación a los obreros al interior de la jerarquía laboral¹⁴⁴. Desde una sensibilidad de izquierda, los empleados técnicos y profesionales empezaron a ser vistos como

¹⁴² El discurso de Silva Bascuñán en la Reunión General Ordinaria de mayo de 1972 estuvo casi completamente centrado en este asunto. *Gaceta Forense. Publicación del Consejo General del Colegio de Abogados*, Año XI, No. 17, 1972, 7.

¹⁴³ "Campaña contra la justicia es responsabilidad del Ejecutivo", *La Segunda*, 12 de marzo de 1972, 8; "La vigencia del derecho: un valor que defender" (Entrevista a Alejandro Silva Bascuñán), *Portada*, No. 32, 20 de julio de 1972, 37-41; Alejandro Silva Bascuñán, "Valor permanente del derecho y de la ley", *El Mercurio*, 12 de enero de 1972, 3; "Abogados denuncian descrédito de la ley", *El Mercurio*, 1ero de octubre de 1972, 36

¹⁴⁴ Peter Winn, *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism* (New York: Oxford University Press, 1986), 290 y ss.; "Profesionales de Sindelen afectados por ocupación", *La Tercera de la Hora*, 18 de mayo de 1972, 2.

un peligro para la productividad de las industrias. Esta situación incluso fue representada en literatura de divulgación masiva. En 1972, Guillermo Atias publicó en la editorial estatal Quimantú "Y corría el billete", novela en la que relataba los intentos del "Turco" y "Don Germán" para sabotear la producción de una gran empresa textil que antes administraran. Para ello recurren a sobornos y soplónaje de obreros, algo que no sale del todo bien en último término. En el mundo de los empleados, sin embargo, consiguen una colaboración más entusiasta, muchas veces motivados por principios ideológicos contrarrevolucionarios y no siempre por el dinero de los ex "patrones"¹⁴⁵.

Fueron precisamente problemas al interior de una fábrica estatizada lo que prendió la chispa. El ingeniero Enrique Barriga denunció ante el Colegio al interventor de MADEMSA Raimundo Beca por su "comportamiento altamente censurable" en su puesto que, entre otras cosas, había significado la salida del propio Barriga de la gerencia general. Cuando la denuncia se hizo pública, un nutrido grupo de ingenieros de izquierda salió en defensa de Beca y acusaban a Barriga de defender intereses "de minorías privilegiadas". Eduardo Arriagada, el presidente de la Orden intentó calmar la situación, señalando que se había iniciado una investigación según los procedimientos regulares. Ello, sin embargo, no quitó que el propio Arriagada reclamara públicamente por la situación laboral de los ingenieros y la multiplicación de decisiones arbitrarias por autoridades de gobierno¹⁴⁶.

En el Colegio Médico el ambiente estaba caldeado desde hace varios meses. Un evento en particular complicó aún más las cosas. En Fresia, en el sur del país, el director del hospital local, Alejandro Casals, fue duramente golpeado por un grupo de campesinos cuando éste se negó a entregar un informe de autopsia que debía remitir a tribunales. Para la directiva, la

¹⁴⁵ Guillermo Atias, ...*Y corría el billete. Novela tabloide* (Santiago: Quimantú, 1972), *passim*.

¹⁴⁶ "Comentarios a una carta pública" y "Amparo al Ingeniero Enrique Barriga", *Ingenieros, Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 60, año XII, junio-julio 1972, 4-5 y 14.

agresión a Casals era una muestra más del quiebre de las jerarquías laborales al interior de los hospitales y responsabilizó al gobierno de ello¹⁴⁷. Como consecuencia, el Consejo Regional Santiago del Colegio organizó un acto público en un teatro de la capital para solidarizar con Casals. En la ocasión, Edgardo Cruz, secretario general de dicho consejo, se refirió con duros epítetos a Allende, lo que obligó al Ministro de Salud y otras autoridades, asistentes a la reunión, a retirarse de ella, agravando aún más las diferencias¹⁴⁸.

La dirección del Colegio respondió a la radicalización de las bases médicas. En mayo de 1972, el Consejo General decretó un día de paro en protesta por lo que consideraban era la multiplicación de "atropellos reiterados a todo el personal que trabaja en el Sector Salud, por la campaña de injurias y por el orquestado afán de desprestigio al Colegio Médico". El llamado público al paro finalizaba señalando: "¡Basta de vejámenes, atropellos, insultos y mentiras! No paramos ni por dinero ni por política. Sólo pedimos trabajar en forma digna y eficaz, con respeto y seguridad física"¹⁴⁹. Para resistirse a la medida, los médicos de izquierda se reunieron en un teatro de la capital, repudiando el "paro político", a la vez que anunciaban un "día popular de la salud" para contrarrestar el ausentismo anunciado para el 9 de mayo¹⁵⁰. El Colegio, finalmente, decidió suspender el paro ante los temporales que habían dejado varios miles de damnificados en la zona central del país¹⁵¹.

¹⁴⁷ "Médicos cansados de agresiones", *Las Últimas Noticias*, 4 de mayo de 1972, 4.

¹⁴⁸ "Ofensas al Presidente Allende en sesión médica", *La Nación*, 29 de abril de 1972, 1.

¹⁴⁹ "La protesta médica", *El Mercurio*, 7 de mayo de 1972, 41. Entre las muchas situaciones no toleradas por la dirección del Colegio, se mencionaba el intento del Director General de Salud de imponer como ideal médico a Ernesto "Che" Guevara, cuya imagen habría reemplazado en su oficina a la del propio Presidente de la República.

¹⁵⁰ "No al paro político dijeron los médicos de izquierda", *Puro Chile*, 4 de mayo de 1972, 8; "Paro es netamente gremial y de protesta", *El Mercurio*, 5 de mayo de 1972, 4; "Hoy: 'Día popular de la salud'. Atención masiva a damnificados", *El Siglo*, 9 de mayo de 1972, 8.

¹⁵¹ Esa fue, al menos, la versión oficial entregada por el Colegio. "Bases respaldan decisión de postergar el paro médico", *El Mercurio*, 9 de mayo de 1972, 17. Por su parte, la prensa de izquierda señaló que la verdadera razón era que "las fuerzas progresistas tenían quebrado el paro" incluso antes de iniciarse. "Suspensión del paro médico: triunfo de las fuerzas de izquierda", *El Siglo*, 9 de mayo de 1972, 8.

Los casos de Viera-Gallo, Beca y Casals dieron visibilidad a la activación política de los colegios profesionales contra el gobierno de la Unidad Popular. De allí que por entonces comenzara a adquirir notoriedad pública dos organizaciones de profesionales. La primera fue creada al calor de la polarización de 1972, y fue denominada Confederación Única de Profesionales de Chile (CUPROCh), con Luis Inda a la cabeza, que a los pocos meses decía contar con 15 mil afiliados de diversas profesiones. Al no estar sujeta a las directivas de los colegios -dado que convocaba a profesionales "democráticos" individualmente- este grupo pudo mostrar una retórica más confrontacional y menos dada a prácticas negociadoras. De hecho, el objetivo de la organización definía explícitamente una de las principales ansiedades de los profesionales: defenderse de "un obrerismo exagerado, que nos mira todavía como instrumentos patronales", ante la cual sólo cabía la lucha política y social ¹⁵².

Por otro lado, la Confederación de Colegios Profesionales, organismo creado en 1968, en gran medida al alero del Colegio de Abogados ¹⁵³, comenzó a operar como el organismo negociador de los profesionales con el gobierno por excelencia, aunque sin renunciar a una oposición ideológica al gobierno. La directiva presidida en 1972 por Miguel Jacob Helo gestionó una serie de reuniones para aunar voluntades y establecer ejes de acción en común, buscando con ellos, como mencionó en el Colegio Médico, dejar en claro que los profesionales "somos absolutamente necesarios para el Estado" ¹⁵⁴. Villarroel -líder gremial de los médicos-

¹⁵² En septiembre de ese año se creó también el "Frente Nacional de Profesionales", compuesto por ingenieros, abogados, químico-farmacéuticos, periodistas, profesores, agrónomos y contadores de derecha, aunque de menor resonancia pública. "Definición", *Ercilla*, 6 de septiembre de 1972, 15

¹⁵³ De hecho, la Confederación funcionó en las oficinas del Colegio de Abogados durante sus primeros tiempos. "Sesión en 7 de junio de 1971", Actas Consejo General, 1971, ACAB, 1

¹⁵⁴ "Los Colegios Profesionales están contra la violencia", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIV, No. 7, julio de 1971, 8. Al mismo tiempo, la Confederación gestionó la aprobación de su personería jurídica con apoyo del gobierno, lo que para el Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Suárez, era evidencia de que no existía persecución alguna. "Gobierno aclara la película a Confederación de Profesionales", *Clarín*, 23 de julio de 1972, 4; "Los colegios profesionales tendrán más respaldo legal", *La Tercera de la Hora*, 14 de agosto de 1972, 7.

complementó señalando que la Confederación defendería también el status social del profesional, "símbolo de la clase media ilustrada", amenazada por la arbitrariedad y la destrucción de jerarquías laborales¹⁵⁵. Aquellos conceptos eran comúnmente repetidos también por las directivas nacionales y provinciales del resto de los colegios profesionales. Por lo mismo, la Confederación no tardó en organizar consejos a lo largo del país con rapidez, amenazando abiertamente con ir a una huelga general que, según Jacob Helo, movilizaría a unos 80.000 profesionales dada "la amenaza que se cierne sobre los profesionales, el deterioro de su imagen y la suplantación por valores políticos"¹⁵⁶.

A la radicalización política de las organizaciones mesocráticas le siguió su consolidación y unificación orgánica como grupos de oposición a la Unidad Popular, expresado en referentes como el FRENAP o la misma Confederación de Colegios Profesionales, entre otros. Al mismo tiempo, la oposición social y gremial se cubrió de una legitimidad de clase media, en la medida en que eran entendidas como expresión espontánea y desinteresada de los hombres de trabajo ante la fractura de las dinámicas propias del "Chile mesocrático". Para el gobierno, las consecuencias de todo esto serían dolorosamente visibles en octubre de 1972.

3.- El paro de octubre. La insurrección de la clase media

Al igual que profesionales, comerciantes y otros grupos de clase media, los camioneros sufrieron una rápida radicalización producto de los problemas acarreados por el desabastecimiento, la escasez de vehículos y repuestos, y la clausura de espacios de negociación con el Estado. Poco a poco esos problemas empezaron a ser procesados en clave política-ideológica, viendo en el gobierno a un enemigo al cual había que obligar a capitular. A pesar de

¹⁵⁵ "Escalada contra los profesionales", *El Mercurio*, 20 de julio de 1972, 17.

¹⁵⁶ "Colegios profesionales: hasta irían a la huelga", *Qué Pasa*, No. 67, 27 de julio de 1972, 14.

que, según decían los mismos camioneros, a León Vilarín y Salvador Allende los unía un lazo de amistad y que, de hecho, se entendieran muy bien cuando debían negociar aspectos gremiales¹⁵⁷, la situación política movió al gremio rápidamente a la oposición, asumiendo una actitud desafiante ante la aplicación del programa de gobierno. De hecho, fue a raíz de las ansiedades generadas por la expansión del Estado hacia funciones económicas antes asumidas por el sector privado lo que iniciaría un paro nacional del sector, el cual sumaría al poco andar el apoyo de la amplia mayoría de las organizaciones identificadas con la clase media. El "paro de octubre" de 1972 fue el momento catalizador de las demandas y exigencias de una clase media movilizada y radicalizada, con los camioneros en la primera línea de fuego. Fue, también, el momento donde la propia definición de clase media se transformó en un objeto en disputa, dada la relevancia que había adquirido en el creciente campo social y político contrarrevolucionario.

Al igual que con otros gremios y organizaciones sociales mesocráticas, hacia finales de agosto de 1972 las relaciones entre la Confederación de Dueños de Camiones de Chile y el gobierno estaban virtualmente quebradas. Allende había denunciado públicamente la existencia de un "plan septiembre" que pretendía paralizar al país con los camioneros a la cabeza, provocando indignación en la dirigencia de la Confederación y burlas en *El Camionero*, la revista oficial¹⁵⁸. Vilarín, de hecho, recalcó la naturaleza gremial, y por lo tanto apolítica de la organización, lo que de por sí la alejaría de cualquier complot. Con todo, cualquier tipo de información que haya manejado el gobierno tenía cierto asidero. Las bases camioneras estaban algo más que inquietas. Las quejas por la falta de repuestos y las promesas incumplidas del gobierno en relación a la importación de camiones y neumáticos habían crispado los ánimos, a lo

¹⁵⁷ Entrevista a Moisés Pastrán, 22 de septiembre de 2016.

¹⁵⁸ "Presidente de la República engloba a transportistas en los preparativos de un supuesto 'Plan Septiembre'", "Harto bueno el 'plancito'", y "Tenemos planes para todo el año", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 16, agosto de 1972, 23, 24 y 26.

que se le sumaban las tensas relaciones con muchas de las empresas estatizadas con quienes trabajan.

De allí que no se necesitara de mucho para iniciar el conflicto abierto. El proyecto de crear una empresa estatal de transportes en Aysén, en el extremo sur del país, motivó el paro de los camioneros de esa provincia a partir del 1ero de octubre. La Confederación, en Santiago, solidarizó con el movimiento, e intentó mediar con el gobierno aunque sin mayores resultados. El 9 de ese mes se decidió la paralización de las actividades, desde las provincias de O'Higgins a Malleco, mientras las negociaciones continuaban. Fue allí cuando el gobierno, sin considerar el ánimo exaltado de las bases de los transportistas y otras organizaciones sociales, cometió un error fundamental. El 10 de octubre, una unidad de la Policía de Investigaciones detuvo a León Vilarín y otros dirigentes de la Confederación, trasladándolos a la cárcel pública por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Lo que en otro momento pudo ser un conflicto gremial limitado al área del transporte, se convirtió rápidamente en una causa a nivel nacional. Políticos de oposición, dirigentes empresariales y gremiales y periodistas de varios de los medios críticos del gobierno se congregaron en la cárcel para solidarizar con los detenidos y dar a conocer sus reacciones. *El Mercurio*, portavoz de la oposición conservadora, dio su apoyo explícito al movimiento de los camioneros, señalando que "la solidaridad gremial va siendo la única herramienta efectiva que queda contra la marcha de la Unidad Popular hacia el control absoluto de las fuentes de subsistencia del país". Radio Balmaceda, de filiación democratacristiana, fue uno de los primeros medios en entrevistar a Vilarín en la cárcel. Advirtiéndolo a sus bases de la gravedad del momento, el dirigente camionero fue enfático en señalar que "no vamos a salir de aquí negociando", instando a Allende a rectificar las decisiones de gobierno¹⁵⁹.

¹⁵⁹ Cit. en "Primer Paro Nacional en 19 años", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 18, octubre de 1972, 18 y 29.

El gobierno no se amilanó. El Ministro del Interior Jaime Suárez acusó a los camioneros de querer agravar el problema del desabastecimiento con objetivos "políticos". Por lo mismo, ordenó la requisición de camiones y la detención de aquellos que bloquearan caminos públicos. Ya para el 12 de octubre, la dirigencia camionera señalaba sin más que el movimiento era "indefinido y hasta las últimas consecuencias"¹⁶⁰,

La sede de la Asociación de Santiago, en la Plaza Brasil de la capital, se convirtió en el epicentro del movimiento, con un continuo movimiento de personas para organizar recursos y ayudas que llegaban de todas partes. Con la dirigencia presa, fue Moisés Pastrían quien asumió el liderazgo de la Confederación, y el encargado también de continuar las negociaciones con Allende hasta que éstas también se rompieron¹⁶¹. En el intertanto, las bases camioneras radicalizaron sus posiciones, haciendo difícil incluso para sus dirigentes llegar a acuerdos razonables sobre los pasos a seguir.

Desde la detención de Vilarín en adelante, las expresiones de solidaridad comenzaron a plasmarse en acciones concretas. Alimentos, dinero y ropa comenzaron a llegar a la sede de la Asociación para ir en apoyo de los camioneros parados, mucha de la cual venía de aportes voluntarios de ciudadanos, según enfatizaban los propios camioneros. Al mismo tiempo, los trabajadores de la Compañía Sud-Americana de Vapores iniciaban un paro de solidaridad con los camioneros, mientras que los dirigentes de la Unión de Obreros Portuarios se entrevistaban con Pastrían para dar un mensaje de apoyo, mientras se mantenían en un "estado de alerta" ante la

¹⁶⁰ "Así se generó el paro que conmocionaría a todo el país", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 18, octubre de 1972, 40

¹⁶¹ Según Pastrían, estuvieron muy cerca de llegar a un acuerdo con Allende mientras aún el paro no se extendía demasiado. Sin embargo, cuando iba a firmar el acta de acuerdo se dio cuenta que habían cambiado varios de los puntos consensuados, por lo que se negó a firmar. Allende le habría pedido volver al día siguiente, excusándose por el error, pero Pastrían decidió no volver más. Entrevista a Moisés Pastrían 22 de septiembre de 2016.

situación. Lo propio hicieron los dirigentes de la Federación Nacional de Sindicatos de Choferes de Taxis, entre otras organizaciones¹⁶².

Con todo, fueron las organizaciones más íntimamente vinculadas con la clase media las que prestaron el apoyo más decidido. Los comerciantes, de hecho, ya tenían alguna experiencia en paros contra la Unidad Popular antes del movimiento de octubre. En agosto, el comerciante Manuel Aguilar murió de un infarto al resistir un requisamiento por parte de funcionarios de la DIRINCO y Carabineros en Punta Arenas. La Confederación de Comercio Detallista llamó a un paro de duelo para el 21 de ese mes -que fue secundado también por unos cinco mil profesionales de la CUPROCh-, trayendo como consecuencia una dura reacción del gobierno. El Ministro de Economía, Carlos Matus, amenazó en cadena radial con aplicar la ley de residencia a los comerciantes extranjeros y la ley de seguridad interior del Estado a los nacionales, además de anunciar aperturas forzosas de locales con sólo treinta minutos de plazo desde la notificación¹⁶³. Sin embargo, los ánimos en las calles no eran del todo favorables a estas medidas. En el centro de la capital, el jefe de la DIRINCO, Patricio Palma, recibió pedradas e insultos de transeúntes cuando procedía a descerrajar un local de línea blanca¹⁶⁴.

Una vez iniciado el paro camionero, los comerciantes presionaron a su dirigencia para unírseles. Según recuerda Cumsille, a todos los lugares que iba le solicitaban medidas drásticas contra el gobierno. De alguna u otra forma, su propio liderazgo en el sector estaba en juego si es que no respondía a la radicalización experimentada por los comerciantes a lo largo del país¹⁶⁵. Al mismo tiempo, las autoridades de gobierno también se veía presionadas por sus bases de apoyo.

¹⁶² "Así se generó el paro que conmocionaría a todo el país", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 18, octubre de 1972, 40

¹⁶³ "Duelo Nacional del Comercio", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IV, No. 13, agosto 1972-enero de 1973, 9.

¹⁶⁴ "La guerra de las cortinas", *Ercilla*, No. 1936, 23 al 29 de agosto de 1972, 9-12. El testimonio de Palma a cuatro décadas de los sucesos puede encontrarse en "El paro de octubre", Pedro Milos, ed., *Chile 1972. Desde "El Arrayán" hasta el "Paro de Octubre"* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013).

¹⁶⁵ Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 111.

La animadversión hacia la Unidad Popular invadía también el trato cotidiano con los clientes, según denunciaba un simpatizante del gobierno al Intendente de la provincia de Cautín, en Temuco. "Cuando uno va a comprarle, se oyen puros improperio groseros, así la persona del compañero de la República (sic)", señalaba Augusto Sanzana Díaz de la población Santa Rosa, exigiendo a las autoridades sanciones por estas actitudes¹⁶⁶

El comercio decidió plegarse al paro pocos días después de iniciado. Cumsille siguió la suerte de Vilarín y otros al ser detenido el 17 de octubre, donde también recibió la visita de un variopinto grupo de políticos y dirigentes sociales de oposición, incluyendo a los dos predecesores de Allende en la presidencia, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. De allí en más el conflicto estaba declarado. La polarización social mantuvo las cortinas de los locales comerciales firmemente cerradas, mientras el movimiento asumía de modo cada vez más explícito un discurso ideológico de legitimación, que también era alimentado desde la prensa de oposición. *El Mercurio* interpretaba el momento desde esa perspectiva: el comercio detallista desaparecía indefectiblemente en un régimen socialista en virtud de su afán estatizador, por lo que las medidas tomadas por el gobierno no eran sino la consecución de un plan fríamente calculado incompatible con la "libertad" del pequeño empresario¹⁶⁷.

Los profesionales también se plegaron al paro, en gran medida por la presión de las bases de los respectivos colegios. El Consejo General del Colegio de Abogados se inundó de cartas y telegramas que exigían la celebración de una asamblea abierta para pronunciarse sobre una posible paralización de actividades. A pesar de que para muchos consejeros un paro no era un mecanismo apropiado de protesta, la posición más radical obtuvo la mayoría. El 17 de octubre se celebró una sesión extraordinaria del Consejo con la presencia de varios centenares de abogados.

¹⁶⁶ Carta de Augusto Sanzana Díaz a Gastón Lobos Barrientos, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 17 de octubre de 1972, Intendencia de Cautín, vol. 417, ARA.

¹⁶⁷ "Desplazamiento del Comercio Detallista", *El Mercurio*, 7 de octubre de 1972, 3.

Los gritos y el desorden generalizado impidieron avanzar más allá de algunos intercambios de opiniones, por lo que Silva Bascuñán decidió seguir con las deliberaciones a puertas cerradas, sólo con la presencia de los consejeros nacionales. Mientras ello sucedía, llegaban noticias de los consejos provinciales de Talca y Valparaíso que habían decidido plegarse al paro sin esperar la resolución del Consejo General. Ello apresuró las cosas y la moción de parar actividades fue aprobada por una amplia mayoría, en vista de "la quiebra del estado de derecho que sufre el país, en resguardo de los superiores intereses de la Nación y en ejercicio del derecho de la defensa de la institucionalidad y de la profesión de abogado"¹⁶⁸. Con todo, hubo quienes se opusieron al acuerdo. El Club de Abogados criticó la medida por inconstitucional. Al mismo tiempo, abogados de gobierno motivaron una consulta de Allende a la Corte Suprema para que se pronunciara sobre la legalidad de la decisión, en virtud del carácter semi-estatal de muchas de las atribuciones del Colegio. La Corte Suprema, también crítica del gobierno, desistió referirse al tema aduciendo falta de atribuciones¹⁶⁹.

Médicos e ingenieros decidieron sumarse al paro con la entusiasta aprobación de la mayoría de sus miembros. Los consejos regionales médicos de Valparaíso, Santiago y Talca -que juntos representaban a los 50% de los miembros del país- llamaron a parar actividades, algo que recién se logró el 22 de octubre, junto a dentistas y enfermeras. Los colegios profesionales de la salud señalaron que 15.000 de sus miembros se habían unido al movimiento, y que sólo lo detendrían con la aprobación de un "Estatuto General de los gremios" -símil del "Estatuto de Garantías Constitucionales" aprobado por el Congreso en 1970- que garantizara las libertades

¹⁶⁸ "Sesión extraordinaria en 17 de octubre de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAb, 2-3.

¹⁶⁹ "Colegio de Abogados desnaturaliza su rol", *La Nación*, 19 de octubre de 1972, 8; "Club de Abogados rechazó acuerdo político del Colegio", *El Siglo*, 21 de octubre de 1972, 10; "Respuesta de la Corte Suprema a S.E.", *El Mercurio*, 22 de octubre de 1972, 21.

públicas e inhibiese toda represalia posterior¹⁷⁰. Por su parte, el Colegio de Ingenieros se plegó al paro con el 75% de apoyo de sus miembros, según la consulta realizada entonces. Arriagada adujo diferentes motivos para ello: emigración de profesionales, daño al acervo tecnológico del país, desplazamiento del conocimiento técnico en favor de consideraciones políticas y falta de diálogo fructífero con el gobierno, quejas que ya llevaba varios meses circulando en la discusión pública. Sin embargo, el 25% disidente estaba organizado y firmemente alineado con el gobierno, por lo que intentó censurar a la mesa directiva para impedir el paro, aunque sin éxito¹⁷¹. De allí que la mesa buscara ampliar su radio de acción para acallar la voces discrepantes internas. Así, el Colegio de Ingenieros fue la base del CUPROCh, que organizó un acto de masas el 31 de octubre para dar apoyo a la continuidad al paro. Allí se verificó una identificación estrecha entre el movimiento de octubre y la clase media como concepto e ideal. Arriagada en su alocución incitó a las bases a endurecer posiciones en la medida en que "están en juego toda la suerte y el provenir de la clase media chilena, sostén democrático del país que puede ser destruido"¹⁷².

La oposición política apoyó sin reservas al movimiento huelguístico de octubre, aunque cuidándose de dejar en claro el carácter "gremial" del mismo, fuente principal de su legitimidad. Para entonces ya existía la Confederación Democrática (CODE), pacto político de oposición en torno a la Democracia Cristiana y el Partido Nacional, y fue desde aquella nueva situación de oposición unificada que se aproximaron al movimiento gremial. Vilarín y Cumsille, como se mencionó, recibieron la visita de varios políticos de nivel nacional en la cárcel. Otros intentaron incidir desde la prensa para asegurar que el paro dañara lo más posible al proyecto

¹⁷⁰ "Las causas del movimiento", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXIV, No. 11, noviembre de 1972, 17.

¹⁷¹ "Ingenieros apoyan al Gobierno Popular", *Noticias de Última Hora*, 10 de agosto de 1972, 10; "Los ingenieros de la UP le dan duro al Colegio", *Puro Chile*, 12 de agosto de 1972, 5; "Voto de censura contra directiva momia de ingenieros", *El Siglo*, 18 de agosto de 1972, 6; "El Colegio de Ingenieros aclara", *La Nación*, 16 de agosto de 1972, 29.

¹⁷² "Crónica de un paro", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, Año XII, No. 61, agosto-diciembre de 1972, 8.

revolucionario de la Unidad Popular. El dirigente democratacristiano Claudio Orrego Vicuña, denunciaba la "persecución" desatada por el gobierno contra los camioneros, quienes habrían reaccionado con dignidad y paciencia, a pesar de las provocaciones¹⁷³. Lo propio hizo el senador radical Alberto Baltra en el Congreso, expresando su admiración por lo camioneros al enfrentar "a la furia del oficialismo", y recibiendo por ello el reconocimiento público del gremio¹⁷⁴. El centro y la derecha, de ese modo, apoyaron y se articularon con los gremios movilizados, formando un bloque compacto de oposición al gobierno. Así como el proyecto revolucionario de la Unidad Popular politizó a las organizaciones mesocráticas, ese mismo proceso de cambios unificó a la oposición política, antes dividida por agrias disputas¹⁷⁵.

El paro de octubre encontró una fuerte oposición en las bases sociales de la Unidad Popular, lo que a su vez significó una presión a las autoridades para endurecer las medidas contra los huelguistas. Así, por ejemplo, las autoridades favorecieron la organización del Movimiento Patriótico de Renovación (MOPARE), grupo de camioneros pro-gobiernistas cuyo objetivo explícito era debilitar el paro. Para atraer a más miembros, el gobierno enfocó las regalías y recursos que antes estaban destinadas a la Confederación a este nuevo grupo¹⁷⁶. A este tipo de medidas a nivel organizacional se le sumaron un sinnúmero de acciones locales. En el pueblo de Vilcún, cerca de Temuco, una larga lista de firmantes pedían al intendente la requisición de dos locales en particular, "los cuales se saben a ciencia cierta que disponen de un gran stock de mercaderías", mientras que en Loncoche los comerciantes de izquierda organizaron una Cámara

¹⁷³ Claudio Orrego Vicuña "¿Hasta cuándo se hostiliza a los camioneros", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 21, enero-febrero de 1973, 23.

¹⁷⁴ "El H. Senador Don Alberto Baltra saca la cara por los camioneros", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 21, enero-febrero de 1973, 23, 29-30.

¹⁷⁵ Augusto Varas, *La dinámica política de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular*, Documento de Trabajo (Santiago: FLACSO, 1977), 57-59.

¹⁷⁶ Según la Confederación, el gobierno ni siquiera le cumplió a los camioneros del MOPARE, algo difícil de comprobar. "¡Me prometiste, ay, sííí...! ¡No me cumpliste, ay nooo!", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 21, enero-febrero de 1973, 11.

de Comercio Minorista disidente, como acto "de repudio al paro político dispuesto por los dirigentes nacionales". Este tipo de denuncias comprometían también la circulación de recursos desde el Estado, incluso en cantidades modestas. El subdelegado de Vilcún le pidió al intendente de la provincia de Cautín disponer de una entrega de clavos a un comerciante que contaba "con la simpatía de las JAP"¹⁷⁷.

Mientras tanto, la alianza informal entre camioneros, comerciantes y profesionales dio paso a formas de organización más estables. En medio del paro se creó el "Comando Nacional de Defensa Gremial", en el que también participaron taxistas, pequeños y medianos agricultores, y por supuesto los gremios del gran empresariado agrupados en la CPC. En esa instancia se redactó el "Pliego de Chile", que daba cuenta de los miedos y las ansiedades que alimentaban el movimiento. En las seis partes del documento se exigía respeto a los derechos gremiales, restitución del derecho a la libre expresión, fin a las estatizaciones, incorporación de los gremios a las instancias de planificación, seguridad en los lugares de trabajo, supresión de las JAP e incluso libertad para entrar y salir del territorio nacional, algo que no estaba regulado. El gobierno recibió con frialdad el "pliego", criticándolo por sus excesos y, sobre todo, por su carácter "político", lo que amenazó las posibilidades de llegar a un acuerdo. Sin embargo, constatando el desgaste del movimiento, transigió en algunos puntos y planteó un cambio ministerial mayor, incluyendo el ingreso de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas al gabinete. El general constitucionalista Carlos Prats, cabeza del Ejército, asumió el Ministerio del

¹⁷⁷ Carta de Rosa Ruminot y otros a Hernán Fuenzalida Vigar, jefe de plaza de la provincia de Cautín, Vilcún, 21 de octubre de 1972, Intendencia de Cautín, Vol. 418, ARA; Telegrama de Reynaldo Oliva Michea, subdelegado de Vilcún, a Gastón Lobos Barrientos, 18 de julio de 1972, Intendencia de Cautín, Vol. 418, ARA; Carta de Eduardo Brito Salas, Gobernador del Departamento de Villarica, a Daniel Vergara Bustos, subsecretario del Ministerio del Interior, Loncoche, 31 de octubre de 1972, Intendencia de Cautín, Vol. 442, ARA

Interior, dando garantías de respeto a los acuerdos tomados. El 5 de noviembre los huelguistas acordaron volver a las labores¹⁷⁸.

El fin del paro, sin embargo, no significó el cese de las hostilidades. Desde allí empezaría una lucha política por el significado y alcance del movimiento. Los camioneros socializaron hacia el interior del gremio un relato épico del paro a través de su publicación gremial, como expresión nacional ante una amenaza vital, con una vanguardia consciente dirigiéndola. El paro, en esa interpretación, habría concitado el apoyo de millones de chilenos de todas las clases sociales, rechazando las acusaciones provenientes desde la izquierda de que había sido la reacción del gran capital. El gobierno y sus bases sociales, en ese registro, habrían sido incapaces de entender el fenómeno, y sólo actuarían basados en el odio y en la defensa de intereses mezquinos contrarios a la nación. Para graficar el punto hicieron circular historias ejemplares que dan cuenta hasta cierto punto del esquema axiológico del gremio luego del rol protagónico jugado en el mayor movimiento contra el gobierno hasta el momento. El 27 de octubre, relataba *El Camionero*, el camión de Rodemil Meza había sido requisado por las autoridades, y entregado a un chofer afín al gobierno. Una vez finalizado el paro, el propio Vilarín se encargó de recuperar la máquina, visitando el domicilio del "patriota leal" beneficiado en la populosa e izquierdista Villa Francia de la capital. Para la redacción de *El Camionero*, aquellos que se habían visto beneficiados por el gobierno no eran sino "aprendices de choferes, inexpertos e incapaces, la mayoría producto del lumpen generado en barrios marginales". Vilarín encontró al "requisador" descansando y con la máquina en mal estado, quien no tardó en confesar sus "fechorías". Era, por supuesto, la antítesis del camionero leal a la Confederación, hombre de

¹⁷⁸ "Actitud de S.E. representa un vejamen a los gremios", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 18, octubre de 1973, 23; y "Suspendido el paro nacional", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 19, noviembre de 1972, 1,

esfuerzo que había logrado acumular el capital suficiente para trabajar con sus propios medios, y que sólo defendía la libertad que le significaba no ser un asalariado¹⁷⁹.

Al mismo tiempo, los rostros visibles del paro de octubre alcanzaron celebridad nacional, consolidando de paso los liderazgos sociales contruidos al interior de sus respectivas organizaciones¹⁸⁰. Por esos días, el líder camionero era entrevistado por *El Mercurio*, el periódico de mayor prestigio a nivel nacional, y era presentado en términos afines al discurso legitimador del paro. "Un hombre de cuyo rostro y actitud emana dignidad", "su imagen es de fuerza contenida", "y da confianza". También se apuntalaba el relato épico del gremio, al señalar que Vilarín era el responsable del "petitorio más dramático y completo que haya presentado gremio alguno a sus gobernantes". Y agregaba: "Su figura se levanta hoy como un pequeño David enfrentado a una gigantesca maquinaria política que ha silenciado radios, ha reprimido manifestaciones callejeras y ha tratado de quebrar el paro (...) empleando la fuerza". Al mismo tiempo, el propio Vilarín se encargaba de dejar en claro que todo esto "no ha sido un movimiento de clases", sino una reacción de lo más representativo de la nación¹⁸¹. Cumsille, por su parte, también alcanzaba protagonismo nacional, repercutiendo en su ascendiente al interior del gremio de los comerciantes. Su figura era lo suficiente influyente como para ser invitado al programa de televisión "A esta hora se improvisa", al que asistían los más importantes políticos¹⁸². A la figuración mediática se le sumó el reconocimiento unánime de sus bases. En el IV Congreso

¹⁷⁹ "El increíble caso del 'camión perdido'", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 21, enero-febrero de 1973, 5-9.

¹⁸⁰ " Vilarín estaba consciente de que su popularidad era funcional para la consolidación de su liderazgo y la proyección pública de su gremio. Una vez terminado el paro fue personalmente a explicar los significados del movimiento a la asamblea de Santiago, afirmando que los "se ha ganado la consideración y el respeto de la ciudadanía". "Reunión General de Socios", 7 de diciembre de 1972, Actas del Directorio del Sindicato General Profesional de Dueños de Camiones de Santiago, Vol. 1969-1980, ASIPRODUCAM, 152.

¹⁸¹ "Ignoraba que el camino hacia el socialismo pasaba por el cementerio" (entrevista a León Vilarín), cit. en *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 18, octubre de 1972, 202-205.

¹⁸² "El comercio en la televisión", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año V, No. 14, febrero-junio de 1973, 33.

Nacional de la Confederación de Comercio Detallista, por ejemplo, fue reelecto como presidente nacional del gremio con un 97% de los votos¹⁸³. El paro de octubre catapultó a figuras como Vilarín y Cumsille a la primera línea del conflicto político desatado de allí en adelante, algo que por cierto era inédito para esas organizaciones que hasta el gobierno de Allende habían asumido un marcado carácter de defensa y negociación de intereses gremiales inmediatos.

4.- La clase media contrarrevolucionaria

El inédito protagonismo de las organizaciones mesocráticas a raíz del paro de octubre tuvo que ver también con un debate no siempre explícito ni sistemático sobre los alcances, definiciones y usos de la noción de "clase media" en tanto herramienta política de legitimación de la acción colectiva. En efecto, fue a raíz de la polarización política y social que desembocó en el paro que la "clase media" se transformó en un objeto en disputa. La versión que no tardaría en hegemonizar el espacio público estuvo conceptualmente anclada en los parámetros tradicionales del "Chile mesocrático" -en sus ansiedades, miedos, exigencias y demandas colectivas incumplidas- pero al mismo tiempo asumió un cariz inequívocamente contrarrevolucionario, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la coalición oficialista por ganarse el favor de estos grupos. La "clase media", de ese modo, comenzó a ser definida como antitética al marxismo y al cambio revolucionario de las estructuras sociales, radicando aquella contradicción en una incompatibilidad valórica radical entre las virtudes mesocráticas y los "vicios" del socialismo.

¹⁸³ " En esa ocasión, Cumsille recibió varias muestras de agradecimiento por parte de comerciantes. Quizás una de las más simbólicas fue el discurso a nombre de los comerciantes extranjeros José Tortorolo, quien le regaló el reloj que lo había acompañado en su paso por los campos de concentración en la II Guerra Mundial. A ello agregó: ""Rafael, tal vez este pequeño recuerdo no tiene valor material. Señores, no contiene oro ni joyas, pero si tú eres solamente el hombre digno que a lo largo de Chile, a lo largo del mundo entero es defender siempre a nuestro gremio, para mí marca horas tristes, para ti a partir de hoy día estoy seguro que marcará horas de felicidad, horas de gloria y horas de grandeza para nuestro gremio en que al final tendrá que pararse cuando tengamos una verdadera Patria libre y grande (sic)" IV Congreso Nacional", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IV, No. 13, agosto de 1972-enero de 1973, 27 y 31.

El gobierno y los partidos de izquierda escasamente reconocieron una especificidad de clase media en la medida en que tal categoría no entraba en el esquema interpretativo de la realidad social del marxismo de entonces, marcado por la existencia antagónica de dos bloques definidos: proletariado y burguesía. De hecho, el paro de octubre fue entendido como una reacción organizada de la burguesía ligada al gran capital y al imperialismo. Pocos meses después finalizado el movimiento, la editorial estatal Quimantú publicaba un documentado libro sobre el tema con una línea argumental que no llamaba a dudas. El paro, en esa óptica, habría sido producto de una conspiración de la burguesía y sus expresiones políticas de centro y derecha, iniciada en el mismo momento del triunfo de las fuerzas de la Unidad Popular en 1970. A medida que avanzaban los meses, el núcleo conspiracional habría tomado la decisión de crear un "movimiento de masas de la burguesía" con el fin de defender en las calles el sistema capitalista. De ese modo, el paro habría sido de naturaleza "patronal", en la que los grandes gremios empresariales habrían tenido el control de la situación y los grupos de clase media funciones específicas dentro de un plan fríamente calculado. "Como en un juego de ajedrez", señalaba el texto, "el paro es un match donde hay reyes y peones". Y sentenciaba: "Los reyes de este juego fueron los grandes empresarios agrupados en la SOFOFA, la SNA y la Cámara de la Construcción, amparados por los partidos políticos de oposición. Los peones fueron dirigentes tales como León Vilarín y Rafael Cumsille"¹⁸⁴.

Al interior de la izquierda, como en tantas otras materias, no había consenso al respecto. En la reunión de los partidos políticos de gobierno de febrero de 1972 en El Arrayán, en la precordillera capitalina, los representantes del Partido Comunista insistieron en la necesidad de acercarse a las "capas medias", ofreciendo ayuda técnica y crédito a pequeños y medianos propietarios e industriales. Las fracciones radicalizadas del Partido Socialista -con el senador

¹⁸⁴ Patricio García, *Los gremios patronales* (Santiago: Quimantú, 1973), 9.

Carlos Altamirano a la cabeza- y el ultraizquierdista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desconfiaban de estos llamados, relacionándolos con claudicaciones inaceptables en el proceso revolucionario¹⁸⁵. A pesar de ello, a partir de la reunión de El Arrayán el Partido Radical -sobre el entendido de que era el representante natural de las "capas medias" progresistas- asumió el rol de convocar y definir a este sector social en términos funcionales al programa de gobierno. Así, por ejemplo, el PR señaló que si bien luchaba porque la "gran clase trabajadora" alcanzara sus objetivos, se preocupaba especialmente por los "sectores medios" en virtud de que constituirían "garantía de eficiencia a través del aporte de sus clases profesionales y dirigente", las cuales de modo alguno "pueden ser consideradas comprometidos con el régimen capitalista"¹⁸⁶.

Aquella acepción izquierdista de clase media fue desafiada al interior del mundo radical. Por una parte, el presidente de la ANEF y militante radical Tucapel Jiménez acusó a los dirigentes de su colectividad de no proteger "los derechos de los pequeños y medianos comerciantes, profesionales, maestros y dueñas de casa, empleados y trabajadores por cuenta propia", al no oponerse al proyecto de reajuste de salarios que resultaba "lesivo para los intereses de la clase media"¹⁸⁷. Como consecuencia de ello, Jiménez fue expulsado del partido. Por otra parte, en 1972, la llamada "Izquierda Radical" se escindió del partido y -a pesar de su denominación- a los pocos meses se unió a la CODE, sumándose a la Democracia Radical de Julio Durán. Alberto Baltra, otrora pre-candidato presidencial de la Unidad Popular y entonces líder de esa fracción rechazada, disputó abiertamente la identificación simbólica de la clase

¹⁸⁵ Unidad Popular (Comité Nacional). "La Declaración de El Arrayán", 9 de febrero de 1972; y Manuel Cabieses (MIR), "Primero hay que ganarse a la clase trabajadora", *Punto Final*, No. 150, 1ero de febrero de 1972, cit. en Víctor Farías, *La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica*, vol. III (Berlín; Santiago: Wissenschaftlicher Verlag Berlin; Centro de Estudios Públicos, 2000), 1861-1864-1993.

¹⁸⁶ "El Partido Radical y la clase media chilena", *La Tercera de la Hora*, 3 de marzo de 1973, 17.

¹⁸⁷ "A pesar de mi expulsión del PR seguiré defendiendo a los gremios" y "Reajuste es lesivo para intereses de la clase media", *La Tercera de la Hora*, 14 de marzo de 1973, 6; *La Tercera de la Hora*, 14 de septiembre de 1973, 6.

media con la fracción oficialista del radicalismo. Para Baltra, de hecho, la Unidad Popular había sido posible sólo gracias a una "alianza de clases", que habría sido traicionada por el gobierno al atacar a la clase media a través de persecuciones a profesionales, comerciantes, camioneros y otros. Más aún la traición del gobierno era también una traición a Chile, al despojar a la nación de "los grandes valores intelectuales, morales, de capacidad y esfuerzo que encierra la amplia y poderosa clase media chilena"¹⁸⁸.

La masonería, de tantos vínculos con el radicalismo, también se sintió compelida a avanzar una definición de clase media afín al momento político. En la revista *Occidente*, dedicada a difundir planteamientos masónicos en el mundo "profano", el masón y radical Julio Sepúlveda Rondanelli publicó una serie de artículos dedicados a la clase media, que editaría en formato libro en 1973. Allí advirtió sobre el "desbordamiento" del programa de la Unidad Popular, que atentaría directamente contra la supervivencia física de la clase media y su acervo cultural y tecnológico. Para Sepúlveda Rondanelli, la clase media era por naturaleza racionalista, secular, democrática y progresista, por lo que cualquier movimiento organizado de este sector social sería una reacción legítima ante la inestabilidad social creada por el proceso revolucionario en marcha. De allí que el paro de octubre habría sido el movimiento mesocrático por excelencia, en tanto se defendía el trabajo, el esfuerzo y la dignidad amagada por la emergencia de sectores populares radicalizados. El problema principal para el autor, entonces, era la amenaza de "proletarización" de la clase media, algo incompatible con el afán de

¹⁸⁸ Alberto Baltra Cortés, "Traición a la clase media", *Qué Pasa*, No. 84, semana del 23 de noviembre de 1972, 18-19.

mejoramiento y capacidad crítica de este sector, lo que a su vez auguraba una defensa cerrada de su "actual nivel de vida"¹⁸⁹.

La inquietud ante los significados de la clase media no se circunscribió al mundo masónico-radical. Los principales partidos de oposición también buscaron definir los alcances de la clase media en clave explícitamente contrarrevolucionaria. El senador demócratacristiano Rafael Moreno acusaba que la política del Partido Comunista se dirigía a la liquidación de la clase media y a todo su universo valórico definido por el esfuerzo y la superación personal, mientras que el también senador demócratacristiano Alfredo Lorca llamaba a la clase media a no "dejarse engañar" por los llamados del comunismo¹⁹⁰. El Partido Nacional, por su parte, también asumió la defensa de las clases medias, y así lo hizo ver en múltiples intervenciones públicas¹⁹¹. Mario Arnello, uno de sus principales intelectuales, fue explícito al respecto: la Unidad Popular tenía como objetivo estratégico la destrucción de la clase media, debido a que su sola existencia desmentiría la división espuria de la sociedad entre explotadores y explotados. Más aún, la clase media obstaculizaría los fines totalitarios del "marxismo" al constituir este sector la base de la libertad, el derecho, la democracia y la propiedad privada¹⁹².

Desde el sistema de partidos y los gremios empresariales comenzaron a acuñarse conceptos movilizadores centrados de algún u otro modo en el ideal mesocrático. Jaime Guzmán, a finales de octubre de 1972, señaló que el paro había sido expresión genuina de una sociedad

¹⁸⁹ Los artículos fueron publicados en *Occidente* desde el No. 234 de marzo de 1972 al No. 244 de marzo de 1973, y posteriormente publicados en Julio Sepúlveda Rondanelli, *La clase media o "pequeña burguesía"* (Santiago: Imprenta Los Andes, 1973).

¹⁹⁰ Rafael Moreno, "Reajuste 1973: el delito de ser clase media", *La Tercera*, 24 de febrero de 1973, 3; "El PC sueña al querer ganarse a la clase media", *El Mercurio*, 5 de febrero de 1972, 20.

¹⁹¹ En el documental dirigido por el periodista francés Jean Bartolino sobre los primeros meses de la Unidad Popular, un dirigente del Partido Nacional insistió en este punto al señalar que su colectividad representaba "a la clase media urbana, pequeños comerciantes e industriales, artesanos, profesionales; personas que viven de su trabajo". Jean Bartolino, *Chili: six mois d'unité populaire*, Documental, (1971), https://www.youtube.com/watch?v=863X2fv3_1k#t=1.530975. Visitado el 15 de agosto de 2016.

¹⁹² Mario Arnello, "Un objetivo marxista: destrucción de la clase media", *Qué Pasa*, No. 72, 31 de octubre de 1972, 40-41.

amenazada por un estatismo absorbente que habría dado paso a la emergencia del "poder gremial", entendida como fuerza social espontánea y apolítica con proyección de futuro que se antepondría con todas sus fuerzas al marxismo gubernamental. De hecho, vaticinaba Guzmán, el "poder gremial" "será un canal fundamental y permanente en la futura reconstrucción nacional"¹⁹³. Por su parte, a comienzos de noviembre de ese año en la inauguración de la Feria Internacional de Santiago (FISA), el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Benjamín Matte llamó a crear un "nuevo Chile" en base al hombre de trabajo y al "hombre medio", en un esfuerzo por volver a las "raíces de la nacionalidad". Para ello era necesario mantener y proyectar en el futuro el "poder gremial" gestado en octubre, base de un eventual régimen autoritario de regeneración donde primaría la técnica y la verdad por sobre el dogma y la mentira¹⁹⁴. El "poder gremial", de ese modo, se asumía como expresión genuina de los intereses de la nación centrado en las preocupaciones y necesidades de la clase media.¹⁹⁵

De hecho, los gremios empresariales reunidos en la CPC participaron activamente del paro y de la lucha política posterior, pero sin hacer explícita la defensa del gran capital. En su lugar legitimaron su accionar en base a una "épica del hombre medio", alejado tanto del oligarca como del proletario, que se movilizaba instintivamente ante la presencia de un peligro vital, y que a su vez encarnaba los valores más representativos de la nación. Los gremios empresariales junto a los grupos mesocráticos politizados fueron exitosos en establecer el vínculo entre nación,

¹⁹³ "Jaime Guzmán y el desafío gremial", *Qué Pasa*, No. 80, semana del 26 de octubre de 1972, 38-39.

¹⁹⁴ Campero, *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983*, 74-75.

¹⁹⁵ Por cierto, la noción de "poder" emanado desde la sociedad con independencia del Estado no fue de uso exclusivo de los gremios. A raíz de la marcha de las cacerolas vacías se organizó el "Poder Femenino", mientras la prensa empezaba a hablar de un "Poder Profesional". En el mundo de la izquierda, por su parte, se organizaba, discutía y promovía el "Poder Popular", no siempre en consonancia con las necesidades del gobierno. "El poder profesional en ebullición", *Qué Pasa*, No. 61, semana del 15 de junio de 1972, 14-16. Sobre los poderes femenino y popular, véase Margaret Power, *Right-Wing Women in Chile: Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973* (University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2002); Franck Gaudichaud, *Poder popular y cordones industriales: testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973* (Santiago: LOM Ediciones - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2004); y más reciente Franck Gaudichaud, *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende* (Santiago: LOM Ediciones, 2016).

oposición total a la Unidad Popular e ideal mesocrático¹⁹⁶. Por ejemplo, Orlando Sáez, presidente de la SOFOFA y uno de los dirigentes más activos contra la Unidad Popular, se presentaba a sí mismo como un hombre de clase media al enfatizar su condición de humilde profesional, hijo de inmigrantes españoles dueños de una pequeña zapatería. Sáez, así "no se parece en absoluto a la estampa de los graves caballeros de patillas y barbas cuyos daguerrotipos se conservan en la sala de sesiones", según era descrito en una entrevista en la revista *Ercilla*. El propio presidente de la entidad, además, se encargaba de dejar en claro que a la SOFOFA podían ingresar también pequeños industriales, y que era en ese segmento donde se concentraban la mayoría de sus asociados¹⁹⁷.

La prensa de oposición apuntaló estas definiciones antiizquierdistas de clase media a través de decenas de artículos y editoriales funcionales a las necesidades políticas del momento. Mientras se entendía a la clase media como una mayoría social donde estarían las bases morales de la sociedad, se definía a ese sector como inherentemente incompatible con toda tentativa revolucionaria. Así, por ejemplo, *Ercilla*, calculaba que la clase media constituía el 55% de la sociedad, incluyendo a la mayoría de los habitantes de Las Condes, comuna capitalina tradicionalmente vinculada a la clase alta, y a muchos de los sectores obreros industriales en virtud de su nivel de vida.¹⁹⁸ Al mismo tiempo, se insistía en la falta de sinceridad de las autoridades de gobierno con respecto a la situación de la clase media. Las declaraciones de representantes comunistas en torno al problema, de ese modo, no serían sino "acomodos tácticos" para superar la coyuntura, y no un compromiso real con ese sector social. Más aún, la propia clase media se habría dado cuenta de ello, adquiriendo un nivel de autoconciencia suficiente como para oponerse como bloque a las consecuencias desquiciadoras del proceso revolucionario

¹⁹⁶ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 87-88.

¹⁹⁷ "El hombre de la empresa privada", *Ercilla*, No. 1918, 19 al 25 de abril de 1972, 8.

¹⁹⁸ "El riñón de la clase media", *Ercilla*, No. 1939, 13 al 20 de septiembre de 1972, 9.12.

dirigido desde el Ejecutivo. La clase media, en esa perspectiva, sería el grupo depositario de la razón, el progreso, la moderación y el equilibrio, el "fiel de la balanza" que podía mantener en pie las bases esenciales del orden social. El "marxismo", definido como la supresión de toda libertad e iniciativa, entonces, sería esencialmente contradictorio con los ideales y aún la propia existencia de la clase media¹⁹⁹. La apelación reiterada de la oposición política, la prensa y los gremios empresariales a la naturaleza mesocrática, nacional y espontánea de la movilización social indica hasta qué punto el ideal de clase media había sido exitosamente redefinido como opuesto a la izquierda y a la revolución.

Los debates sobre los significados de la clase media condicionaron el modo en el que las propias organizaciones mesocráticas asumieron su identidad de clase en un contexto de polarización política. Camioneros, comerciantes y profesionales, entre otros, fueron enfáticos en presentarse como figuras apolíticas y relativamente modestas, que se movilizaban sólo como reacción instintiva ante una amenaza vital y no por ambiciones de poder. Cumsille insistía una y otra vez que en su gremio no cabían consideraciones políticas, y los transportistas rechazaban con ahínco las representaciones de la prensa de izquierda de ser grandes empresarios financiados por Estados Unidos para mantener el paro, insistiendo en que sólo eran esforzados trabajadores independientes con un capital limitado muchas veces a un sólo camión²⁰⁰. Los profesionales hacían otro tanto. Los dirigentes del Colegio Médico, por ejemplo, insistían en que "no somos millonarios"²⁰¹, sometiendo a ese principio toda aparición pública: Emilio Villarroel se definía

¹⁹⁹ Estos argumentos en varios artículos de prensa de la época. Algunos de ellos son: "¿Quién se queda con las capas medias?", *Qué Pasa*, No. 42, semana del 10 de febrero de 1972, 7-8; "El destino de la clase media", *El Mercurio*, 4 de febrero de 1972, 3; "La clase media: fiel de la balanza", *El Mercurio*, 15 de febrero de 1972, 3; "No dan cabida a la clase media", *El Mercurio*, 20 de noviembre de 1972, 17; "Trabajadores y profesionales", *La Segunda*, 12 de diciembre de 1972, 4; y "La Moral Profesional", *El Mercurio*, 1ero de noviembre de 1972, 3.

²⁰⁰ "Un tercio paralizado: parálisis progresiva de la locomoción", *Qué Pasa*, No. 35, semana del 23 de diciembre de 1971, 15-16; *El Camionero. Órganos Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, Año I, No. 10, febrero de 1971, 18-22.

²⁰¹ "Los médicos no somos millonarios", *La Tercera de la Hora*, 10 de enero de 1972, 5.

como un "hombre modesto" con una "vida de esfuerzo" cuya única herencia "será el fruto de mis desvelos"²⁰². Por su parte, Arriagada hacía suya la vinculación entre profesionales, clase media y nación. Para él, de hecho, el paro de octubre habría unido a las capas medias, sector en el que los profesionales tendrían "una responsabilidad ineludible frente a nuestro pueblo" en virtud de constituir "un patrimonio cultural y tecnológico que pertenece a Chile". Y agregaba: "La marginación irresponsable en que se nos ha colocado la juzgamos como una traición a Chile"²⁰³

Aquel acervo moral dado por el trabajo, el sacrificio, la dignidad y la austeridad propia de la caracterización idealizada de la clase media fue proyectado a la esfera pública como un herramienta política de legitimación de la acción colectiva. El paro de octubre, de ese modo, fue interpretado y justificado como una reacción de una mayoría social equidistante del proletariado y el gran capital. A partir de allí, los grupos identificados con la clase media afianzaron una alianza política y social contrarrevolucionaria junto al empresariado y a los partidos políticos de oposición en un contexto de continuo empeoramiento de la situación económica, violencia callejera y crisis institucional. Junto a las invocaciones anticomunistas propias del lenguaje de la época, la estrategia política insurgente adoptada por el bloque contrarrevolucionario actuará también en base a la legitimidad que le entregaba la naturaleza virtuosa de la clase media.

5.- Hacia el golpe

La vuelta a las labores luego de finalizado el paro no aquietó los ánimos. Camioneros, comerciantes y profesionales denunciaron la multiplicación de "represalias", a pesar de que había sido un punto explícitamente negociado con el General Prats. En el Banco Central, por ejemplo,

²⁰² Emilio Villarroel, ¿así son todos los médicos?", *Qué Pasa*, 15 de mayo de 1972, 22-23. Por cierto, ese tipo de descripciones no eran únicas del presidente del Colegio Médico. René García Valenzuela, respetado médico y Gran Maestro de la Gran Logia de Chile se refería a sí mismo en términos similares: "Todo lo que he hecho me ha costado muchísimo. Creo que mis dotes son escasas: por eso he tenido que trabajar incansablemente para rendir al máximo". "Retrato hablado. René García Valenzuela", *El Mercurio*, 12 de agosto de 1973, 28.

²⁰³ "El Colegio de Ingenieros informa a la opinión pública", *El Mercurio*, 22 de octubre de 1972, 29.

29 funcionarios fueron exonerados por su participación en el paro, mientras en SOPROLE los obreros habrían impedido el ingreso a la fábrica a los empleados que se habían plegado al movimiento. Los camioneros habrían sido especialmente castigados en empresas estatales como Chilectra, DINAC, GASCO, ENADI, CCU y Embotelladora Andina, entre muchas otras, y al mismo tiempo en diferentes reparticiones públicas se procedía a descontar sueldos a quienes se habían ausentado de sus labores. Si bien la mayoría de quienes participaron del paro decían confiar en la palabra del Ministro del Interior, las denuncias se multiplicaron rápidamente, así como también las medidas disciplinarias cuando era posible²⁰⁴. El Colegio de Abogados, por ejemplo, inició investigaciones para determinar la responsabilidad de miembros de la organización en la aplicación de éstas represalias²⁰⁵, algo replicado también por otros colegios. Las autoridades involucradas y la prensa de izquierda resistieron estas medidas, y de paso cuestionaron las competencias de estas organizaciones para fiscalizar y sancionar a funcionarios públicos²⁰⁶.

Ya para entonces las ansiedades sociales, los miedos y el odio a la izquierda circulaban fluidamente entre las esferas pública y privada de la vida social. Para muchos -no sólo para aquellos identificados con la clase media- comenzó a ser cada vez más claro que la Unidad Popular atacaba directamente sus posibilidades de reproducción social, tanto a través del consumo, bloqueado en gran medida por el desabastecimiento, como por la clausura del Estado como espacio de negociación y presión. Para la historiadora Lucía Santa Cruz, por ejemplo,

²⁰⁴ "¡Comienzan las represalias!", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año II, No. 19, noviembre de 1972, 33-35.

²⁰⁵ "Sesión en 6 de noviembre de 1972", Actas del Consejo General, 1972, ACAb, 4; "Y he aquí que hubo represalias", *Qué Pasa*, No. 83, 16 de noviembre de 1972, 15-16; "Colegio de Abogados analiza represalias", *El Mercurio*, 13 de diciembre de 1972, 25; "Profesionales reafirmaron espíritu de solidaridad", *El Mercurio*, 8 de diciembre de 1972, 22; "200 profesionales están sumariados", *Las Últimas Noticias*, 10 de enero de 1973, 26..

²⁰⁶ "Subsecretario Cuéllar responde al Presidente del Colegio de Abogados", *El Siglo*, 13 de noviembre de 1972, 23; "Tratan de amedrentar a los abogados de izquierda", *La Nación*, 19 de diciembre de 1972, 1; "Presidente denuncia actitud politiquera del C. de Abogados", *El Siglo*, 2 de febrero de 1973, 9; "El Banco Central y el Colegio de Abogados", *El Mercurio*, 15 de febrero de 1973, 9.

fueron meses donde el miedo tuvo "presencia física y palpable", primando la desconfianza y las suspicacias. El miedo tenía múltiples referentes, cada uno aportando a una desesperación creciente ante el estado de las cosas: miedo a las "bandas armadas", a la "violencia", a "perder los grupos del trabajo y el esfuerzo", a la "división" incluso dentro de las familias, a la "guerra civil" que algunos grupos empezaban a anunciar²⁰⁷. El miedo y la angustia de quienes se identificaban como clase media, entonces, se alimentaba de lo que percibían era un ataque permanente y despiadado a sus valores, prácticas y prerrogativas que les daba razón al "Chile mesocrático".

Todo aquel estado emocional colectivo se tradujo en una radicalización de la lucha contra la Unidad Popular. Con las relaciones rotas, el desabastecimiento y la inflación desbocados, la retórica radicalizada y la movilización en torno a las cruciales elecciones parlamentarias de marzo de 1973, los colegios profesionales se lanzaron sin titubeos a una franca labor de denuncia y agitación contra el gobierno. En virtud del ánimo opositor de la gran mayoría de los colegiados, los profesionales de izquierda fueron definitivamente desplazados de cualquier cargo representativo en sucesivas elecciones²⁰⁸, eliminando con ello toda resistencia interna a las decisiones de sus respectivas directivas. El Colegio de Abogados, por ejemplo, se sumó entusiasta a las denuncias de la Corte Suprema sobre los ataques a la juridicidad y el Estado de Derecho que estaría perpetrando el gobierno. A todo ello se le sumaban ciertas decisiones gubernamentales que no ayudaban a calmar los ánimos, como cuando el hogar del abogado Lidio

²⁰⁷ Cit. en Patricia Arancibia y Paulina Dittborn, "Angustias y esperanzas. La Unidad Popular", en *Historia de la vida privada en Chile*, ed. Cristián Gazmuri y Rafael Sagredo, vol. 3. El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días (Santiago: Taurus, 2007), 252.

²⁰⁸ En las elecciones de abril de 1973 en el Colegio de Ingenieros la lista de la CODE obtuvo el 92,3% de los votos, mientras que en la elección de consejeros de abril de 1973, los abogados afines a la UP -en su mayoría radicales- se abstuvieron de participar, denunciando a la vez graves irregularidades en el proceso electoral. En el Colegio Médico la lista de la UP no pudo presentarse al no reunir el mínimo de firmas, y en junio, en el Consejo Provincial de Talca de ese mismo colegio, los candidatos opositores obtuvieron 114 votos contra 14 favorables a la UP. "Nueva derrota UP en Colegio de Ingenieros", *La Prensa*, 29 de abril de 1973, 9; "Lista gremialista ganó el Consejo del Colegio Médico", *La Prensa*, 27 de mayo de 1973, 3; "El PIR, primera mayoría", *La Prensa*, 9 de junio de 1973, 4; "Irregular elección en Colegio de Abogados", *La Nación*, 16 de abril de 1973, 7

Mera fue allanado invocando la Ley de Control de Armas aprobada por la oposición. La indignación del Consejo General fue pública y unánime²⁰⁹.

Por su parte, ingenieros y médicos resentían de algunas realidades que a su vez eran codificadas en términos inequívocamente antimarxistas. Entre otras cosas, expresaron un temor explícito a la llegada de profesionales y técnicos de países socialistas. El Colegio de Ingenieros denunció que la empresa estatal del cobre CODELCO estaba gestionando asistencia técnica soviética, desplazando con ello a varios ingenieros chilenos, mientras que los médicos denunciaron la llegada de profesionales cubanos, quienes supuestamente no tenían las competencias necesarias²¹⁰. Esto sería parte de una orquestada "campana de desprestigio" que atentaría contra la "dignidad profesional", lo que a su vez agudizaría la emigración de profesionales chilenos al extranjero por razones laborales. Todo ello avalado por el gobierno²¹¹.

Algo aún más grave tuvo que denunciar el Colegio Médico: a finales de junio de 1973 las sedes de Santiago y Concepción sufrieron violentos ataques. En la capital, una poderosa bomba estalló en una de las entradas de la sede del Colegio, sin víctimas fatales. La policía encontró panfletos de una misteriosa organización llamada "Patria o Muerte", donde amenazaba con ajusticiar a un médico por cada niño muerto en hospitales en un eventual paro. El panfleto, además, terminaba con una frase destemplada, una amenaza directa a la sobrevivencia física de quienes asumían una identidad de clase media: "A ahorcar al último burócrata, con las tripas del último burgués". En Concepción, un grupo de militantes del MIR apedreó por varias horas el

²⁰⁹ "Sesión en 22 de mayo de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 5; "Sesión en 4 de junio de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 4; y "Sesión en 25 de junio de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 3.

²¹⁰ Gobierno cambia ingenieros rusos por chilenos", *La Prensa*, 16 de julio de 1973, 4; "Soviéticos desplazan a profesionales", *El Mercurio*, 18 de julio de 1973, 3; "Médicos y auxiliares extranjeros", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*. Volumen XXV, No. 7, julio de 1973, 31.

²¹¹ "Increíble éxodo denuncia el Colegio de Ingenieros", *La Tercera de la Hora*, 30 de mayo de 1973, 2; "Se hacen escasos los epítetos para denostarnos", *El Mercurio*, 4 de diciembre de 1972, 4; "Colegios Profesionales escriben a los partidos", *La Prensa*, 26 de diciembre de 1972, 2.

local del Consejo Provincial, hiriendo a su presidente Carlos Martínez. En MIR reconoció abiertamente el ataque, lo que generó un problema de proporciones al interior de la Universidad de Concepción, donde convivían en su Consejo Superior altos dirigentes del MIR con médicos que ejercían la docencia. Los atentados, de ese modo, empeoraron aún más las relaciones con el gobierno. Los médicos acusaron a Allende de fomentar o al menos permitir a grupos violentistas de ultraizquierda, que incluso operarían al interior de los hospitales con el objeto de amedrentar al personal "democrático"²¹².

Simultáneamente, los huelguistas de octubre siguieron avanzando hacia la unidad de acción. El Comando de Defensa Gremial se transformó en el Movimiento de Acción Gremial, definido explícitamente como una organización de "hombres de trabajo" apolíticos en preparación para un eventual proceso de "regeneración nacional"²¹³. La prensa de oposición bautizó a esta instancia como la "CUT democrática" -en contraste con la Central Única de Trabajadores, controlada por los partidos de izquierda- que aglutinaría a la verdadera "base social de Chile"²¹⁴. Camioneros, profesionales de la CUPROCh, empresarios de la CPC y en menor medida comerciantes detallistas formaban el núcleo de esta organización que tuvo mucho más éxito en ciudades de provincia que en la capital. De hecho, fue fuera de Santiago que se formaron los "multigremios", espacios de encuentro de organizaciones civiles, profesionales y gremiales radicalizadas hacia la derecha, que conformaron la base más dinámica del movimiento. Tanto el Comando centrado en la capital como los multigremios de provincia asumieron un discurso fuertemente antimarxista, donde se esbozaron sin ambages salidas insurreccionales a la situación política. En julio de 1973, de hecho, las cúpulas gremialistas redactaron y entregaron

²¹² "Atentados", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 7, julio de 1973, 11; "Agresiones y atentados denunció Colegio Médico", *Las Últimas Noticias*, 11 de julio de 1973, 32. De más está decir que el grupo "Patria o Muerte" no figuraba dentro de las orgánicas de izquierda, por lo que el nombre era probablemente apócrifo.

²¹³ "Comando nacional de acción gremial", *La Tercera de la Hora*, 5 de marzo de 1973, 16.

²¹⁴ "Gremios: gabinete 'con mando', *Qué Pasa*, No. 123, semana del 23 de agosto de 1973, 13.

privadamente a militares una "declaración de principios" donde planteaban la necesidad de refundar la nación a través de un régimen autoritario que garantizara un lugar a la iniciativa privada y relegara al Estado a un rol subsidiario²¹⁵.

Más allá de las invocaciones apolíticas, lo cierto es que el bloque social contrarrevolucionario incluyó también la participación activa de los partidos políticos de la oposición. En los grupos mesocráticos, la Democracia Cristiana y las fracciones radicales de derecha tuvieron un rol particularmente destacado. De hecho, muchos líderes gremiales y profesionales eran militantes democratacristianos, como el presidente de CONUPIA Luis Zanzi, Juan Jara, líder de los taxistas y las cabezas de los colegios de abogados e ingenieros, Alejandro Silva Bascuñán y Eduardo Arriagada, entre otros. Todos ellos, más cientos de comerciantes, pequeños industriales, trabajadores independientes y profesionales se organizaron en "frentes" para apoyar las candidaturas DC en las parlamentarias de marzo de 1973, mientras líderes gremiales como León Vilarín y Rafael Cumsille llamaban abiertamente a votar por la oposición a Allende²¹⁶. A todo ello se le sumaban contactos directos entre dirigentes políticos y organizaciones sociales. El presidente democratacristiano, Patricio Aylwin, por ejemplo, participó asiduamente de reuniones con los Colegios Profesionales para compartir impresiones y consensuar líneas de acción²¹⁷. Otros políticos decidieron integrar directamente este tipo de organizaciones, como lo hizo el líder radical Julio Durán quien se presentó a las elecciones del Consejo General del Colegio de Abogados en abril de 1973, y desde allí colaboró en endurecer las posiciones frente al gobierno²¹⁸.

²¹⁵ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 77.

²¹⁶ "Chile tiene destino", *Qué Pasa*, No. 88, semana del 21 de diciembre de 1972, 22-23.

²¹⁷ "Sesión en 23 de julio de 1973, Actas Consejo General, 1973, ACAB, 3. A pesar de esto, Aylwin afirma en sus memorias que la DC no participó en la movilización de masas antiizquierdista "aunque gente nuestra -comerciantes, camioneros, profesionales- hayan tomado parte en las movilizaciones, protestas y paros de sus miembros". Patricio Aylwin, *El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del No* (Santiago: Ediciones B, 1998), 27.

²¹⁸ "Sesión en 22 de mayo de 1973, Actas Consejo General, 1973, ACAB, 5

La estrecha vinculación de las organizaciones sociales de clase media con el sistema de partidos dio cuenta de un proceso de politización e ideologización inédito en el "Chile mesocrático". Tomemos el ejemplo de la Masonería. Si bien la Gran Logia había intervenido públicamente cuando consideraba que los principios que defendía estaban siendo amenazados, ello no implicó necesariamente conflictos, ni mucho menos que el propio significado de la Orden estuviese en disputa en la opinión pública. Bajo la Unidad Popular, sin embargo, los ánimos se encendieron. Parte importante de las bases masónicas empezaron a presionar por un viraje más fuertemente antimarxista por parte de la Gran Logia, mientras aquellos que apoyaban a Allende se atrincheraban en las logias donde tenían mayoría. En muchas logias, de hecho, el debate se daba en términos fuertemente ideológicos. Un masón, por ejemplo, envió al Gran Maestro René García Valenzuela un trabajo -o "plancha" en la jerga masónica- leída en su logia donde abordaba la naturaleza totalitaria del marxismo y su incompatibilidad radical con la masonería²¹⁹.

Estas disputas no tardaron en llegar la prensa, dando cuenta de una poderosa corriente antimarxista al interior de la Orden. En la prensa de oposición y en revistas derechistas como *Tribuna* y *Sepa*, varios masones publicaron columnas enfatizando la contradicción que habría entre el actuar del gobierno y la propia sobrevivencia de la masonería, sobre el entendido de que en una eventual dictadura marxista serían irremediabilmente proscritos²²⁰. En otros medios, miembros de la masonería enviaban cartas del director denunciando la inacción de la Gran Logia ante los flagrantes atropellos del gobierno a los principios morales que decía sustentar la Orden²²¹.

La Gran Logia también tenía sus propios problemas. A principios de 1972 el personal de servicio

²¹⁹ Carta de R. Hormazábal G. a René García Valenzuela, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 8 de enero de 1972. Caja s/n, correspondencia GG:MM., 1974-1980, AGLCh.

²²⁰ "Francmasonería y Fuerzas Armadas", *Tribuna*, 20 de octubre de 1972, 4; "Martirologio de la masonería en Cuba", *La Tercera de la Hora*, 23 de junio, 26 de junio, 1ero de julio 4 de julio de 1972, 3; "Incompatibilidad entre masonería y marxismo", *La Segunda*, 28 de mayo de 1972; "Marxismo y masonería", *La Tercera de la Hora*, 2 de junio de 1972, 3; "Habla la francmasonería chilena", *La Tercera de la Hora*, 12 de julio de 1972, 3; "Carta a la Gran Logia de Chile", *Sepa*, 30 de noviembre de 1972, 7.

²²¹ "Masonería y libertad", *Qué Pasa*, 15 de junio de 1972, 5.

del Club de la República -la figura jurídica con la que funcionaba la Gran Logia- decidió sindicalizarse y presentar un pliego de peticiones, amenazando con tomarse el edificio²²². El Gran Maestro García Valenzuela, a su vez, endurecía el tono, y advertía por los medios que "Marcoleta 659 no es Morandé 80. Aquí se hace lo que se estima conveniente y en la forma que se desee"²²³

El bloque contrarrevolucionario fue haciéndose cada vez más transversal. En abril de 1973 se inició una larga huelga de los mineros del cobre de El Teniente -un sector vital para la economía del país-, que recibió la inmediata solidaridad de los partidos y prensa de oposición, así como también de las organizaciones de clase media radicalizadas²²⁴. Pocos meses después, en julio, los camioneros iniciaron un nuevo paro, desatando con ello una confrontación social abierta con el gobierno.

Las razones aducidas eran similares a las de octubre del año pasado, aunque ahora se proclamaba abiertamente que la movilización "es hasta las últimas consecuencias". En Valparaíso, Curacaví, Quilicura, Puente Alto y San Bernardo se concentraron miles de camioneros y sus vehículos en campamentos improvisados, lo que fue imitado en distintas ciudades del país. En la localidad de Nos, al sur de la capital se produjeron violentos enfrentamientos con la policía cuando funcionarios de gobiernos intentaron requisar camiones, algo que Vilarín acusó ser un "verdadero operativo de guerra". Las escenas más dramáticas, sin embargo, se vivieron en el campamento "La Marquesa" de Leyda, cerca del puerto de San Antonio. Allí Mario Montuscky, hasta entonces chofer de buses, cayó baleado por Carabineros

²²² "Memorandum informativo sobre tareas desarrolladas por el Gran Maestro subrogante en el período comprendido entre el 15 de octubre de 1971 y el 11 de marzo de 1972", 13 de marzo de 1972. Caja 59, correspondencia G.:S.:G.:., 1973, AGLCh.

²²³ Las direcciones hacían referencia a la sede de la Gran Logia de Chile y al Palacio de La Moneda, sede del gobierno, respectivamente. "Entrevista de Federico Willoughby al Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, René García Valenzuela, *Las Últimas Noticias*, 9 de junio de 1973.

²²⁴ En el Sindicato Profesional de Dueños de Camiones de Santiago aún se conserva enmarcado un diploma de honor firmado por los dirigentes mineros de El Teniente por la ayuda recibida durante el paro de 1973.

entre el humo de las bombas lacrimógenas. Su funeral se convirtió en una enorme concentración de camioneros y representantes de otros gremios. Con un "mártir" entre sus filas, la movilización del gremio era total. Junto a los transportistas radicalizados participaron activamente sus esposas, quienes se organizaron en el "Comité Coordinador de Mujeres Transportistas" para, primero, tomarse las dependencias de Radio Valparaíso y difundir sus consignas antigubernamentales y, días más tardes, acampar en los jardines del Congreso Nacional para presionar a los parlamentarios. Como ya era la tónica, las mujeres de los camioneros legitimaron su acción como la defensa desesperada de la fuente de trabajo e ingreso de sus familias, amenazadas por un "gobierno déspota" que buscaba destruir a los "hombres de trabajo". La directiva de la Confederación, por su parte, llamaba a construir un sistema social de fuertes tintes corporativos, antagónico a la democracia liberal, donde las "fuerzas vivas" de la nación tuvieran un rol preponderante para ofrecer "soluciones técnicas, documentadas, matemáticas" a los problemas de cada rama productiva²²⁵.

Mientras tanto, el gobierno se defendía redoblando la movilización de sus bases y la distribución de recursos desde el Estado para paliar la desmedrada situación económica. En Temuco, el intendente Sergio Fonseca se ocupaba personalmente de coordinar el abastecimiento de la ciudad en coordinación con las empresas estatizadas y los grupos de camioneros leales al gobierno. Por lo mismo, la relación entre la intendencia y las bases sociales de izquierda se hacía cada vez más estrecha. El intendente Fonseca tenía que proporcionarle resguardo policial a los

²²⁵ "Las autoridades nos llevan por el camino de octubre"; "Los camioneros ponen las cosas en su lugar"; "Faivovich designado interventor", "Confederación apela a la Contraloría por requisición ilegal de camiones"; "¡Cobarde agresión a mujeres de los transportistas!"; "Respuesta pública de León Vilarín al Presidente de la República"; "Tomadas cinco radioemisoras"; "Camioneros no aceptan ultimátum"; "Carta de las mujeres de los transportistas a presidentes de ambas ramas del Congreso"; todo lo anterior en *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, Año III, No. 23, junio-julio-agosto de 1973, 1-80; y "Baleados transportistas de campamento 'La Marquesa' de Leyda por Carabineros" y "Funerales del mártir de Leyda, Mario Montuscky Brito", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 10-13.

comerciantes ambulantes que desafiaban el paro, a la vez que asignar recursos a las fracciones disidentes de los camioneros²²⁶. Con todo, era evidente que la influencia del gobierno en los grupos mesocráticos era marginal. En un telegrama confidencial enviado a Santiago, el jefe provincial señalaba que para el 31 de agosto habían 682 camiones en paro y solamente 170 en poder del MOPARE, más 40 vehículos fiscales en funcionamiento. El comercio, por otro lado, estaba paralizado en un 90% en la zona céntrica de Temuco, aunque en las periferias la situación era algo más normal. La abrumadora mayoría de médicos y dentistas habían parado sus actividades²²⁷.

El gobierno también empezó a perder control sobre funciones críticas para el funcionamiento del Estado. Un grupo de simpatizantes de la Unidad Popular denunció ante el intendente la actuación de Carabineros al disolver una manifestación de los multigremios en Villarrica. Mientras los opositores al gobierno gozaron de todas las libertades para alterar el orden público -atacando con piedras una radio de izquierda-, los carabineros apalearon impunemente a un grupo de obreros que buscaban refugio en un edificio fiscal²²⁸. En el campo el asunto era bastante más grave. Escudándose en la Ley de Control de Armas, grupos de militares accedieron a cooperativas de campesinos mestizos y mapuches, derivando muchas veces en

²²⁶ Carta de Sergio Fonseca Fernández, Intendente de la Provincia de Cautín, a José Calderón, Inspector de la Compañía de Cervecerías Unidas, Temuco, 10 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 481, ARA; Memorandum de Sergio Fonseca Fernández, Intendente de la Provincia de Cautín, al Coronel Pablo Iturriaga. Temuco, 20 de agosto de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 481, ARA; Carta de Miguel Ángel Velásquez a Sergio Fonseca, Intendente de la Provincia de Cautín, Villarrica, 29 de agosto de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 481, ARA; Carta del Sindicato Profesional de Choferes de Camiones de Transporte de la Provincia de Cautín a Sergio Fonseca, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 31 de julio de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 483, ARA

²²⁷ Télex de Intendencia de Cautín a Subsecretaría del Interior, 31 de agosto de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 481, ARA.

²²⁸ Carta de Rubén Peña y otros a Sergio Fonseca, Intendente de la Provincia de Cautín, Villarrica, 31 de agosto de 1973, , Intendencia de Cautín, vol. 481, ARA.

extensas sesiones de tortura a sus líderes, según recuerdan miembros de la comunidad de Nicolás Ailio en la zona de Carahue²²⁹.

Los profesionales se lanzaron junto a los gremios a una confrontación total con el Gobierno. Tal como en octubre, las bases superaron en radicalidad y osadía a las direcciones, que en ocasiones intentaron mantener al menos la apariencia de una apertura a la negociación. La Confederación de Colegios Profesionales decidió en bloque adherir al paro el 20 de agosto, en gran medida presionados por los propios profesionales movilizados. Los abogados, por ejemplo, presionaron al Consejo General de su Orden para asumir una postura más radical ante los acontecimientos. Para ello, muchos consejos provinciales enviaron oficios a Santiago denunciando la quiebra total del Estado de Derecho y exigiendo medidas drásticas²³⁰. Dada la presión de sus bases como la radicalización de muchos de sus miembros, el Consejo General decidió redactar un texto jurídico que fundamentara la inhabilidad del Presidente para el ejercicio de su cargo, que sería finalmente aprobado el 10 de septiembre²³¹. Al mismo tiempo, los médicos decidían no sin conflictos internos el curso de acción a seguir. Una vez decretado el paro camionero en julio, las posturas en su interior se radicalizaron. Mientras la dirección nacional buscaba negociar con el gobierno, las bases de Santiago y provincia rechazaron todo tipo de acercamiento. El 8 de septiembre, en una concurrida asamblea, la mesa directiva fue censurada, y su lugar se eligió una "mesa de guerra", según se señaló entonces, presidida por Ernesto Mundt Flühmann²³².

²²⁹ Florencia E. Mallon, *Courage Tastes of Blood: The Mapuche Community of Nicolás Ailio and the Chilean State, 1906-2001* (Durham: Duke University Press, 2005), 136-47.

²³⁰ "Sesión en 3 de septiembre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 2.

²³¹ "Sesión en 10 de septiembre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 4.

²³² "Histórica Intervención del Colegio Médico de Chile", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 17; "Nuevo conflicto nace en el Colegio Médico", *El Mercurio*, 4 de septiembre de 1973, 23.

Varias organizaciones mesocráticas las emprendieron directamente contra Allende. Abogados, médicos e ingenieros pidieron su renuncia²³³, mientras un Congreso Multigremial celebrado en Concepción el 3 de septiembre exigió abiertamente una intervención militar²³⁴. La aversión radical al gobierno y a Allende tuvo también otras expresiones. Un grupo de logias sureñas le pidió al Gran Maestro enjuiciar al Presidente de la República por "haber transgredido en forma reiterada y ostensible los principios masónicos"²³⁵, mientras el Consejo Regional de la Provincia de O'Higgins del Colegio Médico proponía la expulsión de Allende de sus filas "por la responsabilidad que a este profesional le compete en el desarrollo del caos político, económico y social en que se desenvuelve el país"²³⁶. La oposición mesocrática a Allende y a la Unidad Popular era, a esas alturas, frontal y sin fisuras. La solución, para sus representantes, sólo podría provenir del uso organizado de la violencia militar.

6.- Conclusiones

El 11 de septiembre de 1973, un golpe militar perpetrado por las Fuerzas Armadas y Carabineros acabó con el gobierno de la Unidad Popular, la democracia chilena y el orden constitucional, algo que quedó perfectamente claro para Chile y el mundo con el bombardeo al Palacio de La Moneda. En su interior, Salvador Allende y sus colaboradores intentaron una resistencia efímera, que solo acabaría con el suicidio del hasta ese momento Presidente de la República y la rendición de quienes esa mañana habían acudido a la sede de gobierno. Si bien los militares fueron los protagonistas de la conspiración que hizo posible la ejecución del golpe, fue

²³³ Lo que en algunas ocasiones se vio acompañado de llamados directos a los militares a intervenir, como fue el caso del Colegio de Ingenieros. "A los ingenieros del país", *La Tercera de la Hora*, 5 de septiembre de 1973, 17.

²³⁴ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 86.

²³⁵ Carta de Mario Videla, Logia "Evoluciona" No. 46, Osorno, a Eduardo Plaza de los Reyes, Gran Secretario General de la Gran Logia de Chile, 10 de septiembre de 1973. Caja 57, Correspondencia G.:S.:G.:., 1972 a 1973, AGLCh.

²³⁶ "Los médicos expulsan al Dr. Allende", *Tribuna*, 16 de agosto de 1973, 20.

la radical polarización política y social bajo la Unidad Popular la que abrió las puertas a este desenlace. En este proceso, las organizaciones identificadas con la clase media jugaron un rol político protagónico, en virtud de la amenaza que el gobierno de izquierda representaba para los principios valóricos, morales, económicos e institucionales del "Chile mesocrático".

La noción de "clase media" fue utilizada como un arma de lucha contrarrevolucionaria en los últimos dos años de gobierno, en gran medida gracias a los rasgos virtuosos asociados a ella, codificados como incompatibles con un proyecto revolucionario de corte socialista. Las fracciones radicalizadas de la izquierda, incapaces de disputar ese espacio social y cultural, se refugiaron en una política y una retórica obrerista que proclamaba el advenimiento inevitable de un conflicto final entre clases. Las ansiedades, miedos e inseguridades generadas por estas perspectivas de enfrentamiento y peligro vital colaboraron de modo decisivo en la radicalización de las bases sociales de los grupos mesocráticos, empujando muchas veces a sus representantes a romper relaciones con el Gobierno, sumarse al esfuerzo mancomunado por desestabilizarlo y, finalmente, celebrar su violenta destrucción

Por cierto, la utilización de la noción de clase media en su triple dimensión de identidad, ideal y herramienta de lucha política en clave contrarrevolucionaria no se ajusta con exactitud a aquel grupo social de sujetos identificados como de clase media. En ese sentido, hay una diferencia entre, digamos, la "clase real" y la "clase imaginada" que es necesario destacar. Así, por una parte, el bloque social contrarrevolucionario estuvo compuesto también por el gran empresariado organizado en torno a la CPC, que en algunas coyunturas asumió un rol directivo en la lucha contrarrevolucionaria. Sin embargo, en su presentación pública, intentaron instrumentalizar la noción virtuosa de la clase media en su favor, silenciando con ello su vinculación orgánica con el gran capital. En la lucha política y social contra el gobierno

socialista, en ese sentido, era más eficiente apelar a la virtud mesocrática, al "hombre de trabajo" y a la reacción espontánea de la nación antes que a la defensa explícita de intereses económicos amenazados.

Por otro lado, no todos aquellos sujetos identificados con la clase media siguieron los caminos de la contrarrevolución. La línea que separaba a los opositores y los adherentes a la Unidad Popular no fue un corte limpio entre clases sociales desde la perspectiva de los sujetos que la componían. Como quedó demostrado en este capítulo, hubo grupos importantes de profesionales de izquierda que, sin renunciar explícitamente a su adscripción de clase media, intentaron oponerse a las directivas radicalizadas contra el gobierno y a la mayoría de sus colegas. Lo mismo puede decirse de aquel grupo de camioneros, el MOPARE, movilizado por el gobierno, o los masones que se atrincheraron en algunas logias históricamente de izquierda en favor de Allende. Más aún, los propios partidos de izquierda -también sus grupos más radicalizados, como el MIR- contaban entre sus filas con personas reconocidos y reconocibles como de clase media. Desde esa perspectiva, el bloque social contrarrevolucionario no era una reacción de la clase media, sino que de la "burguesía" y el "imperialismo", enemigos naturales de cualquier intento revolucionario en un horizonte socialista. La clase media, en ese sentido, se transformó en la base del bloque contrarrevolucionario en el sentido de que sus significados fueron hegemonizados por grupos radicalizados hacia la derecha, quienes fueron exitosos en desplazar de todo espacio significativo de representación de la clase media a aquellos que seguían apoyando el proyecto socialista de la Unidad Popular. Bajo la dictadura que entonces despuntaba, algunos de esos desplazados se transformarían en asesinados, torturados, exiliados y perseguidos, mientras que aquellos que celebraban el fin de la izquierda en el poder aplaudirían a los nuevos gobernantes militares y al cruento esfuerzo represivo desplegado entonces.

Capítulo 2

"Aplaudiendo a los vencedores"

El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 fue recibido con algarabía por las organizaciones de clase media. La radicalidad con que había sido asumida la oposición al gobierno de Allende se tradujo en un apoyo sin fisuras, y así lo hicieron saber por todos los canales que tenían a disposición. La izquierda, sus medios de comunicación y todo su amplio aparato cultural desapareció de la esfera pública, quedando lugar sólo para expresiones celebratorias y de apoyo al nuevo régimen. Así, con el Palacio de La Moneda destruido, Allende muerto y la izquierda perseguida con inédita ferocidad, el apoyo social a la naciente dictadura se hizo sentir con fuerza. Tal como los partidos de oposición, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, los grupos mesocráticos se "sincronizaron" rápidamente con la Junta militar compuesta por los cuatro Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Esta "sincronización"¹ fue producto de un consenso forjado en la lucha social contra Allende antes que de una imposición del régimen militar. La dictadura, en ese sentido, fue aceptada y celebrada en virtud de la experiencia reciente de la Unidad Popular, codificada a la vez como épica y traumática. Todo ello se pudo evidenciar en los aniversarios del "11", particularmente en 1974 y 1975, momentos en los cuales se pudo revivir temporalmente la movilización social contra la izquierda. Ese nivel de apoyo e identificación con el nuevo orden de cosas, hizo que los grupos de clase media contrarrevolucionaria justificaran el despliegue de la represión estatal, evidente desde el primer día de la dictadura. Para muchos, la violencia estatal era necesaria para volver a imponer el orden social, marcado por sus jerarquías de clase y la pacificación forzosa de la esfera

¹ Tomo prestado el concepto de "sincronización" de Huneeus, *El régimen de Pinochet*, 96 y ss., a pesar de que lo utiliza más para referirse al consenso creado al interior del Estado en torno a la Junta.

pública. A la vez, al interior de esos grupos, cuando hubo discrepancias al respecto, la reacción fue el aislamiento y el castigo de la minoría disidente, consolidando con ello la "sincronización" con el régimen.

1.- La "sincronización" de la clase media

Profesionales, transportistas y comerciantes, entre otros actores sociales, se organizaron rápidamente para pasar desde una actitud de oposición a una de colaboración en relación al Estado. El mismo día 11, por ejemplo, los dirigentes del Colegio de Ingenieros liderados por Eduardo Arriagada "montaron guardia" en la sede de la institución, donde estuvieron "atentos a prestar los servicios de la orden que el momento que vivió el país requiriera", según decía el acta que levantaron en la ocasión². Pocos días después, el Colegio publicaba una inserción en periódicos de circulación nacional donde anunciaba su decisión de prestar "toda su colaboración a las nuevas autoridades en el puesto que cada uno sea llamado a desempeñar", con el objetivo de "poner en funcionamiento a la brevedad todo el aparato productivo y la actividad de la construcción en conjunto con asegurar el suministro adecuado de los servicios esenciales"³. Varios colegios profesionales formularon llamados en esa misma línea.

Al mismo tiempo, los dirigentes gremiales protagonistas del proceso de desestabilización del gobierno de Allende asumieron la tarea de socializar el llamado a colaborar entre sus bases. El 13 de septiembre, León Vilarín se dirigió por cadena radial a los camioneros. Además de decretar la inmediata vuelta al trabajo, celebró el golpe de Estado, dejando en claro que los "gremios democráticos" lo habían fomentado y anhelado. De allí que los camioneros debían prestar toda su colaboración, porque "Chile lo necesita. La patria así lo requiere". "Colegas

² Documento reproducido en Colegio de Ingenieros de Chile, *Libro blanco de la Ingeniería chilena* (Santiago: Talleres Gráficos Corporación, 1974), 62.

³ "A los ingenieros del país", *El Mercurio*, 18 de septiembre de 1973, 18.

camioneros, en esta hora histórica para nuestra Patria, para la libertad y para el gremialismo democrático, los camioneros que partimos adelante con un paro indefinido, ahora partimos adelante a trabajar por la reconstrucción de Chile", agregó⁴.

Por su parte, Rafael Cumsille inició una gira por el país para dar cuenta de la labor realizada en los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular y de las formas en que se expresaría el apoyo a la Junta. Sintomático de ello fue la visita de Cumsille a la provincia de Cautín⁵. El 15 de diciembre de 1973, las bases comerciantes de Temuco prepararon un apretado programa para la visita de su presidente nacional. En la mañana visitó al Intendente militar de Cautín, además de los jefes de las Fuerzas Armadas locales y al alcalde designado de la ciudad, Germán Becker. A mediodía dio una conferencia de prensa en un hotel céntrico, mientras que a las 4 de la tarde estaba programado un consultivo provincial del comercio detallista. A las 18.00 horas Cumsille visitó las dependencias de "El Diario Austral", marcadamente pro-gobiernista, mientras que a las 7 de la tarde asistió a un cóctel organizado por el Departamento Femenino de la organización, seguido de una comida en su honor. Al día siguiente estaba preparada una concentración pública en un cine de la ciudad, donde hizo explícito el apoyo de la Confederación al nuevo orden de cosas: "Tenemos confianza en la Honorable Junta Militar de Gobierno, que va a llevar adelante un programa en beneficio de las grandes mayorías, que forman sin duda la clase media y los trabajadores". La breve e intensa visita acabó con un almuerzo con autoridades provinciales, líderes gremialistas y representantes de los colegios profesionales locales, dando

⁴ "Habla León Vilarín", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 35

⁵ En Cautín, las bases de la Confederación de Comercio Detallista tenían presencia en la mayoría de los pueblos y localidades, dando cuenta con ello del crecimiento y fortalecimiento de la organización durante la Unidad Popular. Por entonces, existían organizaciones locales afiliadas en Lautaro, Gorbea, Pitrufrquén, Freire, Loncoche, Villarrica, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Puerto Saavedra, Carahue, Pucón, Galvarino, Cunco, Cherquenco, Vilcún, Las Hortensias, Quede y Padre Las Casas, además de la capital Temuco. "El Comercio Detallista de Cautín saluda a su Presidente Nacional, Sr. Dn. Rafael Cumsille", *El Diario Austral*, 15 de diciembre de 1973, 8.

cuenta de la sintonía existente no sólo con el gobierno sino también con el resto de las organizaciones mesocráticas contrarrevolucionarias⁶.

Masones y rotarios se unieron al coro celebratorio de la acción de las Fuerzas Armadas, coincidiendo además en el discurso valórico y moralista con el cual lo justificaron. Si bien durante el gobierno de la Unidad Popular ambas organizaciones evitaron declaraciones políticas explícitas, una vez instaurada la Junta pudieron dejar de lado este tipo de recaudos. El Rotary Club de Santiago celebró la llegada de las nuevas autoridades, interpretándolo como un necesario signo pacificador de los espíritus⁷. Clubes rotarios más pequeños y de provincia se expresaron en términos aún más claros. En el boletín del Rotary Club de San Bernardo -una localidad semi-urbana al sur de la capital-, se justificaba el golpe en tanto la Junta vendría a "moralizar la vida económica de Chile". De allí que "los rotarios debemos responder a este llamado patriótico (...) solicitando, al mismo tiempo, a nuestros amigos que cooperen a esta cruzada de saneamiento nacional", con lo que a su vez podría restablecerse "la honradez y equidad, conceptos desatendidos en los tres últimos años"⁸. Más aún, la conformidad con la situación política y social después del golpe se expresó también en las instancias superiores del rotarismo chileno, en particular con motivo de la celebración del "Instituto Rotario" en 1974, en conmemoración de los cincuenta años de presencia rotaria en el país. Aquel evento, que contaba con el patrocinio de Rotary International, reunió a los más destacados miembros de la organización en el país. Allí se discutieron los avances y retrocesos de la organización, destacando, entre otras cosas, que "con la despolitización de nuestros ambientes los clubes crecerán", y que con el reflujo de la orientación

⁶ "Cumsille llega el 15 a Temuco", *El Diario Austral*, 7 de diciembre de 1973, 11; "Situación del comercio analiza R. Cumsille", *El Diario Austral*, 16 de diciembre de 1973, 7.

⁷ "Retrato hablado de Sergio Valdivieso Valle", *El Mercurio*, 17 de marzo de 1974, 42.

⁸ "La Prueba Cuádruple", *Boletín del Rotary Club de San Bernardo*, año XIX, noviembre de 1973, 1

marxista de vastos sectores sociales, actividades caritativas como la "semana del niño" podrían volver a celebrarse⁹.

Las publicaciones de la Gran Logia de Chile fueron claras y reiterativas en celebrar la intervención militar. Para la revista *Occidente*, el golpe habría sido producto de un "hondo clamor colectivo" que impidió milagrosamente una confrontación violenta entre compatriotas. De allí que se impusiera la necesidad de una operación de "higiene social" que acabara con la "densa atmósfera de odios" a través de la contención forzosa de las pasiones humanas. El autoritarismo militar, en esa perspectiva, era visto como un paréntesis necesario para la elevación moral de la ciudadanía que le permitiera evitar caer en la "politiquería" y los impulsos revolucionarios. El "nuevo rostro" de Chile sería aquel del orden, el respeto y la moderación, valores centrales al ideario mesocrático masón¹⁰.

La rápida "sincronización" de la Gran Logia, por otro lado, le permitió a la masonería continuar con sus actividades en un contexto de fuerte restricción al derecho de reunión. El Gran Maestro René García Valenzuela aseguró a las bases masónicas en la "tenida" o reunión de octubre de 1973 que el gobierno tenía un alto concepto de la Orden, por lo que no habría problemas de ningún tipo. Al mismo tiempo, la dirección de la masonería dirigió una circular a las logias donde llamaba a un "silencio iniciático, reflexivo, constructivo y fraternal", con el objeto de mantener una actitud apolítica absoluta¹¹. Muchas de las logias masónicas participaron de este ánimo comprensivo con las labores de represión y vigilancia de efectivos militares. Las logias de Punta Arenas, en el extremo sur del país, acordaron dejar abiertos estantes y cajones por si se produjera un allanamiento. "Allí están las documentaciones y no hay absolutamente

⁹ Instituto Rotario, octubre de 1974, con motivo del cincuentenario de Rotary en Chile (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974), 24 y 35.

¹⁰ "11 de septiembre de 1973, *Occidente*, año XXIX, No. 250, septiembre de 1973, 1; "Chile ostenta un nuevo rostro", *Occidente*, año XXIX, No. 251, octubre de 1973"; "El camino ascendente...", *Occidente*, año XXX, No. 254, marzo de 1974, 1; "Otra etapa de la reconstrucción", *Occidente*, año XXX, No. 256, junio-julio de 1974, 1.

¹¹ "Cuenta del Gran Maestro", *Revista Masónica de Chile*, año L, No. 8-10, septiembre-diciembre de 1973, 12.

nada que nos pueda afectar ya que nuestra institución es de libertad, paz, tolerancia y fraternidad", informaban a Santiago¹².

La "sincronización" de los grupos mesocráticos en general asumió los marcos del discurso antimarxista que se había popularizado en la lucha social contra la Unidad Popular. El antimarxismo -particularmente el anticomunismo-, por cierto, no era nuevo en Chile. Sus orígenes pueden rastrearse al menos a principios del siglo XX, y adquirió consistencia política y social con el impacto de la Revolución Rusa en Chile, la organización de partidos políticos de izquierda afines al modelo soviético -particularmente el Partido Comunista, fundado en 1922-, y su llegada al poder junto al radicalismo en 1938. En 1948, el gobierno del también radical Gabriel González Videla decretó la ilegalidad del PC en los primeros días de la Guerra Fría, haciendo uso de las imágenes y representaciones demonizadas del comunismo criollo. Todo ello redundaría en la "campaña del terror" organizada contra la izquierda en las elecciones presidenciales de 1964, que colaboraría a derrotar a Allende a manos del demócratacristiano Eduardo Frei. El anticomunismo, entonces, era una sensibilidad política esparcida por parte importante del arco político, aunque con mayor concentración en el mundo conservador y católico. A nivel social, además, muchos grupos adherían a varios de los elementos que sostenían las diferentes versiones del antimarxismo local, inspirado principalmente en el catolicismo, el liberalismo y el nacionalismo. La Unidad Popular y la llegada de la dictadura militar darían rienda suelta a la expresión y repetición pública de estos argumentos, algo en lo que la propia Junta y los aparatos propagandísticos del Estado participarían activamente¹³.

¹² Carta de Alberto Insúa García, Ex Venerable Maestro y Miembro de la Gran Logia de Chile, a Floreal Toledo, 16 de octubre de 1973. Caja 57, Correspondencia G.:S.:G.:., 1972 a 1973, AGLCh.

¹³ He tratado largamente este tema en Marcelo Casals Araya, *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la "campaña del terror" de 1964* (Santiago: LOM Ediciones, 2016).

A nivel local, el lenguaje justificatorio antimarxista puede evidenciarse de un modo más patente. En Temuco, el nuevo intendente militar de Cautín, Hernán Ramírez, recibió cientos de cartas de felicitaciones provenientes de muchos y muy diferentes individuos y organizaciones. Varias de ellas hacían alusión directa a la defensa de la nacionalidad amenazada en virtud del caos social previo. La Fundación del Magisterio de la Araucanía, asociada a la Iglesia Católica, agradeció la defensa de la nación y su bandera, "como única insignia de hermandad"¹⁴, mientras Óscar Quintana, presidente de los Comandos Multigremiales del Cono Sur, felicitaba a los militares por salvar "la brillante estrella de Chile" del marxismo¹⁵. La defensa de la nación por parte de los militares estaba dado también por la derrota de una fuerza política, el "marxismo", caracterizado de "internacional", contradictorio con una "esencia nacional", como lo expresaba el Consejo Regional Malleco-Cautín del Colegio de Enfermeras al Intendente Ramírez¹⁶. Incluso varios meses después, para muchos, como para el Presidente de la Asociación Provincial de Profesores Jubilados de Cautín, el golpe militar había tenido claras connotaciones globales: "Desde el 11 de septiembre de 1973, el Ejército (...) ha limpiado la canallesca ambición de los que se consideraban los únicos capaces de Gobernar al mundo sujetos al imperio de la Rusia Soviética y sus adláteres"¹⁷.

Otros fundamentaron su apoyo a las nuevas autoridades en virtud de la paz y el orden alcanzados luego de experimentar la amenaza de la anomia y la disolución social. El Sindicato Profesional de Viajantes de Cautín señalaba al respecto: "El resentimiento y el odio como escuela, la desintegración moral, social, económica y política, elegidos como caminos que

¹⁴ Carta de la Fundación del Magisterio de la Araucanía a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Padre Las Casas, 21 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 524, ARA.

¹⁵ Carta de Óscar Quintana, presidente de los Comandos Multigremiales del Cono Sur, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 12 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 505, ARA.

¹⁶ Carta del Consejo Regional Malleco-Cautín del Colegio de Enfermeras a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 505, ARA.

¹⁷ Carta de Heriberto Melo Fuentealba, Presidente de la Asociación Provincial de Profesores Jubilados de Cautín, a Francisco Pérez, Intendente de Cautín, Temuco, 7 de septiembre de 1974, Intendencia de Cautín, Vol 569, ARA.

conducían al abismo del sectarismo marxista, han quedado atrás, como imborrable noche negra en la historia democrática de nuestro orgulloso pueblo"¹⁸. En términos semejantes se expresaron otros grupos mesocráticos locales. Pedro Castillo, presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Taxis, se alegraba de que Chile había recuperado "la libertad, tranquilidad y democracia que tanta falta nos estaba haciendo"¹⁹, mientras el Sindicato Profesional de Peluquerías, Salones de Belleza y Ramos Similares valoraba el actuar de las Fuerzas Armadas "por la forma valiente y honrada en que han actuado para devolver a todos los chilenos la seguridad y la esperanza de un futuro mejor"²⁰.

Cientos de personas expresaron su apoyo a las autoridades militares a través de cartas a título personal, sin necesidad de representar a una determinada organización. Algunos sólo escribían para expresar su alivio y agradecimiento, como Laura Calderón, secretaria de la Escuela de Medicina de la sede local de la Universidad de Chile²¹, mientras otros incluían versos poéticos compuestos para la ocasión. Olga Felisa Delgado, habitante de Cunco, escribía: "De las garras del comunismo / después de haber sufrido / las colas, el hambre y la escasez / que los tenía sumido don Salvador / Por eso Chile entero / de Arica a Magallanes / al saber la gran noticia / palpitaban los corazones" (sic)²². También había quienes ofrecían sus conocimientos para colaborar con las nuevas autoridades, como el profesor de castellano Carlino Pineda Becerra, que

¹⁸ Carta del Sindicato Profesional de Viajantes de Cautín y Malleco a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 13 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA.

¹⁹ Carta de Pedro Castillo, presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Taxis de la Provincia de Cautín, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 19 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA.

²⁰ Carta del Sindicato Profesional de Peluquerías, Salones de Belleza y Ramos Similares de Temuco a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 28 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 523, ARA.

²¹ Carta de Laura Calderón de Yáñez a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA.

²² Carta de Olga Felisa Delgado a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Cunco, 17 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 505, ARA.

ponía a disposición sus "condiciones para escribir" para servir "al Nuevo Gobierno, que es de Salvación Nacional"²³.

Por cierto, las cartas de apoyo a los militares no se limitaron a grupos e individuos de clase media. Al apoyo explícito aunque menos estridente de los gremios de grandes industriales, comerciantes y propietarios agrícolas se le sumaban centenares de cartas de Centros de Madres y Juntas de Vecinos de sectores populares, además de comunidades campesinas -varias de ellas mapuche- de la provincia. Todos ellos expresaron su apoyo en términos salvíficos, mostrando de paso un espíritu comprensivo y adaptativo al nuevo orden de cosas. El Centro de Madres "Carmen Lazo" (nombre de una connotada dirigente socialista) de Temuco se apresuró en notificar a las autoridades que "en un gesto patriótico y de franca cooperación al Supremo Gobierno Militar recién establecido, quienes nos liberaron del yugo marxista, devolviéndonos la libertad y las garantías de trabajo para vivir tranquilos y en democracia", habían decidido cambiarle el nombre de su organización por el mucho más neutro "El aroma"²⁴. Por otro lado, la comunidad indígena Juan Huaiquil y Manuel Huenchunao de la zona de Pitraco justificó el apoyo a la Junta en la "libertad de la raza" mapuche²⁵.

La adopción de la retórica y la lógica del anticomunismo para celebrar la situación del país tras el golpe militar implicó también la construcción de un lenguaje particular, afirmador y negador de la realidad a la vez. Lejos de ser un "léxico del terror"²⁶, era más bien un "léxico de la normalidad", en la que el objetivo del discurso era precisamente darle un sentido de continuidad

²³ Carta de Carlino Pineda Becerra a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA.

²⁴ Carta de Lidia Hernández a Hernán Ramírez, Intendente de la Provincia de Cautín, Ñancul Norte, 5 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, vol. 482, ARA.

²⁵ Carta de la comunidad indígena Juan Huaiquil y Manuel Huenchunao a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Pitraco, 29 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol 505, ARA

²⁶ Así es como en general se ha investigado el lenguaje bajo los autoritarismos latinoamericanos. Al respecto véase Marguerite Feitlowitz, *A Lexicon of Terror. Argentina and the Legacies of Torture* (Oxford; New York: Oxford University Press, 2011).

al presente, minimizando así la ruptura institucional provocada por el golpe. Las organizaciones sociales de clase media asumieron los términos de este nuevo lenguaje, que hasta cierto punto implicaba una inversión de los sentidos de conceptos de uso común en la esfera pública chilena, como "democracia" y "dictadura". León Vilarín, por ejemplo, señaló pocos días después del golpe:

Ahora tenemos en Chile un Gobierno Militar, no una dictadura militar. Los chilenos han probado que rechazan las dictaduras, no así el orden, la seguridad, el respeto a las personas y a la propiedad privada, el respeto al Poder Judicial, a la ley y a la Contraloría General de la República. Antes del 11 de septiembre se inventaron muchas frases para salvar la democracia en Chile. Los gremios probaron que las frases sobran y faltaban las decisiones²⁷.

La Junta, en ese registro, sólo habría utilizado la fuerza para detener un curso de acción extraño a la comunidad nacional. Su acción, lejos de conculcar las libertades democráticas, fue entendida como una reacción en favor de la democracia y la libertad. En el ideario antimarxista de Guerra Fría, toda lucha contra el marxismo era por definición una defensa de la democracia, atributos propios del "mundo libre".

En esa misma línea argumentaba Enrique Neiman, miembro de la Logia No. 23 "Cochagua", cuando para justificar el golpe de Estado en la revista institucional de la Gran Logia aseguraba que a los masones "nos gusta la libertad y luchamos por ella". Y agregaba: "Somos enemigos -entiéndase bien- somos enemigos de las esclavitudes económicas, sociales o políticas. Repulsamos las tiranías, las dictaduras, aunque ellas se nos presenten en hermosos envoltorios"²⁸. Al mismo tiempo, la prensa colaboraba activamente con esta inversión de los conceptos. *El Mercurio*, a los seis meses del golpe, señalaba que la "revolución" comandada por los militares -

²⁷ "Visión retrospectiva de las dos batallas que terminaron con el 'imperio marxista'", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 45.

²⁸ Enrique Neiman, "¿Qué hace la Francmasonería?", *Revista Masónica de Chile*, año L, No. 8-10, septiembre-diciembre de 1973, 18.

revolución legítima y necesaria a diferencia del intento socialista- habría traído una "real democracia" orientada hacia un verdadero "destino nacional"²⁹.

Quienes asumieron la retórica antimarxista para explicarse el estado de las cosas después del golpe militar fueron testigos, además, de cómo desde el Estado y los medios de comunicación insistían permanentemente en este tipo de argumentos, con exclusión de cualquier tipo de narrativa disidente. Todo ello hacía plausible las explicaciones legitimadoras de la Junta, uniendo así la experiencia personal con una narrativa oficial y firmemente asentada en el debate público. Fueron los inicios de lo que Steve Stern llama "memoria como salvación", el primer marco interpretativo con el cual asumir la realidad circundante, y que en los primeros meses del régimen no encontró narraciones alternativas con proyección pública que la desmintieran³⁰. Para asegurarse de ello, la dictadura militar sentó las bases de un esbozo de política cultural que buscaba redefinir la nación sin quebrar con ella, dándole una perspectiva de restauración histórica antes que cambio abrupto a la situación vivida. Así, la "salvación" adquiriría un sentido trascendente, de "vuelta a las raíces" y a una situación de "normalidad" que permitía la reproducción de la vida social.

El Estado dictatorial hubo de reformularse parcialmente para dar cabida a su intención política y cultural de redefinición de la nación. A los pocos meses de iniciado el régimen se creó la Secretaría General de Gobierno para asesorar directamente a la Junta en materia de intervención social y cultural. En su interior se creó la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), que tenía a su cargo el control del flujo de información en prensa, radio y televisión, entre otras materias. También se organizó la Dirección de Organizaciones Civiles (DOC) que a su vez tuvo a su cargo a las Secretarías Nacionales de la Mujer, de la Juventud y de

²⁹ "Reconstrucción Nacional", *El Mercurio*, 11 de marzo de 1974, p. 21

³⁰ Stern, *Remembering Pinochet's Chile*, 7–34.

los Gremios. También funcionaron allí la Secretaría de Relaciones Culturales y el Instituto Diego Portales, espacios destinados explícitamente a la difusión de los principios ideológicos conservadores que animaba al gobierno³¹.

La importancia que la Junta le otorgó a la cultura como arma de legitimación política quedó claro con el nombramiento del escritor Enrique Campos Menéndez como "asesor cultural". Desde la Secretaría de Relaciones Culturales impulsaría medidas para socializar el "ser nacional" en clave conservadora, animado muchas veces por concepciones geopolíticas que eran vistas con simpatía por los militares, como el "mes del mar" o la creación de los "Institutos Culturales Comunes" para llevar a cabo esa labor concientizadora a nivel local. Los objetivos declarados de todos estos esfuerzos era promover una concepción nacionalista y antimarxista a través de una recuperación de lo "propio" en contraposición con lo "foráneo", y de ese modo regenerar moralmente a la sociedad³².

Algunas de las políticas culturales implementadas en los primeros años del régimen impactaban directamente en los sectores medios dadas las prácticas tradicionales para participar de la esfera pública. La editorial Quimantú, creada por la Unidad Popular para producir libros a bajo costo al alcance de los sectores populares, fue transformada en la Editora Nacional Gabriela Mistral (ENGM), que produjo decenas de textos de matriz nacionalista y conservadora para justificar a la dictadura. El General del Aire Diego Barros Ortiz, quien asumiera la presidencia de la editorial en los primeros años, señaló que la labor de la ENGM debería orientarse a la difusión de un "testimonio verdadero de lo nuestro" para "concertar el reencuentro de Chile". Así, el país recuperaría la probidad, la paz y la senda del progreso, todo ello "en un marco de verdadera

³¹ *Memoria de Gobierno 1973-1990*, s/e, vol. 1. Político Institucional, c1990, 255-77.

³² El documento que sintetizó de mejor forma las intenciones de la política cultural de la dictadura en sus primeros años es Asesoría Cultural de la Junta de Gobierno y Departamento Cultural de la Secretaría General del Gobierno, *Política Cultural del Gobierno de Chile* (s/e, c1975); Véase también Luis Hernán Errázuriz, "Política cultural del régimen militar chileno (1973-1976)", *Aisthesis, Revista chilena de investigaciones estéticas*, n° 40 (2006): 70-77.

autenticidad"³³. La ENGM, entonces, asumió la tarea de modificar los parámetros con los que se había entendido la nación en el período previo, marcado por el protagonismo de un pueblo movilizado y consciente, reemplazándolo ahora por una noción estática, ruralista, folklórica y esencialista. El pueblo ahora sería representado como unidad indivisa y pasiva, sin arreglo a clases sociales, representado en figuras rurales del Valle Central como el "huaso", elevado ahora a figura arquetípica de la nacionalidad. Antes que cualquier división, entonces, primaba la unidad nacional. De ese modo, cuando los grupos medios, afines a la palabra escrita y principales consumidores de publicaciones periódicas, se enfrentaban a estos textos, se encontraban con narraciones basadas en valores asumidos como propios, y reclamados con vehemencia durante la Unidad Popular por sus organizaciones más representativas: probidad administrativa, respeto a la jerarquía, armonía social, subordinación a la autoridad, orden, eficiencia, trabajo, compromiso y profesionalismo, enmarcados muchas veces en los símbolos republicanos del poder en tanto continuidad de la práctica estatal³⁴.

Todo ello se complementaba con los notorios cambios en el paisaje urbano introducidos por la dictadura. El cambio de régimen, el despliegue del aparato represivo y las necesidades de imponer un nuevo orden estético se tradujeron en un sinnúmero de medidas e iniciativas relativas a la organización y control del espacio y las imágenes que circulaban en ella. De allí que a la represión de toda expresión cultural y artística de izquierda se le sumara un intento por reemplazarla. Los billetes y las estampillas fueron modificados con figuras históricas afines al

³³ "Junta recibió mensaje de Editorial 'Gabriela Mistral'", *El Mercurio*, 3 de marzo de 1974, 34.

³⁴ Isabel Jara, "Graficar una 'segunda independencia': el régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)", *Historia* 44, n° 1 (2011): 131-63; Isabel Jara, "Politizar el paisaje, ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial", *Aisthesis*, n° 50 (2011): 230-52; Karen Donoso, "La batalla del folklore: Los conflictos por la representación de la cultura popular chilena en el siglo XX" (Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2006); Karen Donoso, "Discursos y políticas culturales de la dictadura cívico militar chilena, 1973-1988.", en *Dossier Chile contemporáneo*, ed. Verónica Valdivia Ortiz de Zárata, www.historiapolitica.com (Programa Interuniversitario de Historia Política, 2012); Brunner, *Cultura e identidad nacional: Chile 1973-1983*.

ideario conservador. Edificios emblemáticos de la Unidad Popular, como el que albergó la reunión de la UNCTAD, cambiaron su nombre y fisonomía para adaptarse a las necesidades del nuevo Estado dictatorial. Calles, avenidas, poblaciones y monumentos públicos, del mismo modo, fueron rebautizadas por orden de las autoridades para no interferir en la labor "purificadora"³⁵.

También se adoptaron medidas para afectar directamente el orden visual de la ciudad. El Ministerio del Interior instruyó a las autoridades provinciales borrar rápidamente rayados en las paredes de connotación política, con el fin de darle una apariencia ordenada y pacífica a las ciudades. Muchas veces, estas iniciativas tuvieron la entusiasta colaboración de la población civil, quienes denunciaban en los periódicos la existencia de afiches políticos de algún "desagradable personaje del régimen anterior", como señalaba un lector de *El Mercurio*³⁶. En el bando No. 17 de la Intendencia de Cautín, por otro lado, se pedía la colaboración de la población en el "hermoseamiento de la ciudad, borrando toda propaganda política", para lo cual se contaba con pintura a disposición de los voluntarios, iniciativa que tuvo que ser repetida meses más tarde cuando las fuertes lluvias del sur dejaron al descubierto algunas leyendas políticas en las paredes³⁷.

Al mismo tiempo, complementando las ahora uniformes murallas de las ciudades, el régimen también intentó normar las apariencias y las sensaciones. Los ciudadanos de la provincia de Cautín fueron advertidos de no usar "barba y pelo largo", ni tampoco "indumentaria sucia y mal presentada", ya que podían ser confundidos con "extremistas marxistas" y ser

³⁵ Luis Hernán Errázuriz, "Dictadura militar en Chile: Antecedentes del golpe estético-cultural", *Latin American Research Review* 44, n° 2 (2009): 136-157; Luis Hernán Errázuriz y Gonzalo Leiva Quijada, *El golpe estético: dictadura militar en Chile, 1973-1989* (Santiago: Ocho Libros, 2012).

³⁶ "Cartas", *El Mercurio*, 10 de septiembre de 1974, 2

³⁷ Carta de Pablo Iturriaga Marchesse, Intendente militar subrogante, a las municipalidades de la provincia de Cautín, 3 de diciembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 475, ARA; "Bando No. 17 de la Intendencia Militar de Cautín", Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín Vol. 538, ARA; "Circular No. 156", Santiago, 3 de julio de 1974, Intendencia de Cautín, Vol. 576, ARA.

detenidos. Del mismo modo, desde el gobierno central se ordenaba retirar afiches pro-gobiernistas de cierto nivel de hostilidad contra quienes habían apoyado al gobierno de la Unidad Popular, dado que sólo se debía "disponer de afiches positivos". Orden, limpieza, presentación personal, tranquilidad y optimismo fueron valores fomentados por el nuevo gobierno y recibidos con beneplácito por quienes se habían opuesto a la Unidad Popular³⁸.

El nuevo orden cultural, estético y visual implantado por la dictadura requería también de una movilización activa de sus bases sociales. Para ello, los militares desplegaron una mentalidad bélica, que no sólo se expresaba en el despliegue público de militares armados y el toque de queda decretado desde el primer día, sino también en las iniciativas que incluían a la sociedad civil. El propio Pinochet se encargó de recordar que el país vivía una grave crisis económica y social. "Es como si se viviera un período de post-guerra después de un hecho bélico desastroso", señaló. Por ello, exigía una colaboración total, sin ambigüedades, que permitiera derrotar al enemigo que aún actuaría subrepticamente en el cuerpo social. No se aceptarían, entonces, a quienes "dan crédito a los rumores y a las mentiras", o a los que "no trabajan con dedicación" y "critican con ligereza", ni tampoco a quienes "en lugar de infundir optimismo esparcen la duda y el desaliento". "Todos ellos -agregó- son, en la práctica, enemigos políticos, sociales, económicos o morales de nuestra tarea colectiva, y deben meditar sobre la gravedad de su conducta"³⁹.

Como parte de ese esquema bélico de codificación de la realidad se organizó la campaña de "reconstrucción nacional", entendida como una cruzada solidaria que comprometía a toda la comunidad nacional, y destinada a juntar fondos desde la sociedad civil para paliar la difícil

³⁸ "Bando No. 17 de la Intendencia Militar de Cautín", Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín Vol. 538, ARA; Carta de Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín a Gregorio San Martín, Prefecto de Carabineros de Cautín, Temuco, 20 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 475, ARA.

³⁹ "Chile es un país que enfrenta con decisión un futuro en marcha", *El Mercurio*, 12 de marzo de 1974, 1 y 20

situación económica del Estado⁴⁰. Los grupos mesocráticos contrarrevolucionarios participaron activamente de este esfuerzo. La Confederación de Dueños de Camiones en Santiago organizó en su sede un sistema de recolección de dineros por parte de sus socios para hacer un aporte en conjunto. En provincias, las organizaciones de camioneros hicieron otro tanto, logrando reunir cantidades considerables, como en Valdivia, donde se le hizo entrega al intendente militar más de dos millones de escudos⁴¹. Por su parte, las secciones femeninas de las diferentes organizaciones de clase media se organizaron para entregar el máximo aporte posible. En Concepción, el Comité de Damas del Rotary Club entregaba 50.000 escudos, e instaba a sus socias a seguir colaborando, mientras el Comité de Esposas del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, entregaron escudos, dólares en efectivo y una abultada lista de joyas⁴².

No solamente los protagonistas de la lucha social contra Allende colaboraron con la campaña. En Temuco, por ejemplo, los aportes vinieron de una gran diversidad de organizaciones sociales urbanas. El Obispo de la Araucanía aportó con una pesada cruz con cadena de oro, mientras los funcionarios del Servicio de Prisiones aportaron con dos días de sueldos que se descontarían automáticamente por planilla. También las colonias de inmigrantes se hicieron presentes. La comunidad israelita de la ciudad donó 500.000 escudos, mientras que el Centro Árabe envió al Intendente el detalle de todas las donaciones individuales de sus miembros. A ellos se sumaron pequeñas empresas, empleados particulares y el centro de apoderados del Colegio De La Salle, uno de los más prestigiosos de la ciudad. Otras instituciones organizaron eventos para recaudar fondos, como el Club de Rodeo -quien logró captar más de 300.000

⁴⁰ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 93.

⁴¹ "Nos sumamos a la campaña de reconstrucción nacional" y "Camioneros de Valdivia hicieron un valioso aporte", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 29, abril-mayo-junio de 1974, 19 y 21.

⁴² "Ayuda de los Comités a la Reconstrucción Nacional", *Alborada*, No. 1, septiembre-octubre de 1973, 6; "Un aporte valioso a la reconstrucción", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 10, octubre de 1973, 16.

escudos- y el equipo de fútbol de la ciudad, el Green Cross, que logró organizar un encuentro en apoyo a la Junta con el popular equipo de Colo-Colo de la capital. El partido dejó más de 600.000 escudos de utilidades⁴³.

Muchos ciudadanos, además, donaron bienes de alta carga simbólica. En la oficina de Temuco del Banco Central se contabilizaron 1.188 anillos de matrimonio donados, más centenares de otras joyas y otros objetos de valor. A todos quienes colaboraban, además, se les entregaba nota de agradecimiento por parte de la Junta, documento que para muchas familias se transformó en motivo de orgullo por algún tiempo⁴⁴. Todo esto, por cierto, incluyó a centenares de individuos de sectores populares urbanos y rurales. Comités de pequeños agricultores, comunidades mapuches y aún campesinos a título personal donaron dinero y otros bienes. Manuel Zambrano Barahona, quien se definía a sí mismo como un "simple campesino", envió por carta 1.000 escudos directamente al intendente. Otros aportes fueron aún más modestos. En la pequeña localidad de Pitrufrquén, la mayoría de las donaciones rondaban entre los 100 y 200 escudos. Muchos de ellos tenían apellidos mapuche, y otros tantos lo hacían en representación de comunidades de campesinos⁴⁵.

⁴³ Carta de Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín a Monseñor Guillermo Hartl de Laupen, Obispo de la Araucanía, Temuco, 30 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 475, ARA; Oficio de Jorge Arias, Inspector Zonal Temuco del Servicio de Prisiones, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 2 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 478, ARA; Carta de Víctor Hassón, presidente de la Comunidad Israelita de Temuco, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 30 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA; Carta del Centro Árabe de Temuco a Hernán Ramírez, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 7 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 503, ARA; Carta del Sindicato Profesional de Empleados de Compañía Industrial, Fábrica de Aceite Comestible, Planta Temuco a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 4 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA; "Nómina de erogaciones para el fondo de reconstrucción nacional recibidas en esta oficina", Banco de Chile, Temuco, 7 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA; Carta de Rodolfo Del Prado, presidente del Club Rodeo chileno de Villarrica, a Hernán Ramírez, Intendente de la Provincia de Cautín, Villarrica, 16 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 482, ARA; Carta del Club de Deportes Green Cross a Hernán Ramírez, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 8 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA.

⁴⁴ Agradezco al historiador Pablo Whipple por hacerme notar este punto, y por mostrarme la nota de agradecimiento que guardó su abuela por décadas.

⁴⁵ "Especies recibidas en el Banco Central de Chile, Temuco, para el fondo de Reconstrucción Nacional", Banco Central de Chile, Temuco, c1973, Intendencia de Cautín, Vol. 476, ARA; "Estado del fondo destinado a la

Durante los primeros meses de la dictadura militar la "sincronización" entre grupos e individuos de clase media -así como también de los gremios empresariales y no pocas organizaciones populares, entre otros- fue completa, pública y sostenida. En ese contexto político y cultural no había espacio para la disidencia, legitimando con ello a los grupos que habían participado en la movilización social contra Allende, y motivando también a individuos que se sintieron llamados a expresar de diferentes maneras su apoyo al nuevo régimen. Como recuerda Moisés Pastrían, entonces presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Santiago, su gremio y el resto de los grupos mesocráticos estaban "aplaudiendo a los vencedores"⁴⁶, suspendiendo con ello todo atisbo de juicio crítico. Los aplausos se hacían más frenéticos aún cuando el gobierno y sus bases sociales recordaban la experiencia de la Unidad Popular, buscando allí, en la memoria fresca, las razones más poderosas para dar sentido al nuevo Chile dictatorial.

2.- El "trauma épico" de la Unidad Popular

Los gremios mesocráticos desplegaron toda su capacidad para incidir en el debate público cuando llegó la hora de buscar una legitimidad histórica al golpe y la dictadura. En esa perspectiva, los acontecimientos recientes sólo podían tener sentido si se enfatizaba y celebraba el rol que estos grupos sociales tuvieron en el proceso de desestabilización de la Unidad Popular. Como señalé en el capítulo anterior, el gobierno de Allende había significado una amenaza a las prácticas y valores identificados con el ideal de clase media, y fueron esos elementos los que se pusieron en el tapete una y otra vez, reclamando de paso un rol protagónico en todo ese proceso.

reconstrucción de la economía nacional”, Banco del Estado de Chile, oficina de Pitrufquén, 11 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 476, ARA; Carta de Manuel Zambrano Barahona a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Alto Boroa, 2 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA. Para tener una noción de cuánto significaban esos montos, baste decir que un ejemplar del periódico de Temuco *El Diario Austral* costaba 60 escudos. Sobre este punto, véase también Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 33–34.

⁴⁶ Entrevista a Moisés Pastrían, 22 de septiembre de 2016.

La izquierda en el poder, en ese sentido, había significado un quiebre traumático del "Chile mesocrático", y así fue experimentado por muchos quienes reclamaban una identidad de clase media. Sin embargo, al mismo tiempo, la movilización social y sus consecuencias concretas fueron asumidas como una lucha épica contra un poderoso enemigo, que había podido ser derrotado sólo gracias a la defensa espontánea e instintiva de las fuerzas más virtuosas de la sociedad. De allí entonces que en el relato construido por los grupos mesocráticos pueda ser entendido como un "trauma épico", que daba cuenta tanto del peligro al que habían estado expuestos como el protagonismo público alcanzado al fragor de los combates sociales contra el gobierno de Allende.

Los camioneros con León Vilarín a la cabeza fueron quienes más insistieron en darle resonancia pública a su relato épico de los acontecimientos. En *El Camionero*, el golpe militar aparecía como consecuencia directa de los dos paros del transporte, y de la alianza social que se habría tejido en torno a ellos. El propio León Vilarín era presentado como el "alma de la lucha de los Dueños de Camiones, primero, y de todo un pueblo, después". Por ello, si en Chile era posible vivir entonces bajo la legalidad, en paz y con las condiciones para trabajar, era por el coraje de los transportistas. "El pueblo de Chile tiene claro que la Historia ha sido escrita ahora con sangre y sudor de camioneros". Vilarín, al mismo tiempo, era objeto de homenajes y reconocimientos públicos, en los que se buscaba construir una memoria épica de los años anteriores centrados en los camioneros. Hubo incluso quienes echaron mano al lenguaje poético para expresar su admiración: "Cuando todos olviden nuestras penas / estos años tan largos y tan ruines / aprenderán los niños en la escuela / tu nombre Vilarín, León de Chile". Y seguía: "Pero

tu nombre, Vilarín, tu nombre / escrito quedará en nuestra memoria / nombre de paladín, nombre de rueda / que conduce a su pueblo a la victoria"⁴⁷.

Como en todo relato épico, en la narrativa camionera sobre la UP hubo formidables enemigos, héroes y anti-héroes. Luego del golpe se señaló que el objetivo del gobierno y todo el aparato estatal era destruir a los camioneros. Para ello habrían utilizado al MOPARE, al que incluso habrían armado para liquidar físicamente a los transportistas "democráticos". De allí que algunos nombres no podían caer en el olvido. En *El Camionero* se acusaba abiertamente a los dueños de camiones que habían apoyado al gobierno, como el caso de Gosimir Maslov Taфра, de Punta Arenas, quien había enviado una nota al Ministerio del Trabajo exhibiendo con orgullo que sus vehículos seguían trabajando en medio del paro de octubre. No sin ironía, la publicación señalaba que Maslov ahora consideraba "justo y digno" el gobierno militar. Era, por cierto, una advertencia para todos quienes no se habían plegado a las movilizaciones: "las actuales autoridades deben tenerlos siempre presentes por lo que hicieron en defensa de la UP, aunque ahora se declaren irrestrictos 'juntistas'"⁴⁸. En contraste, los camioneros recordaban a sus mártires, en tanto prueba fehaciente del sacrificio realizado por la patria. Ello incluía a quienes habían fallecido luego del golpe, como el caso de Fernando Fuenzalida de la comuna de San Miguel de la capital, quien habría muerto a causa de golpizas policiales durante el paro de 1973⁴⁹.

El "trauma épico" de la Unidad Popular fue asumido en gran medida por las mujeres, tanto aquellas que participaban de grupos mesocráticos como quienes se organizaron con prescindencia de otra categoría de identidad social. Para muchas, la movilización contra Allende

⁴⁷ "¡Luchar o perecer!", y Nina Donoso Correa, "A León Vilarín Marín", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 4 y 44.

⁴⁸ "En Punta Arenas: Flota de camiones no se ha plegado al paro", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No.31, agosto de 1974, 80.

⁴⁹ "Fernando Fuenzalida Bouilliet", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 32, septiembre-octubre de 1974, 29.

había tenido consecuencias liberadoras dada el inédito protagonismo público alcanzado. El discurso camionero sobre su pasado reciente insistió en homenajear a la "mujer chilena" en tanto reserva moral de la nación, y en particular a las mujeres de los camioneros quienes participaron activamente -y muchas veces con autonomía de las directivas masculinas- en los paros nacionales. Moisés Pastrían, con un discurso bastante más radical que el que recordaría décadas después, señalaba entonces que sin el concurso de las mujeres camioneras "lo habríamos perdido todo; hogar, libertad, esposa, hijos, trabajo y dignidad". Las mujeres, de ese modo, habrían sido el factor principal que explicaría que "Chile siguiera siendo Chile, el camionero siguiera siendo libre, sus hijos no fueran enseñados en el catecismo del odio y la destrucción, y que la noble condición de mujer y madre fuera nuevamente respetada"⁵⁰. Más aún, fueron las propias mujeres del gremio las que hicieron oír su voz a la hora de los balances. Berta Molina de Soler publicó en *El Camionero* un extenso relato donde visitó los principales hitos de la lucha gremial, graficándolo con vívidas palabras que daban cuenta de la disyuntiva vital que habían enfrentado: "fue un momento solemne", "no era un juego", "era a vivir o morir". A través de esa experiencia transformadora, las mujeres habrían descubierto un rol más activo en la sociedad, que buscaban proyectar hacia el futuro en el "nuevo Chile":

Todas las experiencias vividas dentro de este tiempo me han hecho ver que como mujer, antes vivía a oscuras, como sonámbula, haciendo y diciendo siempre las mismas cosas, viviendo sólo para mí y los míos: no sabía de lo que era capaz de hacer. No sabía que podía encontrarme con valores humanos tan magníficos como mis nuevas amigas camioneras igual que yo. Creo que a ellas les pasa y piensan lo mismo. Por eso estamos unidas ahora dando la otra batalla, de menos riesgo, pero sí más dura, la batalla por el resurgimiento de Chile⁵¹

⁵⁰ "Siducam de Santiago se mantiene siempre activo", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 29, abril-mayo-junio de 1974, 35-36.

⁵¹ Berta Molina de Soler, "Soñando despierta", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 30, julio de 1974, 55. La épica femenina fue también difundida por otros canales, en iniciativas de memoria con apoyo gubernamental. Al respecto véase Teresa Donoso Loero, *La epopeya de las ollas vacías* (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974).

La actuación protagónica en la lucha contra el "marxismo", entonces, no sólo dio legitimidad social, sino que también modificó los parámetros con los que estos grupos se presentaban en la esfera pública. De allí que era vital definir con precisión quiénes habían sido los verdaderos luchadores sociales contra Allende, y quiénes habían mostrado ambigüedad, como una forma de establecer jerarquía entre los victoriosos. Camioneros, comerciantes y profesionales organizaron homenajes públicos en favor de quienes eran identificados como protagonistas de la victoria, incluyendo -además de líderes gremiales- a militares, empresarios, políticos y periodistas⁵². Con todo, el énfasis central estuvo puesto en dejar establecido el protagonismo de las organizaciones de clase media en la caída de Allende. León Vilarín era insistente en el punto. En la publicación gremial daba cuenta de los grupos sociales a los que había que reconocer. Exceptuando a "campesinos" y "obreros", todo el resto eran categorías tradicionalmente entendidas como de clase media:

El campesino, el agricultor, el obrero, el empleado, el técnico, el piloto de naves aéreas, el tripulante de naves marítimas, el industrial, el comerciante perteneciente a la Cámara Central de Comercio y la SÍDECO, el profesional abogado, médico, la profesional enfermera, los odontólogos, los profesionales, representados por CUPROCH, los educadores, los profesores universitarios, los pequeños industriales y artesanos, los funcionarios públicos, los servidores del Servicio de Prisiones, representados por ANFUCH, los empleados del comercio, representados por el Frente Nacional de Trabajadores del Comercio, los estudiantes, los jóvenes en general, y las mujeres, las heroicas mujeres de Chile, todos, absolutamente todos, se convencieron que la única fuerza capaz de paralizar el país eran los gremios, y así fue⁵³.

La centralidad de la clase media en la oposición a la Unidad Popular era una demanda plausible en el Chile de entonces. Aquel sentimiento se basaba en una experiencia reciente de movilización que había trastocado el rol de las organizaciones gremiales, sociales y profesionales que tradicionalmente habían tenido en el "Chile mesocrático", y que en consecuencia había

⁵² "Homenaje", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, Año XII, No. 65, septiembre de 1974, 35; *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 89; "Cartas al director", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVI, s/n, enero-febrero de 1974, 9.

⁵³ "Comenzamos un año con fe en Chile", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 26, enero de 1974, 1

redefinido la propia noción de clase media. De hecho, algunos análisis hechos en el extranjero de distinto color político coincidían en este punto. El *New York Times* señalaba que el "golpe de Estado militar que derrocó al gobierno (...) no fue la revuelta de palacio usual en América Latina, ya que vino en la estela de huelgas políticas de sectores de clase media" motivado por "un fuerte declive en su nivel de vida y expectativas"; mientras que el *Chicago Tribune* aseguraba que "la clase media, viendo su existencia amenazada, empezó a organizar unidades de autodefensa barrial", siendo vital para la caída de Allende⁵⁴. Desde la otra vereda, el historiador socialista Ralph Milliband reconocía el impacto de la oposición de clase media en la caída de Allende, aunque la considerara hasta cierto punto inevitable dado el programa de gobierno⁵⁵.

Con todo, la adscripción a una identidad de clase media no era suficiente para reclamar un puesto en el bando victorioso. El propio Vilarín estaba consciente de ello cuando le expresó preocupado a los miembros de la Junta la eventual llegada de los "paracaidistas", es decir, todos aquellos que buscaban posiciones de poder al interior del gobierno sin haber participado del movimiento social contrarrevolucionario del período previo⁵⁶. En esa misma línea, durante los meses posteriores al golpe se dieron algunas disputas públicas sobre el rol de determinadas personas y organizaciones mesocráticas en la oposición a la Unidad Popular, aunque no pasaran de algunos intercambios por la prensa. Primero fue el turno de Eduardo Arriagada, presidente del Colegio de Ingenieros, quien fue objeto en dos ocasiones de críticas públicas que cuestionaban su compromiso con la alianza social contrarrevolucionaria. Arriagada recibió el apoyo irrestricto

⁵⁴ "Allende's Undoing: A Middle Class Stung By Declining Fortunes", *New York Times*, 15 de septiembre de 1973, 12; "Middle Class Felt Threatened. Allende 'Forged' Military Coup with His Socialist Policies", *Chicago Tribune*, 30 de septiembre de 1973, 20.

⁵⁵ Ralph Milliband, "The Coup in Chile", *Jacobin Magazine*, 11 de septiembre de 2016: <https://www.jacobinmag.com/2016/09/chile-coup-santiago-allende-social-democracy-september-11/>. Visitado el 12 de septiembre de 2016. Originalmente publicado en *Socialist Register*, noviembre de 1973.

⁵⁶ "Visión retrospectiva de las dos batallas que terminaron con el 'imperio marxista'", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 47.

de su Colegio, y no entró en una polémica mayor en virtud del llamado del gobierno al "apaciguamiento de los ánimos en aras del espíritu de confraternidad que debe reinar en estos momentos entre los chilenos"⁵⁷. Por su parte, la masonería también fue puesta en tela de juicio en la prensa. En el periódico *La Segunda* se instaba a la Orden a "sacar el habla ahora" en favor de la dictadura, mientras que en *El Mercurio* se le acusó de estar infiltrada por el "marxismo", lo que explicaría el silencio de sus autoridades en el "proceso de derrumbamiento de nuestras formas de vida democrática" durante el gobierno de Allende⁵⁸.

Los profesionales también sintieron la necesidad de construir y difundir un relato legitimador de su actuar en los acontecimientos que desencadenaron el golpe militar. Para ello redactaron y difundieron textos con profusión de documentos y evidencias. El Colegio de Abogados había redactado un "informe" para probar la ilegitimidad del gobierno de Allende días antes de la intervención militar, y una vez la Junta en el poder lo imprimieron en folletos para su difusión. Allí se describía cómo "el relajamiento, la anarquía y la inmoralidad" habían paralizado al país, afectando de modo particular a los profesionales y la clase media. Allende, por ello, era calificado de "tirano de régimen", por lo que era posible ejercer el "derecho de rebelión" de la tradición jurídica tomista⁵⁹.

Lo propio hizo el Colegio de Ingenieros. En un extenso documento titulado "Libro Blanco de la ingeniería chilena" se quiso dejar "testimonio" de que "cuando el país se sumerge

⁵⁷ "Las confesiones" (carta al director), *Ercilla*, No. 2025, semana del 22 al 28 de mayo de 1974, 4. El resto de las breves polémicas en: "Las confesiones" (Carta al director), *Ercilla*, No. 2020, semana del 17 al 23 de abril de 1974, 5; "Las confesiones", *Ercilla*, No. 2021, semana del 24 al 30 de abril de 1974, 5; "Las confesiones", *Ercilla* No. 2022, semana del 1 al 7 de mayo de 1974, 4; "Situación de ingenieros", *El Mercurio*, 24 de abril de 1974, 2; "Actuación de Ingenieros", *El Mercurio*, 28 de abril de 1974, 42.

⁵⁸ "Institución cuyo pensamiento debiera escucharse", *El Mercurio*, 10 de mayo de 1974, 2; "La masonería, una voz muda", *La Segunda*, 22 de febrero de 1974, 4. Este tipo de críticas generaron algún debate epistolar en la prensa: "El comunismo y la judío masonería" (carta al director), *La Segunda*, 13 de marzo de 1974, 6; "La masonería chilena" (carta al director), *La Segunda*, 23 de febrero de 1974, 6.

⁵⁹ Colegio de Abogados de Chile, *Quiebra del estado de derecho durante el régimen marxista de Salvador Allende y adhesión del Colegio de Abogados al nuevo gobierno: antecedentes* (Santiago: Imprenta y Litografía Roma, 1973), 8-9.

en un desastre económico, social y moral, donde los que gobiernan con incapaces, arbitrarios y sectarios, el deber de los ingenieros es realizar todas las acciones y vencer todos los obstáculos hasta conseguir superar ese caos", según señalaban en el prólogo. El "Libro Blanco" estaba destinado a dar una explicación sobre las razones que llevaron al Colegio a asumir un rol político a través de una síntesis histórica documentada. El relato cronológico se inicia en los primeros meses del gobierno de Allende, denunciando la contradicción entre una retórica amistosa con los profesionales y una práctica que amenazaba su normal funcionamiento en el ámbito laboral. En particular, criticaban con fuerza la "absoluta ignorancia" y la "carencia de antecedentes" de las nuevas autoridades, quebrando con ello las jerarquías laborales y sociales implícitas en la administración del Estado. El relato, además, estaba acompañado de fotografías que daban consistencia a los alegatos, en los que se dejaban ver tensiones callejeras, empresas nacionalizadas que impedían la entrada a los técnicos y las resultantes movilizaciones sociales contra el gobierno. El tono del relato ingeniero, al igual que en otros casos, iba y venía desde el trauma a la épica. Por una parte, se señalaba, en el fragor de la lucha social y los ataques del gobierno a los gremios mesocráticos, "los hogares se vieron desarticulados y humillados para conseguir su subsistencia. La inflación crecía como un flagelo mortal", mientras que "los trabajadores fueron colocados en la alternativa ominosa de acatar una ley de reajuste que eliminaba el derecho elemental de petición o sufrir el hambre. Era ya una forma de dictadura"⁶⁰. Por otro lado, esa misma lucha habría sido digna y justa, dado que habría sido "en nombre de la voluntad del pueblo" para restaurar la "normalidad económica", la "paz", la "tranquilidad" y "seguridad"⁶¹.

⁶⁰ Colegio de Ingenieros de Chile, *Libro blanco de la Ingeniería chilena*, 33.

⁶¹ Ibid., 63.

Con la base empírica del "Libro blanco" de los ingenieros, Eduardo Arriagada fue explícito en reclamar un lugar central de la clase media profesional en la memoria salvífica del golpe. "Fueron los ingenieros, médicos, arquitectos y otros profesionales y técnicos quienes se convirtieron en un dique para las pretensiones de quienes trataban de imponer a la ciudadanía un régimen que no aceptaba", señaló en entrevista para el periódico *La Patria*. Y agregó: "Fueron ellos los que, junto a otros sectores de la producción y de la clase media, contando apenas con el respaldo moral de millones de chilenos, detuvieron la marcha de la nación e hicieron ver a quienes estaban equivocados la necesidad de enmendar rumbos".⁶²

Por otro lado, el régimen militar no fue ajeno a los esfuerzos por difundir una "memoria como salvación" para legitimarse a sí mismo. De hecho, fue su principal impulsor. Sin embargo, ello no significa que la visión demonizada y moralizante sobre la Unidad Popular haya sido una mera imposición desde el Estado. Por el contrario, la forma en que se dio la sincronización de los grupos mesocráticos, entre otros, evidencia hasta qué punto la dictadura articuló un discurso salvífico en función de los elementos expresados por su base social, aunque introduciendo matices que lo diferenciaban.

Desde el primer día, el régimen y la prensa afin difundieron la idea de que las autoridades de la Unidad Popular carecían de las competencias intelectuales y morales para ejercer su cargo, centrando su campaña de desprestigio en la figura del propio Allende. Más aún, comenzaron a circular noticias de "descubrimientos" hechos por los militares de documentos probatorios que revelaban una verdad hasta ese momento oculta: el "marxismo" se disponía a clausurar definitivamente el orden democrático a través del asesinato de las cúpulas militares, políticas y empresariales. La noticia vino primero desde el Ministerio del Interior y luego replicada por

⁶² "Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país" (Entrevista a Eduardo Arriagada), *La Patria*, 21 de diciembre de 1973, 3

otras autoridades. Lucía Hiriart, esposa de Augusto Pinochet, declaró a la prensa que la izquierda iba a usar la Parada Militar del 19 de septiembre para atentar en forma masiva contra las Fuerzas Armadas, y que para ello esperaban utilizar túneles subterráneos bajo el Parque Cousiño⁶³.

A principio de noviembre de 1973 las acusaciones en la prensa y los relatos épicos y traumáticos de organizaciones pro-gobiernistas tomaron cuerpo en el "Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile", publicación gubernamental de autoría de asesores civiles como el historiador Gonzalo Vial⁶⁴. Allí se exponía de modo sistemático el llamado "Plan Z", nombre con el cual se habría bautizado la conspiración izquierdista contra los representantes más destacados del mundo militar y la oposición civil. Para darle asidero al plan, el texto revelaba "documentos" incautados por los militares donde se detallaba las formas que asumirían los asesinatos en masa. La izquierda, en ese relato, ya no sólo era ineficiente e inmoral, sino que era capaz de acciones que ponían en cuestión su propia humanidad. En esa línea, el "Plan Z" era la confirmación última del carácter salvífico del golpe, que asumía ahora un carácter vital al imponer una lógica binaria y excluyente entre "ellos" o "nosotros"⁶⁵. Más aún, la intervención militar era presentada como un acontecimiento de carácter providencial, de origen trascendente, que venía a enderezar el rumbo del desarrollo nacional luego de la grave amenaza representada en la Unidad Popular. El propio Pinochet se encargó de apuntalar los elementos providencialistas de la presencia militar en el poder al hacer referencia en reiteradas ocasiones a la divinidad y a su rol como elegido para rescatar de la disolución a la comunidad nacional⁶⁶.

⁶³ Cit. en Flavio Cortés A., "Miedo, amenaza y régimen político: causas del apoyo prestado al régimen autoritario por sectores de la clase media chilena (1973-1985)" (Tesis de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1987), 50.

⁶⁴ *Libro blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de septiembre de 1973* (Santiago: Editorial Lord Cochrane, 1973).

⁶⁵ Para detalles del "Plan Z", véase Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 47-57.

⁶⁶ Al respecto véase Humberto Lagos Schuffeneger, *El general Pinochet y el mesianismo político* (Santiago: LOM Ediciones, 2001).

A diferencia de la épica camionera o los documentos de los colegios profesionales, el "libro blanco" del gobierno puso el énfasis sólo en la dimensión traumática de la experiencia de la Unidad Popular, fijando allí su legitimidad histórica. Las fuerzas sociales que se movilizaron contra Allende, de hecho, están prácticamente ausentes del texto oficial, suprimiendo toda consideración épica del proceso. El caos político y económico, en ese registro, no habría sido sino consecuencia de los fines perversos que perseguían las autoridades marxistas, y no parte de un conflicto social mayor con participación de los grupos mesocráticos.

La legitimación histórica del régimen militar no se basó exclusivamente en el "trauma" de la Unidad Popular, sino que al poco andar se hizo extensiva también a la experiencia de democracia de masas del Chile del siglo XX. Por una parte, la Junta caracterizó al golpe militar como la "segunda independencia", estableciendo un paralelo explícito entre 1810 y 1973. Con ello se establecía simbólicamente el carácter "extranjero" del enemigo derrotado y la naturaleza emancipadora de la victoria. La dictadura militar, en esa línea, tendría una profundidad histórica que superaría con creces a la coyuntura, dando cuenta con ello de un ánimo "restaurador" de un orden fracturado. Ese pasado idealizado a reconstruir, por otro lado, fue identificado explícitamente con el "período portaliano", que en la tradición conservadora había sido el período de construcción del Estado-nación a través de un gobierno autoritario, impersonal y justo en las décadas centrales del siglo XIX. Estas apelaciones al ideal portaliano no eran nuevas en Chile. De hecho, toda una generación de intelectuales conservadores de la primera parte del siglo XX insistió en el carácter decadentista del desarrollo histórico nacional, desde los años de gobierno justo, a la corrupción y mezquindad de la democracia de masas de sus días. La "unidad nacional", en ese sentido, se habría roto junto a las jerarquías sociales que mantenían un sistema desigual pero armónico. Para muchos representantes de la tradición conservadora, la Junta

militar venía a restablecer la unidad perdida a través de un regreso a la probidad y autoridad con que el poder estatal habría sido ejercido en los tiempos de Diego Portales⁶⁷.

Si bien la noción decadentista del conservadurismo y su admiración por el período portaliano implicaban una rechazo al "Chile mesocrático" del siglo XX -particularmente a la democracia de masas, la política de clases y la expansión de la burocracia estatal-, la valoración del orden, el autoritarismo y la impersonalidad del poder resultaba muy atractivo para los grupos de clase media que se habían movilizado contra la Unidad Popular. La Confederación de Comercio Detallista, de hecho, tenía desde hace varios años (y hasta nuestros días) a Diego Portales como "patrono" de la organización, en tanto referente de comerciante probo, austero y con sentido nacional. Cada 6 de junio, en el "día del comerciante", se homenajeaba al estadista a los pies de su estatua, a un costado del Palacio de La Moneda. Durante la dictadura, las referencias a Portales se multiplicaron, llegándose a convertir en un importante lugar de encuentro ideológico entre los comerciantes y el gobierno. En comunas típicamente de clase media como Ñuñoa en Santiago, la organización local de comerciantes estuvo detrás de la organización del capítulo comunal del "Círculo Portaliano", destinado a promover la imagen y principios de Diego Portales. El presidente de los comerciantes ñuñoínos, Jorge Salamé, buscaba con ello dejar en claro que "el Comercio también es parte de nuestra Nación", por lo que "continuará desempeñando su labor de servicio a la comunidad cada vez en mejor forma, guiado por el espíritu de Diego Portales"⁶⁸. Al mismo tiempo, la directiva nacional de los comerciantes

⁶⁷ Sobre el pensamiento conservador y la noción decadentista, véase Cristián Gazmuri, "La idea de decadencia nacional y el pensamiento político conservador chileno en el siglo XX", *Estudios Sociales*, n° 28-29 (1981): 33-54; Renato Cristi y Carlos Ruiz, *El pensamiento conservador en Chile: seis ensayos* (Santiago: Editorial Universitaria, 1992). Sobre las distintas miradas al período portaliano, incluyendo la conservadora, véase Simon Collier, "The Historiography of the 'Portalian' Period (1830-1891) in Chile", *Hispanic American Historical Review* 57, n° 4 (1977): 660-90.

⁶⁸ "Texto del discurso pronunciado por el Presidente de la Asociación de Comerciantes con motivo de la Inauguración del Capítulo Ñuñoa del Círculo Portaliano", *Ñuñoa en marcha. Órgano oficial de la Asociación de Comerciantes de Ñuñoa*, Año I, No. 3, agosto de 1976, 11

instauraba el "Premio Diego Portales" para reconocer a quienes de algún u otro modo habían colaborado con el mejoramiento de la sociedad y de los comerciantes en particular. En 1974 el premio recayó ni más ni menos que en los cuatro miembros de la Junta militar⁶⁹.

La "sincronización" de la clase media, entonces, estuvo anclada en su experiencia histórica codificada como traumática y épica a la vez. Ese relato, proyectado a la esfera pública, buscaba legitimar la situación política y social que entonces se vivía, como también reclamar un lugar en ella, en virtud de su rol en la desestabilización del gobierno de la Unidad Popular. El gobierno, por su parte, impulsó aquella legitimidad histórica, aunque sin necesariamente poner al centro a los gremios mesocráticos, o a cualquier otro grupo social. Más aún, la legitimidad histórica de largo alcance, que incluía al derrotero político chileno en el siglo XX, conllevaba cierta crítica a las formas en que la propia clase media se había desarrollado, aunque ello no se haya hecho de forma explícita. A pesar de ello, hubo momentos durante los primeros años de dictadura en que el apoyo social transversal pudo ser expresado públicamente, volviendo temporalmente a revivir las jornadas de movilización social contrarrevolucionaria. Esos momentos, si bien escasos, concentraron las formas que asumió la "sincronización" entre el gobierno y los grupos sociales mesocráticos.

3.- Los ritos públicos

La dictadura militar aprovechó los momentos conmemorativos que tenían a su disposición para consolidar y difundir su retórica legitimadora y sus objetivos refundacionales. El 11 de octubre de 1973, al cumplirse un mes del golpe, Pinochet pronunció un extenso discurso en el Edificio Diego Portales frente a autoridades militares, políticas y sociales. Los mismo hizo el 11 de marzo del año siguiente, a los seis meses de gobierno, donde además dio a conocer la

⁶⁹ "Condecorados Miembros de Junta de Gobierno", *El Mercurio*, 6 de septiembre de 1974, 21.

"Declaración de Principios", documento preparado por asesores civiles para darle consistencia ideológica al régimen⁷⁰. Otros días del calendario de efemérides nacionales, como el 21 de mayo o el 19 de septiembre, cumplieron un rol semejante. Con todo, la fecha más importante para la ritualidad dictatorial durante los primeros años -especialmente 1974 y 1975- fue el 11 de septiembre, momento en el cual no solamente el gobierno desplegaba todo su aparato propagandístico para celebrar un año más en el poder, sino que también sus bases sociales -con las organizaciones mesocráticas como protagonistas- hacía uso del espacio público para expresar abiertamente su apoyo al régimen. La "instalación" de la fecha conmemorativa, entonces, no sería solamente responsabilidad del gobierno, sino también sería iniciativa de aquellas organizaciones que sintieron como su deber salir a copar las calles para demostrarte a observaciones locales e internacionales la magnitud del apoyo interno a la dictadura⁷¹.

El primer aniversario del golpe militar provocó el entusiasmo desbordante de las organizaciones laborales, gremiales y sociales de clase media por participar y celebrar a los vencedores. De allí que la organización de actos públicos conmemorativos hayan tomado forma hasta cierto punto por presión social antes que por iniciativa completa del gobierno. Algunas semanas antes del 11, una extensa lista de instituciones sociales había pedido al gobierno organizar un acto masivo⁷². Lo mismo sucedió en provincias. En Temuco, la Intendencia de Cautín recibió decenas de cartas requiriendo la organización de un acto público, provenientes de todo tipo de remitentes: colegios, asociaciones de apoderados, estudiantes universitarios, empleadores agrícolas, organizaciones femeninas, funcionarios bancarios y, por supuesto,

⁷⁰ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 67–68.

⁷¹ Cfr. Azun Candina, "El día interminable. Memoria e instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile (1974-1999)", en *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas "in-felices"*, ed. Elizabeth Jelin (Madrid - Buenos Aires: Siglo XXI, 2002).

⁷² "Crece adhesión para el acto del día 11", *El Mercurio*, 26 de agosto de 1975, 25.

comerciantes, camioneros y colegios profesionales. Las peticiones vinieron incluso de pequeñas empresas, como talleres mecánicos, almacenes y farmacias, entre otros⁷³.

El líder camionero León Vilarín pidió a las autoridades decretar el 11 feriado nacional "para que el país pueda exteriorizar su júbilo por el movimiento de esa fecha", y también celebrar los logros alcanzados en el primer año de dictadura, "que ha devuelto a nuestro pueblo la paz social, trayendo a los espíritus una tranquilidad que se había perdido (...) y, lo principal, que han restablecido la libertad, la que ahora se encuentra garantizada por el respeto a las leyes"⁷⁴. Si bien esa propuesta en particular fue rechazada, el gobierno accedió a autorizar actos de masas en las principales ciudades del país. En Temuco, la Intendencia determinó que el acto se llevaría a cabo frente a la Biblioteca Municipal, ante lo cual el municipio comenzó a cambiar y reparar luminarias públicas, entre otros arreglos, para dar mayor lustre al evento. Con todo, a pesar del apoyo oficial, las autoridades enfatizaban una y otra vez que el acto "corresponde a una iniciativa espontánea de la ciudadanía", y no una imposición desde el gobierno central. No solamente había que encauzar el apoyo social de un variado grupo de organizaciones sociales, sino que también había que dejar en claro que la iniciativa venía de la ciudadanía para acallar resquemores sobre la legitimidad del régimen⁷⁵.

Para la prensa, el gobierno y las organizaciones, la exhibición pública de apoyo al régimen con motivo de su primer aniversario era una oportunidad única para disputar el significado que había adquirido la dictadura, particularmente en el extranjero. *El Mercurio*, por ejemplo, señalaba entonces que las Fuerzas Armadas requerían un "apoyo civil durable" para poder alcanzar las "metas nacionales", matizando de ese modo el carácter exclusivamente

⁷³ Carta de Camilo Zirotti de Agostini a Francisco Pérez Farías, Intendente militar de Cautín, Temuco, 9 de septiembre de 1974, Intendencia de Cautín, Vol. 569, ARA, entre decenas de otras.

⁷⁴ "Camioneros piden que el '11' sea feriado nacional", *El Mercurio*, 27 de agosto de 1974, 20.

⁷⁵ "Comunicado de la Intendencia de Cautín", Temuco, 5 de septiembre de 1974, Intendencia de Cautín, Vol. 569, ARA; "Perfectamente iluminado recibirá Temuco el '11'", *El Mercurio*, 4 de septiembre de 1974, 33.

castrense del régimen. Este "poder social", integrado de manera subordinada al poder estatal, debía ser despolitizado y centrado principalmente en los gremios contrarrevolucionarios⁷⁶. Del mismo modo, y en consonancia con la retórica gubernamental, las mujeres fueron identificadas como otra base de apoyo que debía ser expresada en la esfera pública. En los días previos al "once", la prensa difundió entrevistas a mujeres pro-régimen -muchas de las cuales participaron en "Poder Femenino" durante la Unidad Popular- para dar cuenta de la transversalidad del apoyo a las celebraciones. Aura González, directora de una escuela en Ñuñoa, señaló que se debía celebrar "la recuperación de los valores nacionales", mientras que María Flühmann, funcionaria de la Caja de Previsión de Ferrocarriles del Estado, estaba especialmente preocupada de que "la gente salga a las calles para demostrarle justamente al mundo la importancia de esta fecha". La asistente social Nelly de Gallo fue más explícita: "Si no lo celebramos a mí me daría la idea de que todo lo que pasó el 11 de setiembre fue un sueño y tengo miedo de despertar y encontrarme todavía en la UP. Por eso pienso que hay que salir a la calle y exteriorizar nuestra alegría"⁷⁷.

En Santiago, el acto de masas se llevó a cabo en el Parque Bustamante, un sector residencial de clase media acomodada, donde se levantó un escenario en el que actuaron artistas afines al régimen: "Los Huasos Quincheros", "Los Perlas", Ginette Acevedo, Jorge Moncada, Gloria Simonetti y Antonio Zavaleta, entre otros. Los asistentes, que habrían bordeado los 200.000, según cálculos oficiales, coreaban consignas alusivas al momento: "El marxismo ya se fue, adelante Pinochet", "El que no salta es de la UP", "Viva el General Pinochet", además del ya clásico "Chile es y será un país en libertad", entre otras⁷⁸. El carácter festivo del momento estaba dado por el entusiasmo de una muchedumbre, una vez más, movilizada en torno al antimarxismo.

⁷⁶ "FF.AA. y Poder Social", *El Mercurio*, 1erp de septiembre de 1974, 37.

⁷⁷ "El Poder Femenino: ánimo y preparativos para el 11", *El Mercurio*, 27 de agosto de 1974, 21.

⁷⁸ "Masiva presencia juvenil", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1974, 37; "Pobladores: celebramos la libertad ganada el 11", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1974, 41.

Para los participantes, la jornada del Parque Bustamante fue vivida como una fiesta. La actualización y proyección pública del "trauma épico" de la Unidad Popular daba sentido a la celebración, como lo demuestran las múltiples admoniciones a no "olvidar" el pasado reciente y a celebrar el presente y las perspectivas futuras. Esa memoria, además, ahora podía ser compartida con desconocidos en la calle, pudiendo de ese modo enlazar experiencia personal con relato social de modo concreto y visible. De hecho, es probable que el uso del espacio público de modo masivo y sin conflictos haya causado gozo y cierto alivio, luego de la experiencia de violencia callejera cotidiana bajo la Unidad Popular, primero, y de férreo control militar con restricciones de todo tipo, después. Todo ello, a su vez, le imprimió un fuerte tono carnalesco al evento, recordándole a más de uno las "fiestas de la primavera" celebradas en la capital hasta no muchos años atrás. Los comerciantes, por ejemplo, prepararon estandartes, banderas, pitos y gorros para sus asociados⁷⁹, llamando al público a unirse a la celebración. La fiesta, además, no reconocía exclusiones a priori, excepto al "marxismo", el enemigo principal. De allí que se enfatizara la representatividad nacional de quienes participaron del evento. Según la prensa, la composición social transversal del público daba cuenta de la popularidad del régimen, así como también de su carácter "nacional", al responder a las aspiraciones de la mayoría social. La celebración pública era, según decían, el mejor mentís contra la "campaña antichilena"⁸⁰

Muchos de los miles de asistentes al acto del Parque Bustamante acudieron en tanto miembros de alguna organización. Entre ellas, destacaron las organizaciones mesocráticas que buscaron reclamar un lugar protagónico en la esfera pública en el contexto de la celebración social de la dictadura. Para ello, estos grupos se prepararon y se coordinaron en las tareas de organización del evento: los camioneros adornaron sus vehículos con leyendas alusivas para

⁷⁹ "Comercio estuvo presente con banderas y estandartes", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1974, 41.

⁸⁰ "Manifestación del 11 de septiembre, *El Mercurio*, 13 de septiembre de 1974, 3.

trasladar gente al lugar del evento, mientras los profesionales se ponían a disposición de Rafael Cumsille y León Vilarín para la ejecución de las diferentes tareas del momento, según expresó Eduardo Arriagada, entonces presidente de la Confederación de Colegios Profesionales⁸¹. El mismo tipo de alianzas entre organizaciones de clase media se reproducían en pequeñas localidades de provincia. En Chimbarongo, a unos 150 kilómetros al sur de la capital, el sindicato de camioneros local organizó el acto de aniversario del golpe en conjunto con el Rotary Club, la Cámara de Comercio y el Cuerpo de Bomberos, además de autoridades comunales y policiales⁸².

Para el segundo aniversario del golpe militar, en 1975, el gobierno recuperó la iniciativa y organizó un acto oficial donde las organizaciones mesocráticas y otros grupos sociales volvieron al rol de espectadores antes que protagonistas del evento. Para ello, recurrió colaboradores civiles, como Eduardo Boetsch, con larga experiencia en campañas y movilizaciones contrarrevolucionarias⁸³. Esta vez, el acto se llevó a cabo en el Paseo Bulnes, frente al aún destruido Palacio de La Moneda. Los organizadores quisieron imprimirle al acto dos valores central para la legitimación del régimen en ese momento: la "libertad", tal como se entendía desde el campo conservador en clave de guerra fría, y la "unidad", frente a una amenaza internacional que atentaría contra toda la nación. La "libertad", en ese registro, sería el antónimo radical del marxismo, por lo que toda lucha antimarxista era por definición emancipadora. Para darle forma a ese principio se construyó un amplio altar donde se encendió la "Llama eterna de la libertad" por parte de un campesino, una madre de familia y un estudiante, "anónimos

⁸¹ "Cita en la Av. Bustamante", *El Mercurio*, 6 de septiembre de 1974, 1 y 10.

⁸² "El 11 de septiembre en Chimbarongo", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 32, septiembre-octubre de 1974, 48.

⁸³ Eduardo Boetsch, ingeniero y latifundista nacionalista, se había especializado en la lucha política antiizquierdista. En las presidenciales de 1964 organizó parte de lo que se conocería como "campaña del terror" contra Allende, y bajo el gobierno de la UP, junto a grupos ultranacionalistas de derecha, organizaría diferentes actos y marchas para desestabilizar el gobierno. Casals Araya, *La creación de la amenaza roja*, 437; Power, *Right-Wing Women in Chile*, 76.

representantes de la resistencia civil contra el comunismo y de la lucha dada por la libertad", según rezaba el folleto que el gobierno imprimió luego de los festejos⁸⁴. En la gesta libertaria, entonces, la sociedad civil se representaba mediante tipos ideales individuales cuyo radio de acción era la esfera privada, y no mediante grupos organizados orientados hacia lo público, como había sido en la más espontánea celebración de 1974. La unión entre el gobierno y la base social, del mismo modo, se representó de manera figurativa antes que práctica. Para ello se hizo uso de símbolos que se alejaban bastante del repertorio republicano que el Estado chileno había usado durante el siglo XX. El fuego, de hecho, fue central en la ceremonia, en tanto buscaba significar la "depuración" de la patria a la que estaría abocada la Junta, según señalaba a la prensa el mismo Boetsch⁸⁵. Dado que la ceremonia se realizó al atardecer, la "llama de la libertad" adquirió mayor realce en el centro de la muchedumbre, separada por una gran explanada de ángulos rectos con aire marcial. El fuego adquirió aún mayor protagonismo cuando parte importante de las decenas de miles de asistentes -probablemente 200.000, aunque el gobierno lo aumentaba a 500.000- encendió también antorchas personales, en un paralelo poco discreto a la estética política fascista⁸⁶.

Al mismo tiempo, las celebraciones oficiales estuvieron orientadas a mostrar un sentido de unidad nacional en torno al gobierno, nuevamente en un intento por dar una respuesta ritual a la "campaña internacional" que la dictadura acusaba en su contra. Esa unidad, por cierto, no se expresó solamente en la diversidad de tipos sociales representados en la ceremonia y en el público espectador, sino también en el énfasis en una supuesta "armonía social" en todo el país. El acto público, según la prensa, se habría desarrollado sin "injurias, amenazas o violencia",

⁸⁴ *Chile. 11 de septiembre de 1975* (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975), 2. El énfasis en la "libertad" también estuvo dado por los cánticos y consignas coreadas durante la ceremonia. La canción "libre" de Nino Bravo, de hecho, se convirtió en una especie de himno oficial de la jornada. "Gigantesca concentración", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1975, 1 y 12.

⁸⁵ "Antorcha de la Libertad encenderá el Gral. Pinochet", *El Mercurio*, 11 de septiembre de 1975, 21 y 28.

⁸⁶ *Chile. 11 de septiembre de 1975*, 2.

como en antaño, dada la unión férrea entre grupos socialmente desiguales. La policía sólo se habría limitado a sonreír ante el paso de las columnas de ciudadanos que se dirigían al lugar de la ceremonia, animados todos por el mismo espíritu "patriótico" de rechazo al "marxismo" y de apoyo al gobierno⁸⁷. El mismo Eduardo Boetsch, además, intentó por entonces organizar sin mucho éxito un "Movimiento de Unidad Nacional" para darle cierta organicidad al apoyo social a la dictadura en su segundo aniversario, dividido por categorías sociales donde figuraban los más destacados representantes de cada sector⁸⁸.

Los ritos celebratorios impulsados tanto por las bases sociales del régimen como por el mismo gobierno se basaron en la experiencia reciente de la Unidad Popular para darle coherencia al momento, reviviendo temporalmente la movilización social contrarrevolucionaria de los últimos meses del gobierno de Allende. Para ello, los gremios mesocráticos intentaron ponerse al centro del relato celebratorio, aunque el gobierno quiso de manera sutil poner el énfasis en una ciudadanía anónima y en la propia "gesta" de los militares. Con todo, el sustrato valórico de los actos respondía a los que las organizaciones de clase media habían reclamado en las calles en el período anterior: orden, autoridad, austeridad, paz y uso indisputado del espacio público para reclamar su lugar en la sociedad, y por ello respondieron con una asistencia masiva a las celebraciones. La dictadura dio lugar a estos momentos de reconocimiento para afirmar su propio discurso legitimador, dando cabida a la vez a las bases sociales que presionaban por la oportunidad de actualizar su protagonismo en la lucha contra la izquierda. La ritualidad dictatorial, de ese modo, constituyó un reemplazo simbólico a la esfera pública del "Chile

⁸⁷ "Sólido apoyo ciudadano a la Junta de Gobierno", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1975, 25.

⁸⁸ En los insertos pagados en diarios de circulación nacional se incluían cientos de nombres para cada "Frente" del movimiento: profesionales, deportistas y artistas (Jaime Guzmán, Pedro Carcuro, "Coco" Legrand, Manuel Pellegrini); dirigentes estudiantiles; dirigentes comunales; dirigentes gremiales (León Vilarín, Manuel Valdés, Julio Bazán), etc. *El Mercurio*, 31 de agosto de 1975, 29-30; 3 de septiembre de 1975, 21; 5 de septiembre de 1975, 25; 7 de septiembre de 1975, 30-31.

mesocrático"⁸⁹. Si bien por una parte se suspendía el debate democrático y la confrontación abierta de opiniones, por otro lado se daba lugar a la movilización controlada y carnavalesca a la vez para conmemorar la épica social. El apoyo festivo a la dictadura y a la propia experiencia social de lucha contra la izquierda, implicaba también reconocer, desear y justificar las consecuencias del autoritarismo militar. De hecho, el apoyo social al régimen conllevó suspender las consideraciones republicanas sobre el uso legítimo de la violencia contra la disidencia política. Cuando los niveles de represión y de militarización de la sociedad se hicieron evidentes, la respuesta de los grupos mesocráticos contrarrevolucionarios fue de justificación, por una parte, y de desplazamiento de la disidencia interna, por la otra.

4.- La justificación de la represión

Las Fuerzas Armadas derrocaron a Allende con un despliegue de violencia inusitado para lo que los chilenos de entonces habían visto. Como un acto de fuerza, que implicaba también un potente mensaje a toda la sociedad, la Fuerza Aérea bombardeó el Palacio de La Moneda, símbolo de la democracia republicana y el poder presidencial. Desde ese momento, el ejercicio del poder requeriría también altas dosis de violencia directa, como también de exhibición del potencial militar para normar la vida social. Todo ello cumplía un doble objetivo: por una parte, desarticular rápidamente lo que se imaginaba era una izquierda marxista organizada y con poder de fuego; y, por otra parte, legitimarse como un régimen de emergencia ante quienes recibían con distintos niveles de beneplácito la intervención militar. Como consecuencia, el paisaje urbano se militarizó rápidamente. Soldados con armamento de guerra poblaron las esquinas en los primeros meses, haciendo plausible la retórica bélica de la dictadura y la supuesta amenaza

⁸⁹ Sobre la importancia de los ritos bajo contextos autoritarios, véase, para el caso mexicano del siglo XX, Claudio Lomnitz, *Deep Mexico, Silent Mexico: An Anthropology of Nationalism* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001), 145–64.

inminente de la "subversión". Durante las noches, el toque de queda transformaba el espacio público en un lugar prohibido, ocupado sólo por militares. El sonido de las ráfagas de balas daba cuenta de la presencia de una lucha que sólo podía vislumbrarse desde el espacio doméstico.

La dictadura militar no tardó en organizar un cuerpo centralizado de represión y exterminio, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a cargo del entonces coronel Manuel Contreras. Su crecimiento explosivo en hombres y recursos estuvo directamente relacionado al poder que Pinochet adquiriría en la Junta militar y el Estado. La DINA y Contreras, de hecho, respondían directamente al Comandante en Jefe del Ejército, y sus radio de acción no se limitó a la represión directa a las orgánicas de izquierda, sino también a la vigilancia de la burocracia estatal y de los nuevos funcionarios militares. La consolidación del poder de Pinochet y Contreras se hizo muchas veces a contrapelo de varios de los miembros más destacados de la oficialidad del Ejército. Muchos de ellos no tardarían en ser desplazados de sus posiciones de poder, y aún otros -como los generales Lutz y Bonilla- fallecerían en extrañas circunstancias⁹⁰.

Lejos de ser prácticas ocultas a los ciudadanos, la violencia y la represión militar fueron visibles para el que quisiera ver, especialmente durante los primeros meses de la dictadura. De hecho, entre septiembre y diciembre de 1973 se produjeron la mayor cantidad de víctimas fatales por acción de agentes del Estado en dictadura. En Santiago, muchos cadáveres eran abandonados en las calles, hasta que la policía -avisados por vecinos del sector- los llevaban al Servicio Médico Legal, que durante estas semanas estuvo continuamente superado por el exceso de trabajo⁹¹. Por si eso no fuera poco, las operaciones represivas del Estado se anunciaban

⁹⁰ Sobre la DINA, véase Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 50–56; Huneeus, *El régimen de Pinochet*, 103–8; Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*, 90–114; Manuel Salazar, *Las letras del horror*, vol. I. La DINA (Santiago: LOM Ediciones, 2011); Carlos Dorat Guerra y Mauricio Weibel Barahona, *Asociación ilícita: los archivos secretos de la dictadura* (Santiago: Ceibo Ediciones, 2012); Policzer, *The Rise and Fall of Repression in Chile*. Sobre la muerte de Bonilla: Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 84–87.

⁹¹ John Dinges y Pascale Bonnefoy, “Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte”, *Archivos Chile*, 2012, <http://archivoschile.org/2012/01/ejecuciones-chile-septiembre-diciembre-1973/>.

cotidianamente en los diarios de circulación nacional, tanto aquellas directamente orientadas hacia los partidos de izquierda como también aquellas destinadas a mantener el control en sectores populares. Sin ningún atisbo de ánimo crítico, *El Mercurio* informaba en agosto de 1974 que 300 pobladores habían caído presos en una redada llevada a cabo por efectivos militares. Todos aquellos que estuvieran relacionados con armas, explosivos o "literatura subversiva" serían enviados al campo de Pisagua, en pleno desierto de Atacama, para iniciar los interrogatorios⁹².

La represión fue entendida, aceptada y justificada desde diferentes perspectivas, muchas de las cuales hacían relación de algún modo u otro con las expectativas y ansiedades que habían mostrado las organizaciones mesocráticas durante la Unidad Popular. La "subversión" -es decir, toda actividad política de izquierda- era asociada muchas veces de forma explícita con la delincuencia. El hecho de que los operativos sobre las poblaciones de la capital se informaran con un tono normal buscaba ese efecto: bajo la dictadura, las ideas de izquierda eran ilegales, y por ende delictuales. Del mismo modo, las ideas y prácticas "subversivas" sólo podían emerger desde la marginalidad y la inmoralidad, no constituyendo por ende una posición legítima. Toda promoción de la disidencia, entonces, era un atentado contra el orden y la paz social que tanto habían extrañado los opositores a la Unidad Popular. Para *El Diario Austral* de Temuco, por ejemplo, la relación era evidente. Junto con celebrar la llegada de las autoridades militares a la provincia, el periódico anunciaba con satisfacción que la delincuencia había bajado en un 95%, lo que "redunda en favor de una sociedad que pretende vivir más tranquila"⁹³.

⁹² "300 detenidos en redada masiva contra delincuentes", *El Mercurio*, 26 de agosto de 1974, 21. La exhibición de la violencia ha sido uno de los temas tradicionalmente olvidados en el estudio de los autoritarismos. En muchas ocasiones, lejos de ser un secreto, era un elemento que se difundía a viva voz en la esfera pública. Así como sucedió en el Chile de Pinochet -y en otras dictaduras latinoamericanas- también pasó en la Alemania Nazi con respecto a la apertura e utilización de campos de concentración, profusamente publicitados en la prensa. Gellately, *No solo Hitler*, 77-102.

⁹³ "Delincuencia reducida en un 95% en Temuco", *El Diario Austral*, 15 de octubre de 1973, 8.

Pero la represión fue también abordada directamente, y procesada como un castigo ejemplar y justo, aunque sus expresiones más directas podían resultar dolorosas por su severidad. En periódicos circulaban historias moralizantes que buscaban facilitar la digestión de lo que los ciudadanos podían observar en las calles. Abraham Ortega, nombre de un supuesto funcionario de Ferrocarriles en Temuco, le escribió una carta pública a su hijo detenido por las autoridades. En ella insistía una y otra vez en el hecho de que Chile se estaba reconstruyendo, y que él como tantos jóvenes habían sido engañados por la Unidad Popular. Confiado en el criterio de las autoridades, el padre esperaba que el asunto se solucionara pronto y su hijo pudiera regresar a casa. Para él, los verdaderos culpables eran los dirigentes izquierdistas, y no los "jóvenes idealistas", quienes sólo debían esperar el cumplimiento de sus leves castigos para volver a la vida civil y trabajar por el engrandecimiento de la patria⁹⁴.

Con todo, los relatos y experiencias cercanas con la represión circularon con mayor fluidez en el ámbito privado. La propia dictadura, de hecho, empujó a parte importante de la vida social hacia lo doméstico, clausurando varias de las instancias de socialización existentes con anterioridad⁹⁵. Allí, los comentarios corrían de boca de boca, y más allá de que a nivel público la acción represiva fuese presentada como un acto necesario de restablecimiento del orden social, muchos pudieron notar los alcances reales que ésta tenía. Roberto Gesche, ingeniero de Temuco, recuerda que podía notar en el ambiente la tensión generada por la represión militar, y sólo pudo tener algunos datos más firmes a través de su familia. Su hermano era veterinario y oficial de Ejército. Durante los primeros meses de la dictadura lo notó muy taciturno en las reuniones familiares. Después supo que había visto "cosas muy duras para él" y había pedido el retiro, pero

⁹⁴ "Carta de un padre a su hijo detenido en Temuco", *El Diario Austral*, 11 de noviembre de 1973, 3.

⁹⁵ Algo que, por cierto, fue común a las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta. Guillermo A. O'Donnell, *Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*, (Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1999), 63-77.

se le había negado bajo la amenaza de intentar cometer una "traición a la patria". Por otro lado, el esposo de una de sus primas era carabinero, y en privado contaba alguna de las "atrocidades" que se cometían entonces. En una oportunidad, Gesche vio pasar con sus propios ojos a dos cadáveres por el río Bío-Bío. En el momento pensó que lo más sensato era recuperarlos y llevarlos donde aquel mismo carabinero de su familia. Cuando llegó donde él fue inmediatamente advertido: "esto no lo hagas nunca más"⁹⁶.

Hubo quienes, también desde la protección de la esfera privada, impulsaron y legitimaron la persecución a quienes habían participado del gobierno de la Unidad Popular. El Consejo Provincial de la Federación de Comerciantes de ferias libres de Cautín instaba a las autoridades militares a "reprimir el vandalismo" del "totalitarismo marxista", mientras el Comité de Pequeños Agricultores de Catirrehue llamaba a "terminar con los extremistas"⁹⁷. Al mismo tiempo, la delación, si bien difícil de dimensionar, colaboró en los esfuerzos de las autoridades militares por identificar a sospechosos de actividades "subversivas". Una carta anónima de "un chileno democrático" al intendente de Cautín denunciaba a Luis Parada, jefe de la oficina de Impuestos Internos en Temuco hasta el momento del golpe, de ser un "connotado marxista", y de "desprestigiar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas". Para otras personas, como para Delia Riquelme Ortiz, la represión no sólo era necesaria, sino que también implicaba un acto de justicia en la repartición de puestos públicos a nivel local. Aprovechando el hecho de que el

⁹⁶ Entrevista a Roberto Gesche, 28 de marzo de 2016.

⁹⁷ Carta del Consejo Provincial de Cautín de la Federación de Comerciantes de Ferias libres, ambulantes y estacionados de Chile a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 13 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA; Carta del Comité de Pequeños Agricultores de Catirrehue a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Puerto Saavedra, 7 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 517, ARA

oficial del registro civil de Trovolhue y su esposa -"ambos agitadores comunistas"- habían sido detenidos, Riquelme pedía para sí ese puesto de trabajo⁹⁸.

En los grupos mesocráticos, la represión y sus efectos no eran un tema de debate interno o de preocupación institucional, mucho menos de crítica pública. El rencor acumulado durante los meses de lucha social contra la Unidad Popular colaboró en suspender toda consideración de empatía para con los perseguidos, aún a sabiendas de la dureza que imprimían en esa labor los militares. Moisés Pastrían recuerda que por entonces en el Sindicato Profesional de Dueños de Camiones de Santiago el tema estaba vedado de las reuniones del Consejo y la Asamblea de socios, y así consta en las actas⁹⁹. En la revista del gremio, además, la presencia militar en las calles y el toque de queda eran muchas veces tratados con humor, en un claro ánimo de normalizar la situación¹⁰⁰. Más aún, hubo casos de camioneros que colaboraron directamente en la represión. Juan Francisco Luzoro, miembro del sindicato de Paine, ayudó a detener y trasladar a campesinos detenidos que luego serían fusilados por carabineros pocos días después del golpe militar. Según la investigación judicial respectiva, Luzoro también habría ayudado a arrojar los cuerpos a un río cercano, incluyendo a un sobreviviente¹⁰¹.

La excepción a la regla fue el Colegio de Abogados. Las razones eran evidentes. Por su condición de órgano para-estatal de supervisión y resguardo del Estado de derecho y el Poder Judicial, el Colegio tuvo que inmiscuirse en las formas que comenzó a adquirir la justicia militar para procesar a los detenidos y, sobre todo, para justificar los asesinatos extra-judiciales

⁹⁸ Carta anónima a Hernán Ramírez, Intendente de la Provincia de Cautín, Temuco, 14 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 548, ARA; Carta de Delia Riquelme Ortiz a Hernán Ramírez, Intendente militar de Cautín, Trovolhue, 17 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 503, ARA.

⁹⁹ Entrevista a Moisés Pastrían, 22 de septiembre de 2016.

¹⁰⁰ "Toqueteando el 'toque'", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 25, diciembre de 1973, 48.

¹⁰¹ En 2016, Luzoro fue condenado a 20 años de prisión por su colaboración con la represión. "Caso Paine. Ministra en Visita condena a 20 años a uno de los involucrados", *El Mostrador*, 1ero de abril de 2016. <http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/01/caso-paine-jueza-de-la-suprema-condena-a-20-anos-a-uno-de-los-involucrados/>. Consultado el 5 de junio de 2016.

cometidos por agentes del Estado. Por una parte, entonces, el Colegio tuvo que lidiar con los mecanismos estatales instaurados por la dictadura para la persecución y procesamiento de quienes eran identificados como enemigos del régimen, mientras que al mismo tiempo, en su discurso público e interno, expresaba un apoyo irrestricto a la Junta, proveyendo incluso de argumentaciones jurídicas e históricas para fundamentar su existencia¹⁰².

El Consejo General comenzó a organizar listas de abogados defensores para los detenidos por los militares, con el objetivo expreso de mantener las formas legales apropiadas en el juicio¹⁰³. Al mismo tiempo, luego de conversaciones con las autoridades, representantes del Colegio pudieron acceder a centros de detención para dar cuenta de la "normalidad" de los procesos y, de ese modo, legitimarlos¹⁰⁴. Sin embargo, la situación no sería tan fácilmente controlable. Pocos días después del golpe, el abogado de filiación radical Eugenio Velasco Letelier envió una carta al Consejo General donde, junto con llenar de términos elogiosos a la Junta, solicitó interceder ante el gobierno para que se dieran a conocer los nombres de los detenidos y, de ese modo, tranquilizar a los familiares. El asunto se volvió más complejo cuando se comenzó a constatar que el número de abogados detenidos iba en aumento. El Consejo recibió peticiones de amparo para Olga Palacios, Carlos Cepeda, Eduardo Long Alessandri y Arsenio Poupin, entre otros, sin acordar una definición clara al respecto. Un nutrido grupo de abogados democratacristianos liderados por Adolfo Zaldívar y Andrés Aylwin, junto al propio Eugenio Velasco, empezaron a patrocinar peticiones de amparo ante el Consejo General en favor de una larga lista de colegas, incluyendo algunas figuras políticas de relevancia como el intelectual socialista Clodomiro Almeyda. Desde el extranjero, además, llegaban peticiones como la del destacado jurista español

¹⁰² Uno de los momentos estelares del presidente del Colegio de Abogados era el discurso que pronunciaba en la Corte Suprema con ocasión del juramento de los recién egresados. Alejandro Silva Bascuñán hizo uso de esa tribuna en varias ocasiones para justificar explícitamente a la dictadura y sus prácticas represivas. Parte de esos discursos están compilados en Silva Bascuñán, *El abogado, un servidor de la justicia*.

¹⁰³ Oficio Colegio de Abogados-Temuco, Temuco, 2 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 533, ARA.

¹⁰⁴ "Sugestión beneficiosa", *El Diario Austral*, 11 de noviembre de 1973, 3.

Joaquín Ruíz Jiménez, quien se ofrecía para defender al Secretario General del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán¹⁰⁵.

Al mismo tiempo, el Consejo General comenzó a recibir denuncias por trabas al libre ejercicio de la abogacía, un tema que fue especialmente repudiado durante el gobierno de Allende. En concreto, los denunciantes alegaban que los militares negaban acceso a los detenidos y que no se respetaba el debido proceso en los juicios. Un grupo de abogados identificados con la Unidad Popular -Fernando Ostornol, Graciela Álvarez y Sergio Teitelboim- llevó estas acusaciones directamente al Consejo General, sin ser oídos. En una reunión posterior con Silva Bascuñán insistieron en sus denuncias de "atropellos" y sus exigencias de "garantías" a los abogados defensores, pero nuevamente se encontraron sin respuestas concretas¹⁰⁶.

La reacción de la dirección del Colegio de Abogados tuvo dos posturas ligeramente divergentes. Por una parte, Alejandro Silva Bascuñán se mostró más abierto a las denuncias, aunque ello no implicara asumir una postura crítica ante el gobierno. Una vez recibida la demanda, esperaba la autorización del Consejo para reunirse con autoridades de gobierno y presentar los casos. Ante cualquier tipo de respuesta positiva de los militares, el asunto se daba por cerrado, sobre el entendido de que el Colegio había hecho todo lo que estaba a su alcance para clarificar la situación. En octubre de 1973, por ejemplo, algunos consejos provinciales expresaron al Consejo General su inquietud sobre la condición ambigua de muchos detenidos, y las dificultades de los abogados defensores para cumplir su papel. Silva Bascuñán realizó una larga exposición donde detallaba las gestiones ante el gobierno, dejando satisfecho con ello a los

¹⁰⁵ "Sesión en 1ero de octubre de 1973", "Sesión en 15 de octubre de 1973", y "Sesión en 22 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAB; y "Sesión en 1ero de abril de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 3.

¹⁰⁶ "Sesión en 5 de noviembre de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAB, 2.

consejeros provinciales¹⁰⁷. Aquella misma pasividad pudo evidenciarse en casos más trágicos: Carmen Hertz denunció el fusilamiento de su marido Carlos Berger, quien se transformaría con los años en uno de los casos "emblemáticos" de violación a los Derechos Humanos. El Consejo General sólo acordó oficiar al Ministro de Justicia para recabar más antecedentes¹⁰⁸.

Por otra parte, la reacción de la mayoría de los consejeros nacionales fue mucho menos comprensiva. Ante las peticiones de amparo y quejas por las dificultades encontradas por los abogados defensores, algunos recordaron que "se vivían tiempos de guerra", por lo que todo el orden jurídico debía ajustarse a las disposiciones del Código de Justicia Militar. Otros simplemente señalaron que "los Tribunales Militares están cumpliendo su labor de acuerdo a las disposiciones que le señala la ley", rechazando por inconducentes toda gestión ante las autoridades¹⁰⁹. Más aún, varios consejeros justificaron abiertamente algunos casos concretos de abogados perseguidos por los órganos represivos de la dictadura apelando a una oposición ideológica. El Consejo General -en connivencia con el Ministerio del Interior- impuso como criterio no prestar ayuda a quienes eran "requeridos" por las autoridades por sus actividades políticas. En octubre de 1974, por ejemplo, el Colegio recibió la petición de amparo en favor de la abogada Ofelia Meza Kogan. Luego de algunas gestiones, se estableció que Meza había sido detenida "por implicancia en partidos marxistas", por lo que "no tenía relación con el ejercicio de la profesión"¹¹⁰. Lo propio sucedió con Hernán Montealegre, abogado defensor de militantes de izquierda. Algunos dirigentes del Colegio fueron enviados a Cuatro Álamos para visitar a Montealegre, al mismo tiempo que se reunían con personal de la DINA para averiguar los pormenores del problema. Una vez que los oficiales de inteligencia aseguraron que la detención

¹⁰⁷ "Sesión en 29 de octubre de 1973, Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 2-3.

¹⁰⁸ Ibid., 6. Sobre el caso de Carlos Berger, véase Valeria Navarro-Rosenblatt, "Comunistas judíos en Chile: experiencia y memoria en las historias de vida de Dora Guralnik y Carlos Berger (1930-1990)" (Tesis de doctorado en Historia, University of Wisconsin-Madison, 2016).

¹⁰⁹ "Sesión en 15 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 3

¹¹⁰ "Sesión en 14 de octubre de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 2.

se debía a "actividades de carácter político", las gestiones se paralizaron. De hecho, algunos consejeros expresaron que debía tenerse cuidado con ese tipo de consultas a la autoridad para "no parecer que el Colegio se está inmiscuyendo en las facultades legales del Gobierno"¹¹¹.

Este tipo de situaciones donde el antimarxismo justificaba cualquier tipo de conducta institucional ante la represión llegó a un extremo en 1975. Pablo Rodríguez -líder del grupo ultra-derechista Patria y Libertad durante la Unidad Popular y por entonces consejero nacional del Colegio de Abogados- relató al Consejo los pormenores de la detención del abogado del Comité Pro-Paz Marcos Duffau. Personalmente y en su oficina, Rodríguez entregó a Duffau a agentes de seguridad, quienes lo llevaron a Tres Álamos para su interrogatorio. A pesar de que un grupo de abogados liderados por Eugenio Velasco presentó un recurso de amparo en términos fuertemente críticos, el Consejo acordó ratificar todo lo hecho por Rodríguez¹¹².

Ambas posiciones -representadas por Alejandro Silva Bascuñán y Pablo Rodríguez respectivamente- tenían a su vez en común dos elementos. En primer lugar, en la mayoría de las intervenciones públicas y también en las discusiones internas existía una confianza sin fisuras en la racionalidad del actuar de las autoridades militares. Cuando el Comité Pro-Paz -organismo ecuménico en defensa de los perseguidos por el régimen- quiso sumar al Colegio de Abogados a una declaración que llamaba a preocuparse por las condiciones de los detenidos, el Consejo General reaccionó de forma unánime: "las garantías del gobierno son suficientes"¹¹³. El propio Silva Bascuñán, meses más tarde, declaraba ante una reunión de mesas directivas en Talca que estaba seguro que los problemas presentados se solucionarían dada la actitud favorable y comprensiva del gobierno¹¹⁴.

¹¹¹ "Sesión en 24 de mayo de 1976", Actas del Consejo General, 1976, ACAb, 4.

¹¹² "Sesión en 24 de noviembre de 1975", Actas del Consejo General, 1975, ACAb, 3.

¹¹³ "Sesión en 8 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 4.

¹¹⁴ "Sesión en 26 de agosto de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 4.

En segundo término, cuando algunos de los hechos denunciados eran irrefutables incluso para los consejeros del Colegio, como ejecuciones extra-judiciales y maltratos a prisioneros, la responsabilidad era adjudicada a "agentes inferiores" que, como señaló Silva Bascuñán en la Corte Suprema a propósito de la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Santiago en julio de 1974, "atropellan y violan valores que los gobernantes quisieran, sin duda, afirmar y sostener, y a pesar de reiteradas instrucciones de que procedan dentro de límites precisos y estrechos"¹¹⁵. De ese modo, en esta perspectiva, las prácticas censurables de la represión caían en la categoría de "error" de procedimiento, que no afectaba en absoluto la justeza intrínseca de la labor de gobierno a ese respecto en virtud de la "guerra" que estaba librando contra la "subversión".

Más allá de estos frágiles consensos, la agudización de la represión militar y la multiplicación de denuncias que circulaban por el Consejo General tensionó el ambiente hasta un punto de ruptura. Para un grupo de consejeros cercanos a partidos políticos de centro, las prácticas represivas desplegadas por la dictadura fueron cada vez más difíciles de aceptar, iniciando un proceso de "despertar" moral que los llevaría hacia la oposición en la segunda mitad de los años setenta. Por el momento, la "sincronización" del Colegio con respecto a la represión implicó un proceso de disciplinamiento interno que desplazaría de cargos directivos a quienes empezaron a dudar del proceder de la dictadura.

Como se señalara, en los primeros meses de la dictadura un grupo de abogados demócratacristianos y radicales comenzaron a presionar al Colegio para que adoptara una posición más firme frente a la represión. Juristas de renombre como Jaime Castillo Velasco, por ejemplo, exponían este tipo de argumentos en la prensa, apelando al "honor profesional" y el

¹¹⁵ Silva Bascuñán, *El abogado, un servidor de la justicia*, 349.

"espíritu de la democracia chilena"¹¹⁶. En septiembre de 1974 el conflicto se plantearía abiertamente. Eugenio Velasco envió una carta en términos críticos al Colegio, acusándolo de no defender los derechos humanos. El texto se hizo público y circuló entre los abogados, lo que motivó a la Fiscalía Militar a abrir un expediente contra Velasco. Para reunir las pruebas necesarias, la Fiscalía pidió al Consejo General la carta original, así como también la grabación de la intervención de Velasco en la Asamblea de Abogados celebrada en mayo de ese año. Silva Bascuñán intentó dilatar la entrega de la información, en contra de la opinión mayoritaria del Consejo. El conflicto se hizo patente cuando el consejero Jaime Varela presentó una moción de censura contra Julio Salas Romo, vicepresidente del Colegio, quien a su vez había acusado a un grupo de consejeros de filiación demócratacristiana de "actuar políticamente". Salas Romo replicó señalando que "esperaba ser censurado por la Democracia Cristiana", extendiendo con ello sus críticas al presidente. En la misma sesión, el secretario Julio Tapia Falk anunció su renuncia al cargo ya que consideraba que el retardo en la entrega de documentos por parte del Colegio iba a permitir a Velasco escapar del país y unirse a la "conspiración exterior contra de Chile"¹¹⁷.

En la sesión siguiente el conflicto se resolvió en favor del bloque más firmemente pro-gobiernista. El consejero Valentín Robles presentó una moción de censura contra Silva Bascuñán, acusándolo de "servir de recipiente de las inquietudes políticas originadas en el sector de abogados pertenecientes a la ex Unidad Popular y sus actuales acompañantes". En el intertanto, el vicepresidente Julio Salas había entregado la documentación requerida por la Fiscalía Militar a espaldas del presidente, decisión que no pudo ser revertida a pesar de las gestiones de Silva Bascuñán ante el Ministro del Interior. Varios consejeros lo acusaron de desobedecer las órdenes

¹¹⁶ Jaime Castillo Velasco, "El papel de los abogados", *La Prensa*, 4 de diciembre de 1973, 6.

¹¹⁷ "Sesión en 21 de octubre de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 3-5

del Consejo y le solicitaron la renuncia. Votada la moción de censura, fue finalmente aprobada por 10 votos contra 6¹¹⁸.

En "sesión especial" del Consejo General se llegó al acuerdo de elegir al propio Salas Romo y a Armando Álvarez como presidente y vicepresidente respectivamente, a la vez que Silva Bascuñán dirigía una nota con el apoyo de 5 consejeros señalando que consideraban que su cargo no estaba vacante¹¹⁹. El conflicto no tardó en llegar a la prensa, donde las acusaciones cruzadas continuaron. Mientras Silva Bascuñán rechazaba su alejamiento de la presidencia del Colegio, Julio Salas fundamentaba la censura por desavenencias irreconciliables de carácter "político". De manera inteligente, Eugenio Velasco aprovechaba la exposición mediática para denunciar la violación a los Derechos Humanos que los abogados podían constatar día a día¹²⁰. Sin embargo, el reconocimiento de los consejos provinciales, otros Colegios Profesionales y el propio gobierno hacia la nueva directiva acabó rápidamente con la disputa al interior del Consejo. Algunos meses más tardes, los puestos de los consejeros desplazados del Consejo fueron ocupados por abogados designados afines al régimen¹²¹. De allí en adelante, el apoyo público a la dictadura sobre acusaciones de violación a los Derechos Humanos sería completo y sin disputas internas¹²².

La represión y sus consecuencias no sólo tensionaron el ambiente al interior del Colegio de Abogados. En otras organizaciones mesocráticas sucedieron episodios análogos, aunque con

¹¹⁸ "Sesión en 28 de octubre de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 1-4.

¹¹⁹ " Sesión especial en 4 de noviembre de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 1

¹²⁰ "Cambios en el Colegio de Abogados", *Qué Pasa*, s/n, 7 de noviembre de 1974, 16; "Más expedientes para la crisis", *Ercilla*, No. 2052, 27 de noviembre de 1974, 30-31; "Censura a Alejandro Silva y cartas de Eugenio Velasco", *Qué Pasa*, s/n, 5 de diciembre de 1974, 38.

¹²¹ En lugar de los consejeros Manuel Daniel, Benjamín Moreno, César Serani y Jaime Varela, quienes fueron desplazados del Consejo General junto a Alejandro Silva Bascuñán, fueron nombrados Carlos Cruz-Coke, Fabio Achurra, Roberto Guerrero y Pablo Rodríguez. "Sesión en 8 de abril de 1975", Actas del Consejo General, 1975, ACAB, 1.

¹²² Para dar cuenta de la nueva situación, el Consejo publicó un efímero *Boletín Informativo. Publicación del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile*, en 1976.

mucho menos exposición mediática. La "sincronización" de la masonería, por ejemplo, implicó también prácticas de control y disciplinamiento interno. La presencia de un fuerte contingente de individuos afines a la izquierda y a la Unidad Popular entre sus miembros, y el impacto directo que la represión tuvo en muchos de ellos, puso en aprietos a la Gran Logia, que desde un principio había expresado un apoyo total a la Junta. Durante los primeros meses de la dictadura hubo casos que con el correr de los años adquirirían notoriedad pública, pero que entonces sólo se manejaban en comunicaciones privadas, conversaciones internas y conflictos al interior de las logias. Quizás el más dramático y representativo de ellos fuera lo sucedido con el General de la Fuerza Aérea, Alberto Bachelet¹²³.

Bachelet, connotado militar afín a la izquierda, era miembro de la Logia "La Cantera" No. 130 de la capital, tradicionalmente compuesta por efectivos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente después del golpe, fue detenido y torturado por sus propios camaradas de armas. Mientras estuvo preso, su familia buscó el apoyo de la masonería para lograr su liberación, recibiendo como respuesta un decreto de expulsión por inasistencia a las reuniones de su logia, además de actividades políticas y de "concientización de sus hermanos", según explicó el ex-Venerable Maestro Renato Ianiszewski de "La Cantera" al Gran Maestro René García Valenzuela en carta privada¹²⁴. Una vez en casa con arresto domiciliario, y en un frágil estado de salud como producto de las torturas y una enfermedad coronaria previa, Bachelet respondió duramente ante lo que consideraba una medida arbitraria, sin arreglo a los principios y procedimientos masónicos, y, peor aún, de una intolerable "cobardía moral"¹²⁵. En una carta que

¹²³ No sólo la importancia política y militar del General Bachelet hizo que este caso se transformara en "emblemático" al interior de la masonería, sino también el hecho de que su hija, Michelle Bachelet, haya sido Presidente de la República en dos períodos (2006-2010, 2014-2018).

¹²⁴ Carta de Renato Ianiszewski Ciudad, Ex-Venerable Maestro de la R.L. 'La Cantera' No. 130 a René García Valenzuela, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, s/f (c.diciembre de 1973). Carpeta Caso Bachelet, AGLCh.

¹²⁵ Carta de Alberto Bachelet al Venerable Maestro de la R.L. 'La Cantera' No. 130, 6 de diciembre de 1973. Carpeta Caso Bachelet, AGLCh.

finalmente no envió al Venerable Maestro de "La Cantera", pero sí adjuntó a su carta al Gran Maestro García Valenzuela, acusaba a su logia de "abandonarlo a él y a su familia" sólo por el hecho de haber trabajado para el gobierno de Allende. En la misiva, además, denunciaba la existencia de muchos masones perseguidos: "Durante los últimos ya tres meses la hemos pasado dura.- y somos varios los hh.: [hermanos] que estamos en dicha situación. La escala de valores se derrumbó y los derechos humanos [han sido] pisoteados", señalaba Bachelet con amargura¹²⁶. Pocos días después de escribir esas cartas, Bachelet fue nuevamente detenido y llevado a la Cárcel Pública, donde también fue sujeto de maltratos y torturas. El 12 de marzo de 1974 falleció a causa de un infarto.

El caso Bachelet fue expresión de una línea asumida oficialmente por la dirección de la masonería chilena, y apoyada por parte importante de los masones activos de la época. La Gran Logia buscó explícitamente una "depuración" de la Orden ante lo que consideraban había sido un excesivo grado de politización en el período previo. En sus publicaciones internas se insistió una y otra vez en la necesidad de eliminar toda consideración política de la vida de las logias, quienes debían alejarse de las "pasiones profanas" y encerrarse en un estado de reflexión permanente¹²⁷. De hecho, la profusión de este tipo de admoniciones daba cuenta de la persistencia del "problema". De allí también que se reflejara en las intervenciones de sus autoridades. El Gran

¹²⁶ Carta de Alberto Bachelet al Venerable Maestro de la R.L. "La Cantera" No. 130. 5 de diciembre de 1973. Carpeta Caso Bachelet, AGLCh. La misma actitud tuvo la Gran Logia para con destacados miembros de la masonería. Edgardo Enríquez Frodden, ex-rector de la Universidad de Concepción, fue apresado, juzgado y exiliado sin ayuda de la Orden. Desde Francia, Enríquez envió una amarga carta denunciando el silencio de la organización ante la represión, que fue contestada en duros términos. Hernán Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990): su comportamiento ante el fin de la democracia y las violaciones de los derechos humanos* (Santiago: Mosquito Comunicaciones, 2006), 263–67. Por otro lado, el padre de Orlando Letelier, ex Ministro de Allende, intentó llegar al Gran Maestro para que intercediera en favor de su hijo. La propuesta fue calificada de "política", y rechazada. Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Logia de Chile, a René Court Portales, 10 de septiembre de 1974. Caja s/n. Correspondencia GG:MM.: 1974-1980, AGLCh. Letelier fue enviado al exilio. Murió asesinado en un atentado organizado por la DINA en Washington en septiembre de 1976.

¹²⁷ "Al servicio de la Fraternidad-Sentimiento", *Revista Masónica de Chile*, Año LI, marzo-junio de 1974, Nos. 1-4, 7; "Inspiremos nuestra acción en nuestra doctrina", *Revista Masónica de Chile*, Año LI, julio-agosto de 1974, Nos. 5-6, 1; "Hacia una actitud masónica doctrinaria", *Revista Masónica de Chile*, Año LII, noviembre-diciembre de 1974, Nos. 9-10, 2.

Maestro Horacio González Contesse, electo en 1974, reafirmó esta línea el carácter ritualista y simbólico del actuar masónico, por sobre el debate racional y el intercambio de opiniones discrepantes. Poco después de asumir, González Contesse llamó a una "pacificación de los espíritus" a través de la pasividad que daba el elaborado ritual masónico. La invitación, por supuesto, encerraba una amenaza: "Os aseguro que vuestro Gran Maestro y el Gobierno Superior de la Orden sabrán cumplir con el mandato que recibieran al ser elegidos; y que, con energía, sancionarán cualquier intento de disociación para satisfacer intereses que nada tienen de masónicos"¹²⁸

La amenaza de sanciones a los disidentes se concretó muchas veces. La logia "Hiram" No. 65, en la que participaba Salvador Allende, fue suspendida y luego disuelta por orden del Gran Maestro, ante la multiplicación de debates "peligrosamente contingentes", además de intervenciones injuriosas contra la logia "La Cantera" -calificada de "lacra de la Orden" en debates internos- y contra un miembro de la Junta que se habría iniciado en la masonería por esos días¹²⁹. En otras ocasiones, el castigo llegó a miembros destacados. Bruno Kock, con más de cuarenta años en la Orden, fue expulsado por orden del Gran Maestro al saber que en su logia se había referido en duros términos al ex-Gran Maestro García Valenzuela por su colaboración con la dictadura. Para González Contesse, ello significaba un inaceptable "desborde de incontrolada pasión", contrarios al "propósito de saneamiento masónico"¹³⁰. Este tipo de medidas logró el

¹²⁸ Cit. en Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990)*, 220-21.

¹²⁹ Según algunos masones vigentes hoy en día, el miembro de la Junta que recibió la "luz masónica" fue el Almirante de la Armada José Toribio Merino. "Resolución-Decreto provisorio del Gran Maestro como resultado de una investigación, 8 de abril de 1974. Carpeta Caso R.L. Hiram No. 65, AGLCh.; "Breve cuenta del Gran Maestro al Consejo sobre graves incidencias en la Respetable Logia 'HIRAM' No. 65 del Oriente de Santiago", 18 de abril de 1974. Carpeta Caso H.L. Hiram No. 65, AGLCh; Decreto No. 287-A. Clausura de la Respetable Logia "HIRAM" No. 65, dependiente de la Gran Logia de Chile, 27 de enero de 1977. Carpeta Caso R.L. Hiram No. 65, AGLCh. La Logia Hiram No. 65 fue finalmente reabierta hacia finales de la dictadura militar, en 1989.

¹³⁰ Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Adolfo Ide y Juan Hebel, Venerable Maestro y Secretario de la Logia "Humboldt" No. 114, Osorno, 27 de marzo de 1975. Caja s/n. Correspondencia GG:MM.: 1974-1980, AGLCh; Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Bruno Koch, 26 de marzo de 1975. Caja s/n. Correspondencia GG:MM.: 1974-1980, AGLCh;

control temporal de la disidencia masónica interna, sobre todo de aquellos que se habían identificado con el proyecto socialista de la Unidad Popular. Tal como en otras organizaciones mesocráticas, la dirigencia pudo explicitar su apoyo a la dictadura sin cuestionamientos públicos. La acepción contrarrevolucionaria de la clase media no podía ser aún disputada.

5.- Conclusiones

La actitud que muchas de las organizaciones mesocráticas asumieron ante el despliegue del aparato represivo del Estado tenía directa relación con la "sincronización" ideológica con la retórica, prácticas y fines de la dictadura militar. Ello a su vez se reforzaba con la homogenización de la discusión pública al respecto. Los medios de comunicación permitidos hicieron de caja de resonancia de la legitimación de la violencia de Estado y de las consecuencias normalizadoras que la presencia militar en las calles tenía para la vida cotidiana de muchos de los ciudadanos de sectores medios. Al mismo tiempo, en connivencia con el gobierno, los grupos sociales mesocráticos movilizaron a sus bases para expresar el apoyo al régimen en rituales públicos que reemplazaban a la deliberación racional sobre la situación vivida entonces. Para quienes participaban de una o varias organizaciones sociales de clase media, la legitimidad de la dictadura emanaba del discurso oficialista, la prensa y la práctica institucional de sus respectivos grupos, sin espacio público para levantar críticas políticas o sospechas morales.

En ese contexto, la represión se asumió como necesaria para mantener el orden y las jerarquías amenazadas durante el gobierno de la Unidad Popular, y fue en el recuerdo reciente de esa experiencia de donde salieron los principales argumentos para darle sentido a la

Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Alfonso Sanhueza Dierd, Gran Delegado Regional del Valle de Osorno, 27 de marzo de 1975. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh.

militarización de la vida pública chilena y la violencia represiva¹³¹. De allí que, como demuestran los casos del Colegio de Abogados y la Masonería, la persecución, detención, tortura y desaparición de ciudadanos chilenos -incluso miembros de sus propias organizaciones- adquirió una racionalidad propia, justificable en sus propios términos, aún cuando no se tuviera conciencia plena de lo que ello implicaba. Sebastián Carassai, quien ha investigado este problema para el caso argentino, señala que aquella actitud generalizada se basó en una "superstición civil" de un "supuesto saber del Estado", algo que también puede ser aplicado a los grupos de clase media chilenos en los primeros años del régimen. De ese modo, la represión pudo ser tolerable, e incluso deseable, en la medida en que se sostenía la ficción de que el Estado era percibido como una unidad superior a los individuos, con una lógica propia que indefectiblemente apuntaba al bien común. El orden jurídico dictatorial, que se basaba en una legalidad aparente y contradictoria con la represión real, entonces, pudo sostenerse gracias a que para muchos sectores de la sociedad chilena, incluyendo a los grupos mesocráticos contrarrevolucionarios, era *necesario* que la represión fuera justificable, aún cuando ello no fuese evidente¹³². En otras palabras, para que la dictadura y sus consecuencias más dramáticas pudieran ser aceptables para la moralidad mesocrática -aquella basada en el juego democrático, el Estado, el orden y el respeto a las demarcaciones sociales- la propia dictadura tenía que ser asumida como expresión concreta de sus deseos y ansiedades, obviando las diferencias entre la realidad autoritaria y sus ideales republicanos.

Al interior de las organizaciones de clase media, entonces, se construyó un consenso en torno a la naturaleza justa y necesaria del autoritarismo militar. Sin embargo, ello pudo ser logrado al costo de excluir a minorías disidentes de cualquier tipo de instancia directiva. El

¹³¹ Sobre este punto, véase Osvaldo Fernández, "El discurso de la represión", *Araucaria de Chile* 3 (1978): 22 y ss.

¹³² Carassai, *Los años setenta de la gente común*, 184-94.

desplazamiento de Alejandro Silva Bascuñán de la presidencia del Colegio de Abogados fue quizás el evento de mayor resonancia mediática al respecto. En cierto sentido, su suerte fue reflejo de un proceso más amplio: ya no eran solamente aquellos sujetos de clase media de izquierda quienes se oponían a la dictadura, si bien eran aún incapaces de hacer pública y organizada aquella discrepancia, sino que también varios de quienes se plegaron al bloque social contrarrevolucionario y aplaudieron el derrocamiento de Allende empezaron a presentar dudas sobre la real naturaleza del régimen. Los canales mediante los cuales se expresaron estos cuestionamientos fueron variados. Mientras unos eran expulsados de las organizaciones de clase media, como muchos de los masones de la Logia "Hiram" No. 65, otros -como los abogados Jaime Castillo Velasco y Eugenio Velasco Letelier- iniciaban una larga marcha en favor de los Derechos Humanos, aunque aún lejos de poder utilizar para sí las implicancias virtuosas del ideal mesocrático¹³³. Las incipientes dudas de muchos sujetos de clase media se camuflaban entre los frenéticos aplausos a los vencedores

¹³³ Sobre la lucha por los Derechos Humanos y el rol del ideal de clase media en ella, véase capítulo 5 de este estudio.

Capítulo 3

El nuevo "Chile mesocrático": Dictadura, participación y sociedad civil

Además del "trauma épico", la experiencia de la Unidad Popular significó para los grupos mesocráticos la clausura del Estado en la forma en que estaban habituados. Las instancias de negociación se cerraron, y fueron reemplazadas por movilización social frontal que no admitió espacio alguno para el diálogo. La llegada de la dictadura tuvo como consecuencia la reapertura de muchos de esos canales, e incluso la posibilidad de influir en áreas antes vedadas a estas organizaciones sociales. A esto ayudó el ánimo favorable a la participación vertical y apolítica que reinaba en muchos de los nuevos círculos gobernantes, influidos fuertemente por las distintas corrientes corporativistas que confluyeron en el nuevo gobierno. Junto con la represión sistemática a la izquierda, la dictadura abrió la posibilidad de participar activa aunque subordinadamente en el nuevo orden autoritario de cosas, tanto a nivel de Estado a través de organizaciones mesocráticas representativas, como en el ámbito del trabajo, con proyectos ambiciosos como el "Estatuto Social de la Empresa". Todo ello redundó en la generación de instancias y contactos de negociación exitosos entre los líderes mesocráticos y el gobierno, en un círculo virtuoso de influencias, redes y resultados concretos. Esas dirigencias, de ese modo, afirmaron su ascendiente social gracias al rol de intermediario que asumieron entre las bases de sus respectivas organizaciones y el propio Gobierno.

Gracias a la creación de este complejo entramado de redes, contactos e influencias, las organizaciones mesocráticas pudieron experimentar como propio el nuevo tipo de régimen, a pesar de las limitaciones propias del autoritarismo militar. De hecho, la dictadura proyectó de modo implícito y no siempre bien definido un ideal social mesocrático, en el que toda la

sociedad podría gozar en el futuro de la base material que permite una vida digna y virtuosa de clase media.

Más allá de que el lenguaje de clase haya sido desterrado de la esfera pública, este ideal mesocrático, formado a lo largo del siglo XX, se vio de algún modo fortalecido, ayudando al prestigio social y político de sus organizaciones representativas. Todo ello redundó en el hecho de que estos grupos asumieron funciones de Estado para defender a la dictadura en el extranjero a través de la activación de sus propias redes internacionales. Cartas, documentos y giras internacionales, entre otros mecanismos, fueron utilizados para hacer frente al enorme descrédito global del régimen. Si bien el gobierno fomentó y algunos casos financió estas iniciativas, lo cierto es que los grupos mesocráticos actuaron con importantes grados de autonomía en estas tareas, lo que en ningún caso aseguró su éxito. De hecho, las dificultades experimentadas dieron cuenta del creciente grado de aislamiento internacional de la dictadura.

1.-Participación social y corporativismo

La dictadura militar llegó al poder tras una intervención armada que contó con el apoyo activo de una extensa alianza social contrarrevolucionaria. En ella se encontraron organizaciones empresariales, grupos de clase media, mujeres, estudiantes e incluso una fracción del movimiento obrero y otras organizaciones populares contrarias a la UP. A pesar de la legitimidad social que el régimen pudo construir en un principio, al momento de ocupar el Estado no existía un proyecto político unificado, una "planificación global" como la que habían propuesto demócratacristianos e izquierdistas en los dos gobiernos anteriores¹. La ausencia de una línea programática única, sin embargo, no significaba ausencia de propuestas, aspiraciones y

¹ El concepto de "planificación global" es, por supuesto, de Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX* (Santiago: Editorial Universitaria, 1986).

ansiedades de los grupos políticos y sociales que apoyaron y se integraron al proceso de decisión política de la dictadura. El arco ideológico de quienes buscaban influir en los derroteros del régimen iba desde socialcristianos radicalizados bajo el gobierno de Allende, que esperaban un restablecimiento democrático en el corto plazo, pasando por liberales y conservadores de viejo cuño, economistas monetaristas, nacionalistas de derecha, líderes gremiales "apolíticos", hasta quienes no escondían sus preferencias fascistas y franquistas.

En el mundo militar tampoco existía consenso sobre el camino a seguir. En los altos mandos de las Fuerzas Armadas se llegó al acuerdo de conspirar contra el gobierno constitucional de Allende, desplazando a los oficiales que seguían la "doctrina Schneider" de prescindencia política o a aquellos sospechosos de simpatías izquierdistas, pero ello no significó el delineamiento de un plan futuro concreto. Allí también se encontraron oficiales de mentalidad estatista de viejo cuño con aquellos más directamente influidos por las doctrinas contrainsurgentes promovidas por los Estados Unidos. La centralidad del anticomunismo y la lucha contra la "subversión" en los primeros meses de la dictadura dio cierta base común de acción con la que entender la "misión" del régimen. Sin embargo, cuando fue necesario darle sentido de las medidas implementadas para la reorganización del Estado y la economía y, más aún, al rol que la alianza social contrarrevolucionaria y los grupos mesocráticos dentro de ella tendrían en el nuevo orden de cosas, la carencia de un proyecto común trajo confusión y, por lo mismo, oportunidades para quienes imaginaban un régimen con participación de grupos organizados de la sociedad civil.

Las primeras expresiones públicas de las nuevas autoridades en torno al problema de la participación civil y la nueva forma de organización estatal pusieron al centro a la alianza social que luchó contra la Unidad Popular. Augusto Pinochet, en su discurso con motivo del primer

mes de gobierno, fue explícito al respecto: "Es conveniente la participación consciente y responsable de la ciudadanía como clave de la democracia viva y depurada". Y agregó: "para esto daremos prioridad a los Colegios Profesionales, a los gremios y a los trabajadores, para que en estrecho contacto con ellos reflejen el auténtico pensamiento del pueblo organizado"². Al mismo tiempo, las autoridades del gobierno central daban instrucciones a los intendentes provinciales para "canalizar el apoyo de la población civil a la Junta de Gobierno", a través de la creación de "cauces de participación donde se imparta (...) una formación cívica y social que permita a las mujeres y los jóvenes que lucharon en defensa de la libertad, prepararse con mayor eficacia para servir a Chile". La tarea de los intendentes, según la misma circular, era identificar aquellas organizaciones afines en cada provincia para plegarse a estos esfuerzos, ayudándolos a funcionar con los recursos apropiados³.

Al mismo tiempo, los grupos mesocráticos aludidos avanzaban propuestas para organizar el apoyo y la participación en las instancias de decisión del Estado. León Vilarín era quizás el más entusiasta de todos en este plano. En sus intervenciones públicas planteaba una y otra vez organizar las bases sociales del régimen en torno a los gremios de clase media, incluso pensando en una futura reorganización de la política nacional⁴. Vilarín buscó rápidamente llevar a la práctica sus deseos de protagonismo gremial. El 13 de septiembre, sólo dos días después del golpe, se reunió con Pinochet y le planteó directamente la creación de la "Confederación Única del Trabajo" para unir a todos los grupos sociales antiizquierdistas en una sola orgánica de apoyo

² Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 96. En los primeros años de gobierno este tipo de declaraciones se harían recurrentes. En abril de 1975, por ejemplo, *El Mercurio* celebró las declaraciones de Pinochet en Magallanes prometiendo mayor "participación civil" en el gobierno, señalando que era reflejo de la "mentalidad democrática" de los militares. "Colaboración civil en el gobierno", *El Mercurio*, 2 de abril de 1975, 2.

³ Carta de Pedro Ewing, Ministro Secretario General de Gobierno, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Santiago, diciembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 534, ARA.

⁴ Raúl González Alfaro, "Visión retrospectiva de las dos batallas que terminaron con el 'imperio marxista'", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 47.

al régimen. Para Vilarín, la organización de una nueva CUT fortalecería la relación armónica entre los "hombres de trabajo" y del gobierno, posibilitando la comunicación y la unidad de acción necesarias para la reconstrucción nacional. Además, al unir a los gremios en una sola organización oficialista, lograrían avanzar en la anhelada despolitización de las organizaciones sociales, ya que "le habremos quitado la clientela a algunos demagogos trasnochados que todavía andan predicando", sobre todos a aquellos que buscaban "partidarios de la lucha de clases"⁵.

La promesa de una integración orgánica al nuevo Estado autoritario era, para otros, la proyección natural de la noción de "poder gremial", forjado en la lucha social contra Allende. En la Convención Médica inaugurada el 31 de noviembre de 1973, el presidente del Regional Valparaíso del Colegio Médico, Jorge Alvaay, advertía a sus colegas que "el poder gremial es una realidad y es una explosiva fuerza social. Como gremio, estamos contenidos en este importante sector de nuestra realidad socio-cultural y la importancia de nuestro rol estará en la misma medida en que tomemos conciencia de esta inserción". De allí que era de máxima importancia "dar nacimiento a una verdadera comunidad gremial (...) como expresión de todas las fuerzas de trabajo del país"⁶. Ese tipo de posiciones alcanzaron cierta relevancia pública a raíz de la celebración del Congreso Multigremial a principios de diciembre de 1973, ocasión en la cual se planteó la necesidad de construir un "apoyo organizado" para el gobierno central y las intendencias. Para ello propusieron participar activamente en la administración y los servicios públicos a través de la organización de "Consejos Cívicos" multigremiales en cada provincia⁷

El gremialismo contrarrevolucionario, sin embargo, no estaba unificado en torno a la posible proyección política del movimiento. Los dirigentes empresariales criticaron veladamente

⁵ "Discurso de León Vilarín", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 26, enero de 1974, 34.

⁶ "Discursos inaugurales de la Convención", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Año XXV, No. 11-12, noviembre-diciembre de 1973, 11.

⁷ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 97.

las intenciones de organizar un movimiento permanente en torno a los gremios, y buscaron llevar el radio de acción de estos grupos a un área más tradicional de negociación sectorial y limitado a sus respectivas áreas de interés. Según Guillermo Campero, existió una tensión permanente entre ambas alas del gremialismo contrarrevolucionario: mientras Vilarín y otros dirigentes de los gremios mesocráticos apelaban a la clásica noción del "hombre de trabajo" -en referencia indirecta y no siempre precisa a la clase media- que debía integrarse activamente al nuevo orden de cosas y colaborar desde posiciones de poder con la dictadura, los dirigentes empresariales de la CPC se refugiaron en una crítica a la política y la "politiquería" para frenar toda ambición que excediera las funciones tradicionales de los gremios en el ejercicio del poder estatal⁸.

La aparente contradicción entre un régimen que se proponía clausurar las formas de participación democrática del período anterior -la dimensión "policida" de la dictadura, al decir de Steve Stern⁹- y las declaraciones y propuestas en favor de la participación y colaboración activa de ciertas organizaciones de la sociedad civil con el Estado autoritario se resolvía apelando al ideal corporativista de organización. El corporativismo, por cierto, tenía una larga historia en el pensamiento conservador y nacionalista chileno, si bien siempre se había mantenido en un lugar marginal en comparación con el consenso generalizado en torno a la democracia liberal y la centralidad del sistema de partidos en la lucha institucional por el poder. A partir de allí, era posible pensar en la apertura de canales de participación institucional con exclusión absoluta de organizaciones políticas, toda vez que el objetivo principal era dar espacio a organizaciones funcionales, basadas en las distintas áreas de la estructura productiva de la nación, para servir de soporte técnico a las decisiones del Estado.¹⁰

⁸ Ibid., 96 y ss.

⁹ Stern, *Remembering Pinochet's Chile*, 31-32.

¹⁰ Sobre el pensamiento conservador y nacionalista, y el rol del corporativismo en ellos, véase entre otros a Cristi y Ruiz, *El pensamiento conservador en Chile*; Sandra McGee Deutsch, *Las Derechas: The Extreme Right in*

En los primeros meses de la dictadura confluyeron diversas propuestas de matriz corporativista no siempre coincidentes entre sí, deudoras de diferentes tradiciones intelectuales en el campo conservador. Por una parte, el nacionalismo de derecha había tenido un auge pronunciado desde mediados de la década de la sesenta, cuando el declive de los viejos partidos Conservador y Liberal llevó a la reorganización orgánica de la derecha en el Partido Nacional, incorporando ahora a políticos e intelectuales nacionalistas antes desplazados de esos círculos¹¹. Durante la Unidad Popular, sus facciones más radicalizadas se organizaron en grupos como Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus para oponerse por todas las vías, incluyendo la armada, a la izquierda en el poder. Luego del golpe, tanto el Partido Nacional como los grupos ultraderechistas acataron el receso político y se autodisolvieron, pero sus principales dirigentes e intelectuales buscaron imprimirle su sello al nuevo régimen. Pablo Rodríguez, líder de Patria y Libertad y consejero general del Colegio de Abogados desde mayo de 1975, abogó públicamente por una reorganización del Estado y la sociedad chilena en base a un corporativismo fuertemente antiliberal, en que "el poder político sea ejercido por los hombres y mujeres de trabajo a través de sus organizaciones laborales", incluyendo en ellas a gremios, colegios profesionales, federaciones estudiantiles, organizaciones empresariales y a las propias Fuerzas Armadas. La lucha contra Allende, reflexionaba Rodríguez en sus habituales columnas en la prensa, había dejado claro que el intermediario ideal entre el gobierno y la sociedad civil eran los gremios en su más amplia acepción, y que del rol que tuvieran en el nuevo Estado dependía la continuidad de la adhesión despolitizada de los chilenos a la dictadura¹².

Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939 (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1999); Verónica Valdivia Ortiz de Zárte, "Nacionalismo, ibañismo, fuerzas armadas: línea recta y el ocaso del populismo.", *Contribuciones Científicas y Tecnológicas* 25, n° 116 (1997): 1-41.

¹¹ Sobre este proceso, véase Verónica Valdivia Ortiz de Zárte, *Nacionales y gremialistas: el "parto" de la nueva derecha política chilena, 1964-1973* (Santiago: LOM Ediciones, 2008).

¹² Pablo Rodríguez, "Corporativismo o liberalismo", *La Tercera de la Hora*, 22 de agosto de 1974, 3; Pablo Rodríguez, "Participación civil", *La Tercera de la Hora*, 26 de octubre de 1974, 3.

Las propuestas corporativistas a principios del régimen bebían también de otras fuentes. Intelectuales conservadores como el sacerdote Osvaldo Lira basaron sus propuestas en el hispanismo franquista, y el contexto dictatorial ofreció una oportunidad inédita para la difusión a gran escala de estos principios. La nación chilena, de acuerdo a esta línea, era esencialmente hispana y católica, con exclusión de otras fuentes, derivando desde allí nociones antidemocráticas de organización del poder y la sociedad¹³. Al mismo tiempo, se reivindicaban formas de organización local e intermedia, como parte integrante de un modelo autoritario y vertical de Estado. Jaime Guzmán, líder del "gremialismo" -movimiento político conservador e integrista, formado en 1967 para oponerse a la Reforma Universitaria promovida por los estudiantes progresistas de la Universidad Católica-, y figura protagónica en la intelectualidad dictatorial, hizo eco del hispanismo para justificar jurídicamente a la Junta, y también para proponer nuevas formas de participación social. "Nuestra tradición no ha sido nunca la de los partidos políticos, sino una tradición de las familias, municipios, regiones, gremios y corporaciones", escribía en *El Mercurio* pocos días después del golpe, y agregaba: "Son estas sociedades, por consiguiente, el fundamento sobre el cual deberá levantarse el edificio futuro de nuestra entidad política restaurada"¹⁴.

Con todo, fue el corporativismo propio de la tradición militar chilena el que alcanzó mayor proyección en la esfera pública. Como señala Verónica Valdivia, a principios de la dictadura era posible distinguir dos alas de pensamiento en la oficialidad militar. La primera se había visto fuertemente influida por la Doctrina de Seguridad Nacional de matriz norteamericana, y respondía más bien a la lógica Este-Oeste de la Guerra Fría. Desde allí, entonces, articulaba un discurso conservador y fuertemente anticomunista. El golpe, para ellos, era una oportunidad para

¹³ Isabel Jara, "La ideología franquista en la legitimación de la dictadura militar chilena", *Revista Complutense de Historia de América* 34 (2008).

¹⁴ Cit. en *ibid.*, 245.

reestructurar el bloque de poder y frenar con las armas la movilización de izquierda. La segunda ala presentaba diferencias importantes. Imbuidos en el desarrollismo de las décadas centrales del siglo XX, abrigaban un sentimiento más antioligárquico que antipopular, dado en gran medida por la extracción mesocrática de muchos de sus miembros. El centro de sus preocupaciones estaba anclada en las diferencias globales Norte-Sur y los problemas que acarrea el subdesarrollo. El progreso y la justicia social, según este esquema, eran los mejores antídotos frente al marxismo.

A diferencia de la oficialidad más sensible a las doctrinas contrainsurgentes de los años cincuenta y sesenta, los oficiales desarrollistas tenían un referente histórico concreto al cual apelar: la dictadura de Ibáñez (1927-1931). Para los "ibañistas", la mejor forma de organizar el poder era con un Estado tecnificado, con exclusión de intervenciones "políticas", y con un movimiento social controlado y afín con la sensibilidad reformista y progresista. El comunismo, en esa línea, era entendido como una enfermedad de la pobreza, por lo que sólo con el desarrollo económico sostenido y la integración de la sociedad civil al Estado podían evitarse estallidos revolucionarios inorgánicos. Por los oficiales ibañistas, de ese modo, el centro del desarrollo económico y el progreso social era un Estado autoritario, despolitizado y con una fuerte presencia en el sistema económico¹⁵.

El ibañismo tuvo una presencia mayoritaria entre la oficialidad golpista. Ellos fueron los impulsores del "proyecto social", es decir, la línea de acción gubernamental que buscaba la integración y bienestar de los sectores populares y medios en torno a la acción del Estado. Sus principales representantes fueron el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta, Gustavo Leigh, además de los generales del Ejército Óscar Bonilla y de la Aviación

¹⁵ Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *El golpe después del golpe: Leigh vs. Pinochet: Chile 1960-1980* (Santiago: LOM Ediciones, 2003), 62-95.

Nicanor Díaz Estrada, entre otros. Como grupo, ejercieron una notoria influencia en la formulación de los primeros documentos doctrinarios de la dictadura en un momento en que la línea de acción política a seguir aún no estaba definida.

La "Declaración de Principios" dada a conocer el 11 de marzo de 1974 dio cuenta de buena manera tanto de la indefinición doctrinaria del régimen como también del peso que había alcanzado el "proyecto social". Si bien uno de sus principales redactores fue Jaime Guzmán, quien comenzaría a esbozar allí los principios que justificarían las reformas neoliberales de la segunda mitad de la década, la "Declaración" no fue en absoluto una clausura del debate al interior del mundo militar. Por una parte, el documento dejó establecido el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, aquella noción que delimita la acción estatal a las áreas en que el mercado y el mundo privado no pueden resolver de forma eficiente. Ese principio se sustentaba en la idea de que el Estado era una construcción posterior a derechos inalienables del hombre, como la propiedad y la libertad entendida en términos económicos, por lo que cualquier limitación al ejercicio de esas prerrogativas era ilegítima. Del mismo modo, se establecieron las bases conceptuales nacionalistas y antimarxistas, concentrando la crítica al pasado reciente en la experiencia de la Unidad Popular, pero proyectándola también a la democracia de masas del Chile del siglo XX y la centralidad del sistema de partidos en la competencia por el poder estatal.

Por otro lado, la "Declaración" hizo eco de las propuestas corporativistas del "ibañismo" militar, integrando también ciertas nociones nacionalistas e hispanistas. Por ejemplo, el tercer apartado ("Inspiración Nacionalista, Realista y Pragmática") hizo referencia a la futura instalación de un "sistema nacional de planificación" con el objeto de "Integrar procesos, instituciones y organismos para asegurar la obtención de los objetivos nacionales en el marco de la política de Gobierno". En la cuarta sección ("Una nueva y moderna institucionalidad: tarea

para el actual gobierno") se planteaba la necesidad de crear "una sociedad tecnificada y de verdadera participación social", por lo que debía fomentarse el "poder social", entendido a su vez como "la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político". Para operar eficientemente en el nuevo esquema social, esos "cuerpos medios" debían ser radicalmente despolitizados, para evitar así que sean "distorsionados por una instrumentalización partidista de ellos o sus directivos" y ejercer de modo correcto la "función reivindicativa"¹⁶.

La "Declaración de Principios", además, no fue entendida por toda la nueva casta gobernante del mismo modo. Mientras los asesores civiles monetaristas subrayaban la dirección del régimen hacia una "economía social de mercado", los militares "ibañistas" destacaban las propuestas de participación social de tono corporativista. Más aún, el propio Leigh señaló meses después que la "economía social de mercado" no implicaba la adopción del "liberalismo individualista" ni erigir al mercado "como factor único o supremo de la economía"¹⁷. Más aún, para este grupo, la "Declaración" era sólo un esbozo doctrinario, que debía complementarse con otros intentos en esa línea. De hecho, un día antes de dar a conocer la "Declaración", el 10 de marzo de 1974, el grupo "ibañista" publicó un documento titulado "Líneas de Acción de la Honorable Junta de Gobierno", en el que se enfatizaba la necesidad de "obtener un desarrollo social en íntima armonía con el desarrollo económico". El "desarrollo social" significaba la construcción y ampliación de canales legítimos de participación de la sociedad civil en las instancias de decisión del Estado y, de esa manera, guiar las políticas sectoriales a la satisfacción máxima de necesidades e intereses. A la vez, se buscaba fomentar un tejido social de toda clase

¹⁶ "Declaración de Principios del Gobierno de Chile", *El Mercurio*, 13 de marzo de 1974, 21 y 23.

¹⁷ Valdivia Ortiz de Zárate, *El golpe después del golpe*, 119–20.

de organizaciones intermedias para, de ese modo, hacer realidad la "humanización" de las relaciones sociales, basadas en la solidaridad, la responsabilidad y el sentido de comunidad nacional, en un ambiente de orden y disciplina social. El corolario del "desarrollo social" era la constitución de una "democracia social efectiva", de "auténtico espíritu nacionalista", que apunte tanto a la justicia social como al desarrollo económico. El objetivo, entonces, era construir una red de comunicación y organización -jerárquica y controlada- con los cuales poder llevar a la práctica los deseos de integración y armonía nacional que, en ese esquema, habían sido fuertemente erosionados durante la Unidad Popular¹⁸.

El proyecto emblemático de la oficialidad "ibañista" fue el "Estatuto Social de la Empresa", que comenzó a ser diseñado pocos meses después del golpe por una comisión liderada por Gustavo Leigh, y que fue finalmente promulgado en 1975. El objetivo del "Estatuto" era modificar la forma en que se relacionaban capital y trabajo, convirtiendo a las empresas en una comunidad colaborativa y armónica. A través de la participación integral y jerárquica de sus estamentos se buscaba inhibir conflictos laborales, colaborando de esa manera con la tarea general de construir un férreo sentimiento de comunidad nacional en torno a la producción y el progreso económico. Si bien el Estatuto no contemplaba la socialización de la propiedad productiva ni una participación completa de los trabajadores, sí asumía el hecho de que la empresa tenía una función social, por lo que quienes trabajaban en ella tenían derecho a informarse de la marcha de los asuntos internos y poder opinar sobre ciertas decisiones estratégicas. El "Estatuto", de esa forma, se basaba en la noción corporativista de que la unidad

¹⁸ "Mensaje de la Junta sobre la labor del Gobierno", *El Mercurio*, 10 de marzo de 1974, 41.

productiva no era solamente un agente económico, sino también un medio de construcción de relaciones sociales armónicas y virtuosas, orientadas hacia el bien común¹⁹.

El propio Leigh fue el encargado de socializar los principios de la oficialidad "ibañista" en reuniones e intervenciones públicas. En marzo de 1974, por ejemplo, se reunió con más de 80 dirigentes de los sectores agrícola, industrial, del comercio, de la mediana y pequeña minería y de la construcción, incluyendo a los dirigentes empresariales. Allí Leigh insistió que en sólo dos años, la población chilena "pasaría a ser co-autora y co-partícipe del Gobierno en materia de desarrollo-económico", y en ese esfuerzo los gremios tenían un rol central²⁰. La reacción de los interpelados no se hizo esperar. Si bien los dirigentes empresariales de la CPC fueron más cautos en expresar su concordancia, los gremios mesocráticos se identificaron plenamente con el ideario "ibañista", quizás por su mayor cercanía con los principios de participación controlada y desarrollo económico centrado en el Estado. La revista del comercio detallista, por ejemplo, celebraba con entusiasmo la línea de "desarrollo social" de la Junta, en tanto "movilización de la conciencia ciudadana hacia una fraternidad patriótica". La cohesión social que podría alcanzarse siguiendo ese modelo, incentivaría a su vez el trabajo y el progreso económico, "por lo que su realización es paralela y simultánea con la superación económica"²¹. Por su parte, el Colegio de Ingenieros creó una comisión especial para estudiar el "Estatuto Social de la Empresa", e organizó una reunión con el entonces Ministro de Economía Fernando Léniz en marzo de 1975 para discutir sus alcances. En esa ocasión, Léniz señaló que en un plazo de diez años, el 60% de la capacidad productiva del país sería de propiedad de trabajadores, lo que no sólo induciría la participación sino que también colaboraría efectivamente con la redistribución del ingreso. Los

¹⁹ Valdivia Ortiz de Zárate, *El golpe después del golpe*, 198; Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 113; Pilar Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile* (Santiago: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1985), 31 y ss.

²⁰ "Llamado a promover el desarrollo social hizo el General Leigh", *El Mercurio*, 28 de marzo de 1974, 8.

²¹ "El desarrollo social", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año VI, No. 20, junio de 1975, 4

ingenieros asistentes a la reunión comentaron satisfechos la perspectiva de esta nueva línea económica, pidiendo al gobierno hacer un esfuerzo de divulgación para socializar el nuevo concepto de participación laboral, muy diferente al que había intentado practicar el gobierno de la Unidad Popular²².

El "Estatuto" no fue la única iniciativa inspirada en el corporativismo estatista en los primeros años de la dictadura. Como se mencionó en el capítulo anterior, desde la Secretaría General de Gobierno, y la División de Organizaciones Sociales en su seno, se crearon las Secretarías Nacionales de la Mujer, la Juventud y de Gremios. Esas agencias estatales buscaron organizar bases sociales adictas al régimen entre sectores populares y medios, en un esfuerzo sostenido por reformular radicalmente la manera en que la sociedad civil se había relacionado con el Estado en el período democrático previo. La Secretaría Nacional de Gremios, creada en 1976, tuvo por objetivo dar un canal de expresión del "poder gremial" y al movimiento sindical que no estaba directamente vinculado con la izquierda. Era, en ese sentido, un esfuerzo por organizar al "verdadero" pueblo y al "verdadero" sindicalismo, es decir, aquel no marxista y despolitizado, que cumpliera un rol estrictamente gremial de asociación. Sus principales dirigentes eran antiguos militantes del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), un pequeño grupo nacionalista y corporativista heredero del Movimiento Nacional Socialista de los años treinta, por lo que al menos en principio se encontraban en sintonía con el "ibañismo" militar. Sin embargo, la defección relativamente temprana de los más importantes líderes sindicales antiallendistas ante la magnitud de la represión al movimiento obrero y el viraje neoliberal del régimen hicieron fracasar este proyecto. Hacia 1977, sin embargo, la Secretaría Nacional de Gremios tuvo un breve renacer, al serle encargado la creación de una

²² "El Colegio de Ingenieros frente al proyecto de Estatuto Social de la Empresa" y "Sugerencias del Colegio de Ingenieros al Supremo Gobierno", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, Año XV, No. 67, abril de 1975, 9 y 13 respectivamente.

nueva élite sindical, a través de instituciones como la "Escuela Sindical de Chile". En 1978, además, comenzó a publicarse la revista *Gremios*, de corta duración, en la cual se insistía en que el objetivo del gobierno era "lograr la participación social a través de los organismos sociales intermedios", para de ese modo constituir "un poder social responsable que no esté supeditado al poder político"²³. La consolidación del neoliberalismo y, sobre todo, la promulgación del Plan Laboral en 1979 acabarían con lo que quedaba de influencia corporativista en esta organización²⁴.

Mucho más relevantes en dimensión, alcance y recursos fueron las Secretarías Nacionales de la Mujer y la Juventud. Ellas, por cierto, no estaban dirigidas hacia los grupos mesocráticos, o a cualquier tipo de organización ya establecida. Por el contrario, el foco estaba puesto primordialmente en los sectores populares, pero sin apelar a ellos en su condición de clase social. Categorías de género y generación -mujeres y jóvenes- servían mejor los propósitos de construir una idea de unidad nacional, sin divisiones de clase en su interior. Además, ambas categorías coincidían con el relato épico de la lucha contra la Unidad Popular, en tanto reacción instintiva de la nación -y no un sector determinado de ésta- ante lo que era concebido como una amenaza vital. La Secretaría Nacional de la Mujer fue organizada por antiguas dirigentes de organizaciones femeninas conservadoras como "SOL" y "Poder Femenino", y su labor estuvo enfocada a tareas asistenciales en sectores populares con la ayuda de miles de voluntarias de sectores altos y medios. En el esfuerzo por organizar, movilizar y cooptar mujeres en favor del régimen se sumó también CEMA-Chile -basado en la tupida red de centros de madres existente en Chile desde los años treinta, y fortalecida en la segunda parte de los sesenta- a cargo de la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart²⁵. Por su parte, la Secretaría Nacional de la Juventud fue

²³ "Editorial", *Gremios*, Año I, No. 1, 1978, 3.

²⁴ Rolando Álvarez, "¿Represión o integración? la política sindical del régimen militar: 1973-1980", *Historia* 43, n° 2 (2010): 325-355; *Memoria de Gobierno 1973-1990*, c1990, 1. Político Institucional:266-69.

²⁵ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 64.

concebido como un reducto de los gremialistas de Jaime Guzmán, y orientado a la resocialización de la juventud en los valores nacionalistas, católicos y despolitizados de la Junta. El decline de ambas organizaciones, al igual que en el caso anterior, estuvo dado por la profundización de las reformas neoliberales en la segunda parte de la década de los setenta, y la municipalización de la acción estatal a nivel local²⁶.

La dictadura, entonces, no sólo se aproximó a la sociedad chilena mediante el despliegue del aparato represivo militar, sino también mediante la apertura de canales de participación y cooptación. Muchas de esas iniciativas estuvieron motivadas por la tradición corporativista y, en algunos casos, estatista, que muchos grupos conservadores traían consigo desde hace décadas. La presencia de un número grupo militar "ibañista" dio contenido y capacidad de acción a este tipo de propuestas al interior del régimen, motivando una reacción positiva de los grupos mesocráticos contrarrevolucionarios.

Los grupos de clase media, sin embargo, no fueron el único objetivo de las políticas de participación y cooperación. De hecho, Pinochet y la Junta concentraron parte importante de sus esfuerzos en llevar adelante una "guerra social" dirigida a persuadir a los sectores populares de la legitimidad y necesidad del autoritarismo, y para ello adecuaron la estructura del Estado, particularmente del Ejecutivo, a las nuevas necesidades de organización²⁷. La política de cooptación popular incluyó a jóvenes y mujeres urbanos, a quienes se le asignaba un destacado rol representativo de una nación despolitizada y limitada a funciones domésticas. Otros grupos fueron también objeto de políticas específicas, como los mapuches en la zona de la Araucanía, a través de la fundación del Consejo Regional Mapuche, que contó con el entusiasta apoyo de

²⁶ Valdivia Ortiz de Zárate, "Were Women and Young People the Heart of the Pinochet Regime? Rise and Decline of the Secretariats".

²⁷ Valdivia Ortiz de Zárate, "¡Estamos en guerra, señores!"; Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, "Pinochetismo e guerra social no Chile (1973-1989)", en *Dictaduras Militares. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai*, ed. Rodrigo Patto Sá Motta (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015).

varios de los más destacados dirigentes sociales indígenas en los años setenta²⁸. Con todo, hubo una diferencia clara entre los grupos sociales que pudieron acceder a los canales de comunicación y participación de la dictadura. Mientras los sectores populares fueron entendidos como receptores pasivos de políticas dirigidas de cooptación, sin que mediara diálogo alguno, las organizaciones mesocráticas pudieron negociar directamente con el régimen algunos aspectos concernientes a sus respectivas áreas de influencia. Aquella negociación, si bien limitada por las exigencias del momento y siempre supeditada a un apoyo político y doctrinario explícito, fue experimentada como una reapertura del Estado a las demandas de estos grupos, luego de su clausura bajo la Unidad Popular.

2.- Negociaciones. La clase media y la reapertura del Estado

A diferencia de los gobiernos democráticos anteriores, la dictadura de Pinochet no hizo llamados explícitos a la clase media en cuanto tal. Más aún, dadas las bases ideológicas del régimen y el antimarxismo imperante, se inhibió en general cualquier tipo de referencia a la clase como categoría de comprensión de la sociedad. Los intelectuales orgánicos de la Junta negaron la existencia de las clases, tildándolas de invenciones del marxismo derrotado, o cuando reconocieron grupos diferenciados le dieron nombres diferentes -"estamentos", diría el sacerdote Osvaldo Lira- que por cuya naturaleza y función deben funcionar armónicamente con sus superiores e inferiores²⁹. Todo ello se plasmó en el discurso público de Pinochet, en el que se multiplicaron las referencias a la familia en tanto arquetipo de unidad organizada en base a la autoridad y la jerarquía, ocupando él mismo el rol de padre restaurador. De ese modo, la clase en

²⁸ Christian Martínez y Sergio Caniuqueo, "Las políticas hacia las comunidades Mapuche del Gobierno Militar y la fundación del Consejo Regional Mapuche, 1973-1983", *Veriversitas* 1 (2011).

²⁹ Isabel Jara, "'Una nación de propietarios, no de proletarios'. La retórica intelectual de la dictadura chilena sobre las clases sociales y la clase media", en *La frágil clase media: estudios sobre grupos medios en Chile contemporáneo*, ed. Azun Candina (Santiago: Programa UREDES, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2013), 71-84.

tanto grupo social consciente y organizado -en particular la clase obrera-, fue eliminada del discurso gubernamental en favor de una retórica mítica de unidad de los "buenos chilenos". De allí que el propio Pinochet no reconociera validez alguna en opiniones disidentes, por constituir amenazas a una nación entendida más que como mera comunidad, como entidad suprahistórica que requería ser restaurada. El mito sobre un pasado dorado "portaliano" fue convertido en una utopía proyectada hacia el futuro: una nación armónica y depurada de todo conflicto impostado y artificial entre clases³⁰.

Con todo, hubo algunas excepciones al silenciamiento de la clase media en los primeros meses de la dictadura. La cercanía de la lucha social contra Allende y la centralidad de la noción de clase media en ella obligaron hasta cierto punto a las nuevas autoridades a referirse a ella. Fernando Léniz, Ministro de Economía, dictó en abril de 1974 una clase magistral en la Universidad de Chile donde se refirió latamente al desarrollo de la clase media en Chile y el rol que ese sector tendría en el nuevo modelo económico y social del régimen. Refiriéndose a ese evento, *El Mercurio* complementó diciendo que la clase media "representa el elemento dinámico del país", en la que residiría "la capacidad actual de progreso e iniciativa". La Unidad Popular, dada su inspiración ideológica, habría menospreciado a este sector, lo que en gran medida habría provocado su caída. "La clase media es acelerador, pero también es freno contra las aventuras desorbitadas". De allí que pasado el momento de la lucha social, llegara el de la maximización de las capacidades productivas, el esfuerzo y el sacrificio para alcanzar el desarrollo del país³¹.

A pesar de la escasez de referencias directas a la clase media, lo cierto es que la dictadura en sus primeros momentos de indefinición ideológica comenzó a delinear un *ideal de sociedad*, en

³⁰ Giselle Munizaga, *El discurso público de Pinochet: un análisis semiológico* (Santiago: CESOC/CENECA, 1988), 83; Gwynn Thomas, *Contesting Legitimacy in Chile: Familial Ideals, Citizenship, and Political Struggle, 1970-1990* (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2011), capítulo 5.

³¹ "La Clase Media", *El Mercurio*, 14 de abril de 1974, 21.

contraposición al proyecto socialista y en base a los preceptos ideológicos del bloque político en el poder, que respondía al universo simbólico del "Chile mesocrático". Por una parte, como se señaló en la sección anterior, se anhelaba una sociedad cohesionada y con canales despolitizados y verticales de participación, mientras que por otro parte se aspiraba a un desarrollo económico suficiente para asegurar una vida material digna a todos los ciudadanos. En las celebraciones por el primer aniversario del golpe, Pinochet señaló que el objetivo de la Unidad Popular era "la destrucción física de la clase media", algo que su gobierno revertiría a través de la "promoción del esfuerzo individual" y una "política activa de protección a las remuneraciones". El objetivo, agregó, era construir una sociedad igualitaria en la abundancia, de verdadera justicia social, donde la mayoría pueda disfrutar de condiciones de vida virtuosas, socialmente atribuidas a la clase media.

Aquel ideal de progreso mesocrático ya había sido esbozado en la "Declaración de Principios" de marzo de 1974, al apuntar que "se trata de hacer de Chile una nación de propietarios y no de proletarios"³², contraponiendo de ese modo al pequeño productor con el obrero asalariado, e inclinándose por el primero. El acceso a la pequeña propiedad -ya sea productiva o residencial- se consideraba usualmente como un atributo necesario de la clase media en tanto fundamento material para el buen vivir³³. De allí, por ejemplo, que durante el siglo XX las "cajas de previsión" de empleados, profesionales e independientes, hayan puesto tanta atención en la construcción de casas y departamentos de cierta calidad para sus asociados. La dictadura, entonces, aspiraba a una masificación de la forma de vida mesocrática a través de la expansión de medidas y servicios que materialmente la hacían posible: salarios, propiedad,

³² Jara, "“Una nación de propietarios, no de proletarios”", 77.

³³ Durante la dictadura, las políticas habitacionales estatales se limitaron a los sectores populares, en las que se replicó la importancia simbólica de la propiedad como afirmación de la ciudadanía. Al respecto véase el excelente estudio de Edward Murphy, *For a Proper Home: Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960-2010* (Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2015).

vivienda, educación.

La promesa de un estilo de vida mesocrático y de la masificación de los bienes y servicios que la hacían posible era especialmente importante en ese momento, dada la difícil situación económica que atravesaba el país. La inflación al final de 1974 llegaba al 375%, mientras los salarios bajaban y el desempleo real subía al 20%. La situación internacional hacía las cosas aún más difíciles. El fuerte incremento en el precio del petróleo por acción de los países de la OPEP provocó una crisis internacional que redujo fuertemente los ingresos provenientes del cobre³⁴. Todo ello impactó con fuerza en la realidad material no sólo de los sectores populares, sino también de quienes buscaban lograr o mantener un status de clase media. La futura recuperación anunciada por el régimen, en ese sentido, vendría de la mano de un aumento general del bienestar material en la línea de las aspiraciones mesocráticas del momento. En el discurso del primer aniversario del golpe, Pinochet señaló:

Hoy imponemos a los sectores medios una mayor cuota del obligado sacrificio nacional. Pero al contrario del régimen anterior, que buscaba nivelar a los ciudadanos hacia la pobreza, hoy el significado que tiene es buscar una nivelación de mayor nivel en Chile. Aspiramos que todos puedan llegar a un *standard* que nivele hacia arriba por la vía del progreso económico, social y educacional. Queremos una nación donde todos sean propietarios y tengan un ingreso que dé bienestar³⁵

Este ideal social mesocrático, si bien aún ambiguo y de contornos poco definidos, se desarrolló a la par de una reapertura del Estado hacia los grupos de clase media contrarrevolucionarios. Como señalé en el capítulo 1, los canales de comunicación y negociación entre este tipo de organizaciones y el Estado, contruidos y desarrollados desde los años treinta, sufrieron una abrupta interrupción en el gobierno de la Unidad Popular, a pesar de que en los primeros meses, la "luna de miel", la situación fue de aparente normalidad. Con la politización y radicalización de los gremios mesocráticos -sobre todo a partir del paro de octubre de 1972-, las

³⁴ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 75; Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*, 170.

³⁵ "El gobierno de Chile avanza con seguridad y sin vacilaciones", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1974, 2 y 34.

instancias de decisión al interior del Estado fueron virtualmente clausuradas. Los primeros años de la dictadura significaron para estos grupos la reapertura del Estado y la reactivación de varias de las prerrogativas que el sistema legal y la práctica política otorgaban a estos sectores. Fue, en cierto sentido, una reedición temporal del "Chile mesocrático", aunque esta vez con los militares en el poder y en un contexto de supresión de las libertades civiles y garantías democráticas. Las puertas estaban abiertas, pero el espacio para el disenso reducido a su mínima expresión.

Las organizaciones civiles de clase media no dudaron en atravesar esas puertas desde, literalmente, el primer día. Rafael Cumsille fue requerido por las autoridades el mismo día 11, y según relata en sus memorias, fue gracias a "labores de inteligencia" que pudo ser ubicado. El estilo castrense de dar órdenes y el ambiente de guerra reinante le habrían causado gran temor. De hecho, en el trayecto al despacho del general Bonilla, Cumsille habría sido testigo de tiroteos y apresamientos en las calles³⁶. En la reunión, se le pidió colaborar con el Ministro de Economía Rolando González, que tenía un improvisado gabinete en el Instituto Geográfico Militar. Pronto Cumsille se encontraría con que las aspiraciones de su gremio eran aceptadas de forma inmediata. Por sugerencia suya se eliminaron los controles de circulación de mercancías decretadas anteriormente por DIRINCO y las multas cursadas por los resistidos inspectores ad-honorem, además de fijarse nuevos precios de comercialización que aseguraran márgenes de ganancia de al menos un 20%, entre otras cosas³⁷. En otros casos, la colaboración implicó suplir las carencias de un Estado en crisis tras el golpe. El Coronel Alberto Spoerer, designado Ministro de Salud, pidió al Colegio Médico usar las instalaciones de la institución para instalar allí su despacho. La respuesta del Colegio fue rápida y afirmativa, cediendo para ello varias oficinas "las cuales

³⁶ Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 139. Por supuesto, Cumsille nada dijo entonces sobre esta situación u otra situación de violaciones a los Derechos Humanos. Las memorias, escritas poco más de treinta años después de los sucesos, están atravesadas por consideraciones posteriores, producto de luchas por la memoria de otros tiempos.

³⁷ Ibid., 142. "Saludos oficial y entrevista con el Ministro de Economía" y "Sanciones sin efecto", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año V, No. 15, octubre de 1973, 27.

puede usted tomar posesión de inmediato y por todo el tiempo que sea necesario". El Ministro Spoerer, a su vez, llamó a las autoridades del Colegio a constituirse en un "organismo asesor" del gobierno con el objeto de identificar los problemas más apremiantes³⁸

Las reuniones se sucedieron una a otra con velocidad. Cumsille acudió a decenas audiencias con las autoridades económicas del gobierno, mientras la Confederación de Colegios Profesionales asistió a una reunión con la Junta, donde los nuevos gobernantes explicaron las razones del golpe y pidieron la colaboración activa de los profesionales en el nuevo orden de cosas³⁹. La misma dinámica que se daba a nivel de directivas nacionales y autoridades centrales se reproducía a nivel provincial. El bando No. 6 de la provincia de Cautín ordenó la reapertura inmediata del comercio y citaba a reunión urgente a las directivas del Comercio Detallista y el rodado. Además, el intendente militar convocó a una reunión con todos los comerciantes de Temuco para el 16 de septiembre en el gimnasio del Colegio De La Salle con el objeto de difundir el mensaje normalizador del consumo y el abastecimiento que perseguía el nuevo gobierno. Como la reunión, por dificultades logísticas, fue finalmente suspendida, la directiva de la Federación Provincial del Comercio Detallista de la zona gestionó una nueva audiencia a fin de iniciar conversaciones sobre el estado del comercio y las medidas a adoptar para su restablecimiento⁴⁰.

La buena disposición de las nuevas autoridades militares a las organización mesocráticas tuvo que ver con el prestigio alcanzado por sus directivas tras la lucha social contra la Unidad

³⁸ "Dos actitudes diferentes" y "Dr. Spoerer expone la política de salud del nuevo gobierno", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 14.

³⁹ "Sesión en 17 de septiembre de 1973", *Actas del Consejo General*, 1973, ACAB, 1.

⁴⁰ "Bando No. 6 de la Intendencia de la Provincia de Cautín", Temuco, 11 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 538, ARA; "Bando No. 21" de la Intendencia de la Provincia de Cautín", Temuco, 11 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 538, ARA; Carta de Patricio Araneda Rebolledo, Secretario General de la Federación Provincial de Cautín del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Chile, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 21 de septiembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 505, ARA.

Popular. Los líderes de estas organizaciones, de hecho, asumieron una posición de mediadores entre sus respectivas bases radicalizadas y movilizadas, por una parte, y las autoridades, por la otra. Los homenajes que se multiplicaban por entonces a personajes como León Vilarín o Rafael Cumsille por parte de sus respectivos gremios tenían un efecto aglutinador y cohesionador, dándole a ellos más facultades tanto para disciplinar a sus huestes como para demandar influencia al interior del Estado. León Vilarín, por ejemplo, fue homenajeado por los sindicatos camioneros a finales de septiembre en el Círculo Español, en una ceremonia solemne y con gran cobertura de prensa⁴¹. Entusiasmado por este tipo de reconocimientos, invocó una "autoridad moral" para que la dictadura se abriera a la solución de sus demandas sectoriales. "Ahora podemos decir con propiedad, que este es nuestro gobierno", señalaba Vilarín en *El Camionero*. Y agregaba: "Ello no nos inhibe para representarle a las autoridades de la H. Junta Militar, a los señores Ministros de Estado y a los funcionarios públicos de todo nivel, la necesidad urgente de resolver nuestros problemas con justicia y oportunamente"⁴².

De la misma manera, el poder de estos intermediarios se consolidaba cuando las autoridades reconocían abiertamente su liderazgo. La *Revista Masónica de Chile* publicó con indisimulado orgullo las felicitaciones que Pinochet envió a Horacio González Contesse con motivo tanto de su elección como Gran Maestro de la Gran Logia en 1974, como por el 113 aniversario de la Gran Logia en 1975. De allí en adelante, la relación entre ambas autoridades se caracterizó por una abierta amistad y cortesía, como no dudaba en dejarlo claro el propio González Contesse en sus intervenciones públicas. El reconocimiento de la más alta autoridad de

⁴¹ "¡Merecido homenaje al forjador del triunfo de septiembre!", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 42-43

⁴² "1973: un año histórico para Chile y nuestro gremio", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 25, diciembre de 1973, 1.

gobierno al líder de la Orden sirvió para consolidar su autoridad interna y llevar a cabo los arreglos necesarios para evitar cualquier expresión de disenso⁴³.

León Vilarín fue quizás el dirigente gremial que acumuló los reconocimientos más explícitos de las autoridades, y por lo mismo logró integrarse de mejor modo a los espacios de decisión gubernamental. La Comisión de Reforma de la Constitución, instaurada pocos meses después del golpe, lo invitó a una de sus primeras sesiones en tanto representante más destacado del mundo gremial⁴⁴. A raíz de este tipo de instancias, y de las visitas periódicas de Vilarín al Edificio Diego Portales, la prensa comenzó a referirse a él como el "quinto miembro de la Junta", gracias a su carácter de interlocutor entre las autoridades y el mundo gremial⁴⁵. La importancia del liderazgo de Vilarín quedaba refrendada en situaciones como las celebraciones del primer aniversario del paro camionero de 1973, en julio de 1974. En esa ocasión, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile organizó un acto masivo en los terrenos de la FISA, que contó con la presencia de Lucía Hiriart y Gustavo Leigh, además de otras autoridades militares. *El Camionero* quiso dejar en claro la importancia nacional de su líder, al publicar una fotografía de Lucía Hiriart y Adriana de Vilarín en lo que parecía era una animada charla horizontal en medio de las celebraciones. Bajo la foto, la leyenda se leía "esposas de presidentes", buscando así cierto paralelismo entre la importancia de las presidencias de la Junta de Pinochet, y de los camioneros de Vilarín⁴⁶.

⁴³ "Esporádicas pero deferentes relaciones del Gobierno Civil con el Gobierno Simbólico", *Revista Masónica de Chile*, Año LI, marzo-junio de 1974, Nos. 1-4, 11; "Lo que desde hace un año esperábamos", *El Mercurio*, 5 de junio de 1975, 2. "Las esporádicas relaciones del Gobierno Simbólico con el Gobierno Civil", *Revista Masónica de Chile*, Año LII, julio-agosto-septiembre de 1975, Nos. 5-6-7, 2-3.

⁴⁴ "Comisión de Reforma de la Constitución escuchó la voz de nuestro gremio", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 30, julio de 1974, 40

⁴⁵ Raúl González Alfaro, "Visión retrospectiva de las dos batallas que terminaron con el 'imperio marxista'", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 47. Así también lo recuerda el dirigente camionero Moisés Pastrán. Entrevista a Moisés Pastrán, 22 de septiembre de 2016.

⁴⁶ "Esposas de Presidentes", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No.31, agosto de 1974, 29.

En el gobierno, el representante del corporativismo "ibañista", Gustavo Leigh, fue especialmente activo en la tarea de reconocer y celebrar a los líderes gremiales. En marzo de 1974, por ejemplo, Leigh asistió al Consejo Nacional Ejecutivo de la Confederación de Comercio Detallista celebrado en Viña del Mar, ocasión en la que recordó una vez más el protagonismo de los comerciantes en la derrota de la Unidad Popular, además de remarcar el futuro auspicioso que el gremio tendría bajo el autoritarismo militar y la economía social de mercado⁴⁷. Pocos meses después, el turno fue de los médicos. En la Convención de Consejos Regionales del Colegio Médico, Leigh estuvo presente en los debates sobre políticas sectoriales de salud, incluyendo el sensible tema de las remuneraciones. La presencia del miembro de la Junta militar en el evento otorgaba una sanción implícita a los temas discutidos y, se esperaba entonces, una especie de garantía de que las demandas gremiales serían resueltas por las nuevas autoridades⁴⁸.

Otras autoridades de gobierno, como el representante de la Armada en la Junta, José Toribio Merino, participaron también del esfuerzo por reconocer y celebrar públicamente a las organizaciones mesocráticas. El objetivo era señalar a estos grupos y a sus autoridades como fieles representantes de la nación, y por lo tanto funcionales a los esfuerzos regeneradores propuestos por la Junta. El cincuentenario del Rotary Club de Santiago, por ejemplo, fue celebrado con gran cobertura mediática y asistencia de autoridades de Estado. Ministros, intendentes, generales y embajadores, entre muchos otros, se reunieron para la ocasión, con Merino como orador principal. En su intervención, señaló: "El Rotary no es algo ajeno al espíritu

⁴⁷ "Comercio apoya gestión de la Junta de Gobierno", *El Mercurio*, 26 de marzo de 1974, 10.

⁴⁸ *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVI, s/n, mayo-junio de 1974, 24.

nacional, sino por el contrario está muy adentro de los ciudadanos chilenos, de lo que el hombre que trabaja quiere en un momento cuando tiene la voluntad de servir al prójimo"⁴⁹.

La prensa oficialista colaboró activamente con este proceso de reconocimiento a los líderes mesocráticos, asegurándoles la visibilidad y prestigio necesarios para reclamar un lugar en la toma de decisiones del Estado. Ello, por cierto, incluyó a figuras relativamente desconocidas hasta entonces, como la presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos, María Isabel Vermehren, cuyo perfil fue publicado en términos elogiosos por *El Mercurio*. En la nota se destacaba los avances que la organización había tenido bajo su mandato, sobre todo considerando que habían podido adquirir una cómoda sede propia en el centro de Santiago y que tenían el reconocimiento explícito del Ministro de Salud⁵⁰.

Del mismo modo, en la exposición pública de líderes de estas organizaciones se ponía el énfasis en las virtudes morales tradicionalmente asociadas con el ideal mesocrático. En la entrevista a Julio Salas Romo, consejero general del Colegio de Abogados, se destacó su carácter austero ("no hay en su oficina ningún elemento decorativo que imprima en ella un toque personal. Los muros se ven vacíos"), afable ("quizás sea su falta de solemnidad (...) lo que le ha ganado tantos amigos") y sin ambiciones políticas ("asegura que él debe ser uno de los pocos abogados que nunca ha sido candidato a nada"). Alumno del Instituto Nacional y la Universidad Chile -las instituciones de educación pública por excelencia- Salas Romo era de ese modo presentado como el arquetipo del hombre estudioso y esforzado que no busca el reconocimiento público, y que aún así destina tiempo y energía a la labor gremial. Era, en ese sentido, el ideal de líder mesocrático

⁴⁹ "Cincuentenario del Rotary de Santiago", *El Mercurio*, 21 de marzo de 1974, 15 y 18.

⁵⁰ ""Presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos", *El Mercurio*, 2 de octubre de 1975, 4

que, conservando las virtudes republicanas de desapego a las ambiciones mundanas, era a su vez funcional al nuevo orden autoritario⁵¹.

El prestigio asociado al liderazgo mesocrático, sin embargo, no era suficiente. Al mismo tiempo, tenía que promoverse entre autoridades de gobierno, y de ese modo recordarles su presencia y potencial relevancia en el nuevo orden autoritario. En otras palabras, las redes de influencias tenían que ser periódicamente activadas a través de todo tipo de contactos, aún los más triviales. Las tarjetas de saludo y felicitaciones son un buen indicador de este fenómeno. Rafael Cumsille fue especialmente hábil en este terreno, como lo demuestran las centenares de tarjetas conservadas en la Confederación de Comercio Detallista. Muchas de ellas son agradecimientos por saludos enviados por el propio Cumsille por todo tipo de razones. Raúl Benavides, Ministro del Interior, respondió agradecido a Cumsille por sus felicitaciones al cumplirse dos años desde su nombramiento en esa cartera. Del mismo modo, Enrique González Battle, general de brigada aérea y presidente del Banco Central de Chile; Carmen Grez, dirigente de la Secretaría Nacional de la Mujer; y César Mendoza, General de Carabineros y miembro de la Junta militar, respondieron agradecidos por los saludos de Cumsille con motivo de sus respectivos onomásticos. Con muchos de ellos, además, parecía haber un trato afable y cercano, como con el coronel Jaime Rodríguez, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, a quién Cumsille se refería como "amigo"⁵². Las redes de Cumsille, a juzgar por la cantidad de tarjetas recibidas y enviadas, penetraban en todo el aparato gubernamental, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Producto de una minuciosa labor de saludos y reconocimientos, su nombre se hizo conocido al interior del Estado autoritario.

⁵¹ "Julio Salas Romo: 'El Gobierno ha aplicado las leyes que había'", *Qué Pasa*, s/n, 5 de diciembre de 1974, 36.

⁵² Volumen sin información. Archivo Confederación de Comercio Detallista (de ahora en adelante, ACCD).

León Vilarín fue otro hábil relacionador público al interior de la dictadura. A través de cartas a las autoridades y varias iniciativas autónomas de ayuda y colaboración, Vilarín intentó posicionarse como un líder gremial privilegiado a ojos de los militares. En mayo de 1974, por ejemplo, dirigió una carta a autoridades de gobierno de distintos niveles, donde se ofrecía la ayuda de los camioneros para todo tipo de tareas. "Seguramente existen problemas de transporte por camión en la agricultura, la industria o el comercio", señaló en la misiva, poniendo a disposición a los sindicatos locales "para que cooperen con Ud. a resolverlos". "Este es nuestro deber y puede el señor Gobernador tener la seguridad de que nuestro gremio, más allá de sus legítimos intereses, tiene siempre presente el interés superior del país"⁵³. Este tipo de iniciativas redundaban en un alto prestigio social entre autoridades, como lo demostraron las decenas de saludos recibidas por los camioneros con motivo del primer aniversario del paro de julio de 1973. Enrique Urrutia, presidente de la Corte Suprema, César Mendoza y ex-presidentes como Jorge Alessandri y Gabriel González Videla enviaron sus reconocimientos a la Confederación, además de ministros, organizaciones sociales y dirigentes gremiales⁵⁴.

Lo propio hicieron los rotarios. En septiembre de 1975, el Rotary Club de Santiago -el más antiguo y numeroso de la organización- rindió un homenaje público al Ejército, con la presencia estelar del propio Pinochet, quien en la ocasión fue nombrado socio honorario de la entidad. Según señaló en su discurso Kurt Weil Sillberg, entonces presidente del Club, era la primera vez que más de medio siglo de la institución que se entregaba ese reconocimiento a alguien que no pertenecía al movimiento rotario. Ese acto, agregó, reflejaba la similitud de propósitos del rotarismo chileno y la Junta militar, orientados ambos hacia el bien común y el

⁵³ "Efectiva participación de los camioneros en la reconstrucción", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 29, abril-mayo-junio de 1974, 8; Carta de León Vilarín, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, a Francisco Pérez García, Intendente de la Provincia de Cautín, Santiago, 7 de mayo de 1974, Intendencia de Cautín, Vol. 560, ARA.

⁵⁴ "Así nos saludó Chile", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 29, abril-mayo-junio de 1974, 88-93.

servicio a la comunidad. Al proclamar esta convergencia, Weil no hacía más que fortalecer el prestigio de los dirigentes rotarios, así como también sus redes de contactos entre las más altas autoridades de gobierno⁵⁵.

El reconocimiento oficial a los líderes mesocráticos y la construcción de redes de contacto e influencia al interior del régimen, por cierto, no fueron excluyentes con el fuerte control estatal sobre esas mismas organizaciones sociales. De hecho, esos líderes pudieron legitimarse ante sus bases en virtud de las disposiciones gubernamentales en torno a elecciones y libertad de reunión. En los primeros meses de la dictadura, el gobierno central instruyó a las autoridades provinciales a mantener un contacto permanente con Juntas de Vecinos, Centros de Madres, sindicatos, gremios y demás organizaciones comunitarias, enviando delegados a sus respectivas reuniones "con el fin que se constate que no se considerarán temas de tipo político, sino exclusivamente las materias específicas que correspondan a la respectiva organización"⁵⁶. En marzo de 1974, por otro lado, la dictadura acordó prorrogar el mandato de las directivas de las organizaciones sociales a través del Decreto Ley 349. Si es que alguno de los integrantes de esas directivas no podía seguir ejerciendo su función, el gobernador local designaría a un reemplazante para mantener el quórum necesario. Si bien el Colegio de Abogados se mostró crítico ante esta medida, e intentó presionar al gobierno para modificar el decreto, lo cierto es que la fijación legal de las directivas mesocráticas cerró el paso a grupos opositores internos, y reafirmó el ascendiente que esos mismos líderes habían construido en la lucha social contra la

⁵⁵ "Homenaje del Rotary Club al Ejército", *El Mercurio*, 25 de septiembre de 1975, 17

⁵⁶ Carta de Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín al Prefecto de Carabineros, Temuco, 8 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 475, ARA.

Unidad Popular. En ese sentido, el DL 349 operó como una confirmación legal del rol de intermediario de los dirigentes mesocráticos⁵⁷.

El círculo virtuoso entre popularidad de los líderes con sus bases y ascendiente con las autoridades se completaba cuando las negociaciones con las autoridades llegaban a resultados concretos. De ese modo, estos grupos y sus dirigentes podían replicar la lógica del "Chile mesocrático", donde a través de la negociación y la presión se lograba modificar parcialmente la estructura del Estado en favor de sus intereses. De hecho, en varias ocasiones, los resultados de las negociaciones resultaron en recursos materiales para estas organizaciones. A finales de 1973 el gobierno hizo entrega de 192 camiones, de un total de 2 mil proyectados, a los camioneros de Vilarín⁵⁸. La Confederación, de ese modo, asumía la prerrogativa de recibir los vehículos y distribuirlos entre los socios interesados en comprarlos. En la primera asamblea general de socios del Sindicato de Dueños de Camiones de Santiago celebrada en dictadura, en marzo de 1974, el propio Vilarín anunció la disponibilidad de camiones con preferencia para los socios de esa organización, "dados los desvelos y sacrificios demostrados en la última huelga". La asamblea respondió con una estruendosa ovación⁵⁹.

Hubo también otros casos. A fines de 1976, el Colegio de Abogados consiguió del Ministerio de Hacienda más de dos millones de escudos mientras se aprobaba la legislación que permitía cobrar cuotas gremiales a sus asociados. El monto conseguido luego de varias reuniones con autoridades tenía por objeto asegurar la estabilidad económica del Colegio en tiempos de

⁵⁷ "Prorrogan directivas de Colegios Profesionales", *La Patria*, 14 de marzo de 1974, 5; "Sesión en 18 de marzo de 1974", *Actas del Consejo General*, 1974, ACAB, 4. Por cierto, el Colegio de Abogados fue el único que logró librarse de esa medida, gracias a las gestiones de Alejandro Silva Bascuñán. A diferencia del resto de las organizaciones mesocráticas, los abogados pudieron ellos mismos nombrar a nuevos consejeros Silva Bascuñán, *El abogado, un servidor de la justicia*, 17.

⁵⁸ "Ceremonia de entrega simbólica de camiones en Casablanca", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 25, diciembre de 1973, 42.

⁵⁹ "Asamblea General de Socios", 21 de marzo de 1974, *Actas del Directorio del Sindicato General Profesional de Dueños de Camiones de Santiago*, Vol. 1969-1980, ASIPRODUCAM, 202.

contracción del gasto fiscal⁶⁰. Del mismo modo, tras gestiones de la directiva de la Confederación de Comercio Detallista, el régimen hizo los arreglos necesarios para salvar la central de distribución del gremio -CENADI- de la quiebra, al ser reemplazado por órganos estatales durante el gobierno de la Unidad Popular. Durante los primeros meses de la dictadura, la CENADI pudo acopiar y distribuir cerca del 20% de los productos de primera necesidad, asegurando su continuidad⁶¹.

Las negociaciones exitosas entre grupos mesocráticos y autoridades militares no se tradujeron solamente en transferencia de recursos materiales. El régimen también adoptó medidas y aceptó sugerencias para facilitar la vida interna de estas organizaciones y, en varios casos, acercarlas más al proceso de toma de decisiones del Estado. Luego del golpe, algunas logias de provincia se contactaron con el Gran Maestro acusando las dificultades para la celebración de las reuniones normales de las logias, por lo que pidieron a su dirigente máximo intervenir ante la Junta. González Contesse logró de las autoridades un pronunciamiento favorable, al señalar que a la masonería "se la considera como una institución de la más alta respetabilidad", según confesó el propio Gran Maestro en una cuenta anual⁶². En los años siguientes, sin embargo, los contactos entre la dirección de la masonería y las autoridades militares se multiplicaron con objeto de asegurar la libertad de reunión para sus asociados. En mayo de 1976, y ante la petición de un grupo de logias de Los Ángeles⁶³, González Contesse le escribió al Ministro del Interior, señalando que "nuestra Augusta Orden, consagrada por entero al perfeccionamiento espiritual y moral de sus adeptos, se afana constantemente en favor de la

⁶⁰ "Sesión en 27 de diciembre de 1976", Actas del Consejo General, 1976, ACAb, 2.

⁶¹ "Salvada CENADI", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año V, No. 15, octubre de 1973, 19.

⁶² "Cuenta del Gran Maestro", *Revista Masónica de Chile*, Año L, No. 8-10, de septiembre-diciembre de 1973, 12.

⁶³ Carta de Carlos Escobar Moreira, Gran Delegado Regional del Valle de Temuco, a René García Valenzuela, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 17 de septiembre de 1973. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh.

pacificación de los espíritus y en el restablecimiento de la fraternal comunión de la familia chilena", por lo que pedía facilidades para la celebración de reuniones masónicas⁶⁴.

Del mismo modo, otras organizaciones lograron ubicarse en un lugar privilegiado para influir en las políticas tomadas por el gobierno. Gracias a su prestigio, credenciales y preparación técnica, los colegios profesionales fueron especialmente exitosos en este esfuerzo. El Colegio de Abogados, por ejemplo, se constituyó como un virtual órgano asesor en materias jurídicas. Como el propio Consejo General había reconocido, en muchos de los bandos del gobierno aparecían reproducidas expresiones emitidas por el Colegio en declaraciones públicas. Además, al interior del Colegio se discutían materias de Estado, como el problema limítrofe con Bolivia o las relaciones Gobierno-Iglesia, generando informes para las autoridades⁶⁵.

Algo similar sucedió con ingenieros y médicos. A finales de 1973, Arriagada declaraba a la prensa que el Colegio de Ingenieros esperaba participar activamente en la reforma de la administración del Estado y en todas aquellas materias que requiriera el gobierno. Sin esconder su conformidad, un año después podía leerse en la revista gremial que la "permanente colaboración a las autoridades de gobierno (...) en las materias en que se nos ha consultado", incluyendo "estructuras ministeriales, desarrollo energético o asesorías técnicas", "son una muestra de esta acción efectiva que ha colocado al Colegio en una posición de gran solvencia técnica"⁶⁶. Al mismo tiempo, el Colegio Médico anunciaba triunfalmente en conferencia de prensa que tendría una "participación importante" en la reestructuración del Servicio Nacional de Salud, en base a cinco objetivos especialmente importantes para la Orden y, por supuesto, compartidos con el gobierno: descentralización, despolitización, desburocratización, redefinición

⁶⁴ Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, al General Raúl Benavides Escobar, Ministro del Interior, 25 de mayo de 1976. Caja s/n. Correspondencia GG.MM.: 1974-1980, AGLCh

⁶⁵ "Sesión en 22 de diciembre de 1975", Actas del Consejo General, 1975, ACAb, 4.

⁶⁶ "Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país" (entrevista a Eduardo Arriagada), *La Patria*, 21 de diciembre de 1973, 3; "Editorial", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 66, diciembre de 1974, 3.

de criterios para asignación de presupuestos y creación de una escala única de sueldos. "Nunca un Gobierno había prestado mayor atención al Colegio que el actual", señalaron entonces. "De tal manera que podría ser realidad, a corto plazo, los anhelos de esta institución en orden a modificar las estructuras básicas de ese Servicio que se creó precisamente, de los estudios preliminares que hizo el Colegio"⁶⁷, agregaron.

La apertura del Estado y de sus canales de diálogo posibilitaron un último aspecto del éxito de las negociaciones, particularmente sensibles a las aspiraciones mesocráticas: la transferencia de cuadros técnicos y profesionales al Estado. Durante la Unidad Popular, como se recordará, los colegios profesionales reclamaron airadamente lo que consideraban "atropellos" a su dignidad, sobre todo en cuanto al carácter "político" (y no "técnico") en la elección de funcionarios públicos especializados. A ojos de las directivas profesionales, la dictadura habría restablecido los mecanismos de acceso al empleo público de alto nivel basados únicamente en criterios de excelencia técnica, proceso en el cual los colegios tendrían bastante que decir. El Colegio Médico, por ejemplo, recibió con entusiasmo la indicación del nuevo Ministro de Salud de que a partir de ese momento sólo nombraría a personas "de alta eficiencia técnica, políticamente independientes, con condiciones administrativas y de honorabilidad reconocida" para cargos públicos de relevancia⁶⁸. Por lo mismo, muchos dirigentes de colegios profesionales asumieron directamente funciones públicas. Darwin Arriagada, parte de la mesa directiva del Colegio Médico, fue nombrado director del Servicio Nacional de Salud, mientras los abogados y consejeros Julio Salas Romo, Jaime Silva, Valentín Robles y Alicia Romo asumieron la

⁶⁷ "Colegio Médico: Tendrá participación importante en la reestructuración del S.N.S.", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 10, octubre de 1973, 14.

⁶⁸ "Dr. Spoerer expone la política de salud del nuevo gobierno", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 14.

subsecretaría del Ministerio de Agricultura, subsecretaría de la CORA, la fiscalía del Banco del Estado y la fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, respectivamente⁶⁹.

Más importante que cargos puntuales, sin embargo, fue el control relativo de los colegios profesionales a nivel nacional y provincial para proveer al nuevo gobierno de mandos medios para asegurar su funcionamiento, y las demandas que podían plantearse desde esa posición de privilegio. La directiva nacional de los ingenieros sostuvo decenas de reuniones con autoridades de gobierno para definir los términos de la colaboración y, sobre todo, proponer "profesionales idóneos" para cubrir cargos estatales de responsabilidad, muchos de los cuales fueron aceptados. Al mismo tiempo, en la cuenta del período 1973-1974 del Colegio de Ingenieros de Concepción se detallaban una decena de instituciones estatales locales acéfalas de las que se tuvo que hacer cargo a través de sus asociados⁷⁰.

El restablecimiento del status del profesional en el aparato público a través de los colegios, al mismo tiempo, permitió formular nuevamente al Estado demandas relativas a sus ingresos y condiciones laborales, a pesar del contexto autoritario. En la Convención Nacional del Colegio Médico celebrada a finales de 1973, el entonces presidente de la Orden, Ernesto Mundt, expresó su preocupación por los bajos salarios de sus asociados. "Todos hemos debido pagar un alto tributo en este proceso sucesivo de desquiciamiento económico y de reordenamiento actual, que ha afectado en forma tan dolorosa a la clase media chilena, mucho más numerosa de lo que uno puede imaginar y que alberga a las fuerzas motoras del país", señaló en su discurso. Basándose en esa noción de "clase media", el dirigente gremial esbozó una defensa del status social del médico, expresada tanto en su salario como en las condiciones materiales mínimas

⁶⁹ "Designaciones en Salud", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 21; "Sesión en 24 de septiembre de 1973", *Actas del Consejo General*, 1973, ACAb, 3.

⁷⁰ "Ingenieros concretan su colaboración a la Junta", *La Prensa*, 6 de diciembre de 1973, 2; "Colegio de Ingenieros de Concepción", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 65, septiembre de 1974, 62.

para mantener una vida digna de acuerdo a sus credenciales profesionales. "¿A qué nivel mínimo tiene derecho un médico para vivir modesta, pero dignamente en un país como el nuestro?", preguntaba retóricamente. Y respondía: al suficiente para adquirir sus implementos profesionales, además de una casa y un vehículo para formar familia. "¿Es esto mucho pedir?", insistía. En la medida que esas aspiraciones habían sido "vedadas" en la Unidad Popular, durante la dictadura debían ser satisfechas, restableciendo de ese modo las jerarquías sociales y laborales antes puestas en cuestión⁷¹.

Los reconocimientos, contactos y negociaciones sostenidos con éxito por parte de las directivas mesocráticas con autoridades de gobierno, entonces, reeditaron las formas de inserción en el Estado y la esfera pública del "Chile mesocrático". Sin embargo, más allá del sentimiento de restauración que se desprendía de las intervenciones públicas de esos dirigentes, lo cierto es que el autoritarismo militar obligaba a acomodos y nuevas formas de organización, algunas de las cuales ayudaban aún más a la visibilidad pública y el prestigio de los representantes de clase media. La aversión visceral a la política y los partidos por parte de autoridades de la dictadura fue quizás el rasgo más notorio al respecto. Mientras las orgánicas de izquierda eran reprimidas y exterminadas con ferocidad por parte de los agentes de seguridad, los partidos de derecha acataron silenciosamente el nuevo orden de cosas y se autodisolvieron, al mismo tiempo que la Democracia Cristiana entraba en "receso". Las propias organizaciones de clase media aplaudieron la clausura de la actividad partidaria, incluso aquellas dirigidas por militantes de partidos otrora opositores a Allende, ante lo que consideraban había sido una saturación de partidismo y "politiquería". El espacio institucional y el rol de mediador entre Estado y sociedad civil que habían ocupado los partidos en el período previo, entonces, quedó vacante. En gran

⁷¹ "Discursos inaugurales de la Convención", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 11-12, noviembre-diciembre de 1973, 5.

medida, la red de organizaciones mesocráticas y, sobre todo, aquellos grupos que se destacaron en la lucha contra la Unidad Popular, vinieron a reemplazar si no las prácticas, al menos la función de los partidos políticos en el ordenamiento del Estado. Por supuesto, las nuevas condiciones de ejercicio de poder estatal limitaban en varios aspectos estas funciones. El Poder Legislativo ahora se concentraba en la Junta y no en un Congreso multipartidista, por lo que las posibilidades de negociar y consensuar leyes y decretos se reducía considerablemente. Más aún, en el espíritu corporativista de entonces, la mediación entre Estado y sociedad civil se hacía ahora en nombre de actividades productivas, y no de opciones ideológicas expresadas en voto y militancia.

El ascenso de los grupos mesocráticos a la posición antes ocupada por los partidos políticos fue incluso motivo de bromas por parte de columnistas en revistas pro-régimen. Hernán Millas, escribiendo para *Ercilla*, describía una conversación ficticia con un "gremiólogo", quien le explicaba las razones de las peleas entre los comerciantes detallistas, la Cámara de Comercio y el Registro de Comerciantes. Y el experto agregaba: "si esta pelea no es más que para mantener los hábitos chilenos. Como ahora no hay partidos políticos que peleen entre ellos, hay que dejar que los gremios se agarren". Más allá de los cambios impuestos por el régimen, la pluma irónica de Millas buscaba enfatizar la continuidad de la manera "chilena" de hacer política⁷².

En suma, aquellas tendencias que fomentaban la participación social al interior de la dictadura, sumada a la relevancia social que habían alcanzado las organizaciones mesocráticas y sus líderes, abrieron temporalmente las puertas del Estado, reeditando bajo el autoritarismo las formas de negociación e influencia del período previo a la Unidad Popular. La participación de

⁷² Hernán Millas, "La unidad es principal", *Ercilla* No. 2022, semana del 1 al 7 de mayo de 1974, 10. Por cierto, la columna no fue del agrado de los implicados. En cartas al director posterior, la Cámara Central de Comercio de Chile señaló que el texto era improcedente porque habían "dado por finalizada dicha polémica, ya que hay cosas más urgentes para los intereses de todos los chilenos que hacer, y no es el tiempo para discusiones bizantinas; la hora de la reconstrucción nacional nos apremia, y queremos responder a ese desafío histórico". "La unidad es primordial" (carta al director), *Ercilla*, No. 2024, 15 al 21 de mayo de 1974, 5.

los grupos de clase media y sus prácticas de colaboración con la dictadura, sin embargo, no se limitarían a la negociación directa con el Estado en busca de influencia, cargos y políticas sectoriales determinadas. Más aún, estos grupos sintieron la responsabilidad de asumir funciones propias del Estado en defensa de la legitimidad de la dictadura, fuertemente cuestionada en el ámbito internacional. Fue quizás la expresión más acabada de la colaboración de la clase media con el autoritarismo militar en sus primeros años.

3.- Diplomacia civil: la clase media y la "campana antichilena"

El derrocamiento de Allende y la instauración de la dictadura militar en Chile provocaron una inédita reacción de repudio a nivel internacional. Chile ya había alcanzado visibilidad desde los años sesenta, en tanto modelo de reformismo desarrollista no-marxista bajo Eduardo Frei. La "vía chilena al socialismo" de Allende y su inédita opción por un camino revolucionario e institucional a la vez, catapultaron al país al centro de las preocupaciones internacionales, sobre todo tras su trágico fin. Regímenes y partidos progresistas repudiaron abiertamente el golpe, mientras cientos de miles de ciudadanos se manifestaban en las principales capitales del mundo. La "experiencia chilena" se transformó en objeto de debate entre sus intelectuales, que buscaban allí las "lecciones" a aprender para evitar el mismo resultado. En Italia, por ejemplo, el PC procesó los acontecimientos de Chile en clave local, surgiendo desde allí la idea de una alianza "histórica" con la Democracia Cristiana, precisamente lo que no había sucedido durante la Unidad Popular⁷³. La propia reacción negativa ante el golpe de la Democracia Cristiana italiana, al mismo tiempo, daba cuenta del hecho de que el repudio a la Junta superaba fronteras

⁷³ Sobre reacciones en la intelectualidad internacional, Alfredo Joignant y Patricio Navia Lucero, *Ecos mundiales del golpe de Estado escritos sobre el 11 de septiembre de 1973* (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013); Alessandro Santoni, *Il PCI e i giorni del Cile: alle origini di un mito politico* (Roma: Carocci, 2008); Joaquín Fermandois, *Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial, 1900-2004* (Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005) capítulo XV.

impuestas por la dinámica de Guerra Fría⁷⁴. A ellos se les sumaron democracias occidentales, prensa moderada, partidos centristas e incluso la ONU, que se pronunciaron en distintos momentos contra el régimen chileno, agudizando su aislamiento internacional.

El repudio al golpe tuvo su contraparte en las redes y prácticas de solidaridad que comenzarían a hacerse visible desde temprano. Desde diversos espacios e instituciones, y con diversas motivaciones, estas redes buscaron sensibilizar a las opiniones públicas locales, denunciar al régimen chileno y colaborar con los perseguidos. En muchas de estas organizaciones, las decenas de miles de exiliados que comenzaron a abandonar el país participaron activamente, a ratos reproduciendo los conflictos internos de los años anteriores. Los exiliados, a su vez, se integraron a redes internacionales que cambiarían su propia visión de Chile y su proceso político, impactando fuertemente en los cambios que sufriría la izquierda chilena en los años siguientes⁷⁵. A todo ello se le sumaron también iniciativas autónomas, sin mediación de chilenos, que buscaban ayudar en todo aquello que fuera posible a quienes sufrían la persecución y represión en Chile. Allí participaron actores de todas las escalas, desde el gobierno de Suecia, que se comprometió por completo con los refugiados chilenos, hasta instituciones transnacionales que velaban por la dignidad y los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que comenzaría una activa campaña de denuncia de la represión en Chile. En las redes transnacionales de solidaridad participaron también pequeños grupos locales esparcidos por el mundo, quienes intentaron convencer a sus conciudadanos de la urgencia de la tragedia chilena, como fue el caso de "Community Action on Latin America" (CALA) en

⁷⁴ Tras el golpe, los líderes de ambos partidos se enfrascaron en un fuerte intercambio epistolar en virtud de los intentos de los chilenos de legitimar el golpe y su rol en la desestabilización del gobierno de Allende y el rechazo de los italianos. Sobre las relaciones entre ambas colectividades, véase Raffaele Nocera, *Acuerdos y desacuerdos: la DC italiana y el PDC chileno : 1962-1973* (Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2015).

⁷⁵ Sobre este proceso, véase el excelente estudio de Mariana Perry, "La dimensión internacional del pensamiento político chileno. Aprendizaje y transferencia en el exilio en Europa" (Tesis de doctorado en Humanidades, Leiden University, 2016).

Madison, Wisconsin, Estados Unidos. CALA a su vez participaba de redes regionales de grupos de distinta orientación política, donde no escasearon los conflictos en torno a Chile y lo que debía ser la solidaridad⁷⁶.

Para la Junta, sus ideólogos y sus bases sociales, la situación era difícil de entender. A su manera de ver las cosas, el golpe militar le había propinado una dura derrota al marxismo "internacional". Chile, de hecho, estaba en la vanguardia del "mundo libre", al lograr revertir un proceso revolucionario socialista y restaurar los principios políticos y sociales occidentales. El rechazo occidental a la dictadura, entonces, no coincidía con la lógica bipolar de Guerra Fría. La única manera de explicarse esa contradicción era culpar a la Unión Soviética y al "marxismo internacional" de desplegar una campaña de desprestigio contra Chile, a la que inconscientemente se plegarían las democracias occidentales⁷⁷. "¡Es demasiado el polvo de la derrota que el comunismo ha mordido en Chile, como para que no intente cualquier maniobra para procurar resarcirse!", clamaba Pinochet en el primer aniversario del golpe. Y agregaba: "Por eso miente a gran escala y sin escrúpulos. Por eso trata de aprobar, y a veces lo consigue, acuerdos de organismos internacionales que tienden a perjudicarnos o aislarnos a través de un boicot"⁷⁸. *El Mercurio*, al mismo tiempo, advertía a sus lectores sobre las estrategias de esta

⁷⁶ Sobre la solidaridad con Chile en Suecia Estados Unidos y otros lugares, véase Fernando Camacho, "Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia", *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n° 81 (2006): 21–41; Margaret Power, "The U.S. Movement in Solidarity with Chile in the 1970s", *Latin American Perspectives* 36, n° 6 (1 de noviembre de 2009): 46–66; Margaret Power y Julie A. Charlip, "Introduction: On Solidarity", *Latin American Perspectives* 36, n° 6 (1 de noviembre de 2009): 3–9; Patrick William Kelly, "The 1973 Chilean Coup and the Origins of Transnational Human Rights Activism", *Journal of Global History* 8, n° 1 (2013): 165–86; Jessica Stites Mor, ed., *Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America*, Critical Human Rights (Madison, Wis: The University of Wisconsin Press, 2013). Sobre el caso específico de CALA, Marcelo Casals, "'My Heart Breaks Over That Tragedy'. Local Dynamics in the U.S. Solidarity Movement with Chile in the 1970s. The Case of Community Action on Latin America (CALA)", *Inédito*, 2013.

⁷⁷ Alfredo Riquelme, "La Guerra Fría en Chile: los intrincados nexos entre lo nacional y lo global", en *Chile y la Guerra Fría global*, ed. Alfredo Riquelme y Tanya Harmer (Santiago: RIL Editores - Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014), 30–42.

⁷⁸ "El gobierno de Chile avanza con seguridad y sin vacilaciones", *El Mercurio*, 12 de septiembre de 1974, 34.

"campaña antichilena" y su carácter engañoso, buscando con ello despejar cualquier duda que la reacción internacional contra el régimen podría provocar entre quienes habían celebrado el fin de la Unidad Popular: "La campaña adquiere un tono insolente cuando conviene, pero también explota la conmiseración ajena; emplea el adulo y la amenaza, fomenta la solidaridad y a la par el odio, instrumentalizando todos los medios a su alcance"⁷⁹.

Así como las redes transnacionales de solidaridad no se limitaron a actores estatales, la reacción ante la "campaña antichilena" no tuvo por protagonista solamente al gobierno. Las organizaciones de clase media movilizaron recursos y sus propias redes para responder ante las críticas y legitimar el golpe y la dictadura. En ese sentido, hubo un esfuerzo que podría catalogarse de "diplomacia civil" por parte de estos grupos, en coordinación con las iniciativas diplomáticas de Estado⁸⁰. Por cierto, ello no quiere decir que la labor en este plano de organizaciones sociales haya sido un mero apéndice de la Junta. Dada la "sincronización" con la dictadura y los espacios de participación y negociación ahora disponibles, los grupos mesocráticos impulsaron diferentes tipos de medidas con cierto grado de autonomía, toda vez que en ese esfuerzo también se jugaba la defensa de su propio rol en la desestabilización del gobierno de Allende y su posición expectante en el nuevo orden político y social bajo el autoritarismo militar.

Los miembros de la Junta estaban perfectamente conscientes de los efectos internacionales del golpe y de la necesidad de desplegar esfuerzos para contrarrestar la situación. En la reunión con la Confederación de Colegios Profesionales, pocos días después del golpe, las nuevas autoridades pidieron expresamente colaboración en este sentido, recibiendo una

⁷⁹ "La campaña contra Chile", *El Mercurio*, 8 de abril de 1975, 3.

⁸⁰ Sobre la caótica e improvisada diplomacia oficial de la dictadura de los primeros años: Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 89–99.

inmediata respuesta positiva⁸¹. Mientras preparaban las medidas del caso, otros grupos, como la masonería, empezaron a socializar entre sus miembros el significado oficial del repudio internacional. En *Occidente* lo calificaron de "campana insidiosa", dirigida por quienes "se agitan rabiosamente ante sus continuos fracasos". Entre ellos, quienes merecían mayor desprecio eran los chilenos que "perdidos entre el envilecedor interés material y el desquiciante dogmatismo político, han cooperado, o estimulado en esa campana que tanto los aminora, los achica". Todas las medidas contra ellos serían justificables, incluso -señalaban- la pérdida de la ciudadanía chilena⁸². Aquella predisposición a asumir la interpretación oficial ante la reacción internacional hizo que estas organizaciones estuvieran prestas a movilizar recursos e influencias cuando el gobierno se lo pidiera. En 1975, por ejemplo, el Departamento de Difusión Cultural e Información Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó con el Gran Maestro González Contesse para contrarrestar el "cúmulo de falsedades" que había aparecido en una revista de orientación masónica en Francia. El Gran Maestro hizo las averiguaciones del caso, y al no tener relaciones de amistad con el "Gran Oriente" de Francia, no pudo influir en la situación. De otro modo, "no habríamos tenido inconvenientes en realización una gestión directa", agregó en su respuesta⁸³.

La motivación por responder ante la nueva situación, sin embargo, no vino solamente de peticiones de gobierno. El rechazo internacional al golpe también afectó el prestigio de las organizaciones mesocráticas en sus propias redes internacionales. El Colegio Médico, por

⁸¹ Así lo informó Alejandro Silva Bascuñán al Consejo General del Colegio de Abogados. "Sesión en 17 de septiembre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAB, 1.

⁸² "Una campana inexplicable", *Occidente*, Año XXIX, No. 252, noviembre de 1973, 1; "Ante el mañana", *Occidente*, Año XXIX, No. 253, diciembre de 1973, 1.

⁸³ Carta de Carlos Ashton Ugalde, Director de Difusión Cultural e Información Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 6 de mayo de 1975. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh; Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Carlos Ashton Ugalde, Director de Difusión Cultural e Información Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 12 de agosto de 1975. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh.

ejemplo, tuvo que movilizarse rápidamente para controlar la imagen que el nuevo régimen estaba proyectando, algo que no siempre pudieron realizar con éxito. Por una parte, el médico uruguayo Omar Barreneche, presidente del Comité Ejecutivo Zonal Sur de la Confederación Médica Panamericana, avisó al Colegio Médico que se había puesto en contacto con el nuevo gobierno chileno para exigir garantías al ejercicio de la profesión. Además, anunció que el Comité había sugerido a sus asociaciones miembros realizar un homenaje a Salvador Allende tras su deceso. Por otro lado, Sir William Refshauge, Secretario General de la Asociación Médica Mundial, envió una carta a Santiago para informarse de la situación chilena a raíz de denuncias de médicos detenidos por el régimen. En ambos casos, la respuesta del Colegio Médico chileno fue tajante: la oposición a Allende estuvo motivada por la "ruina moral" en que estaba sumido el país, distorsionando las "jerarquías intelectuales", el sistema económico y el orden institucional. Por otro lado, las relaciones entre la Junta y el Colegio eran de completa normalidad y cooperación, con las garantías necesarias para el ejercicio de la profesión. De allí que criticaran la actitud de estas organizaciones que, "desconcertados por la propaganda marxista internacional", hayan planteado dudas ilegítimas⁸⁴.

Algo similar sucedió con la masonería. Un día después del golpe de Estado, el Consejo Directivo de la Confederación Masónica de México publicó una carta abierta a Luis Echeverría, entonces presidente de aquel país, lamentando la muerte de Allende, y solidarizando con el "verdadero pueblo de Chile". La Gran Logia de Chile, si bien no mencionada en el texto, reaccionó indignada ante lo que acusaban era una intervención inaceptable en asuntos internos. En la respectiva comunicación, señalaron que la institución "siente gravemente lastimada su

⁸⁴ "Notas entre entidades de Uruguay y Chile", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXV, No. 9, septiembre de 1973, 10-11; "Colegio Médico luchó contra el marxismo e impedirá todo trato discriminatorio", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVI, s/n, enero-febrero de 1974, 16.

dignidad, su soberanía, su posición masónica con esta inoportuna y antifraterna actitud". Además de cortar relaciones con sus pares mexicanos, la dirección de la Gran Logia envió copia de los documentos a la Confederación Masónica Interamericana (CMI) con objeto de inhibir cualquier otra expresión en esa línea⁸⁵.

Las presiones internacionales a los grupos mesocráticos no vinieron solamente desde sus redes internacionales directas. En ellas participaron también organizaciones transnacionales preocupadas por el nivel de represión y persecución política en Chile. En noviembre de 1973, un grupo de "periodistas" norteamericanos se entrevistó con dirigentes del Colegio de Abogados, quienes entregaron una versión de los hechos alineada con el discurso oficial. Los supuestos periodistas eran en realidad representantes de Amnistía Internacional, y los contactos establecidos con el Colegio eran parte de sus esfuerzos para recopilar antecedentes y elaborar informes críticos sobre Chile⁸⁶. El Colegio respondió públicamente, asegurando que el régimen respetaba el Estado de Derecho y las garantías propias de la profesión⁸⁷. Eso no fue suficiente para Amnistía Internacional. En los meses siguientes enviaron cientos de cartas al Consejo General del Colegio de Abogados inquiriendo antecedentes de diferentes presos y desaparecidos. Sólo en la sesión del 25 de marzo de 1974 se dio cuenta de cinco cartas firmadas por Amnistía Internacional, además de otras cinco provenientes de Europa, pidiendo al Colegio intervenir para lograr conmutación de penas de condenados por la justicia militar. Dado que el Consejo

⁸⁵ "Mensaje de protesta", *Revista Masónica de Chile*, Año LI, julio-agosto de 1974, Nos. 5-6, 3. Las relaciones entre ambas organizaciones se restablecieron en 1975, cuando las autoridades mexicanas se excusaron ante sus pares chilenos al señalar que "no habían tenido la menor intención de zaherir ni al Gran Pueblo de Chile, ni mucho menos de inmiscuirse en las determinaciones y derechos que pertenecen a los hombres integrantes y forjadores de vuestra República". "La Gran Logia de Chile y las Grandes Logias Regulares de los Estados Unidos Mexicanos", *Revista Masónica de Chile*, Año LIII, marzo-abril de 1976, Nos. 1-2, 8-9.

⁸⁶ "Sesión en 5 de noviembre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAB, 4; "Memoria del Consejo General de Abogados de Chile correspondiente a 1973", ACAB, 38. Sobre los informes de Amnistía Internacional en los primeros meses de la dictadura, véase Kelly, "The 1973 Chilean Coup and the Origins of Transnational Human Rights Activism".

⁸⁷ "Del Colegio de Abogados a Amnesty International", *El Mercurio*, 7 de febrero de 1974, 2. Lo propio hizo el Colegio Médico unos años después tras denuncias de médicos detenidos. "Aclara el Colegio Médico: no hay profesionales detenidos", *La Tercera*, 30 de noviembre de 1977, 10.

consideró que era "un organismo netamente privado, que no tiene representación oficial y que revela una marcada tendencia marxista", se acordó en todos los casos archivar las cartas sin respuesta⁸⁸.

Con todo, el grueso de la labor internacional de las organizaciones mesocráticas vino más por iniciativa propia que por presión externa. Desde el principio, todos estos grupos activaron sus redes internacionales para justificar a la dictadura y a su propia postura frente a ella. Una de las formas más recurrentes fue el envío de cartas y documentos a instituciones afines en el extranjero, en la esperanza de poder modificar percepciones en base a un relato propio, de primera mano y con evidencia supuestamente incontrarrestable. El Colegio de Ingenieros, por ejemplo, se apresuró en enviar un telegrama a organizaciones internacionales afines en el que solicitaban colaboración "para hacer público que Junta de Gobierno actuar representa sentir de todo chileno respetuoso del orden y la justicia", mientras que el Colegio de Abogados difundió una circular hacia todas las instituciones internacionales en las que participaba explicando las circunstancias del cambio de gobierno⁸⁹. Lo propio hicieron otras organizaciones. Los gobernadores de los distritos rotarios en Chile repudiaron abiertamente la "campana antichilena (...) organizada por elementos marxistas" en un comunicado enviado a "nuestros hermanos rotarios del Mundo Libre"⁹⁰, mientras las autoridades de los Clubes de Leones instaban a sus miembros a contactarse con sus pares en el extranjero para dar fe de que en Chile se habían recuperado "la libertad, el entendimiento, el orden, la nacionalidad, el esfuerzo y el servicio, que

⁸⁸ "Sesión en 18 de marzo de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 5; "Sesión en 18 de marzo de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 2.

⁸⁹ Colegio de Ingenieros de Chile, *Libro blanco de la Ingeniería chilena* (Santiago: Talleres Gráficos Corporación, 1974), 67; "Sesión en 7 de enero de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 1.

⁹⁰ "Rotary repudia campana antichilena", *Boletín del Rotary Club de San Bernardo*, Año XX, No. 237, febrero de 1974, 4.

constituyen la sólida base en que sustentan los postulados del Leonismo"⁹¹.

Muchas de las cartas que atravesaron las fronteras de Chile iban acompañadas de documentos más elaborados para apoyar la causa de los grupos mesocráticos. La Confederación de Colegios Profesionales, por ejemplo, envió a los "colegios hermanos de Latinoamérica" un extenso documento titulado "El testimonio de Chile". La intención explícita era combatir "una imagen que nos perjudica como país libre, civilizado y democrático", advirtiendo que la Junta "asume el rol de reparador de males, de constructores del nuevo amanecer que debe ser la unión de nuestro pueblo"⁹². En el documento, además de legitimar al golpe en tanto reacción popular y justificar la represión en virtud de las intenciones asesinas denunciadas, se reproducían todas aquellas ansiedades de clase media expresadas bajo el gobierno de la Unidad Popular y resueltas por la dictadura. Ahora se podía "vivir con seguridad", ya que "no seremos asesinados a mansalva y sin motivo". Los hijos podrán "volver a estudiar sin que nadie se adueñe de sus mentes", y las esposas "no serán golpeadas, insultadas o masacradas". La patria, así, podía seguir siendo "grande, libre y soberana", como antes que "cayera sobre nosotros la maldición del experimento marxista y la ignominiosa lacra de un gobierno corrompido y traidor"⁹³. El documento fue impreso en más de 15.000 copias, y traducido al inglés, alemán, francés, italiano y portugués. Por la prensa, las autoridades de la Confederación llamaron a sus miembros a ir a retirar copias del texto y enviarlas a sus conocidos en el extranjero⁹⁴.

Algunos de estos documentos tuvieron considerable éxito. El folleto editado por el

⁹¹ Circular de Gobernación del Distrito T-2 Chile de Lions International, Santiago, 8 de octubre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 540, ARA. Sobre los Clubes de Leones, ver la Introducción de este estudio, p. 40, nota 79.

⁹² "La Junta de Gobierno reparó los males y construirá un nuevo y brillante amanecer", *La Prensa*, 25 de octubre de 1973, 17.

⁹³ Colegio de Ingenieros de Chile, *Libro blanco de la Ingeniería chilena*, 67.

⁹⁴ "A los profesionales de Chile", *La Patria*, 14 de octubre de 1973, 8; "Ahora: la mejor oportunidad para arreglar el país (Entrevista a Eduardo Arriagada)", *La Patria*, 21 de diciembre de 1973, 3; "Colegios Profesionales en la 'Operación Verdad'", *El Diario Austral*, 15 de octubre de 1973, 1.

Colegio de Abogados *-Quiebra del Estado de Derecho durante el régimen marxista-* tuvo amplia repercusión internacional. Era común que llegaran cartas al Consejo General de diferentes organizaciones de abogados en el extranjero pidiendo copias, o bien, como lo hizo el Club de Abogados de Empresa de Buenos Aires, en Argentina, solicitando autorización para editar el folleto por su cuenta. Hubo casos también de ciudadanos particulares, como Ricardo Salazar Vargas, residente de Ciudad de México, que escribían directamente al Colegio para solicitar copias de dicho informe. Con todo, el éxito internacional más destacado para el Colegio de Abogados y este folleto en particular fue el uso textual que se hizo de varios párrafos del mismo en una sesión del Senado de los Estados Unidos, en mayo de 1976, por parte de dos parlamentarios republicanos. El Consejo General consideró que esto significaba "un gran honor para la Orden", y se acordó enviar una nota de felicitación a los congresistas⁹⁵.

Estas iniciativas, por cierto, no fueron propiedad exclusiva de las directivas nacionales de los grupos mesocráticos. Hubo grupos que actuaron autónomamente a nivel local en la misma dirección, utilizando las redes internacionales que tenían a su alcance. Los taxistas de la ciudad de La Serena, por ejemplo, enviaron una carta a sus pares de Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, en la que se lamentaban de la imagen "distorsionada" que se tenía de la Junta en el exterior. La "gente de esfuerzo y trabajo", agregaban, ahora tenían un lugar asegurado en el progreso de la patria, lo que los comprometía a apoyar al nuevo régimen y a intentar revertir el daño de la "propaganda marxista" en el exterior⁹⁶. Al mismo tiempo, otros actores aportaban desde sus propias posibilidades, conectando a grupos locales con instancias internacionales. La Sociedad de Mutuo Soccorso de Temuco, que agrupaba a los inmigrantes

⁹⁵ "Sesión en 29 de abril de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 2; "Sesión en 5 de mayo de 1976", Actas del Consejo General, 1976, ACAB, 2.

⁹⁶ "Colegas serenenses cuentan la verdad de Chile a sus colegas latinoamericanos", *¡Eh... Taxi! Órgano oficial de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis de Chile*, año II, No. 2, febrero de 1975, 5.

italianos y sus descendientes, notificó a la Intendencia de Cautín que intercedería ante el Gobierno Italiano para que reconociera a la dictadura "con el fin de mantener y acrecentar los lazos con nuestra querida tierra chilena"⁹⁷. Incluso quienes no participaban de organizaciones sociales locales tuvieron la oportunidad de aportar a los esfuerzos de "diplomacia civil". *El Diario Austral* de Temuco organizó su propia "Operación Verdad", a través del envío al extranjero de once ediciones distintas del periódico, más un especial explicativo, por intermedio de sus lectores⁹⁸.

A las cartas y documentos que organizaciones de clase media enviaron al extranjero se le sumaron otras estrategias de legitimación internacional del régimen. Entre 1975 y 1976, diferentes autoridades internacionales visitaron Chile por motivos internos de cada organización, lo que fue aprovechado por el gobierno para afirmar su posición. William R. Robbins, presidente de Rotary International, declaró a *El Mercurio* que el movimiento rotario sólo podía actuar en "sociedades libres", es decir, no-marxistas, por lo que la dictadura chilena había sido en realidad una salvación frente a la "amenaza totalitaria". En la ceremonia en que se le otorgaba la Orden al Mérito del gobierno, Robbins le señaló a Pinochet: "Yo creo que todo el mundo libre tiene una deuda muy grande con Ud."⁹⁹.

Del mismo modo, Pinochet recibió a las delegaciones de la Quinta Reunión de la VI Zona de la Confederación Masónica Interamericana, con presencia de autoridades masónicas de Sudamérica. En la ocasión, Pinochet aseguró que en Chile "existe un gran respeto hacia todas las

⁹⁷ Carta de la Società di Mutuo Soccorso, Fratellanza Italiana, a Hernán Ramírez Ramírez, Intendente militar de Cautín, Temuco, 10 de noviembre de 1973, Intendencia de Cautín, Vol. 540, ARA. En la respectiva carta, difundida por la prensa, la institución aseguraba a las autoridades italianas que el nuevo régimen "asegura un panorama de rectificación, tranquilidad y seguridad para nuestros hijos". "Italianos de Temuco piden a Italia reconocimiento para el nuevo gobierno chileno", *El Diario Austral*, 23 de noviembre de 1973, 1.

⁹⁸ "'El Diario Austral' y sus lectores en 'Operación Verdad'", *El Diario Austral*, 23 de octubre de 1973, 1.

⁹⁹ "Declaraciones del Presidente de R.I.", *Boletín del Rotary Club de San Bernardo*, Año XX, No. 238, marzo de 1975, , 2; "Visita del Presidente de Rotary International", *Boletín del Rotary Club de San Bernardo*, Año XX, No. 239, abril de 1975, 3 y 9.

corrientes filosóficas y de pensamiento", entre las cuales la masonería tenía un rol privilegiado dado que "permanentemente ha cooperado con este gobierno". Lo propio hicieron, tiempo después, las más altas autoridades masónicas de Estados Unidos, quienes fueron también recibidas por Pinochet gracias a las gestiones previas de González Contesse¹⁰⁰.

La "diplomacia civil" y la activación de redes internacionales en favor de la dictadura no se detuvo allí. De hecho, las iniciativas de mayor envergadura, y en las que se hicieron más evidentes las dificultades que encontrarían los grupos de clase media en esta tarea, fueron las giras internacionales, producto de un esfuerzo en conjunto entre estas organizaciones y el gobierno. Los camioneros fueron uno de los grupos más activos al respecto. En noviembre de 1973 una delegación de dirigentes gremiales, liderados por León Vilarín, se embarcaron en lo que bautizaron como "Operación Verdad", es decir, una gira por países de América y Europa para defender a la dictadura. El primer país visitado fue Bolivia, donde la delegación recibió una hostil bienvenida por parte de la prensa local. Los periodistas, de hecho, abandonaron la sala del consulado chileno luego de que Luis Zanzi, dirigente de CONUPIA, los acusara abiertamente de participar de la campaña "contra Chile". En Quito, fueron recibidos por plana mayor de la Confederación del Transporte Pesado del Ecuador, además de visitar radios y periódicos para dar a conocer su versión de los hechos. La experiencia en México, sin embargo, fue más dura. El gobierno mexicano negó la entrada al país a la delegación. Los camioneros culparon de esto a los exiliados chilenos y las informaciones "falsas" que el presidente Echeverría manejaba sobre la situación¹⁰¹.

¹⁰⁰ "Un grupo de hombres buenos", *La Patria*, 27 de julio de 1975, 3; "En Chile se respetan corrientes filosóficas", *Revista Masónica de Chile*, Año LII, julio-agosto-septiembre de 1975, Nos 5-6-7, 18; Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990)*, 258.

¹⁰¹ "'Operación Verdad' acordada por los gremios democráticos de Chile lleva al mundo una imagen real de los sucesos", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 24, septiembre-octubre-noviembre de 1973, 96-101; "Incidentes tuvieron los gremialistas chilenos en La Paz", *El Diario Austral*, 22 de noviembre de 1973, 6.

La gira de Vilarín tuvo algunos éxitos, seguidos de resonantes fracasos. La delegación, por ejemplo, logró llegar al Congreso de Estados Unidos en Washington, donde hicieron uso de la palabra frente a varios congresistas. En Francia, sin embargo, un grupo de "activistas de izquierda", según acusaron, mantuvo "secuestrada" a la delegación por casi tres horas, interrumpiendo una charla sobre la situación chilena. Los dirigentes gremiales tuvieron que ser escoltados por la policía francesa de regreso a la embajada chilena¹⁰². El 13 de enero de 1974, luego de visitar 22 países en 54 días, la delegación aterrizó en Santiago, satisfechos por la labor cometida. De hecho, uno de los ejes del discurso de los dirigentes gremiales en gira fue minusvalorar las dificultades. Los dirigentes, señalaba *El Camionero*, "fueron claros y terminantes para develar las fracasadas maniobras de minorías marxistas que en algunos países trataron de acallar o hacer fracasar la 'Operación Verdad'"¹⁰³.

Los profesionales no se quedaron atrás, y también organizaron viajes y delegaciones para defender a la dictadura en el extranjero. Algunas de estas iniciativas nacieron espontáneamente de profesionales colegiados que pedían autorización a sus respectivas organizaciones para representarlas en diferentes instancias. Armando Álvarez, Eduardo Escudero y Jorge Bendjerodt representaron de esa manera al Colegio de Abogados en distintos países de América Latina y Europa para justificar su posición frente al golpe¹⁰⁴. Al mismo tiempo, las directivas organizaban giras formales. Eduardo Arriagada visitó Perú, Venezuela y Estados Unidos, acompañado de otros dirigentes del Colegio de Ingenieros, para exponer la situación chilena y gestionar financiamiento para proyectos de desarrollo¹⁰⁵. Los abogados fueron más allá. Silva Bascuñán

¹⁰² "Secuestrado León Vilarín", *El Diario Austral*, 17 de diciembre de 1973, 4.

¹⁰³ "El regreso de la delegación gremial", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 26, enero de 1974, 13.

¹⁰⁴ "Sesión en 22 de octubre de 1973", Actas del Consejo General, 1973, ACAb, 9; "Sesión en 7 de enero de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 1; "Sesión en 29 de abril de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAb, 2.

¹⁰⁵ "Gira por América inició presidente de ingenieros", *La Tercera de la Hora*, 2 de junio de 1974, 14.

lideró una comisión que viajó a España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Suiza para dar cuenta de la "verdadera" situación chilena ante parlamentarios y juristas europeos. En Madrid, sin embargo, hubo incidentes con estudiantes en la universidad que rechazaban al régimen chileno, mientras que en París la comisión no fue recibida por el presidente del Colegio de Abogados francés, lo que motivó un reclamo formal ante la Unión Internacional de Abogados¹⁰⁶.

La suerte de las delegaciones internacionales del Colegio de Abogados no cambiaría con el tiempo. En 1975, Pablo Rodríguez viajó a Ginebra a dar testimonio frente a la Comisión de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, sin poder influir en el tono fuertemente crítico de su informe. Pocos meses después, los consejeros Carlos Cruz-Coke y Carlos Correa fueron comisionados para representar al Colegio en el IV Congreso de la Confederación de Abogados de los Países Andinos realizado en Caracas. El gobierno venezolano, sin embargo, les negó en primera instancia las respectivas visas, y sólo se las concedió tras largos días de espera y por un breve período. Todo ello facilitó que el Congreso, a instancia de exiliados chilenos, aprobara una declaración crítica de la dictadura chilena¹⁰⁷. Luego de esa experiencia, el Colegio tomaría los resguardos para no sufrir nuevos bochornos en el extranjero. El Consejo General, por ejemplo, tuvo especial preocupación en la conformación de las delegaciones, incluyendo a abogados con mayor peso político y capacidad de debate. Por ejemplo, a la reunión de la Federación Interamericana de Abogados celebrada en Atlanta, Estados Unidos, en abril de 1977, se decidió enviar al entonces presidente del Colegio y ex-político radical Julio Durán, dado que en el temario se incluyeron temas "extremadamente delicados", y se esperaba que el ambiente fuera

¹⁰⁶ "Sesión en 7 de enero de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 1; "Sesión en 4 de marzo de 1974", Actas del Consejo General, 1974, ACAB, 3.

¹⁰⁷ "Sesión en 15 de septiembre de 1975, Actas del Consejo General, ACAB, 3; "Sesión en 3 de mayo de 1976", Actas del Consejo General, 1976, ACAB, 1-3

"combativo"¹⁰⁸.

Si bien los grupos mesocráticos actuaron con cierto nivel de autonomía en la utilización de sus redes internacionales y las giras organizadas para defender a la dictadura, la mano del gobierno estuvo siempre presente. En muchas ocasiones, los pasajes a eventos internacionales fueron gestionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como también el itinerario y las líneas generales del discurso legitimador. Ello fue más evidente en el viaje a la Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un grupo de dirigentes gremiales y obreros adictos al régimen en junio de 1975. El radical Tucapel Jiménez, presidente de la ANEF, lideró la delegación tras invitación directa del gobierno, con la misión explícita de explicar que la dictadura no atentaba contra los derechos de los trabajadores¹⁰⁹. Eduardo Ríos, presidente de la Confederación Marítima de Chile (COMACH) no solamente asistió a Ginebra, sino que también ayudó a la dictadura a desactivar un boicot de la Federación Internacional del Transporte a productos chilenos y a enfrentar las críticas de confederaciones sindicales mexicanas en sucesivos viajes. Tanto Jiménez como Ríos, como también otros dirigentes sindicales, no tardarían en expresar críticas ante el viraje neoliberal del régimen y el brutal "costo social" asumido por los trabajadores¹¹⁰. En estos sectores, a diferencia de los grupos mesocráticos mencionados anteriormente, la autonomía de acción y la duración del entusiasmo necesario para continuar el esfuerzo de la "diplomacia civil" fueron considerablemente menores.

4.- Conclusiones

La "diplomacia civil" implicó para los grupos de clase media asumir funciones de Estado que excedían con creces a lo que estaban acostumbrados bajo el modelo del "Chile mesocrático".

¹⁰⁸ "Sesión en 23 de mayo de 1977", Actas del Consejo General, 1977, ACAb, 1-2.

¹⁰⁹ Candina, *Clase media, estado y sacrificio*, 157-58.

¹¹⁰ "Eduardo Ríos: las posiciones sindicales", *Ercilla*, No. 2086, semana del 23 al 29 de julio de 1975, 27-29.

Ya no se trataba solamente de recuperar los espacios de negociación y la influencia con autoridades de gobierno, sumados al prestigio, status y jerarquías que sostenían su posición social, y que habían sido directamente amenazados bajo el gobierno de la Unidad Popular. Ahora la misión asumía otras dimensiones: defender la legitimidad del autoritarismo chileno en la arena internacional, echando mano a todos los contactos, instancias y organizaciones de las cuales participaban. Las cartas, polémicas, documentos y giras internacionales que emprendieron estos grupos durante los primeros años de gobierno, sin embargo, no tuvieron los resultados esperados. El aislamiento internacional de la dictadura chilena no hizo sino crecer, algo en lo cual las redes de solidaridad transnacional y el compromiso político de gobiernos occidentales e instituciones tuvieron mucho que ver. Ello se reflejó en la hostilidad general con la que eran recibidas las misiones diplomáticas civiles, más allá de la existencia de algunos grupos en el extranjero que recibieron con simpatía estos esfuerzos.

La oportunidad de asumir funciones de representación estatal no solamente obedeció a las necesidades internacionales del régimen, sino también a la posición de privilegio que estos grupos habían alcanzado al interior de la dictadura. Esta situación relativamente novedosa con respecto a lo que habían experimentado en las décadas anteriores les permitió aprovechar las puertas abiertas en el régimen y la recuperación de los espacios de negociación con autoridades de gobierno. Líderes mesocráticos como Rafael Cumsille o León Vilarín, entre otros, gozaron de un amplio respaldo al interior del régimen, así como también de sus propias bases gremiales. Su rol de intermediarios, en ese sentido, se vio fortalecido por la circulación de recursos, reconocimientos y privilegios desde el gobierno hacia las bases sociales mesocráticas. Al mismo tiempo, los llamados de un sector de la oficialidad militar proclive a un corporativismo estatista de raíz "ibañista" abrían buenas perspectivas de integración al régimen, reeditando algunos de los

elementos centrales del "Chile mesocrático" que había sido amenazado durante el gobierno de la Unidad Popular. Ahora era posible sentarse a negociar aspectos concretos que afectaban el funcionamiento económico de los gremios, o el status de los profesionales en el aparato estatal, entre otras materias. El apoyo a la dictadura de la clase media organizada, en ese sentido, no estuvo dado solamente por la "sincronización" ideológica descrita en el capítulo 2, sino también por el nuevo rol aglutinador y negociador que cumplieron bajo el autoritarismo ante la ausencia de partidos políticos. Todo ello, sin embargo, comenzaría a cambiar lenta aunque sostenidamente una vez que el régimen se decidiera por un radical reordenamiento social, económico y político del Estado basado en los principios del neoliberalismo. El nuevo "Chile mesocrático", en ese contexto, comenzaría a crujir.

Capítulo 4

El viraje neoliberal. Del Estado al Mercado

En la segunda mitad de los años setenta la dictadura decidió aplicar un radical viraje en su política económica. Al mismo tiempo que desplazaba a los promotores del "ibañismo" militar, abrió las puertas a los controles del Estado a quienes comulgaban con el neoliberalismo, es decir, a aquella versión radicalizada del monetarismo que tenía por objetivos "liberar" al mercado de los controles estatales y, de esa manera, incentivar el desarrollo de las fuerzas productivas y la inserción de la economía chilena en el mundo. El neoliberalismo, por cierto, no fue sólo un conjunto de medidas de emergencia, sino que, por sobre todo, un completo ideario económico, social y político orientado hacia un orden despolitizado, individualista y privatizado. En ese sentido, era contradictorio con la forma en que el Estado se había organizado a lo largo de parte importante del siglo XX, y en particular con aquellas prácticas que sostenían al "Chile mesocrático". Las organizaciones de clase media sentirían el impacto de las primeras medidas, y reaccionarían con críticas a ellas. Sin embargo, esto no afectó el compromiso político con el régimen, como tuvieron ocasión demostrarle a los gobernantes cada vez que lo requirieron.

Las reformas neoliberales, además, afectaron dramáticamente las bases materiales de la clase media. Por una parte, aquellos que vivían de un salario, y en particular los que trabajaban para el Estado, vieron como su situación económica y social se deterioraba rápidamente dadas las nuevas medidas de restricción de gasto fiscal y de apertura al comercio exterior. Muchos de aquellos que se identificaban con la clase media encontraron en el sector terciario de la economía un espacio algo más estable desde el cual reproducir su condición mesocrática. Al mismo tiempo, y también a raíz de las políticas del equipo económico de gobierno, el mercado chileno se inundó de productos importados. Ello revolucionó las pautas de consumo de los chilenos y la forma en

que se relacionaban con las nuevas mercancías. A diferencia de otros años, ahora los chilenos de clase media podían acceder a bienes durables asociados al nivel de desarrollo de primer mundo. La publicidad, los nuevos espacios de consumo, la televisión, la prensa y el gobierno replicaron aquel mensaje celebratorio del consumo moderno que, a su vez, operó como un potente mecanismo de legitimación tanto del propio neoliberalismo como del régimen autoritario que lo implementaba.

El aparente éxito de las reformas neoliberales convencieron al gobierno de la necesidad de su profundización y, más aún, de la incorporación de sus principios en el nuevo orden institucional plasmado en la Constitución de 1980. Ello tuvo consecuencias dramáticas para las organizaciones mesocráticas, que a la vez que veían los tradicionales espacios de negociación con el Estado clausuraban, sufrieron los embates de los cambios legales que afectaban su propia existencia. La transformación de los colegios profesionales en asociaciones gremiales en 1981 fue quizás el caso de mayor impacto público a ese respecto.

1.- Las reformas y la clase media

Dentro del bloque social y político que apoyó el golpe y la dictadura militar estuvo un pequeño y compacto grupo de economistas neoclásicos adscritos a la Universidad Católica. El núcleo original compartió a mediados de los años cincuenta la experiencia de estudios de postgrado en la Universidad de Chicago, entonces uno de los pocos espacios académicos para el estudio y difusión del pensamiento económico monetarista radical. A ellos se les sumaron también discípulos y estudiantes, algunos de los cuales formaron parte de nuevas oleadas de economistas chilenos educados en Chicago. Radicalizados bajo la Unidad Popular -y en muchos casos siguiendo la línea de los "gremialistas" de Jaime Guzmán-, dedicaron sus esfuerzos a

combatir desde la economía lo que veían como un estatismo desquiciador e ineficiente. Sus más destacados exponentes fueron convocados en secreto por empresarios cercanos a la conspiración militar para desarrollar un plan económico integral en el caso que llegara al poder un régimen contrarrevolucionario. En "El Ladrillo", como fue informalmente bautizado, se delinearon a trazos gruesos los principios de una profunda reforma neoliberal del Estado, la sociedad y la economía de Chile, en un esfuerzo explícito y sistemático por romper con lo que había sido hasta entonces la historia del siglo XX¹.

Después del golpe, los economistas neoliberales se atrincheraron en la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), y desde ahí empezaron a difundir entre los círculos gobernantes las nuevas recetas económicas para acabar con la profunda crisis que atravesaba Chile entonces. En otras instancias de gobierno, sin embargo, predominaba el "ibañismo" militar, con una visión más estatista y gradualista del problema, y que además favorecían la apertura de canales de participación social en el Estado para sectores populares y medios. El proyecto social del corporativismo militar, sin embargo, terminó por ceder ante el atractivo y promesa de la fórmula neoliberal. Ello se debió a la falta de apoyo tanto fuera como dentro del gobierno. Mientras los trabajadores organizados no-izquierdistas veían en el "Estatuto Social de la Empresa" un retroceso en sus derechos, los empresarios rechazaron la excesiva participación de obreros en instancias de decisión. Para Pinochet y su círculo más cercano, al mismo tiempo, la perspectiva de una rearticulación de la sociedad civil comenzó a aparecer cada vez menos atractiva. Todo ello se tradujo en el desplazamiento de la oficialidad ibañista de los espacio de

¹ Para una completa y documentada historia de los economistas educados en Chicago, véase Valdés, *Pinochet's Economists*; Sobre los principios del neoliberalismo, David Harvey, *Breve historia del neoliberalismo*, trad. Ana Varela Mateos (Tres Cantos, Madrid: Akal, 2007). Y sobre "El Ladrillo" Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 101–11.

poder real al interior del gobierno, incluyendo al propio Gustavo Leigh, removido de la Junta de Gobierno y de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea en 1978².

En 1975, ante la enorme dimensión de la crisis económica -con altas tasas de desempleo e hiperinflación- Pinochet decidió aceptar el plan neoliberal e implementar lo que entonces llamaron "política de shock": una violenta reducción del gasto público, la paralización de proyectos sociales, el desmantelamiento rápido de servicios estatales y una apertura indiscriminada del comercio exterior. El objetivo obedecía a una de las máximas del credo neoliberal: el mercado debía ser el espacio de asignación de recursos por excelencia, para lo cual debía operar espontáneamente y en "libertad", es decir, sin interferencia estatal. La participación en el mercado, por otro lado, debía ser individual y despersonalizada, sin espacio para agentes organizados que pudieran tergiversar el libre juego de la oferta y la demanda.

La receta neoliberal resultaba atractiva para gran parte de los círculos militares gobernantes y el gran empresariado. A contrapelo del estatismo ibañista, el neoliberalismo propiciaba la atomización de las relaciones sociales y la participación individual y despersonalizada en un mercado supuestamente justo y eficiente, donde podría realmente verificarse la libertad tan anhelada. La desarticulación de grupos sociales haría cada vez menos necesaria la represión, y podría fundarse un orden permanente basado más en el consenso que en la coacción. Además, a través del libre juego del mercado -con un Estado reducido y de rol subsidiario- se podrían desarrollar las fuerzas productivas en toda su expresión, aprovechando las ventajas comparativas de cada agente económico. Ello cumpliría el anhelado sueño de la modernización económica, que en la lógica neoliberal pasaba también por la integración orgánica de la economía local al mercado internacional desde su condición de productora de materias primas. Todas estas recetas, además, se presentaban con un aura de saber científico

² Valdivia Ortiz de Zárate, *El golpe después del golpe*, 201.

infalible que hacía inadmisible toda crítica, y que aseguraban sin atisbo de duda el éxito ulterior de todo el experimento. La poderosa mezcla entre orden, modernidad y ciencia, entonces, desplazó sin mucho ruido al estatismo militar. El discurso ideológico de los economistas de Chicago, amplificado por la prensa, se hizo hegemónico en la reducida y controlada esfera pública chilena. Poco tiempo después, parte importante de la casta gobernante participaba entusiasta de los mismos principios doctrinarios del nuevo saber económico³.

La "política de shock" produjo en lo inmediato una agudización de la ya existente crisis económica. En 1975 la producción industrial cayó en un 28%, y PIB se contrajo en un 13%. El desempleo bordeaba el 20% -a pesar del Programa de Empleo Mínimo (PEM) instaurado entonces-, mientras los salarios reales perdían un 40% de su poder adquisitivo. Las tasas de interés subieron a más de un 20%, encareciendo el crédito y dificultando la inversión productiva⁴. Sin embargo, en los años siguientes los índices macroeconómicos mejoraron sustancialmente, dando la sensación de que los economistas neoliberales eran los autores de un "milagro". El PIB creció un 7,8% en 1977, alcanzando un 9,9% en 1980. Al mismo tiempo, la inflación pudo ser controlada y mantenida en un rango de un 30-40%, es decir, números normales para el Chile de las décadas previas a la Unidad Popular⁵. Por supuesto, aquel crecimiento general escondía las dramáticas transformaciones del aparato productivo, el empleo y el Estado, que afectarían de distintos modos a la clase media. Con todo, los voceros del régimen y la prensa oficialista celebraron estos logros como la confirmación de los beneficios del autoritarismo y el neoliberalismo, que ofrecían una poderosa mezcla de despolitización, orden y mercado.

³ Al respecto véase Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*, 191; Gárate, *La revolución capitalista de Chile*, 181 y ss.; y Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, 129; Huneeus, *El régimen de Pinochet*, 389–427.

⁴ Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, 105.

⁵ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 168.

Las primeras reformas neoliberales implicaron una radical reestructuración de la forma en que la clase media se había relacionado con el Estado. Por una parte, los beneficios sociales dirigidos a los grupos medios empezaron a ser duramente cuestionados. La solución del equipo económico de gobierno para el empobrecimiento generalizado de la sociedad fue la "focalización" del gasto social en los sectores más pobres de la sociedad, algo perfectamente coincidente con la noción de Estado subsidiario. En ese esquema, por definición, la clase media quedaba fuera de toda ayuda estatal directa, dado que su prosperidad, bajo el nuevo modelo, sólo sería producto de su participación competitiva en el mercado. Por otro lado, como el propio líder de los economistas neoliberales Sergio de Castro se encargó de aclarar, las políticas económicas no serían ahora producto de negociaciones con lo que llamaba "grupos de presión", dado que producirían distorsiones inaceptables en el mercado⁶. Se anunciaba así, aunque aún de modo implícito, que los espacios de negociación entre organizaciones sociales y el Estado se reducirían considerablemente.

Con todo, según la lógica del equipo económico, la clase media no se vería mayormente perjudicada por el nuevo orden de cosas. El desarrollo y la modernización de la economía chilena que traería el nuevo modelo económico, plantearon entonces, aseguraría una base material sólida para la clase media y, sobre todo, la "libertad" necesaria para prosperar. Enrique Goldfarb, economista de ODEPLAN, defendía en 1976 las reformas neoliberales y sus efectos en la clase media. Para él, este sector se vería beneficiado al disfrutar de los frutos del desarrollo

⁶ "Respuestas del Ministro de Economía" (entrevista a Sergio de Castro), *El Mercurio*, 15 de febrero de 1976, 25-26. *El Mercurio*, por cierto, se encargó en varias ocasiones de aclarar quiénes eran esos grupos: "Los profesionales, a través de sus colegios, obtenían y obtienen, por un lado, aranceles especiales que los protegen de la competencia y, por otro, retracciones a la libre entrada en los empleos. Ha sido el caso de ingenieros, abogados, médicos, dentistas, contadores, periodistas, locutores, químicos-farmacéuticos, etc.". Y agregaban: "En el pasado, los grupos de presión se reunían y adherían a los diversos candidatos, cambiando su apoyo por un privilegio importante para ellos, pero de efecto negativo, casi imperceptible, para el resto de la población. Por este camino se llegó a la ruina de la economía, al escaso crecimiento, al estatismo exagerado y a la liquidación del sistema democrático". "Al servicio de los grupos de presión", *El Mercurio*, 14 de octubre de 1978, 3A.

futuro del aparato productivo. Entre otras cosas, agregaba, los sectores medios tendrían que pagar menos tributos para el financiamiento del Estado, por lo que podrían insertarse de mejor modo en el mercado⁷.

Más allá de las promesas, la "política de shock" generó ciertas reacciones negativas por parte de quienes ponían la situación de la clase media como centro de sus preocupaciones. Ciudadanos sin mayor figuración pública enviaron cartas al director a revistas pro-gobiernistas para denunciar esta situación. Enrique Valenzuela, por ejemplo, pedía al gobierno que "las clases medias y obrera no continúen sometidas al eterno sacrificio económico", mientras Adolfo Fouté hacía ver "la tremenda inquietud de la clase media de nuestro país ante la situación económica por la que atravesamos"⁸. Líderes políticos de izquierda y derecha coincidieron también en la situación desmedrada de la clase media ante el nuevo escenario. El economista y ex-Ministro de Allende, Orlando Letelier, escribió poco antes de ser asesinado por un comando de la DINA en Washington que las reformas neoliberales habían afectado negativamente a la clase media, tanto a pequeños industriales como empleados⁹. Por su parte, Orlando Sáenz, líder empresarial y por entonces un ferviente adherente al corporativismo militar, denunciaba públicamente que "la clase trabajadora y la clase media están perdiendo, porque el esquema premia demasiado al que tiene plata"¹⁰.

Los cuestionamientos no hicieron mella en el equipo económico de gobierno, y con el apoyo entusiasta de Pinochet y todo el aparato represivo de la dictadura, las reformas siguieron su camino. La profundidad y velocidad con que fueron implementadas afectaron de manera

⁷ Enrique Goldfarb, "Más sobre distribución del ingreso", *Ercilla*, No. 2141, semana del 11 al 17 de agosto de 1976, 4.

⁸ Adolfo Fouté, "Economía y clase media" (Carta al Director), *Qué Pasa*, No. 293, semana del 2 de diciembre de 1976, 4; Enrique Valenzuela, "Mejoramiento de sueldos", *Ercilla*, No. 2200, semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 1977, 4.

⁹ Orlando Letelier, "Chile: Economic 'Freedom' and Political Repression", *Race & Class* XVIII, n° 3 (1977): 259.

¹⁰ Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el periodo 1970-1983*, 120.

dramática la relación entre sociedad civil y Estado, el esquema productivo chileno y su estructura de clases. El neoliberalismo, en ese sentido, cambió radicalmente el esquema de referencias culturales y la base material de los sectores medios en relación a lo que había sido en tiempos del "Chile mesocrático", afectando por ende el poder, función y grado de influencia de las organizaciones de clase media. En términos esquemáticos, durante la segunda parte de la década de los setenta y los primeros años de los ochenta, la clase media sufrió una rápida transición en su ámbito de acción desde el Estado al Mercado, lo que significó el desplazamiento de grupos hacia posiciones precarizadas, el fraccionamiento de otros en función de su rol en el nuevo esquema productivo, y el éxito de quienes supieron adaptarse al nuevo orden.

El elemento más preponderante en los primeros años del neoliberalismo chileno que afectó a la clase media fue la contracción del Estado. Tanto "ibañistas" como neoliberales coincidían en la necesidad de dismantelar el "área de propiedad social" construido durante la Unidad Popular, y cuando los segundos ganaron la disputa interna en el régimen profundizaron este proceso hasta abarcar el propio rol del Estado empresario y productivo del siglo XX. Los números expresan la férrea voluntad del equipo económico para lograr sus fines. Entre 1968 y 1973, la proporción del gasto público con respecto al PIB se incrementó desde un 21,1 a un 44,1%, mientras que en 1979 había vuelto a caer su promedio histórico de 22,9%. Del mismo modo, de las 533 empresas que estaban bajo control de la CORFO en 1973, en 1981 sólo quedaban 12¹¹. La contracción del Estado tuvo un efecto dramático para la clase media, entre otras cosas, dada la reducción del empleo público. Entre 1970 y 1973, el empleo público había aumentado en un 10,2%. La tendencia se revirtió rápidamente luego del golpe de Estado. Entre 1973 y 1978 el Estado se deshizo de aproximadamente 100.000 funcionarios. En otras palabras,

¹¹ Javier Martínez y Eugenio Tironi, *Las clases sociales en Chile: cambio y estratificación, 1970-1980* (Santiago: Ediciones Sur, 1985), 60.

si en 1973 el empleo público significaba el 40,6% del PIB, en 1979 equivalía solamente al 30,3%. Además, esta reducción afectó particularmente a las agencias de fomento, los servicios sociales y las empresas públicas, que a su vez eran las grandes prestadoras de servicios para las clases medias y trabajadoras¹².

Las reformas neoliberales afectaron también a la industria chilena, fuente permanente de empleo para sectores obreros y medios. La caída de la demanda interna, la abrupta baja de aranceles y el encarecimiento del crédito hizo que muchas de las ramas industriales tradicionales se volvieran al poco tiempo económicamente inviables, afectando sobre todo a aquellas que habían sido la columna vertebral del modelo sustitutivo de importaciones de las décadas previas. El desplome a este respecto fue pronunciado: entre 1974 y 1983 el valor de la producción industrial cayó en un 25%, lo que redundó en una pérdida de 150.000 empleos. El valor agregado de productos como el textil cayeron en un 55%, en el caucho el 70% y en aparatos eléctricos un 45%, por sólo mencionar algunos rubros¹³. Sólo pudo sobrevivir y expandirse aquella industria orientada al comercio exterior y de carácter primario, en consonancia con la tesis de las "ventajas comparativas" de los economistas neoliberales. Para la pequeña industria -compuesta en gran parte por empresarios identificados con la clase media- la situación era aún más grave, dada su menor resistencia a períodos críticos. El régimen, además, suprimió los espacios de capacitación y las líneas de crédito especiales para este sector creadas en los años sesenta¹⁴. El número de

¹² La contracción del empleo público afectó en particular a las labores de construcción del Ministerio de Obras Públicas, Contraloría General de la República, Dirección General de Servicios Eléctricos, Agua Potable y Pavimentación, Ministerios de Hacienda, Economía, Minería, Tierras, Agricultura, Ferrocarriles del Estado y Empresa de Transportes Colectivos del Estado, entre otros. En su mayoría, los afectados fueron obreros de construcción de contratación reciente, trabajadores de empresas públicas y empleados de larga trayectoria. Por otro lado, el desplome del empleo público es aún más pronunciado considerando que entre 1970 y 1978 el personal de defensa y orden público se expandió en un 42,3%, pasando de 76.000 a 109.000 personas aproximadamente. Ibid., 94; Enzo Faletto, "Chile: Transformaciones económicas y grupos sociales (1973-1986)", en *Obras completas*, vol. I (Santiago: Editorial Universitaria, 2008), 269

¹³ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 178.

¹⁴ "Dudas en la encrucijada", *Hoy*, Año I, No. 19, 5 al 11 de octubre de 1977, 29.

estos establecimientos se redujo en más de un 10% a raíz de la multiplicación de quiebras. En 1979, el valor agregado de este sector era sólo un 4,8% superior al de 1967, cuando en ese mismo período la economía había crecido un 39%¹⁵

Los sectores medios, de ese modo, sufrieron un cambio repentino en el ámbito del trabajo. Desde el Estado y la industria, el empleo comenzó a concentrarse cada vez con más fuerza en el sector terciario, es decir, de provisión de servicios y labores administrativas. Las categorías de comerciantes, oficinistas, vendedores y profesionales independientes fueron las que más crecieron en el período 1973-1979¹⁶. Los más afortunados pudieron insertarse en el ámbito financiero que, gracias a la apertura del flujo de capitales propiciado desde el gobierno, floreció en los años posteriores a la "política de shock". Si en 1971 el sector de finanzas empleaba a 45.000 personas, en 1981 eran casi 117.000 en decenas de bancos y "financieras", muchos de los cuales habían sido funcionarios públicos anteriormente¹⁷. Otros, motivados por el propio gobierno, transitaron hacia actividades esporádicas o de baja rentabilidad. La Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA), creada por la dictadura, recomendó dar facilidades para convertir a funcionarios públicos en taxistas. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el rubro "explotación de vehículos de alquiler" creció de un 0,2 a un 7,7% de los contribuyentes en el período 1975-1980¹⁸.

Los asalariados, y en particular los funcionarios públicos, entonces, fueron quienes más se vieron afectados por las reformas neoliberales. Cuando esa situación comenzó a ser evidente,

¹⁵ Faletto, "Chile: Transformaciones económicas y grupos sociales (1973-1986)", 230-34. Según CONUPIA, la realidad era más dramática que las cifras oficiales. En octubre de 1977 habían desaparecido el 20% de los establecimientos que formaban parte de esa organización en 1974. Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 166.

¹⁶ Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*, 73-74.

¹⁷ Cerda Albarracín, *Historia y desarrollo de la clase media en Chile*, 155; Faletto, "Chile: Transformaciones económicas y grupos sociales (1973-1986)", 269.

¹⁸ *Memoria de Gobierno 1973-1990*, s/e, vol. 2. Económico Productivo, c1990, 91-92; Javier Martínez y Arturo León, *Clases y clasificaciones sociales. Investigaciones sobre la estructura social chilena, 1970-1983* (Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo - SUR, 1987), 31; Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*, 109.

los jóvenes de clase media empezaron a asumir una relación instrumental con la educación superior, eligiendo aquellas carreras técnicas y profesionales que mejor se insertaban en el mercado¹⁹. Entre los adultos, quienes lograron mantener su trabajo sufrieron recortes en sus remuneraciones, muchas veces mediante el desfase entre inflación y reajuste. Otros tantos simplemente cayeron en la pobreza, subsistiendo en la economía informal. Las antropólogas Larissa Lomnitz y Ana Melnick investigaron este fenómeno para el caso de los profesores, dando cuenta de la pauperización y desmoralización generalizada bajo el neoliberalismo. Además de las dificultades económicas y políticas de muchos docentes, el estudio mostró que las reformas neoliberales y la fractura de la base material del "Chile mesocrático" impactó directamente en la construcción simbólica de este grupo de clase media, dada la amenaza directa que supusieron a la "dignidad" material y cultural con la que debían vivir. De un orgulloso funcionario del Estado, encargado de educar a las nuevas generaciones de ciudadanos, los profesores pasaron a depender de autoridades comunales, en condiciones laborales inestables, bajos sueldos y estricto control ideológico. Todo aquel mundo fundado en el prestigio y el respeto asociado al rol social y el nivel educativo simplemente se vino abajo²⁰.

2.- Primeras reacciones. Economía y política

El impacto en la realidad material y cultural de las reformas neoliberales no fue evidente desde un principio para las organizaciones de clase media. Las ambigüedades e indecisiones frente al triunfo de los economistas neoliberales en un primer momento fue el resultado lógico de

¹⁹ Eduardo Valenzuela y Ricardo Solari, *Los jóvenes de los ochenta: una interpretación sociológica de la actual generación estudiantil de clase media* (Santiago: SUR Profesionales Consultores, 1982).

²⁰ Larissa Adler de Lomnitz y Ana Melnick, *Neoliberalismo y clase media: el caso de los profesores de Chile* (Santiago, Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1998); Para estudios centrados en el impacto de las reformas neoliberales en el mundo obrero, véase Peter Winn, ed., *Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002* (Durham: Duke University Press, 2004).

la tensión entre su adhesión ideológica al régimen y la carencia de un proyecto económico propio que pudiera contrarrestarlo. Con todo, hubo reacciones a políticas sectoriales específicas, y la forma de afrontar esas decisiones respondía a la lógica negociadora y transaccional a la que estaban habituados. La escasa receptividad de las autoridades ante este tipo de gestiones, sin embargo, cambiaría el poco tiempo las estrategias de presión. Las críticas comenzarían a hacerse cada vez más duras y explícitas, pero ellas estarían solo limitadas al ámbito económico. La "sincronización" ideológica, a pesar de todo, seguiría operando.

Los primeros roces entre grupos mesocráticos y el ímpetu liberalizador del régimen comenzarían a darse aún antes de que los economistas neoliberales comenzaran la "política de shock". Pocas semanas después del golpe, *El Mercurio* criticó al Colegio de Ingenieros por reajustar los aranceles mínimos -facultad de todos los colegios profesionales- tildándolo de "práctica monopólica". La reacción se no hizo esperar. En conferencia de prensa, los dirigentes de la Confederación de Colegios Profesionales defendieron sus prerrogativas, negándose a subsumir el trabajo profesional al libre juego del mercado. Para dirigentes como el militante democratacristiano e ingeniero consultor Javier Zaldívar, era evidente quiénes eran los responsables de aquel intento por aplicar al pie de la letra fórmulas liberales "atrasadas y fracasadas", y probablemente sin estar consciente de sus consecuencias, se refirió a ellos con un nombre de cierto tono despectivo, pero que quedaría para la posteridad: los "Chicago Boys"²¹.

²¹ "Prácticas monopólicas en colegios profesionales", *El Mercurio*, 1ero de diciembre de 1973, 2; "Colegios profesionales defienden los aranceles", *El Mercurio*, 13 de diciembre de 1973, 22. Zaldívar volvió a repetir el concepto en entrevista dada algunas semanas después. "La guerra de los aranceles", *Qué Pasa*, 15 de febrero de 1974, 22. Todo este asunto acabó finalmente con un fallo a favor de los ingenieros de la Comisión Preventiva Central para la Defensa de la Libre Competencia, mejor conocida como "Comisión Antimonopolios". Para Eduardo Arriagada, presidente tanto del Colegio de Ingenieros como de la Confederación de Colegios Profesionales, el resultado final de la polémica era expresión del carácter especial del trabajo profesional. "Miles de hogares de obreros, de clase media, han soportado el gasto y los años en que el universitario no puede producir, para que al cabo su aporte a la comunidad sea más valioso y su status no sea el de simple bracero", recalcó. "¿El fin de una polémica?", *Qué Pasa*, 15 de febrero de 1974, 22; "Aranceles de Colegios Profesionales", *El Mercurio*, 9 de agosto de 1974, 2.

Los camioneros, por su parte, salieron peor parados de su primera contienda. Como parte de la liberalización "gradual" de la economía en 1974, el gobierno decretó la liberalización de las tarifas del transporte, lo que significaba que la Confederación de Dueños de Camiones ya no tenía la facultad de fijar los precios de sus servicios como en antaño. El Ministro de Economía, Fernando Léniz, compareció dos veces ante la asamblea de camioneros para explicar la medida, sin lograr la aceptación de los delegados. En el consultivo nacional celebrado el 16 de noviembre de 1974, Vilarín notificó al Ministro que rechazaban el decreto, dado que bajo la "ley de la selva" de la libre competencia solo podría reinar el "caos". En respuesta, Léniz explicó las ventajas de la competencia, inscribiéndola en la épica camionera de la "lucha contra un Estado paternalista".

En una nueva reunión, el 12 de diciembre de 1975, Vilarín endureció el tono, criticando a los "funcionarios de escritorio" de no entender los riesgos laborales de los camioneros. En ambas ocasiones, además, Léniz tuvo que hacer frente a largas intervenciones de delegados regionales. René Arenas, de Valparaíso, advirtió que la libertad de tarifas sólo beneficiaría a los grandes empresarios, mientras Jorge Romero reclamaba ante lo que consideraba una competencia injusta con ferrocarriles, de propiedad estatal. Muchos de los delegados, además, apelaron al rol protagónico del gremio en la lucha contra la Unidad Popular para exigir mejores condiciones. La respuesta de Léniz, sin embargo, no respondió a la lógica negociadora de otros tiempos: "Es cierto que [el país] no está preparado, pero algunas cosas debemos *forzarlas a patadas*, porque si no las forzamos a patadas no vamos a salir nunca de esto"²².

En un primer momento, la reacción de Vilarín fue apelar a la unidad gremial y a la "fe en Chile" para no desesperarse, ya que de otro modo los "quintacolumnistas del marxismo"

²² "Así opinó el gremio al tenor de las palabras del señor Ministro de Economía", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 33, noviembre de 1974, 18-25; "182 delegados dijeron 'No' al decreto que imponía libertad de tarifas", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 35, enero-febrero-marzo de 1975, 4-16. Destacado en el original

conseguiría su objetivo desestabilizador. Las críticas, entonces, debían circular de modo constructivo y leal con el gobierno -"a lo camionero"- para no alimentar al enemigo²³. Con la aplicación de la "política de shock" neoliberal, sin embargo, esta posición fue cada vez más difícil de mantener. La situación económica de la Confederación y de la mayoría de los pequeños propietarios de camiones no hizo sino empeorar. En el Congreso de la Confederación de 1977 -el primero que se celebraba desde 1972- Vilarín intentó hacer frente a las críticas que incluso empezaban a afectar su liderazgo gremial. Denunció, al mismo tiempo, la apatía de algunos sindicatos de camioneros dada la carencia de recursos económicos y, por otra parte, al equipo económico que no cejaba en "maltratar a los hombres de trabajo"²⁴. Lejos de lograr resultados concretos, en 1977 tuvieron que hacer frente al decreto que liberalizaba el precio de los combustibles, que en la práctica significó un rápido encarecimiento de ese vital insumo. Vilarín, en la prensa, calificó la situación de "caos institucionalizado", y definió al régimen como una "dictadura económica administrada por un grupo de civiles con el respaldo de las Fuerzas Armadas"²⁵.

La reacción de las dirigencias de las organizaciones mesocráticas ante el embate neoliberal determinó el grado de legitimidad con que gozaban al interior de cada grupo. El caso del Colegio Médico grafica de buena manera esta situación. Hugo Salvestrini y Osvaldo Artaza habían asumido los cargos de presidente y secretario general de la Orden el mismo día del golpe de Estado. En 1975 expresaron públicamente la "gran coincidencia entre lo que piensa el Gobierno y lo que piensa el Colegio" para transformar la "medicina funcionaria" en una

²³ "1974: Año difícil para los dueños de camiones de Chile", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. Año III, No. 34, diciembre de 1974, 16.

²⁴ "Su Excelencia el Presidente de la República y Ministros de Estado honraron con su presencia la Sesión Inaugural de Nuestro Congreso", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, No. 38, c1977, 7.

²⁵ "¿Hacia la privatización?", *Hoy*, Año II, No. 58, 13 al 19 de septiembre de 1978, 25.

"medicina adaptada a la economía social de mercado"²⁶. La distancia entre las declaraciones de ambos directores y las bases regionales provocó la censura y posterior caída de la mesa directiva, algo inusual dadas las fuertes restricciones impuestas por el Ministerio del Interior para el reemplazo de dirigentes gremiales²⁷. Ernesto Medina Lois, el nuevo presidente del gremio, esgrimió una retórica mucho más crítica de los planes de gobierno y, sobre todo, de la difícil situación salarial de los médicos²⁸. En el discurso central del "Día del Médico" en diciembre de 1976 en el Teatro Municipal, Medina Lois calificó de "simplista" la idea de someter al sistema de salud al libre juego de la oferta y la demanda²⁹. El responsable de la situación era, una vez más, el "equipo económico", incapaz de percibir las particularidades del sector salud. A pesar de estas críticas abiertas, la situación no mejoró. En 1979, los dirigentes médicos seguían reclamando por los bajos sueldos. Los ofrecimientos del gobierno en ese entonces fueron catalogados sin más como "el PEM de los médicos"³⁰.

Los ingenieros, por su parte, intentaron ofrecer alternativas al gobierno para hacer frente la crisis del sistema productivo chileno. En 1976 propusieron un "Plan Nacional de Utilización de la Ingeniería" destinado al uso eficiente y bien remunerado de ingenieros en el sector público³¹. Eduardo Arriagada, mientras tanto, insistía en la necesidad de aumentar la inversión estatal en

²⁶ "Hacia la medicina privada organizada pero no comercializada" (entrevista a Osvaldo Artaza), *Qué Pasa*, 13 de marzo de 1975, 28; Osvaldo Artaza y Hugo Salvestrini, "Hacia un programa concreto en el área de la salud", *El Mercurio*, 26 de febrero de 1975, 2; "No existe desidia frente a problema de la salud", *La Patria*, 22 de febrero de 1975, 5.

²⁷ "Problemas internos en Colegio Médico", *La Tercera de la Hora*, 26 de abril de 1975, 6; "Secreto médico y difusión periodística", *Qué Pasa*, 29 de mayo de 1975, 15; "El martes votarán censura a directiva del C. Médico", *La Patria*, 25 de abril de 1975, 2.

²⁸ "Fundamental es la existencia de médicos en cantidad y calidad y con mística de trabajo", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVI, s/n, noviembre-diciembre de 1976, 23; "La situación económica de los médicos", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVII, s/n, mayo-junio de 1976, 9; "No más nubes de humo", *Qué Pasa*, s/n, 21 de abril de 1977, 9; "Salud y dinero", *Ercilla*, s/n, 6 de abril de 1977, 44-47.

²⁹ "Sermena y SNS no pueden basarse en injusta situación de médicos", *La Tercera de la Hora*, 4 de diciembre de 1976, 13; "Crudo análisis del problema de la Salud", *El Mercurio*, 4 de diciembre de 1976, 32.

³⁰ "Diagnóstico reservado", *Ercilla*, s/n, 4 de abril de 1979, 16.

³¹ "Editorial", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 71, abril de 1976, 3.

desarrollo industrial, y no favorecer solamente las actividades extractivas de bajo valor agregado³². Para aumentar la presión sobre las autoridades, 1978 fue declarado por el Colegio como el "año de la ingeniería", inaugurado en una ceremonia en el Teatro Municipal que contó con la presencia del propio Pinochet³³. La incapacidad de influir en las políticas gubernamentales y el progresivo enfriamiento de las relaciones con las autoridades hicieron que Eduardo Arriagada decidiera renunciar a la presidencia y al Consejo General del Colegio de Ingenieros, dando paso a una directiva dominada por ingenieros militares y civiles afines al régimen³⁴.

Distinto fue a este respecto el derrotero seguido por los comerciantes. La crisis económica agudizada tras la "política de shock" afectó seriamente al comerciante detallista dada la alta cesantía, la caída de los ingresos y el alto costo del crédito e insumos³⁵. En consonancia con los reclamos de la base gremial, Cumsille no tardó en criticar públicamente los efectos de las medidas a través de entrevistas, la revista gremial y en su nuevo rol como columnista de *La Tercera de la Hora*³⁶. Sus intervenciones públicas tuvieron también otras manifestaciones. Entre otras cosas, dado el desfase entre las estadísticas oficiales y las angustias económicas experimentadas, Cumsille presentó periódicamente a partir de 1975 un Índice de Precios al Consumidor (IPC) alternativo, el "Índice de Precios Promedio" (IPP) o simplemente, como fue

³² "Editorial", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 77, 1978, 3.

³³ "Apoyo del Gobierno al 'Año de la Ingeniería chilena'", *La Tercera de la Hora*, 13 de marzo de 1978, 2; "Señuelos a la inversión", *Ercilla*, s/n, 12 de abril de 1978, 21.

³⁴ "Solemne ceremonia inaugural del año de la ingeniería chilena", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 77, 1978, s/p; "Homenaje despedida a Eduardo Arriagada Moreno", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 81, julio de 1979, 9; "Renunció presidente del Colegio de Ingenieros", *El Mercurio*, 29 de diciembre de 1978, 3C. El sucesor de Arriagada fue el general Manuel Pinochet Sepúlveda, director de la rama de ingeniería militar, ex Ministro de Economía en los primeros días del régimen y por ese entonces director de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT). Como vicepresidente fue nombrado Hans Weber Munnich, quien a la vez se desempeñaba como Director de Tránsito en la Municipalidad de Santiago. "Nuevo presidente del Colegio de Ingenieros", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 80, abril de 1979, 8-9.

³⁵ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 210.

³⁶ En sus memorias, Cumsille relata que fue el propio director de *La Tercera de la Hora* -entonces uno de los periódicos de mayor tiraje del país- quien lo invitó a unirse al equipo de columnistas estables, ya que buscaban convertirse en "la voz de la clase media", y el líder de los comerciantes detallistas era uno de sus más conspicuos representantes. Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 167.

luego conocido, "el IPC de Cumsille", con el expreso objetivo de dar cuenta de la situación real del comercio detallista y del consumo de bienes básicos "del chileno medio hacia abajo"³⁷. Este tipo de incursiones públicas consolidaron la solidez de su liderazgo gremial. Para medir su popularidad interna, Cumsille recurrió a arriesgadas estrategias. En una asamblea con más de 500 representantes de las bases de la Confederación a finales de 1975 presentó su renuncia, la que fue ruidosamente rechazada con gritos "Cumsille sí, otro no"³⁸. Tres años después, en 1978, volvió a repetir la maniobra, al "no haber alcanzado una solución satisfactoria de los planteamientos gremiales puntualizados en los diversos congresos gremiales del Comercio Detallista". Nuevamente, se resolvió rechazar la renuncia y otorgarle un voto de "absoluta confianza" para continuar presentando ante las autoridades las demandas gremiales más urgentes³⁹.

La actitud crítica de Cumsille trajo problemas con los gremios de grandes comerciantes, agrupados en su mayoría en la Cámara Central de Comercio. El conflicto se dio al interior del Registro Nacional de Comerciantes, órgano semi-estatal creado en 1969 que reunía a la Confederación, la Cámara y CONUPIA, y tenía como fin administrar fondos previsionales para el bienestar de sus asociados⁴⁰. En 1975, dirigentes de la Cámara acusaron a Cumsille de tendencias democratacristianas -una acusación grave en ese contexto⁴¹- y de alimentar a los

³⁷ Ibid., 185; "La canasta de los comerciantes", *Hoy*, s/n, 12 al 18 de septiembre de 1979, 32-33. Por supuesto, los economistas de ODEPLAN le restaron toda veracidad a ese nuevo índice, cuestionando su rigurosidad y carácter representativo del consumo popular.. "A un 5,98% llegó el IPP de Cumsille en septiembre", *La Tercera de la Hora*, 12 de octubre de 1975, 9.

³⁸ "Comercio: peticiones al detalle", *Ercilla*, No. 2105, semana del 3 al 9 de diciembre de 1975, 9-10.

³⁹ "Declaración pública", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IX, No. 27, julio de 1978, 5.

⁴⁰ Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile, *Proyecto de Previsión para Comerciantes y Pequeños Industriales* (Santiago: Departamento Nacional Técnico y de Planificación, 1973).

⁴¹ Esas acusaciones no eran nuevas. Sectores disidentes al interior de la Confederación, como fue el caso de la Cámara de Comercio de Temuco, quienes las venían difundiendo desde unos meses antes, intentando con ello predisponer a las autoridades militares contra Cumsille.. Carta de Alejandro Muñoz Lagos, Presidente de la Cámara de Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Temuco, a Pablo Iturriaga, Intendente militar de Cautín, Temuco, 5 de febrero de 1974, Intendencia de Cautín, Vol. 560, ARA.

"enemigos de Chile" con sus críticas a la política económica⁴². En respuesta, la Confederación organizó una campaña contra el Registro, acusándolo de querer formar un "supergremio" acrítico y de malversar los cuantiosos fondos que recibía por ley de todos los comerciantes⁴³. En 1977 se descubrió que efectivamente algunos de los dirigentes del Registro se habían apropiado de forma indebida de fondos gremiales, lo que marcó el triunfo de Cumsille⁴⁴. Más allá del resultado, la polémica reflejó los costos que la crítica a la política económica del gobierno tenía para aquellos dirigentes de clase media más insistentes al respecto, y la actitud obsecuente en esa materia por parte de los gremios de grandes empresarios. Las reformas neoliberales comenzaron a erosionar también la unión del "poder gremial" de los años anteriores⁴⁵.

La reacciones, críticas y cambios en las dirigencias mesocráticas, sin embargo, tuvieron una contrapartida unánime que evitó toda posibilidad quiebre con la dictadura. A la vez que cuestionaban la política económica de los "Chicago Boys", estos grupos reafirmaron una y otra vez el apoyo político al gobierno, sobre todo en los momentos en que este fue abiertamente requerido. En 1977, Pinochet inició el proceso de "institucionalización" del régimen en un ceremonia realizada en el cerro Chacarillas de Santiago. Allí se estableció un bosquejo de itinerario de transición hacia una democracia "protegida", previa aprobación de un nuevo texto constitucional⁴⁶. Augurando la creación de nuevos mecanismos de participación social en el nuevo orden político, los comerciantes detallistas, como la mayoría de los gremios mesocráticos,

⁴² "Caupolicán: Cumsille vs. Basterrica", *Qué Pasa*, No. 219, semana del 3 de julio de 1975, 11; "La manzana de la discordia", *Ercilla*, No. 2144, semana del 1 al 7 de septiembre de 1976, 13.

⁴³ "¿Qué pide el comercio detallista?", *La Tercera de la Hora*, 28 de agosto de 1976, 8; "El comercio y su lucha", *La Tercera de la Hora*, 5 de septiembre de 1976, 3; Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 144-45.

⁴⁴ "La querella de los comerciantes", *Qué Pasa*, No. 317, semana del 19 de mayo de 1977, 10; Rafael Cumsille, "Los irresponsables", *La Tercera de la Hora*, 30 de junio de 1977, 5. El Registro Nacional de Comerciantes fue finalmente disuelto por la dictadura mediante el DL 466 del Ministerio de Economía en 1981. "Desaparece el Registro Nacional de Comerciantes", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IX, No. 35, diciembre de 1981, 3.

⁴⁵ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 212.

⁴⁶ Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 183-95.

celebraron entusiasmados el anuncio⁴⁷. Del mismo modo, al año siguiente, la dictadura llamó a una "consulta", pidiendo apoyo a la ciudadanía ante el repudio internacional por violaciones a los Derechos Humanos. Una vez más, las organizaciones mesocráticas se apresuraron en aplaudir la medida y comprometer el más irrestricto apoyo⁴⁸. En 1980, por último, Pinochet organizó un plebiscito para aprobar la nueva constitución, recibiendo el beneplácito de una diversidad de organizaciones sociales y políticas, incluyendo a los grupos de clase media⁴⁹.

El apoyo político fue consecuencia de la "sincronización" de las organizaciones mesocráticas con el régimen de los primeros años, basado en la experiencia reciente de la Unidad Popular, en la sintonía con la retórica nacionalista y conservadora del régimen, y en un anticomunismo militante compartido. El Gran Maestro de la masonería, Horacio González Contesse, por ejemplo, respondió en una de las pocas entrevistas dadas en esos años con los conceptos "manoseada" para referirse a la democracia, y "honestísimo" al ser preguntado por Pinochet⁵⁰. Por entonces, además, sus preocupaciones como responsable de la masonería chilena estaban concentradas en lograr la liberación del masón cubano Hubert Matos mediante un canje con el vicepresidente del Partido Comunista de Chile, Jorge Montes, maniobra similar a la que poco antes había liberado al secretario general del mismo partido, Luis Corvalán⁵¹.

⁴⁷ "Gremios en la normalización democrática", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IX, No. 25, julio-septiembre de 1977, 4.

⁴⁸ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 227. Los términos de la "consulta" gatillaron la salida de Gustavo Leigh de la Junta. Aún ese evento tuvo el apoyo de muchas de las organizaciones mesocráticas, y quienes no aquellos dirigentes que no fueron explícitos al respecto tuvieron dificultades internas. Eduardo Rojas tuvo que renunciar a la presidencia del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, luego de pedir un voto de apoyo a Leigh en el Consejo General. "Renunció presidente del Colegio Médico", *La Tercera de la Hora*, 26 de agosto de 1978, 18.

⁴⁹ Claudio Fuentes, *El fraude: crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980* (Santiago: Editorial Hueders, 2013), *passim*.

⁵⁰ "El Gran Maestro" (entrevista a Horacio González Contesse), *Ercilla*, s/n, 28 de septiembre de 1977, 32.

⁵¹ La propuesta, por cierto, no fructificó. "Hubert Matos, Maestro Masón Mártir, sigue sufriendo en silencio", *Revista Masónica de Chile*, Año LIV, marzo-abril de 1977, Nos. 1-2, 22. Sobre el caso de Corvalán, Olga Ulianova, "Corvalán for Bukovsky: A Real Exchange of Prisoners During an Imaginary War. The Chilean Dictatorship, the Soviet Union, and US Mediation, 1973–1976", *Cold War History* 14, n° 3 (julio de 2014): 315–36.

La continuidad de la adhesión ideológica al régimen clausuró toda posibilidad institucional de plantear críticas que no estuviesen remitidas estrictamente al plano económico. Los comerciantes, por ejemplo, siguieron conmemorando cada 11 de septiembre en un ánimo festivo y en consonancia con las iniciativas gubernamentales⁵², mientras el presidente del Colegio de Abogados aprovechaba cada intervención en la Corte Suprema con motivo del juramento de nuevos abogados para reafirmar la retórica grupal de legitimación de la dictadura⁵³. Todo ello hizo que pesar de que los fundamentos de la política económica no estaban en discusión, los dirigentes mesocráticos aún pudieran gozar de la buena voluntad de las autoridades para asistir a reuniones gremiales, como también para solucionar problemas puntuales. Por ejemplo, más allá de la crítica situación económica, la presencia de Pinochet y otras autoridades de gobierno entusiasmó de sobremanera a los asistentes al Congreso de la Confederación de Dueños de Camiones de 1977⁵⁴. La práctica y retórica institucional de las organizaciones mesocráticas en los años posteriores al "shock" neoliberal dejaron en evidencia que toda demanda gremial legítima tenía como condición de posibilidad una irrestricta adhesión política a la dictadura.

3.- El consumo neoliberal

Las profundas transformaciones llevadas a cabo en la economía y la sociedad chilena por parte de los "Chicago Boys" no se remitieron solamente a la contracción del Estado y el fomento de la actividad privada. Las nuevas políticas arancelarias y las ansias de modernización por parte

⁵² "Repartiendo 'llapas' y una gran fiesta comercio celebrará el 11 de septiembre", *El Cronista*, 4 de agosto de 1977, s/p.

⁵³ Entre muchos otros casos, "Una maravillosa disciplina profesional", *Revista del Foro*, Año I, No. 2, marzo-abril de 1979, 17

⁵⁴ "Su Excelencia el Presidente de la República y Ministros de Estado honraron con su presencia la Sesión Inaugural de Nuestro Congreso", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, No. 38, c1977, 12.

de la dictadura produjeron el llamado "boom" de las importaciones de bienes durables de todo tipo, que se extendió desde el control de la crisis agudizada por el "shock", aproximadamente en 1977, hasta 1981, cuando se comenzaron a hacer evidentes las señales de una nueva y aún más profunda crisis económica. Esta inédita disponibilidad de bienes importados se tradujo en una revolución de las pautas de consumo de los chilenos, particularmente de aquellos identificados con la clase media. De hecho, fue allí donde sus efectos fueron más visibles. El "boom" de las importaciones y el consumo redefinió en gran medida las prácticas sociales asociadas al ideal de clase media, y por ende también sus límites y jerarquías. De un momento a otro, pareció ser necesario acceder a determinados tipos de bienes para reclamar un lugar en la clase media y sus virtudes asociadas. Para eso, se exigía una inserción en términos favorables en el mercado, ya sea mediante trabajos con ingresos necesarios para consumir, como también a través del acceso al crédito, una herramienta que por entonces empezaba a masificarse. Todo ello repercutió en los espacios destinados al consumo, las herramientas para inducirlo, en la cultura de masas y en la retórica oficialista sobre las promesas del modelo.

El consumo no se agota solamente en la satisfacción de necesidades inmediatas. La apropiación diferenciada de bienes a través del mercado (u otros mecanismos legítimos de distribución) tiene implicancias sociales y culturales tanto para quienes pueden acceder a ellos como también para quienes quedan excluidos. El consumo, en ese sentido, es una práctica cotidiana de inclusión individual en un colectivo más amplio, que al mismo tiempo revela los órdenes, límites y exclusiones -así como también la posibilidad de desafiarlos- del mundo social en el que se participa. Por una parte, entonces, construye, redefine y desafía jerarquías sociales, en la medida que el goce y exhibición de determinados bienes operan como marcadores de clase, ya sea por la posibilidad económica de acceder a ellos, como también por la capacidad por

reconocer y apreciar determinados objetos transables en el mercado propios de sectores sociales preocupados por no confundirse con quienes consideran sus inferiores. El consumo posibilita la distinción, es decir, aquella pugna constante por trazar límites sociales, en los que no sólo los recursos económicos sino también el gusto y los anhelos por superioridad social y cultural actúan como factores motivadores⁵⁵.

La dinámica y consecuencias del consumo, por otra parte, suelen sobrepasar el ámbito de la estructura de clases. Entre otras cosas, impacta también en relaciones de género en las esferas pública y privada, en la medida en que el acceso diferenciado a bienes materiales apuntala o desestabiliza relaciones de poder entre hombres y mujeres⁵⁶. Ambas dimensiones han sido estudiadas recientemente en el contexto latinoamericano, dando cuenta con ello la relevancia que el acceso al mercado y al consumo tienen en la reconfiguración de identidades y jerarquías en tiempos de acelerado cambio social⁵⁷.

El consumo, al mismo tiempo, no se limita a la decisión individual de adquirir determinado producto. Por el contrario, ha sido objeto de preocupación constante de gobiernos de distinto signo, dado que asegurar condiciones favorables de consumo para la sociedad -o para determinado grupo social- opera como una de las bases esenciales de legitimación del poder

⁵⁵ Sobre la reproducción de clases y la distinción, véase el clásico trabajo de Bourdieu, *Distinction*; En esa misma línea, véase Tomas Ariztía, "Clases medias y consumo: tres claves de lectura desde la sociología", *Polis. Revista Latinoamericana*, n° 43 (9 de junio de 2016); y Raúl González, "Reflexiones sobre el consumo: más allá de lo privado y más acá de la condena", *Revista Propositiones*, n° 34 (2002): 46–71.

⁵⁶ Joel Stillerman, *The Sociology of Consumption: A Global Approach* (Malden, MA: Polity Press, 2015), cap. 5.

⁵⁷ Para la clase media, como lo ha demostrado Maureen O'Dougherty para el caso brasileño, la definición de bienes específicos durante el auge expansivo económico de los años setenta fue una de las bases para la consolidación y proyección de una identidad de clase media específica, a la que se le asociaban valores sociales virtuosos exclusivos y moralmente superiores a sectores populares. De allí que la crisis económica de los años ochenta haya sido experimentada también como una amenaza a ese status mesocrático. Por su parte, Heidi Tinsman ha estudiado el impacto de las nuevas prácticas de consumo en el Chile neoliberal en sectores populares rurales, reconvertidos en obreros de la emergente y dinámica agroindustria. El acceso a trabajos y salarios de mujeres "temporeras" desafió las relaciones de género tradicionales del campo, aquellas en las que el hombre concentraba cuotas de poder y decisión doméstica gracias a su rol exclusivo de proveedor y consumidor. O'Dougherty, *Consumption Intensified*; Heidi Tinsman, *Buying into the Regime: Grapes and Consumption in Cold War Chile and the United States* (Durham: Duke University Press, 2014).

político. De hecho, en algunos contextos, el consumo fue la base desde la cual se construyeron redes sociales que expandieron derechos ciudadanos e impactaron directamente en la formulación de políticas públicas al respecto⁵⁸. El consumo, de ese modo, tiene una dimensión política que no debe ser dejada de lado. En regímenes populistas en América Latina, el consumo popular a través del mercado o el Estado fue central para reproducir la hegemonía gubernamental entre los sectores populares. Ello significó a su vez un cambio radical en las pautas de consumo popular y un mejoramiento integral de la realidad material de esos sectores, a pesar de los resquemores que despertaba en sectores sociales medios y altos⁵⁹.

En Chile el consumo fue también objeto de políticas públicas desde al menos los años veinte. Como una manera de luchar contra la especulación y asegurar el suministro de bienes de primera necesidad para los sectores populares, en 1932 se creó el Comisariato de Subsistencias y Precios, inaugurando una larga época de intervencionismo estatal en la fijación de precios. El sucesor institucional del Comisariato, la Dirección de Industrias y Comercio (DIRINCO), fue usado asiduamente por los gobiernos posteriores para intervenir la distribución de bienes en contexto de crecimiento económico lento y alta inflación⁶⁰. El consumo, de hecho, fue uno de los aspectos centrales de la lucha política y social durante la Unidad Popular, contraponiéndose el desabastecimiento y la movilización social contrarrevolucionaria -simbolizada en la "marcha de las cacerolas vacías" de diciembre de 1971-, con el control popular del consumo y la lucha contra el acaparamiento encarnada en las JAP.

⁵⁸ Fue el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos de la segunda posguerra. Lizabeth Cohen, *A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America* (New York: Vintage Books, 2004).

⁵⁹ El problema del consumo bajo regímenes populistas ha sido estudiado para el caso de la Argentina de Perón por Eduardo Elena, *Dignifying Argentina: Peronism, Citizenship, and Mass Consumption* (Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2011); y Natalia Milanesio, *Cuando los trabajadores salieron de compras: nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2014).

⁶⁰ Henríquez Vásquez, *En "Estado Sólido"*, capítulo 6.

Para la dictadura, el consumo y el bienestar material eran prioridad, dadas las necesidades urgentes de legitimación. De hecho, en la propia retórica demonizadora de la Unidad Popular, el desabastecimiento y el desquiciamiento económico eran un tópico recurrente, para demostrar por contraste que el camino al desarrollo pasaba por la aceptación del autoritarismo. De allí que la receta neoliberal resultara tan atractiva para Pinochet y su círculo cercano, puesto que ofrecía una explicación a los problemas económicos más apremiantes de los primeros años del régimen y, más importante aún, un camino decidido para superarlos.

Hacia 1975 la situación era urgente, dada la incapacidad de las medidas gradualistas tomadas hasta entonces por contener la inflación y reactivar la producción. Los precios de bienes básicos, liberados del control de DIRINCO, subieron abruptamente. Un sector de la prensa oficialista acusó directamente a los comerciantes de causar artificialmente estas alzas para resarcirse de las pérdidas del período anterior, llamándolos "buitres", "malos chilenos" y "antipatriotas", entre otros epítetos⁶¹. Cumsille y otros dirigentes gremiales del comercio explicaban que las alzas venían del encarecimiento del dólar, las materias primas y los impuestos, entre otras causas, y que los "comerciantes no son los malos de la película"⁶². Al mismo tiempo, algunos ciudadanos de clase media se quejaban de la situación en la prensa. El empleado público Enrique Contreras apuntaba que, dadas las alzas, "no tengo esperanzas de comprar zapatos nuevos para mí. Usted ve, no hay ninguno por menos de ciento veinte pesos y yo gano 500"⁶³. Por su parte, un "profesional juntista" señalaba en carta al director de *Ercilla*: "Hoy en día veo con profunda amargura que la vida perdida en aras de la libertad, el sacrificio de nosotros y el

⁶¹ "A los 'buitres' ya se les olvidó", *La Segunda*, 9 de septiembre de 1976, s/p.

⁶² "Comerciante está consciente de su rol en el desarrollo económico", *La Tercera de la Hora*, 6 de junio de 1976, s/p. La situación también afectaba a otro tipo de bienes. El boletín "línea blanca" de la División de Industrias Metalúrgicas de la CORFO de junio de 1975 alertaba sobre las bajas ventas de refrigerados construidos en Chile. Con un stock de 2.487 unidades, sólo habían podido venderse 599 en ese mes. Las altas tasas de interés de los créditos conspiraban contra las posibilidades de revertir esa situación. "¿Es negocio comprar a crédito?", *Ercilla*, No. 2096, semana del 1 al 7 de octubre de 1975, 19-21.

⁶³ "Frenética danza de precios desconcierta a consumidores", *La Tercera de la Hora*, 8 de marzo de 1976, 5.

esfuerzo de los militares es burlado con el hambre del pueblo, lo que es un procedimiento sucio que no tiene el beneplácito de nosotros el pueblo de Chile"⁶⁴. La crisis de 1975 y las dificultades para satisfacer ciertas necesidades de consumo parecían estar haciendo mella entre algunas de las bases de apoyo del régimen.

La estrategia aperturista del equipo económico del gobierno tuvo frutos visibles a corto plazo. Una manera de dimensionar el cambio explosivo en la disponibilidad de bienes es a través de los números. Si en 1976 se habían importado televisores por un valor de 2,7 millones de dólares, en 1977 ese número saltó a 6,5 millones. En 1979, por su parte, sólo en automóviles y repuestos se importaron 416 millones de dólares⁶⁵. El "boom" de las importaciones incluyó también refrigeradores, lavadoras, cigarrillos, alcohol, productos de belleza, perfumes y artículos electrónicos de última generación, entre otros. De un momento a otro, las vitrinas de las tiendas chilenas, especialmente las santiaguinas, se inundaron de bienes a un precio muchas veces inferior a su símil nacional, y que además contaba con la ventaja de la novedad y el prestigio inherente que por esos años tenía todo aquel producto importado⁶⁶. Así, por ejemplo, la oferta de refrigeradores de uso doméstico creció de 1 por cada 117 habitantes en 1965 a 1 por cada 58 en 1981. Lo mismo sucedió con las lavadoras, que pasaron de 31.798 a 169.153 unidades, o bien de 1 por cada 268 a 1 por cada 67 habitantes. Más espectacular aún fue el incremento de equipos de radio, que en ese lapso de tiempo aumentaron su oferta en un 1.180%⁶⁷.

La masiva disponibilidad de bienes revolucionó las expectativas de consumo de los chilenos, concentrándose en aquellos productos a los cuales aún no podían acceder. Si en 1975

⁶⁴ "¿Cuánto gastamos en comer?" (Carta al director), *Ercilla*, No. 2096, semana del 1 al 7 de octubre de 1975, 4.

⁶⁵ "La avalancha de importaciones", *Qué Pasa*, No. 327, semana del 28 de julio de 1977, 63; "Cómo gastan su plata los chilenos", *Qué Pasa*, No. 498, semana del 23 al 29 de octubre de 1980, 31.

⁶⁶ Un caso paradigmático de esto fue el whisky, un bien escaso y caro antes del "boom". En 1979 se importaron 11.5 millones de dólares de dicho destilado, con lo que por precio y cantidad estuvo disponible para personas de ingresos medios. La popularización del whisky, según prensa de la época, estuvo dado porque "la gente siente (...) que da jerarquía y status". "De la élite a la masa", *Qué Pasa*, No. 464, semana del 6 al 12 de marzo de 1980, 23-25.

⁶⁷ Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*, 118.

las principales aspiraciones tenían que ver con automóviles, televisores y radios, además de cosméticos y otros artículos de lujo⁶⁸, en 1980 los bienes más apetecidos eran lavadoras, encendedoras, aspiradoras y televisiones a color, recién llegados al mercado⁶⁹. Todo ello, por supuesto, tenía directa relación con la capacidad económica. También en 1980, por ejemplo, el grupo socioeconómico (GSE) medio de las encuestas de mercado, se inclinaba ligeramente por las lavadoras, mientras que el GSE bajo aspiraba a comprar una cocina y televisores en blanco y negro. El GSE alto, por su parte, ponía entre sus preferencias los productos recién llegados, sobre todo electrodomésticos de última generación⁷⁰. Las expectativas, al mismo tiempo, estaban ligadas también a los productos ya adquiridos, concentrando los deseos en la novedad y la exclusividad. Para quienes contaban con un nivel de recursos suficiente para diferenciarse de los sectores populares, hubo ciertos productos que empezaron a ser esenciales para la vida cotidiana. En abril de 1981, por ejemplo, el 100% del GSE alto decía tener refrigerador, comparado con el 88,6 y el 37,2% de los GSE medio y bajo respectivamente. El GSE medio para ese entonces gozaba de índices relativamente altos de propiedad de otros bienes durables, como automóviles, televisiones a color y equipos de música, con lo que podían fijar su atención también en las novedades del mercado⁷¹.

Las posibilidades de acceder a bienes antes vedados por la baja oferta y los altos aranceles estuvo de la mano de la expansión también explosiva del crédito. La apertura financiera propiciada por los "Chicago Boys" aceleró el flujo de créditos externos, desde unos 400 millones en 1977 a más de 2.000 millones de dólares en 1980. Esta enorme afluencia de

⁶⁸ Stefan Rinke, *Encuentros con el yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile (1898-1990)* (Santiago: DIBAM - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014), 364.

⁶⁹ *Índice Gallup de opinión y mercado*, noviembre de 1980, 18-21.

⁷⁰ *Índice Gallup de opinión y mercado*, diciembre de 1980, 17. Por supuesto "GSE medio" no significa exactamente clase media, dado que la primera categoría sólo se construye en base a ingresos, sin incorporar otras variables cuantitativas y cualitativas necesarias para definir a un grupo como de "clase media". Con todo, es un índice útil para al menos inferir la realidad material de algunos miembros de la clase media.

⁷¹ *Índice Gallup de opinión y mercado*, enero de 1981, 8; *Índice Gallup de opinión y mercado*, agosto de 1981, 12

capitales, a su vez, posibilitó el descenso sostenido de las tasas de interés, aumentando las facilidades y la cobertura de créditos destinados a consumo⁷². Los bancos establecidos pronto encontraron competencia en las propias casas comerciales que ofrecían "facilidades", como se les decía entonces, a sus potenciales clientes a través de pago en cuotas. A ellos se le sumaron luego las llamadas "financieras", instituciones especializadas en otorgar créditos de consumo a personas que pudieran demostrar cierto nivel de solvencia⁷³. En 1979, además, hicieron su aparición las tarjetas de crédito, que facilitaban aún más las transferencias de fondos para consumo al unir las a redes bancarias internacionales. Según señalaba la prensa oficialista, poseer una de esas tarjetas -luego de comprobar el historial económico del postulante- era una forma de dar cuenta de las cualidades a las que alude la palabra "crédito" en latín: fe, honorabilidad y prestigio⁷⁴. Todo ello hizo que los sectores medios pudieran acceder a mayores recursos destinados al consumo, encontrando en ello, además, una confirmación explícita de su posición de privilegio relativo con respecto a quienes estaban excluidos de estos circuitos. Una encuesta de 1984 señaló que un 42% de las familias chilenas tenían que afrontar pagos por uno o más créditos. Casi la mitad de ellas eran de sectores de ingresos medios. Esos recursos fueron usados, en orden descendente, para acceder a vivienda, electrodomésticos, vestuario, muebles y automóviles⁷⁵.

Los estímulos al consumo vinieron también de la expansión del gasto en publicidad, que junto con promocionar nuevos productos, apuntalaba los contenidos ideológicos del neoliberalismo emergente. En 1981 ya existían más de 300 agencias publicitarias, y juntas manejaban un presupuesto de 300 millones dólares. Muchos de estos publicistas habían sido

⁷² Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, 243.

⁷³ "Créditos: el consumidor tiene la palabra", *Qué Pasa*, No. 506, semana del 18 al 24 de diciembre de 1980, 17-18.

⁷⁴ "La nueva manera de comprar", *Qué Pasa*, No. 409, semana del 15 al 21 de febrero de 1979, 22-23

⁷⁵ Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*, 120; Rinke, *Encuentros con el yanqui*, 372.

entrenados bajo el alero de las grandes agencias estadounidenses, muchas de las cuales -como J. Walter Thompson, CCC McCann Erickson y Kenyon y Eckhardt- se instalaron en Chile por esos años. La prensa escrita fue el principal receptor de estos nuevos anuncios, a lo cual se le sumaron espacios cada vez más grandes en estos medios de reportajes e información al consumidor. Desde principios de los años ochenta la televisión empezó a disputarle esa primacía, en años en que los aparatos receptores aumentaban sus ventas⁷⁶. Los publicistas y comerciantes, además, empezaron a contar con nuevas herramientas para refinar el mensaje. En 1979 comenzó a publicarse el "Índice Gallup", con muestras de millones de santiaguinos que revelaban sus ansiedades, expectativas y deseos con respecto al consumo. Las firmas podían contratar informes confidenciales específicos sobre determinados productos, lo que a su vez aumentaba la información disponible y, señalaban sus representantes, la precisión de la información. Cubriéndose de un aura objetiva y científica, el "índice Gallup" también retroalimentaba el esquema cultural subyacente al "boom" del consumo neoliberal. Según sus estudios, señalaba uno de sus gerentes, era evidente que los chilenos "habían aprendido la lección y ya no veían al Estado como el 'gran papá' que debía resolver los problemas", por lo que "la noción subsidiaria del Estado habría sido aprendida"⁷⁷.

El consumo también afectó la fisonomía del paisaje urbano y las formas de utilización de su espacio. Ya en los primeros años luego del "shock" neoliberal comenzaron a construirse establecimientos comerciales que por su dimensión no tenían relación a lo que los chilenos estaban acostumbrados. En 1976 el empresario Horst Paulmann abrió en la avenida Kennedy -un sector de clase media acomodada y alta- el primer "hipermercado Jumbo", "especialmente diseñado para que la familia entera pueda pasar un agradable día de compras". Esta nueva forma

⁷⁶ Rinke, *Encuentros con el yanqui*, 368–69; José Joaquín Brunner, *Vida cotidiana, sociedad y cultura: Chile, 1973-82* (Santiago: FLACSO, Documento de Trabajo No. 151, 1982), 17.

⁷⁷ "Los nuevos hábitos de los chilenos", *Qué Pasa*, No. 440, semana del 20 al 26 de septiembre de 1979, 10-11.

de consumir bienes básicos apuntaba explícitamente a alejar a estos sectores de los pequeños almacenes o "bolicheros", representados en esa lógica como abusadores y especuladores⁷⁸. Al poco tiempo se le sumaron los llamados "caracoles", edificios circulares y amplios con gran cantidad de tiendas en su interior construidos en barrios capitalinos de clase media como Ñuñoa y Providencia⁷⁹. A principios de los años ochenta fue el turno de los *malls*, construidos a imagen y semejanza de aquellos enormes establecimientos comerciales que se habían multiplicado en Estados Unidos en las décadas previas. El "Cosmocentro Apumanque" se inauguró en 1981, bajo la máxima de convertir la experiencia del consumo en un agradable paseo social⁸⁰. Al año siguiente se inauguró el "Parque Arauco", aún más grande que el anterior⁸¹. Al mismo tiempo, el comercio establecido comenzó a extender las horas de atención, incluyendo los días sábados, para maximizar las ganancias y hacer posible la experiencia del consumo a quienes por razones laborales no podían destinarle mucho tiempo⁸².

La disponibilidad de bienes importados, las tarjetas de crédito, la publicidad y los nuevos espacios de consumo apuntaban con fuerza a un elemento especialmente importante tanto para las clases medias como para el propio régimen. El consumo significaba acceder a una modernidad global, tanto por emulación de las prácticas en el "mundo desarrollado" como por

⁷⁸ "Del boliche al hipermercado", *Ercilla*, No. 2149, semana del 6 al 12 de octubre de 1976, 22-25.

⁷⁹ "Caracol, caracol, saca...", *Hoy*, Año II, No. 56, 30 de agosto al 5 de septiembre de 1978, 55-57.

⁸⁰ "El cóndor climatizado", *Hoy*, No. 228, 2 al 8 de diciembre de 1981, 57.

⁸¹ Para una completa historia de los *malls* en Chile, véase Rosa Liliana de Simone, *Metamall: espacio urbano y consumo en la ciudad neoliberal chilena* (Santiago: Colección Estudios Urbanos UC - RIL Editores, 2015). En las décadas siguientes los *malls* se multiplicarían por diferentes zonas de Santiago y otras ciudades chilenas, apuntando no solamente a grupos relativamente acomodados sino también a sectores medios y populares.

⁸² "Ir de compras sin agobio", *Qué Pasa*, No. 533, semana del 25 de julio al 1ero de agosto de 1981, 11. La reacción ante estas medidas, muchas veces fomentadas por autoridades comunales, pareció ser bien recibida por quienes en los sectores medios buscaban participar de mejor forma en el "boom", o al menos así se deduce de la carta al director enviada a *Qué Pasa* por una entusiasta oficinista: "¡Al fin, al fin, al fin! Alguien que comprenda mi problema personal y represente el caso de tantas personas como yo, oficinistas que viven y trabajan en Providencia, y que no tenemos tiempo para comprar, porque en esta bendita comuna el comercio cierra de 1 a 4 de la tarde, y en las mañanas muchos abren después de las diez. Que me entiendan los dueños de tiendas. Yo no reclamo tiempo para vitrinear (sic) por gusto solamente, sino que para poder mirar, elegir y comparar precios antes de comprar. ¿O no es ésta la política económica de la que tanto se habla?". Y agregaba: "Y no es que esté en una oficina de 'negreros'. Es el horario normal de mucha gente que es casada, madre de familia y que tiene que trabajar como yo". "Horario de comercio" (carta al director), *Qué Pasa*, No. 535, semana del 9 al 15 de julio de 1981, 4.

los cambios que los nuevos bienes generaban en la vida cotidiana de las personas. De allí que fueran común expresiones como las de Miguel Meyer, gerente de una casa comercial de la capital, cuando al referirse a la venta de electrodomésticos señalara: "Chile estaba atrasado en 10 a 15 años con respecto a los adelantos existentes en cualquier hogar medio europeo. Hoy si nos aventajan en 3 o 4 años es mucho"⁸³. Era la propia temporalidad del desarrollo chileno la que parecía estar acelerándose.

Por supuesto, esta relación entre modernidad, desarrollo y clase media no era nueva. En la propia noción histórica de clase media se encuentra implícita la promesa del progreso moderno e ilustrado, y ese valor político y cultural fue utilizado para avanzar posiciones al interior de sus respectivas sociedades. Así fue también en el caso chileno a lo largo del siglo XX, desde la elaboración de un proyecto cultural democrático, nacionalista y antioligárquico en las primeras décadas de la centuria hasta la implementación de un modelo estatal industrializador dentro del cual la noción y los grupos de clase media florecieron. La novedad del "boom" de las importaciones y el consumo a este respecto fue que la sociedad chilena, y en particular aquellos identificados con el ideal de clase media, fueron invitados a acceder materialmente y a través del mercado a una modernidad expresada en objetos representativos de lo más avanzado de la tecnología de ese momento. En otras palabras, se trasladaba el polo modernizador mesocrático desde el Estado al mercado. La promesa de la modernidad se encarnaba ahora más en el consumidor que en el ciudadano, y más en la racionalidad económica que en la deliberación política. El espacio para ejercer la "libertad" era ahora el mercado, que además ofrecía una ventana al mundo desarrollado antes esquiva para las mayorías. El régimen y sus ideólogos

⁸³ "Electrodomésticos: La gran tentación", *Qué Pasa*, No. 441, semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 1979, 45

fueron explícitos al presentar a la "economía social de mercado" como la única vía posible para superar el "atraso" infringido al país por las nociones estatistas previas.

Las transformaciones económicas inducidas por la dictadura crearon nuevos espacios para consolidar la asociación entre desarrollo, modernidad global y consumo. La Feria Internacional de Santiago (FISA), celebrada anualmente desde 1963, fue poco a poco transformando su carácter de exhibición agrícola a una muestra de productos importados de última generación y a espacio de negocios para empresarios chilenos y extranjeros, proceso que se aceleraría en los años del "boom". En la edición de 1977, por ejemplo, estuvieron representados 23 países con productos cuyo valor total superaba los 40 millones de dólares⁸⁴. Los visitantes de la FISA, destacaba la prensa, era capaz ahora de adquirir muchos de esos bienes. En 1980, un entusiasta reportero escribía: "Si no hace diez años que mirábamos con ojos largos los miles de artículos exhibidos y no teníamos ni detergentes en la casa. Hoy, en cambio, el público se regodea entre los sacacorchos con computadora y los rascadores de espalda de circuitos integrados"⁸⁵.

También la televisión aportó a esta relación. La necesidad de autofinanciamiento de los canales universitarios, además de la señal estatal, inundó de publicidad programas y noticieros. *Sábados Gigantes*, conducido por Mario Kreutzberger (más conocido como "Don Francisco") fue el arquetipo de programa de variedades que emulaba el formato norteamericano, y que entre sus muchas secciones, incluía espacios dedicados a los nuevos productos de consumo. "Don Francisco", que decía representar al "chileno medio", fue también el impulsor de la "Teletón", una extensa jornada televisiva iniciada en 1978 dedicada a recaudar fondos para los discapacitados. Las empresas fueron invitadas a colaborar a cambio de exhibir sus productos en

⁸⁴ "Los millones de la Fisa", *Qué Pasa*, No. 340, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1977, 46-51

⁸⁵ ¿De qué se preocupa si está la Fisa?, *Ercilla*, No. 2.363, 12 al 18 de noviembre de 1980, 38

televisión y asociarlas a la causa. El consumo, de esa manera, adquirió también un estatuto moral y filantrópico, dado que a través de la preferencia por ciertas marcas se estaba ayudando a quienes más lo necesitaban⁸⁶.

La celebración de la promesa modernizadora del consumo fue también tema recurrente en la prensa oficialista. Más aún, durante los años del "boom" la prensa sirvió como caja de resonancia para un esfuerzo estatal de "pedagogía del consumo", es decir, de socialización de prácticas, razonamientos y oportunidades asociadas al nuevo modelo. No bastaba con transformar el mercado local a través de la importación masiva de nuevos productos. También era fundamental crear un nuevo consumidor, apto para ejercer su libertad de manera responsable e informada. Así, por ejemplo, *La Tercera de la Hora* ilustraba a sus lectores sobre las características del "consumidor ideal": aquel que "se defendía a sí mismo sin estar entregado al paternalismo estatal", y que, para ello, realiza estudios de mercado con toda la información disponible, buscando las oportunidades más ventajosas para su bolsillo⁸⁷. Por su parte, *El Mercurio* se lamentaba de las dificultades para "vencer la inercia" entre comerciantes y consumidores, y agregaba: "nos habíamos acostumbrado durante más de quince años a que el papá Estado nos fijara precios, nos cerrara las puertas de las importaciones"⁸⁸. Otros artículos llamaban a desarrollar hábitos de ahorro entre los chilenos en tanto señal de "educación", o a usar de mejor modo los créditos disponibles dependiendo del bien a adquirir, entre muchos otros temas⁸⁹. En la prensa, además, aparecieron con regularidad columnas de especialistas que

⁸⁶ Sergio Durán Escobar, *Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet* (Santiago: LOM Ediciones, 2012), cap. 2. Según estudios de mercado de 1980, la popularidad de "Don Francisco" era arrolladora, especialmente en el GSE medio. Un 73,3% de los encuestados de ese grupo lo mencionó entre sus primeras tres preferencias. *Índice Gallup de opinión y mercado*, noviembre de 1980, 14-15.

⁸⁷ "Chilenos en la vitrina", *La Tercera*, 17 de abril de 1977, 4 y 6.

⁸⁸ "Lo importado, barrio por barrio", *El Mercurio*, 24 de julio de 1977, 3.

⁸⁹ "Bancos y financieras: Préstamos para lo que usted quiera comprar", *Qué Pasa*, No. 377, 6 al 12 de julio de 1978, 34-35; "Comprando 'al contado'", *Ercilla*, No. 2237, semana del 14 al 20 de junio de 1978, 25-27; "Las mil y una

recomendaban ajustar los patrones de consumo a la nueva realidad, incluso haciendo uso de un fuerte tono normativo. El profesor de economía de la Universidad de Chile, N.D. Nowak, le enrostraba a las "dueñas de casa" su incapacidad por buscar los precios más bajos para el abastecimiento de bienes básicos, algo que supuestamente era común en los "países desarrollados", "y posiblemente sea por ello que se les llama 'desarrollados'", agregaba⁹⁰.

El gobierno participó activamente de estos esfuerzos. Por una parte, DIRINCO, caracterizada en la prensa como una "gestapo comercial", sufrió una fuerte reducción en su personal y fue transformada en una agencia de carácter informativa, "para que el público comience a orientarse y a aprender a funcionar dentro de un sistema de mercado libre"⁹¹. Por otro lado, los voceros del área económica, junto con celebrar lo que consideraban eran muestras del éxito del modelo, no cesaban de prometer un futuro de desarrollo y bienestar dado por la expansión del consumo. José Piñera, Ministro del Trabajo, señaló en agosto de 1980 ante miles de dirigentes gremiales que en 1990 Chile sería un país "desarrollado", con millones de autos circulando por las calles y la mayoría de los hogares con televisión a color. Miguel Kast, otro de los economistas neoliberales, agregó poco después que hacia el final de la década de los ochenta "uno de cada siete chilenos tendrá auto; uno de cada cinco tendrá televisor y otros artefactos modernos; uno de cada siete tendrá teléfono; el ahorro alcanzará a las mayorías, que también podrán permitirse un aumento importante en sus gastos de recreación"⁹². El llamado "milagro"

tasas del crédito", *Qué Pasa*, No. 406, semana del 25 al 31 de enero de 1979, 21-23; "El ahorro es educación", *Qué Pasa*, No. 363, semana del 30 de marzo al 5 de abril de 1978, 20-22.

⁹⁰ N.D. Nowak, "La consumidora manda", *Ercilla*, No. 2211, semana del 14 al 20 de diciembre de 1977, 34

⁹¹ "Dirinco cambia rostro: competencia libre pero sana", *Qué Pasa*, No. 375, semana del 22 al 28 de julio de 1978, 18. En 1984, DIRINCO empezó a editar la "Revista del Consumidor" con fines explícitamente pedagógicos. *Memoria de Gobierno 1973-1990*, 2. Económico Productivo, 124; De modo paradigmático, en 1990 el primer gobierno democrático rebautizaría a DIRINCO como "Servicio Nacional del Consumidor" (SERNAC). Henríquez Vásquez, *En "Estado Sólido"*, 243.

⁹² Cit. en Fuentes, *El fraude*, 49. Algunos años después, en 1987, Joaquín Lavín, otro "Chicago Boy", publicaría un libro que resumiría de buena manera la celebración neoliberal del consumo y las posibilidades que brindaba el mercado. Para Lavín, el "boom" sería parte fundamental de la "revolución silenciosa", como titulaba su texto, ya que no sólo habría mejorado las condiciones materiales de los chilenos, sino que también habría transformado la práctica

económico verificado desde 1976-1977, y pregonado con entusiasmo por los ideólogos del régimen, tenía un correlato material directo: la promesa de la abundancia de bienes materiales antes inalcanzables para las mayorías.

Incluso Pinochet buscó capitalizar en favor suyo la expansión del consumo. En 1979, y al parecer sin conocimiento previo de sus asesores, anunció una futura renegociación del "Estatuto Automotriz", con el objeto de rebajar a un 10% el arancel a los automóviles de menos de 2.500 dólares. El objetivo era favorecer la importación de los "autos populares" y de esa manera, como señaló Pinochet, "hacer realidad el sueño de miles de chilenos del sector medio, de tener acceso a un automóvil"⁹³.

Tanto por acción directa del régimen como por las consecuencias materiales y culturales del "boom", el consumo fue un elemento central en la legitimación del régimen en la segunda mitad de la década de los setenta⁹⁴. Ello no reemplazó la retórica y estética nacionalista, conservadora y anticomunista de los primeros años, sino más bien vino a complementar aquella legitimidad política con una económica, que encerraba la promesa de una modernización global, ascendente e irreversible⁹⁵. De allí que, al menos por esos años, fuera tan difícil formular una crítica persuasiva a la explosión del consumo. En gran medida, las críticas de las organizaciones mesocráticas a las reformas neoliberales quedaron eclipsadas ante el éxito aparente de la política aperturista. De hecho, algunos de estos grupos intentaron adaptarse a las nuevas condiciones. El

del consumo en un agradable evento social y familiar. Señalaba Lavín en su libro: "Especialmente en las tardes, y a toda hora los fines de semana, la familia entera, con el matrimonio y los hijos, va de paseo al supermercado. Es probable que a la entrada del establecimiento una banda de músicos entretenga a los niños, los que jugarán también aparatos eléctricos o tendrán la posibilidad de darle la mano al ratón Mickey, al Pato Donald o a otros personajes que se pasean por entre las góndolas. Entre tanto, el padre podrá probar los licores, papas fritas y numerosos otros productos que simpáticas jóvenes le ofrecerán en los stands de degustación" Joaquín Lavín, *Chile, revolución silenciosa* (Santiago: Zig-Zag, 1987), 116.

⁹³ "Los autos populares", *Qué Pasa*, No. 407, 1ero al 7 de febrero de 1979, 6.

⁹⁴ José Joaquín Brunner, *Autoritarismo y cultura en Chile* (Santiago: FLACSO, Material de discusión No. 44, 1983), 6-7.

⁹⁵ De allí que recientemente se haya caracterizado a la dictadura chilena como "nacional-globalista". Riquelme, *Rojo atardecer*.

Colegio de Ingenieros, por ejemplo, firmó un convenio con la financiera FINTESA para, junto a empresas importadoras y comercializadoras, ofrecer productos de línea blanca, electrodoméstica y automotriz a los ingenieros en condiciones favorables⁹⁶. Todo ello es evidencia de algo ya advertido por el cientista político Andy Baker al señalar que las distintas reformas neoliberales - agrupadas en lo que en los años noventa se conocería como el "consenso de Washington"- tienen efectos dispares en la población, por lo que no pueden ser analizadas como un bloque homogéneo. De esa manera, ha sido común en América Latina que las medidas que implican privatización de servicios públicos hayan sido mucho más resistidas que aquellas que posibilitan el acceso a bienes importados baratos, si bien ambas pertenecen al mismo proyecto económico⁹⁷.

Las organizaciones de clase media experimentaron esta paradoja en los años del "boom" de las importaciones. Por una parte, como ya señalé, resistieron las medidas más radicales del "shock" neoliberal, sobre todo cuando éstas amenazaban sus facultades legales o el status social de sus miembros. Por otro lado, más allá de ciertos acomodos, la expansión del consumo no generó críticas públicas relevantes, y dada la pasividad con que la afrontaron es posible inferir grados importantes de aceptación. Este equilibrio se mantuvo a su vez gracias a la adhesión irrestricta a la dictadura en un plano político, actualizada una y otra vez en expresiones públicas de apoyo. La profundización de las reformas neoliberales y los cambios legales introducidos por la dictadura, sin embargo, harían visibles las primeras grietas en la base social mesocrática del régimen.

⁹⁶ *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, Año XII, No. 81, julio de 1979, 26.

⁹⁷ Andy Baker, *The Market and the Masses in Latin America: Policy Reform and Consumption in Liberalizing Economies* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009).

4.- "Modernizaciones" e "institucionalización": la clausura del "Chile mesocrático"

Las reformas neoliberales no se detuvieron con el "shock" y el "boom" de las importaciones. Hacia finales de la década de los setenta, el equipo económico -con la anuencia de Pinochet y sus asesores más cercanos- se embarcó en la profundización del modelo a través de las llamadas "modernizaciones". Este conjunto de medidas tenían como objetivo común la privatización de servicios y derechos sociales estatales bajo la premisa que sometidas a las leyes de mercado alcanzarían mayor eficiencia, cobertura y justicia. La "libertad" prometida por los ideólogos neoliberales, de ese modo, podría ser ejercida plenamente al cercenar del Estado funciones sociales básicas y traspasarlas al ámbito privado, donde a través de la competencia y el uso eficiente de recursos podría salvaguardarse el interés particular en toda su plenitud.

La profundización del neoliberalismo implicó una reestructuración radical de los mecanismos de asignación y distribución de recursos, y en la relación entre Estado y sociedad civil. De allí que las "modernizaciones" de estos años se concentraran en aquellas áreas críticas en la definición de derechos sociales y ciudadanía: educación, trabajo, salud y seguridad social. En efecto, a lo largo del siglo XX, el Estado había construido un complejo sistema legal e institucional que aseguraba a una proporción creciente de población acceso a servicios básicos, algo que benefició particularmente a la clase media. Los liceos fiscales, las universidades públicas, las prerrogativas de la legislación laboral, el sistema de salud y las cajas de previsión, entre otras cosas, formaron parte integral de la base material mesocrática, en la cual además podían participar y moldear gracias al acceso a ciertos espacios de decisión estatal. Las "modernizaciones" embistieron deliberadamente todo ese edificio social. La educación pública primaria y secundaria pasó a la tutela de las municipalidades, mientras las universidades públicas eran fraccionadas y controladas, dando espacio para instituciones privadas. La salud pública, por

su parte, sólo quedó limitada a los más pobres, creando para otros sectores sociales las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) de control privado. José Piñera, nombrado Ministro del Trabajo en 1978, asumió la doble tarea de reformar la legislación sobre el trabajo a través del "Plan Laboral" de 1979, y el sistema de pensiones con la creación de las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP), basado en la capitalización individual y en el control privado de esos recursos⁹⁸.

Al mismo tiempo, Pinochet decidió acometer un proceso de "institucionalización" del régimen, que involucraba la dictación de una nueva Constitución y un eventual itinerario para una transición a un régimen pos-autoritario. El proceso, anunciado en Chacarillas en 1977, sólo adquirió forma concreta con la redacción y aprobación vía plebiscito de la Constitución de 1980. La democracia delineada allí estuvo acompañada de una serie de adjetivos -"protegida", "tecnificada", "autoritaria"- para marcar la diferencia con el régimen político pre-1973. El orden político en construcción estaría diseñado en función de las necesidades de reproducción del neoliberalismo. El principio de subsidiariedad del Estado, por ejemplo, alcanzaría rango constitucional, así como también las "libertades" individuales que ni el Estado ni ninguna organización social podía amagar. Al mismo tiempo, los espacios de deliberación del futuro orden democrático se limitarían estrictamente a tareas de administración, y no a los rasgos centrales del modelo. De allí que se excluyera sin discusión del futuro orden a la izquierda marxista, mientras otras fuerzas políticas serían eventualmente incorporadas de manera subordinada a un Congreso fuertemente controlado.

La profundización del neoliberalismo y la perspectiva de un orden político-institucional personalista y funcional a ese modelo agudizaron las tensiones al interior del régimen con quienes aún defendían el ideario militar "ibañista". En julio de 1978 el conflicto se planteó

⁹⁸ Huneeus, *El régimen de Pinochet*, cap. 9; Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, 300 y ss.

abiertamente a raíz de la "consulta" celebrada en enero de ese año. Gustavo Leigh, ya por entonces en una posición minoritaria al interior del gobierno, fue desplazado de la Junta y reemplazado por Fernando Matthei, luego de que la mayoría de los generales de la Fuerza Aérea renunciaran en solidaridad⁹⁹.

Un año después, en una larga y polémica entrevista publicada como libro, Leigh relató cómo desde la implementación del "shock", sus funciones ejecutivas habían sido recortadas hasta perder la capacidad de incidir en las decisiones de Estado. En ese sentido, más que generador de políticas, pasó a ser receptor de angustias, dado que -según dijo- mantuvo su despacho abierto a grupos organizados de la sociedad civil, especialmente aquellos de clase media, para escuchar sus quejas. De hecho, para Leigh, el gran error del régimen había sido "el abandono de nuestra valiosa clase media", que implicaba por definición un alejamiento de "los postulados que inspiraron el movimiento del 11 de septiembre". La "sufrida clase media", agregaba, "siempre ha sido la válvula que ha regulado la vida ciudadana en Chile", por lo resultaba desconcertante comprobar que era ese sector "el que esté pagando todas las consecuencias, habidas y por haber, en lo social y en lo económico"¹⁰⁰.

El triunfo político y económico del neoliberalismo afectó en al menos cuatro maneras a las organizaciones de clase media. En primer lugar, las "modernizaciones" atentaron contra la base material de muchos de estos grupos al someter al libre juego del mercado lo que antes estaba regulado o controlado por el Estado. En segundo término, la privatización de ciertas áreas claves del Estado remecieron el universo simbólico de algunos grupos de clase media, sobre

⁹⁹ Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 259–71.

¹⁰⁰ Florencia Varas, *Gustavo Leigh. El General disidente* (Santiago: Ediciones Aconcagua, 1979), 28, 34, 46 y 75. Por cierto, el propio Leigh se definía abiertamente como un miembro de la clase media: "Me veo como un chileno cualquiera, un ciudadano de clase media que asumió la carrera de las armas por vocación y que tuvo la suerte o la desgracia de llegar al tope de su Institución; que cumplió todo el escalafón religiosamente; que tuvo que tomar una decisión y le cayó a él la responsabilidad por el azar de la vida y el destino tomarla. Nunca me he arrepentido de ella, ni creo que me vaya a arrepentir mientras viva y por lo tanto soy un chileno cualquiera que las circunstancias del destino lo llevaron a tomar decisiones que afectaron y van a afectar a gran parte de la población de Chile". Ibid, 135.

todos aquellos de mayor sensibilidad republicana. En tercer lugar, los espacios de negociación se cerraron abruptamente, en consonancia con el nuevo concepto de participación esgrimido por el régimen. Uno de los principios fundamentales en la aplicación de la receta neoliberal era su carácter de no negociables, en la medida en que se justificaban como medidas que emanaban de un conocimiento económico científico e imparcial, y por lo tanto toda intervención externa amenazaría con desnaturalizar los propósitos buscados. Por último, los cambios legales introducidos por el régimen atentaron contra las prerrogativas que estos grupos habían gozado en las décadas previas. En los casos más extremos, como el de los colegios profesionales, la dictadura borró de un plumazo el diseño jurídico que sustentaba a estas organizaciones.

Los efectos de las "modernizaciones" no tardaron en hacerse sentir. Si bien el "Plan Laboral" de José Piñera afectó principalmente al mundo sindical al cambiar de forma radical la relación entre capital y trabajo, transformándolas en un contrato entre privados sin injerencia estatal, varias de sus disposiciones tuvieron consecuencias también en organizaciones mesocráticas. El objetivo central del "Plan" fue ajustar las relaciones laborales a los principios de las reformas neoliberales, es decir, tender hacia la regulación por mecanismos de mercado y al debilitamiento de grupos de presión. Además se buscó socializar entre los trabajadores el nuevo ideal de acción reivindicativa bajo el neoliberalismo: despolitizada, individualista y estrictamente gremialista. Para lograr todo ello, en la serie de decretos-ley de 1978 y 1979 que conformaban el "Plan" se recortaron las atribuciones de los sindicatos bajo diferentes mecanismos: prohibición de negociación colectiva por rama, limitándola sólo a la unidad productiva; libre afiliación y la posibilidad de más de un sindicato por empresa; creación de obstáculos en la práctica insalvables

a la huelga legal; instauración de obstáculos al financiamiento de los sindicatos; y disminución de atribuciones de los dirigentes, entre otras medidas¹⁰¹.

Dado el estatuto legal con el que funcionaban, uno de los grupos mesocráticos que más se vio afectado con las disposiciones del "Plan Laboral" fue el de los camioneros. Por una parte, liberó a los camioneros de la obligatoriedad de pertenecer a un sindicato para ejercer y, por lo mismo, se eliminaron las cotizaciones obligatorias y automáticas de los asociados. Todo ello afectó gravemente la ya desmedrada situación económica de la Confederación. Para Vilarín, aquella disposición era "cruel" y "contra los hombres agremiados de Chile", ya que las organizaciones gremiales no podrían ni siquiera hacer frente a compromisos ya pactados¹⁰². Y así fue. La Asociación de Santiago se vio obligada a reducir personal y, luego, desprenderse de dos propiedades: un mausoleo en el Cementerio General y un predio de vacaciones en la cordillera. La situación mermó el entusiasmo de los asociados. En marzo de 1979 sólo 42 socios del sindicato mantenían sus cuotas al día¹⁰³. Más aún, Vilarín tuvo que responder con algunas horas de cárcel ante la insolvencia de la tesorería de la Confederación, y luego se vio obligado a vender uno de sus camiones para hacer frente a las deudas acumuladas¹⁰⁴.

Por otro lado, una disposición de 1979 imposibilitó a los camioneros seguir agrupándose en "sindicatos", obligándolos a cambiar su nombre al de "asociaciones". *El Camionero* rechazó con vehemencia la medida, ante lo que interpretaba era un ofensa injustificada a las fuentes identitarias del gremio. "No es más poderoso, más fuerte ni más importante ningún Gobierno,

¹⁰¹ Rolando Álvarez, "El plan laboral y la negociación colectiva: ¿origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985", *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, n° 35-36 (2012): 107-37.

¹⁰² "El boicot y decreto ley que debe modificarse", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. No. 40, s/f, c1978, 4.

¹⁰³ "Asamblea General de Socios", 30 de noviembre de 1978, 359-363; y "Asamblea General de Socios", 28 de marzo de 1979, 370, Actas del Directorio del Sindicato General Profesional de Dueños de Camiones de Santiago, Vol. 1969-1980, ASIPRODUCAM. Entrevista a Moisés Pastrián, 22 de septiembre de 2016.

¹⁰⁴ "Más allá del control", *Hoy*, Año I, No. 39, 22 al 28 de febrero de 1978

tratando de minimizar las organizaciones sindicales, o prohibiendo que los trabajadores independientes, como el caso de los camioneros, usen el nombre de Sindicato"¹⁰⁵.

Ante el "Plan Laboral" la dirigencia camionera endureció el tono de su protesta, llegando incluso a ser desafiante. Julio Lagos Cosgrove, director de la Confederación, calificó las medidas adoptadas por el gobierno de "legislación clasista y discriminadora" en entrevista a un periódico de la capital¹⁰⁶. Vilarín fue más allá. Sin declararse a sí mismo "opositor" al régimen, prefirió el más ambiguo "discrepante"¹⁰⁷. Tal era el grado de frustración que incluso tuvo que reformular la épica camionera y equiparar en algunos aspectos a la Unidad Popular con la dictadura. Del peligro de la "extrema izquierda implacable", señaló Vilarín, habían caído ahora en las garras de la "extrema derecha insaciable". "A los camioneros -agregó- como a muchos chilenos, [el problema] nos llegó al estómago, y alguien debe entender que un chileno prefiere morir de pie luchando por lo que cree justo y no de inanición", finalizando con una nada sutil amenaza: "¿Debemos organizar otra vez los comandos multigremiales? Puede que sean necesarios ¿Estoy infringiendo con este comentario alguna disposición legal? Lo lamentaría sinceramente, pero la verdad del drama que vive nuestro gremio debo decirla aunque duela y moleste".¹⁰⁸

En 1979, Vilarín y los camioneros dieron cuenta de modo explícito del nivel de amargura y frustración provocado por la política económica del régimen y la insensibilidad de éste ante sus reclamos. Junto a los taxistas de Juan Jara, la Confederación de Dueños de Camiones decidió restarse de las celebraciones oficiales del 11 de septiembre en el Edificio Diego Portales. En su lugar, organizaron una sencilla ceremonia en Leyda, cerca del puerto de San Antonio, el mismo

¹⁰⁵ "Plan Laboral", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. No. 42, s/f, c1979, 3

¹⁰⁶ Entrevista reproducida en "Acta Constitucional No. 3", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. No. 43, s/f, c1979, 25.

¹⁰⁷ "Soy discrepante y lo reitero", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. No. 44, s/f, c1979, 11.

¹⁰⁸ "Comandos multigremiales", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*. No. 44, s/f, c1979, 21-22.

lugar donde en julio de 1973 plantaron un nutrido campamento de camioneros en paro, y también donde cayera el "mártir" Mario Montuscki. Allí, unas 600 personas se reunieron para escuchar a un frustrado Vilarín decir "no tenemos nada que celebrar". Berta Molina, representante de las mujeres camioneras, fue más explícita en su rechazo al gobierno al acusar a la política económica de atentar contra sus familias y sus formas de vida¹⁰⁹.

El acto adquirió cierta notoriedad gracias algunos de sus invitados. Primero, hicieron uso de la palabra algunos dirigentes sindicales del llamado "grupo de los 10", quienes ya eran identificados por el régimen como opositores. Luego, casi al finalizar el acto, llegó Gustavo Leigh, junto a un grupo de ex-militares. Ante la insistencia de los presentes, Leigh dirigió algunas palabras en honor a la épica camionera y el recuerdo de Mario Montuscki, para luego agregar: "Llegamos con el convencimiento más íntimo de que íbamos a marchar todos de la mano, pero no para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres"¹¹⁰. Es difícil imaginar otra expresión de descontento más radical dentro de los estrechos marcos de lo permitido en ese momento por parte de un gremio tan afín al régimen como el camionero.

Las "modernizaciones" de finales de los años setenta afectaron a grupos mesocráticos también en otros aspectos. Para algunos, si bien las reformas no provocaron alteraciones en su orden institucional, sí impactaron en el universo simbólico en que se sostenía parte de su identidad grupal. La Reforma de la Educación Superior -que redujo las carreras "profesionales" y sentó las bases para la expansión de la educación superior privada- causó resquemor en la Gran Logia. Para la masonería, la educación pública y laica había sido una señal de identidad y una reivindicación histórica desde el siglo XIX, para convertirse en un logro consolidado durante las

¹⁰⁹ "Leyda: buen lugar para conmemorar", *El Camionero. Órgano oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, No. 42, s/f, c1979, 21.

¹¹⁰ "De nuevo en Leyda", *Hoy*, s/n, 19 al 25 de septiembre de 1979, 14-15.

décadas centrales del siglo XX, muchas veces en abierta polémica con la Iglesia Católica¹¹¹. Ante el anuncio de las reformas, y posiblemente presionado por las bases masónicas, González Contesse dirigió una carta a Pinochet en la que defendió el rol rector de la Universidad de Chile frente a la Universidad Católica, en tanto expresión de la misión republicana por educar a la ciudadanía. Al mismo tiempo, pidió detener el proceso de "regionalización" de las universidades públicas para estudiar en detalle esa reforma, y no atentar contra el bien común¹¹². Este tipo de llamados era complementado por otros miembros de la Orden. Julio Durán, presidente del Colegio de Abogados y también masón, señaló que "la universidad es un cobijo a los anhelos de una pujante clase media que desea que sus hijos vayan adquiriendo más conocimientos para ser más eficientes en el estudio de una determinada ciencia, arte o técnica", por lo que no se explicaba el sentido de la reforma universitaria ni del estímulo a la educación privada¹¹³. Las gestiones de la masonería, por cierto, no tuvieron efecto alguno.

La consolidación del neoliberalismo y el autoritarismo, por otro lado, sí tuvo efectos directos en la forma en que la mayoría de las organizaciones mesocráticas se relacionaban con el Estado, creando interferencias y frustraciones que llevarían a un virtual quiebre con régimen. En gran medida, ello se debió al nuevo concepto de "participación" que comenzó a aplicarse por esos años. Como ha planteado Verónica Valdivia, el triunfo del neoliberalismo no se tradujo en la renuncia completa a la dimensión social participativa que había animado en un principio a los

¹¹¹ De hecho, en 1978, la masonería publicó un inserto preocupada ante lo que parecía ser la reinstalación de la educación religiosa en establecimientos fiscales. "Francmasonería chilena y educación religiosa", *La Tercera de la Hora*, 11 de junio de 1978, 17

¹¹² "El Gran Maestro se dirige al Jefe de Estado sobre sus directivas acerca de la Educación", *Revista Masónica de Chile*, Año LVI, Nos. 5-6, julio-agosto de 1979, 8-10. La carta, sin embargo, pareció no haber sido suficiente. Algunos años después, en 1983, un importante masón se dirigió al entonces Gran Maestro Óscar Pereira para quejarse sobre la "increíble impasibilidad que el gobierno de la Orden ha guardado frente a la destrucción de todo lo que, en casi medio siglo, se logró, democráticamente, en nuestro país, en materia de educación, (...) logros que no fueron ajenos a los afanes de destacados miembros de la Orden". Carta de Eduardo Phillips Müller a Óscar Pereira Henríquez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 19 de octubre de 1983. Caja s/n, Correspondencia G.:M.:, 1983, AGLCh.

¹¹³ "¿Quiénes son los que se niegan a la modernización?" (Entrevista a Julio Durán), *Las Últimas Noticias*, 8 de febrero de 1981, 18-19.

oficiales "ibañistas". Esta vez, sin embargo, el espacio abierto a organizaciones sociales no sería el Estado central sino el municipio, la unidad administrativa de nivel local. Allí no sólo se crearon instancias de inclusión de grupos sociales, sino también se administraron gran parte de los servicios entregados por el Estado a los sectores más pobres, como educación, salud, cultura y deporte. Los grupos políticos de derecha que apoyaban y participaban del régimen - particularmente los "gremialistas" de Jaime Guzmán- encontraron ahí un espacio de poder desde el cual penetrar el mundo popular y expandir sus bases de apoyo, algo que se hará mucho más evidente en los años ochenta¹¹⁴.

Los grupos de clase media no tenían ni la estructura organizativa, ni la experiencia histórica, ni las facultades legales para participar en instancias municipales, por lo que en la práctica este proceso significó para ellos la clausura de aquellos canales de participación y negociación con el Estado propios del "Chile mesocrático". Lejos de haber sido una reacción espontánea de las autoridades de gobierno, fue la consecuencia lógica de la implementación de una economía de mercado, tal como sus principales apologetas se encargaban de dejarlo en claro. El abogado Hermógenes Pérez de Arce, por ejemplo, anunciaba a viva voz el carácter obsoleto y dañino de los gremios, tanto porque bajo el régimen la "libertad de trabajo" estaba asegurada, como también por su carácter de inaceptable "grupo de presión", contrario al bien común¹¹⁵.

Los primeros grupos en sufrir las consecuencias fueron aquellos que quedaron en peor posición luego del "shock" neoliberal. Ya en 1975 Tucapel Jiménez y Federico Mujica, líderes

¹¹⁴ Verónica Valdivia Ortiz de Zárte, "Al rescate del Municipio. La síntesis ideológica de la dictadura pinochetista", *Observatorio Latinoamericano* 8. Dossier Chile (2011); Verónica Valdivia Ortiz de Zárte, Rolando Álvarez, y Karen Donoso, *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista* (Santiago: LOM Ediciones, 2012). Sobre el gremialismo -luego convertido en partido con el nombre de Unión Demócrata Independiente (UDI)- y su expansión en los años ochenta desde los municipios, véase Víctor Muñoz Tamayo, *Historia de la UDI: generaciones y cultura políticas (1973-2013)* (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2016).

¹¹⁵ Hermógenes Pérez de Arce, "Momentos difíciles para los gremios", *Qué Pasa*, No. 315, semana del 5 de mayo de 1977, 21.

de la ANEF y la CEPCh respectivamente, se quejaban de la "sordera del gobierno" y de la inutilidad de las negociaciones, algo que no varió en los años siguientes¹¹⁶. A ellos se le sumaron gremios tradicionalmente afines al gobierno como los taxistas y los microbuseros, según lo expresaron en sus revistas gremiales¹¹⁷. Cumsille, por su parte, endureció las críticas contra el equipo económico del gobierno, acusándolos de engañar a los gobernantes con medidas que no podían sino generar daño al país¹¹⁸. Además, insistió sin cansancio desde su tribuna en *La Tercera de la Hora* en la necesidad de reabrir y fortalecer mecanismos de participación gremial en el gobierno, ya sea a través de una "Cámara Legislativa" o de reuniones periódicas con las autoridades como única manera de asegurar la implementación de políticas justas y colaborar de buena forma con los objetivos "patrióticos" del gobierno¹¹⁹. La respuesta del gobierno ante estos casos fue sintomática del contexto que se vivía. Tucapel Jiménez fue despedido de su puesto de contador de DIRINCO en 1980, cargo en el cual se había desempeñado por 28 años. Como muchos ex-empleados fiscales, no tuvo otra alternativa que manejar un taxi para subsistir¹²⁰. Por otro lado, Juan Jara, líder de los taxistas agrupados en FENATACH, dirigió una protesta en el centro de Santiago, y llamó a "rescatar al gobierno de las manos de un grupo privilegiado". Como consecuencia, fue arrestado y encarado reo por injurias a las autoridades¹²¹. Por último, el Servicio de Impuestos Internos (SII) acusó a Cumsille y su esposa de fraude al fisco, pasando

¹¹⁶ "Plataforma gremial. Encuentro con franqueza", *Ercilla*, No. 2091, semana del 27 de agosto al 2 de septiembre de 1975, 9-10; Candina, *Clase media, Estado y sacrificio*, 159.

¹¹⁷ "Llegó la hora de la unidad", *El Taxista. Órgano Oficial de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis*, No. 1, 1979, 1; "Editorial", *Sobre Ruedas. Órgano oficial de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros*, No. 22, mayo de 1982, p. 2.

¹¹⁸ "La verdad ayuda a los gobernantes", *Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile*, No. 34, Año XI, septiembre de 1981, 13.

¹¹⁹ Rafael Cumsille, "La Cámara Legislativa", *La Tercera de la Hora*, 21 de julio de 1977, 6; Rafael Cumsille, "Felicidades... amigos de 'La Tercera'", *La Tercera de la Hora*, 7 de julio de 1977, 6; Rafael Cumsille, "¿Para qué sirven los gremios?", *La Tercera de la Hora*, 10 de febrero de 1977, 7.

¹²⁰ "Estoy viendo la luz al final del túnel" (Entrevista a Tucapel Jiménez), *Hoy*, s/n, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 1980, 18. En último término, las consecuencias de la actitud crítica de Jiménez le costarían la vida. Ver capítulo 5.

¹²¹ Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 219. "Colisión en el centro", *Hoy*, No. 143, 15 al 22 de abril de 1980, 11-13.

algunas horas de cárcel en 1981 y nuevamente en 1984. Para el comercio detallista era evidente que la investigación era en represalia por las críticas de Cumsille a la política económica del gobierno y, sobre todo, a la falta de participación de la sociedad civil en las decisiones más importantes¹²².

Las autoridades ministeriales no colaboraron en el mejoramiento de las relaciones entre gobierno y organizaciones mesocráticas. Ante la exigencia de algunos de estos grupos de mayor participación en el diseño de políticas públicas, las respuestas empezaron a dejar de lado la cortesía. En la Convención Médica Nacional celebrada en junio de 1977, el entonces Ministro de Salud Fernando Matthei hizo caso omiso de las quejas de los médicos en materia de remuneraciones y de reforma del sistema de salud pública. Sólo se limitó a decir que las medidas adoptadas hasta ese momento eran reflejo de la "política social de mercado que rige el campo económico", algo que tenía el apoyo completo del Presidente y que, por lo tanto, "no son negociables"¹²³. Sus sucesores siguieron la misma línea, lo que se reflejó en las dificultades que la directiva del Colegio Médico encontró para reunirse con las autoridades del ramo, e incluso de informarse con anticipación de las decisiones adoptadas por el gobierno. Aquella "política de hechos consumados", como la bautizaron, afectó también a otros profesionales. En 1978, el Colegio de Arquitectos pidió a las autoridades información sobre la nueva política de uso de suelos con el fin de estudiarla y aconsejar al gobierno. El Ministro de Vivienda Edmundo Ruiz se limitó a responder con un áspero "si quieren conocerla antes que los demás, se pueden levantar más temprano ese día para comprar el Diario Oficial"¹²⁴.

¹²² Cumsille Zapapa, *Recordando... mi vida*, 155–66; "Gremio del comercio protesta por actitud de Impuestos Internos", *Revista Oficial de la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Chile*, Año IX, No. 35, diciembre de 1981, 22-23.

¹²³ "El gobierno estudia con comprensión los problemas que aquejan al gobierno", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen XXVI, s/n, mayo-junio de 1977, 27.

¹²⁴ "La espera de la derogación", *Hoy*, Año II, No. 89, 14 al 20 de febrero de 1979, 12.

La clausura de los espacios de negociación y la reacción a ratos hostil del gobierno contra quienes se enorgullecían de su adhesión a los postulados del régimen llevó a que la mayoría de las organizaciones mesocráticas se definiera explícitamente contra aquellas reformas neoliberales que implicaban la contracción del Estado, la privatización de los servicios públicos y la eliminación de regulaciones en el sistema productivo. Hacia 1979, una revista de la capital era capaz de juntar en un sólo reportaje a los más destacados representantes mesocráticos para hacer un balance de los seis años de dictadura, con magros resultados. Si bien todos sin excepción destacaron el carácter "salvífico" del régimen ante la "tiranía marxista", el impacto del neoliberalismo era visto como un ataque directo a la base social que hizo posible el golpe. Así, por ejemplo, Eduardo Arriagada se lamentaba de la "falta de contenido social" de la política económica, sin participación de los organismos intermedios, mientras Cumsille y Vilarín reiteraban su rechazo al "sistema económico implacable e insensible"¹²⁵. Incluso convencidos apologetas de la dictadura como el abogado Pablo Rodríguez se sumaron al coro de los críticos de las decisiones gubernamentales en materia económica, aunque ello no afectara el compromiso político con el régimen¹²⁶.

La dictadura y sus asesores no se conformaron con clausurar el Estado a su base mesocrática. Aún quedaba un último capítulo en su ofensiva contra el tejido social de clase media. Una vez aprobada la Constitución de 1980, los asesores neoliberales convencieron a los militares de aplicar sin dilaciones los nuevos preceptos a la realidad social. Como consecuencia, los colegios profesionales verían radicalmente alterado tanto su estatuto jurídico como sus facultades legales, modificando con ello su otrora privilegiado lugar tanto al interior del Estado

¹²⁵ "El sexenio militar", *Hoy*, s/n, 5 al 11 de septiembre de 1979, 13. Para amplificar estas críticas, comerciantes y camioneros, además de taxistas, CONUPIA y la Confederación de Productores Agrícolas liderada por Domingo Durán, crearon en 1979 la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CPME), de corta existencia. Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 197-98.

¹²⁶ "Gobiernista con dudas" (Entrevista a Pablo Rodríguez), *Hoy*, s/n, 26 de septiembre al 2 de octubre de 1979, 23-24.

como también en la sociedad civil. Como mencioné al principio de este estudio, los colegios eran organizaciones creadas por leyes especiales con el fin de reunir a los profesionales de cada área, representar sus intereses, fiscalizar su accionar y colaborar con el Estado en la formulación de políticas públicas y en algunos casos en su propio funcionamiento interno. En ese sentido, operaban como órganos paraestatales de control del trabajo profesional y de negociación de políticas sectoriales. Al mismo tiempo, encarnaban y defendían la respetabilidad laboral y el status social de los profesionales, para lo cual apelaban constantemente a su capacidad técnica superior. Hacia finales de los años setenta, sin embargo, la propia noción de colegio profesional se volvió incompatible con los nuevos preceptos económicos y constitucionales, sobre todo aquellos que decían relación con la noción subsidiaria del Estado, el carácter "científico" y por ende innegociable de la política económica, y también con la noción neoliberal de la "libertad de trabajo", en la que ninguna organización podía interferir en el libre juego de la oferta y la demanda.

Con todo, la implementación del neoliberalismo y el proceso de institucionalización de la dictadura no fueron antitéticos con los colegios profesionales desde un principio. De hecho, en las Actas Constitucionales de 1976, al mismo tiempo que se reconocía la "libertad de trabajo", se reconocían las atribuciones fiscalizadoras de los colegios y la obligatoriedad de pertenecer a ellos para el ejercicio de la profesión¹²⁷. Todo ello, sin embargo, sería temporal. El ánimo contrario de autoridades de gobierno a los "grupos de presión" provocó una seguidilla de conflictos con algunos colegios profesionales. En 1978, el Ministro de Obras Públicas, Hugo León Puelma despidió a un ingeniero, quien acudió a su Colegio para interponer un reclamo por falta a la ética. El Consejo General decidió acoger el recurso y citó al Ministro a declarar. La

¹²⁷ "Nuevo orden jurídico y colegiación", *Construcción Civil. Revista del Colegio de Constructores Civiles de Chile*, no. 10, diciembre de 1976, 6-7

respuesta no sólo fue una dura negativa, sino también -ante la insistencia- una carta de renuncia al Colegio. *El Mercurio*, por su parte, acusaba al Colegio de Ingenieros de excederse de sus funciones, mientras Arriagada defendía la medida apelando a las facultades legales de los colegios profesionales y a su rol en la lucha contra la Unidad Popular¹²⁸. Al mismo tiempo, el Colegio de Arquitectos prohibió a sus miembros participar a un concurso de investigación convocado por el Ministerio de Vivienda dado que los arquitectos que a la vez eran funcionarios públicos habían quedado excluidos. El asunto escaló incluso hasta el Ministro del Interior, quien se negó a llenar unas plazas vacantes en el Consejo General con los nombres propuestos por ese colegio, designando a otros obsecuentes con la política económica del régimen¹²⁹.

Todo ello pavimentó el camino para que en febrero de 1979, sin previo aviso, el régimen aprobara el Decreto Ley 2519 que establecía la libertad del cobro de honorarios profesionales - antes delimitados por los propios colegios- y suprimía la obligatoriedad de la colegiatura para quienes ejercían en la administración pública. Ello significaba limitar dos de las atribuciones legales más importantes de los colegios. Los profesionales, por supuesto, rechazaron la medida en bloque. Cristián Fernández Cox, presidente de los arquitectos, consideraba una "increíble falta de respeto" no haber discutido la nueva ley, mientras el Colegio de Periodistas argumentaba que en virtud de la situación económica, la fijación de aranceles mínimos era una protección real contra abusos¹³⁰. Pablo Rodríguez, consejero del Colegio de Abogados, llamó al Consejo General a resistir la medida con todas sus fuerzas, dado que la disposición "es un paso más del plan del equipo económico para minimizar a los Colegios Profesionales y, en general, para destruir todo

¹²⁸ *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, Año XII, No. 79, 1978, s/p; "Ministro León Puelma renunció al Colegio de Ingenieros", *Las Últimas Noticias*, 5 de octubre de 1978, 10; Eduardo Arriagada, "Colegio de Ingenieros" (Carta al director), *El Mercurio*, 2 de octubre de 1978, 2A.

¹²⁹ "Colegios en peligro de extinción", *Hoy*, No. 132, 23 al 29 de enero de 1980, 13

¹³⁰ "Política de las sorpresas", *Hoy*, Año II, No. 88, 7 al 13 de febrero de 1979, 6; "El apoyo de los periodistas", *Hoy*, Año II, No. 90, 21 al 27 de febrero de 1979, 18

organismo intermedio que pueda ser base de poder"¹³¹. De allí la discusión se trasladó a los diarios. *El Mercurio*, por supuesto, apoyó la medida, argumentando en términos de eficiencia de mercado: "una mayor libertad de los profesionales induce a una mayor dignidad, a un mejor desempeño de los titulados universitarios". La sección de cartas al director se inundó con misivas de profesionales, tanto aquellos que celebraban la medida del gobierno por favorecer la "libertad de trabajo", como también detractores, como el fundador del Colegio Médico y ex Gran Maestro de la masonería, René García Valenzuela, entre otros¹³².

Las cosas, sin embargo, no quedarían ahí. Luego de la aprobación del texto constitucional en el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, comenzaron a circular rumores de que el régimen derogaría los Colegios Profesionales, por no avenirse con varias de las nuevas disposiciones. Algunos dirigentes profesionales interpretaron esta posibilidad como un nuevo ataque a la clase media. Julio Durán, presidente del Colegio de Abogados, por ejemplo, utilizó la oportunidad que le brindaba el tradicional discurso con motivo del juramento de nuevos abogados en la Corte Suprema para defender la existencia de los colegios y sus facultades legales, por ser garantía de una ética profesional que no puede transarse en el mercado. Más aún, sostuvo Durán, los colegios serían expresión directa de la "clase media intelectual", y como tales habrían servido de "amortiguador a la violencia sembrada por los partidarios de la revolución que sostienen la lucha de clase". Atentar contra esas organizaciones sociales, entonces, sería ir en contra de una larga historia de desarrollo cultural y democrático¹³³.

¹³¹ "Sesión en 12 de marzo de 1979", Actas del Consejo General, 1979, ACAb, 2-4.

¹³² "Colegios Profesionales", *El Mercurio*, 28 de febrero de 1979, 3A; René García Valenzuela, "Los Colegios Profesionales" (Carta al director), *El Mercurio*, 2 de marzo de 1979, 2A.

¹³³ "Discurso pronunciado por el presidente del Colegio de Abogados don Julio Durán Neumann en el juramento de abogados de 29 de diciembre de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAb, 3-4. La defensa de Durán se tradujo en una dura disputa con la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, con quien las relaciones se venían deteriorando desde hace unos meses. El intercambio de cartas molestó incluso a los consejeros más obsecuentes con el régimen, quienes reclamaron que "el hecho de que el Consejo apoye al Gobierno no significa abyección ni servilismo". "Sesión ordinaria de 26 de enero de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAb, 2-3.

Sin amilanarse por las posibles reacciones, el Gobierno dio a conocer en enero de 1981 el DL 3621 que decretaba la transformación obligatoria de los colegios profesionales en asociaciones gremiales -es decir, en instituciones de derecho privado- para así no entorpecer la "libertad de trabajo" y favorecer a las "grandes mayorías"¹³⁴. En la práctica esto significaba radicalizar el recorte de facultades legales de 1979: la afiliación sería voluntaria, así como también el pago de cuotas gremiales. Las nuevas asociaciones, además, no tendrían la facultad de juzgar faltas a la ética -atribución que ahora pasaba a los Tribunales de Justicia-, ni tampoco de fijar aranceles. Para enfrentar el "desafío de la libertad", según señaló el gobierno, el nuevo cuerpo legal daba un plazo de 90 días para aprobar los nuevos estatutos gremiales. En caso contrario se asumiría al Colegio como legalmente disuelto y su patrimonio pasaría al fisco¹³⁵.

Las reacciones de las dirigencias profesionales expresaron más amargura mientras mayor era la identificación con el gobierno. El consejero Valentín Robles, uno de los más fervientes partidarios del régimen al interior del Consejo General del Colegio de Abogados, lamentó la "soberbia" de eliminar a los colegios, y comprometió su apoyo a la Orden antes que al Gobierno en esta materia¹³⁶. Otros dirigentes profesionales oficialistas hicieron pública en la prensa su oposición a la nueva ley. Julio Durán fue quizás quien expresó su desazón en términos más dramáticos y reiterativos: "La clase media intelectual es vital y el Presidente tiene mucho olfato político. Tendrá que pensar que se está echando encima a mucha gente, de manera injusta, sin sentido". En otra entrevista se preguntaba consternado: "¿Cómo íbamos a imaginar que nuestro propio gobierno nos iba a liquidar"?¹³⁷. Por su parte, Dante Pesce, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y también un reconocido partidario del gobierno, puso en duda los

¹³⁴ "Legislación sobre Colegios Profesionales", *La Nación*, 6 de febrero de 1981, 3.

¹³⁵ *Nueva legislación sobre asociación de profesionales* (Santiago: División de Comunicación Social, 1981), 10–11.

¹³⁶ "Sesión extraordinaria de 9 de febrero de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAb, 1.

¹³⁷ "Colegios Profesionales. Y llegó el final", *Hoy*, No. 186, 11 al 17 de febrero de 1981, 11; "Durán y su nueva bandera", *Hoy*, No. 187, 18 al 24 de febrero de 1981, 13.

beneficios de la nueva legislación dado que atentaría contra la calidad del trabajo profesional¹³⁸. Muchos colegios, además, publicaron insertos en la prensa para explicar los términos de su rechazo. Mientras los consejeros nombrados por el Ministro del Interior del Colegio de Arquitectos reaccionaron extrañados ante los ataques del gobierno a las dirigencias profesionales por su escasa representatividad, los médicos agregaron que la nueva legislación atentaba contra lo mejor de los intelectuales chilenos en aras de una doctrina economicista que no reconocía valor espiritual o moral alguno¹³⁹.

Los profesionales tuvieron que esforzarse para dotar de sentido a la nueva realidad legal sin romper abiertamente con el gobierno. La explicación más recurrente en las semanas siguientes a la dictación del DL 3621 fue, por una parte, que se trataba de un error del gobierno inducido por el equipo económico. Así interpretó los hechos el consejero del Colegio de Abogados Jorge Guzmán, por lo que planteaba como camino a seguir reunirse con Pinochet para hacerle ver que los colegios profesionales "corresponden a una realidad social nacional, a una tendencia general del mundo contemporáneo"¹⁴⁰. El equipo económico, por otro lado, no sería capaz de entender las características particulares del trabajo profesional y el trato especial que merecerían en virtud de su obsesión con el libre mercado. Así, para los ingenieros, la disolución de los colegios profesionales imponía un "problema moral", dado que no se reconocería el hecho de que las profesiones se orientan hacia el bien común, y no sólo al interés individual. De allí la importancia de la ética profesional y de las organizaciones gremiales con facultades legales fuertes¹⁴¹. Al mismo tiempo, la Confederación de Colegios Profesionales apelaba al "acerbo

¹³⁸ "La ley de asociaciones gremiales provocará atomización del sector" (Entrevista a Dante Pesce), *La Segunda*, 7 de febrero de 1981, 19.

¹³⁹ Colegio de Arquitectos, "A las autoridades y a la opinión pública", *La Tercera*, 29 de marzo de 1981, 99; "Declaración del Colegio Médico de Chile", *El Mercurio*, 22 de marzo de 1981, 3C.

¹⁴⁰ "Sesión ordinaria del 2 de marzo de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAb, 4.

¹⁴¹ "El Colegio de Ingenieros de Chile ante las declaraciones del Ministerio del Interior", *CI Informa. Boletín del Colegio de Ingenieros*, No. 39, marzo de 1981, 4-5.

científico, humanístico, artístico y tecnológico" de las profesiones, que no habría sido reconocido por el decreto ley¹⁴². Parte importante de la ofuscación de las dirigencias profesionales, entonces, estuvo dado por la falta de sensibilidad del gobierno a las prerrogativas sociales y laborales del profesional y el rol de sus organizaciones como órganos asesores del Estado. Era un ataque directo a lo que hasta entonces entendían como el orden normal de las cosas.

La disputa entre el régimen y los colegios profesionales no acabaría allí. Por una parte, la prensa oficialista apoyaría sin fisuras la medida, tildando a las dirigencias profesionales de "centros monopólicos y "privilegiados", entre otros epítetos¹⁴³. A ello se le sumaron algunas autoridades de gobierno, como el "Chicago Boy" Álvaro Bardón, quien cuestionó la representatividad de las dirigencias profesionales aduciendo que el "estado llano ciudadano" estaba consciente de que su situación mejoraría con la nueva ley¹⁴⁴. Por otro lado, quizás como una estrategia gubernamental para controlar las críticas, algunos grupos de profesionales que apoyaban la nueva legislación fueron movilizados y organizados para defender la nueva legislación¹⁴⁵. El ingeniero Eduardo Boetsch, por ejemplo, puso en cuestión el rol de los colegios en la lucha contra la Unidad Popular con el objetivo de relativizar la importancia social de esas instituciones. Pocas semanas después, unos 600 profesionales firmaron una declaración publicada en *El Mercurio* en apoyo a la nueva legislación¹⁴⁶. En respuesta, las dirigencias organizaron consultas entre sus bases para dimensionar el nivel de rechazo a la conversión de los colegios en asociaciones. Los resultados fueron decisivos. El 97,4% de los periodistas

¹⁴² "Confederación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile", *El Mercurio*, 18 de enero de 1981, 10C

¹⁴³ Entre muchos otros, "Colegios Profesionales: frente a un nuevo desafío", *El Mercurio*, 15 de febrero de 1981, 4D; y "La voz de la mayoría", *La Segunda*, 12 de febrero de 1981, 3.

¹⁴⁴ Álvaro Bardón, "Colegios Profesionales", *El Mercurio*, 26 de febrero de 1981, 3.

¹⁴⁵ El Colegio Médico denunció que autoridades gubernamentales habían presionado a algunos profesionales para firmar diferentes declaraciones en favor de la nueva legislación. "Médicos reiteraron denuncias de circulares pro asociaciones", *La Tercera de la Hora*, 8 de abril de 1981, 7.

¹⁴⁶ "Eduardo Boetsch, ingeniero civil", *Cosas*, No. 117, 26 de marzo de 1981, 24-26; "A la opinión pública", *El Mercurio*, 4 de abril de 1981, 2C.

rechazaron la nueva legislación, así como también el 91% y el 95% de las Asistentes Sociales y los Constructores Civiles respectivamente. En otros colegios se repitió la misma tendencia: el 93,5% de los abogados, el 91,49% de los dentistas, el 88,83% de los ingenieros y el 92,83% de los médicos apoyaron a sus respectivas directivas¹⁴⁷. Si bien el gobierno tenía la capacidad legal para disolver los colegios profesionales y el apoyo de los medios de comunicación, era evidente que la mayoría de los profesionales chilenos no apoyaba esta aplicación práctica de la doctrina neoliberal.

5.- Conclusiones

Más allá de las declaraciones, gestiones y consultas, los colegios no tuvieron otra alternativa que aceptar la nueva legislación y transformar sus organizaciones en asociaciones gremiales. El DL 3621, en ese sentido, fue la culminación de una política sostenida por parte de la dictadura de desarticular el entramado organizacional de la clase media y ajustar las relaciones entre Estado y sociedad civil a los nuevos preceptos económicos y constitucionales inspirados en el ideario neoliberal. En ello colaboró también el "Plan Laboral" que, si bien afectó con más dureza a los sectores obreros, también alcanzó a algunos grupos identificados con la clase media, como los camioneros. Las "modernizaciones" y la "institucionalización" buscaron y consiguieron consolidar un diseño institucional funcional a las exigencias del neoliberalismo. En ese esquema, las lógicas negociadoras y las organizaciones sociales del "Chile mesocrático" no tenían lugar.

La implantación del neoliberalismo en Chile fue producto de la victoria de la fracción de economistas neoclásicos al interior del régimen por sobre aquellos grupos de oficiales y asesores

¹⁴⁷ "La hora decisiva", *Hoy*, No. 191, 18 al 24 de marzo de 1981, 25; "Colegios Profesionales: Defensa masiva", *Hoy*, No. 192, 25 al 31 de marzo de 1981, 16; "Los Colegios Profesionales: Pasos del gobierno", *Hoy*, No. 193, 1 al 7 de abril de 1981, 16; "Colegios Profesionales: Consultas y negociaciones", *Hoy*, No. 194, 8 al 14 de abril de 1981, 15; "Resultados finales en consultas de colegios", *La Tercera de la Hora*, 4 de mayo de 1981, 6.

"ibañistas", que no querían renunciar al Estado como motor del desarrollo económico. Ese viraje, por supuesto, no podría haber sido posible sin el convencimiento de la Junta militar, y en particular Augusto Pinochet, de la necesidad de implementar la receta del "shock" para superar la crítica situación económica de los primeros años del régimen. Una vez que los "Chicago Boys" lograron tener el apoyo del dictador, y pudieron ubicar a sus discípulos en los puestos claves de la administración de la economía en el Estado, las reformas avanzaron sin titubeos.

Las reformas neoliberales tuvieron un impacto decisivo en la realidad material, cultural y organizacional de la clase media. En ese sentido, la dictadura buscó redefinir los significados y alcances de la clase media a través de tres procesos diferentes, aunque derivados ambos de la doctrina neoliberal. En primer lugar, la aplicación del "shock" cambió radicalmente la forma en que la clase media se relacionaba con el Estado. Las medidas propuestas por el plan neoliberal implicaron una abrupta contracción del aparato estatal. Decenas de miles de funcionarios debieron buscar empleo en el sector privado, incluyendo a muchos que, en vista de la falta de oportunidades, decidieron salir a las calles a manejar taxis, entre otras funciones de baja remuneración. La apertura del comercio exterior, la derogación de subsidios y el encarecimiento del crédito afectó también a la industria nacional, sobre todo aquella de dimensiones más pequeñas. Muchos establecimientos tuvieron que cerrar sus puertas, o al menos reducir su personal. La dignidad asociada al empleo de clase media de otros tiempos, tanto dentro como fuera del Estado, se vio fuertemente afectada cuando el mercado se transformó en el ente rector de las relaciones laborales.

Por otra parte, en segundo término, el "boom" de las importaciones y el consumo cambió dramáticamente la manera en que los grupos mesocráticos entendían su rol en la sociedad. Los nuevos objetos exhibidos en las vitrinas de las tiendas comerciales -muchas de ellas en los

nuevos "caracoles", y luego los *malls*- encerraban una esquiva promesa de modernidad y desarrollo, que ofrecía elevar a Chile al nivel del primer mundo. Los economistas neoliberales y la prensa oficialista fueron insistentes en explicitar el vínculo entre importaciones y bienestar, algo especialmente importante para la clase media. De un momento a otro, pareció que Chile se incorporaba a lo más avanzado de la tecnología mundial a través de objetos ahora disponibles incluso para los que no pudieran pagar por ellos en el momento, gracias a la expansión de créditos, tarjetas y préstamos. El consumo, en ese sentido, operó como un mecanismo de redefinición de esa identidad de clase a través de su participación en el mercado, alejándola de ese modo del Estado, el referente histórico en torno al cual se había construido el "Chile mesocrático".

Por último, la dictadura cerró la mayor parte de aquellos canales de negociación y participación disponibles en sus primeros años, acusando ahora a muchas de las organizaciones de clase media de ser "grupos de presión" que intentaban distorsionar el libre juego del mercado. Los conflictos se sucedieron unos a otros, aunque no implicaron en ningún caso una ruptura política con el régimen. La clase media, pretendía el régimen, ya no podía ser una herramienta de negociación y presión hacia el Estado por parte de organizaciones sociales. El fin de los colegios profesionales demostró hasta qué nivel estaban dispuestos a llegar para acabar con toda institución incompatible con el credo neoliberal.

Ese triple proceso fue un intento hasta cierto punto exitoso por redefinir la propia identidad de clase media y las atribuciones que hasta entonces gozaban sus organizaciones representativas. En este sentido, para la clase media contrarrevolucionaria, el verdadero quiebre derivado del autoritarismo estuvo marcado más por la imposición del neoliberalismo a partir de 1975 antes que por el golpe de Estado de 1973. La demolición del "Chile mesocrático" -sus

instituciones, prácticas, redes e influencias- fue consecuencia directa del viraje neoliberal del régimen, en virtud de la incompatibilidad radical entre ambas tradiciones. La crisis del experimento neoliberal durante los primeros años de la década de los ochenta y el costo político asociado a la represión terminarían por destruir lo que quedaba de la "sincronización" de los primeros tiempos de la dictadura, dando lugar en muchos casos a nuevos espacios de politización y de oposición al autoritarismo que se proyectarían con fuerza hacia los años siguientes.

Capítulo 5

Moralidad y política. La clase media a la oposición

La situación general de las organizaciones de clase media hacia finales de los años setenta no era nada fácil. Las reformas neoliberales habían impactado con fuerza en sus condiciones materiales, sobre todo la de aquellos vinculados al empleo fiscal y la industria. Por otro lado, las autoridades no respondían con las facilidades de otros tiempos a las peticiones de las dirigencias mesocráticas que, además, se veían bombardeadas por medidas y leyes contrarias a sus intereses. Todo ello llevó a que la propia noción de "clase media" comenzara a ser disputada por varios de sus más connotados representantes, tanto por los dirigentes gremiales ya conocidos como también por nuevos actores que empezaban a emerger y que, a diferencia de los primeros, se planteaban como opositores sin ambages.

A todo ello se le sumó una creciente indignación moral en vista a la magnitud de la represión estatal. Hacia finales de la década, a diferencia de los primeros años del régimen, varios líderes mesocráticos asumirían el marco interpretativo de los Derechos Humanos para dar cuenta de esta situación, articulando esta preocupación con la labor que venía llevando a cabo la Iglesia Católica e instituciones asociadas. A pesar de los límites impuestos por el régimen, aquella oposición moral no tardaría en convertirse en política, al identificar en la restauración democrática la solución a la arbitrariedad del poder estatal. Los casos del Colegio de Abogados y la Masonería son ejemplificadores al respecto. Mientras en el primero un pequeño grupo de abogados disidentes pudo entrar al Consejo General y desde ahí dominar el debate y llevarlo al terreno de los Derechos Humanos, en el segundo la disidencia interna se enfrentó abiertamente

con la dirección de la Gran Logia, poniendo al centro de la discusión la naturaleza autoritaria del régimen y su incompatibilidad con los principios de la Orden.

Con todo, la dictadura mantenía el control del Estado, la economía y los medios de comunicación. El "boom" del consumo aún ayudaba a acallar críticas integrales, y la labor de defensa de los Derechos Humanos no se articulaba todavía con las mayorías sociales. La crisis económica de 1982-1983 cambiaría eso dramáticamente. La caída estrepitosa de todos los índices económicos, el aumento del desempleo y la inflación, y la devaluación del peso acabaron con el sueño neoliberal del consumo y el crédito. Fue la coyuntura perfecta para que las críticas y frustraciones de los años anteriores se expresaran en la vía pública, sobre todo a partir del inicio del ciclo de "protestas nacionales" en mayo de 1983. El proceso de apoyo mesocrático a soluciones autoritarias terminó de la misma forma como empezó bajo la Unidad Popular: con movilización y protesta social.

1.- La clase media en disputa

Con diferencias entre sí, distintos voceros mesocráticos pusieron en cuestión el discurso social articulado por el régimen, luego profundizado con el viraje neoliberal. Según los militares gobernantes y sus ideólogos más cercanos, la clase media podría gozar de un estándar de vida superior gracias a la modernización autoritaria centrada ahora en el mercado y alejada del Estado. Para ello, no necesitarían de organizaciones sociales robustas ni tampoco de inquietudes políticas, dada que ahora su participación podría darse como consumidores individuales. El Estado, en ese modelo, se replegaría a su condición subsidiaria que aseguraría el libre juego de la oferta y la demanda, además de "focalizar" el gasto sólo en los sectores más empobrecidos. En contraposición, las imágenes disidentes sobre la clase media enfatizaron su proceso de

precarización material y su incapacidad de participar en el proyecto modernizador neoliberal. Por lo mismo, criticaron por diferentes vías el ideal consumista iniciado a partir del "boom" de las importaciones, ya sea por el incumplimiento de la promesa de participación vía mercado, o también por la incompatibilidad de su esquema de valores subyacente con las nociones mesocráticas tradicionales de trabajo metódico, austeridad y dignidad.

Esta disputa sobre la clase media entre finales de los años setenta y principios de los ochenta no fue una lucha abierta ni explícita entre un grupo reconocible de opositores y el gobierno. Por el contrario, fue un desplazamiento más bien solapado, desde espacios no alineados aunque tolerados por el régimen. Muchos de ellos tuvieron que ver con la lenta y progresiva conversión de algunos grupos pro-dictadura en opositores moderados, mientras otros fueron producto del cierre de lugares de trabajo intelectual, principalmente las universidades, y su traslado a organizaciones independientes. Entre ellos varios reconocían una identidad social de clase media, y hubo quienes desde esa posición lucharon con vehemencia contra la Unidad Popular. El autoritarismo militar, la represión, el neoliberalismo y la fractura del "Chile mesocrático" habían terminado por alienarlos del régimen que habían colaborado en instalar en el poder. Hubo otros, también, que reconocían una identidad de izquierda previa al golpe de Estado, y por lo tanto su definición como opositores surgía de la propia existencia del autoritarismo militar. En sintonía con el lento trabajo de reconstrucción de un tejido social autónomo en sectores populares, se empezaron a organizar espacios institucionales de disidencia, vinculados tanto con la defensa de los Derechos Humanos como a la crítica política e intelectual del autoritarismo. Desde ese lento "despertar" mesocrático surgirán estas nuevas concepciones sobre la clase media¹.

¹ La idea inicial del "despertar" desde una connivencia tácita con el régimen hacia una oposición muchas veces en tono moral viene de Stern, *Remembering Pinochet's Chile*, capítulo 2. Stern, sin embargo, no incorpora

Quizás el primer lugar con impacto público desde donde comenzó a construirse una noción alternativa de clase media fue la revista *Hoy*, fundada en 1977 por el mismo equipo periodístico que hasta entonces trabajaba en la revista *Ercilla*. A pesar de las restricciones impuestas a la prensa por el régimen, *Ercilla* era una revista respetada, con ciertos aires de imparcialidad a pesar de que nadie ignoraba que su director, Emilio Filippi, era un conocido militante democratacristiano. En la primavera de 1976, sin embargo, los dueños de la publicación decidieron venderla a un grupo de empresario afines al régimen, y a pesar de las promesas comenzaron a imponer una nueva línea editorial que acabó con la renuncia del equipo editorial².

A diferencia de los medios oficialistas, *Hoy* pudo desde un principio plantearse críticamente ante los temas más candentes de la coyuntura, midiendo edición tras edición los

explícitamente en su esquema conceptual para el estudio de la memoria en el Chile dictatorial una dimensión de clase. Los actores en ese modelo son individuos que son más o menos exitosos en incorporar su propia experiencia en narraciones sociales compartidas y legitimadas -las "memorias emblemáticas"-, construidas a su vez en tensión constante con el régimen político imperante y las consecuentes desigualdades de poder entre actores sociales. Con todo, Stern sí reconoce al menos implícitamente cierta dimensión de clase al presentar figuras arquetípicas de cada "memoria emblemática". Mientras la "memoria como salvación" pro-dictadura es simbolizada en una mujer de clase alta, la memoria como "ruptura" se encarna en una mujer popular que había recibido en su propia familia los embates de la represión. El "despertar" queda para una mujer de clase media, sensible ante el derrumbe moral de la sociedad chilena como consecuencia del régimen. Esa misma dinámica, con los matices del caso, es extrapolable a las organizaciones mesocráticas, como se verá en este capítulo.

² Sobre la revista *Hoy*, véase Paula Mobarec Hasbún y Dominique Spiniak Bercovich, *Revista Hoy: 1.108 ediciones con historia* (Santiago: Ediciones Copygraph, 2001). La prensa de oposición florecería en los años siguientes, sobre todo a partir de las crisis económica y el ciclo de protestas iniciado en 1983. A *Hoy* se le sumarían revistas como *Cauce*, *Análisis*, *Apsi*, *Solidaridad* y periódicos como *El Fortín Mapocho* y *La Época*. En cuanto a radios, *Chilena* y *Cooperativa* brillaron con luces propias. Todos estos medios sufrieron censura y represión por parte del régimen, lo que hasta cierto punto los legitimó aún más como medios veraces y alejados de los intereses del poder. Al respecto véase Matías León, *El periodismo que no calló: historia de la revista Análisis (1977/1993)* (Santiago: La Nación Domingo, 2005); Francisca Araya Jofré, *Historia de la revista Apsi: el que se ríe se va al cuartel (pico para Pinochet)* (Santiago: LOM Ediciones - Universidad de Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2007); Brad T. Eidahl, "For the Right to Disagree: APSI and Opposition Journalism under Pinochet" (M.A. Thesis in History, Ohio University, 2011); Carla Rivera, "La verdad está en los hechos: una tensión entre objetividad y oposición. Radio Cooperativa en dictadura", *Historia* 41, n° 1 (junio de 2008): 79-98; María Consuelo Pérez, *Los protagonistas de la prensa alternativa: Vicaría de la Solidaridad y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas* (Santiago: Fundación de Documentación de la Vicaría - El Arzobispado, 1997). Sobre la censura a la prensa en dictadura, función ejercida por la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS), véase Luz María Chadwick Stuardo et al., "DINACOS: La historia no contada" (Tesis de Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Diego Portales, 1999).

límites de la tolerancia gubernamental³. Entre otras cosas, la revista comenzó a darles cada vez más espacio a los líderes mesocráticos descontentos con la política económica del gobierno, precisamente para que pudieran articular una crítica desde una posición social de clase media. Allí, por ejemplo, Eduardo Arriagada pudo definirse a sí mismo como un "defensor del profesional chileno (...) que fue acusado ayer de explotador y hoy de ineficiente", mientras los dirigentes de CONUPIA denunciaban la destrucción de la pequeña empresa y el auge de la especulación por sobre el trabajo productivo, todo en un mismo número⁴. Otros dirigentes fueron más explícitos en sus alegatos por la clase media. Federico Mujica, líder de los empleados particulares, acusaba que las políticas neoliberales estaban cumpliendo el sueño de la izquierda: "la proletarización de la clase media, que es la base social de Chile"⁵. León Vilarín coincidía en el diagnóstico, apuntando el drama de una clase media empobrecida y sin las herramientas para mejorar su situación. Al menos cinco mil camioneros habrían tenido que vender sus vehículos por un trabajo en el Plan de Empleo Mínimo -denunciaba en entrevista- lo que equivalía a perder su condición de clase media para entrar directamente en la pobreza⁶. Ante todo ello, Vilarín advertía: "[A la clase media] se la ha proletarizado, pero no ha desaparecido (...) La caldera social por esto mismo aumenta de temperatura y ha llegado a ser más cálida que la de cualquier esquina de Santiago a pleno sol"⁷.

Otros dirigentes dieron ejemplos concretos del empobrecimiento generalizado de sus respectivos grupos de clase media. Juan Jara, el líder de la FENATACH, señalaba consternado que debido al alza de taxistas "lo hemos perdido todo como gremio. Sólo quedan el corazón y las

³ *Hoy* no tardaría en encontrar esos límites. En 1979 la revista fue suspendida por dos meses por entrevista a ex-dirigentes de la Unidad Popular. Mobarec Hasbún y Spiniak Bercovich, *Revista Hoy*, 50-51.

⁴ "Las críticas de Eduardo Arriagada", *Hoy*, Año 1, No. 19, 5 al 11 de octubre de 1977, 23; "Dudas en la encrucijada", *Hoy*, Año 1, No. 19, 5 al 11 de octubre de 1977, 28-29.

⁵ "Justificando el 'no'", *Hoy*, Año II, No. 53, 12 al 18 de julio de 1978, 30

⁶ "Largo camino por recorrer" (entrevista a León Vilarín), *Hoy*, Año II, No. 84, 3 al 9 de enero de 1979, 19

⁷ "Vilarín en el séptimo año", *Hoy*, No. 130, 16 al 22 de enero de 1980, 25.

latas"⁸. Tucapel Jiménez fue aún más gráfico. Entre otras cosas, denunció los bajos sueldos de los funcionarios públicos, insuficiente no solo para mantener cierto nivel material acorde con las expectativas de la clase media, sino que incluso con las necesidades mínimas de alimentación. Si las autoridades hicieran una inspección a la hora de almuerzo, señalaba Jiménez, "verían cuál es la alimentación de la clase media: muchos no comen nada y otros sólo toman una taza de té para engañar las tripas (...) Ahora me explico por qué ha subido la desnutrición en la familia"⁹.

Algunos dirigentes incluso adelantaron demandas por una apertura democrática del régimen, algo que lindaba con la oposición abierta. Vilarín se declaraba un demócrata "sin apellidos" -es decir, lejos de las concepciones neoliberales de democracia-, y esperaba que una eventual transición los ciudadanos puedan ser consultados sobre los derroteros de la política económica¹⁰. Por su parte, Juan Jara, una vez que salió de la cárcel por protestar en la vía pública, señaló en entrevista a *Hoy* : "creo que las FF.AA. en su totalidad y el propio Presidente son clase media", por lo que resultaba lógico orientarse hacia su propio sector social para superar la situación. Y agregaba: "La única [alternativa] es que el presidente gire en 180 grados: llame a los gremios, a la clase media, a los intelectuales, a todos los profesionales de este país que van a colaborar de forma desinteresada por el engrandecimiento de la nación". La participación de la clase media, según Jara, llevaría al ensanchamiento de la participación y social y, en último término, al restablecimiento de un régimen democrático pleno¹¹. De ese modo, el dirigente taxista revivía la lógica del "Chile mesocrático", e incluso el de la lucha contra la Unidad Popular, cuando se entendía que la organización e inclusión en el Estado de la clase media eran garantía de la democracia.

⁸ Colisión en el centro", *Hoy*, No. 143, 15 al 22 de abril de 1980, 11.

⁹ "Cada vez es más difícil vivir", *Hoy*, No. 143, 15 al 22 de abril de 1980, 24.

¹⁰ "Vilarín en el séptimo año", *Hoy*, No. 130, 16 al 22 de enero de 1980, 25.

¹¹ "La alternativa de Juan Jara", *Hoy*, No. 144, 23 al 29 de abril de 1980, 8.

Hoy también elaboró reportajes analíticos sobre la situación de la clase media. En gran medida, su contenido legitimaba los reclamos de los dirigentes mesocráticos más críticos del viraje neoliberal del régimen, apoyado ahora en datos y testimonios. Los profesionales, por ejemplo, fueron un sector continuamente analizado por los reporteros y columnistas de *Hoy*. Periodistas como Ana María Foxley dieron cuenta de los altos índices de desempleo en este grupo, lo que incluso motivaba a muchos de ellos a emigrar. "El hecho se repite y es tan simple y dramático como esto: los títulos universitarios se están transformando en 'pasajes sin destino' para los profesionales", señalaba, para luego dar lugar a la exasperación de varios dirigentes de colegios profesionales¹².

Hubo también reportajes que intentaron adentrarse en la cotidianeidad de la clase media, y así develar ante la opinión pública su paupérrima situación. La periodista Malú Sierra, en 1978, definía a la clase media como "la gran mayoría del país que hoy 'se nivela para abajo' y se va corriendo -con horror- a la clase que la sigue, sin tener de dónde agarrarse". El drama, agregaba, se vivía en la intimidad del hogar, "con un amor propio disfrazado de dignidad", y haciendo lo imposible para encubrir las carencias. Sierra, de hecho, tuvo problemas para conseguir personas dispuestas a dar su testimonio. "Nadie presta su nombre, como ocurre entre la clase popular, que no tiene nada que esconder porque no tiene nada que perder". Con todo, agregaba, el deterioro era evidente, y se expresaba no solamente en estrecheces materiales, sino también en neurosis y depresiones¹³.

¹² Ana María Foxley, "Nuevos profesionales. ¿Antesala de la fuga?", *Hoy*, Año I, No. 44, 29 de marzo al 4 de abril de 1978, 19-24. La situación de los profesionales fue una preocupación constante para *Hoy*. Años después, Patricio Hales insistía en el punto, ahora enfocado en la situación crítica de los arquitectos, esos "ciudadanos de 'clase media', profesionales con título, con oficina, gente que tiene que gastar para cumplir con la imagen del profesional que el medio tiene". Patricio Hales, "Desperdicio profesional", *Hoy*, No. 303, 11 al 17 de mayo de 1983, 25.

¹³ Malú Sierra, "Clase media. Los marginados de cuello y corbata", *Hoy*, Año I, No. 47, 19 al 25 de abril de 1978, 20-25

La cobertura que *Hoy* le dio a la clase media y sus más angustiantes problemas le significaron un pronunciado aumento de su lectoría. En 20 meses, entre enero de 1978 a agosto de 1979, el tiraje aumentó desde 18.987 a 49.458 revistas vendidas, lo que significaba unos 250.000 lectores por edición¹⁴. Del mismo modo, la revista empezó a gozar de la simpatía de muchos de los más destacados representantes de la clase media. En el primer aniversario se organizó una "Sociedad de Amigos de *Hoy*", compuesta en su mayoría por dirigentes mesocráticos democratacristianos, como Eduardo Arriagada¹⁵. Esas muestras de apoyo no estuvieron supeditadas sólo a afinidades políticas. En el quinto aniversario de *Hoy* un variopinto grupo de líderes mesocráticos enviaron sus felicitaciones, como Julio Durán, Rafael Cumsille o León Vilarín. El masón René Court Portales, de hecho, confesó que la revista era leída por muchos miembros de su Orden, "que encuentra en sus páginas una genuina expresión de pensamiento libre"¹⁶.

En las páginas de *Hoy* también se plantearon críticas a uno de las bases de la retórica exitista del régimen: el consumo. A diferencia los medios oficialistas, sus reportajes cuestionaban la relación necesaria entre consumo y bienestar¹⁷. Para ello, los reporteros de la revista recogían las opiniones de especialistas críticos del modelo, como las del economista Jorge Scherman que exponía con números cómo el consumo de bienes importados se centraba sólo en los sectores más altos¹⁸. En otro reportaje, el escritor Jorse Sasía acusaba que "el hombre medio está preocupado de subsistir, de ganar más", lo que amenazaba con deshumanizar sus existencias¹⁹. A ellos se le sumaron en muchas ocasiones los propios lectores de la revista que

¹⁴ *Hoy*, s/n, 17 al 23 de octubre de 1979, 45.

¹⁵ "Los amigos de *Hoy*", *Hoy*, Año II, No. 53, 31 de mayo al 6 de junio de 1978, 13.

¹⁶ "Cómo nos ven", *Hoy*, No. 254, 2 al 8 de junio de 1982, 37.

¹⁷ Como lo hacía, entre muchos otros, el "Chicago Boy" Rolf Lüders, "Bienestar, no 'consumismo'", *La Tercera de la Hora*, 13 de febrero de 1980, 3.

¹⁸ "Secretos del consumismo", *Hoy*, No. 141, 2 al 8 de abril de 1980, 24.

¹⁹ "Los cambios del 'Homo Chilensis'", *Hoy*, No. 217, 30 de septiembre al 6 de octubre de 1981, 50.

reaccionaban ante los reportajes relativos al consumo y sus posibilidades, y de paso refrendaban sus principales hallazgos. Una lectora anónima, "vecina de Gran Avenida", se quejaba contra el alza de las gasolinas de 1978 dado que afectaba el bolsillo de la clase media, "si es que a estas alturas existe todavía esta división de clase"²⁰. Del mismo modo, cuando Pinochet anunció la rebaja arancelaria de ciertos "autos populares" para favorecer a la clase media, la reacción de algunos lectores de *Hoy* fue de incredulidad. El médico Juan Carlos Concha confesó haberse ilusionado con la medida, ya que "como profesional de clase media estaría por primera vez en condiciones de comprar un automóvil", pero al haberse informado de los precios y condiciones crediticias no tuvo más remedio que desistir de la idea²¹. Otros, como una anónima "dueña de casa", reclamaban contra la abundancia de bienes importados y la imposibilidad de adquirirlos por los bajos salarios²². mientras un "profesional" complementaba al criticar al "equipo económico" por creer que el consumo implicaba libertad, cuando los ciudadanos ni siquiera podían elegir a sus autoridades²³.

A los reclamos y lamentos de dirigentes y ciudadanos de clase media a través de *Hoy*, se sumaron también estudios que pretendían darle una base empírica a la crítica mesocrática. Algunos de los resultados de estas investigaciones fueron difundidos por *Hoy*. El sociólogo Fernando Dahse, por ejemplo, publicó en 1978 su *Mapa de la extrema riqueza en Chile*, en la que exponía la dimensión de la concentración de los ingresos y la exclusión de las mayorías de

²⁰ "¿Se cambió el barrio alto?" (carta al director), *Hoy*, Año II, No. 73, 18 al 24 de octubre de 1978, 69. Este tipo de cartas, por cierto, no fueron monopolio exclusivo de *Hoy*. En revistas de tono más oficialista también comenzaron a leerse este tipo de reclamos, como aquel lector de *Ercilla* que "siendo de clase media" no podía acceder a un crédito hipotecario. "Sueño de la casa propia" (Carta del director), *Ercilla*, No. 2.346, 16 al 22 de julio de 1980, 4-5.

²¹ Juan Carlos Concha, "El automóvil popular" (Carta al director), *Hoy*, s/n, 23 al 29 de mayo de 1979, 69. Por cierto, las sospechas frente a la efectividad de la medida estaba presente también en los reportajes de *Hoy* al respecto. "La ilusión de los autos", *Hoy* Año II, No. 88, 7 al 13 de febrero de 1979, 23; "Autos baratos. Una revolución social", *Hoy*, No. 96, Año II, 28 de marzo al 3 de abril de 1979, 15.

²² "La libre importación" (Carta al director), *Hoy*, Año I, No. 28, 7 al 13 de diciembre de 1977, 71.

²³ "Importaciones suntuarias" (Carta al director), *Hoy*, Año I, No. 31, 4 al 10 de enero de 1978, 65

los beneficios del libre mercado²⁴. Otros intelectuales abordaron directamente la situación de la clase media. Alejandro Foxley, doctor en Economía por la Universidad de Wisconsin-Madison, publicó un estudio en 1977 que probablemente inauguró la preocupación intelectual por la clase media desde una perspectiva crítica. Foxley propuso que si bien la clase media era la que más se había visto favorecida en el período democrático anterior, era también la que más había contribuido al financiamiento del Estado. Bajo el neoliberalismo, sin embargo, ese equilibrio se habría roto al aportar más recursos que beneficios recibidos. En consecuencia, cualquier tipo de proyecto democrático viable debía incorporar los intereses de la clase media²⁵.

A ese impulso inicial se le sumaron académicos e investigadores de izquierda agrupados en organizaciones y centros de estudio que por entonces comenzaban a multiplicarse. Muchos de ellos iniciaban entonces un largo camino de "renovación" ideológica, dejando de lado las rigideces del marxismo ortodoxo y enarbolando la bandera de la democracia como ideal social. Sus más destacados representantes fueron Manuel Antonio Garretón, Norbert Lechner, Tomás Moulián y José Joaquín Brunner, y estaban nucleados en torno a instituciones como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), entre otras²⁶. En esa misma línea, hubo también investigadores que prestaron especial atención a la clase media, encontrando para ello espacios en común para potenciar sus reflexiones. En 1978 se fundó SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación. Allí, investigadores como Javier Martínez, Eugenio Tironi, Arturo León,

²⁴ Fernando Dahse, *El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales* (Santiago: Editorial Aconcagua, 1979). El título del libro, como era evidente para los chilenos de entonces, era un giro irónico del *Mapa de la extrema pobreza en Chile* (Santiago: Documento de trabajo No. 29, Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1974), documento generado por economistas neoliberales para justificar las políticas de "focalización" del gasto público.

²⁵ Alejandro Foxley, "La clase media", *Hoy*, Año I, No. 29, 14 al 20 de diciembre de 1977, 28. Otros estudios que decían relación con la clase media también encontraron acogida por *Hoy*, como el de la economista de la Universidad de Chile Isabel Heslia de Regueira sobre la distribución del ingreso en Santiago. Entre otras cosas, el estudio demostraba que los sectores medios habían sido los más perjudicados por la dictadura, actuando como "colchón de la crisis". "Bienestar en la balanza", *Hoy*, No. 133, 30 de enero al 5 de febrero de 1980, 25-27.

²⁶ Sobre el rol de los intelectuales en la generación de una nueva conciencia democrática en el Chile de Pinochet, ver el clásico estudio de Puryear, *Thinking Politics*.

Eduardo Valenzuela y Gabriel Salazar concentraron sus esfuerzos en el estudio de las clases sociales chilenas, y particularmente en la clase media. Desde una perspectiva histórica y sociológica, el objetivo común fue exhibir el deterioro material y social de este grupo, como consecuencia directa del autoritarismo y el neoliberalismo²⁷.

La preocupación política e intelectual por la clase media no se circunscribió a la izquierda. A ellos se le sumaron investigadores vinculados a la cultura política socialcristiana y sus instituciones. Claudia Serrano publicó en 1981 un estudio sobre la internalización del "discurso del orden" oficialista por parte de mujeres de clase media, sobre todo a partir del amplio apoyo femenino al gobierno en el plebiscito de 1980. La investigación se hizo en base a decenas de entrevistas realizadas en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), vinculado a la Democracia Cristiana²⁸. Al mismo tiempo, un grupo de jóvenes historiadores de la Universidad Católica, también cercanos al mundo demócratacristiano -Cristián Gazmuri, Sol Serrano, Sofía Correa y Mariana Aylwin, dirigidos por Carlos Bascuñán- preparaban una serie de fascículos de historia contemporánea chilena publicados luego en *Hoy*. El primer número, aparecido en 1983, estuvo centrado en la historia de la clase media y su proceso de empoderamiento político y social en torno al Estado²⁹. Era, en pocas palabras, una reivindicación histórica del "Chile mesocrático"

²⁷ Algunos de los estudios publicados por SUR son: Martínez y Tironi, *Las clases sociales en Chile*; Martínez y León, *Clases y clasificaciones sociales. Investigaciones sobre la estructura social chilena, 1970-1983*; Javier Martínez, *La oscilación política de la clase media: las elecciones entre 1967 y 1973* (Santiago: Ediciones SUR, 1985); Javier Martínez, *Sobre el concepto estructural marxista de pequeña burguesía y la hipótesis sobre su conducta política* (Santiago: Ediciones SUR, 1985); Javier Martínez y Eugenio Tironi, *Materiales para el estudio de las clases medias en la sociedad chilena, 1960-1980*, vol. 1. Cambios en la estratificación social (Santiago: Ediciones SUR, 1983); Eugenio Tironi, *La desestructuración social. Debate a partir del ejemplo chileno 1973-1983* (Santiago: Ediciones SUR, 1985); Gabriel Salazar, *Notas preliminares para un estudio de las clases medias en la sociedad chilena actual* (Santiago: Ediciones SUR, 1982); Valenzuela y Solari, *Los jóvenes de los ochenta*.

²⁸ Claudia Serrano, *La mujer y el discurso del orden. El caso de 20 mujeres santiaguinas de clase media* (Santiago: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1981).

²⁹ "El despertar de la clase media", *Hoy*, No. 319, 31 de agosto al 6 de septiembre de 1983 (fascículo). Por cierto, este tipo de narrativas sobre la clase media convivían con otras afines al régimen, aunque de aparición mucho más esporádicas. Un ejemplo de esto es el texto del escritor Enrique Lafourcade, "Que viene la clase media", *Qué Pasa*, No. 493, semana del 18 al 14 de septiembre de 1980, 28-29. Para Lafourcade, la clase media era "la clase de las

entonces en crisis. Las inquietudes intelectuales que informaban todas estas investigaciones, tanto aquellas inspiradas en la izquierda como en el socialcristianismo, decían relación con la necesidad de reconstruir el tradicional vínculo entre clase media y democracia para un proyecto político futuro. Si bien las perspectivas opositoras por entonces no eran nada halagüeñas, aquel acervo intelectual transversal se proyectaría con fuerza en la segunda parte de la década de los ochenta.

La disputa por los significados de la clase media se expresó también en el ámbito de la creación cultural, sobre todo en aquellos espacios que no estaban alineados con la retórica nacionalista y conservadora del régimen. Uno de ellos fue el teatro. En 1976, el dramaturgo Fernando Cuadra escribió y estrenó en el Teatro Teknos de la Universidad Técnica del Estado la obra "La familia de Marta Mardones", "un melodrama chileno de la clase media", como escribió pocos años después el crítico Juan Andrés Piña³⁰. La trama era rápida y dramática. Marta Mardones -"dueña de casa de clase media, tirando para abajo", como ella misma se definía³¹- era la matriarca de una familia capitalina en rápida descomposición. Su esposo, ex-empleado de ferrocarriles, había sufrido un accidente invalidante que lo tenía sumido en una profunda depresión. Sus hijos Elvira y Ramiro tenían sus propios problemas. Mientras ella quedaba embarazada de un compañero de trabajo mujeriego, él empezaba una relación con una mujer casada, que puso en peligro su propia integridad física. El desenlace no mejora las cosas. El esposo de Marta Mardones se suicida, mientras sus hijos abandonan el hogar. Subyacente al argumento había un mensaje evidente: la clase media estaba sufriendo un proceso de

aspiraciones simples", y la garantía de que el capitalismo no se destruya a sí mismo. Ante la ola consumista no cabía más que "educar" a la clase media.

³⁰ Fernando Cuadra, *Teatro. Doña Tierra - La niña en la palomera - La familia de Marta Mardones* (Santiago: Editorial Nascimento, 1979), 26. Así lo leyó también el crítico de teatro de *Ercilla*, quien escribió: "Fernando Cuadra tiene un excelente oído para captar los variados matices del lenguaje de clase media; sabe crear personajes, situaciones y conflictos propios del ambiente que refleja". "Clase media en el Teknos", *Ercilla*, No. 2155, 17 de noviembre de 1976, 58.

³¹ Cuadra, *Teatro*, 291.

descomposición moral dado en gran medida por las estrecheces materiales y la carencia de perspectivas futuras. Sin aludir al contexto autoritario, Cuadra quiso dar la voz de alerta ante lo que interpretaba era la destrucción de un rico y complejo mundo social. Ante ello no cabían soluciones ni finales felices.

También hubo lugar para la clase media en la tradición del humor gráfico³². En 1978 comenzó a publicarse la revista *La Bicicleta*, un medio de difusión cultural y artístico de oposición que quiso responder al autoritarismo y al llamado "apagón cultural" de esos años. Por sus páginas pasaron narradores, artistas y músicos disidentes consagrados, junto a creadores jóvenes promovidos a través de concursos y festivales. En *La Bicicleta*, además, se publicó la tira cómica *Súpercifuentes, el superhéroe de la clase media*, creación del dibujante Hernán Vidal bajo el seudónimo "Hervi". Segundo Cifuentes, el protagonista, era un personaje despistado y en permanente estado de confusión que representaba a una clase media empobrecida pero con altas expectativas materiales. A pesar de sus intenciones justicieras, inevitablemente cometía un error en su interpretación de la realidad y terminaba preso. Muchas de sus peripecias suceden en una ciudad totalmente volcada al consumo superficial y a la venta de todo tipo de chucherías importadas inútiles por parte de miembros pauperizados de la clase media. En ese sentido, las desventuras de este héroe incomprendido reflejaban los problemas concretos de su clase, como lo dejaba en claro el narrador en una de las tiras: "En todo este tiempo nuestro héroe se ha enfrentado con diferentes peligros: la cesantía, el consumismo, el IPC, y un par de etcéteras más, sin ánimo de ofender. Pero a Súpercifuentes no le vienen con payasadas y helo aquí, hábilmente disfrazado de vendedor ambulante (lo que además le permite subsistir)".

³² El humor gráfico suele ser un buen punto de entrada a las aspiraciones y ansiedades de clase media de cada momento, como lo ha demostrado el reciente estudio para el caso argentino de los años previos al golpe de Estado de 1976 de Isabella Cosse, "Mafalda: Middle Class, Everyday Life, and Politics in Argentina, 1964-1973", *Hispanic American Historical Review* 94, n° 1 (1 de febrero de 2014): 35-75.

Como era evidente para el lector de entonces, las aventuras de Cifuentes servían para criticar el estado de cosas del Chile de entonces: el consumismo desenfrenado, la pauperización de los asalariados, la destrucción de la universidad y la hegemonía de los "Chicago Boys". Cifuentes, de hecho, se propone liberar a la universidad de los "gángsters" de Chicago y entra a husmear a la escuela de "filosofía de mercado", donde el profesor enseñaba las bondades del "libro rojo de Friedman". Por golpear al profesor, por supuesto, termina en la cárcel. Súpercifuentes, a pesar de todo, hace suyo el discurso autoritario y nacionalista de la dictadura, aunque al no poder captar el verdadero sentido de la realidad dejaba al desnudo el carácter absurdo de la retórica oficialista. En una ocasión, por ejemplo, intenta defender a la nación de lo que cree es una conspiración extranjera en contra de la paz, lo que no era más que un partido de fútbol contra Ecuador por las clasificatorias al Mundial de España de 1982³³.

La creación de nuevos espacios de expresión, investigación social y creación artística entre finales de los años setenta y principios de los ochenta permitió disputar públicamente aquella noción autoritaria y neoliberal de la clase media. En oposición a las promesas de bienestar a través del mercado y el consumo, las representaciones críticas enfatizaron la precarización de la clase media y su imposibilidad material y moral de reproducción social. Con todo, esta no sería la única fuente de descontento mesocrático. A todo ello se le sumaba al mismo tiempo un procesamiento crítico de la represión estatal a través de los Derechos Humanos. De una u otra forma, las organizaciones mesocráticas hicieron eco de la indignación moral ante la violencia, lo que a su vez abrió las puertas a la formulación de una crítica política al régimen.

³³ El sitio "Memoria Chilena", de la Biblioteca Nacional de Chile, digitalizó *La Bicicleta*, edición especial, verano de 1983, dedicado a recopilar todas las tiras de "Súpercifuentes" publicadas hasta ese momento. Todas las referencias vienen de esa fuente, disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-54640.html> (visitado el 15 de julio del 2016).

Parte importante de aquella clase media redefinida en estos años avanzaría con cada más decisión hacia una oposición a la dictadura.

2.- La indignación moral. Derechos Humanos y politización

La desestabilización de la noción de clase media de finales de los años setenta estuvo relacionada con un creciente erosión de la base social de apoyo mesocrático al régimen. Ese proceso no fue consecuencia exclusiva de las reformas neoliberales y la consecuente clausura del Estado (capítulo 4), sino que también estuvo aparejada a un cambio en la percepción de la violencia estatal por parte un número creciente de miembros de estas organizaciones. Como señalé en el capítulo 2, después del golpe de Estado las organizaciones mesocráticas justificaron activamente o por omisión el masivo despliegue de la represión y la militarización del espacio público chileno. En ese contexto, la "sincronización" ideológica, la propaganda gubernamental y también los rencores acumulados de la lucha política contra la Unidad Popular posibilitaron una aceptación tácita -e incluso explícita- de la violencia de Estado, sobre el entendido de que venía a reinstaurar un orden perdido y amenazado por la izquierda aun cuando ésta afectara también a miembros de las organizaciones mesocráticas. Hacia finales de la década, sin embargo, fue cada vez más difícil sostener esta interpretación de los hechos. La supuesta racionalidad en la administración de la violencia pareció dar lugar a un uso arbitrario y alejado de todo tipo de control institucional. La DINA, la policía secreta de Pinochet, encarnó aquel uso abusivo y desproporcionado de la violencia, sobre todo cuando fue posible empezar a dimensionar el horror sin parangón en la experiencia chilena de sus prácticas de tortura y exterminio.

En los años setenta, en un proceso que articuló escalas locales, nacionales, regionales y globales, emergió un paradigma que redefinió la comprensión social de la violencia estatal: los

Derechos Humanos, entendidos como un conjunto de derechos individuales y colectivos inalienables y cuya violación ponía en cuestión el orden político donde ello acaecía. Por supuesto, nada esto era del todo nuevo. En los albores de la modernidad política occidental, en la Revolución Francesa, se habían proclamado derechos inalienables de los "ciudadanos", expandidos a los "humanos" luego de las devastadoras consecuencias de la II Guerra Mundial. La diferencia ahora estribaba en que los Derechos Humanos dejaron de ser una mera declaración, y fueron movilizados como una bandera de lucha moral y judicial contra el poder arbitrario de los Estados autoritarios. Fue, en ese sentido, un doble intento por limitar la soberanía estatal sobre sus ciudadanos al reforzar la noción que habían derechos que debían ser respetados con independencia del contexto político que se viviera, y también por individualizar la responsabilidad de los Estados en sus gobernantes.

Las experiencias autoritarias latinoamericanas entre los años sesenta y ochenta abrieron el espacio para la expansión global del paradigma de los Derechos Humanos a través de una relación sinérgica entre activistas locales, instituciones globales y redes transnacionales creadas para tal efecto. El caso de Chile fue uno de los más emblemáticos al respecto, y fue allí donde se centró una buena parte de esa preocupación internacional. Instituciones como Amnistía Internacional o la Organización de Naciones Unidas, junto a redes impulsadas por exiliados, partidos políticos, gobiernos democráticos y activistas locales en otras latitudes dieron fuerza a la aplicación de los Derechos Humanos como modo de interpretar y legitimar el repudio a la dictadura de Pinochet³⁴.

³⁴ Una historia transnacional de los Derechos Humanos y el rol jugado por la experiencia chilena en todo ello está más allá de los límites de este estudio. Para efectos del argumento aquí planteado, véase el sólido trabajo de Kathryn Sikkink, *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*, 1st ed (New York: W. W. Norton & Co, 2011); como también sus trabajos anteriores, uno junto a Margaret E. Keck, *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics* (Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1998); y Kathryn Sikkink, "The Emergence, Evolution, and Effectiveness of the Latin American Human Rights Network", en *Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship, and Society in Latin America*, ed. Elizabeth Jelin y Eric

La comprensión de la violencia estatal y el autoritarismo desde la óptica de los Derechos Humanos implicó un cambio radical en la forma en que los chilenos estaban acostumbrados a expresarse políticamente. Ello, por supuesto, se explica por la naturaleza "policida" de la dictadura y la escala de la represión utilizada para lograr ese objetivo. La abrupta clausura del sistema de partidos y de toda discusión ideológica a la que estaba habituada la cultura política chilena eliminó parte importante del potencial lenguaje de oposición al interior del país. Ello abrió las puertas a mecanismos e instituciones alternativas desde donde resistir el embate autoritario. En el caso chileno, la Iglesia Católica fue la institución que promovió desde un principio una oposición al régimen en función de la defensa de los Derechos Humanos. El éxito logrado -no sin tensiones y retrocesos- estuvo dado por la importancia política, social y cultural de la Iglesia en Chile, con lo cual fue capaz no sólo de constituirse en un interlocutor válido frente a la dictadura, sino también proveer de la infraestructura institucional necesaria para afrontar esa tarea.

La primera iniciativa al respecto fue el llamado "Comité Pro-Paz", organizado junto a iglesias de diversas denominaciones y con financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias³⁵. En un principio su acción estuvo orientada a ayudar a extranjeros perseguidos, pero los miles de casos de urgencia vital afrontados por chilenos pronto expandió su radio de acción. Si bien las acciones judiciales emprendidas no tuvieron efectos concretos, la sola recolección y exhibición de información sobre desaparecidos era una afrenta intolerable para el régimen. En 1975, el

Hershberg (Boulder: Westview Press, 1998); Véase también la fructífera compilación de Jessica Stites Mor, ed., *Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America* (Madison, Wis: The University of Wisconsin Press, 2013). Para una reflexión general sobre los problemas contemporáneos de los Derechos Humanos y sus tensiones inherentes entre lo local y lo global: Steve J Stern y Scott Straus, eds., *The Human Rights Paradox: Universality and Its Discontents* (Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2014). Por último, para un estudio sobre el caso chileno y sus consecuencias, Naomi Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011).

³⁵ Sobre el financiamiento y las relaciones transnacionales del Comité Pro-Paz, véase Bastías Saavedra, *Sociedad Civil en Dictadura*, cap. II.

Comité Pro-Paz, gracias a redes de solidaridad transnacional, logró desenmascarar la "operación Colombo" organizada por la DINA que buscaba hacer pasar la muerte de 119 militantes del MIR como producto de violentas purgas internas. El objetivo era desacreditar al Comité y a la lucha por los Derechos Humanos al evidenciar que los "desaparecidos" eran en realidad víctimas de la izquierda. El montaje, sin embargo, no duró mucho, e incluso los medios oficialistas chilenos llamaron a investigar el hecho³⁶.

Ante las presiones del régimen y las acusaciones de colaboración con el "marxismo", el Cardenal Raúl Silva Henríquez tuvo que aceptar su disolución, pero poniendo como condición que la Iglesia Católica podría continuar ese trabajo por su propia cuenta. Fue así como en enero de 1976 comenzó a funcionar la Vicaría de la Solidaridad, heredando parte de las redes y funcionarios del "Comité", pero añadiendo otras nuevas, que muchas veces superaban las barreras políticas del mundo cercano a la Iglesia. La Vicaría impulsaría a través de recopilación de información, acciones judiciales, organización popular una defensa sostenida de los Derechos Humanos, y por tanto una denuncia del carácter inmoral de las prácticas represivas de la dictadura. Por lo mismo, la prensa oficialista y los líderes civiles pro-régimen la atacarían sin piedad, acusándola de ser parte de un complot político internacional contra el gobierno de Chile. La lucha por la verdad y reconocimiento de los hechos -que incluyó denuncias de la Vicaría, montajes de la DINA y colaboración de la prensa, entre otras cosas- sería dura y amarga durante el resto de la década, tanto por las experiencias traumáticas de los afectados como por la asimetría de poder entre gobierno y opositores³⁷.

En los años siguientes a la fundación de la Vicaría los hechos empezaron a darle la razón a la preocupación eclesiástica sobre los Derechos Humanos. El repudio internacional a la

³⁶ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 108–12.

³⁷ Para un relato en primera persona de estas luchas por la verdad desde la Vicaría, véase Juan Ignacio Gutiérrez Fuente, *Chile: La Vicaría de la Solidaridad* (Madrid: Alianza Editorial, 1986).

dictadura no se vio alterado. Los informes condenatorios de la Comisión Ad-Hoc de la ONU y las resoluciones respectivas de la Asamblea General le aseguraron a Pinochet un lugar de paria internacional. Las aventuras de la DINA en otras latitudes -como los atentados contra el ex-Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats en Buenos Aires en 1974; Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno en Roma en 1975; y Orlando Letelier y su ayudante Ronni Moffit en Washington en septiembre de 1976³⁸- incrementaron la presión internacional. En Chile, el descubrimiento de cadáveres de campesinos en Lonquén, cerca de la capital en 1978 -el "año de los Derechos Humanos" decretado por la Iglesia- le dio otro golpe a la credibilidad del gobierno. Por primera vez, la Iglesia contaba con evidencia irrefutable de ejecuciones extra-judiciales cometidas contra personas desaparecidas por agentes de la dictadura. A pesar de los intentos del régimen por controlar el daño producido por el descubrimiento -lo que incluyó, entre otras cosas, la destrucción del lugar del hallazgo-, Lonquén quedaría como un símbolo potente de la arbitrariedad de la represión³⁹.

Con todo, la lucha por los Derechos Humanos no provocó una reacción de oposición generalizada al régimen. Eran los años del "boom" y de férreo control de la prensa. Las denuncias de la Vicaría y de otras organizaciones de Derechos Humanos eran insistentes, pero no lograban romper la inacción generalizada. La dictadura, además, hizo frente a la situación intentando clausurar el pasado reciente a través de una Ley de Amnistía en 1978 que, en la práctica, liberaba a los agentes del Estado de toda responsabilidad penal. Al mismo tiempo, comenzaba el proceso de "institucionalización". Las organizaciones mesocráticas planteaban

³⁸ Como es bien sabido, la proyección internacional de la DINA se hizo en coordinación con otras agencias de inteligencia latinoamericana, en la iniciativa conocida como "Plan Cóndor". Al respecto, véase J. Patrice McSherry, *Los estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina* (Santiago: LOM Ediciones, 2009); y John Dinges, *Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur* (Santiago de Chile: Ediciones B, 2004).

³⁹ Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 295–305; Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 156–67.

críticas al giro neoliberal, pero no traspasaban la frontera hacia un cuestionamiento integral del régimen⁴⁰.

La labor de denuncia y defensa de la red cívica en torno a la Vicaría de la Solidaridad comenzaría a hacer mella poco a poco en quienes habían confiado en la justeza del régimen, aún cuando ésta no pudiera expresarse políticamente. Pamela Lowden acuñó el término "oposición moral" para referirse a la labor de la Iglesia Católica y la defensa de los Derechos Humanos en dictadura, y así distinguirla de la oposición política, aquella llevada a cabo por partidos de centro e izquierda, tanto al interior de Chile como a través de sus redes en el extranjero. Por supuesto, reconoce Lowden, entre ambos tipos de oposición hay más de un traslape, tanto en los actores como en las motivaciones e implicancias involucradas. En el Chile dictatorial, sin embargo, la especificidad de la "oposición moral" fue una forma efectiva de responder al régimen en su aspecto más dramático, y desde ahí poder plantear una crítica integral -política- al autoritarismo. La "oposición moral", entonces, junto con posibilitar el accionar de la Iglesia y modificar en quienes habían recibido con beneplácito el golpe la comprensión de la represión, erosionó la legitimidad del régimen al hacer del autoritarismo una realidad cada vez más intolerable, con prescindencia de su legitimidad política original⁴¹. Esto afectó con especial dureza a quienes fundaban parte de su identidad social en la moralidad del poder político y el carácter virtuoso de la acción estatal, como la clase media. Para muchos de ellos, no sólo sus organizaciones habían sido impedidas de participar del Estado, sino que además el propio Estado actuaba de manera inmoral, sin arreglo a los límites tácitos en la administración de la violencia. La lucha por los Derechos Humanos y el develamiento de la dimensión monstruosa de la represión colaboraron en fracturar de manera irremediable la base social mesocrática del régimen.

⁴⁰ Stern, *Battling for Hearts and Minds*, 100–108 y 138–177.

⁴¹ Pamela Lowden, *Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973–90* (New York: St. Martin's Press, 1996), 1–32 y 149.

Hasta ese momento, sin embargo, la clase media no había interiorizado completamente el impacto de la represión en sus filas. La violación a los Derechos Humanos en dictadura tuvo un marcado carácter de clase. No fue un despliegue de fuerza contra todos los grupos sociales por igual, dado que uno de sus objetivos era disciplinar a quienes a ojos de los militares eran potenciales enemigos del Estado. Además, el carácter marcadamente antiizquierdista de la dictadura hizo que sus organismos de seguridad tuvieran especial celo en atacar a sus tradicionales bases sociales en las "poblaciones" y sindicatos. De allí que en los sectores populares se concentrara parte importante de la represión estatal, así como también de resistencia armada en los primeros meses del régimen⁴². Todo ello se tradujo en decenas de operaciones militares en barrios pobres, así como también en un alto número de desaparecidos. Según los datos de la Vicaría de la Solidaridad, hasta 1978 tenían información concreta de 767 casos de desaparecidos, de los cuales al menos 312 podían ser identificados con cierta certeza como parte de los sectores populares⁴³.

Sin embargo, hacia finales de los años setenta y principios de los años ochenta, la represión estatal comenzó a ser percibida con cada vez más fuerza como un despliegue de fuerza arbitrario, que podía afectar a cualquiera y no sólo aquellos involucrados en actividades

⁴² Sobre la represión con resultado de tortura al mundo popular capitalino, véase Corporación José Domingo Cañas 1367, *Tortura en poblaciones del Gran Santiago (1973-1990): Colectivo de memoria histórica*. (Santiago: Corporación José Domingo Cañas, 2005); Sobre la resistencia en las poblaciones en los primeros días de dictadura, véase Mario Garcés y Sebastián Leiva, *El golpe de La Legua: los caminos de la historia y la memoria* (Santiago: LOM Ediciones, 2005).

⁴³ Ello se deriva de las categorías de ocupación utilizadas para individualizar cada caso: "obreros", "obreros especializados", "artesanos" y "campesinos". Ese número seguramente se incrementaría de tener información más precisa. Categorías como "estudiante" o "dueña de casa" no dicen mucho sobre la adscripción social de cada caso. Vicaría de la Solidaridad, *¿Dónde están?*, 7 vols. (Santiago: Talleres Gráficos Corporación, 1978); María Eugenia Rojas, *La represión política en Chile* (Madrid: IEPALA Editorial, 1998). Por supuesto, esto no quiere decir que no hubo muertos y/o desaparecidos de sectores medios. El "Informe Rettig" de 1991, encargado por el gobierno democrático de Patricio Aylwin, señaló que al menos un tercio de las víctimas fatales fueron profesionales, empleados y estudiantes universitarios, mientras un octavo eran descritos como pequeños comerciantes y productores. Muchos de ellos probablemente se identificaban como clase media. Campesinos y trabajadores, por otro lado, aportaron con otro tercio de las víctimas. Steve J. Stern, *Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006* (Durham: Duke University Press, 2010), 85.

"políticas" o abiertamente delictuales. Por lo mismo, ya no solamente era una realidad vivida y percibida por los pobres del campo y la ciudad, sino también por los sectores medios. Varias organizaciones mesocráticas comenzaron a tener problemas para ignorar los casos de tortura, desaparición y exilio de algunos de sus miembros. Más aún, las críticas de varios de sus líderes a la política neoliberal del régimen produjo en algunos casos una reacción hostil del gobierno. Bajo diferentes subterfugios, Vilarín, Jara y Cumsille visitaron la cárcel por breves períodos. Ello, sin embargo, palideció con lo sufrido por uno de los representantes mesocráticos más reconocidos.

Tucapel Jiménez, máximo dirigente de la ANEF, avanzaba por entonces a pie firme hacia la oposición al régimen al involucrarse en la articulación de un nuevo movimiento sindical independiente. Como respuesta, los organismos de inteligencia planearon su asesinato. El 25 de febrero de 1982, mientras conducía su taxi, un grupo de desconocidos lo obligó a conducir a las afueras de Santiago donde le dispararon en la cabeza y lo degollaron. La operación contemplaba montar la escena para hacerla pasar por un hecho delictual, para lo cual cometieron un segundo asesinato -un falso suicidio- al supuesto agresor, luego de escribir una carta apócrifa de arrepentimiento. Los indicios de la acción del Estado, sin embargo, estaban por todas partes, y el intento por encubrir el crimen duró muy poco⁴⁴.

La muerte de Jiménez fue una señal clara de que las formas más crueles de represión habían llegado también a aquellas organizaciones de clase media que alguna vez habían apoyado a la dictadura. Fue, al mismo tiempo, un símbolo potente del quiebre del régimen con su base social mesocrática, dado que había sido ultimado alguien de una irreprochable estatura moral. De

⁴⁴ Candina, *Clase media, Estado y sacrificio*, 167–70. Para una crónica detallada del asesinato, véase Benedicto Castillo Irribarra, *Emblemático crimen de Tucapel Jiménez: el cóndor quiere carne* (Santiago: Editorial Mare Nostrum, 2005).

allí que, por ejemplo, el obituario de *Hoy* pusiera el acento en la condición de clase media de Tucapel Jiménez, reivindicando su figura desde aquel universo compartido de valores:

No buscó prebendas. De la administración pública salió (...) sin más tesoro que el aprecio proverbial de sus colegas, el desahucio y una pensión no mucho mejor que la de miles de jubilados. Mal podría decirse de él que fue un ambicioso de poder o que profitó indebidamente de sus cargos: al contrario, sacrificó su existencia en pos de un ideal, dejando a los suyos como única herencia su buen nombre y una situación típicamente de clase media, exenta de lujos, casi bordeando la pobreza.⁴⁵

La erosión moral producto de la lucha social y cultural por los Derechos Humanos activó y fundamentó en varios casos un proceso de politización interna de las organizaciones mesocráticas. En muchos casos, grupos internos empezaron a presionar a sus respectivas dirigencias con el objetivo de lograr una definición política opositora frente al régimen, generando conflictos que muchas veces llegaron a la prensa. Si bien la "oposición moral" implicaba un cuestionamiento más allá de las líneas clásicas de división política, fue a la vez la base para una crítica integral al régimen, en tanto se entendía que la violación sistemática a los Derechos Humanos era una condición esencial del autoritarismo militar. Para una solución estructural al problema, entonces, era necesaria la reconstrucción de un sistema democrático, donde -entre otras cosas- la violencia ejercida por el Estado estuviese fiscalizada por organismos competentes y, en último caso, por toda la ciudadanía. La demanda por democracia, además, se articulaba por las mismas razones con la crítica a las reformas neoliberales, la clausura del Estado y la institucionalización del régimen. Cuando esas críticas pudieron ser formuladas desde puestos directivos al interior de organizaciones de clase media, la transición hacia una oposición política avanzaba posiciones.

El caso más evidente a este respecto fue el de los colegios profesionales. En materia de derechos humanos, durante los primeros años de dictadura no hubo ningún atisbo de reacción

⁴⁵ "Tucapel Jiménez", *Hoy*, No. 241, 3 al 9 de marzo de 1982, 3.

institucional al respecto. Las iniciativas de mayor resonancia mediática que involucraron profesionales fueron llevadas a cabo a título personal, como el documento que cuatro abogados presentaron a los cancilleres americanos con motivo de la celebración de la VI Asamblea de la OEA en Santiago en 1976, y que significó la posterior expulsión de dos de ellos: Eugenio Velasco Letelier y Jaime Castillo Velasco⁴⁶. A principios de los ochenta, esos esfuerzos individuales encontrarían espacios al interior de los colegios hasta llegar a redefinir en su totalidad el norte de sus preocupaciones.

De cierto modo, ese cambio fue propiciado por la decisión del régimen de transformar los colegios en asociaciones gremiales en 1981 que, además, obligaba a la celebración de elecciones para constituir nuevas directivas. Los resultados fueron decisivos del cambio en las preferencias de los profesionales chilenos. En la mayoría de los colegios triunfaron listas llamadas "renovación gremial", que aglutinaban a opositores de centro e izquierda. Así sucedió en el Colegio Médico, tras obtener el 58% de los sufragios, y en el Colegio de Asistentes Sociales, en el que compitieron dos listas disidentes. En el Colegio de Periodistas, donde ya habían organizado asambleas desafiando las restricciones gobierno⁴⁷, la lista de izquierda ganó por una mayoría inobjetable. Constructores civiles y químicos-farmacéuticos, del mismo modo, le dieron la primera mayoría a candidatos no alineados con el régimen, mientras 11 de los 14 consejeros

⁴⁶ Así lo entendió también la "Comisión Rettig", instancia gubernamental que investigó la violencia de Estado con resultado de muerte una vez recuperada la democracia. *Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación*, vol. 1, Tomo II (Santiago: s/e, 1991), 612.

⁴⁷ Las reuniones de periodistas disidentes y los consecuentes conflictos con la directiva del colegio empezaron en 1979, en particular a raíz de la celebración del III Congreso de Periodistas. En esa ocasión se hizo caso omiso de la advertencia del Subsecretario del Interior Enrique Montero Marx en el sentido de que la reunión sólo tendría carácter informativo. Emilio Filippi y otros periodistas de centro e izquierda respondieron con un documento aprobado por los asistentes criticando la censura y los continuos ataques a la libertad de prensa. Por supuesto, todas estas actividades fueron profusamente difundidas por *Hoy*. "A los señores periodistas", *Hoy*, Año II, No. 87, 31 de enero al 6 de febrero de 1979, 37; "Por la libertad de expresión", *Hoy*, s/n, 30 de mayo al 5 de junio de 1979, 3; "El Congreso de la unanimidad", s/n, *Hoy*, 17 al 23 de octubre de 1979, 9.

electos en el Colegio de Ingenieros se identificaban con la oposición. En el balance final, sólo agrónomos, kinesiólogos, dentistas y abogados lograron mayorías pro-régimen.⁴⁸

Los candidatos electos en las listas de "renovación gremial" coincidían en un análisis crítico de la política económica del gobierno y la convicción de que la defensa de los Derechos Humanos debía ser incluida en la agenda de sus organizaciones⁴⁹. Muchos, además, compartían militancias políticas comunes, sobre todo de partidos de centro como las diferentes fracciones en las que se había dividido el radicalismo y, sobre todo, la Democracia Cristiana. Para entonces, la DC se había instalado con decisión en el campo de la oposición, dejando atrás los años en que para salvar "el cuerpo y el alma" del partido habían aceptado el orden dictatorial. El impacto de la represión sobre algunos de sus militantes y medio de comunicación, la presión de las redes internacionales del partido, la negativa del régimen a incluirlos en cualquiera de sus decisiones, y la salida de quienes aún colaboraban con el régimen, terminaron por decidir a la dirigencia de abandonar toda esperanza de entendimiento con el gobierno⁵⁰. Cuando la dictadura convocó al plebiscito para ratificar la Constitución, Eduardo Frei emergió como el gran líder opositor. Pocas semanas antes del asesinato de Tucapel Jiménez, en enero de 1982, sin embargo, Frei sufrió complicaciones de salud tras una simple intervención quirúrgica. Su inesperada muerte - responsabilidad, como se sabría años después, de agentes de inteligencia del régimen- dejó a Patricio Aylwin en la primera línea de fuego, con la misión de preparar al partido para dirigir a la

⁴⁸ "Colegios: Otra prueba de fuego", *Hoy*, No. 223, 28 de octubre al 3 de noviembre de 1981, 11-13; "Colegios Profesionales. Las nuevas directivas", *Hoy*, No. 225, 11 al 17 de noviembre de 1981, 9-10. "El desafío de los nuevos consejeros", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 91, junio de 1982, 6. El Colegio de Profesores, creado por la propia dictadura y en manos de dirigentes obsecuentes, se resistió a celebrar elecciones. Ante la impenetrabilidad del colegio, los profesores disidentes organizaron la Agrupación Gremial de Profesores de Chile (AGECh) en 1981. Sólo en 1985 pudieron apoderarse de la dirección del Colegio. Azun Candina, "Vivir una dictadura: historia y memoria de los profesores de Chile (1973-1990)", *Historia* 396 2 (2014); Gabriel Guzmán Riquelme, "Colegios profesionales y asociaciones gremiales durante el proceso de recuperación de la democracia en Chile" (Centro de Documentación - Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junio de 2012), s/p.

⁴⁹ Aquel consenso dio pie también a la refundación de la Confederación de Colegios Profesionales 1981, adquiriendo reconocimiento legal con el nombre de "Federación" al año siguiente. "Crean Federación de Colegios Profesionales", *El Mercurio*, 28 de septiembre de 1982, 3C.

⁵⁰ Arriagada, *Por la razón o la fuerza*, 125-47.

oposición en una eventual transición democrática. La victoria de muchos de sus militantes en los colegios profesionales fue uno de los primeros pasos en esa dirección⁵¹.

La presencia de radicales y democratacristianos en las nuevas directivas profesionales alimentaba aún más acusaciones del gobierno de que la defensa de la Derechos Humanos estaba motivada políticamente, es decir, respondía a una ambición de poder antes que a una genuina preocupación humanitaria. Subyacía a todo esto aquella convicción que estipulaba la total separación entre una acción netamente "gremial" -preocupada de asuntos propios de la organización- a una "política", terreno impropio para la defensa de los intereses profesionales. Bajo la dictadura militar, además, la "política" pasó a ser una palabra peligrosa, dada la insistencia oficial en denostarla como fuente de desorden, pasiones desbordadas y demagogia. De allí entonces que cualquier expresión pública de discrepancia con el régimen pudiera ser entendida como un acto "político" que, tal como se repitiera cientos de veces, no cabía al interior de un gremio.

A finales de los setenta, ese tipo admoniciones se multiplicaron al verificarse conflictos internos a raíz de la actitud obsecuente de algunas directivas gremiales con el régimen. Eran comunes por entonces acusaciones como las del presidente del Consejo Regional Santiago del Colegio Médico, Sergio Reyes, contra la Asociación de Capítulos Médicos de la capital por pretender llevar al gremio a una inaceptable postura política al cuestionar la representatividad de la directiva gremial⁵². Por todo esto, muchos candidatos a cargos directivos en 1981 tuvieron especial cuidado de separar las aguas. Eduardo Arriagada, cuya militancia democratacristiana no era misterio para nadie, insistió en que su candidatura no era política, y que el Colegio de

⁵¹ Aunque indulgente con la colaboración democratacristiana con el régimen, véase el testimonio de Aylwin, *El reencuentro de los demócratas*, 44–184.

⁵² "Problema interno en el Colegio Médico", *La Segunda*, 8 de septiembre de 1979, 2; "Colegio Médico fue utilizado con fines político partidistas", *El Mercurio*, 7 de septiembre de 1979, 1C; "Insisten en la no representatividad del Consejo Regional de Médicos", *La Tercera*, 5 de septiembre de 1979, 12.

Ingenieros no se sometería a las exigencias de un partido. Ello, por cierto, no lo inhibía de formular críticas a la política económica del gobierno, pero siempre -según señalaba- por el bien de sus asociados y la economía nacional⁵³. El presidente del Colegio Médico en 1983, el también demócratacristiano Juan Luis González, sintetizaba de buena forma esta lógica. Ante acusaciones de instrumentalización partidaria del gremio, respondió:

Ese es un gravísimo error de información ¡O un cargo absolutamente infundado! Estuve a punto de decir una infamia ¡Nunca el consejo que presido se ha movido por razones políticas! Y mientras yo esté aquí ¡jamás el Colegio será caja de resonancia o instrumento de políticas partidistas o partidarias! ¡Nunca! -golpea su escritorio con el puño cerrado- ¡Nunca jamás! Eso no quiere decir que abjure de la ideología que tengo desde los 17 años y que espero conservar hasta los 90, si es que vivo tanto⁵⁴.

Una vez asentadas las directivas de oposición, la defensa de los Derechos Humanos se constituyó en una de las más importantes banderas de lucha. El Colegio Médico, por ejemplo, renovó el formato y el contenido de su revista gremial para dar cabida a estas preocupaciones. En el discurso central del "Día del Médico" en diciembre de 1982, el presidente del Colegio Médico Juan Luis González comprometió a su organización a la "permanente vigilancia" de los Derechos Humanos⁵⁵. Ello se expresó, por una parte, en una reivindicación sistemática de los médicos exiliados a través de una remozada revista gremial, y en gestiones ante el gobierno para autorizar su regreso. Como respuesta, llegaron decenas de cartas de agradecimiento de los afectados desde diferentes lugares de Europa y América Latina⁵⁶. Por otro lado, y en un tema que afectaba la base

⁵³ "Colegio de Ingenieros no puede dedicarse a aplaudir todo" (Entrevista a Eduardo Arriagada), *Hoy*, No. 252, 19 al 25 de mayo de 1982, 15. Sus precauciones no bastaron para que, una vez electo presidente del Colegio de Ingenieros, se suscitara varias polémicas públicas a través de cartas a periódicos cuestionándolo por su militancia. Guillermo Souper, por ejemplo, rechazó lo que consideraba era una dirección "política" del Colegio. La respuesta vino del propio Arriagada, rechazando las imputaciones de actuar movido por órdenes partidistas e invitándolo a participar de la discusión interna. Guillermo Souper, "Posición política del Colegio de Ingenieros" (Carta al director), *El Mercurio*, 31 de agosto de 1983, 2A; Eduardo Arriagada, "Posición política del Colegio de Ingenieros", (Carta al director), *El Mercurio*, 6 de septiembre de 1983, 2A

⁵⁴ El remedio, ¿peor que la enfermedad? (Entrevista a Juan Luis González), *El Mercurio*, 30 de abril de 1983, 5D.

⁵⁵ "El día del médico", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, s/n, diciembre de 1982, 52.

⁵⁶ "Médicos en el exilio", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, s/n, agosto de 1982, 26-27; "Colegio Médico asumirá la representación de sus colegas exiliados", *La Tercera de la Hora*, 13 de noviembre de 1982, 8.

moral de la profesión médica, el Colegio abordó los casos de médicos involucrados en prácticas de tortura a raíz de un reportaje publicado en la revista norteamericana *Newsweek*, reproducido por *Vida Médica*. Por entonces llegaron denuncias concretas contra miembros del Colegio, iniciándose una investigación interna para identificar responsabilidades. Juan Luis González, entre otras gestiones, aceptó entrevistas de medios internacionales para dar publicidad a esta situación. También se reunió con el presidente de la Corte Suprema para entregarle antecedentes concretos de casos de tortura⁵⁷.

3.- Dos casos de estudio: Colegio de Abogados y Masonería

La penetración de demandas por democracia y defensa de los Derechos Humanos en organizaciones mesocráticas no fue un proceso lineal ni exento de conflictos. En su interior se enfrentaron posiciones irreconciliables en cuanto a la valoración del autoritarismo, el neoliberalismo y la represión estatal, pero también hubo espacio para dudas y autocríticas. Dadas las restricciones institucionales y los sistemas de renovación de dirigencias, incluso la articulación de una mayoría de miembros decididos por una línea opositora al régimen no era garantía suficiente para forzar un cambio de rumbo. Para tener una comprensión más acabada de ese proceso de conversión se requiere entrar por un momento al interior de estas organizaciones, escuchar las demandas, razonamientos y ansiedades de sus miembros y poner atención a las prácticas institucionales llevadas a cabo para asegurar el triunfo de una u otra posición. Veamos para ello los casos del Colegio de Abogados y la Masonería.

⁵⁷ "Discurso pronunciado durante la constitución del 'Comité contra la tortura'. Dr. Pedro Castillo", *Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile*, Volumen 34, No. 2, septiembre de 1983, 57; "Aumenta el ascendiente del Colegio Médico" (entrevista a Luis González), *Hoy*, s/n, 21 de abril de 1982, 17; "Tribunal médico juzgará a colega acusado", *Las Últimas Noticias*, 17 de junio de 1983, 13; "Comenzó 'proceso' a médicos interrogadores", *Las Últimas Noticias*, 22 de junio de 1983, 9; "Dirigentes de médicos con presidente de Corte Suprema", *Las Últimas Noticias*, 24 de noviembre de 1983, 7.

El Colegio de Abogados colaboró de manera activa con el régimen para rechazar las acusaciones de violaciones de Derechos Humanos desde organismos internacionales. Sistemáticamente rechazó los informes de la Comisión Ad-hoc de la ONU, acusándolo de contener "distorsiones e inexactitudes" motivadas por el hecho de que "todos y cada uno de sus integrantes estaban ostensiblemente prejuiciados en contra de Chile", según informaba Pablo Rodríguez al Consejo en 1976⁵⁸. Del mismo modo, el Colegio asesoró al gobierno para dar una respuesta jurídica a estas acusaciones, apelando a la experiencia de la Unidad Popular y a la necesidad de restringir las libertades individuales en la lucha contra la "subversión". La lucha por los Derechos Humanos, en esa lógica, no sería más que la punta de lanza de una enorme campaña internacional contra Chile promovida por el "marxismo"⁵⁹.

La defensa irrestricta del Consejo General al Gobierno, sin embargo, comenzó a ser cada vez más costosa a la luz de algunos acontecimientos. Las expulsiones de Velasco y Castillo pusieron al Colegio en una difícil posición al tener que apoyar una medida que no sólo afectaba a dos de sus más reconocidos miembros, sino que también adolecía de cualquier tipo de legitimidad jurídica⁶⁰. Por entonces, otros casos de abusos de las fuerzas de seguridad contra abogados añadían nuevas dificultades, que incluso pondrían en cuestión la composición del Consejo. A mediados de 1977, el abogado Guillermo Bello Doren tomó a su cargo la defensa de un ciudadano extranjero que tuvo un accidente automovilístico con Fernando Opazo Larraín. En uno de los comparendos en el juzgado de policía local de Ñuñoa, un joven con peinado militar acompañante de Opazo Larraín -que luego sería identificado como agente de la DINA- insultó y

⁵⁸ *Boletín Informativo. Publicación del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile*, s/n, 1976, 5. ACAB

⁵⁹ El documento oficialista *La situación actual de los Derechos Humanos en Chile* (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975), pensado para distribución internacional, resumía este tipo de razonamientos. En él se reproducían varios de los argumentos jurídicos elaborados por el Colegio de Abogados.

⁶⁰ El propio Jaime Castillo se encargó de recordar la ilegitimidad de la medida desde el exilio a través de un folleto titulado "El derecho a vivir en la patria" de 1977. "Volver a la patria", *Hoy*, Año I, No. 21, 19 al 25 de octubre de 1977, 17.

amenazó al abogado de la contraparte. Días después, Bello Doren desapareció. Los abogados de su oficina interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema y el Colegio de Abogados, el cual fue desestimado cuando, dos semanas después, Bello Doren apareció en su casa, aduciendo amnesia para no declarar lo sucedido. Ante una nueva denuncia de agresión al abogado Guillermo Cáceres, patrocinante de la causa, el Colegio abrió otra investigación, mientras Bello Doren salía del país con dirección a Suecia, no sin antes relatar por escrito los horrores a los que estuvo sometido durante los días que estuvo abducido. Ante lo que consideraban una denuncia exagerada y sin los antecedentes necesarios, el Colegio de Abogados abrió un sumario contra los abogados que habían interpuesto el recurso: Pedro Barría y Roberto Garretón, además del propio Cáceres⁶¹.

En respuesta, los abogados sumariados presentaron un recurso de inhabilidad contra trece consejeros del Colegio. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones acogió el recurso en un primer momento, y ordenó que los asientos vacantes del Consejo se reemplazaran por sorteo. Como consecuencia, se inició una larga batalla legal que incluyó una queja disciplinaria contra los magistrados de esa Corte por parte del Consejo General y una decisión final de la Corte Suprema en favor del Colegio. Mientras tanto, consejeros como Pablo Rodríguez negaban cualquier tipo de injerencia de la DINA, calificando el episodio de "autosequestro" y de esconder un "avieso propósito político"⁶².

⁶¹ "El silencio de Bello Doren", *Hoy*, Año I, No. 4, 22 al 28 de junio de 1977, 15; "Fallo polémico en la quinta sala", *Hoy*, Año I, No. 15, 7 al 13 de septiembre de 1977, 16.

⁶² "Piden inhabilidad del Colegio de Abogados", *La Tercera de la Hora*, 25 de agosto de 1977, 19; "Inhabilitan consejeros del C. de Abogados para conocer sumario", *La Tercera de la Hora*, 27 de septiembre de 1977, 9; "Esperando el pleno de la Suprema", *Hoy*, Año I, No. 20, 12 al 18 de octubre de 1977, 32; "Suprema rechazó recurso del Colegio de Abogados", *La Tercera de la Hora*, 17 de enero de 1978, 23; "Corte Suprema acogió recurso de reposición del Colegio de Abogados", *La Tercera de la Hora*, 1 de febrero de 1978, 12; "Tres abogados sumariados recurren a la Corte Suprema", *El Mercurio*, 7 de julio de 1979, 9C; "Aún creemos en secuestro de Guillermo Bello Doren", *La Segunda*, 10 de julio de 1979, 2; "Colegio de Abogados sumariará a 3 miembros", *La Tercera de la Hora*, 12 de julio de 1979. Después de más de dos años y medio de controversias, el Colegio de Abogados finalmente absolvió a los tres abogados sumariados. "Colegio de Abogados absolvió de todo cargo a tres juristas", *La Tercera de la Hora*, 23 de enero de 1980, 19.

La labor de la Iglesia Católica en defensa de los Derechos Humanos y la comprobación fehaciente de los horrores de la represión estatal a partir de los descubrimientos en Lonquén hicieron que la actuación del Consejo General en el caso de Bello Doren no pasara desapercibida. Por una parte, hubo quienes cuestionaron el silencio de la organización frente a la represión estatal, sobre todo considerando que el Colegio de Abogados se definía a sí mismo como un órgano de defensa del orden jurídico. La Vicaría de la Solidaridad, por ejemplo, dio a conocer un documento denunciando la pasividad del Colegio ante la persecución sufrida por abogados defensores de detenidos políticos, cuestionamiento compartido por los ex-presidentes de la organización Pedro Jesús Rodríguez y Alejandro Silva Bascuñán⁶³.

Julio Durán, el presidente vigente, estuvo al centro de esas polémicas. Mientras abogados como el demócratacristiano Adolfo Zaldívar acusaban que el "ayer fogoso defensor de la libertad y la democracia", sólo guardaba silencio "frente a las flagrantes violaciones a los derechos humanos", Durán se defendía señalando que el Colegio no era una organización política, que los amparos presentados al Consejo habían sido investigados, y que se habrían hecho las gestiones ante las autoridades correspondientes. Además, agregaba, no tenían atribuciones para defender a abogados involucrados en "actividades terroristas". "Hay delitos contra la organización del Estado y resultaría curioso que el Colegio protestara por un abogado que comete un delito". Para Durán, entonces, la represión estatal seguía teniendo una racionalidad ligada a la seguridad del Estado y la lucha contra la subversión, ante la cual el Colegio nada debía hacer⁶⁴.

Por otro lado, el Consejo General fue objeto de críticas debido a su falta de representatividad. Varios de los consejeros electos democráticamente antes del golpe habían renunciado por diferentes razones. Sus reemplazos fueron por abogados afines al régimen

⁶³ "Una misma cuna y dos sendas diferentes", *Hoy*, Año I, No. 31, 4 al 10 de enero de 1978, 21-22.

⁶⁴ "Juicio público. Hoy: Julio Durán", *Las Últimas Noticias*, 24 de septiembre de 1978, 2; Una misma cuna y dos sendas diferentes", *Hoy*, Año I, No. 31, 4 al 10 de enero de 1978, 22

designados por el propio Consejo, sin dar espacio a ningún tipo de disidencia. El problema, por cierto, era evidente también para el Consejo General. El vicepresidente Armando Álvarez reconocía en una sesión de junio de 1978 que "todo el Consejo se encuentra demasiado desprestigiado y que los consejeros no son conocidos en el gremio", algo que también se reproducía en los consejos regionales⁶⁵. De hecho, el Consejo de Concepción envió en 1979 un oficio a Santiago pidiendo explícitamente convocar a elecciones abiertas. El gobierno, sin embargo, se negaba una y otra vez dar la autorización respectiva⁶⁶.

Algunos grupos de abogados disidentes comenzaron a presionar al Consejo General para que asumiera una actitud más crítica en relación al gobierno y la defensa de los Derechos Humanos. En 1979, una treintena de abogados santiaguinos denunció ante el presidente de la Corte Suprema la multiplicación de maltratos a detenidos por los órganos represivos de la dictadura, iniciativa replicada luego en Concepción y Valparaíso. Al esquivar a propósito al Colegio, dejaba claro de modo implícito su inoperancia frente al tema⁶⁷. Poco tiempo después, un grupo de abogados de izquierda buscó dar mayor realce a esa demanda a través de la organización de la "Asociación de Abogados pro Derechos Humanos", dirigidos por Fabiola Letelier⁶⁸.

Al mismo tiempo se organizaba un "Sindicato de Abogados", en cuyas filas se encontraban varios dirigentes democratacristianos⁶⁹, y cuya existencia no pasó desapercibida. Para algunos de los consejeros, la existencia de un grupo alternativo socavaba en la práctica la

⁶⁵ "Sesión en 22 de mayo de 1978", Actas del Consejo General, 1978, ACAb, 6.

⁶⁶ "Sesión en 5 de marzo de 1979", Actas del Consejo General, 1979, ACAb, 3.

⁶⁷ "Preguntas a la justicia", *Hoy*, s/n, 24 al 30 de octubre de 1979, 11; "¿Y se hizo justicia?", *Hoy*, No 148, 20 al 27 de mayo de 1980, 12; "Réplica de abogados", *Hoy*, s/n, 3 al 9 de octubre de 1979, 69.

⁶⁸ "Abogados refutan declaración del Secretario Gral. de Gobierno", *La Tercera de la Hora*, 4 de febrero de 1981, 25.

⁶⁹ "Abogados. El por qué del NO", *Hoy*, No. 164, 10 al 16 de septiembre de 1980, 29.

legitimidad del Consejo⁷⁰. Tampoco faltaron instancias de enfrentamiento directo. En 1980, a raíz del llamado al plebiscito constitucional, un centenar de abogados del "Sindicato" irrumpió en una sesión del Consejo exigiendo ser escuchados. Cuatro representantes expusieron sobre la falta de legitimidad del texto constitucional y la necesidad de un pronunciamiento más firme del Colegio en la materia. La iniciativa surtió cierto efecto, ya que provocó conflictos al interior del Consejo entre quienes apoyaban al gobierno y aquellos que presentaban reservas frente al texto constitucional, sobre todo considerando que proyecto elaborado por el Colegio de Abogados había sido ignorado por el gobierno⁷¹.

Con todo, el Consejo no varió su posición frente a violaciones a los Derechos Humanos sufridas por algunos de sus miembros. En agosto de 1981 fueron expulsados de Chile los abogados socialistas Carlos Briones y Orlando Cantuarias, y los demócratacristianos Jaime Castillo y Alberto Jeréz. A pesar de las peticiones de amparo, el Consejo decidió no intervenir en el asunto escudándose en el hecho de que la medida había sido tomada por el gobierno en virtud de las actividades "políticas" de los abogados, y no por el ejercicio de sus labores profesionales⁷².

⁷⁰ Julio Durán le hizo saber al Ministro de Economía la inconveniencia de la existencia de organizaciones como el "Sindicato", usándolo de ejemplo para autorizar elecciones. El consejero Jorge Leyton fue más explícito al respecto: "El problema de la generación de los consejeros es delicadísimo, ya que el sistema de impedir las elecciones no resiste más en el ambiente nacional. Un ejemplo de la situación que afecta al Colegio, es la creación reciente de un Sindicato de Abogados, toda vez que, si bien éste no le resta atribuciones, en el hecho la socava". "Sesión ordinaria de 14 de enero de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAB, 2-3.

⁷¹ Sesión ordinaria de 1ero de septiembre de 1980", y "Sesión ordinaria de 8 de septiembre de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAB, 2-3 y 4. En una amarga carta de Guillermo Izquierdo, entonces presidente subrogante, al secretario del Consejo Julio Tapia, relató cómo una mayoría oficialista dirigida por Valentín Robles había "pasado la aplanadora" para cambiar una declaración ambigua acordada por el Consejo por otra en favor del plebiscito. Además, agregaba Izquierdo, esa declaración le daba un carácter "político" al Consejo, dado que contradecía punto por punto al texto publicado por los abogados del "Sindicato". De allí se siguieron una serie de recriminaciones internas entre ambos grupos circunstanciales. "Carta de Guillermo Izquierdo Araya a Julio Tapia Folk, 10 de septiembre de 1980", Actas del Consejo General, 1980, ACAB, s/p.

⁷² "Sesión extraordinaria de 17 de agosto de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAB, 2-3. El Consejo recibió también una petición de Fabiola Letelier para intervenir en favor de Jaime Castillo, ya que era el abogado patrocinante de la causa por el asesinato de su hermano Orlando Letelier. Luego de un intenso debate, el Consejo sólo envió una nota al Ministro del Interior, aunque con un voto de minoría que reafirmaba la naturaleza política (y por lo tanto legítima) de la detención y expulsión de Castillo. "Sesión ordinaria de 5 de octubre de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAB, 2.

Las elecciones gremiales llevadas a cabo en noviembre de ese mismo año modificaron hasta cierto punto el escenario. La lista 1 en competencia la conformaron candidatos oficialistas quienes, como Julio Durán, seguían brindando apoyo político al régimen a pesar de las quejas públicas por la transformación de los colegios en asociaciones gremiales. Por otro lado, la lista 2 estuvo integrada en su mayoría por abogados demócratacristianos y socialdemócratas, acompañados de una tercera lista con solo dos candidatos de izquierda, todos críticos de la obsecuencia del Colegio con la dictadura. Como era de esperarse, las críticas y réplicas asumieron un fuerte tono confrontacional, sobre todo cuando las listas opositoras pusieron al centro de la disputa el problema de los Derechos Humanos y el autoritarismo. El propio Durán, por ejemplo, se encargó de calentar el ambiente al acusar a las listas opositoras de estar motivadas políticamente, incluso con presencia de "comunistas" al interior de ellas⁷³.

Las listas en disputa, por otra parte, echaron mano a todos los recursos disponibles para ganar votos. Los opositores apelaron a figuras de peso político como Eduardo Frei, quien estuvo presente el día de la elección. En el otro bando, los preparativos estuvieron a cargo de los abogados "gremialistas" de Jaime Guzmán. Para ello formaron una comisión dedicada exclusivamente a llamar por teléfono a todos aquellos abogados que apoyaban al gobierno para ir a sufragar al Colegio⁷⁴.

A pesar de la labor de los grupos de abogados disidentes en los años anteriores, los resultados les fueron adversos, en gran medida gracias al sistema electoral que premiaba de sobremanera a la lista de mayoría. Con cerca del 48% de los votos, la lista 2 sólo pudo elegir cuatro consejeros -los radicales Juan Agustín Figueroa, Augusto Elgueta y Enrique Silva Cimma,

⁷³ "El Colegio de Abogados (AG) renueva directiva", *Las Últimas Noticias*, 22 de octubre de 1981, s/p.

⁷⁴ "Elección de abogados tras las bambalinas", *La Segunda*, 3 de noviembre de 1981, 3; "Gremialistas se organizaron mejor que los comunistas", *La Segunda*, 3 de noviembre de 1981, 3. Ambas estrategias produjeron que la elección de 1981 fuera por lejos la que mayor cantidad de votos captó -cerca de 3 mil-, muy por sobre aquellas celebradas durante la Unidad Popular.

más el democratacristiano Luis Ortiz-, mientras que el bloque oficialista se quedó con los restantes catorce asientos en el Consejo⁷⁵. El nuevo presidente, José Bernal, no dejó dudas de su posición respecto al aspecto más sensible de la elección al señalar en entrevista que "los derechos humanos están sometidos a restricciones, a fin de proteger el bien común"⁷⁶ Del mismo modo, para *El Mercurio* y Jaime Guzmán, la victoria era reflejo de la justeza de la línea "gremialista", ajena a la "política" que intentaba penetrar en los cuerpos intermedios⁷⁷.

Con todo, la lista minoritaria podía celebrar el hecho de que habían logrado acceder al Consejo General con cuatro activos defensores de los Derechos Humanos, además de demostrar la legitimidad de las elecciones democráticas bajo una dictadura⁷⁸. Gracias a ello, y más allá de la diferencia numérica, los consejeros de minoría lograron hacerse del control de las discusiones al interior del Consejo. Silva Cimma, criticó la costumbre del Colegio de dar por cerrada una petición de amparo luego de hacer algunas averiguaciones con las autoridades, mientras Augusto Elgueta, exigía una definición más clara en relación a los Derechos Humanos, considerando que no era sólo un problema jurídico ni afectaba únicamente a abogados⁷⁹. La reacción de la mayoría oficialista fue acudir a viejas prácticas parlamentarias: la dilatación del debate. En varias sesiones se pospuso la discusión de los puntos más conflictivos ante la falta de acuerdos. Cuando el grupo minoritario insistía en el tema, algunos consejeros se veían obligados a formular defensas más claras del gobierno, apuntando a la "vaguedad jurídica" de los Derechos Humanos y a su instrumentalización política internacional contra el régimen. El presidente Bernal resumía bien el ánimo del mayoría al señalar que "el Colegio puede asumir la noble misión de

⁷⁵ "Sesión ordinaria de 10 de noviembre de 1981", Actas del Consejo General, 1981, ACAB, 2-3.

⁷⁶ "José Bernal: La nueva voz de los abogados", *El Mercurio*, 29 de noviembre de 1981, 27.

⁷⁷ "Elección gremial", *El Mercurio*, 6 de noviembre de 1981, 3; Jaime Guzmán, "Triunfo gremialista", *La Segunda*, 6 de noviembre de 1981, 2.

⁷⁸ "La elección de abogados vista por Adolfo Zaldívar", *La Segunda*, 5 de noviembre de 1981, 2.

⁷⁹ "Sesión ordinaria de 3 de enero de 1982", Actas del Consejo General, 1982, ACAB, 3-4.

servir de intermediario con el Gobierno, pero (...) en un ambiente de tranquilidad y respeto mutuo y sin publicidad para evitar una sensación de oposición que no es real"⁸⁰.

Sin embargo, a los pocos meses el cambio era evidente. Los Derechos Humanos eran virtualmente el único tema debatido al interior del Consejo, exigiendo definiciones del Colegio en cada una de las coyunturas que tuvieron que enfrentar. Mientras la mayoría buscaba delimitar la protección a los abogados a su labor profesional, el "voto minoritario" buscaba redefinir las competencias del Colegio. Augusto Elgueta insistió una y otra vez en su razonamiento: si el Colegio estaba encargado del "bienestar de sus miembros", la actividad u orientación política del afectado no podía ser un cortapiso a la labor de defensa ante la represión. Para conjugar posiciones, se llegó a un "Acuerdo sobre Derechos Humanos": el Consejo mantenía su política de circunscribir la ayuda al ejercicio de la profesión, pero cada petición de amparo se revisaría individualmente, con un consejero a cargo⁸¹. De esa manera, casos como el del abogado de izquierda Eugenio Díaz Corvalán, detenido por organismos de seguridad del régimen y luego liberado por tribunales, pudieron ser discutidos al interior del Consejo. El grupo de minoría aprovechó la ocasión para ampliar el significado de los Derechos Humanos desde una concepción jurídica a un imperativo moral. Elgueta, a ese respecto, llamó al Consejo a reaccionar de modo resuelto ante este tipo de abusos, ya que "nuestra condición de hombres de bien nos obliga a proceder de acuerdo a nuestras convicciones morales"⁸².

Estas admoniciones y el desenlace del caso de Díaz Corvalán hicieron mella en el bloque oficialista. La respuesta del Ministro del Interior ante las consultas respectivas hizo hincapié en la participación del afectado en una "campaña orquestada por el marxismo internacional", sin

⁸⁰ "Sesión ordinaria de 19 de abril de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 7.

⁸¹ "Sesión ordinaria de 3 de mayo de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 7; "Sesión ordinaria de 24 de mayo de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 4.

⁸² "Sesión ordinaria de 14 de junio de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 3.

ofrecer mayores explicaciones. Silva Cimma reclamó ante el Consejo que la respuesta era inadmisible y una descortesía para con el Colegio, algo en lo que coincidieron consejeros como Valentín Robles, uno de los más incansables detractores de los abogados disidentes⁸³. Incluso aquellos consejeros conocidos por su actitud colaboracionista con el régimen empezaron a expresar dudas. Julio Durán señaló que ante la multiplicación de los atropellos a miembros del Colegio la posición frente a los Derechos Humanos debía ser reevaluada. La situación, según él, era completamente diferente a aquella vivida en los primeros años del régimen. Además, ante la detención de Díaz Corvalán, instó a sus colegas a "repudiar con firmeza" la actitud del gobierno⁸⁴.

Los abogados de oposición recibieron de manera periódica insumos de otros organismos para fundamentar la preocupación gremial por los Derechos Humanos. Augusto Elgueta, por ejemplo, dio lectura a un informe de la Vicaría de la Solidaridad en 1982, dando cuenta de que la situación general del país en esa materia no había sufrido ninguna mejora⁸⁵. A raíz de este tipo de iniciativas, las relaciones al interior del Consejo fueron tensionándose. Mientras los consejeros oficialistas le reclamaban a Elgueta la extensión desproporcionada de sus intervenciones, Silva Cimma anunció que se abstendría de darle facultades a la Mesa Directiva. Otros consejeros de oposición instaron a Bernales a renunciar dados los magros resultados en sus gestiones frente al gobierno⁸⁶.

La renuncia de Bernales a finales de 1982 reflejó una realidad tangible al interior del Consejo: la mayoría oficialista era incapaz de rechazar sin más todas las medidas propuestas por la minoría opositora. Muchas eran aprobadas, en la medida en que también pertenecían al ámbito de acción reglamentario del Colegio. Cuando existía una ventana legal para al menos ralentizar

⁸³ "Sesión ordinaria de 12 de julio de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 3.

⁸⁴ "Sesión ordinaria de 26 de abril de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 2; "Sesión ordinaria de 31 de mayo de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 4.

⁸⁵ "Sesión ordinaria de 2 de agosto de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 4

⁸⁶ "Sesión ordinaria de 9 de agosto de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 4; "Sesión ordinaria de 23 de agosto de 1982, Actas del Consejo General, 1982, ACAb, 1.

la aplicación de estos acuerdos o desviar el debate hacia temas propiamente "gremiales", los consejeros oficialistas no dudaban en hacerlo. La velocidad y urgencia de los acontecimientos, sin embargo, conspiraba contra esos intentos. En agosto de 1983, por ejemplo, el Colegio fue invitado a unirse a un acto de homenaje a Raúl Silva Henríquez quien dejaba su cargo en el arzobispado de Santiago. Silva Cimma instó al Consejo a aceptar la invitación en vista del rol del cardenal en la defensa de los Derechos Humanos, moción que fue resistida por algunos consejeros quienes sospechaban de una "connotación política" en el acto. En el debate, los consejeros opositores impusieron sus términos, y lograron acordar que Silva Cimma representaría al Consejo⁸⁷.

A pesar de la minoría numérica en el Consejo, los abogados disidentes lograron avanzar posiciones, cambiando dramáticamente la forma en que el Consejo General había asumido el problema de la represión y la violencia estatal. Todo ello redundó en la elección de Luis Ortiz como presidente del Colegio luego de las elecciones de consejeros de 1983, que aumentó levemente la cantidad de consejeros opositores. A diferencia de Bernales, en sus intervenciones públicas, Ortiz anunció que la organización se volcaría a "terminar con los excesos que palpamos a cada momento: especialmente problemas vinculados al exilio, a las detenciones abusivas"⁸⁸. Bajo la bandera de los Derechos Humanos, uno de los gremios mesocráticos más fieles al régimen había terminado su transición hacia una "oposición moral" que, por extensión, fue también política.

⁸⁷ "Sesión ordinaria de 22 de agosto de 1983, Actas del Consejo General, 1983, ACAb, 1-15.

⁸⁸ "Desde el Colegio de Abogados, trataremos de terminar con excesos y abusos" (entrevista a Luis Ortiz Quiroga), *Hoy*, No. 303, 11 al 17 de mayo de 1983, 17; "No queremos declaraciones retóricas" (entrevista a Luis Ortiz Quiroga), *Hoy*, No. 307, 8 al 14 de junio de 1983, 21-22. En las elecciones de consejeros de 1985 la minoría finalmente se convirtió en mayoría. De los diez puestos en disputa, una lista liderada por Patricio Aylwin ganó nueve. El abogado radical Raúl Rettig fue electo presidente del Colegio. Aylwin, *El reencuentro de los demócratas*, 301-2.

La masonería sufrió un proceso similar, aunque con un desenlace menos claro. Al igual que otras organizaciones mesocráticas, la Gran Logia había logrado mantener a raya a los grupos opositores gracias a su doble función de representantes de las mayorías y mediadora con el régimen. Siguiendo las directrices del Gran Maestro, las publicaciones oficiales de la Orden - *Occidente* y *Revista Masónica de Chile*-, hicieron hincapié en aspectos simbólicos e "iniciáticos" de la masonería, excluyendo cualquier reflexión crítica sobre el autoritarismo y sus prácticas represivas.

La dirigencia masónica contaba con varios recursos tanto para controlar el impacto de la oposición como también para asegurarse una base de apoyo entre las logias. Por una parte, el Gran Maestro tenía la capacidad de acoger peticiones y distribuir favores dada su cercanía con autoridades de gobierno. Así, por ejemplo, González Contesse podía dirigirse directamente a Pinochet para favorecer la postulación de Sergio González Parodi al cargo de Fiscal de Previsión Social de Obreros Municipales o interceder ante el rector de la Universidad de Chile para que Lucila Riveros pudiera acogerse a jubilación anticipada en el Departamento de Educación⁸⁹. Al mismo tiempo, distribuía dineros entre logias afines para levantar y reparar locales, como sucedió en 1980 con las logias "Honor y Lealtad" No. 33 y "Perfección" No. 113, ambas de Los Ángeles, y la "José de San Martín" No. 90 de Providencia, Santiago⁹⁰. Las cadenas de favores involucraban muchas veces gestiones al interior de los gremios mesocráticos, como fue el caso de José Azar, quien pidió al Gran Maestro interceder para lograr su ratificación como vice-

⁸⁹ Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Augusto Pinochet Ugarte, Presidente de la República de Chile. 7 de noviembre de 1980. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh; Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, al General Agustín Toro Dávila, Rector Delegado de la Universidad de Chile. 7 de julio de 1980. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh.

⁹⁰ Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Pedro Salas Briones, Gran Delegado Regional de Angol. 19 de agosto de 1980. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh; Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Luis F. Jiménez, Venerable Maestro de la Logia "José de San Martín" No. 90, Valle de Providencia. 28 de julio de 1980, AGLCh.

presidente del Registro Nacional de Viajantes en representación del sindicato nacional⁹¹. A todo ello se le sumaba la convicción de muchos masones de que la Orden debía mantener un perfil bajo ante la coyuntura, sin acercarse al peligroso mundo de las definiciones políticas. El Gran Maestro, en ese sentido, encarnaba la decisión estratégica de la Orden de mantenerse al margen de los acontecimientos para preservar la armonía interna y el trabajo filosófico de los "talleres".

La Gran Logia, además, supervisaba el tenor de los debates al interior de las logias. Cada una de ellas debía por estatuto enviar una copia de sus actas, donde se sintetizaban los temas debatidos y los miembros que intervenían en ellos. De ese modo, podían cerciorarse que las conclusiones del seminario "La Democracia como filosofía de vida y forma de gobierno", organizado por las logias de Temuco, no había tocado temas coyunturales, y las intervenciones de los asistentes sólo habían quedado al nivel de formulaciones abstractas⁹².

Supervisión, sin embargo, no significaba total control. En varias logias comenzaron a discutirse temas incómodos para la dirigencia. En mayo de 1977, en la Logia Unión Fraternal No. 1 de Santiago -la más antigua e importante de la masonería-, Humberto Moreno leyó una "plancha" titulada "Derechos Humanos y Masonería", en la que exhortaba a la dirigencia a un compromiso irrestricto con su defensa⁹³. Ya hacia fines de ese año, la Gran Logia había detectado una corriente opositora organizada. La principal crítica de este grupo era el silencio de la masonería frente a los cambios institucionales y la represión sistemática llevadas a cabo por la

⁹¹ Carta de José Azar Cabezas a Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 24 de julio de 1978. Caja s/n. Correspondencia GG:MM: 1974-1980, AGLCh.

⁹² "Acta Logia Nueva Luz No. 64, Valle de Temuco. 7 de agosto de 1979". Caja s/n, Logia Nueva Luz No. 64 Temuco, años 1978-1979-1980, AGLCh.

⁹³ "Acta Unión Fraternal No. 1, Valle de Santiago, 27 de mayo de 1977". Caja s/n, Logia Unión Fraternal No. 1, Santiago, años 1976-1977-1978, AGLCh. También hubo quienes reflexionaron sobre estos temas desde una lógica oficialista. En la Logia "Pensamiento y Acción" de la ciudad de Constitución, en la que se leyó un trabajo crítico de los Derechos Humanos en virtud de su instrumentalización política. "La importancia de la delimitación conceptual", *Revista Masónica de Chile*, Año LIII, septiembre-octubre de 1976, Nos. 7-8, 43.

dictadura. Para desactivar en parte esa presión, se creó ese año el "Consejo Asesor del Gran Maestro", aunque sin resultados concretos.

Al mismo tiempo, González Contesse usó la tribuna que le daba la "Tenida Solsticial" de la Gran Logia -una especie de cuenta anual de su mandato- para responder a sus críticos. En 1978 apuntó a la naturaleza apolítica de la masonería y a la inconveniencia de mezclar intereses "profanos" en el trabajo de los "templos". Acusó, además, falta de "espíritu masónico" a quienes pedían a la Gran Logia proyectar hacia la esfera pública su preocupación por las prácticas de la dictadura. "La Francmasonería no necesita salir a la calle para defender la democracia y los derechos humanos, ni para proclamar que su ideario humanista consagra ese sistema y esos derechos". En esa línea, complementaba González Contesse, la labor de la Iglesia Católica no sería más que oportunismo destinada a hacer proselitismo engañoso a través de la crítica al gobierno⁹⁴.

La presión sobre el Gran Maestro no disminuyó. Incluso masones cercanos a su figura empezaron a cuestionar la indiferencia de la Orden frente a las denuncias internacionales de violaciones a los Derechos Humanos en Chile⁹⁵. La oposición masónica, además, sumó a varios Venerables Maestros (líderes de cada logia), que a su vez formaban parte de la Asamblea de la Gran Logia⁹⁶. En respuesta, en la tenida solsticial del año siguiente González Contesse endureció el tono. Por una parte, reprochó a las fracciones disidentes de usar el crimen de Orlando Letelier en Washington para desprestigiar al gobierno a nivel internacional, expresando confianza en el Poder Judicial para resolver el caso. Por otro lado, acusó a la Iglesia de llevar a Chile a "miles de frailes y monjas extranjeros, dedicados, desde las parroquias, escuelas universitarias y otros

⁹⁴ "Una vez más la Gran Logia de Chile se reúne en su Tenida Solsticial", *Revista Masónica de Chile*, Año LV, julio-agosto de 1978, Nos. 5-6, 11.

⁹⁵ Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Tristán Gálvez Escuti, 28 de junio de 1979. Caja s/n. Correspondencia GG:MM., 1974-1980, AGLCh.

⁹⁶ Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990)*, 267.

centros que les han asignado, a un activismo político desembozado" con el objetivo de poner en la Presidencia a algún "obsecuente feligrés". Para probarlo, recordó una supuesta reunión que habría sostenido con un grupo de señoras lideradas por la esposa del secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, en 1974, quienes le habrían transmitido los planes de la Iglesia. El Cardenal Silva Henríquez, relataba Gonzalez Contesse, quería unir fuerzas con la masonería para derrocar a la Junta, "y conquistar el control directo del poder temporal"⁹⁷.

La acusación, publicada en la *Revista Masónica de Chile*, no pasó desapercibida para la prensa. Unos meses después, *Las Últimas Noticias* dio publicidad al discurso de González Contesse con grandes titulares. Autoridades eclesiásticas como los obispos Carlos Camus y Enrique Alvear tildaron las acusaciones de "falsas, inverosímiles e injuriosas", poniendo en duda también la representatividad del Gran Maestro en la masonería⁹⁸. La polémica, además, fue discutida en el seno de las logias e incluso en algunos espacios de la prensa escrita. Los maestros de la Logia Bernardo O'Higgins No. 79 de Ñuñoa acordaron dirigir una carta al Gran Maestro enrostrándole su imprudencia al formular esas declaraciones e incluirlas en la publicación oficial de la Gran Logia⁹⁹. Por su parte, un masón anónimo describía en carta a *Hoy* la desazón en las bases masónicas por la actuación de su líder. Si no había habido reacción institucional de las logias, agregaba, era "porque viven atemorizadas por la delación, la cual frena toda actividad"¹⁰⁰.

Mientras tanto, la oposición masónica ganaba fuerza y visibilidad pública, tensionando cada vez más el ambiente interno. En un reportaje de la periodista Malú Sierra para *Hoy*, quince masones anónimos expusieron sus críticas al Gran Maestro. Superando las animosidades

⁹⁷ "Mensaje del Gran Maestro González Contesse a la Asamblea Solsticial", *Revista Masónica de Chile*, Año LVI, Nos. 9-10, noviembre-diciembre de 1979, 7-8.

⁹⁸ "Grave denuncia hace masonería", *Las Últimas Noticias*, 19 de abril de 1980, 1-3; "Iglesia rechaza acusaciones contra Cardenal Raúl Silva", *La Tercera de la Hora*, 20 de abril de 1980, 5; "No todos los masones coinciden con los puntos de vista del Gran Maestro", *Las Últimas Noticias*, 23 de abril de 1980, 2.

⁹⁹ "Acta Logia Bernardo O'Higgins No. 79, Valle de Ñuñoa, 20 de julio de 1980". Caja s/n, Logia Bernardo O'Higgins No. 79 Ñuñoa, años 1978-1979-1980, AGLCh.

¹⁰⁰ "Masones y católicos" (Carta al director), *Hoy*, No. 145, 30 de abril al 6 de mayo de 1980, 69.

históricas de la Orden, muchos de ellos aspiraban que la masonería se pareciese más a la Iglesia Católica en relación a su compromiso con los Derechos Humanos. De hecho algunos reclamaron la organización de un símil de la Vicaría de la Solidaridad, y que *Occidente* asumiera el rol de *Mensaje*, la revista jesuita crítica del régimen. El objetivo, decían, era que la masonería volviera a ser el referente moral que había sido en otras épocas. Por todo ello era urgente centrar las energías de la institución en la reconstrucción democrática y la crítica a los abusos del régimen¹⁰¹.

El llamado a plebiscito para aprobar la Constitución en 1980 transformó la pugna interna soterrada en un conflicto abierto y público. Un grupo de sesenta masones disidentes y de alto rango publicó una inserción en periódicos titulada "Masones y plebiscito", en la que, en virtud de que "nuestra Directiva Superior no ha estimado el caso pronunciarse", planteaban a título personal su rechazo a la eventual aprobación de una nueva constitución, tildando el proyecto de "autocrático" y contradictorio con los principios democráticos que inspiraban a la Orden¹⁰². La reacción de la Gran Logia fue estricta e inmediata. Nueve de los firmantes recibieron un decreto de expulsión por, según se señalaba, violar el secreto masónico y arrogarse la representación de toda la Orden para inmiscuirse en asuntos políticos. González Contesse, además, aprovechó la ocasión para deshacerse de uno de sus detractores en la dirección de la masonería. José Quezada, el "Primer Gran Vigilante" de la Gran Logia fue incluido en el grupo de los expulsados, a pesar de que no había firmado la inserción. La razón esgrimida fue haber sido el único masón que dio su nombre en el reportaje de Malú Sierra para *Hoy* casi un año antes, aún cuando no había

¹⁰¹ Malú Sierra, "Los masones se pronuncian", *Hoy*, No. 120, 7 al 13 de noviembre de 1979, 18-24. El reportaje causó polémica, y parte de ella se trasladó a las páginas de *Hoy*. Mientras unos recordaban que quienes luchaban por la restauración democrática "son consecuentes con los principios de la institución y con las enseñanzas de los viejos masones", otros reivindicaban la figura de Allende. Hubo también quienes defendieron al Gran Maestro, aduciendo, como siempre, que la masonería "no es un partido político". "Masonería y democracia" (Carta al director), *Hoy*, No. 122, 21 al 27 de noviembre de 1979, 12; "Los tres puntos de los disidentes", *Hoy*, No. 126, 19 al 25 de diciembre de 1979, 14; "Los masones se pronuncian" (Carta al director), *Hoy*, No. 127, 26 de diciembre de 1979 al 1ero de enero de 1980, 85, respectivamente.

¹⁰² "Masones y Plebiscito", *La Tercera de la Hora*, 9 de septiembre de 1980, 18.

formulado críticas abiertas al Gran Maestro y, como reconocía la misma revista, no tenía relación con los otros quince masones anónimos¹⁰³. En respuesta a la expulsión, Quezada escribió una carta a los miembros de la Asamblea de la Gran Logia en que acusaba al Gran Maestro de dirigir una "minoría autocrática" basada en "en el temor y en un sistema electoral viciado e injusto"¹⁰⁴.

Los ánimos al interior de la masonería estaban crispados. Los nueve expulsados por firmar el inserto -René Court Portales, Claudio López, Jorge Fernández, Germán Sepúlveda, Juan Gallet, Julio Sepúlveda Rondanelli, Vasco Valdebenito y Diego Portales Frías- eran destacados representantes de la oposición al Gran Maestro, y también posibles candidatos para reemplazarlo en las elecciones que debían celebrarse en 1982. Varios de ellos, además, habían sufrido la misma transformación que muchos miembros de organizaciones de clase media: luego de luchar con denuedo contra la Unidad Popular, comenzaron a alejarse de la dictadura a raíz de su extensión, la dimensión de la represión y las reformas económicas¹⁰⁵. Desde ese diagnóstico habían intentado desde años anteriores cambiar el rumbo de la masonería hacia una posición crítica del régimen.

Una de las primeras medidas del grupo de expulsados fue dirigir una amarga carta al Gran Maestro en la que, además de rechazar las imputaciones que se les hacían, le enrostraban su

¹⁰³ "Los masones se pronuncian" (Carta al director), *Hoy*, No. 173, 12 al 18 de noviembre de 1980, 67. Las relaciones entre ambos dirigentes estaban rotas antes de la publicación de la inserción, sobre todo luego a partir de un duro intercambio epistolar en el que González Contesse exigía una rectificación pública luego de la publicación del reportaje y lo presionaba a renunciar a su cargo. Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a José Quezada Meléndez, Primer Gran Vigilante de la Gran Logia de Chile, 19 de diciembre de 1979. Caja s/n. Correspondencia GG:MM.: 1974-1980, AGLCh; Carta de José Quezada Meléndez, Primer Gran Vigilante de la Gran Logia de Chile, a Claro Sanhueza Peñalillo, Gran Orador de la Gran Logia de Chile, 9 de septiembre de 1980. Carpeta "Masones y Plebiscito (1980)", AGLCh; Carta de Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a José Quezada Meléndez, Primer Gran Vigilante de la Gran Logia de Chile, 1ero de febrero de 1980. Caja s/n. Correspondencia GG:MM.: 1974-1980, AGLCh

¹⁰⁴ Carta de José Quezada Meléndez a los miembros de la Asamblea de la Gran Logia de Chile, 10 de noviembre de 1980. Carpeta "Masones y Plebiscito (1980)", AGLCh.

¹⁰⁵ Como se señaló en el capítulo 1, Julio Sepúlveda Rondanelli había escrito varios artículos sobre la clase media y su carácter antitético con el proyecto revolucionario de la Unidad Popular. Por su parte, Diego Portales Frías había sido militante de la Democracia Radical, la fracción del radicalismo liderada por Julio Durán opuesta al gobierno. "El Gran Maestro de la Masonería no es Masón" (entrevista a Diego Portales Frías), *Cosas*, No. 112, enero de 1981, 24-25.

intento de reproducir al interior de la masonería "la idea de una sociedad unánime -en que no cabe la disidencia- que se pretende imponer extramuros". Y agregaban: "Ha sido el prolongado silencio que nos oprime, la perceptible pérdida de influencia en el mundo profano de la Orden Masónica, y la inquietud que percibimos en sus columnas, lo que nos movió a salir públicamente, (...) en defensa de los valores y principios de la Masonería"¹⁰⁶.

La crisis interna y los descargos de los expulsados, para ese entonces, ya inundaban los medios de comunicación. René Court Portales, acusaba en una "carta abierta" una "verdadera persecución dentro de la Masonería en contra de algunos miembros que tienen una posición distinta del pensamiento oficial", mientras Diego Portales Frías levantaba sospechas sobre el manejo financiero de la Gran Logia, sobre todo a raíz de la venta de la radio "La Verdad"¹⁰⁷. Al mismo tiempo, en una conflictiva sesión en noviembre de 1980, la Asamblea de la Gran Logia presionó al Gran Maestro para revertir las sentencias. Todo ello redundó en la apertura de negociaciones con los afectados. González Contesse exigió, entre otras cosas, que Diego Portales Frías se retractara públicamente de sus acusaciones, cuestión que hizo a través de una nueva inserción pagada en periódicos¹⁰⁸.

En diciembre de 1980, el Gran Maestro firmó los decretos de indulto. El asunto, sin embargo, no terminaría allí. Ser indultado implicaba reconocer de manera implícita una culpabilidad previa, diferente en ese sentido a ser "rehabilitado", noción que ponía el énfasis en la reversión de una medida impropia¹⁰⁹. Diego Portales Frías, quien habría acordado la

¹⁰⁶ Carta de Diego Portales Frías y otros a Horacio González Contesse, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 15 de octubre de 1980. Carpeta "Masones y Plebiscito (1980)", AGLCh.

¹⁰⁷ "Carta abierta al Jefe de la Masonería chilena", *El Mercurio*, 15 de noviembre de 1980, 5C; "Masones expulsados denuncian persecución dentro de la Orden", *El Mercurio*, 15 de noviembre de 1980, s/p; "El Gran Maestro de la Masonería busca pugna con Iglesia Católica" (entrevista a Diego Portales Frías), *La Tercera de la Hora*, 17 de noviembre de 1980, 7.

¹⁰⁸ "Declaraciones del señor Diego Portales Frías sobre sucesos acaecidos en el seno de la Masonería", *El Mercurio*, 22 de noviembre de 1980, s/p.

¹⁰⁹ "9 expulsados vuelven a reuniones masónicas", *El Mercurio*, 13 de enero de 1981, 2C

retractación pública a cambio de la rehabilitación, hizo sus descargos en entrevista para la revista *Cosas*: acusó al Gran Maestro de "antidemocrático", de carecer del "honor" suficiente para ser masón y de querer convertir a la masonería en una "orden del silencio"¹¹⁰. Como respuesta, Portales Frías fue nuevamente expulsado, a pocas semanas de las elecciones en la Gran Logia. Las acusaciones cruzadas tomaron un tono cada vez más vehemente: Portales Frías, en conferencia de prensa, reiteró sus sospechas de malos manejos financieros, anunció querrela y tildó al Gran Maestro de "pequeño Hitler" sólo preocupado de perpetuarse en el poder. Desde la Gran Logia adujeron que la expulsión había sido decisión del Tribunal de Honor, sin interferencia del Gran Maestro, agregando que "las cosas deben arreglarse adentro y no con mentiras en la prensa"¹¹¹.

La Gran Logia recibía también presiones desde el exterior. En 1980, una organización de "Masones chilenos en el exilio" se dirigió a González Contesse para enrostrarle su silencio frente al plebiscito constitucional¹¹². Al año siguiente se celebró el Primer Congreso de Francmasones Chilenos Exiliados en París, donde se decidió trabajar por la redemocratización de Chile bajo el auspicio del "Gran Oriente de Francia", organización que históricamente había tenido conflictos con aquellas logias que adherían al "rito escocés antiguo y aceptado". Poco tiempo después nació el "Gran Oriente de Chile" en el exilio, con logias esparcidas por las capitales de Europa occidental, y que reconocían el liderazgo del ex-rector de la Universidad de Concepción Edgardo Enríquez. A diferencia de la Gran Logia, el Gran Oriente no tenía problemas para definirse en temas políticos, y así lo haría en los años ochenta. Muchos de sus miembros militaban en

¹¹⁰ "El Gran Maestro de la Masonería no es Masón" (entrevista a Diego Portales Frías), *Cosas*, No. 112, enero de 1981, 24-25.

¹¹¹ "Crisis en la masonería", *El Mercurio*, 25 de junio de 1981, s/p; "Estudian querrela criminal", *Las Últimas Noticias*, 26 de junio de 1981, s/p; "Logia Masónica se defiende de las acusaciones de Portales", *La Segunda*, 25 de junio de 1981, s/p.

¹¹² "Carta masónica", *Hoy*, s/n, 10 de agosto de 1980, 15.

partidos y fracciones socialistas o socialdemócratas, y no pocos participaban de la "renovación" de la izquierda marxista chilena en el exilio¹¹³.

El liderazgo de González Contesse sufrió otro duro golpe con la dictación en enero de 1981 de la Ley de Reforma de la Educación Superior que, entre otras cosas, dismantelaba la Universidad de Chile. El filósofo Mario Ciudad, decano de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Educación, publicó entonces un largo ensayo en el que criticaba la estrategia aislacionista de la Gran Logia, acusándola de sobrevivir sin dignidad¹¹⁴. El Gran Maestro desplegó todos los recursos disponibles para controlar el daño a su figura y asegurar la elección de un sucesor afín a su política. Ante rumores que circularon por la prensa de que había renunciado al cargo¹¹⁵, aceptó dar una entrevista a *El Mercurio*, en la que -con su tradicional lenguaje oblicuo- reconoció la existencia de una crisis en la masonería, aunque confiaba en su pronta superación¹¹⁶. Al mismo tiempo, buscó tranquilizar a las autoridades de gobierno. En reunión con el General Mendoza, miembro de la Junta Militar, González Contesse aseguró el carácter apolítico de la Orden y le quitó importancia a los conflictos internos¹¹⁷.

Sus gestiones dentro y fuera de la organización parecieron dar resultados, porque en unas elecciones parciales en junio de 1981 su corriente obtuvo el 75% de los votos, eligiendo todos los cargos disponibles¹¹⁸. Un año después su candidato, Óscar Pereira Henríquez, fue electo como nuevo Gran Maestro, asegurando además todos los cargos de la Gran Logia. Las bases masónicas oficialistas estaban exultantes, como se lo hicieron saber en decenas de cartas y notas de

¹¹³ Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990)*, 326.

¹¹⁴ Ibid., 290.

¹¹⁵ "Crisis en la masonería", *Las Últimas Noticias*, 27 de enero de 1981, s/p; "Masones: El remezón del verano", *Hoy*, No. 185, 4 al 10 de febrero de 1981, 10.

¹¹⁶ "Habla Gran Maestro de la Masonería", *El Mercurio*, 22 de febrero de 1981, s/p.

¹¹⁷ "Masonería goza de buena salud", *Las Últimas Noticias*, 9 de julio de 1981, 3.

¹¹⁸ "Designan a dirigentes de Gran Logia", *El Mercurio*, 28 de junio de 1981, 3C.

felicitaciones. Günther Stange, masón de Puerto Montt, por ejemplo, dio cuenta su satisfacción por notar que la "q:.[uerida] Orden es imbatible frente a los pseudo-innovadores"¹¹⁹.

Pereira Henríquez, sin embargo, mostró una actitud ambigua frente a la crisis de la masonería, entendiendo que su liderazgo debía ser diferente al de su predecesor. Así, por una parte, en su primera intervención pública como Gran Maestro defendió la posibilidad de debatir temas contingentes y discrepar al interior de la Orden¹²⁰. Del mismo modo, la *Revista Masónica de Chile* no siguió publicando admoniciones contra la oposición interna como en el período anterior. Incluso hubo espacio para ensayos críticos, como el de Claudio López, uno de los expulsados de 1980, en el que exhortaba a la masonería a incidir en el mundo "profano"¹²¹. Por otro lado, el nuevo Gran Maestro se aseguró que los mecanismos de control siguieran funcionando. En una circular interna advertía que las "inquietudes y rebeldías" no podían ser "medio de expresión para situaciones personalistas o intereses políticos determinados", por lo que ordenaba llevar adelante los debates con "dignidad, medida y seriedad". "Somos un Poder Moral que nos une y dignifica en la acción común. No somos un poder político", finalizaba.¹²²

A pesar del intento del Gran Maestro de separar moral y política, lo cierto es que para segmentos cada vez más numerosos de algunos gremios mesocráticos la dictadura se había transformado en una realidad moralmente intolerable, que sólo podía resolverse a través de la democratización del poder político. La verticalidad del poder estatal, la militarización de la vida

¹¹⁹ Carta de Günther Stange a Óscar Pereira Henríquez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 29 de junio de 1982 (manuscrito). Caja s/n, Correspondencia G.:M.:., 1982, AGLCh.

¹²⁰ "Comprensión y respeto en relación al Gobierno" (Entrevista a Óscar Pereira Henríquez), *El Mercurio*, 1ero de agosto de 1982, 1C.

¹²¹ Claudio López, "Los principios masónicos y su proyección al mundo profano", *Revista Masónica de Chile*, Nos. 7-8, 1982, 29.

¹²² "Preservando nuestra identidad" (circular de la Gran Logia de Chile), 17 de agosto de 1981. Caja s/n, Correspondencia G.:M.:., 1982, AGLCh. Como producto de estas advertencias, entre 1982 y 1983 se verificaron nuevos castigos. Dos masones socialistas de la Logia "Unión y Fraternidad" No. 1 fueron expulsados luego de un largo e irregular proceso, cuyas causas parecían obedecer a discrepancias políticas con la oficialidad de dicha logia y la dirección de la Gran Logia. Vidal, *La Gran Logia de Chile (1973-1990)*, 303-22.

social y, sobre todo, la indignación que causaba constatar los horrores causados por la violencia estatal, organizaron y movilizaron a grupos de disidentes, incluso a aquellos que en un momento se identificaron con el relato épico de la lucha contra la Unidad Popular. Uno de sus objetivos fue disputar espacios y presionar a sus dirigencias para cambiar el rumbo y, de esa manera, actuar públicamente desde la legitimidad social que habían acumulado esas organizaciones. Más allá de los resultados finales disímiles, los casos del Colegio de Abogados y la Masonería son ejemplos concretos del grado de encono y polarización interna que había causado la acción de la "oposición moral". Del mismo modo, la relevancia mediática que alcanzaron ambas organizaciones en sus disputas daban cuenta de la necesidad de contar con arenas sociales en las que plantear un debate abierto sobre la naturaleza del régimen. En un contexto en el que la política formal estaba prohibida y el Estado había clausurado los canales de participación y negociación, varias de las organizaciones mesocráticas sirvieron de caja de resonancia de una cada vez más visible oposición de clase media.

4.- La crisis y las protestas

A pesar de la multiplicación de conflictos al interior de los gremios mesocráticos y los avances que la codificación de la represión desde los Derechos Humanos hacía en sectores sociales populares y medios, la dictadura se mantenía fuerte. La promulgación de la Constitución de 1980 y la fijación de un itinerario de transición hacia una democracia "protegida" resolvió uno de los principales problemas de legitimación del régimen. A la vez, la disolución de la DINA en 1977 y la Ley de Amnistía del año siguiente aliviaron en cierta medida la presión internacional sobre el gobierno por su registro en materia de Derechos Humanos. Más allá de los esfuerzos de los partidos políticos -los de izquierda, diezmados por la represión; la Democracia Cristiana, con

más recursos y organización-, la población chilena se mantenía en un estado de apatía generalizado. A ello colaboró en gran parte la profundización del "boom" del consumo. Las importaciones seguían creciendo, aseguradas por un tipo de cambio fijo con el dólar que lo mantenía artificialmente barato. El comercio, los "caracoles" y los *malls* aseguraban que el sueño del bienestar material neoliberal seguía estando vigente. Si bien muchos podían abrigar en su fuero interno críticas a distintos aspectos del autoritarismo militar, lo cierto es que las expresiones públicas de oposición estaban acotadas a determinados grupos -como la Vicaría de la Solidaridad y las organizaciones de Derechos Humanos- que, más allá de su relevancia mediática, no lograban concitar un apoyo activo de la mayoría social.

Todo ello cambió abruptamente a partir de la profunda crisis económica iniciada en 1981, y que alcanzó sus niveles más críticos en 1982 y 1983. Su origen puede encontrarse la recesión internacional que modificó los términos de intercambio, incrementó el costo del crédito y desestabilizó la balanza de pagos, pero su profundidad estuvo dada por las políticas neoliberales orientadas al consumo vía deuda y la transferencia del motor de desarrollo desde el ámbito productivo al financiero. El equipo económico de gobierno, de hecho, ignoró las primeras señales de alerta en 1981. El déficit de la cuenta corriente alcanzó entonces el 21% del PIB, mientras la deuda externa aumentaba en un 35%. Ese mismo año, quebró la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), uno de los buques insignia del modelo neoliberal de empresa competitiva y eficiente. La respuesta de los economistas de gobierno ante todo esto fue unánime: el mercado se ajustaría de manera automática a los cambios en el escenario internacional, por lo que no cabía ningún tipo de revisión de la política económica¹²³.

La situación económica se deterioró rápidamente en los meses siguientes, reflejo de la fragilidad de un modelo que necesitaba de créditos baratos y abundantes para funcionar. En

¹²³ Cavallo, Sepúlveda, y Salazar, *La historia oculta del régimen militar*, 401–12.

noviembre de 1981, el régimen decidió intervenir parcialmente la banca para salvarla del colapso, mientras que abril de 1982 Pinochet decidió sacar a Sergio de Castro y a los "Chicago Boys" del control de las políticas económicas. A pesar de los intentos de apaciguar los ánimos, incluso para los empresarios más afines a la dictadura era evidente que se estaba frente a una crisis de grandes proporciones, y no solo ante una turbulencia pasajera. Eso quedó claro para todos cuando el gobierno, contraviniendo explícitamente la receta neoliberal, decidió devaluar el peso. El súbito encarecimiento de la divisa provocó una seguidilla de quiebras de empresas, sobre todo aquellas que se habían endeudado en dólares. La banca, además, se vio sin posibilidades de cumplir sus obligaciones. En un giro irónico de los acontecimientos, parte importante del sistema financiero y sus empresas asociadas fue reestatizado por orden del gobierno. A pesar de estas medidas, en 1982 el PIB se contrajo en un 14%, la desocupación se empujó por sobre un 30% y la inflación volvió a aparecer a un ritmo de 20% anual¹²⁴.

La crisis no solo impactó en el sistema financiero y los grupos económicos formados al alero de la privatización compulsiva de empresas del Estado. En los sectores populares el desempleo alcanzó niveles dramáticos, haciendo aún más difícil la satisfacción de necesidades básicas. En la población Lo Hermida de la capital, por ejemplo, el 60% de los jefes de hogar se encontraba sin trabajo. Lo propio sucedió en los sectores medios. Miles de profesionales, técnicos, vendedores y oficinistas perdieron sus empleos, sumando todos ellos un cuarto del desempleo en Santiago¹²⁵. Muchos de ellos pasaron a engrosar las filas de taxistas y comerciantes por cuenta propia, entre otros oficios de menor remuneración, empujando la expansión de la

¹²⁴ Vergara, *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*, 323–42; Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*, 193–98; Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 234–43; Gárate, *La revolución capitalista de Chile*, 283–97.

¹²⁵ "La tragedia de la cesantía", *Hoy*, No. 264, 11 al 17 de agosto de 1982, 24. El Colegio de Ingenieros, por ejemplo, señalaba alarmado que las ofertas de trabajo se había reducido a un tercio entre enero-febrero de 1981 y 1982. Entre los ingenieros jóvenes, además, el desempleo llegaba a un 60%. "La cesantía entre los ingenieros", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 91, junio de 1982, 21.

economía informal. Los mercados "persas" -ferias informales de compra y venta de todo tipo de artículos- se multiplicaron, mientras lujosos "caracoles" quedaban en penumbras por deudas impagas de energía eléctrica, con varios de sus locales vacíos¹²⁶.

El desempleo incluso llegó a afectar la propia membresía a algunas de las organizaciones mesocráticas. El Gran Maestro Óscar Pereira Henríquez recibió informes sobre el alto número de masones cesantes que no podían pagar sus cuotas con regularidad, por lo que se recomendaba flexibilizar las exigencias económicas¹²⁷. En otros casos, el propio Gran Maestro tuvo que intervenir. Eduardo Silva Ramírez, quien se desempeñaba en un laboratorio químico y fuera despedido, apeló a través de Pereira Henríquez a la condición masónica de su ex-empleador para revertir la medida. La profundidad de la crisis económica hizo que ni siquiera una petición directa del Gran Maestro a uno de sus subordinados tuviera resultados positivos¹²⁸.

Algunas de las medidas asumidas por el gobierno hicieron las cosas más difíciles aún para ciertos grupos de clase media. La devaluación del peso, por ejemplo, golpeó fuertemente a los transportistas, encareciendo todos los insumos necesarios para sus vehículos. Además, como denunciaba Dimas Toro, presidente del gremio de la locomoción colectiva, muchos dueños de camiones, taxis y buses estaban endeudados en dólares, lo que sumado a la escasez de encargos y pasajeros amenazaba con paralizar involuntariamente al gremio¹²⁹.

¹²⁶ Constable y Valenzuela, *A Nation of Enemies*, 209; "Se compra clientela", *Hoy*, No. 253, 26 de mayo al 1ero de junio de 1982, 13.

¹²⁷ Carta de Julio del Río Berthoud, Segundo Gran Vigilante, a Óscar Pereira Henríquez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 3 de septiembre de 1982. Caja s/n, Correspondencia G.:M.:, 1982, AGLCh.

¹²⁸ Carta de Óscar Pereira Henríquez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, a Jean Francois Meulle-Stef, 17 de marzo de 1983. Caja s/n, Correspondencia recibida y despachada G.:M.:, enero-julio 1983, AGLCh; Carta de Jean Francois Meulle-Stef a Óscar Pereira Henríquez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, 31 de marzo de 1983. Caja s/n, Correspondencia recibida y despachada G.:M.:, enero-julio 1983, AGLCh.

¹²⁹ "¡Un grave escollo que superar!", *Sobre Ruedas. Órgano oficial de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros*, No. 23, junio-julio de 1982, 2; "Un reventón económico", *Hoy*, No. 265, 18 al 25 de agosto de 1982, 24.

Las ansiedades por la falta de los recursos necesarios para mantener cierto nivel de vida le recordaron a más de alguno la experiencia de los años de la Unidad Popular. Los estudios de mercado de Gallup evidenciaban que el GSE medio era por lejos el más sensible a la cesantía y la perspectiva de quedarse sin vacaciones ni las tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias¹³⁰. Para quienes habían participado con entusiasmo del "boom" del consumo y se habían endeudado, la situación era aún más grave. Un lector de *Hoy*, identificado como "deudor de clase media", denunciaba con desesperación la amenaza de las cobranzas judiciales por la incapacidad de cumplir con créditos hipotecarios o de consumo, y rogaba por medidas paliatorias. "No sería un perdonazo, sino una ayuda real a la clase media hoy desamparada", agregaba¹³¹. Eduardo Arriagada, refiriéndose al alto nivel de cesantía entre ingenieros, sintetizó de buena forma aquel sentimiento compartido de pérdida de status social ante el deterioro de las condiciones materiales:

Es algo que no se vivió en tiempos de la UP. Es un drama horroroso. Un tipo de 55 años que tiene chicos estudiando, que trabajó toda su vida para comprarse una casa y un auto, y está cesante, se amarga, porque no tiene chance, lo único que quisiera es morir para aliviar las deudas de la familia. Entre gente más modesta existe una gran comunidad y solidaridad; se convidan pan, comparten el caldo. En la clase media no hay eso, la gente ni siquiera cuenta sus dramas, los viven solos, no se les ocurre ir a pedirle a la vecina un poco de nescafé o pan. Entonces es mucho más duro.¹³²

El gobierno intentó reaccionar a esta situación con la creación en octubre de 1982 del "Programa de Ocupación de Jefes de Hogar" (POJH), sumándose en esa línea a lo que desde 1975 venía haciendo el PEM. Parte importante de los recursos del POJH estuvieron destinados a

¹³⁰ En noviembre de 1981, por ejemplo, un 63,7% del GSE medio pensaba que el desempleo había subido, a diferencia del 40,6 y 46,4% de los GSE bajo y alto respectivamente. En enero-febrero de 1983, por otro lado, una mayor proporción del GSE medio señalaba que "encontrar trabajo" era su principal meta inmediata. Índice Gallup de opinión y mercado, Gallup, noviembre de 1981, 5-6; Índice Gallup de opinión y mercado, Gallup, enero-febrero de 1983, 12.

¹³¹ "Deudas de clase media" (Carta al director), *Hoy*, No. 298, 5 al 12 de abril de 1983, 65.

¹³² "Eduardo Arriagada; perfil de un dirigente gremial disidente; lo que es, lo que hace, lo que ve", *La Segunda*, 5 de julio de 1983, 4.

paliar el desempleo de clase media al incorporar a profesionales y técnicos, en un esfuerzo insuficiente por desactivar las tensiones sociales surgidas a raíz de la crisis¹³³.

Los gremios mesocráticos no quedaron impávidos ante la situación. Comerciantes, transportistas y agricultores reflataron la idea de los "multigremios" -organizaciones gremiales de resistencia a nivel local- creada en los años de la Unidad Popular. En el sur de Chile el ambiente estaba particularmente caldeado. El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigos (ANPT), Carlos Podlech, lideró grupos de protesta ante remates de predios por deudas impagas en octubre de 1982. A raíz de esa experiencia dieron a conocer la "Declaración de Valdivia", fuertemente crítica de las políticas económicas del régimen y su aplicación en la producción agrícola. Las protestas se reprodujeron también en Temuco, donde también dieron publicidad a una declaración. Allí anunciaron que habían "perdido la fe en este gobierno", y que "no podemos seguir creyéndole", Más aún, agregaban, "no solamente hemos perdido la fe, sino que nuestra propia identidad como clase media trabajadora, cuya mantención y crecimiento fue un día orgullo de nuestra patria y permitió la existencia de una avanzada democracia en el concierto de países latinoamericanos"¹³⁴. A pesar de que Podlech era un capitán del Ejército en retiro y que era conocido por sus simpatías hacia la dictadura, el gobierno procedió a detenerlo y expulsarlo del país en diciembre de 1982¹³⁵.

La profundidad de la crisis económica y la incapacidad del gobierno por revertir la situación dio pie a la organización de las llamadas "protestas nacionales" en 1983, iniciadas por sindicatos mineros del cobre, y que al poco tiempo adquirirían una masividad y radicalidad tal

¹³³ Sobre el PEM y el POJH, véase Rolando Álvarez y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, “‘Platita poca pero segura’. Los refugios laborales de la dictadura”, en *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista*, ed. Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Rolando Álvarez, y Karen Donoso (Santiago: LOM Ediciones, 2012).

¹³⁴ Cit. en Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 270.

¹³⁵ Aylwin, *El reencuentro de los demócratas*, 216. Por cierto, la expulsión de Podlech frenó en gran medida el ímpetu movilizador de comerciantes y transportistas. La idea de los "multigremios" fue desde ese momento desechada.

que pondrían en jaque a la dictadura. La primera protesta fue convocada para el 11 de mayo. Las instrucciones difundidas por instructivos llamaban al ausentismo laboral, protestas en las universidades y otras expresiones públicas de descontento. La dictadura reaccionó utilizando todo su aparato mediático para equiparar protesta con desorden y vandalismo, en un esfuerzo sistemático por atemorizar a los sectores medios. La masividad de la primera jornada llevó invariablemente a la segunda, el 14 de junio. Allí la protesta asumió diferentes formas. Mientras en las poblaciones los choques con la policía causaron decenas de muertos, en los barrios de clase media se siguieron las instrucciones de protesta pacífica. Allí volvieron a repicar las "cacerolas", en una referencia explícita a las formas de protesta contra la Unidad Popular, ahora reproducidas contra la dictadura¹³⁶.

En la tercera protesta del 12 de julio ya era evidente que el liderazgo había pasado desde los sindicatos del cobre a los partidos políticos de oposición. Para entonces, la Democracia Cristiana había firmado junto a fracciones moderadas del socialismo un "Manifiesto Democrático", base de lo que después sería la "Alianza Democrática" (AD), y desde ahí empezaron a coordinar las formas de protesta, aunque sin llegar a controlarlas completamente¹³⁷. El gobierno reaccionó de modo contradictorio. Por una parte, detuvo a líderes gremiales y políticos, a la vez que controlaba mediante censura de la información, y endurecía la represión en barrios populares¹³⁸. Por otro lado, llamó al Ministerio del Interior a Sergio Onofre Jarpa, un avezado político conservador, para iniciar negociaciones con la oposición política y desactivar la

¹³⁶ Gonzalo De la Maza y Mario Garcés, *La explosión de las mayorías: protesta nacional, 1983-1984* (Santiago: Educación y Comunicaciones, 1985), 29-91.

¹³⁷ Para un testimonio de la fundación de la Alianza Democrática de uno de sus dirigentes, véase Ricardo Lagos Escobar, *Mi vida: de la infancia a la lucha contra la dictadura* (Santiago: Penguin Random House, 2013), 429-35.

¹³⁸ La dictadura echó mano también a tácticas de control psicológico. Durante las protestas de 1983, por ejemplo, hizo correr rumores en poblaciones de eventuales asaltos de bandas de poblaciones vecinas, buscando con ello el temor y la inacción. Sólo la prensa opositora y la labor de las comunidades de base de la Iglesia pudieron contrarrestar estas tácticas al exhibir el origen policial de esos rumores.. Manuel Bastías Saavedra y Stefan Rinke, "Rumour Propagation as a Form of Social Control: A Case from Dictatorial Chile", *Journal of Modern European History* 10, n° 3 (2012).

conflictividad social. Sin embargo, el inmenso despliegue represivo para la cuarta protesta del 11 y 12 de agosto -con 18.000 soldados sólo en Santiago- debilitó en gran medida la estrategia negociadora del gobierno.

Onofre Jarpa no sólo negoció con la oposición política. También encarnó la estrategia gubernamental de ceder a algunas demandas de clase media para separarlos de la protesta popular. Los camioneros para entonces estaban cerca de romper todo vínculo con el gobierno. Vilarín, además, había sido desplazado de la presidencia de la Confederación en favor de Adolfo Quinteros. En el Congreso Extraordinario de Camioneros celebrado en septiembre de 1983, el nuevo líder camionero fue especialmente crítico con la política económica en tiempos de crisis y de ciertas decisiones de las autoridades como darle preferencia a una fracción pro-régimen escindida de la Confederación. A pesar de todo, Onofre Jarpa asistió al Congreso para intentar aplacar los ánimos. En su alocución, recordó las jornadas de lucha contra la Unidad Popular en la que él mismo había participado en su calidad de líder del entonces Partido Nacional, manifestando una indignación similar a la de los camioneros con quienes no se involucraron en la pelea y luego sacaron dividendos: "Mientras esta gente, esta clase media chilena, estos trabajadores chilenos hacían fe en el porvenir de su patria y jugaban su destino a la carta de la solidaridad y de la nacionalidad, muchos se fueron a vivir al exterior, y volvieron después a darnos recetas a los chilenos de lo que teníamos que hacer". Según Onofre Jarpa, la etapa de predominio de esos advenedizos -en referencia implícita a los "Chicago Boys"- ya había terminado, y agregaba: "Yo estoy aquí para decirles a mis compañeros de jornada de aquella época, los hombres de trabajo y de clase media de Chile, una iniciamos una nueva etapa (...) y

que los gremios volverán a tener el significado que siempre han tenido y van a seguir teniendo en la vida de Chile"¹³⁹.

La estrategia de cooptación de la clase media tuvo cierto éxito en algunas jornadas de protesta. A ello ayudó la radicalización y autonomía de la protesta popular en las poblaciones que empezó a verificarse en la quinta protesta del 8-11 de septiembre de 1983¹⁴⁰. Pocas semanas después, además, se formaría el "Movimiento Democrático Popular" (MDP), una alianza entre el MIR, el PC y las fracciones no renovadas del socialismo, en un intento por darle expresión política a esa protesta. Sin embargo, el fin del diálogo entre la AD y el gobierno, la persistencia de la crisis económica, y la organización de nuevas jornadas de protesta empujaron a varias organizaciones de clase media hacia una actitud de oposición abierta al régimen.

Los colegios profesionales, sobre todo aquellos que ya contaban con directivas opositoras, se plegaron de diferentes maneras a las protestas. Algunos, como los ingenieros, llamaron a "jornadas de reflexión" los días de protesta, con lo que evitaban las acusaciones de acción "política" y controlaban a los sectores oficialistas internos¹⁴¹. Otros, como los médicos, denunciaron ante diferentes instancias la dureza de la represión gubernamental. Mientras la directiva repudiaba públicamente los allanamientos en poblaciones y acusaban ante el nuevo arzobispo de Santiago Juan Francisco Fresno la falta de atención adecuada en hospitales para los heridos en las protestas, un grupo de médicos liderados por Fanny Pollarolo difundía una

¹³⁹ "Discurso pronunciado por el Ministro del Interior, don Sergio Onofre Jarpa, con ocasión de la apertura del Congreso Nacional del Gremio, celebrado los días 3 y 4 de septiembre de 1983 en Santiago", *El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile*, No. 52, c1983, 9-11

¹⁴⁰ Alison J. Bruey, "Limitless Land and the Redefinition of Rights: Popular Mobilisation and the Limits of Neoliberalism in Chile, 1973–1985", *Journal of Latin American Studies* 44, n° 3 (2012): 545–52.

¹⁴¹ "Ingenieros no han adherido al paro", *La Tercera de la Hora*, 7 de marzo de 1983, 8. El Colegio de Ingenieros contaba con una rama de ingeniería militar que, por supuesto, era firmemente pro-régimen. Antes del inicio de las protestas, en 1982, ese grupo anunció públicamente que no concurriría a las declaraciones públicas del Colegio que significaran algún tipo de crítica al gobierno. "Situación especialidad Ingeniería de Defensa", *Ingenieros. Revista del Colegio de Ingenieros*, No. 91, junio de 1982, s/p.

investigación realizada entonces sobre los efectos psicológicos de la cesantía y la represión¹⁴². Por su parte, la Federación de Colegios Profesionales intentó organizar una comisión investigadora de la represión desplegada en la cuarta jornada de protesta, invitando a personalidades de todo el espectro político, como Jorge Alessandri, Clotario Blest, Jorge Edwards, Alejandro Silva Bascuñán, Raúl Silva Henríquez y Gonzalo Vial, entre otros. Bastó, sin embargo, una advertencia de Policía de Investigaciones para acabar con la iniciativa¹⁴³.

La crisis integral del experimento neoliberal y las protestas nacionales dieron la impresión de que el fin de la dictadura estaba cerca, lo que motivó a que varias organizaciones mesocráticas pidieran abiertamente el restablecimiento del régimen democrático. La Confederación de Comercio Detallista intentó organizar un "Frente de Acción Gremial", y en el acto inaugural en el Teatro Caupolicán Cumsille declaró abiertamente ser "partidario de la democracia", llegando incluso a tener algunos contactos con la Alianza Democrática. Por su parte, Adolfo Quinteros recibió la aprobación de la asamblea camionera para pedir el retorno de la democracia y llamar aun paro gremial si era necesario¹⁴⁴. Otros, como los profesionales, fueron más allá y empezaron a visualizar modelos político-económicos alternativos para el futuro. A mediados de 1983, la Federación de Colegios Profesionales dio a conocer el "Manifiesto de los Profesionales chilenos", en el que sintetizaban la crítica mesocrática al neoliberalismo. Allí señalaron que la crisis económica no era un fenómeno coyuntural, sino expresión de un modelo

¹⁴² "Colegio Médico conversó sobre sus problema gremiales con el arzobispo Fresno", *La Tercera de la Hora*, 7 de septiembre de 1983, 15; "Colegio Médico critica allanamientos", *La Segunda*, 25 de mayo de 1983, 3; "Las guerras médicas", *Hoy*, s/n, 13 de julio de 1983, 15; "El Colegio Médico vive un momento muy difícil", *La Tercera de la Hora*, 10 de junio de 1983, 2-3; "Trastornos mentales están aumentando", *El Mercurio*, 27 de julio de 1983, 5C. Por su labor de denuncia ante la represión en poblaciones, Fanny Pollarolo fue encargada reo por el gobierno, recibiendo el apoyo inmediato del Colegio Médico. "Médicos apoyan a Dra. Pollarolo", *El Mercurio*, 11 de octubre de 1983, 5C.

¹⁴³ "Proponen comisión que investigue la violencia", *El Mercurio*, 14 de septiembre de 1983, 3C; "Investigación paralela", *El Mercurio*, 22 de septiembre de 1983, 3A.

¹⁴⁴ Campero, *Los gremios empresariales en el período 1970-1983*, 276; "Los cesantes necesitan comer hoy" (Entrevista a Rafael Cumsille), *Hoy*, No. 326, 19 al 25 de octubre de 1983, 34.

incompatible con la idiosincrasia y la tradición nacional. Su aplicación al pie de la letra habría provocado "la pérdida de nuestra capacidad de diálogo" y la "desintegración del tejido social", por lo que era urgente reconstruir los espacios de negociación y, de esa manera, formular un nuevo "consenso nacional". Ese consenso, por cierto, debería estar basado en un Estado que no descuidara sus responsabilidades en salud, educación vivienda y seguridad social, y que restituyera a los organismos intermedios sus facultades para una participación activa de la sociedad civil en los asuntos públicos. Coincidentes con su propia historia, los profesionales de oposición tuvieron el cuidado de hacer explícita una posición equidistante entre el "estatismo puro que impida la expresión de los individuos" y el "desarrollo fundado sólo en la acción privada". Era, en otras palabras, una reivindicación del "Chile mesocrático" como alternativa factible a un neoliberalismo autoritario que parecía en ruinas¹⁴⁵.

5.- Conclusiones

La masificación de la oposición a la dictadura fue producto directo de la crisis económica de 1982-1983. En ese sentido, no es posible establecer una relación directa y causal entre la redefinición crítica de la clase media y el impacto de la indignación moral ante las violaciones de los Derechos Humanos, por un lado, y la explosión de las protestas nacionales con activa participación de la clase media, por el otro. En ello intervino también el fin del "boom" del consumo y la sensación de fragilidad de un status de clase media cada vez más desprovisto de referentes materiales concretos. Sin embargo, sin la desestabilización de la hegemonía dictatorial sobre las organizaciones mesocráticas a finales de los años setenta probablemente los caminos seguidos por la protesta social y la oposición política habrían sido distintos. En ese proceso, por supuesto, la clase media no se comportó como un bloque unívoco. Ciertos grupos, como los

¹⁴⁵ "Manifiesto de los Profesionales chilenos", *Las Últimas Noticias*, 21 de junio de 1983, 9.

colegios profesionales, fueron más receptivos a los cuestionamientos morales que, por ejemplo, comerciantes y camioneros, quienes centraron más sus críticas en las políticas económicas, y sólo se acercaron hacia exigencias de democratización en los momentos más agudos de la crisis.

Más allá de esas diferencias, lo cierto es que hacia finales de los setenta la dictadura perdió el monopolio en la definición de clase media, fundamentada en gran medida por el ideario neoliberal. En la prensa de oposición, en creaciones culturales, humor gráfico y estudios sociales, entre otros lugares, empezó a surgir una noción disidente de clase media. En ella se formulaba una crítica a la pauperización material de estos grupos, a la inmoralidad del autoritarismo y los excesos del libre mercado. En muchas de estas elaboraciones se encontraba también una reivindicación implícita del "Chile mesocrático", o al menos de aquellos rasgos de participación y negociación a los cuales los grupos de clase media habían estado acostumbrado en las décadas previas.

Estos intentos por disputar los significados de la virtud mesocrático dieron cuenta también de cambios al interior de muchas de las organizaciones de clase media. A aquellos miembros de clase media que se identificaban con la izquierda se le sumaron quienes se inclinaban por posiciones políticas centristas -socialdemócratas y socialcristianos-, e incluso no pocos de sensibilidad conservadora, quienes veían en el régimen una traición a los principios de restauración que animaron la lucha social contra la Unidad Popular y el apoyo a la dictadura en los primeros tiempos. Sin embargo, esa creciente postura opositora no se planteó siempre desde una perspectiva abiertamente política. El carácter "policida" del régimen había desprestigiado la acción política, algo especialmente sensible en el mundo gremial de clase media, históricamente reacio a ser confundido con intereses partidistas. De allí que en gran medida aquella oposición fuera "moral", en la medida en que el autoritarismo y la represión fueron rechazados desde ese

plano. Cuando quedó claro que la solución a la inmoralidad del poder político pasaba por el restablecimiento de la democracia, la articulación entre oposición de clase media y oposición política moderada quedó más firmemente establecida. El ingreso de representantes de la Democracia Cristiana y otros partidos centristas a las dirigencias de los colegios profesionales en 1981 fue reflejo de ello.

La crisis económica y el ciclo de protestas nacionales no derrocaron a la dictadura. Los lineamientos centrales de las reformas neoliberales continuaron en pie, aunque ahora aplicados de una forma más "pragmática"¹⁴⁶. Sin embargo, las cosas habían cambiado. La base mesocrática del régimen se fracturó de manera irremediable. El conflicto social a partir de 1983 se plantearía abiertamente en el terreno de las definiciones políticas frente al autoritarismo, la democratización y los Derechos Humanos. Muchos -aunque no todos- de los grupos mesocráticos participarían de la movilización social y electoral que llevaría a la derrota del régimen en el plebiscito de 1988, y la posterior restauración democrática en 1990.

¹⁴⁶ Eduardo Silva, "The Political Economy of Chile's Regime Transition: From Radical to 'Pragmatic' Neo-liberal Policies", en *The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990*, ed. Paul W. Drake y Ivan Jaksic (Lincoln: University of Nebraska Press, 1991).

Conclusiones

La radicalización de los grupos mesocráticos bajo la Unidad Popular determinó su apoyo tanto al golpe militar de 1973 como a la dictadura militar en sus primeros años. La "sincronización" verificada esos años se basó en esa experiencia, y en la narrativa traumática y épica articulada y socializada por sus dirigencias. De allí que estas organizaciones asumieran los componentes ideológicos del régimen: conservadurismo, nacionalismo y anticomunismo, con los cuales dieron sentido a su propia realidad. Con todo, quienes se identificaban públicamente con el ideal de clase media no fueron meros apéndices de la dictadura, toda vez que conservaron ciertos grados de autonomía, que incluso se reflejó en las iniciativas desplegadas para legitimar el nuevo orden de cosas.

Sin embargo, las reformas neoliberales, y sobre todo su profundización e "institucionalización", atentaron contra el edificio social sobre el cual había florecido aquella noción de clase media, a pesar de los esfuerzos del régimen por redefinirla en base al mercado y el consumo. Al mismo tiempo, la lucha por los Derechos Humanos y la evidencia incontrarrestable de los crueles alcances de la represión erosionaron la legitimidad del Estado autoritario. Los conflictos suscitados al interior de algunas de estas organizaciones dieron cuenta de una disputa sobre los alcances de la propia idea de clase media en clave opositora. La crisis económica y el inicio del ciclo de protestas nacionales llevaron esa oposición a un nivel masivo, público y confrontacional, con activa participación de muchos de las organizaciones de clase media, además de segmentos mayoritarios de los sectores populares. La legitimidad inicial del régimen, aquella dada por la movilización social contrarrevolucionaria, fue demolida por los golpes conjuntos del neoliberalismo y la represión.

Esta interpretación del período 1970-1983, desarrollada a lo largo de este estudio, descansa en una conceptualización de la historia chilena del siglo XX sintetizada en la noción de "Chile mesocrático". En efecto, para la clase media, tanto la Unidad Popular como la dictadura militar fueron evaluadas, combatidas y apoyadas en virtud de su cercanía o lejanía con aquel entramado de relaciones sociales e institucionales construido en las décadas centrales del siglo. Por una parte, la izquierda en el poder -más allá de sus diferencias internas- no fue capaz de integrar las demandas y expectativas de quienes levantaban la identidad de clase media como mecanismo de legitimación social. La "vía chilena al socialismo" puso como protagonistas del desarrollo nacional a los sectores populares, y en particular a la clase obrera organizada, cuya definición antagonizaba en varios aspectos con el ideal mesocrático. Ello, por cierto, no fue producto de una inevitabilidad histórica. De hecho, muchos de quienes se definían como de clase media apoyaron a Allende, sobre el entendido de que era posible ampliar los privilegios del "Chile mesocrático" basados en la acción del Estado a toda la sociedad, en particular a quienes habían sido históricamente desfavorecidos. La movilización y conflictividad social, el desabastecimiento y la clausura de los canales de negociación con el Estado, sin embargo, empujaron a estos grupos hacia una oposición cada vez más virulenta, sobre todo a partir del paro de octubre de 1972. Quienes permanecieron fieles al gobierno fueron desplazados de todo cargo representativo en las organizaciones de clase media, mientras la prensa y los partidos de oposición lograban con éxito redefinir a la clase media en términos inequívocamente contrarrevolucionarios.

Del mismo modo, el apoyo a la dictadura militar fue también producto de condiciones históricas concretas, y no el resultado de una naturaleza intrínsecamente reaccionaria de la clase media. El régimen no sólo restauró los canales de negociación y participación tan caros a la

práctica política y social de los grupos de clase media, sino que también dio el espacio suficiente para que sus más destacados representantes alcanzaran figuración nacional, en mucho mayor medida que en las décadas anteriores. Por un tiempo, aquella extendida sensación de "restauración" de un orden fracturado por el ímpetu revolucionario de la izquierda marxista pudo contrarrestar el hecho de que el régimen democrático había sido destruido. El Congreso fue clausurado, y los partidos políticos, antes mediadores entre muchas de estas organizaciones y el Estado, estaban proscritos, en receso o disueltos. De cierto modo, el protagonismo del entramado social mesocrático reemplazó la necesidad de una política democrática institucional, al menos mientras las autoridades fueron receptivas a sus demandas sectoriales. El inicio de las reformas neoliberales, como se ha dicho, cerró esos caminos. Cuando la situación se hizo intolerable en la coyuntura de la crisis económica de 1982-1983, las demandas por democracia se escucharon con fuerza en la mayoría de las organizaciones de clase media.

En otras palabras, visto a través del prisma de la clase media, esta tesis evidencia de qué manera la creación de un consenso extendido sobre el autoritarismo es un proceso históricamente situado, de acuerdo a las condiciones que determinados grupos sociales experimentan, y las posibilidades que este tipo de regímenes ofrecen a la satisfacción de demandas políticas, económicas y culturales. Del mismo modo, el surgimiento de una oposición política y social visible obedece al incumplimiento de las promesas implícitas de la dictadura de orden, prosperidad y moralidad, como quedaría claro para muchos en la coyuntura de 1983. En ese sentido, entender las dinámicas de negociación, consenso y crisis históricamente permite ver sus desplazamientos y ambigüedades. Exceptuando a quienes adherían a un ideario izquierdista más consistente, y a las fracciones de partidos centristas que rechazaron el golpe desde un principio, tanto las dinámicas de colaboración como de oposición tuvieron que ver con circunstancias

concretas del Chile de entonces, y por lo tanto fueron cambiando con el pasar de los años. Entender de esa manera el proceso político chileno evita caer en la trampa de pensar, por ejemplo, la oposición a la dictadura como un bloque sólido, espontáneamente constituido en la "sociedad civil", y que sólo requería de las condiciones necesarias para su despliegue. Aquellas narrativas teleológicas de oposición, que ponen el acento más en las continuidades que en las rupturas, no se condice con el carácter históricamente construido de la base social mesocrática del régimen en sus primeros años.

Este estudio apuntó precisamente a complejizar las narrativas imperantes sobre la dictadura militar, al incorporar al análisis las formas sociales de consenso y colaboración con el autoritarismo. En esa lógica, la dictadura no habría sido una imposición "desde arriba" -el Estado-, a una "sociedad civil" que sólo se limitaría a sufrir sus consecuencias. El asunto, como ha quedado demostrado en estas páginas, fue bastante más complejo. Tomando como punto de entrada la clase media y sus disputas en torno a ella, es posible identificar las formas concretas que asumió la "sincronización" de ciertos grupos sociales con la dictadura: celebraciones públicas, defensas internacionales, justificación de la violencia, negociaciones sectoriales y apoyo político explícito.

Por cierto, una interpretación del autoritarismo chileno que pone el acento en el consenso y la colaboración no pretende reemplazar aquella narrativa "épica" centrada en la oposición y movilización social contra la dictadura en los años ochenta. En gran medida, porque ese mismo esfuerzo democrático fue verídico, y cambió dramáticamente tanto las subjetividades de muchos chilenos como la forma de asumir el autoritarismo y, finalmente, derrotarlo en las urnas en 1988. Sin aquel esfuerzo político y social de organización y concientización -que, por cierto, excedió con creces los límites de la clase media-, la democratización del sistema político y la denuncia de

las violaciones a los Derechos Humanos habrían tomado otros rumbos y habrían tenido otros plazos. Sin embargo, centrar en ese tipo de narrativas nuestra comprensión de la dictadura deja afuera todas aquellas dinámicas sociales de radicalización, movilización y apoyo que, en un primer momento, ayudaron a crear las condiciones para el derrocamiento de Allende y, después, colaboraron en la legitimación social de la dictadura. Más que reemplazar una narrativa por otra, este estudio buscó evidenciar la necesidad de una comprensión más compleja de la dictadura, que incorpore aquellas "áreas grises" difíciles de asumir desde perspectivas binarias y estáticas. El objetivo, de ese modo, más que juzgar moralmente desde el presente determinadas conductas -por más que sea un ejercicio de crítica generacional válido-, es identificar y comprender las condiciones materiales, culturales y políticas que hicieron posible, primero, la instauración de una dictadura como la de Pinochet y, después, la aceptación generalizada entre los grupos sociales aquí estudiados de la militarización generalizada de la sociedad y sus más prácticas represivas más bárbaras. En palabras de Hannah Arendt, citadas al inicio de este texto, el punto está en escrudiñar en aquellas "circunstancias imperantes" que hicieron que sólo aquellos seres "excepcionales" -que los hubo-, reaccionaran "normalmente".

Al mismo tiempo, este estudio propuso una entrada metodológica al estudio de las clases medias, en línea con parte importante de la bibliografía reciente relativa a este tema. Más que un conglomerado social delimitado de antemano por ingresos, ocupación o niveles educacionales, la clase (y sobre todo la clase media) tiene una triple dimensión de ideal, identidad y herramienta de lucha política. Quienes aspiraban a identificarse y ser reconocidos como parte de la clase media, a su vez, debían exhibir ciertas condiciones materiales precisas, necesarias para llevar (o al menos aparentar) un nivel de vida *digno*, diferenciado de quienes podían ser catalogados como pobres. En ese sentido, la clase media puede entenderse como un *proyecto* en constante

redefinición, cuyos objetivos están relacionados al reconocimiento social de una posición especial. En el caso chileno, ese proyecto redundó en el entramado social del "Chile mesocrático", y en la centralidad de la idea de clase media en la esfera pública. En ese sentido, Chile se diferencia hasta cierto punto de otros casos latinoamericanos estudiados. Mientras en Brasil, según señala Brian Owensby, la clase media no tuvo representatividad política en los años del populismo *varguista*, en Argentina, siguiendo a Ezequiel Adamovsky, la identidad de clase media sólo vino a cristalizar como reacción conflictiva al populismo *peronista*¹⁴⁷. En Chile, los rasgos populistas de su cultura política -más intermitentes en comparación con otros países de la región- no asumieron necesariamente una retórica dirigida a un "pueblo" antagónico a la oligarquía, y cuya representación recaía en el líder de gobierno. Incluso en aquellos movimientos que asumieron ciertas formas populistas de acción política, como el "ibañismo", el énfasis estuvo puesto en los "hombres de trabajo", lo que no excluía de antemano a la clase media de representatividad política y cultural¹⁴⁸. Aquella centralidad de la clase media y sus prácticas organizacionales, como se ha dicho, sólo serían puestas en cuestión durante la Unidad Popular, motivando la radicalización de estos grupos en clave contrarrevolucionaria.

Al mismo tiempo, el estudio de la clase media en los años de contrarrevolución, autoritarismo y neoliberalismo, hacen ver la importancia de atender a las condiciones materiales en que los grupos mesocráticos se desenvuelven. En ese sentido, como señalé en un principio, la clase media no puede ser reducida sólo a su dimensión discursiva, sobre todo considerando que los años setenta en Chile son de enormes transformaciones en el Estado, su relación con la sociedad civil, el modelo económico, el empleo, las condiciones de consumo, y el orden constitucional. Los grupos y personas identificados con la clase media no serán ajenos a estos

¹⁴⁷ Owensby, *Intimate Ironies*, capítulo 9; Adamovsky, *Historia de la clase media argentina*, capítulos 9-13.

¹⁴⁸ Al respecto véase Joaquín Fernández Abara, *El ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena* (Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008).

cambios. Más aún, en varios de este proceso de cambios estructurales serán protagonistas, tanto como destinatarios y críticos de las nuevas realidades sociales resultantes de todo ello. El "giro cultural" en el estudio de las clases y la clase media no puede hacernos olvidar la "economía política" en que los grupos "de carne y hueso" se desarrollan. Es en la interacción entre las condicionantes objetivas y las formas culturales de interpretación de la realidad donde es posible estudiar el desenvolvimiento histórico de las clases sociales, y en particular de la clase media.

La importancia política, social y cultural de la clase media en la historia chilena de las décadas centrales del siglo XX, y también en el período aquí estudiado, hizo que aquella noción haya estado permanentemente en disputa. Desde perspectivas conservadoras, liberales, nacionalistas, socialcristianas, socialdemócratas laicas e incluso marxistas, la clase media fue convocada y redefinida, muchas veces como base de proyectos políticos o alegatos normativos sobre el orden social. La virtud mesocrática, derivada de aquella extendida noción del "justo medio" vinculada a la moderación, la prudencia y la equidistancia con extremos dañinos, fue una herramienta de legitimación de un sinnúmero de propuestas y demandas, tanto desde el mundo político como también de los propios grupos que se identificaban con aquel ideal. Como esta tesis deja entrever, los momentos de mayor disputa de la clase media coincidieron con aquellos de alta conflictividad social, en los que se echaba mano a todo tipo de argumentos persuasivos para legitimar demandas y políticas estatales. Así, por una parte, la noción de clase media fue utilizada asiduamente bajo el gobierno de la Unidad Popular. La movilización social contrarrevolucionaria, junto a la prensa y los partidos de oposición, apelaron a ese ideal en tanto reserva moral de la nación y frontera última de la democracia. Esa definición de clase media, al mismo tiempo, se articuló con aquellas apelaciones nacionalistas y anticomunistas que

aglutinaron a fuerzas de diferente signo, y que redundarían en el violento derrocamiento de Allende en 1973.

Por otra parte, cuando la legitimidad social de la dictadura comenzó a agotarse en vista de la indignación moral de la represión y las consecuencias de las reformas neoliberales, la clase media volvió a ser una bandera de organización y movilización, en muchos casos por los mismos grupos (e incluso personas) que se habían levantado contra la izquierda en el poder. La clase media, en ese momento, volvió a definirse como central en un proyecto político democratizador, en tanto sujeto colectivo que restablecería el equilibrio de aquel orden social fracturado por la concentración del poder autoritario.

En estas dinámicas de articulación, definición y utilización de la noción de clase media, las organizaciones mesocráticas estudiadas en las páginas precedentes jugaron un rol protagónico. Empleados, comerciantes, profesionales, transportistas, masones y rotarios, actuando a través de sus respectivos grupos, movilizaron recursos, formularon críticas y negociaron con las autoridades de turno para asegurar la reproducción del sistema social e institucional que favorecía su propia posición de clase. Al identificar y analizar estos esfuerzos, queda en evidencia la importancia de estudiar clases e identidades de clases desde aquellos grupos que asumen su representatividad social y proyectan sus demandas y expectativas a la esfera pública. De ese modo, es posible entender en qué medida, y bajo qué mecanismos, las clases sociales actúan como actores políticos. Esa transición, por cierto, no es automática ni necesaria. Las identidades e ideales de clase requieren ser movilizados por actores social e institucionalmente legitimados, posición desde la cual es posible articular demandas e incidir en el sistema político. La clase media, entonces, fue un actor político clave del "Chile mesocrático", en la medida en que sus más destacados representantes se basaron en la legitimidad que entregaba apelar de

modo plausible a ese ideal social. Más aún, cuando aquel sistema institucional estuvo amenazado, la dimensión "política" de la clase media se expandió hasta la movilización y protesta directa, muchas veces en conexión con partidos políticos afines. La Unidad Popular y la coyuntura de 1982-1983, una vez más, son ejemplos que grafican de buena manera ese fenómeno.

En otras palabras, este estudio se movió entre una historia cultural de lo social y una historia social de la política, usando a la clase media en un contexto autoritario como eje de análisis. Esa elección metodológica e historiográfica, como cualquier otra, tiene límites, ya que excluye elementos valiosos para la comprensión del período. En ese sentido, estudiar a la clase media desde su dimensión pública, es decir, su uso y movilización consciente por una serie de actores, excluye la experiencia privada y doméstica de la clase media. En esta tesis, por ejemplo, no se ha estudiado la importancia de la consistencia de la unidad familiar en el ideal mesocrático, ni tampoco las relaciones de género y generacionales que se dan en su interior, y que son parte también de la construcción de una identidad de clase. Dado que parte importante de las directivas de organizaciones mesocráticas estuvieron compuestas por hombres, las mujeres de clase media no tienen aquí el lugar que deberían tener. Del mismo modo, la exclusión del mundo estudiantil de clase media -clave en los momentos de mayor movilización social mesocrática, tanto contra la Unidad Popular como contra la dictadura militar- oscurece la dimensión inter-generacional de aquellos momentos de redefinición de identidades de clase. Más que silencios deliberados, esas omisiones son producto inevitable de las opciones teóricas y metodológicas necesarias para el desarrollo de este estudio, y por lo tanto pueden ser subsanados en otras investigaciones.

La clase media como identidad, ideal y herramienta política puede ser estudiada también en otras dimensiones. Quizás el aspecto más relevante de ellos sea escrudiñar en la *memoria de clase media*. En este texto decidí basarme más en fuentes de época, antes que en entrevistas u

otro tipo de testimonios mesocráticos sobre la dictadura. El objetivo era, como se ha dicho, dar cuenta de cómo el autoritarismo fue experimentado en el momento, más que en elaboraciones discursivas posteriores. Con todo, las narrativas construidas sobre la Unidad Popular, el golpe y los años aquí estudiados de la dictadura, como ha demostrado Steve Stern, fueron también elementos fundantes de una memoria en particular, que podría ser interpretada como de clase media. El punto, sin embargo, parece ser más urgente para el período posterior a la crisis de 1982-1983, momento en el cual parte importante de las organizaciones mesocráticas pasan a la oposición. De hecho, fue en ese escenario que la propia noción de "memoria" -íntimamente vinculada con los Derechos Humanos- se transformó en una bandera de lucha política contra el "olvido" promovido por la dictadura. La indignación moral que emergió de la represión estatal se volvió masiva en los años ochenta, gracias tanto a las nuevas condiciones políticas, económicas y sociales, como también a la valiente labor de denuncia por parte de organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de detenidos desaparecidos en la segunda parte de la década anterior¹⁴⁹. En esta movilización de la "memoria" como demanda por verdad y justicia, varias de las organizaciones mesocráticas analizadas en este estudio tuvieron un rol destacado, proceso que continuaría tanto desde la sociedad civil como del gobierno en la democracia transicional de los años noventa.

En ese contexto abierto por la crisis económica y las protestas nacionales, muchos de los grupos de clase media comenzaron a reelaborar narrativas institucionales para adecuarlas a las necesidades del conflicto político del momento, minusvalorando u omitiendo el período de colaboración y "sincronización" con el régimen. Guillermo O'Donnell dio cuenta de este fenómeno para el caso argentino, aunque para el caso de sujetos -y no grupos- de clase media. En

¹⁴⁹ Steve J. Stern, "Memory. The Curious History of a Cultural Code Word", *Radical History Review* 2016, n° 124 (enero de 2016): 117–28.

un experimento social que hoy sería objetado por comités de ética (aunque no por ello menos fructífero), O'Donnell entrevistó a un conjunto de ciudadanos de clase media quienes expresaron conformidad con la dictadura militar y sus prácticas represivas poco después del golpe de Estado de 1976. Algunos años después, cuando el régimen se desmoronaba y bajo la excusa de haber perdido las cintas, volvió a entrevistarlos. En el nuevo contexto, todos afirmaban, y con sinceridad, haber sido opositores desde la primera hora¹⁵⁰. La memoria de clase media, como cualquier tipo de memoria social, se ve influida por las experiencias y narrativas que circulan entre el momento recordado y el momento en que se recuerda. La demanda por democracia de los años ochenta en Chile probablemente intervino en las narrativas mesocráticas sobre el rol de sus organizaciones representativas en la destrucción de esa misma democracia en 1973.

De un modo indirecto, uno de los objetivos de este estudio fue precisamente mostrar la disonancia entre los hechos y los recuerdos en las memorias predominantes de la dictadura, sobre todo aquellas organizadas y difundidas por sujetos o instituciones de clase media. Mientras la épica de la movilización social anti-autoritaria es continuamente recordada y celebrada, los años de la "sincronización" suelen ser dejados de lado. Sólo algunos observadores agudos han podido dar cuenta de esta situación en relación a la clase media. Ya en los años noventa, el dramaturgo y siquiatra Marco Antonio De la Parra escribió *Carta abierta a Pinochet: monólogo de la clase media con su padre*, en la que retrotraía la forma actual de la clase media a la dictadura, en un intento por reflejar las contradicciones, miedos y omisiones de este grupo social con respecto a las violaciones de los Derechos Humanos. En su parte medular, De la Parra señalaba:

¿Por qué le escribo? ¿Por qué le hablo? Quizás por culpa. Culpa de mi silencio, de mis contribuciones, de mi traición diaria. Yo estuve a su servicio. Yo fui un ciudadano imbécil más que fue a votar, dogmas, hacer como que votaba, en esos simulacros de votaciones bajo su dictadura (...) Yo dejé que cortaran mi cédula de identidad. Simbólicamente es feroz. Usted nos castraba la identidad. Nos sacaba la puntita. Nos circuncidaba. Nos bautizaba como súbditos.

¹⁵⁰ O'Donnell, *Counterpoints*, 74–77

Hicimos lo que usted esperaba de nosotros. Fuimos buenos niños. La gran mayoría de los chilenos nos convertimos en buenos niños. Alguna vez sentí que todo el país se transformaba en una especie de enorme guardería. Una larga y prolongada educación parvularia. Una adolescencia de la que no nos deja salir todavía. ¿Cuándo podremos graduarnos realmente de adultos? Claro, cuando se nos pase el miedo.¹⁵¹

Más allá de comulgar enteramente con estas interpelaciones -dado que, como he señalado en las páginas precedentes, la reacción de la clase media ante la dictadura tuvo muchos más elementos que los ahí mencionados-, lo cierto es que el terreno de la memoria de clase media sigue sin ser explorado. Tal como el uso de la propia noción de clase media, esas narrativas fueron también producto de una lucha política y cultural, cuyo desenlace en favor de una memoria opositora y democrática sólo tuvo lugar hacia finales de los años noventa.

Lejos de ser factores inhabilitantes para su estudio, estas inconsistencias, contradicciones y heterogeneidades de la clase media fueron parte de su propia condición como ideal, identidad y herramienta de lucha política. La clase media chilena durante la dictadura de Augusto Pinochet fue ejemplo concreto de esto: temerosos ante el derrumbe de lo que entendían era el orden normal de las cosas, aplaudieron a los militares en el poder hasta que, nuevamente, la incompatibilidad entre autoritarismo y sus propias aspiraciones mesocráticas se hicieron evidentes. Sin ser una interpretación integral del proceso político chileno, sí es un factor que explica la naturaleza del autoritarismo militar, los alcances de la represión de Estado, las consecuencias del neoliberalismo y la lucha política y social a favor de la democracia y los Derechos Humanos. La clase media, en ese sentido, fue reflejo de las ambivalencias y ambigüedades de una época tan dramática como épica, y tan excepcional como ordinaria.

¹⁵¹ Marco Antonio De la Parra, *Carta abierta a Pinochet: monólogo de la clase media chilena con su padre* (Santiago: Planeta, 1998), 85–86.

Fuentes

1.- Archivos

Archivo Sindicato Profesional de Dueños de Camiones de Santiago (ASIPRODUCAM)

Archivo Colegio de Abogados (ACAb)

Archivo General de la Araucanía (Temuco) (ARA)

Archivo de la Gran Logia de Chile (AGLCh)

Archivo Confederación Comercio Detallista (ACCD)

Biblioteca Nacional - Sección chilena

Biblioteca Nacional - Prensa

Biblioteca del Congreso - Sección Procesamiento de Prensa

2.- Diarios

La Tercera de la Hora

La Prensa

El Mercurio

La Nación

El Siglo

Clarín

Las Últimas Noticias

La Segunda

Noticias de Última Hora

New York Times (EE.UU.)

Chicago Tribune (EE.UU.)

El Diario Austral (Temuco)

El Cronista

3.- Revistas y boletines

Vida Médica. Publicación Oficial del Colegio Médico de Chile

Gaceta Forense. Publicación del Consejo General del Colegio de Abogados

Boletín Informativo. Publicación del Consejo General del Colegio de Abogados de Chile

Revista del Foro

Revista Masónica de Chile

Occidente

Gremios

Portada

Revista Oficial del Comercio Detallista y de la Pequeña Industria de Chile

El Camionero. Órgano Oficial de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones de Chile

¡Eh... Taxi! Órgano oficial de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis de Chile

Ingenieros, Revista del Colegio de Ingenieros

Construcción Civil. Revista del Colegio de Constructores Civiles de Chile

Boletín del Rotary Club de San Bernardo (San Bernardo)

Alborada (Concepción)

Ercilla

Qué Pasa

Hoy

Cosas

Tribuna

Sepa

Ñuñoa en marcha. Órgano oficial de la Asociación de Comerciantes de Ñuñoa

El Taxista. Órgano Oficial de la Federación Nacional de Sindicatos Profesionales de Choferes de Taxis

Sobre Ruedas. Órgano oficial de la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros

CI Informa. Boletín del Colegio de Ingenieros

Índice Gallup de opinión y mercado

4.- Entrevistas

Entrevista a Moisés Pastroán, 22 de septiembre de 2016

Entrevista a Roberto Gesche, 28 de marzo de 2016

5.- Fuentes impresas

- Alarcón Pino, Raúl. “La clase media en Chile. Orígenes, características e influencias”. Tesis de prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 1947.
- Asesoría Cultural de la Junta de Gobierno, y Departamento Cultural de la Secretaría General del Gobierno. *Política Cultural del Gobierno de Chile*. s/e, c1975.
- Atías, Guillermo. ...*Y corría el billete. Novela tabloide*. Santiago: Quimantú, 1972.
- Ávalos, Luis. *Memorandum de organización profesional para la Federación de la Clase Media*. Santiago: Imprenta Chile, 1919.
- Benavente S., Manuel J.R. *Cincuenta años Rotary Club San Bernardo, 1933-1983*. San Bernardo: Imprenta Offsetgraff, 1992.
- Chile. 11 de septiembre de 1975*. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975.
- Colegio de Abogados de Chile. *Quiebra del estado de derecho durante el régimen marxista de Salvador Allende y adhesión del Colegio de Abogados al nuevo gobierno: antecedentes*. Santiago: Imprenta y Litografía Roma, 1973.
- Colegio de Ingenieros de Chile. *Libro blanco de la Ingeniería chilena*. Santiago: Talleres Gráficos Corporación, 1974.
- Colegio de Ingenieros de Chile A.G. *50 años del Colegios de Ingenieros de Chile: (1958-2008)*. Santiago: Colegio de Ingenieros de Chile A.G, 2008.
- Collantes Espinoza, Flora. “Los colegios profesionales”. Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Derecho, Universidad de Chile, 1962.
- Confederación de Empleados Particulares de Chile. *Estatutos de la Organización y de la Corporación de Derecho Privado “CEPCH”*. Santiago: Talleres Gráficos Periodística Chile, 1973.
- Crevenna, Theo R., ed. *Materiales para el estudio de la clase media en la América Latina*. Washington: Unión Panamericana, Departamento de Asuntos Culturales, 1950.
- Cuadra, Fernando. *Teatro. Doña Tierra - La niña en la palomera - La familia de Marta Mardones*. Santiago: Editorial Nascimento, 1979.
- Cumsille Zapapa, Rafael. *Recordando... mi vida. De Don Arturo Alessandri Palma a Don Ricardo Lagos Escobar*. Santiago: El Detallista, 2005.
- Dahse, Fernando. *El mapa de la extrema riqueza: los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales*. Santiago: Editorial Aconcagua, 1979.

Donoso Loero, Teresa. *La epopeya de las ollas vacías*. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974.

El gobierno y la clase media. Santiago: Editorial del Pacífico, 1967.

Enríquez Bello, Darío. *Rotary en Chile, 1923-1973. Homenaje al Cincuentenario*. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974.

Farías, Víctor. *La izquierda chilena (1969-1973): documentos para el estudio de su línea estratégica*. Vol. III. Berlin; Santiago: Wissenschaftlicher Verlag Berlin; Centro de Estudios Públicos, 2000.

Federación de la Clase Media. *Convención Nacional. Programa de sesiones, bases y reglamentos*. Santiago: Imprenta y Litografía Selecta, 1919.

García, Patricio. *Los gremios patronales*. Santiago: Quimantú, 1973.

Germani, Gino. *Estructura social de la Argentina*. Buenos Aires: Ed. Raigal, 1955.

Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Vol. 1, Tomo II. Santiago: s/e, 1991.

Instituto Rotario, octubre de 1974, con motivo del cincuentenario de Rotary en Chile. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974.

La situación actual de los Derechos Humanos en Chile. Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1975.

Labarca, Amanda. "Apuntes para estudiar la clase media en Chile". *Atenea* XCIX, n° 305-306 (noviembre de 1950): 255-56.

Lavín, Joaquín. *Chile, revolución silenciosa*. Santiago: Zig-Zag, 1987.

Letelier, Orlando. "Chile: Economic 'Freedom' and Political Repression". *Race & Class* XVIII, n° 3 (1977).

Libro blanco del cambio de gobierno en Chile. 11 de septiembre de 1973. Santiago: Editorial Lord Cochrane, 1973.

Mapa de la extrema pobreza en Chile. Santiago: Documento de trabajo No. 29, Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1974.

Martner, Gonzalo, ed. *Salvador Allende. Obras escogidas: período 1939-1973*. Santiago: Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar; Fundación Presidente Allende, 1992.

Memoria de Gobierno 1973-1990. S/e. Vol. 1. Político Institucional. 3 vols., c1990.

Memoria de Gobierno 1973-1990. S/e. Vol. 2. Económico Productivo. 3 vols., c1990.

Nueva legislación sobre asociación de profesionales. Santiago: División de Comunicación Social, 1981.

Registro Nacional de Comerciantes Establecidos de Chile. *Proyecto de Previsión para Comerciantes y Pequeños Industriales*. Santiago: Departamento Nacional Técnico y de Planificación, 1973.

Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Santiago: Impresora Horizonte, 1970.

Sepúlveda Rondanelli, Julio. *La clase media o “pequeña burguesía”*. Santiago: Imprenta Los Andes, 1973.

Varas, Florencia. *Gustavo Leigh. El General disidente*. Santiago: Ediciones Aconcagua, 1979.

Vega, Julio. “La clase media en Chile”. En *Materiales para el estudio de la clase media en la América Latina.*, editado por Theo R. Crevenna, Vol. III. La clase media en Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Washington: Unión Panamericana, Departamento de Asuntos Culturales, 1950.

Vicaría de la Solidaridad. *¿Dónde están?* 7 vols. Santiago: Talleres Gráficos Corporación, 1978.

6.- Bibliografía secundaria

Adamovsky, Ezequiel. “Acerca de la relación entre el radicalismo argentino y la ‘clase media’ (una vez más)”. *Hispanic American Historical Review* 89, n° 2 (mayo de 2009): 209–51.

———. “Aristotle, Diderot, Liberalism and the Idea of ‘Middle Class’: A Comparison of Two Contexts of Emergence of a Metaphorical Formation”. *History of Political Thought* 26, n° 2 (2005): 303–33.

———. *Historia de la clase media argentina: apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003*. Buenos Aires: Planeta, 2009.

Álvarez, Rolando. *Desde las sombras: una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980)*. Santiago: LOM, 2003.

———. “El plan laboral y la negociación colectiva: ¿origen de un nuevo sindicalismo en Chile? 1979-1985”. *Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani*, n° 35–36 (2012): 107–137.

———. “¿Represión o integración? la política sindical del régimen militar: 1973-1980”. *Historia* 43, n° 2 (2010): 325–355.

Álvarez, Rolando, y Verónica Valdivia Ortiz de Zárate. “‘Platita poca pero segura’. Los refugios laborales de la dictadura”. En *La alcaldización de la política: los municipios en la*

- dictadura pinochetista*, editado por Verónica Valdivia Ortiz de Zárata, Rolando Álvarez, y Karen Donoso. Santiago: LOM Ediciones, 2012.
- Angell, Alan. *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. México: Ediciones Era, 1974.
- Arancibia, Patricia, y Paulina Dittborn. “Angustias y esperanzas. La Unidad Popular”. En *Historia de la vida privada en Chile*, editado por Cristián Gazmuri y Rafael Sagredo, Vol. 3. El Chile contemporáneo. De 1925 a nuestros días. Santiago: Taurus, 2007.
- Araya Cisternas, Diego. “Lo siútico. La estructura social según la élite. Adjetivación, distinción y ridiculez. 1862-1961”. Tesis de Licenciatura en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003.
- Araya Jofré, Francisca. *Historia de la revista Apsi: el que se ríe se va al cuartel (pico para Pinochet)*. Santiago: LOM Ediciones - Universidad de Chile, Instituto de la Comunicación e Imagen - Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2007.
- Arendt, Hannah. *Eichmann en Jerusalén*. Barcelona: Debolsillo, 2006.
- Ariztía, Tomas. “Clases medias y consumo: tres claves de lectura desde la sociología”. *Polis. Revista Latinoamericana*, n° 43 (9 de junio de 2016).
- Arriagada, Genaro. *Por la razón o la fuerza: Chile bajo Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana, 1998.
- Aylwin, Patricio. *El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del No*. Santiago: Ediciones B, 1998.
- Baker, Andy. *The Market and the Masses in Latin America: Policy Reform and Consumption in Liberalizing Economies*. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2009.
- Barozet, Emmanuelle. “El valor histórico del pituto: clase media, integración y diferenciación social en Chile”. *Revista de Sociología* 20 (2006): 69–96.
- Barría Traverso, Diego. “Empleados públicos y clase media, Chile 1880-1920: un análisis exploratorio a partir de cifras oficiales”. *Revista de Historia y Geografía*, n° 32 (2005): 77–100.
- Barr-Melej, Patrick. *Reforming Chile: Cultural Politics, Nationalism, and the Rise of the Middle Class*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001.
- Barros, Robert. *La Junta militar: Pinochet y la Constitución de 1980*. Santiago: Sudamericana : Random House Mondadori, 2005.
- Bastías Saavedra, Manuel. *Sociedad Civil en Dictadura: Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (1973-1993)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.

- Bastías Saavedra, Manuel, y Stefan Rinke. "Rumour Propagation as a Form of Social Control: A Case from Dictatorial Chile". *Journal of Modern European History* 10, n° 3 (2012).
- Bertolino, Jean. *Chili: six mois d'unité populaire*. Documental, 1971. https://www.youtube.com/watch?v=863X2fv3_1k#t=1.530975. Visitado el 15 de agosto de 2016.
- Bitar, Sergio. *Transición, socialismo y democracia: la experiencia chilena*. México: Siglo Veintiuno Editores, 1979.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984.
- Bruey, Alison J. "Limitless Land and the Redefinition of Rights: Popular Mobilisation and the Limits of Neoliberalism in Chile, 1973–1985". *Journal of Latin American Studies* 44, n° 3 (2012): 523–52.
- Brunner, José Joaquín. *Autoritarismo y cultura en Chile*. Santiago: FLACSO, Material de discusión No. 44, 1983.
- . *Cultura e identidad nacional: Chile 1973-1983*. Documento de trabajo No. 177. Santiago: FLACSO, 1983.
- . *Vida cotidiana, sociedad y cultura: Chile, 1973-82*. Santiago: FLACSO, Documento de Trabajo No. 151, 1982.
- Camacho, Fernando. "Los asilados de las Embajadas de Europa Occidental en Chile tras el golpe militar y sus consecuencias diplomáticas: El caso de Suecia". *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe / European Review of Latin American and Caribbean Studies*, n° 81 (2006): 21–41.
- Campero, Guillermo. *Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas*. 1a. ed. Santiago: ILET, 1984.
- Candina, Azun. *Clase media, Estado y sacrificio: la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en Chile contemporáneo (1943-1983)*. Santiago: LOM Ediciones, 2013.
- . "El día interminable. Memoria e instalación del 11 de septiembre de 1973 en Chile (1974-1999)". En *Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas "in-felices"*, editado por Elizabeth Jelin. Madrid - Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
- . "La clase media como ideal social. El caso de Chile contemporáneo". En *Dossier Chile contemporáneo*, editado por Verónica Valdivia Ortiz de Zárata, Programa Interuniversitario de Historia Política. www.historiapolitica.com, 2012.
- . "Studying other Memories: The Colegio Médico de Chile under Socialism, Dictatorship, and Democracy, 1970-1990". *Latin American Perspectives* 43, n° 6 (2016).

- . “Vivir una dictadura: historia y memoria de los profesores de Chile (1973-1990)”. *Historia* 396 2 (2014).
- Carassai, Sebastián. *Los años setenta de la gente común: La naturalización de la violencia*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2013.
- Cardoso, Fernando Henrique. *On the Characterisation of Authoritarian Regimes in Latin America*. Cambridge, Eng.: Centre of Latin American Studies, University of Cambridge, 1978.
- Casals Araya, Marcelo. *El alba de una revolución: la izquierda y el proceso de construcción estratégica de la “vía chilena al socialismo” 1956-1970*. Santiago: LOM Ediciones, 2010.
- . *La creación de la amenaza roja. Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la “campaña del terror” de 1964*. Santiago: LOM Ediciones, 2016.
- . “‘My Heart Breaks Over That Tragedy’. Local Dynamics in the U.S. Solidarity Movement with Chile in the 1970s. The Case of Community Action on Latin America (CALA)”. *Inédito*, 2013.
- Castillo Irribarra, Benedicto. *Emblemático crimen de Tucapel Jiménez: el cóndor quiere carne*. Santiago: Editorial Mare Nostrum, 2005.
- Castillo, Juan Carlos, Daniel Miranda, y Ignacio Madero Cabib. “Todos somos de clase media: Sobre el estatus social subjetivo en Chile”. *Latin American Research Review* 48, n° 1 (2013): 155–173.
- Cavallo, Ascanio, Oscar Sepúlveda, y Manuel Salazar. *La historia oculta del régimen militar: Chile 1973-1988*. Santiago: Uqbar Editores, 2008.
- Cerda Albarracín, César. *Historia y desarrollo de la clase media en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 1998.
- Chadwick Stuardo, Luz María, Valentina Justiniano Vial, Victoria Martín Floegel, y Daniela Riutort Bertrand. “DINACOS: La historia no contada”. Tesis de Licenciatura en Comunicación Social, Universidad Diego Portales, 1999.
- Cofré Arredondo, Aldo. “‘Trabajadores de cuello y corbata’: Identidad, asociatividad y acción colectiva en el movimiento de empleados particulares. Chile, 1918-1925.” Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia, Universidad de Chile, 2011.
- Cohen, Lizabeth. *A Consumers’ Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*. New York: Vintage Books, 2004.
- Collier, Simon. “The Historiography of the ‘Portalian’ Period (1830-1891) in Chile”. *Hispanic American Historical Review* 57, n° 4 (1977): 660–90.

- Constable, Pamela, y Arturo Valenzuela. *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet*. New York; London: Norton, 1991.
- Contardo, Óscar. *Siútico: arribismo, abajismo y vida social en Chile*. Santiago: Editorial Planeta, 2013.
- Cornejo Cancino, Tomás. “Una clase a medias: las representaciones satíricas de los grupos medios chilenos en Topaze (1931-1970)”. *Historia* 40, n° 2 (2007): 249–284.
- Corporación José Domingo Cañas 1367. *Tortura en poblaciones del Gran Santiago (1973-1990): Colectivo de memoria histórica*. Santiago: Corporación José Domingo Cañas, 2005.
- Correa, Sofia. *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2005.
- Cortés A., Flavio. “Miedo, amenaza y régimen político: causas del apoyo prestado al régimen autoritario por sectores de la clase media chilena (1973-1985)”. Tesis de Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1987.
- Cosse, Isabella. “Las clases medias en la historia reciente latinoamericana”. *Contemporánea* 5. Dossier “Clases medias, sociedad y política en la América Latina contemporánea” (2014): 13–16.
- . “Mafalda: Middle Class, Everyday Life, and Politics in Argentina, 1964-1973”. *Hispanic American Historical Review* 94, n° 1 (1 de febrero de 2014): 35–75.
- Cosse, Isabella, y Vania Markarian. *1975: año de la orientalidad: identidad, memoria e historia en una dictadura*. Montevideo: Ediciones Trilce, 1996.
- Cristi, Renato, y Carlos Ruiz. *El pensamiento conservador en Chile: seis ensayos*. Santiago: Editorial Universitaria, 1992.
- De la Maza, Gonzalo, y Mario Garcés. *La explosión de las mayorías: protesta nacional, 1983-1984*. Santiago: Educación y Comunicaciones, 1985.
- De la Parra, Marco Antonio. *Carta abierta a Pinochet: monólogo de la clase media chilena con su padre*. Santiago: Planeta, 1998.
- Del Solar, Felipe Santiago. *Las logias de ultramar: en torno a los orígenes de la Francmasonería en Chile 1850-1862*. Santiago: Occidente, 2012.
- Derby, Lauren H. *The Dictator’s Seduction: Politics and the Popular Imagination in the Era of Trujillo*. Durham: Duke University Press, 2009.
- Deutsch, Sandra McGee. *Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939*. Stanford, Calif: Stanford University Press, 1999.

Dinges, John. *Operación Condor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur*. Santiago de Chile: Ediciones B, 2004.

Dinges, John, y Pascale Bonnefoy. "Ejecuciones en Chile septiembre-diciembre 1973: El circuito burocrático de la muerte". *Archivos Chile*, 2012. <http://archivoschile.org/2012/01/ejecuciones-chile-septiembre-diciembre-1973/>.

Donoso, Karen. "Discursos y políticas culturales de la dictadura cívico militar chilena, 1973-1988." En *Dossier Chile contemporáneo*, editado por Verónica Valdivia Ortiz de Zárata. www.historiapolitica.com. Programa Interuniversitario de Historia Política, 2012.

———. "La batalla del folklore: Los conflictos por la representación de la cultura popular chilena en el siglo XX". Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Santiago de Chile, 2006.

Dorat Guerra, Carlos, y Mauricio Weibel Barahona. *Asociación ilícita: los archivos secretos de la dictadura*. Santiago: Ceibo Ediciones, 2012.

Drake, Paul W. *Socialism and Populism in Chile, 1932-52*. Urbana: University of Illinois Press, 1978.

Durán Escobar, Sergio. *Ríe cuando todos estén tristes: el entretenimiento televisivo bajo la dictadura de Pinochet*. Santiago: LOM Ediciones, 2012.

Dussailant, Jacqueline. *Las reinas de estado: consumo, grandes tiendas y mujeres en la modernización del comercio de Santiago (1880-1930)*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011.

Eidahl, Brad T. "For the Right to Disagree: APSI and Opposition Journalism under Pinochet". M.A. Thesis in History, Ohio University, 2011.

Elena, Eduardo. *Dignifying Argentina: Peronism, Citizenship, and Mass Consumption*. Pittsburgh, Pa.: University of Pittsburgh Press, 2011.

Ensalaco, Mark. *Chile Under Pinochet: Recovering the Truth*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.

Errázuriz, Luis Hernán. "Dictadura militar en Chile: Antecedentes del golpe estético-cultural". *Latin American Research Review* 44, n° 2 (2009): 136-157.

———. "Política cultural del régimen militar chileno (1973-1976)". *Aisthesis*, n° 40 (2006): 62-78.

Errázuriz, Luis Hernán, y Gonzalo Leiva Quijada. *El golpe estético: dictadura militar en Chile, 1973-1989*. Santiago: Ocho Libros, 2012.

Faletto, Enzo. "Chile: Transformaciones económicas y grupos sociales (1973-1986)". En *Obras completas*, Vol. I. Santiago: Editorial Universitaria, 2008.

- Feitlowitz, Marguerite. *A Lexicon of Terror. Argentina and the Legacies of Torture*. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011.
- Fernandois, Joaquín. *La revolución inconclusa : la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*. Santiago: Centro de Estudios Públicos, 2013.
- . *Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial, 1900-2004*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2005.
- Fernández Abara, Joaquín. *El ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena*. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008.
- . *Regionalismo, liberalismo y rebelión: Copiapó en la guerra civil de 1859*. Santiago: RIL Editores - Escuela de Historia Universidad Finis Terrae, 2016.
- Fernández, Osvaldo. “El discurso de la represión”. *Araucaria de Chile* 3 (1978): 11–34.
- Fuentes, Claudio. *El fraude: crónica sobre el plebiscito de la Constitución de 1980*. Santiago: Editorial Hueders, 2013.
- Gárate, Manuel. *La revolución capitalista de Chile: 1973-2003*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2012.
- Garcés, Mario, y Sebastián Leiva. *El golpe de La Legua: los caminos de la historia y la memoria*. Santiago: LOM Ediciones, 2005.
- García Covarrubias, Jaime. *El partido radical y la clase media en Chile: la relación de intereses entre 1888-1938*. Santiago: Editorial Andrés Bello, 1990.
- Garguin, Enrique. ““Los argentinos descendemos de los barcos’. Articulación racial de la identidad de clase media en Argentina (1920-1960)”. En *Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos*, editado por Sergio Eduardo Visacovsky y Enrique Garguin. Buenos Aires: EA, 2009.
- Gaudichaud, Franck. *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende*. Santiago: LOM Ediciones, 2016.
- . *Poder popular y cordones industriales: testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973*. Santiago: LOM Ediciones - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2004.
- Gazmuri, Cristián. *El “48” chileno: igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos*. Santiago: Editorial Universitaria, 1992.
- . *El Chile del centenario, los ensayistas de la crisis*. Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001.

- . “La idea de decadencia nacional y el pensamiento político conservador chileno en el siglo XX”. *Estudios Sociales*, n° 28–29 (1981): 33–54.
- Gellately, Robert. *No solo Hitler: la Alemania nazi entre la coacción y el consenso*. Barcelona: Crítica, 2002.
- Góngora, Mario. *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria, 1986.
- González Le Saux, Marianne. *De empresarios a empleados: clase media y estado docente en Chile, 1810-1920*. Santiago: LOM Ediciones, 2011.
- . “La institucionalización de la justicia social: La creación de los Servicios de Asistencia Judicial en Chile, 1920-1960s”. presentado en XX Jornadas de Historia de Chile. Simposio No. 11: Profesionales de la justicia chilena desde el siglo XIX: aproximaciones multidisciplinarias, Iquique, 14 de agosto de 2013.
- . “Legal Aid, Social Workers, and the Redefinition of the Legal Profession in Chile, 1925-1960 (próxima aparición)”. *Law and Social Inquiry* 42, n° 2 (2017).
- González Meyer, Jacqueline. “Comuna de Nuñoa: clase media por naturaleza”. *En Concreto* 25 (2004).
- González, Raúl. “Reflexiones sobre el consumo: más allá de lo privado y más acá de la condena”. *Revista Propositiones*, n° 34 (2002): 46–71.
- Grandin, Greg. “Living in Revolutionary Times: Coming to Terms with the Violence of Latin America’s Long Cold War”. En *A Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin America’s Long Cold War*, editado por Greg Grandin y Gilbert M. Joseph. Durham: Duke University Press, 2010.
- Grez Toso, Sergio. *La “cuestión social” en Chile: ideas y debates precursores, 1804-1902*. Santiago: Dirección de Bibliotecas, Archivo y Museos - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1995.
- Gutiérrez Fuente, Juan Ignacio. *Chile: La Vicaría de la Solidaridad*. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
- Guzmán Riquelme, Gabriel. “Colegios profesionales y asociaciones gremiales durante el proceso de recuperación de la democracia en Chile”. Centro de Documentación - Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junio de 2012.
- Harvey, David. *Breve historia del neoliberalismo*. Traducido por Ana Varela Mateos. Tres Cantos, Madrid: Akal, 2007.
- Henríquez Vásquez, Rodrigo. *En “Estado Sólido”: políticas y politización en la construcción estatal Chile 1920-1950*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2014.

- Huneus, Carlos. *El régimen de Pinochet*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2000.
- Ibáñez Santa María, Adolfo. *Herido en el ala: estado, oligarquias y subdesarrollo : Chile, 1924-1960*. Santiago: Editorial Biblioteca Americana, 2003.
- . “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento. 1927-1939”. *Historia* 18 (1983): 45–102.
- Ilustre Municipalidad de Ñuñoa. *Ñuñoa, su historia, su gente*. Santiago: La Municipalidad, 2012.
- Jara, Isabel. “Graficar una ‘segunda independencia’: el régimen militar chileno y las ilustraciones de la Editorial Nacional Gabriela Mistral (1973-1976)”. *Historia* 44, n° 1 (2011): 131–63.
- . “La ideología franquista en la legitimación de la dictadura militar chilena”. *Revista Complutense de Historia de América* 34 (2008).
- . “Politizar el paisaje, ilustrar la patria: nacionalismo, dictadura chilena y proyecto editorial”. *Aisthesis*, n° 50 (2011): 230–52.
- . “‘Una nación de propietarios, no de proletarios’. La retórica intelectual de la dictadura chilena sobre las clases sociales y la clase media”. En *La frágil clase media: estudios sobre grupos medios en Chile contemporáneo*, editado por Azun Candina, 71–84. Santiago: Programa UREDES, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, 2013.
- Jarausch, Konrad Hugo, ed. *Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR*. New York: Berghahn Books, 1999.
- Jiménez, Michael F. “The Elision of the Middle Classes and Beyond: History, Politics, and Development Studies in Latin America’s ‘Short Twentieth Century’”. En *Colonial Legacies: The Problem of Persistence in Latin American History*, editado por Jeremy Adelman. New York: Routledge, 1999.
- Jobet, Julio César. *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*. Santiago: Editorial Universitaria, 1955.
- Johnson, John J. *Political Change in Latin America: The Emergence of the Middle Sectors*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1958.
- Joignant, Alfredo, y Patricio Navia Lucero. *Ecós mundiales del golpe de Estado escritos sobre el 11 de septiembre de 1973*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.
- Joxe, Alain. *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*. Santiago: Editorial Universitaria, 1970.
- Keck, Margaret E., y Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, N.Y: Cornell University Press, 1998.

- Kelly, Patrick William. "The 1973 Chilean Coup and the Origins of Transnational Human Rights Activism". *Journal of Global History* 8, n° 1 (2013): 165–86.
- Kornbluh, Peter. *The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*. New York: New Press, 2003.
- Lagos Escobar, Ricardo. *Mi vida: de la infancia a la lucha contra la dictadura*. Santiago: Penguin Random House, 2013.
- Lagos Schuffeneger, Humberto. *El general Pinochet y el mesianismo político*. Santiago: LOM Ediciones, 2001.
- Lamont, Michèle. *Money, Morals, and Manners: The Culture of the French and the American Upper-Middle Class*. University of Chicago Press, 1992.
- León Echáiz, René. *Ñuñohue: historia de Ñuñoa, Providencia, Las Condes y La Reina*. Santiago: Editorial Francisco de Aguirre, 2012.
- León, Matías. *El periodismo que no calló: historia de la revista Análisis (1977/1993)*. Santiago: La Nación Domingo, 2005.
- Lim, Jie-Hyun. "Historiographical Perspectives on 'Mass Dictatorship'". *Totalitarian Movements & Political Religions* 6, n° 3 (diciembre de 2005): 325–31.
- . "Mapping Mass Dictatorship: Towards a Transnational History of Twentieth-Century Dictatorship". En *Gender Politics and Mass Dictatorship: Global Perspectives*, editado por Jie-Hyun Lim y Karen Petrone. Mass dictatorship in the 20th Century. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
- Lim, Jie-Hyun, Barbara Walker, y Peter Lambert, eds. *Mass Dictatorship and Memory as Ever Present Past*. Mass dictatorship in the 20th century. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014.
- Lomnitz, Claudio. *Deep Mexico, Silent Mexico: An Anthropology of Nationalism*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001.
- Lomnitz, Larissa Adler de. "El 'compadrazgo'. Reciprocidad de favores en la clase media urbana de Chile". En *Redes sociales, cultura y poder: Ensayos de antropología latinoamericana*, 19–46. Ciudad de México: FLACSO-México, 1994.
- Lomnitz, Larissa Adler de., y Ana Melnick. *La cultura política chilena y los partidos de centro: una explicación antropológica*. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica, 1998.
- Lomnitz, Larissa Adler de, y Ana Melnick. *Neoliberalismo y clase media: el caso de los profesores de Chile*. Santiago, Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1998.

- López, A. Ricardo. "From Middle Class to Petit Bourgeoisie: Cold War Politics and Classed Radicalization in Bogotá, 1958–1972". *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe* 25, n° 2. Dossier "Middle Class: Practices, Transformations, and Constructions in Latin America and Spain" (21 de diciembre de 2014).
- López, A. Ricardo, y Bárbara Weinstein. "Introduction: We Shall Be All: Toward a Transnational History of the Middle Class". En *The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History*, editado por A. Ricardo López y Barbara Weinstein. Durham: Duke University Press, 2012.
- Lowden, Pamela. *Moral Opposition to Authoritarian Rule in Chile, 1973-90*. New York: St. Martin's Press, 1996.
- Mallon, Florencia E. *Courage Tastes of Blood: The Mapuche Community of Nicolás Ailío and the Chilean State, 1906-2001*. Durham: Duke University Press, 2005.
- Marchesi, Aldo. *El Uruguay inventado: la política audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su imaginario*. Montevideo: Ediciones Trilce, 2001.
- Martínez, Christian, y Sergio Caniuqueo. "Las políticas hacia las comunidades Mapuche del Gobierno Militar y la fundación del Consejo Regional Mapuche, 1973-1983". *Veriversitas* 1 (2011).
- Martínez, Javier. *La oscilación política de la clase media: las elecciones entre 1967 y 1973*. Santiago: Ediciones SUR, 1985.
- . *Sobre el concepto estructural marxista de pequeña burguesía y la hipótesis sobre su conducta política*. Santiago: Ediciones SUR, 1985.
- Martínez, Javier, y Arturo León. *Clases y clasificaciones sociales. Investigaciones sobre la estructura social chilena, 1970-1983*. Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo - SUR, 1987.
- Martínez, Javier, y Eugenio Tironi. *Las clases sociales en Chile: cambio y estratificación, 1970-1980*. Santiago: Ediciones SUR, 1985.
- . *Materiales para el estudio de las clases medias en la sociedad chilena, 1960 1980*. Vol. 1. Cambios en la estratificación social. Santiago: Ediciones SUR, 1983.
- Mazzei de Grazia, Leonardo. "Inmigración y clase media en Chile". *Proposiciones* 24 (1994).
- McSherry, J. Patrice. *Los estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*. Santiago: LOM Ediciones, 2009.
- Milanesio, Natalia. *Cuando los trabajadores salieron de compras: nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2014.

- Milos, Pedro, ed. *Chile 1972. Desde “El Arrayán” hasta el “Paro de Octubre”*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013.
- Mobarec Hasbún, Paula, y Dominique Spiniak Bercovich. *Revista Hoy: 1.108 ediciones con historia*. Santiago: Ediciones Copygraph, 2001.
- Molina Bustos, Carlos Antonio. *Institucionalidad sanitaria chilena, 1889-1989*. Santiago: LOM Ediciones, 2010.
- Montt Balmaceda, Manuel. *Organizaciones de empleadores de Chile: reseñas históricas*. Santiago: DERTO, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de Chile, 1977.
- Moreira Alves, Maria Helena. *State and Opposition in Military Brazil*. Austin: University of Texas Press, 1985.
- Mosse, George L. *The Nationalization of the Masses; Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars Through the Third Reich*. New York: H. Fertig, 1975.
- Moulian, Tomás. *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago: ARCIS Universidad: LOM Ediciones, 1997.
- Moyano, Cristina. *El MAPU durante la dictadura: saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile, 1973-1989*. Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.
- Munizaga, Giselle. *El discurso público de Pinochet: un análisis semiológico*. Santiago: CESOC/CENECA, 1988.
- Muñoz Tamayo, Víctor. *Historia de la UDI: generaciones y cultura políticas (1973-2013)*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2016.
- Murphy, Edward. *For a Proper Home: Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960-2010*. Pittsburgh, Pa: University of Pittsburgh Press, 2015.
- Navarro-Rosenblatt, Valeria. “Comunistas judíos en Chile: experiencia y memoria en las historias de vida de Dora Guralnik y Carlos Berger (1930-1990)”. Tesis de doctorado en Historia, University of Wisconsin-Madison, 2016.
- Nocera, Raffaele. *Acuerdos y desacuerdos: la DC italiana y el PDC chileno: 1962-1973*. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2015.
- Nun, José. “The Middle-Class Military Coup”. En *The Politics of Conformity in Latin America*, editado por Claudio Véliz. London: Royal Institute of International Affairs - Oxford University Press, 1967.

- O'Donnell, Guillermo A. *Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*. Titles from the Helen Kellogg Institute for International Studies. Notre Dame, Ind: University of Notre Dame Press, 1999.
- . *El estado burocrático autoritario: triunfos, derrotas y crisis*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1996.
- . *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism; Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1973.
- . *Y a mi, qué me importa?: notas sobre sociabilidad y política en Argentina y Brasil*. Working Paper #9. Notre Dame, Indiana: The Hellen Kellogg Institute for International Studies, 1984.
- O'Dougherty, Maureen. *Consumption Intensified: The Politics of Middle-Class Daily Life in Brazil*. Durham: Duke University Press, 2002.
- Owensby, Brian Philip. *Intimate Ironies: Modernity and the Making of Middle-Class Lives in Brazil*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999.
- Parker, David S. "Introduction: The Making and Endless Remaking of the Middle Class". En *Latin America's Middle Class: Unsettled Debates and New Histories*, editado por David S. Parker y Louise E. Walker. Lanham: Lexington Books, 2013.
- . "Siúticos, Huachafos, Cursis, Arribistas, and Gente de Medio Pelo: Social Climbers and the Representation of Class in Chile and Peru, 1860-1930". En *The Making of the Middle Class: Toward a Transnational History*, editado por A. Ricardo López y Barbara Weinstein. Durham: Duke University Press, 2012.
- . *The Idea of the Middle Class: White-Collar Workers and Peruvian Society*. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 1998.
- Passerini, Luisa. *Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class*. Cambridge [Cambridgeshire]; New York; Paris: Cambridge University Press; Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1987.
- Pérez, María Consuelo. *Los protagonistas de la prensa alternativa: Vicaría de la Solidaridad y Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas*. Santiago: Fundación de Documentación de la Vicaría - El Arzobispado, 1997.
- Perry, Mariana. "La dimensión internacional del pensamiento político chileno. Aprendizaje y transferencia en el exilio en Europa". Tesis de doctorado en Humanidades, Leiden University, 2016.
- Pike, Fredrick B. "Aspects of Class Relations in Chile, 1850-1960". *The Hispanic American Historical Review* 43, n° 1 (1 de febrero de 1963): 14-33.

- Pinto Lagarrigue, Fernando. *La masonería, su influencia en Chile; ensayo histórico, político y social*. Santiago: Editorial Orbe, 1966.
- Pinto Santa Cruz, Aníbal. *Chile, un caso de desarrollo frustrado*. 4ta edición. Santiago: Universitaria, 1996.
- Pinto Vallejos, Julio, y Verónica Valdivia Ortiz de Zárata. *¿Revolución proletaria o querida chusma?: socialismo y alessandrismo en la pugna por la politización pampina (1911-1932)*. Santiago: LOM Ediciones, 2001.
- Policzer, Pablo. *The Rise and Fall of Repression in Chile*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2009.
- Power, Margaret. *Right-Wing Women in Chile: Feminine Power and the Struggle Against Allende, 1964-1973*. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2002.
- . “The U.S. Movement in Solidarity with Chile in the 1970s”. *Latin American Perspectives* 36, n° 6 (1 de noviembre de 2009): 46–66.
- Power, Margaret, y Julie A. Charlip. “Introduction: On Solidarity”. *Latin American Perspectives* 36, n° 6 (1 de noviembre de 2009): 3–9.
- Puryear, Jeffrey. *Thinking Politics: Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Rebolledo, Javier. *A la sombra de los cuervos: los cómplices civiles de la dictadura*. Santiago: Ceibo Ediciones, 2015.
- Rinke, Stefan. *Encuentros con el yanqui: Norteamericanización y cambio sociocultural en Chile (1898-1990)*. Santiago: DIBAM - Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014.
- Riquelme, Alfredo. “La Guerra Fría en Chile: los intrincados nexos entre lo nacional y lo global”. En *Chile y la Guerra Fría global*, editado por Alfredo Riquelme y Tanya Harmer. Santiago: RIL Editores - Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2014.
- . *Rojo atardecer: el comunismo chileno entre dictadura y democracia*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2009.
- Rivera, Carla. “La verdad está en los hechos: una tensión entre objetividad y oposición. Radio Cooperativa en dictadura”. *Historia* 41, n° 1 (junio de 2008): 79–98.
- Rocha, Juan Gonzalo. *Allende, masón: la visión de un profano*. Santiago: Editorial Sudamericana, 2000.
- Roht-Arriaza, Naomi. *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011.

- Rojas Flores, Jorge. *Los trabajadores chilenos, desde la colonia hasta 1973*. Santiago: Centro de Estudios Miguel Enríquez, CEME, 2005.
- Rojas, María Eugenia. *La represión política en Chile*. Madrid: IEPALA Editorial, 1998.
- Rosemblatt, Karin Alejandra. *Gendered Compromises: Political Cultures & the State in Chile, 1920-1950*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000.
- Rouquié, Alain. *The Military and the State in Latin America*. Berkeley: University of California Press, 1987.
- Rousso, Henry. *The Vichy Syndrome: History and Memory in France Since 1944*. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press; Heinemann, 1994.
- Rubio Apiolaza, Pablo. *Los civiles de Pinochet: la derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990*. Santiago: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2013.
- Sá Motta, Rodrigo Patto, ed. *Ditaduras Militares. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- Salazar, Gabriel. *Notas preliminares para un estudio de las clases medias en la sociedad chilena actual*. Santiago: Ediciones SUR, 1982.
- Salazar, Manuel. *Las letras del horror*. Vol. I. La DINA. Santiago: LOM Ediciones, 2011.
- Salazar Vergara, Gabriel, y Julio Pinto Vallejos. *Historia contemporánea de Chile*. Vol. I. Estado, legitimidad, ciudadanía. Santiago: LOM Ediciones, 1999.
- Santoni, Alessandro. *Il PCI e i giorni del Cile: alle origini di un mito politico*. Roma: Carocci, 2008.
- Sarlo, Beatriz. *Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro subjetivo: una discusión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2005.
- Serrano, Claudia. *La mujer y el discurso del orden. El caso de 20 mujeres santiaguinas de clase media*. Santiago: Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, 1981.
- Sheinin, David. *Consent of the Damned: Ordinary Argentiniens in the Dirty War*. Gainesville: University Press of Florida, 2013.
- Sick, Klaus-Peter. "El concepto de clases medias. ¿Noción sociológica o eslógan político?" En *Clases medias: Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología*., editado por Ezequiel Adamovsky, Sergio Visacovsky, y Patricia Vargas. Buenos Aires: Ariel, 2014.
- Sikkink, Kathryn. "The Emergence, Evolution, and Effectiveness of the Latin American Human Rights Network". En *Constructing Democracy: Human Rights, Citizenship, and Society*

- in Latin America*, editado por Elizabeth Jelin y Eric Hershberg. Boulder: Westview Press, 1998.
- . *The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions Are Changing World Politics*. 1st ed. New York: W. W. Norton & Co, 2011.
- Silva Avaria, Bárbara. *Identidad y nación entre dos siglos: patria vieja, centenario y bicentenario*. Santiago: LOM Ediciones, 2008.
- Silva Bascuñán, Alejandro. *El abogado, un servidor de la justicia*. Santiago: Mandrágora, 2010.
- Silva, Eduardo. “The Political Economy of Chile’s Regime Transition: From Radical to ‘Pragmatic’ Neo-liberal Policies”. En *The Struggle for Democracy in Chile, 1982-1990*, editado por Paul W. Drake y Ivan Jaksic. Lincoln: University of Nebraska Press, 1991.
- Silva, J. Pablo. “Rethinking Aspects of Class Relations in Twentieth-Century Chile”. En *Latin America’s Middle Class: Unsettled Debates and New Histories*, editado por David S. Parker y Louise E. Walker, 176–91. Lanham: Lexington Books, 2013.
- . “The Origins of White-Collar Privilege in Chile: Arturo Alessandri, Law 6020, and the Pursuit of a Corporatist Consensus, 1933-1938”. *Labor* 3, n° 1 (20 de marzo de 2006): 87–112.
- Silva, Patricio. *En el nombre de la razón: tecnócratas y política en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2010.
- Simone, Rosa Liliana de. *Metamall: espacio urbano y consumo en la ciudad neoliberal chilena*. Santiago: Colección Estudios Urbanos UC - RIL Editores, 2015.
- Spooner, Mary Helen. *Soldiers in a Narrow Land: The Pinochet Regime in Chile*. Berkeley: University of California Press, 1999.
- Stepan, Alfred C. *The Military in Politics; Changing Patterns in Brazil*. Princeton: Princeton University Press, 1971.
- . “The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion”. En *Authoritarian Brazil: Origins, Policies, and Future*, editado por Alfred C. Stepan. New Haven: Yale University Press, 1973.
- Stern, Steve J. *Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1988*. Durham: Duke University Press, 2006.
- . *Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London, 1998*. Durham: Duke University Press, 2004.
- . *Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006*. Durham: Duke University Press, 2010.

- . “Memory. The Curious History of a Cultural Code Word”. *Radical History Review* 2016, n° 124 (enero de 2016): 117–28.
- Stern, Steve J, y Scott Straus, eds. *The Human Rights Paradox Universality and Its Discontents*. Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2014.
- Stillerman, Joel. *The Sociology of Consumption: A Global Approach*. Malden, MA: Polity Press, 2015.
- Stites Mor, Jessica, ed. *Human Rights and Transnational Solidarity in Cold War Latin America*. Madison, Wis: The University of Wisconsin Press, 2013.
- Thomas, Gwynn. *Contesting Legitimacy in Chile: Familial Ideals, Citizenship, and Political Struggle, 1970-1990*. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2011.
- Thompson, E. P. *The Making of the English Working Class*. New York: Pantheon Books, 1964.
- Tinsman, Heidi. *Buying into the Regime: Grapes and Consumption in Cold War Chile and the United States*. Durham: Duke University Press, 2014.
- Tironi Barrios, Eugenio. *El régimen autoritario: para una sociología de Pinochet*. Santiago: Dolmen Ediciones, 1998.
- Tironi, Eugenio. *La desestructuración social. Debate a partir del ejemplo chileno 1973 1983*. Santiago: Ediciones SUR, 1985.
- Turits, Richard Lee. *Foundations of Despotism: Peasants, the Trujillo Regime, and Modernity in Dominican History*. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2003.
- Ulianova, Olga. “Corvalán for Bukovsky: A Real Exchange of Prisoners During an Imaginary War. The Chilean Dictatorship, the Soviet Union, and US Mediation, 1973–1976”. *Cold War History* 14, n° 3 (julio de 2014): 315–36.
- Valdés, Juan Gabriel. *Pinochet’s Economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge, England; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1995.
- Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica. “Al rescate del Municipio. La síntesis ideológica de la dictadura pinochetista”. *Observatorio Latinoamericano* 8. Dossier Chile (2011).
- . *El golpe después del golpe: Leigh vs. Pinochet: Chile 1960-1980*. Santiago: LOM Ediciones, 2003.
- . “¡Estamos en guerra señores!: El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-1980”. *Historia* 43, n° 1 (2010): 163–201.
- . *Nacionales y gremialistas: el “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Santiago: LOM Ediciones, 2008.

- . “Nacionalismo, ibañismo, fuerzas armadas: línea recta y el ocaso del populismo.” *Contribuciones Científicas y Tecnológicas* 25, n° 116 (1997): 1–41.
- . “Pinochetismo e guerra social no Chile (1973-1989)”. En *Dictaduras Militares. Brasil, Argentina, Chile e Uruguai*, editado por Rodrigo Patto Sá Motta. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- . “Were Women and Young People the Heart of the Pinochet Regime? Rise and Decline of the Secretariats”. *Hispanic American Historical Review* 93, n° 4 (2013): 547–83.
- Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, Rolando Álvarez, y Karen Donoso. *La alcaldización de la política: los municipios en la dictadura pinochetista*. Santiago: LOM Ediciones, 2012.
- Valdivia Ortiz de Zárate, Verónica, Julio Pinto, y Rolando Álvarez. *Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*. Santiago: LOM Ediciones, 2006.
- Valenzuela, Eduardo, y Ricardo Solari. *Los jóvenes de los ochenta: una interpretación sociológica de la actual generación estudiantil de clase media*. Santiago: SUR Profesionales Consultores, 1982.
- Varas, Augusto. *La dinámica política de la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular*. Documento de trabajo. Santiago: FLACSO, 1977.
- Verdugo, Patricia. *Los zarpazos del puma: caso Arellano*. Santiago: CESOC, 1989.
- Vergara, Pilar. *Auge y caída del neoliberalismo en Chile*. Santiago: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1985.
- Vial Correa, Gonzalo. *Historia de Chile, 1891-1973*. Vol. III. Arturo Alessandri y los golpes militares (1920-1925). Santiago: Editorial Santillana del Pacífico, 1987.
- Vidal, Hernán. *La Gran Logia de Chile (1973-1990): su comportamiento ante el fin de la democracia y las violaciones de los derechos humanos*. Santiago: Mosquito Comunicaciones, 2006.
- Visacovsky, Sergio, y Sergio Garguin. “Introducción”. En *Moralidades, economías e identidades de clase media: estudios históricos y etnográficos*, editado por Sergio Eduardo Visacovsky y Enrique Garguin. Buenos Aires: EA, 2009.
- Wahrman, Dror. *Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, C. 1780-1840*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Winn, Peter. *La revolución chilena*. Santiago: LOM Ediciones, 2013.
- , ed. *Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002*. Durham: Duke University Press, 2004.

———. *Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chile's Road to Socialism*. New York: Oxford University Press, 1986.

Zárate, María Soledad, y Elizabeth Q. Hutchinson. "Clases medias en Chile: Estado, género y prácticas políticas, 1920-1970". *Inédito*, 2016.

Zeitlin, Maurice. *The Civil Wars in Chile, Or, The Bourgeois Revolutions That Never Were*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984.

